

## TESIS DOCTORAL

### **La Autofinanciación de la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas en la libertad e igualdad religiosas**

**Guillermo Hierrezuelo Conde**

Derecho Civil, Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho Romano

Universidad de Málaga

[guillermohierrezueloconde@yahoo.es](mailto:guillermohierrezueloconde@yahoo.es)

**Fecha de Lectura:** 21 de junio de 1999

**Calificación:** Sobresaliente Cum laudem por unanimidad

**Director:** Dr. D. Arturo Calvo Espiga.

**Tribunal:** D. Dionisio Llamazares Fernández; D. Gustavo Suárez Pertierra; Dña. Ana Fernández-Coronado González; D. Manuel J. Peláez Albendea; y Dña. Adoración Castro Jover.

**Resumen:** Esta obra hace un análisis de la capacidad de autofinanciación de la Iglesia católica española, para concluir que la Iglesia católica no sólo puede autofinanciarse sino que debe hacerlo, para poder seguir realizando su labor religiosa y social en plena libertad. De hecho, un análisis histórico de las relaciones Iglesia-Estado demuestra que la Iglesia Católica ha estado financiando al Estado y autofinanciándose hasta la desamortización, que la situó en una situación insostenible económicamente. Por otro lado, el Código de Derecho Canónico, de 1983, estableció los pilares para una adecuada financiación de la Iglesia, que ha permitido sanear su economía.

**Palabras claves:** autofinanciación; Iglesia católica; confesiones religiosas; desamortización.

## PRESENTACIÓN.

El presente trabajo de investigación pretende realizar un estudio de la etapa desamortizadora desde sus más inmediatos antecedentes, que se remontan a 1798 hasta los tiempos actuales, para intentar confirmar, que, si la Iglesia en sus orígenes y hasta inicios del siglo XIX ha estado no sólo autofinanciándose, sino sustentando al Estado, no sólo puede, sino que *debe* volverse a la situación inicial. Máxime cuando hace ya casi una década que se ha puesto en marcha el sistema de “asignación tributaria”. Para concretar algunos aspectos, nos hemos centrado en los concordatos de 1717, 1737, 1753, 1851, 1953 y el hoy vigente acuerdo sobre asuntos económicos de 1979. En estos concordatos se puede observar el carácter económico de los mismos, centrándose, el de 1753, en la institución del patronato y el de 1953 en el carácter de dotación, que enmarcarían durante varias décadas las relaciones Iglesia-Estado.

Sin olvidar, por supuesto, las Constituciones históricas españolas, que recogen, por primera vez, la de 1837, la dotación del Estado a la Iglesia, que encuentra su fundamento histórico en la misma “expropiación”, que la misma sufrió en sus propios bienes. Sin duda éste ha sido el fundamento de la dotación del estado a la Iglesia en la modalidad realizada hasta tiempos recientes. Pero como “el Estado no puede... prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado” se ha llegado a una situación en la que se abandonan los tradicionales fundamentos de la dotación y se han buscado nuevos: la libertad unas veces, la igualdad otras, la labor asistencial y social de la Iglesia, la mayoría de las veces.

Antes de llegar a la etapa de la autofinanciación, se ha hecho necesario analizar las otras tres fases del proceso, que llevará a la misma autofinanciación, como “iter” lógico para alcanzar la misma. Ciertamente parece que la misma Santa Sede está dispuesta a buscar la autofinanciación. Así cabe leer la modificación del Código de Derecho Canónico, de 1983, en el régimen benefical, que ha sido el sistema tradicional de financiación de la Iglesia Universal. Efectivamente, el tradicional sistema benefical, que tiene su origen en la Edad Media, que ha llegado a calificarse por algún autor como un auténtico “reino de Taifas”, creaba, ciertamente, criterios de desigualdad. Con los nuevos institutos, que el Código de Derecho Canónico ha constituido, se intenta paliar la carencia del Código de Derecho Canónico de 1983, además de suprimirse muchos de los impuestos que hasta entonces habían pervivido como el medio diezmo, la *annata* o el seminarístico, entre otros.

Todo ello ha hecho posible concebir como cierta la autofinanciación de la Iglesia católica, como última fase, si bien se hace difícil analizar una etapa, que aún no ha entrado en vigor. Pero es el mismo canon 222, el que establece la obligación de los fieles de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de donde se puede deducir el mismo deseo de autofinanciación de la Iglesia con carácter universal. Además, un estudio de la revista *Ecclesia* ha puesto de manifiesto que cada vez son más las parroquias que anhelan su autofinanciación y que adoptan cada vez más medios para alcanzarla. Otros institutos para alcanzar la autofinanciación son las oblaciones y los tributos e impuestos. Sin entrar ahora en su definición, simplemente diremos que son las primeras las que realmente responden al espíritu de la autofinanciación, ya que son datos de forma voluntaria por los fieles y sin carácter coactivo.

También se ha calificado como utopía el pretender la autofinanciación, como ocurriera con el adecuado patrimonio eclesiástico, que asegurase una congrua dotación del culto y del clero, del artículo XIX.1 del concordato de 1953. Sin embargo, lo cierto es que, en 1953, no existían las bases institucionales para alcanzar tal objetivo. De hecho, se recuerda con frecuencia, que en Francia la Iglesia no recibe ningún tipo de subvención, ya sea de forma directa o indirecta, y, sin embargo, la Iglesia católica tiene gran fuerza y raigambre en la

sociedad. Entre las instituciones que se han crado, para alcanzar la autofinanciación están el “fondo común interdiocesano” del canon 1274 del Código de Derecho Canónico, de 1983 y el “fondo diocesano para la sustentación de los clérigos” y el “consejo de asuntos económicos y del ecónomo”.

Otros medios para alcanzar la autofinanciación son los estipendios, los aranceles, las colectas y las oblaciones. El artículo I establece que la Iglesia católica puede libremente recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosnas y oblaciones. A su vez el artículo II.5 del acuerdo sobre asuntos económicos establece el propósito de la Iglesia de lograr, por sí misma, los recursos suficientes para la atención de sus necesidades.

Estos son los pilares básicos en los que se orienta nuestro trabajo de investigación. Estando todos estos aspectos abocados a elaborar la tesis de que la Iglesia debe autofinanciarse, para alcanzar la libertad que, ciertamente, debe tener y que consolidará la misma autofinanciación.

Son numerosos los modos, en los que se puede computar el dinero, que el Estado facilita a las confesiones religiosas; uno de ellos es el siguiente: no incluir en ese cómputo el dinero, que el Estado destina a la conservación del patrimonio histórico-artístico de titularidad eclesial, ya que prima la idea de protección del patrimonio sobre la de protección de la religiosidad –es decir, si el Estado restaura las vidrieras de la catedral de León, no está reparando las ventanas de un templo, sino que está conservando un tesoro artístico-; tampoco es conveniente incluir, por supuesto, la ayuda económica a centros docentes, de titularidad eclesial, pues aunque aquí sea menos claro, lo que prima es la actividad educacional sobre la religiosa. En base a tal criterio, el dinero, que recibe la Iglesia católica del Estado, vendrá formado por las siguientes partidas:

- a) Los aproximadamente quince mil millones de pesetas, que recibe por transferencia presupuestaria directa, una parte de los cuales corresponde al mal llamado “impuesto religioso”, es decir, la “asignación tributaria”. Ahora bien, la práctica totalidad de los quince mil millones se destina al pago de un sueldo de los sacerdotes y obispos, así como su cuota de seguridad social.
- b) La remuneración de los sacerdotes, que prestan labores de asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, y en establecimientos penitenciarios, hospitales y benéficos.
- c) Las remuneraciones de profesores de religión católica a centros docentes de titularidad pública.
- d) Las exenciones y bonificaciones fiscales, de las que disfrutaban determinadas actividades o bienes de titularidad eclesial. Además, las exenciones y bonificaciones suelen venir justificadas, por razón de que se tratan de actividades, conectadas con el culto. En la medida en que las restantes confesiones religiosas no reciben, prácticamente nada, la casi totalidad del dinero, que el Estado destina a la promoción de la libertad religiosa, en realidad, se transforma en una ayuda a las actividades de culto católico, quedando los no católicos sin beneficio de la misma<sup>1</sup>.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que la práctica totalidad del dinero que se recibe de la “asignación tributaria”, se destina al pago de un sueldo a los sacerdotes y obispos, así como su cuota de seguridad social, y que las exenciones y bonificaciones suelen venir justificadas, por

<sup>1</sup>.- Estudiaremos el bloque integrado por la “asignación tributaria”; por el contrario las exenciones y bonificaciones fiscales, las remuneraciones a los sacerdotes por su asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, establecimientos penitenciarios, hospitales y benéficos y de los profesores de religión católica a centros docentes de titularidad pública, quedan excluidos. *Nota del autor.*

razón de que se trata de actividades conectadas con el culto, y, si no olvidamos que las restantes confesiones religiosas no reciben prácticamente nada, la casi totalidad del dinero, que el Estado destina a la promoción de la libertad religiosa, en realidad, se transforma en una ayuda a las actividades del culto católico<sup>2</sup>. Tampoco será objeto de estudio la seguridad social del clero.

En el estudio se han contemplado las últimas reformas legales como la ley 49/1998, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, para 1999 –B.O.E., de 31 de diciembre–, e, igualmente, la ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias –B.O.E., de 10 de diciembre–.

Por último, aunque no menos importante, creo necesario hacer algunas referencias personales, sin las cuales no hubiera sido posible iniciar o finalizar este Trabajo de investigación. Su germen hay que encontrarlo en la dirección del Dr. D. Arturo Calvo Espiga, que ha hecho posible su desarrollo a lo largo de estos años de trabajo. Sin embargo, también quisiera agradecer el apoyo y los consejos ofrecidos por D. Miguel Ángel Asensio Sánchez. Tampoco podemos dejar de mencionar al Dr. D. Ángel Sánchez Blanco, Director del Programa de Tercer Ciclo/Doctorado, en el que he finalizado mi formación, bajo el título: “Las Administraciones Públicas en el Estado social y Democrático de Derecho. Análisis jurídico-administrativo de políticas públicas”, en el bienio 1994-1996. Este agradecimiento también está dirigido a todos los compañeros del Área de Conocimiento de Derecho Eclesiástico del Estado, que, de una u otra forma, han participado en el mismo. Naturalmente, un especial recuerdo para todos los compañeros y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga de la promoción 1989-1994, que han participado en mi formación.

Finalmente, quisiera dar mi agradecimiento a mi familia, que, durante todos estos años, ha participado en mi educación y ha hecho posible la finalización de esta Tesis Doctoral. A todos ellos, Gracias.

Málaga, marzo de 1.999

---

<sup>2</sup>.- Vid. IBÁN, I.C., *Libertad religiosa: ¿Libertad de las religiones o libertad en las religiones?*, 15 (monográfico), R.F.D.U.C. (1989), pp. 596-597. Esta colaboración también está reproducida, igualmente en español, en una publicación periódica italiana, en 2, Q.D.P.E. (1989), pp. 195-204. En concreto, estas ideas están recogidas en las pp. 199-200. Las citaremos indistintamente, idea que vuelve a recordarnos en su colaboración titulada *Concreciones y protección de la libertad religiosa*, 14, C.F.D.U.P.M. (1986), p. 79.

LA AUTOFINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA  
ESPAÑOLA Y “LAS DEMÁS CONFESIONES RELIGIOSAS”  
EN LA LIBERTAD E IGUALDAD RELIGIOSAS

**I. CAPÍTULO PRIMERO: LA DESAMORTIZACIÓN, EN ESPAÑA, A LO LARGO DE LA HISTORIA, COMO FUNDAMENTO DE LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA.**

**I.1. LAS PRIMICIAS, LOS DIEZMOS, LOS NOVENOS Y LOS EXCUSADOS, COMO ORIGEN DEL “IMPUESTO RELIGIOSO”.**

DOMÍNGUEZ ORTIZ ha valorado la situación a lo largo de la Historia de crear un patrimonio eclesiástico: “La mayor dificultad para bosquejar una historia del patrimonio eclesiástico español dimana de que nunca ha existido tal patrimonio como institución [...]. En los tiempos primitivos cada diócesis formaba en el aspecto económico un conjunto independiente, y continuó siéndolo casi hasta nuestros días”<sup>3</sup>.

El diezmo es impuesto ya en el Antiguo Testamento<sup>4</sup>, aunque como voluntario, y, desde principios del siglo XII, como impuesto obligatorio y universal<sup>5</sup>. En la Biblia, y, específicamente, en el Nuevo Testamento, se habla de la obligación de pagar impuestos. En concreto, el pasaje evangélico, en el que Jesús, preguntado acerca de si es lícito pagar tributos, contesta: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”<sup>6</sup>.

En opinión de GONZALO MARTÍNEZ, los diezmos no existieron en la Iglesia visigoda como impuesto obligatorio. Igualmente, los derechos de estola –aportaciones económicas de los fieles con ocasión de la administración de un sacramento, o de un sacramental, darían lugar con el tiempo a los llamados derechos de estola y pie de altar- no fueron tolerados jamás por la Iglesia visigoda, a pesar de numerosos abusos<sup>7</sup>.

En España, la primera documentación legislada sobre los diezmos la encontramos en el II concilio de Palencia –1129-, regulándose, después, más extensamente, por los reinados de los

<sup>3</sup>.- Vid. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., *Patrimonio y rentas de la Iglesia*, en ARTOLA, M., (dir.), *Enciclopedia de Historia de España. III* (Barcelona, 1988), p. 75.

<sup>4</sup>.- De hecho, los tratadistas medievales y escolásticos trataron de justificar el pago de diezmos, remontándose al Antiguo Testamento con Abraham –Gen. 14..20- y el Levítico –LV. 14..22-. Vid. GONZÁLEZ DE LANGARICA Y RUIZ DE GAUNA, A., *La legislación canónica y los diezmos en Álava*, 1, R.C.I.V.S.S. (1991), p. 336. Así lo indica también TRAVERSO RUIZ. Vid. TRAVERSO RUIZ, F.M., *La percepción del diezmo en el Obispado de Cádiz (1591-1648)*, XXXIX, 80, H.S. (1987), p. 570.

<sup>5</sup>.- Vid. ALDEA VAQUERO, Q., *La economía de las iglesias locales en la Edad Media y Moderna*, XXVI, H.S. (1973), p. 15.

<sup>6</sup>.- Vid. PÉREZ DE AYALA, J.L., *La ética fiscal como problema (Un ensayo de actualización)*, VI, A.D.E.E. (1990). pp. 265-295.

<sup>7</sup>.- Vid. GONZALO MARTÍNEZ, P., *El patrimonio eclesiástico en la España visigoda. Estudio histórico-jurídico*, XXXII, M.C. (1959), pp. 24 y ss.

siglos XIII y XIV<sup>8</sup>. Las *Partidas*<sup>9</sup>, de Alfonso X, el Sabio –1221-1284-, y, posteriormente, la Recopilación, tanto la *Nueva* como la *Novísima*, reiteran esta obligación tributaria<sup>10</sup>.

El diezmo afectaba a todo el Reino y tenía carácter periódico –anualmente-; fue muy conflictiva su percepción, siendo frecuente la resistencia a entregar el diezmo, o bien de usurpaciones sobre el mismo. Algunos habitantes de las aldeas, a fin de evitar hacer frente a la fiscalidad regia, huían, temporalmente, de sus aldeas, para refugiarse en la ciudad, haciéndose imposible su localización, para exigirles, el diezmo<sup>11</sup>. De hecho, el impago del diezmo era uno de los recursos de la protesta social. Hasta el punto de que, en ocasiones, los vecinos ni acudían a las subastas de las diferentes propiedades de los que no pagaban. Incluso, las autoridades municipales obstaculizaban el cumplimiento de las órdenes dictadas por organismos superiores<sup>12</sup>.

Todas las *gracias y beneficios eclesiásticos* que se expedían en la Curia Pontificia tenían que pagar allí unas tasas que recibían diferentes nombres, según el destinatario o la razón de su cobranza<sup>13</sup>.

Los diezmos, primicias y tasas de servicios reciben el nombre de “derechos de estola”.

El Voto de Santiago fue una renta eclesiástica, anual y en especie, de origen medieval, formalmente similar a la primicia, dependiente, en la mayor parte de la Corona de Castilla, de la obtención por el campesino de un mínimo de cosecha, y, simplemente, de la condición de labrador o vecino rural en Galicia y norte castellano-leonés; afectaba a un sesenta y cinco por ciento de la España peninsular. La crisis y posterior abolición del Voto de Santiago constituyó, sin duda alguna, un ensayo general para la posterior discusión y supresión del diezmo<sup>14</sup>. Pervivió desde la Edad Media hasta 1834. Con el paso del tiempo las justicias locales, uno de los contribuyentes del Voto, fueron cada vez más pasivos, al resolver sus impagos, dilatando en el tiempo una resolución<sup>15</sup>.

El medio diezmo, decretado el 29 de julio de 1821, sumió al clero en la miseria. Un posterior decreto de dotación de párrocos, de 26 de abril de 1822 –*Gazeta* de Madrid, de 1 d e mayo de 1822- era más que insuficiente para resolver los problemas creados<sup>16</sup>.

Pero si la situación para la Iglesia española era, como consecuencia de la desaparición del diezmo y de las mismas desamortizaciones, crítica. Para Roma la situación no era mucho mejor. Efectivamente, en 1860, *por primera vez en la Historia*, los católicos españoles, como los de otros Estados europeos, fueron invitados a socorrer al Papa. La tiara iba a perder su reino; muchos creyeron que la causa del poder temporal del Pontífice estaba indisolublemente

<sup>8</sup>.- Vid. GONZÁLEZ DE LANGARICA Y RUIZ DE GAUNA, A., *La legislación canónica y los diezmos en Álava*, 1, R.C.I.V.S.S. (1991), p. 336

<sup>9</sup>.- Ciertamente, en el orden civil la primera ley, en la que aparecen, es el *Fuero Real*, y en *Las Partidas*, de Alfonso X, el Sabio –Partida 1ª, Título 0-. -. Vid. GONZÁLEZ DE LANGARICA Y RUIZ DE GAUNA, A., *La legislación canónica y los diezmos en Álava*, 1, R.C.I.V.S.S. (1991), p. 336.

<sup>10</sup>.- Vid. ALDEA VAQUERO, Q., *La economía de las iglesias locales en la Edad Media y Moderna*, XXVI, H.S. (1973), p. 15.

<sup>11</sup>.- Vid. NIETO SORIA, J.M., *La conflictividad en torno al diezmo en los comienzos de la crisis bajomedieval castellana*, 1250-1315, 14, A.E.M. (1984), pp. 213-238.

<sup>12</sup>.- Vid. TRAVERSO RUIZ, F.M., *Una disidencia significativa: el impago del diezmo en el obispado de Cádiz* (S. XVII-XIX), XXXIX, 79, H.S. (1987), PP. 201-202 Y 204.

<sup>13</sup>.- Vid. ALDEA VAQUERO, Q., *La economía de las iglesias locales en la Edad Media y Moderna*, loc. cit., p. 5.

<sup>14</sup>.- Vid. REY CASTELAO, O., *La crisis de las rentas eclesiásticas en España. El ejemplo del Voto de Santiago*, 11, C.I.H. (1987), p. 53.

<sup>15</sup>.- Vid. REY CASTELAO, O., *La protección jurídica de las rentas eclesiásticas en España: el ejemplo del Voto de Santiago*, XXXIX, 80, H.S. (1987), pp. 458 y 498.

<sup>16</sup>.- Vid. REVUELTA GONZÁLEZ, M., *Los planes de la reforma eclesiástica durante el Trienio Constitucional* (II), XXX, 57, M.C. (1972-II), p. 329.

vinculada al porvenir del catolicismo. Destinaron, por tanto, su contribución monetaria a sostener al Estado pontificio. La ayuda económica afluyó a Roma por dos vías paralelas e interdependientes; los tradicionales donativos, a menudo puestos al día por medio de la publicación de listas, y un moderno empréstito. A través de ambos caminos se inyectó un notable refuerzo a las estrecheces financieras vaticanas<sup>17</sup>. No era, sin embargo, la primera ocasión que el gobierno de Pío IX acudía al crédito público. Por el contrario, el Estado pontificio había recurrido a menudo a este expediente, hasta el punto de contar con una importante deuda pública consolidada, que el Estado italiano asumió por ley de 29 de julio de 1871 por valor de veinticuatro millones de liras. Múltiples emisiones de deuda amortizable, abiertas entre 1831 y 1857, vinieron a aumentar el pasivo pontificio<sup>18</sup>.

El fraude es inseparable de la Historia del diezmo, aunque es preferible hablar de “resistencias” en vez de fraude. Es un concepto más amplio, que comprende el engaño y toda la gama de tácticas defraudatorias de difícil seguimiento documental por la lógica escasez de pistas, pero que sobre todo alude al rechazo abierto a determinados aspectos de la finalidad eclesiástica. Desde el momento en que hasta el final del diezmo la Iglesia se halle permanentemente tentada a exigir el cumplimiento de un impuesto, cuyo enunciado pretende la universalidad de sus aplicación, estaba abocada a entrar en conflicto con la sociedad del Antiguo Régimen, basada en el privilegio. Paradójicamente, con el avance de la ideología tributaria liberal, que predicaba la igualdad social ante el impuesto, el diezmo concitó la crítica unánime, por haber perpetrado una situación injusta: gravar exclusivamente a la tierra y a una sola clase de productores –los cultivadores directos- y mantener inmunidades y exenciones. La discusión en torno al diezmo se produce en España a partir de la Guerra de la Independencia, con evidente retraso respecto a Francia, que elabora en fechas muy tempranas el discurso abolicionista. Sus líneas argumentales las encontramos reproducidas en los debates de las Cortes del Trienio liberal<sup>19</sup>.

En todo este entramado de instituciones jurídicas –y en íntima relación con el “beneficio eclesiástico”- deben tenerse presente las “iglesias propias”<sup>20</sup>.

## **I.2. PRECEDENTES MÁS REMOTOS DE LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIASTICA<sup>21</sup>. PROBLEMÁTICA SOBRE QUÉ DEBA CONSIDERARSE POR TAL: LA PRIMERA DESAMORTIZACIÓN ECLESIASTICA EN ESPAÑA<sup>22</sup>.**

<sup>17</sup>.- Vid. MARQUÉS PLANAGUMÁ, J.Mª., *Los empréstitos pontificios de 1864 en España*, 38, A.A. (1991), p. 203. Sobre las rentas episcopales en el siglo XVI, vid. ESCANDELL BONET, B., *Las rentas episcopales en el siglo XVI*, 3, A.H.E.S. (1970), pp. 57-90. También es interesante vid. GOÑI GAZTAMBIDE, J., *El fiscalismo pontificio en España en tiempo de Juan XXII*, 14, A.A. (1966), pp. 65-99.

<sup>18</sup>.- Vid. MARQUÉS PLANAGUMÁ, J.Mª., *Los empréstitos pontificios de 1864 en España*, loc. cit., p. 203

<sup>19</sup>.- Vid. MUÑOZ DUEÑAS, Mª. D., *Las resistencias del diezmo*, 1 (monografías), H.P.E. (1994), pp. 155 y 157.

<sup>20</sup>.- Sobre las “iglesias propias”, la bibliografía es escasa, pero sobresale la siguiente: vid. TORRES LÓPEZ, M., *La doctrina de las “Iglesias propias” en los autores españoles*, II, A.H.D.E. (1925), pp. 402-461; y, de este mismo autor, sobre el mismo tema: *El origen del sistema de “iglesias propias”*, V, A.H.D.E. (1928), pp. 83-217.

<sup>21</sup>.- Por “desamortización” debe entenderse el proceso político y económico, transcurrido desde finales del siglo XVIII –iniciado con las tres reales órdenes de 25 de septiembre, de 1798 –hasta cien años después, en el cual se produjo, por medio de normas estatales y en función de una política consciente, la conversión en bienes y derechos, que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado de diversas entidades, para enajenarlos inmediatamente a ciudadanos individuales en pública subasta. Hubo, pues, una determinada política económica, procedente del más temprano liberalismo, hubo unos grupos sociales, empeñados en llevarla a cabo, porque favorece sus intereses, hubo una perentoria necesidad de la Hacienda para realizar esa operación y hubo normas legales del Estado, que impusieron la aprobación estatal de esos bienes y su enajenación. Por el contrario, si entendemos por “desamortización”, en un sentido latísimo y amplísimo, toda venta de bienes vinculados a una

El único texto jurídico de la época justinianeas, referido a actos expropiatorios del órgano público, admitiendo una actuación expropiatoria sobre los bienes de la Iglesia, y de otras corporaciones y fundaciones pías, es la Novela 7,2,1 *Impp Iustinianus A. Epiphanio*<sup>23</sup>.

Las donaciones a iglesias y comunidades religiosas, por parte de villas, heredades y concesiones de privilegios especiales a los vasallos, que quedaban dentro de sus tierras, fueron una constante en toda la Edad Media. Aunque algunos monarcas comenzaron a ponerles límites. A su vez, el estado llano en las Cortes, y cada vez con más intensidad, mostraban su oposición a “pechar”, cuando las iglesias y comunidades religiosas gozaban de inmunidad tributaria<sup>24</sup>. De este modo, los Fueros municipales, en su mayor parte, se refieren a los bienes de la Iglesia, limitando, o, incluso, prohibiendo la venta de bienes a la misma. E igualmente, en las Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla se adoptaron medidas de todo tipo para evitar la amortización de tierras<sup>25</sup>.

A partir del año 1290 hasta el reinado de Enrique II pocas fueron las Cortes celebradas, en que los procuradores no presentaron demandas, poniendo de manifiesto la poca observancia de las prescripciones de las Cortes. Sin embargo, la realidad era que la Iglesia cada vez iba acumulando más riqueza, y, en consecuencia, los impuestos a repartir y las cargas personales eran mayores para los restantes propietarios, por gozar de inmunidades fiscales<sup>26</sup>.

Juan II, de Castilla, viendo que no surtía el efecto deseado la prohibición de amortizar y que aumentaban las quejas continuas de sus vasallos, dispuso, en 1452, que cualquiera, que vendiese o enajenase bienes raíces de realengo a manos muertas, contribuyera al erario con el veinte por ciento de su precio, más la alcábala correspondiente. Sin embargo, los legisladores dejaron una puerta de salida, para burlar al fisco, porque el impuesto no se exigía a los *eclesiásticos*, como en la Corona de Aragón, sino a los *pecheros*, por lo que éstos defraudaban al erario, ya que cedían el resto de sus propiedades a un pariente o amigo y se declaraban insolventes<sup>27</sup>.

Sin embargo, respecto a los bienes de la Iglesia, los Reyes Católicos no sólo no consideraron prudente privarle de algunos, de los que poseía, sino que en las ordenanzas reales de Castilla “se ordenó que fuesen siempre guardadas en poder de la Iglesia todas las cosas que habían sido concedidas a ésta por los Reyes o por fieles cristianos (Ley I, tít. II), los declaró inajenables (Ley III); ordenó que nadie quebrantase sus privilegios ni franquezas, ni ocupasen bienes, mantenimientos ni ornamentos dellas (Ley V), y se castigó (Ley VIII) al que tomase u

---

“mano muerta” corremos el peligro de vaciar el concepto. Designando con él fenómeno de otro tiempo, de finalidad diferente, de cobertura ideológica distinta y de instrumentación diversa, dando lugar a confusión. Y confiscación y ulterior venta de bienes eclesiásticos, como si se tratara de realidades iguales, y, por tanto, nombrables como una misma palabra, que la “desamortización” de los liberales. Todos estos episodios históricos tuvieron un punto en común: produjeron la privatización de bienes, hasta entonces, municipales o de propiedad eclesiástica, pero nada más los demás elementos del concepto, que hemos dado de “desamortización” no se dan. Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., “Desamortización y Hacienda Pública. Reflexiones: entre el balance, la crítica y las sugerencias”, 77, H.P.E. (1982), p. 21.

La bibliografía sobre la desamortización, que hemos seleccionado, es la siguiente: vid. RUEDA HERNANZ, G., *La desamortización de Mendizábal y Espartero en España* (Madrid, 1986).

<sup>22</sup>.- Sobre el concepto de “desamortización” vid. la nota anterior.

<sup>23</sup>.- Vid. RODRÍGUEZ LÓPEZ, R., *La Novela 7,2,1: la Iglesia en su cualidad de sujeto expropiado*, 84, R.F.D.U.C. Curso 1993-1994 (1995), pp. 491 y ss.

<sup>24</sup>.- Vid. SIMÓN SEGURA, F., *La desamortización española en el siglo XIX* (Madrid, 1973), p. 16.

<sup>25</sup>.- Vid. SIMÓN SEGURA, F., *La desamortización española...*, loc. cit., pp. 17 y ss.

<sup>26</sup>.- Vid. SIMÓN SEGURA, F., *La desamortización española...*, loc. cit., pp. 20 y 22.

<sup>27</sup>.- Vid. BRINES BLASCO, J., *El proceso de amortización eclesiástica en el país valenciano*, 3, *Estudis* (1974), p. 8.

ocupase las rentas eclesiásticas, así las que pertenecían a los preladados como a los clérigos y fábricas de las iglesias”<sup>28</sup>.

Un gran ensayo desamortizador, con reiteradas autorizaciones pontificias, fue la llevada a cabo por los monarcas españoles. En esta desamortización puede diferenciarse dos fases: la primera está representada por la secularización y subsiguiente enajenación por precio de encomiendas y pueblos de las órdenes militares españolas, cuyos maestrazgos habían sido incorporados a la Corona, con carácter perpétuo, en virtud de *bula* de Adriano VI, de 4 de mayo de 1523, que puso en manos del monarca la administración de las mesas maestres. La segunda fase comienza, al avecinarse la crisis de 1575, y tiene por objeto la incorporación a la Corona – para su posterior enajenación- de villas y lugares de iglesias, mitras y monasterios<sup>29</sup>. Estas secularizaciones, por la penuria del erario regio, conllevaría la secularización de bienes eclesiásticos del siglo XVI, dando lugar al señorío laico o nobiliario, en sustitución del abadengo o la encomienda<sup>30</sup>.

En el siglo XVI, en Castilla, se produce una doble corriente: por una parte los monarcas se ven obligados por los déficits del erario, a desamortizar los bienes de las órdenes militares y más tarde los de iglesias y conventos, y, por otra, favorecen la amortización eclesiástica, desechando de la codificación todas aquellas leyes, que la contrarrestaban<sup>31</sup>. En las Cortes castellanas, reunidas en 1528, los procuradores volvieron a hacer oír su voz, pidiendo la incorporación a la Corona de los señoríos y territorios de jurisdicción eclesiástica. Pero el estamento afectado se opuso con todos sus medios. La misma petición se repitió un cuarto de siglo más tarde con los mismos resultados negativos. No obstante, y aunque Carlos I y Felipe II se negaron a incorporar a la Corona bienes eclesiásticos, las necesidades económicas les aconsejaron, después del pertinente permiso del Papa, apropiarse de los mismos<sup>32</sup>. La base legal de esta desamortización llevada a cabo por los Austrias mayores, estuvo constituida por las bulas pontificias, que la autorizaron. La primera de ellas –disposición fundamental- procede de Clemente VII, y fue expedida el 20 de septiembre de 1529; y, aunque su objetivo formal se encaminaba a atender mejor las necesidades defensivas contras los infieles, realmente se pretendía un desahogo de la apurada Hacienda regia<sup>33</sup>. Clemente VII otorga, mediante *bula* expedida el 20 de septiembre de 1529, al monarca español “amplia facultad para desmembrar y separar perpetuamente de las Mesas Maestres de las Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara algunos lugares, castillos, jurisdicciones, vasallos, montes, pastos, bienes inmuebles y fortalezas hasta la cantidad de 40.000 ducados de renta”. El Rey podría disponer de los bienes desmembrados, como de propia, incluso por donación y venta, y quienes los adquiriesen no podrán ser molestados<sup>34</sup>.

Todo ello a cambio de que se diese a las órdenes militares tierras y bienes por un valor de 45.000 ducados en Granada y el norte de África. La Santa Sede se comprometía, por su parte, cumplidas todas las disposiciones o condiciones, a respetar la desamortización, con todas sus consecuencias. Después de algunas dudas y vacilaciones, la operación de venta no comenzó hasta que el Papa Paulo III, el 17 de agosto de 1536, confirmó mediante *bula*, la dada por su antecesor. La subasta de estos bienes fue rápida, aunque no excesivamente fructífera, para el erario regio<sup>35</sup>. Felipe II, siendo príncipe, intervino, en ausencia de su padre, en las operaciones

<sup>28</sup>.- Vid. SIMÓN SEGURA, F., *La desamortización española...*, loc. cit., pp. 27-28.

<sup>29</sup>.- Vid. MOXÓ, S., De, *Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI*, XXXI, A.H.D.E. (1961), p. 327.

<sup>30</sup>.- Vid. MOXÓ, S., De, *Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI*, loc. cit., p. 328.

<sup>31</sup>.- Vid. BRINES BLASCO, J., *El proceso de amortización eclesiástica en el país valenciano*, loc. cit., p. 9.

<sup>32</sup>.- Vid. BRINES BLASCO, J., *El proceso de amortización eclesiástica en el país valenciano*, loc. cit., p. 10.

<sup>33</sup>.- Vid. MOXÓ, S., De, *Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI*, loc. cit., p. 329.

<sup>34</sup>.- Vid. MOXÓ, S., De, *Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI*, loc. cit., p. 329.

<sup>35</sup>.- Vid. BRINES BLASCO, J., *El proceso de amortización eclesiástica en el país valenciano*, loc. cit., p. 10.

desamortizadoras –caso de Lobón o Villarrubia de los Ojos-, prosigió tales desmembraciones y ventas de bienes de las Órdenes, al amparo de las anteriores y otras nuevas disposiciones pontificias, como las bulas de Pío IV, de 1 de diciembre de 1559, y Pío V, de 14 de marzo de 1570<sup>36</sup>.

Las necesidades monetarias del erario continuaron aumentando y los tributos no pudieron colmarlas, por lo que el rey se vio obligado, a pedir nuevos subsidios. El Papa Julio III expidió, cuando finalizaba el reinado del Emperador, en 1 de febrero de 1551, una *bula* en la cual se autorizaba a Carlos V “por los cuantiosos gastos bélicos que se veía forzado a realizar, a enajenar lugares, fortalezas y villas, pertenecientes a Monasterios y Conventos, de hombres y mujeres, de la Orden de San Benito, San Agustín, San Jerónimo y cualquier otra, hasta el valor de 40.000 ducados de renta”<sup>37</sup>.

Pero sería en 1574 –como pregón anunciador de la bancarrota del año siguiente- cuando el proceso desamortizador de bienes eclesiásticos da un paso decisivo, al lograr Felipe II<sup>38</sup> del Papa Gregorio XIII, la bula de 6 de abril de dicho año, en la que se faculta al Rey para “desempeñar, quitar, apartar y vender perpetuamente cualesquiera villas y lugares, jurisdicciones, fortalezas y otros heredamientos, con sus rentas, derechos y aprovechamientos pertenecientes en cualquier manera a cualesquiera Iglesia Catedrales de estos Reinos, aunque fuesen Metropolitanas, Primaciales, Colegiales, y a cualesquier Monasterios, Cabildos, Conventos y Dignidades, y desmembrado, darlo, donarlo, y venderlo y disponer de ello, con tal que no excedieses la renta de las villas y lugares que así se desmebrasen y vendiesen, del valor de 40.000 ducados de renta en cada un año y que la desmembración la pudiese hacer sin consentimiento de los Prelados, Abades, Priors, Prepósitos, Rectores, Conventos, Cabildos, y las otras personas que las poseyesen, dándoles la justa recompensa y equivalencia que hubiesen de haber por las rentas que así desmebrasen y vendiesen”<sup>39</sup>. La desamortización, concedida al Rey por el Papa Gregorio XIII, en 1574, fue poco afortunada para el erario, ya que, apenas obtuvo beneficios económicos, y disgustó, profundamente, al clero, no tanto por la importancia económica de la misma, cuanto por su alcance social: ejercer señorío tenía, en el siglo XVI, para los españoles, un valor, que estaba por encima del dinero<sup>40</sup>. Esta bula de 1575 sería reforzada, posteriormente, por nueva disposición pontificia de 14 de marzo de 1579<sup>41</sup>.

La crítica situación del erario regio, durante el reinado de los primeros Austrias, a consecuencia del problema de los intereses de los juros y de las guerras sostenidas por ambos en Europa, y del mantenimiento de la pesada carga de una numerosa administración y coste real, hicieron que Felipe II, endeudado tras la derrota de la Armada Invencible, exigiese a la Iglesia una nueva prestación de 8 millones de escudos, a lo que el clero se opuso, terminantemente, hasta que el Papa Clemente III accedió a ello mediante un *breve*<sup>42</sup>. Felipe II ha sido uno de los monarcas que habrá desamortizado mayor cantidad de bienes eclesiásticos, pero siempre lo hizo

<sup>36</sup>.- Vid. MOXÓ, S., De, *Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI*, loc. cit., p. 340.

<sup>37</sup>.- Vid. MOXÓ, S., De, *Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI*, loc. cit., p. 330.

<sup>38</sup>.- Si bien, como LÓPEZ DÍAZ, ha matizado, el término “desamortización”, aplicado a la acción, llevada a cabo por Felipe II, es impropio. Más bien, debería hablarse de “expropiación y venta”, “enajenación”, o cualquier otro término similar, ya que, excepto raros casos, los bienes expropiados a la Iglesia, no fueron, puestos en circulación, sino que pasaron a formar parte de otras manos muertas: las de la nueva nobleza. Por tanto, no cabe hablar de desamortización, entendida como libre circulación de bienes, anteriormente en manos muertas, por los primeros Austrias en el siglo XVI. Vid. LÓPEZ DÍAZ, M<sup>a</sup>.I., *Las desmembraciones eclesiásticas de 1574 a 1579*, 129, M. y C. (1974), pp. 135-136, en su nota 1.

<sup>39</sup>.- Vid. MOXÓ, S., De, *Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI*, loc. cit., p. 351.

<sup>40</sup>.- Vid. LÓPEZ MARTÍNEZ, N., *La desamortización de bienes eclesiásticos en 1574. Carta-memorial de Fr. Hernando del Castillo, O.P., a Felipe II*, XXII, 186, Hispania (1962), p. 240.

<sup>41</sup>.- Vid. MOXÓ, S., De, *Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI*, loc. cit., p. 352.

<sup>42</sup>.- Vid. BRINES BLASCO, J., *El proceso de amortización eclesiástica en el país valenciano*, loc. cit., p. 11.

acuciado por los problemas financieros. Se puede decir que tomó los bienes, como préstamo, nunca como algo perteneciente al pueblo, ni como fines desamortizadores, sino que más bien favoreció la amortización, excluyendo de la recopilación legislativa la ley dada por Juan II, que gravaba los bienes raíces, que pasaran a manos muertas eclesiásticas con un veinte por ciento de valor. Su escrupulosidad religiosa llegó al extremo, de ordenar, en su territorio, la devolución de los bienes vendidos. Pero su hijo y sucesor, Felipe III impetró al Papa un *breve*, que le eximiera de esta obligación, y confirmara la validez de las venta realizadas, porque no encontraba medios económicos, para cumplir esta cláusula. El Papa Clemente VIII, viendo las necesidades del nuevo Rey, se lo concedió en 1604<sup>43</sup>.

A pesar de las medidas adoptadas a lo largo de toda la Edad Media, la Iglesia llega al siglo XVIII con una gran fuerza social y riquezas casi intacta; momento en que numerosos informes, consultas, escritos, memoriales, etcétera, aconsejan proceder a desvinculaciones y limitar la amortización para una mejor distribución de las riquezas de todos los ciudadanos<sup>44</sup>.

Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, los institutos de regulares habían logrado acaparar –a través de donaciones y compras– gran cantidad de bienes y rentas<sup>45</sup>.

Como TOMÁS Y VALIENTE ha escrito en el Estudio Preliminar, al *Tratado de la Regalía de amortización*, de CAMPOMAMES: “Sólo treinta años después del fracaso político de Campomames en torno a la limitación de las adquisiciones de bienes raíces por parte de la Iglesia, se inició, en pleno reinado de Carlos IV<sup>46</sup>, la desamortización eclesiástica. Después, el Estado liberal consumó la operación. El libro de Campomames quedó como un antecedente ilustre de la política desamortizadora”<sup>47</sup>.

### 1.3. EL SIGLO XIX, COMO “EL SIGLO DE LA DESAMORTIZACIÓN”<sup>48</sup>

En el siglo XIX pueden distinguirse cuatro fases o épocas de desamortización, con independencia de las medidas adoptadas contra el clero de 1803 a 1820. Una primera, o la desamortización de 1798. La segunda fase importante tuvo lugar en el transcurso del trienio liberal, y las dos últimas fueron la iniciada en el año 1836, bajo el impulso del Ministro Juan Álvarez Mendizábal; la cuarta y última, la del año 1855, obra del bienio progresista y, en especial, de uno de sus ministros: Pascual Madoz<sup>49</sup>.

La desamortización, en su forma contemporánea, comenzó en 1798, con decretos de Carlos IV<sup>50</sup>, en los cuales se mandaba vender los bienes raíces de todas las casas de

<sup>43</sup>.- Vid. BRINES BLASCO, J., *El proceso de amortización eclesiástica en el país valenciano*, loc. cit., p. 12.

<sup>44</sup>.- Vid. SIMÓN SEGURA, F., *La desamortización española...*, loc. cit., p. 60.

<sup>45</sup>.- Vid. LÓPEZ GARCÍA, J.M., *El ocaso de los institutos de regulares castellanos en las postrimerías del Antiguo Régimen*, 108-109, H.P.E. (1987), p. 312.

<sup>46</sup>.- Sobre la desamortización en la época de Carlos IV, vid. MERINO NAVARRO, J.P., *Hacienda, deuda pública y desamortización con Carlos IV, avance de investigación*, XXXVIII, A.E.A. (1981), pp. 251-269. Sobre la situación de la Hacienda en esta época, vid. MERINO NAVARRO, J.P., *La Hacienda de Carlos IV*, 69, H.P.E. (1981), pp. 139-182.

<sup>47</sup>.- Vid. RODRÍGUEZ DE CAMPOMAMES, P., *Tratado de la regalía de amortización* (Madrid 1975), p. 8 en el “Estudio Preliminar” de Francisco Tomás y Valiente.

<sup>48</sup>.- Así lo ha denominado SIMÓN SEGURA a este siglo XIX. Vid. SIMÓN SEGURA, F., *La desamortización española...*, loc. cit., pp. 50-51.

<sup>49</sup>.- Vid. SIMÓN SEGURA, F., *La desamortización española...*, loc. cit., p. 50.

<sup>50</sup>.- Vid. HERR, R., *El significado de la desamortización en España*, 131, M. y C. (1974), p. 55. Es en esta fecha de 1798 –dejando aparte las enajenaciones de los Austrias–, cuando se decreta la primera desamortización eclesiástica. Vid. SIMÓN SEGURA, F., *La desamortización española...*, loc. cit., p. 61. Si bien la liquidación del patrimonio económico de los jesuitas presenta varios de los elementos, que son característicos en una desamortización. Legalmente, lo es, ya que, según la real cédula de 27 de marzo de 1769. En la que se ordenaban

beneficencia, hermandades, obras pías y patronatos legos, imponiendo su precio en la caja de amortización al tres por ciento de renta. La razón de tal venta estaba en disminuir la deuda pública, que, sin embargo, proseguía en aumento<sup>51</sup>. De hecho, la gran mayoría de las propiedades vendidas por los decretos del 19 de septiembre, de 1798, más del noventa y dos por ciento, formaban parte de las propiedades eclesiásticas<sup>52</sup>. Aunque el origen de la deuda pública se remonta al siglo XVI, es a partir de 1780 cuando creció espectacularmente, debido a la emisión de vales reales por los gobiernos de Carlos III y IV, para sufragar los gastos de la guerra contra Inglaterra y la Francia revolucionaria. Como consecuencia de este aumento desmesurado, comenzó a bajar, hasta alcanzar la cota del cincuenta por cien a finales de siglo. Godoy, para detener este proceso de depreciación de la deuda y obtener numerario con qué hacer frente a las necesidades del erario, dispuso por la ley de 19 de septiembre de 1798 la desamortización de los bienes de las casas de beneficencia, hermandades, obras pías y patronatos legos. La venta de dichos bienes se inició rápidamente, y su producto vino a engrosar las arcas reales, pero nunca llegó a destinarse a la amortización de la deuda pública, sino que se invirtió en la compra de material bélico y sostenimiento del ejército<sup>53</sup>. Carlos IV, bajo la presión de los economistas, que clamaban a gritos contras las “manos muertas” decidió en 1798, acometer un primer ensayo de desamortización, y declara vendibles todas las fincas de los establecimientos de beneficencia, ingresándose su importe en la “real caja de amortización”, con el interés de un tres por ciento anual<sup>54</sup>.

En el año 1798 se dictaron tres disposiciones –21 de febrero, 26 de febrero y 25 de septiembre–, que inician, ciertamente, la desamortización, tal y como siguió realizándose a lo largo del siglo XIX, esto es, con las características siguientes: apropiación por parte del Estado, y por decisión unilateral suya de bienes inmuebles pertenecientes a “manos muertas”; venta de los mismos, y asignación del importe, obtenido con las ventas, a la amortización de los títulos de la deuda. Hasta este momento la desamortización se efectúa sólo sobre bienes de “manos muertas” políticamente débiles –colegios mayores, hospicios, hospitales...- o indefensa –jesuítas expulsados-. Las ventas derivadas de la tercera de las órdenes reales, la de 25 de septiembre de 1798, según Godoy, continuaba efectuándose y con buen resultado en 1802 y 1803, pero los beneficios obtenidos se destinaron a los gastos de la guerra<sup>55</sup>. Sin embargo, la penuria económica, por la que pasó España durante la guerra de la independencia, no hizo posible acumular rentas de los establecimientos benéficos. La “real caja de amortización” se derrumbó

---

las ventas de las propiedades inmuebles de la Compañía, se prohíbe que dichas enajenaciones puedan ser efectuadas en manos muertas, para que vuelvan a la clase contribuyente. De hecho, la liquidación del patrimonio económico de los jesuítas presenta muchos de los rasgos, que después serían característicos de las posteriores desamortizaciones del siglo XIX, que comprenderían las modalidades de venta, la forma de pago, con la admisión de títulos de deuda pública, así como la composición social de los compradores. En resumen, la venta de las propiedades de los jesuítas inaugura el ciclo de transformación de la propiedad, característico del siglo XIX, en este caso se trata de una venta llevada a cabo por los ilustrados, pero que tampoco contribuyó a reducir la concentración de la propiedad rústica en España, sino, por el contrario, a incrementarla, además de permitir la inversión de capital de procedencia mercantil y urbana en la agricultura. Vid. LÓPEZ MARTÍNEZ, A.L., *El patrimonio económico de los jesuitas en el reino de Sevilla y su liquidación en tiempos de Carlos III*, 217, A.H (1988), pp. 54-55.

<sup>51</sup>.- Vid. PRESAS BARROSA, C., *Consideraciones sobre el patrimonio eclesiástico y el concepto de enajenación contemplado desde la legislación estatal*, en AA.VV., *Dimensiones jurídicas del factor religioso. Estudio en homenaje al Profesor López Alarcón* (Murcia 1987), pp. 478-479-

<sup>52</sup>.- Vid., HERR, R., *La vente des propriétés de mainmorte en Espagne, 1798-1808*, 1, A.É.S.C. (1974), p. 215.

<sup>53</sup>.- Vid. BRINES BLASCO, J., *Deuda y desamortización durante el Trienio Constitucional (1820-1823)*, 124, M. y C. (1973), p. 51.

<sup>54</sup>.- Vid. SEGRELLES CHILLIDA, V., *Necesidad de la reforma de la legislación sobre Beneficencia y Asistencia Social*, LIII, R.G.L.J (1966), p. 297.

<sup>55</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España* (Barcelona 1989), p. 44.-

los vales reales perdieron todo su valor y gran número de los hospitales, hospicios, casas de expósitos, etcétera, no teniendo medios para subsistir, cerraron sus puertas. Cuando en 1814 se restauró la paz, los establecimientos benéficos estaban abandonados y en ruina, carentes de todo peculio propio. En una palabra, la legislación de beneficencia era necesario modificarla<sup>56</sup>.

En la angustiosa búsqueda de una salida al dilema de obtener más recursos para la guerra, sin que se depreciara el crédito de la Hacienda, no faltaron propuestas insólitas, como la de encargar del servicio de los vales al clero. En efecto, en 1799, se llegó a nombrar, tras el fracaso de la Junta, para reordenar la Hacienda, creada en el año anterior, otra de dignidades eclesiásticas, presidida por un comisario regio, que era el intendente de Guadalajara y sus fábricas. En compañía de otros canónigos, Amat, del cabildo de la catedral de Tarragona, y confesor del Rey, propuso un plan, según el cual el clero de España, por medio de los cabildos de las catedrales, se comprometía a presentar al real erario una cantidad determinada de vales para su extinción, empleando en ello las rentas decimales, que la Iglesia pagaba a la Hacienda, en virtud del subsidio, noveno, excusado, y otras figuras tributarias eclesiásticas, que la monarquía había logrado, a lo largo del tiempo, recabar para sí. Se suponía que el clero, ante el anuncio de la extinción periódica de los vales, se apresuraría a demandarlos, dado el bajo nivel de su cotización, con lo cual la apreciación de los tributos no tardaría en producirse. Otra propuesta de la Junta fue la de encargar a la Iglesia, pura y simplemente, de la administración de los vales, quedando las oficinas y empleados bajo sus órdenes, todo ello presidido por una Junta de seis prebendados, en Madrid. Amat convenció a sus compañeros, y al comisario regio para que, en vez de establecerse en Madrid una caja general o tesorería eclesiástica, se descentralizase la administración en las diferentes metrópolis. Parece que el clero no acogió, con auténtico entusiasmo, esta oportunidad, pero el plan no fue aprobado<sup>57</sup>.

En diciembre de 1799, la monarquía española obtuvo del Papa Pío VI un *breve*, por el que se facultaba a la Hacienda, a exigir un subsidio de treinta y seis millones de reales sobre las rentas eclesiásticas de España y otro de treinta sobre las correspondientes a América. En pago del subsidio, se admitían los adelantos, que anticipó el clero para la satisfacción del excusado<sup>58</sup>.

En agosto de 1800, los vales reales perdían las tres cuartas partes de su valor<sup>59</sup>.

Como la desamortización había dado buen resultado en España, decidieron Carlos IV y sus consejeros extenderlas a las Indias, promulgándose el 24 de noviembre de 1804 un decreto, pero resultó contraproducente, pues el dinero no podía llegar de América a España<sup>60</sup>.

En 1805, Carlos IV obtuvo del Papa Pío VII un *breve apostólico*, fechado el 14 de junio, que concedía la “facultad para que en todos los dominios del Rey Católico puedan enagenarse otros tantos bienes eclesiásticos, cuantos sean los que en todo correspondan a la renta libre anual de doscientos mil ducados de oro de Cámara, y no más” –es decir, 6,4 millones de reales-. El capital que resultase, se emplearía en extinguir los vales, pero también “en alivio de las gravísimas y urgentísimas necesidades del mismo reyno”. El Papa declaró lícitas tales ventas, y ordenó no inquietar a los compradores. Sin embargo, no era un acuerdo tan provechoso, como el de la desamortización de 1798, porque no se aclaraba cuáles propiedades se debían enajenar para llenar tal cantidad concedida, y, porque el Rey tenía que tomar posesión de ellas y empezar

<sup>56</sup>.- Vid. SEGRELLES CHILLIDA, V., *Necesidad de la reforma de la legislación sobre Beneficencia y Asistencia Social*, loc. cit., pp. 297 y 302.

<sup>57</sup>.- Vid. TEDDE DE LORCA, P., *Crisis de Estado y Deuda Pública a comienzos del siglo XIX*, 108-109, H.P.E. (1987), pp. 169-195.

<sup>58</sup>.- Vid. TEDDE DE LORCA, P., *Crisis de Estado y Deuda Pública a comienzos del siglo XIX*, loc. cit., p. 184.

<sup>59</sup>.- Vid. TEDDE DE LORCA, P., *Crisis de Estado y Deuda Pública a comienzos del siglo XIX*, loc. cit., p. 187.

<sup>60</sup>.- Vid. HERR, R., *Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV*, 118, M. y C. 1971), p. 87.

a pagar la renta anual, que les correspondía a los antiguos dueños, antes de sacarlas a subasta<sup>61</sup>. Se publicó este *breve* en real cédula de 15 de octubre de 1805, con instrucciones sobre su ejecución. La experiencia demostró que esta manera de proceder no era eficaz, y al año siguiente se obtuvo del Papa otro *breve*, del 12 de diciembre de 1806, sustituyendo al anterior. Esta vez, el Papa concedió al Rey el derecho, de vender la séptima parte de los predios, pertenecientes a la Iglesia, incluso las órdenes religiosas y militares, con la única excepción de “los predios destinados en patrimonio y por congrua de las Iglesias parroquiales”. Además, concedió el derecho, de vender todos los bienes raíces, pertenecientes a capellanías colativas, cuyos poseedores se nombraban por las autoridades eclesiásticas, dándoles a los poseedores el tres por ciento del valor, o la renta anual, cual fuera mayor. Se estipuló que los capitales se inscribieran en la “caja de consolidación”, para la extinción de vales y demás necesidades de la Corona. Este *breve* se publicó en real cédula de 21 de febrero de 1807, con instrucciones para su cumplimiento. Es evidente que la séptima parte de los bienes eclesiásticos no se podía aprovechar inmediatamente, porque había que empezar, por verificar las posesiones de cada entidad y su producto anual, y luego negociar cuál parte se vendería<sup>62</sup>.

El 23 de enero de 1799 comienza la desamortización de los bienes inquisitoriales. Las Cortes de Cádiz también suprimieron la Inquisición; ya, con anterioridad en 1808 Napoleón la había suprimido, intentando incluir sus bienes como nacionales. En 1814, Fernando VII restaura la inquisición y le restituye sus bienes por orden de 15 de agosto. En 1820, los liberales suprimían, nuevamente, la Inquisición y sus bienes pasaban a propiedad del Estado. En 1823, Fernando VII instauraba de nuevo el absolutismo. Una de las primeras resoluciones de Napoleón, respecto de la Iglesia española, fue suprimir el Tribunal de la Inquisición, secuestrando sus bienes, para servir de garantía a los vales reales, y otros efectos de la deuda de la Monarquía, mediante una instrucción secreta, de 26 de octubre de 1808<sup>63</sup>. El real decreto de 4 de diciembre de 1808, dictado por Napoleón, reducía a la tercera parte el número de conventos<sup>64</sup>. El decreto de 18 de agosto de 1809 –Gaceta de Madrid, del 21–, el gobierno de José Bonaparte I decidió la supresión total de las órdenes religiosas de su Reino<sup>65</sup>.

El 21 de agosto de 1819, José Bonaparte abolía la contribución llamada del Voto a Santiago. El 3 de enero de 1810 se abolía el tributo, conocido con el nombre de “infurción”, que percibían muchos monasterios y particulares, ya que se le consideraba incluido entre los derechos feudales, que en diciembre de 1808, Napoleón había anulado<sup>66</sup>.

Los objetivos de la operación desamortizadora, realizada por José Bonaparte en España, eran, en esencia dos: enjugar la deuda pública, o, por lo menos, consolidarla, y dar seguridades a los acreedores del Estado; además de recompensar a los perjudicados, indemnizándoles de los perjuicios, para conseguir su apoyo a la nueva situación<sup>67</sup>.

<sup>61</sup>.- Vid. HERR, R., *Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV*, loc. cit., p. 89.

<sup>62</sup>.- Vid. HERR, R., *Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV*, loc. cit., p. 90.

<sup>63</sup>.- Vid. MERCADER RIBA, J., *José Bonaparte, Rey de España (1808-1813). Estructura del Estado bonapartista*, loc. cit., p. 455.

<sup>64</sup>.- Vid. MERCADER RIBA, J., *José Bonaparte, Rey de España (1808-1813). Estructura del Estado bonapartista*, loc. cit., p. 458.

<sup>65</sup>.- Vid. MERCADER RIBA, J., *José Bonaparte, Rey de España (1808-1813). Estructura del Estado bonapartista*, loc. cit., p. 462.

<sup>66</sup>.- Vid. MERCADER RIBA, J., *José Bonaparte, Rey de España (1808-1813). Estructura del Estado bonapartista*, loc. cit., p. 457.

<sup>67</sup>.- Vid. MERCADER RIBA, J., *José Bonaparte, Rey de España (1808-1813). Estructura del Estado bonapartista*, loc. cit., p. 393.

El 23 de julio de 1811, José Bonaparte dispondría que se destinen al Estado los diezmos, así como los tributos del excusado, novenos, tercias, reales, novales, exentos y demás<sup>68</sup>. El monarca no ratificó el decreto de supresión del Santo Oficio, dado por los liberales, tampoco lo restauró. Del mismo modo, tampoco los bienes fueron devueltos a la institución<sup>69</sup>.

El trienio liberal de 1820 a 1823<sup>70</sup> significó el restablecimiento de la legislación desamortizadora de las Cortes de Cádiz, y, en algunos aspectos, dio entrada a disposiciones nuevas, aunque siempre sobre problemas ya planteados en Cádiz. De hecho, puede considerarse el trienio constitucional, como una “prolongación de la obra desamortizadora del período liberal”<sup>71</sup>. La política de reforma eclesiástica, esbozada ya en Cádiz, plasmó, durante el trienio constitucional, en varias disposiciones legales de la misma importancia, y muy relacionadas con la obra desamortizadora, que se adentra ya, decididamente, en el patrimonio del clero regular, objeto principal de la reforma<sup>72</sup>.

El primero de los textos legales sobre esta cuestión es el decreto de 1 de octubre de 1820. Su artículo 1 suprime “todos los monasterios de las Órdenes monacales; los canónigos regulares de san Benito, de la congregación claustral tarraconense y cesaraugustana; los de san Agustín y los premonstratenses; los conventos y colegios de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara; los de San Juan de Jerusalén, los de la de San Juan de Dios y los betlemitas, y todos los demás de hospitales de cualquier clase”. Los demás regulares quedan, según el citado decreto, sometidos a la autoridad de los obispos ordinarios –artículo 9-, pero no se permite, en el futuro, fundar ningún convento, ni profesar a ningún novicio –artículo 12-; de modo coherente con tal precepto, se declara también –artículo 13-, que “el gobierno protegerá por todos los medios que estén a su alcance la secularización de los regulares que la soliciten”<sup>73</sup>. Consecuencia lógica de estas medidas, adoptadas por el decreto de 1 de octubre de 1820, y señal inequívoca de cuál era uno de los objetivos perseguidos con la reforma del clero regular, es el artículo 23 de dicho decreto, cuyo texto dispone que “todos los bienes muebles e inmuebles de los monasterios, conventos y colegios que se suprimen ahora o que se supriman en lo sucesivo... quedan aplicados al crédito público”, considerándolos, pues, como bienes nacionales, sujetos a inmediata desamortización. Con este decreto de 1 de octubre de 1820, la desamortización eclesiástica, ya no se reduce a medidas tímidas y parciales, en todo caso, negociadas, sino que se acomete decididamente. De ahí que surgieran resistencias de todo tipo<sup>74</sup>.

Unos días después se promulga la ley de 11 de octubre de 1820, conocida, generalmente, con el nombre de “ley de desvinculadas”. Su artículo 1 suprime, en efecto “todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquier otra especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes...”. Aunque esta norma afectaba, primordialmente, al régimen

<sup>68</sup>.- Vid. MERCADER RIBA, J., *José Bonaparte, Rey de España (1808-1813). Estructura del Estado bonapartista*, loc. cit., p. 457.

<sup>69</sup>.- Vid. MARTÍNEZ MILLÁN, J., *La desamortización de los bienes de la Inquisición*, II, 2, Carthag. (1986), pp. 191, 197 y 200.

<sup>70</sup>.- Sobre el Trienio constitucional –1820 a 1823- hemos seleccionado la siguiente bibliografía: vid. GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO, M., *La desamortización eclesiástica en el Trienio Liberal (1820-1823). Un primer acercamiento a los datos generales*, 36-37, I-II, E.H.S. (1986), pp. 141-148. Vid. CUENCA TORIBIO, J.M., *La Iglesia española en el trienio constitucional (1820-1823). Notas para su estudio*, XVIII, H.S. (1965), pp. 333-362. Sobre este período vid. también GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO, M., *Desamortización, Deuda Pública y Crecimiento Económico. Andalucía, 1820/1823* (Granada, 1985). Vid. MORAL RUIZ, J., *Del, La presión fiscal en el Trienio Constitucional (1820-1823)*, 27, H.P.E. (1974), pp. 47-73.

<sup>71</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 65.

<sup>72</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 69.

<sup>73</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 70.

<sup>74</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., pp. 70-71.

sucesorio ordinario, es evidente que también concierne a los intereses económicos de instituciones, como capellanías o fundaciones de carácter eclesiástico. Se respeta a sus anteriores titulares la propiedad sobre todos estos bienes desvinculados –artículo 2 y ss.–, pero el artículo 15 prohíbe adquirir bienes inmuebles a todo tipo de “manos muertas”, lo cual implica, sin duda, un duro golpe a los intereses económicos de muchas entidades eclesiásticas<sup>75</sup>.

El 25 de octubre de 1820 se sancionaba, oficialmente, la llamada “ley de Monacales”, por la cual las Cortes trataban, de dar solución a uno de los puntos más discutidos desde los años de las Cortes de Cádiz: se trataba de “reformular” a las Órdenes religiosas, sea suprimiendo unas, o reformando otras<sup>76</sup>.

El decreto de 29 de junio de 1821 reduce el diezmo eclesiástico a la mitad de las cuotas, que, entonces, se pagaban, por estimar que, con ello, había bastante, para que la Iglesia atendiese a sus gastos de culto y clero. Como esta reducción beneficia directamente, a los obligados al pago del diezmo, no siendo, en realidad, esta la finalidad perseguida, se crea una contribución a favor de la Hacienda real, por el importe aproximado de la mitad de los diezmos. Con ello se pretende que, en la medida en que el contribuyente no sufre alteración notoria, la Hacienda incremente sus ingresos en la misma proporción, en que los reduce la Iglesia. Ello refleja la relación existente, una vez más, entre necesidades fiscales y medidas de índole económico-eclesiástica. En años sucesivos persistió el enfoque conjunto de unas y otras, y, por ello, una misma ley será la que suprima el diezmo eclesiástico, y la que disponga la enajenación de los bienes del clero secular, pero ya en la etapa de Mendizábal<sup>77</sup>.

Otro real decreto de 22 de abril, de 1834, mandaba suspender la admisión de novicios en todos los conventos del Reino<sup>78</sup>.

Antes de la subida al poder de Mendizábal se promulgaron dos reales decretos –de 15 de julio de 1834 y 4 de julio de 1835–, en los que, respectivamente, se suprimía la Inquisición –antes restablecida– y la Compañía de Jesús –que había vuelto a ser admitida en 29 de mayo de 1815–, adjudicándose todos los bienes de ambas instituciones a la extinción de la deuda pública<sup>79</sup>.

El decreto de 4 de julio de 1835, que suprimía la Compañía de Jesús, es la primera de las normas legales para el pago de las pensiones<sup>80</sup>.

El real decreto de 25 de julio, de 1835, manda suprimir los conventos, que no tengan doce individuos profesos<sup>81</sup>.

Un real decreto de 11 de octubre de 1835 restablece la vigencia del decreto de 1 de octubre de 1820 –con lo cual se ampliaba el número de instituciones religiosas suprimidas–, y lo concordaba con el real decreto de 25 de julio de 1835, adjudicando los patrimonios de los conventos suprimidos a la amortización de la deuda. El real decreto de 8 de marzo de 1836 y su reglamento del día 24 del mismo mes y año, regula más por extenso la misma materia, pero dándole mayor amplitud de contenido, ya que suprime –salvo muy escasas excepciones– todos los conventos y monasterios de religiosos varones y destina a la extinción de la deuda pública los patrimonios de las casas de comunidades religiosas de uno y otro sexo, suprimidas o no –

<sup>75</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 71.

<sup>76</sup>.- Vid. HIGUERUELA DEL PINO, L., *Incidencia de la Ley de Monacales de 1820 en la Diócesis de Toledo*, 188, 1, C.D. (1975), p. 46.

<sup>77</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., pp. 71-72.

<sup>78</sup>.- Vid. la Exposición dirigida á S.M. el 25 de febrero de 1836 por la Real Junta Eclesiástica encargada de preparar el arreglo del clero; y trabajos hechos por la misma Junta con este objeto (Madrid 1836), p. 35.

<sup>79</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 75.

<sup>80</sup>.- Vid. REVUELTA GONZÁLEZ, M., *Los pagos de pensiones a los exclaustros y a las monjas (1833-1850)*, 53, 204, E.E. (1978), p. 48.

<sup>81</sup>.- Vid. la Exposición dirigida á S.M. el 25 de febrero de 1836 por la Real Junta Eclesiástica encargada de preparar el arreglo del clero..., loc. cit. pp. 36-38.

artículo 20-, señalando una pensión diaria a los religiosos de las instituciones suprimidas – artículo 17-, que había de hacerse efectiva a costa de los patrimonios, convertidos en bienes nacionales –artículos 36-<sup>82</sup>.

La exclaustación quedaba hecha en 1836. Con ella lelga la miseria de los exclaustados y monjas, que no acaban de percibir la modesta pensión prometida<sup>83</sup>.

La exposición, dirigida a Su Majestad el 25 de febrero, de 1836, por la Real Junta eclesiástica, pretendía proporcionar a los fieles la debida asistencia pastoral, no olvidando el decoro del culto divino; y con la dotación suficiente de los ministros, pero sin perder de vista los apuros del erario y la enorme deuda pública<sup>84</sup>.

### I.3.1. LA ETAPA DE MENDIZÁBAL.

Las características de la legislación desamortizadora de Mendizábal pueden sintetizarse así: conexión entre desamortización, reforma eclesiástica y amortización de la deuda pública interior; y pretendida defensa del trono de Isabel II a través del mismo proceso desamortizador, procurando crear partidarios liberales entre los interesados en la consolidación de las ventas de bienes desamortizados. La importancia de la desamortización eclesiástica fue, en este periodo, probablemente mayor que en cualquier otro. Por eso, y por ir dicha política unida a la reforma del clero regular, Mendizábal ha pasado a la Historia como el símbolo del político anticlerical y del gobernante liberal y desamortizador; si bien Mendizábal no aportó del original más que la ampliación del ámbito de la desamortización eclesiástica, que ahora abarcará, por vez primera, a los bienes del clero secular, en la medida en que venía proponiéndose, y en parte, aplicándose, desde los tiempos de Godoy<sup>85</sup>.

El bienio 1836-1837 presenció la promulgación de las leyes de Mendizábal sobre la desamortización eclesiástica, indisolublemente ligada con preceptos reformadores del clero regular, y de las contribuciones, hasta entonces percibidas por la Iglesia. La desamortización de bienes municipales queda, entonces, casi por completo paralizada, y toda la atención, todos los capitales y todas las polémicas se concentran sobre la desamortización de los bienes del clero regular y del clero secular<sup>86</sup>.

La ley de Mendizábal –19 de febrero de 1836- y la ley de supresión del diezmo –29 de julio de 1837- crearon un grave problema, tanto al nuevo Estado liberal, como a miles y miles de sacerdotes seculares españoles. En torno a 30.000 sacerdotes, rotas sus tradicionales fuentes de financiación, y destruido su patrimonio, se vieron obligados a vivir en la indigencia y en la pobreza<sup>87</sup>.

El real decreto de 19 de febrero de 1836, primera ley desamortizadora de Mendizábal, se refiere a los bienes del clero regular. Se trata de un texto no elaborado por las Cortes – formalmente, por tanto, no es una ley-, sino personalmente por el mismo Mendizábal, quien, como cosa propia, lo defiende en la exposición de motivos<sup>88</sup>. En su artículo 1 se declaran en

<sup>82</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 76.

<sup>83</sup>.- Vid. REVUELTA GONZÁLES, M., *Vicisitudes y colocaciones de un grupo social marginado: los exclaustados del siglo XIX*, XXXII, H.S. (1980, pp. 323-324.

<sup>84</sup>.- Vid. la Exposición dirigida á S.M. el 25 de febrero de 1836 por la Real Junta Eclesiástica encargada de preparar el arreglo del clero..., loc. cit. pp. 7-8.

<sup>85</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 73.

<sup>86</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 73.

<sup>87</sup>.- Vid. VERDOY, A., *El debate parlamentario sobre culto y clero. De las Constituyentes de 1837 a la firma del Convenio con la Santa Sede*, 93, R.E.P.N.E. (1996), p. 487.

<sup>88</sup>.- La exposición de motivos de este decreto está llena de declaraciones interesantes; algunas de ellas, en realidad, incumplidas. Con la misma se pretendía –en este aspecto cumplida- “sacar los mayores productos para

venta todos los bienes de las “Comunidades y Corporaciones religiosas extinguidas”, y los demás, que ya estuvieran calificados como “nacionales” o lo fueran en adelante. La venta se había de realizar bajo la forma de pública subasta –artículo 3-, partiendo las pujas de un mínimo e inicial valor de tasación –artículos 6 a 9-<sup>89</sup>. El pago del precio, según este real decreto de 19 de febrero de 1836 debe hacerse en títulos de la deuda consolidada o en dinero efectivo –artículo 10-, debiendo optar el adjudicatario de la finca por uno u otro sistema en el acto de adjudicación –artículo 12-, bien entendido que la elección le vinculaba, a realizar los plazos debidos del precio en la forma de pago preferida<sup>90</sup>.

La dotación del culto y clero era, desde la Constitución de 1812, un tema recurrente; con la ley de supresión del diezmo, de 29 de julio de 1837 –segunda ley desamortizadora de Mendizábal-, se hizo, necesariamente, urgente. Esta situación y el miedo en el partido progresista a una cierta involución, en la que los bienes del clero, y de la iglesia, volviesen, de nuevo, a manos de la Iglesia, enervó los ánimos, y puso en danza a todas las partes, en la búsqueda de una solución a tan urgente y grave problema. Esta situación obligó a los gobiernos de las legislaturas de 1838 y 1839 a prorrogar el diezmo<sup>91</sup>.

En este real decreto de 29 de julio de 1837, ya no aparece la desamortización, como una operación conectada, primordialmente, con la extinción de la deuda, sino más bien con la reforma tributaria y con el problema de la dotación para el mantenimiento de los gastos del culto y clero. Sus artículo 1 suprimía los diezmos, principal componente de las rentas eclesiásticas. Al mismo tiempo, se declaraban bienes nacionales, sujetos a enajenación, casi todos los del clero secular –artículos 2 y 3-. Se dejaba, pues, sin ingresos al clero secular, y, para resolver esta situación, se imputaba el producto o renta total de los bienes del mismo, al pago de la dotación del culto y clero –artículo 6- creándose como fondo complementario una llamada “contribución del culto”, en cuantía necesaria para cubrir los gastos del culto y clero –artículo 7-. La enajenación de estos bienes no debía iniciarse inmediatamente, ya que el artículo 11 de dicha ley disponía que los bienes del clero se vendiesen por sextas partes, en los seis años siguientes a 1840<sup>92</sup>. Aunque, precisamente, en el verano de 1840, las Cortes derogaron los artículos 2 y 11 de dicha ley. Por todo ello, la desamortización de bienes del clero secular, aunque regulada legalmente por Mendizábal en los términos indicados, no fue una realidad hasta la ley de Espartero, de 2 de septiembre de 1841<sup>93</sup>.

Con el real decreto de 29 de julio de 1837, se da nueva redacción al citado real decreto de 8 de marzo de 1836, sin más modificación importante, que la ampliación de la supresión de conventos y monasterios a los de religiosas. La extinción de instituciones eclesiásticas del clero regular fue, pues, muy general. De hecho, en ambos reales decretos se desamortizan los patrimonios, tanto de las instituciones suprimidas, como de las subsistentes –artículo 20 de cada

---

amortizar lo más que se pueda el capital de la deuda pública”. De este modo, el artículo 21 recogía que ambas formas de pago del precio de remate tenían este mismo destino, pues el dinero, percibido por Hacienda, de los compradores, que eligieran el pago en metálico, debía destinarse, íntegramente, a adquirir –y, por consiguiente, a anular- títulos de deuda. La otra finalidad, declarada por Mendizábal, era la de “crear una copiosa familia de propietarios, cuyo goce y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones”. Vagamente indica el deseo –en realidad, poco creíble- de que esa “familia de propietarios” esté integrada no sólo por “capitalistas y hacendados”, sino también por simples “ciudadanos honrosos y laboriosos”; la realidad es que, finalmente, sería la burguesía adinerada. Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 79.

<sup>89</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 77.

<sup>90</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 78.

<sup>91</sup>.- Vid. VERDOY, A., *El debate parlamentario sobre culto y clero. De las Constituyentes de 1837 a la firma del Convenio con la Santa Sede*, loc. cit. pp. 488-489.

<sup>92</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 85.

<sup>93</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 86.

uno de los reales decretos citados-. La política desamortizadora de tierras, para liquidar la deuda interior, iba, así, más lejos que el reformismo eclesiástico, puesto que la reforma o supresión de las comunidades religiosas, ya no era medida previa y necesaria, para la desamortización de sus fincas rústicas. Si lo era, sin embargo, en el real decreto de 19 de febrero de 1836, primera ley desamortizadora de Mendizábal, dedicada a los bienes del clero regular<sup>94</sup>.

El 15 de junio de 1838, el gobierno presentó un proyecto de ley relativo a que se llevara a efecto, por un solo año y de una manera provisional, la dotación del culto y clero. En dicho proyecto, el gobierno, al tiempo que reconocía su incapacidad, para solucionar el problema, sometía a las Cortes la aprobación de la prórroga del diezmo. La preocupación del Gobierno era la de proporcionar al clero una “asignación de cuotas alimenticias”. Con esta medida se pensaba, después de cuatro años de guerra, que el clero tuviese asignaciones “suficientes”, para su sustentación decorosa durante ese año<sup>95</sup>. Posteriormente, otro proyecto de ley es el de 11 de enero de 1839, que incluía algunas novedades, respecto al anterior<sup>96</sup>. Finalmente, para aliviar la situación el clero y para solucionar, eventualmente, el problema del culto y clero, siendo Ministro de Hacienda Domingo Jiménez, se estableció, por medio de un real decreto, dado el 1 de junio de 1839, el medio diezmo<sup>97</sup>.

### **I.3.2. LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIASTICA DURANTE LA REGENCIA DE ESPARTERO.**

Durante las décadas centrales, la desamortización de bienes del clero fue una cuestión muy disputada entre los partidos moderado y progresista, y estuvo centrada, principalmente, en torno a los bienes del clero secular, cuya enajenación fue suspendida por el artículo 1 de la ley de 16 de julio de 1840. Con la ley de 2 de septiembre de 1841 -Gaceta de Madrid, de 5 de septiembre de 1841-, durante la regencia de Espartero, imponía de nuevo la desamortización de los bienes del clero secular, norma, que no es una simple restauración de la vigencia de la segunda ley de Mendizábal -la de 29 de julio de 1837-, si bien contiene lo esencial de aquélla en ordena la desamortización<sup>98</sup>.

En la ley de Espartero, de 2 de septiembre de 1841, se consideran, como bienes nacionales, todas las propiedades del clero secular, salvo las pocas exceptuadas en el artículo 6, siendo declarados como sujetos a venta -artículos 1, 2 y 3-; éstas debían someterse a las normas vigentes respecto a la enajenación de los bienes nacionales en general -artículo 10-, aunque con diferencias en el porcentaje en metálico y en títulos de deuda<sup>99</sup>. La ley de Espartero, de 2 de septiembre de 1841, estuvo vigente, escasamente tres años, durante los cuales se vendieron importantes fincas del clero secular. Con la caída del partido progresista, se deroga, o, al menos, se suspende dicha ley<sup>100</sup>.

Esta ley de 2 de septiembre de 1841 es complementaria de otra de 14 de agosto de 1841, por la cual Espartero resolvió, no tanto con hechos, como con declaraciones normativas, el problema de la dotación de culto y clero. Se disponía que los gastos de conservación y

<sup>94</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., pp. 76-77.

<sup>95</sup>.- Vid. VERDOY, A., *El debate parlamentario sobre culto y clero. De las Constituyentes de 1837 a la firma del Convenio con la Santa Sede*, loc. cit. p. 489.

<sup>96</sup>.- Vid. VERDOY, A., *El debate parlamentario sobre culto y clero. De las Constituyentes de 1837 a la firma del Convenio con la Santa Sede*, loc. cit. p. 490.

<sup>97</sup>.- Vid. VERDOY, A., *El debate parlamentario sobre culto y clero. De las Constituyentes de 1837 a la firma del Convenio con la Santa Sede*, loc. cit. p. 490.

<sup>98</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 97.

<sup>99</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., pp. 97-98.

<sup>100</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 99.

reparación de iglesias parroquiales, y los del culto parroquial, se sufragaran con los llamados “derechos de estola o pie de altar”, y que la cantidad no cubierta con estos ingresos se repartiese entre los vecinos de la parroquia, para ser satisfecha, obligatoriamente, por cada uno de ellos - artículo 1-. Además, se creaba una contribución de culto y clero por importe total de algo más de 100.000.000 de reales -artículo 7-; en realidad, conserva, en lo esencial, el planteamiento de la segunda ley de Mendizábal<sup>101</sup>.

La ley de presupuestos para 1842 incluye, por primera vez, de una manera precisa, a los regulares de ambos sexos, como pertenecientes a las clases pasivas que deben ser pagada por el Ministerio de Hacienda<sup>102</sup>.

El 1 de junio de 1843, mediante un decreto, se suprime la “contribución general del culto y clero”, aplicando, en su lugar, el producto en metálico de las rentas de las fincas del clero secular; el 7 de agosto de 1843 se vuelve a restablecer “la contribución”<sup>103</sup>.

### **I.3.3. LA LEY MADOZ O “LEY GENERAL DE DESAMORTIZACIÓN”, DE 1 DE MAYO DE 1855<sup>104</sup>.**

La ley de 1 de mayo de 1855, calificada por él mismo como “mi desamortización”, se suspendió el 14 de octubre del año siguiente; suspensión, que no alcanzó los dos años, porque se reanudó el 2 de octubre de 1858<sup>105</sup>. A excepción de esta breve interrupción, se prolongaría, prácticamente, hasta comienzos del siglo actual. Por ello, es la más importante, desde el punto de vista de los años de vigencia, y por el volumen, que alcanzaron los remates<sup>106</sup>.

La alta burguesía española fue la principal causahabiente de las desamortizaciones, siendo realizadas, principalmente, por burgueses: Pascual De Madoz, y Juan Álvarez y Mendizábal. Ello favoreció que la necesaria, pero erróneamente realizada en España, no resolviera problema alguno, de los ya existentes<sup>107</sup>. La desamortización no resolvió problema alguno de los existentes en siglos anteriores. Si bien terminó, en cierto sentido, con las aristocracias, formó, en cambio, una oligarquía plutocrática, empobreciendo, aún más, a los

<sup>101</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., pp. 98-99.

<sup>102</sup>.- Vid. REVUELTA GONZÁLEZ, M., *Los pagos de pensiones a los exclaustrados y a las monjas (1833-1850)*, loc. cit., p. 71.

<sup>103</sup>.- Vid. VERDOY, A., *El debate parlamentario sobre culto y clero. De las Constituyentes de 1837 a la firma del Convenio con la Santa Sede*, loc. cit. p. 498.

<sup>104</sup>.- La desamortización no podía reunir, en sus primeros momentos, una legislación completa y ordenada, que sólo había de dictarse después de observar, en la práctica, las dificultades y circunstancias, que el legislador no podía, en manera alguna, calcular ni conocer. Vid. APARICI Y SORIANO, R., *Manual novísimo de la desamortización civil y eclesiástica establecida por las Leyes de 1.º de mayo de 1855, 11 de julio de 1856 y disposiciones posteriores hasta el día, ó sea prontuario ordenado de cuantas disposiciones legales existen vigentes sobre la indicada materia; organización y atribuciones de los centros directivos; facultades y responsabilidad de los funcionarios que intervienen en este ramo de la Administración Pública* (Madrid 1868), p. 8.

El dictamen de la comisión sobre el proyecto de ley para la desamortización general de los bienes de manos muertas, puede consultarse en, 19.20, E.F.E. (1967), pp. 80-94.

<sup>105</sup>.- Vid. SIMÓN SEGURA, F., La desamortización de 1855, 19-20, E.F.E. (1967), pp. 123-124. Antes de que se procediera a la suspensión de las medidas desamortizadoras, el 14 de octubre de 1856, se había decretado la suspensión de la venta de los bienes del clero secular, y se habían dejado sin efecto las disposiciones contrarias a lo convenido en el concordato, celebrado con la Santa Sede, en 1851. Vid. SIMÓN SEGURA, F., *La desamortización española...*, loc. cit., pp. 212-213.

<sup>106</sup>.- Vid. SIMÓN SEGURA, F., *La desamortización española...*, loc. cit., p. 165.

<sup>107</sup>.- Vid. PRIETO ESCUDERO, G., La burguesía beneficiaria de las desamortizaciones, 179, R.E.P. (1971), pp. 65, 73 y 75-76. Dichos beneficiarios han sido estudiados también a nivel provincial. Vid. RUEDA HERNANZ, G., *Los beneficiarios del proceso desamortizador en una zona de Castilla La Vieja (1821-1891)*, 137, M. y C. (1976), pp. 45-101.

menos adinerados. Por ello, la desamortización únicamente enriqueció a la alta burguesía, capaz de adquirir títulos de deuda pública. En nada se benefició a las restantes clases en este siglo XIX<sup>108</sup>.

Mendizábal no pudo hacer la desamortización eclesiástica de otro modo: un gobierno al borde de la bancarrota, y obligado a hacer frente a una costosa guerra civil, hicieron, como única preocupación, obtener dinero, para ganar la guerra, y para ello necesitaba, restablecer el maltrecho crédito español, dañado por décadas de insolvencia. La crisis se superó y los objetivos, que se habían propuesto, pudieron, considerarse relativamente cumplidos. Ello no significa que no tuviera conciencia, de que hubiera sido preferible, enajenar las tierras eclesiásticas, en forma que permitiese el acceso a la propiedad a los pequeños campesinos, y emplear el dinero obtenido en inversiones más provechosas, que la amortización de la deuda<sup>109</sup>.

El artículo 1 de la ley de Madoz declara en venta -entre otros- los bienes del clero. La resistencia contra la ley Madoz, por lo que ésta tenía de texto desamortizador de bienes de la Iglesia, fue muy tenaz. En efecto, después de obtenida la aprobación de las Cortes, hubo que vencer un importante obstáculo, el que opuso la reina. Isabel II no quería firmar la ley Madoz, por el perjuicio, que ocasionaba a la Iglesia. Al fin se sometió a las presiones, que sobre ella, ejercieron Espartero y O'Donnell, pero, al parecer, con la íntima decisión de impedir la desamortización de bienes del clero, tan pronto como pudiese. Además de infringir el concordato de 1851<sup>110</sup>. La resistencia contra la desamortización eclesiástica prosigió en la Corte; después de la dimisión y retirada política de Espartero, el gobierno, presidido ya sólo por O'Donnell, se vio obligado a suspender las ventas de bienes del clero por el real decreto, de 23 de septiembre de 1856. Pocos días después cae O'Donnell, y Narváez, su sucesor, suspende la ejecución de toda la ley Madoz, por real decreto de 14 de octubre de 1856. A los dos años -el 30 de junio de 1858- O'Donnell volvió al poder, pero separado ya del tronco progresista y al frente de la Unión Liberal. De modo, que por real decreto de 2 de octubre de 1858, O'Donnell restablece la ley Madoz, pero excluyendo del ámbito de la misma los bienes de la Iglesia<sup>111</sup>.

La primera nota distintiva, por ello, de la ley Madoz, es su carácter general. El artículo 1 declara en estado de venta los bienes, pertenecientes al Estado, al clero, a las órdenes militares de Santiago de Calatrava, Alcántara, Montesa y San Juan de Jerusalén, a cofradías, obras públicas y santuarios, al ex infante don Carlos, a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia y a la instrucción pública; y para subrayar más la generalidad, se añadía la siguiente cláusula: "... y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores". De este modo, todos los bienes, pertenecientes por leyes pasadas, o los declarados en venta "ex novo" por la ley Madoz, quedaban sometidos, al régimen establecido en ésta. Este hecho es nuevo en la legislación desamortizadora, pues nunca se había realizado un planteamiento normativo general<sup>112</sup>. Con este artículo 1, por ello, es coherente el artículo 29 de la misma, que declara derogadas todas las normas "sobre amortización o desamortización que en cualquier forma contradigan el tenor de la presente ley". Por ello, en el futuro, la ley de 1 de mayo de 1855 constituyó, si no el único texto legal desamortizador, sí el fundamental. Las posteriores normas desamortizadoras fueron complementarias respecto a ellas -como la instrucción de 31 de mayo de 1855- la suspendieron total o parcialmente -decretos de 23 de septiembre y 14 de octubre de 1856-, o la restablecieron -decreto de 2 de octubre de 1858-

<sup>108</sup>.- Vid. PRIETO ESCUDERO, G., *La burguesía beneficiaria de las desamortizaciones*, loc. cit., p. 74.

<sup>109</sup>.- Vid. FONTANA I LÁZARO, J., *Mendizábal y la desamortización civil*, 27, H.P.E. (1974), p. 75.

<sup>110</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., pp. 106-

107.

<sup>111</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., pp. 107-

108.

<sup>112</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 151.

, o modificaron parcialmente su articulado –ley de 14 de julio de 1855 y ley de 11 de julio de 1856-, o interpretaron autorizadamente su articulado en algún aspecto parcial –ley de 7 de abril de 1861-<sup>113</sup>. El artículo 6 de la ley Madoz establece que el pago debe hacerse íntegramente y, en todo caso, en metálico y en quince plazos. Novedad en la medida en que no se admiten títulos de deuda, computados por su valor nominal, como forma de pago del precio de remate de las fincas subastadas; evitando, de este modo, aumentar el beneficio económico de los compradores. Sin embargo, el Estado se comprometía, a invertir gran parte de los fondos, obtenidos con la venta de los bienes desamortizados, en la compra de títulos; pero, naturalmente, los compraría según su valor de cotización. Con ello, el beneficio de la operación desamortizadora para la Hacienda pública, podía preverse mayor que en anteriores ocasiones. Sin embargo, muy pronto se dio marcha atrás en este precepto de la ley Madoz. Efectivamente, el 14 de julio de 1855, Isabel II sancionó una ley, autorizando al gobierno la emisión de 230.000.000 de reales en títulos de la deuda interior al 5 por ciento, especificándose en su artículo 1, que tales billetes del tesoro eran “aplicables única y exclusivamente al pago de bienes nacionales y redención de censos y foros”<sup>114</sup>.

Por lo que respecta a los bienes del clero se distingue entre la inversión de los fondos, obtenidos con su venta y la compensación, entregada al clero. En este sentido, se declara que se emitirían, a favor del clero, inscripciones intransferibles de la deuda, consolidada al tres por ciento, por un capital equivalente al producto de las ventas –artículo 22 de la ley Madoz-, dedicándose los intereses del mismo, a cubrir el presupuesto de culto y clero –artículo 23 de la ley Madoz-. La idea de estos preceptos consiste, en compensar a las entidades, cuyos bienes se enajenan con una cantidad, equivalente al importe de la venta de los mismos –o al ochenta por ciento de éste en el caso de los municipios-. Por supuesto que tal equivalencia es sólo aparente, por varias razones: la diferencia entre el valor real y el valor en venta, dado que éste disminuiría notablemente, como consecuencia del aumento de la oferta, y de los abusos típicos del sistema de venta en subasta pública; también por la depreciación de la moneda, en la medida en que una renta del tres por ciento de los títulos de la deuda es insignificante a más de un siglo de la desamortización<sup>115</sup>.

La ley Madoz vino a ser, completada con la instrucción de 31 de mayo de 1855, que creaba un complicado y costoso aparato burocrático, dedicado a la ejecución de la ley de 1 de mayo de 1855. Ésta fue modificada por otra de 11 de julio de 1856, seguida de su correspondiente instrucción<sup>116</sup>.

### **1.3.4. LA LEY HIPOTECARIA, DE 8 DE FEBRERO, DE 1861.**

El 8 de febrero de 1861 se promulgó en España la ley hipotecaria, entrando en vigor el 1 de enero de 1863. Con ella se pretendía conseguir la protección –a través del registro de la propiedad, creado por el propio texto legal- de los compradores de bienes eclesiásticos desamortizados, cuyas adquisiciones se habían visto en peligro a causa de la actitud, adoptada por la Iglesia, frente a las disposiciones desamortizadoras de Mendizábal, de Espartero, y, sobre

<sup>113</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., pp. 151-152.

<sup>114</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., pp. 152-153.

<sup>115</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., pp. 154-155.

<sup>116</sup>.- Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, loc. cit., p. 155.

todo, de Madoz<sup>117</sup>. No obstante, muy poco después, los registradores manifestaron a la Dirección General del Registro de la Propiedad las dudas y dificultades, que suscitaba la aplicación de determinados preceptos, relacionados con el acceso a la recién creada institución registral de los bienes, que, durante mucho tiempo, habían estado amortizados en poder de la Iglesia, y que, en el siglo XIX, pasaron a nuevas manos<sup>118</sup>. Los compradores de bienes eclesiásticos desamortizados habían visto en peligro sus adquisiciones, debido a la actitud, adoptada por la Iglesia frente a las disposiciones desamortizadoras. Por ello se utilizó para proteger a esos compradores el artículo 34 de la ley hipotecaria de 21 de diciembre, de 1861, que creó el registro de la propiedad, en virtud de cual las adquisiciones, verificadas por dichos compradores, que se inscribieran en el registro no podrían ser invalidadas, aunque después se anulara o resolviera el derecho del otorgante -en este caso, del Estado- por un título anterior no inscrito o por causas, que no resultaran del propio registro, entre las cuales podría figurar muy bien la anulación de la legislación desamortizadora<sup>119</sup>. Tan importante como ese precepto de la ley, fue el artículo 307 del reglamento para la ejecución de la misma, aprobado el 29 de octubre del mismo año, por el cual se atribuían a los asientos de las extinguidas Contadurías de Hipotecas los mismos efectos, que tenían las inscripciones, verificadas en el registro de la propiedad. Y es que por dicho artículo quedaron aseguradas la mayoría de las adquisiciones de bienes eclesiásticos desamortizados, efectuadas antes de la promulgación de la ley hipotecaria<sup>120</sup>.

### **I.3.5. EL CONVENIO CONCORDATARIO DE 1904, ENTRE LA SANTA SEDE Y EL ESTADO ESPAÑOL.**

El Gobierno Silvela, en marzo de 1903, en su base II, establecía que ninguna orden gozaría “de subvención ni auxilio alguno del Estado”. Por el contrario, estarían sujetas “a los impuestos del país por sus bienes o por las confesiones o industrias que ejerzan en condiciones de igualdad respecto de los demás españoles”, sin que pudieran ser objeto “de ninguna tributación o exacción especial” -base III-. En la base V se establece que las comunidades con menos de doce miembros serían suprimidas. Opiniones, que la Santa Sede no compartía<sup>121</sup>. Finalmente, se acabaría aprobando en el Senado, pero en el Congreso no se discutió más el tema religioso<sup>122</sup>.

<sup>117</sup>.- Vid. FIESTAS LOZA, A., *La protección registral de los compradores de bienes eclesiásticos desamortizados (1863-1869)*, LIII, A.H.D.E. (1983), p. 334.

<sup>118</sup>.- Vid. FIESTAS LOZA, A., *La protección registral de los compradores de bienes eclesiásticos desamortizados (1863-1869)*, LIII, A.H.D.E. (1983), p. 335.

<sup>119</sup>.- Vid. FIESTAS LOZA, A., *La protección de la Ley de 8 de febrero de 1861, de los compradores de bienes eclesiásticos desamortizados*, en AA.VV., *Desamortización y Hacienda Pública*, 2 vols. (Madrid 1986), p. 653.

<sup>120</sup>.- Vid. FIESTAS LOZA, A., *La protección de la Ley de 8 de febrero de 1861, de los compradores de bienes eclesiásticos desamortizados*, en AA.VV., *Desamortización y Hacienda Pública*, 2 vols. (Madrid 1986), p. 654.

<sup>121</sup>.- Vid. ANDRÉS-GALLEGO, J., *El Convenio concordatario de 1904 entre la Santa Sede y el Estado Español*, XXVI, H.S. (1973), pp. 187-189.

<sup>122</sup>.- Vid. ANDRÉS-GALLEGO, J., *El Convenio concordatario de 1904 entre la Santa Sede y el Estado Español*, loc. cit., pp. 204-205.

#### **I.4. LA ETAPA CONCORDATARIA EN ESPAÑA<sup>123</sup>. ANTECEDENTES DE LA DOTACIÓN DEL ESTADO A LA IGLESIA CATÓLICA, COMO CONSECUENCIA DE LA DESAMORTIZACIÓN.**

El concordato de Constanza fue estipulado con España el 13 de mayo de 1418<sup>124</sup>. Existe una antítesis entre el primer Concordato español de 1418, en el que se reconocen las reservas pontificias en la provisión de beneficios, y el concordato de 1753, que hace justamente lo contrario, derogarlas<sup>125</sup>.

Los concordatos surgieron ante las intromisiones del Estado en asuntos propios de la Iglesia, en los siglos XVII, y, especialmente, en el siglo XVIII, con el regalismo<sup>126</sup>.

##### **I.4.1. LA POLÉMICA DE LOS SUPUESTOS CONCORDATOS DE 1714 Y 1717.**

La polémica sobre la cuestionable existencia de los concordatos de 1714 y 1717, y sobre si fue uno o dos concordatos, ha sido muy controvertida<sup>127</sup>.

En 1714 no se vino a ningún acuerdo definitivo, aunque en 1717 se firmó un verdadero concordato, que de una y otra parte se reconoció, en algún tiempo, con fuerza obligatoria, y por eso del primero no hay un texto auténtico, pero sí del segundo<sup>128</sup>. Efectivamente, del supuesto tratado de 1714 ni se halló el original ni copia alguna fija y determinada. A pesar de que Mayans y Siscar recoge la redacción en sus “Observaciones”, no existe, realmente, prueba de la autenticidad de la copia. Por el contrario, del concordato de 1717 sí existe texto auténtico<sup>129</sup>.

El concordato de 1717 se firmó en el Escorial, el 17 de junio de 1717, por el nuncio Aldovandi en nombre de Clemente XI y por el ministro alberoni en el de Felipe V, siguiéndose la ratificación pontifica por el breve de 10 de julio del mismo año. Consta de dieciséis artículos con el siguiente esquema: se conceden al rey diversos emolumentos sobre los bienes eclesiásticos -artículo 1 a 3-; se autoriza al Nuncio para la devolución de los espolios y vacantes, que fueron confiscados -artículo 4-; se suprimen las pensiones sobre las parroquias y las coadjutorías -artículos 5 y 6-<sup>130</sup>.

<sup>123</sup>.- Sobre los concordatos, a nivel general, es interesante la siguiente bibliografía: vid. HERA-PÉREZ CUESTA, De La., *La autonomía didáctica y científica del Derecho concordatario*, III, I-II, I.C. (1963), pp. 9.63. Vid. PLÖCHL, W.M., *Reflections on the nature and status of Concordats*, VII, The Jurist (1947), pp. 10-44.

<sup>124</sup>.- Aunque, como BUENO MONREAL especifica, también pueden considerarse, como precedentes, los Concilios españoles de Toledo, en los que, de común acuerdo, los prelados, los nobles y los Reyes legislaron sobre muchas materias de disciplina religiosa en España. También son importantes precedentes, las concesiones de “patronato”, hechas a los Reyes de Aragón sobre las iglesias, fundadas por ellos, en las tierras conquistadas -Gregorio VII-, en 1703, Urbano II, en 1095 y Gregorio X, en 1271-. Como primeros concordatos, los acuerdos entre Clemente VI y Pedro IV de Aragón, en 1351; entre doña Leonor, esposa de Pedro III y el cardenal Beltrán de Commengés, en 1371, y, principalmente, el concordato de Constanza, de 1418, entre Martín V y Juan II de Castilla. Vid. BUENO MONREAL, Mª., *Principios fundamentales de Derecho Público de la Iglesia católica* (Madrid 1945), pp. 246-247. Para todos ellos puede aplicarse la máxima, que afirma: “*Historia concordatorum, historia dolorum*”.

<sup>125</sup>.- Vid. CALVO, J., *Concordato y acuerdos parciales: política y derecho* (Pamplona 1977), pp.51-52.

<sup>126</sup>.- Vid. MONTERO, E., *El régimen concordatario en las relaciones de la Iglesia y el Estado*, 13, Ecclesia (1941), p. 18.

<sup>127</sup>.- Vid. PORTILLO, E., *Estudios críticos de Historia eclesiástica española durante la primera mitad del siglo XVIII. Nuestros Concordatos*, 17, R. y F. (1907), pp. 24 y ss.

<sup>128</sup>.- Vid. PORTILLO, E., *Estudios críticos de Historia eclesiástica española durante la primera mitad del siglo XVIII. Nuestros Concordatos*, loc. cit., p. 25.

<sup>129</sup>.- Vid. PORTILLO, E., *Estudios críticos de Historia eclesiástica española durante la primera mitad del siglo XVIII. Nuestros Concordatos*, loc. cit., pp. 27-29.

<sup>130</sup>.- Vid. SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *El Derecho público de la Iglesia católica* (Granada 1940), p. 151.

#### 1.4.2. EL CONCORDATO DE 1737<sup>131</sup>. EL “DERECHO DE PATRONATO”<sup>132</sup>.

El concordato de 1737 consta de veintiséis artículos. Se regulaba la constitución de los patrimonios de los clérigos y la erección de beneficios –artículos 5 y 6–; se concedía al Rey nuevas tributaciones eclesiásticas –artículos 7 a 9–. El artículo 23 se refería al patronato<sup>133</sup>.

El concordato de 1737 era, según ha matizado ROBLES MUÑOZ, nulo<sup>134</sup>, porque atacaba a las regalías de la Corona<sup>135</sup>. Como el mismo PORTILLO ha manifestado, las acusaciones a este concordato de 1737 –aunque no las comparte– han sido, amén de su nulidad, que España accedió forzada, que no se publicó como debiera, que el Papa no sólo no cumplió lo prometido, sino que, repetidas veces, faltó a sus cláusulas; en fin, que fue un concordato vago, diminuto e ineficaz. Efectivamente, aunque Mayans y Siscar, en sus “Observaciones” acusó al mismo de nulo, sus argumentaciones no tienen validez alguna<sup>136</sup>. Tampoco le faltó, a juicio de PORTILLO, si bien tarde y con dificultades, el requisito de la conveniente publicación<sup>137</sup>; si bien sí comparte la afirmación de que el concordato de 1737 es ineficaz, por no resolver todos los abusos. En realidad, el concordato de 1737 –matiza– más que ineficaz, más que inútil, se le hizo perder su eficacia, quedando ineficaz de hecho<sup>138</sup>. En realidad, el concordato de 1737 sólo

<sup>131</sup>.- El 21 de diciembre se consignaba a Aquaviva la redacción definitiva del concordato de 1737, que firmaban en el Quirinal el cardenal secretario Firrao y el ministro Aquaviva, a 26 de septiembre de 1737, siguiéndose las ratificaciones del Rey y del Papa el 18 de octubre y 12 de noviembre. Vid. SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *El Concordato español de 1753 según los documentos originales de su negociación* (Jerez de la Frontera 1937), p. 28. Este concordato de 1737, aunque fue ratificado por ambas Partes, no satisfizo a los deseos del Gobierno español; prueba de ello es que no salió a la luz con el pase del Consejo, puesto que éste se lo negó. De forma que, en vez de ser publicado por una pragmática sanción, circuló como un simple decreto; lo cual le ha tenido como desautorizado. Máxime cuando si se cotejan las pretensiones de Madrid, con los artículos del concordato de 1737, se hallarán una gran distancia entre las unas y los otros. Vid. *Colección de los concordatos y demás convenios celebrados después del Concilio Tridentino entre los Reyes de España y la Santa Sede, ilustrada con notas y observaciones y precedida de una introducción histórico-canónica sobre la materia ordenada para servir de testo en las aulas de Derecho eclesiástico, especialmente en las de 5.º año de jurisprudencia: por un catedrático que ha sido de esta asignatura* (Madrid 1848), pp. 36-37.

<sup>132</sup>.- Sobre el patronato es interesante la siguiente colaboración: vid. BLANCO NÁJERA, F., *Actual estado jurídico del derecho de Patronato de España*, LXXXV, 168, R.G.L.J. (1936), pp. 693-717. Vid. GARCÍA BARRIUSO, P., La obra pía de Tierra Santa y la sombra de un Patronato, 37, 106-107. R.E.D.C. (1981), pp. 189-213. Vid. ALONSO MORÁN, S., *El Derecho de patronato*, XV, 45, R.E.D.C. (1960), pp. 541-578. Vid. PORTILLO, E., *Diferencias entre la Iglesia y el Estado con motivo del Real Patronato en el siglo XVIII*, XXXVII, R. y F. (1913), pp. 297-309.

El actual derecho de presentación en España no deriva jurídicamente, aunque históricamente tenga en él un precedente, del antiguo derecho de presentación o patronato, pues este último consistía en presentar un solo candidato para cubrir las vacantes, que se produjeran en todas las sedes episcopales españolas –como ocurría en el concordato de 1753 y de 1851–. En 1931 se pone fin a esta situación. En 1941 tiene origen el nuevo derecho de presentación, que no tiene la amplitud del tradicional. Vid. MAÑARICUA, A.E., *El nombramiento de los obispos, el concilio Vaticano II, y el Concordato español*, XV, 2, Lumen (1966), pp. 125-126.

<sup>133</sup>.- Vid. SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *El Derecho público de la Iglesia católica*, loc. cit., p. 153.

<sup>134</sup>.- También lo considera nulo MAYANS Y SISCAR en *Examen del Concordato de 1737*, en MAYANS I SISCAR, G., *Obras completas. IV. Regalismo y jurisprudencia* (Valencia 1985), p. 155.

<sup>135</sup>.- Vid. ROBLES MUÑOZ, C., *Frente a la supremacía del Estado. La Santa Sede y los católicos en la crisis de la Restauración (1898-1912) (I)*, 34, A.A. (1987), pp. 189-305.

<sup>136</sup>.- Vid. PORTILLO, E., *Estudios críticos de Historia eclesiástica española durante la primera mitad del siglo XVIII. Nuestros Concordatos*, 17, R. y F. (1907), p. 325.

<sup>137</sup>.- Vid. PORTILLO, E., *Estudios críticos de Historia eclesiástica española durante la primera mitad del siglo XVIII. Nuestros Concordatos*, 18, R. y F. (1907), p. 324.

<sup>138</sup>.- Vid. PORTILLO, E., *Estudios críticos de Historia eclesiástica española durante la primera mitad del siglo XVIII. Nuestros Concordatos*, 19, R. y F. (1907), pp. 68 y 70.

entró en vigor en 1740 y no del todo, ya que en 1742 aún había ciertos artículos, que no se cumplían ni se cumplirían<sup>139</sup>.

De los veintiséis artículos de este concordato de 1737, el artículo 23 del mismo era el de más trascendencia<sup>140</sup>. De su lectura, de hecho, se deduce que el mencionado concordato era, ciertamente, provisional, pues todo giraba alrededor del “patronato”<sup>141</sup>, que, precisamente, era lo que se remitía a ulterior regulación. El concordato de 1737 era, por ello, una tregua, no una paz estable, como se afirmaba en el mismo preámbulo del articulado<sup>142</sup>. Buena muestra de tal afirmación lo prueba, el que aún no habían transcurrido diez meses de la firma del tratado, cuando, en agosto de 1738, el cardenal Molina aventuraba la idea, de proceder al examen de los fundamentos del “patronato”, según el contenido del artículo 23 del concordato de 1737. Sin embargo, la muerte de Clemente XII, acaecida el 8 de febrero de 1740, y la elección de Lambertini, impidieron ulteriores negociaciones. Con la elección de Benedicto XIV cambiaron, radicalmente, las relaciones entre España y la Santa Sede<sup>143</sup>.

### **I.4.3. EL CONCORDATO DE 1753. UN NUEVO CONCORDATO SOBRE EL VIEJO “DERECHO DE PATRONATO”<sup>144</sup>.**

Antítesis entre el primer concordato español, de 1418, en el que se reconocen las reservas pontificias en la provisión de beneficios y el acuerdo sobre la misma cuestión en el concordato de 1753, que, justamente, hace lo contrario<sup>145</sup>. Efectivamente, mientras que las reservas apostólicas son suprimidas por el concordato de 1753, fueron introducidas en el

<sup>139</sup>.- Vid. OLAECHEA, R., *Concordato de 1737*, en ALDEA VAQUERO, Q., MARÍN MARTÍNEZ, T., y VIVES GATEEL, J., (dirs.), *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*. Tomo I (Madrid 1972), p. 579.

<sup>140</sup>.- De hecho, este artículo 23 del concordato de 1737, se refiere, nada menos, que –como él mismo nos indica– a la “controversia de los patronatos”:

“Para terminar amigablemente la controversia de los patronatos de la misma manera que se han terminado las otras, como Su Santidad desea, después que se haya puesto en ejecución el presente ajustamiento, se deputerán personas por Su Santidad y por Su Majestad para reconocer las razones que asisten a ambas partes; y, entretanto, se suspenderá en España pasar adelante en este asunto; y los beneficios vacantes o que vacaren sobre que pueda recaer la disputa del patronato, se deberán proveer por Su Santidad o en sus meses por los respectivos ordinarios, sin impedir la posesión a los provistos”.

<sup>141</sup>.- La denominación del “patronato universal” no es anterior a 1730. El antiguo “patronato real”, compuesto por la nómina de los arzobispados, obispados y beneficios consistoriales, juntamente con el “patronato” de la Iglesia de Granada y sus sufragáneas, Almería y Guadix. Vid. SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *El Concordato español de 1753...*, loc. cit., p. 37. En realidad, el “derecho de patronato” se remonta a los tiempos, que siguieron a la conversión de Recaredo –año 589-. ALDEA QUINTERO, al analizar la Historia del “patronato”, distingue las siguientes cuatro etapas:

- I. Período visigótico –años 589 a 1075-, que es el inicial, y dura hasta la reforma de Gregorio VII. Es un “Derecho de elección”.
- II. Período feudal –años 1075 a 1303-, que culmina en la promulgación de las Decretales de Gregorio IX –año 1234-. Es un “Derecho de asentamiento”.
- III. Período renacentista –años 1303-1486-. Es un “Derecho de suplicación”.
- IV. Período moderno –años 1486 a 1753-. Es un “Derecho de presentación”. Vid. ALDEA VAQUERO, Q., *Iglesia y Estado en la España del siglo XVII. (Ideario político-eclesiástico)*, XXXVI, M.C. (1961), p. 205.

<sup>142</sup>.- Vid. SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *El Concordato español de 1753*, loc. cit., p. 28.

<sup>143</sup>.- Vid. SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *El Concordato español de 1753*, loc. cit., p. 28.

<sup>144</sup>.- Un estudio sobre el concordato de 1753 puede hacerse en “Observaciones al Concordato de 1753”, en MAYANS Y SICAR, G., *Obras completas. IV. Regalismo y jurisprudencia* (Valencia 1985), pp. 261-264.

<sup>145</sup>.- Vid. FORNÉS, J., *El nuevo sistema concordatario español. (Los Acuerdos de 1976 y 1979)* (Pamplona 1980), pp. 51-52.

concordato de Constanza, primer concordato de España<sup>146</sup>. En realidad, puede decirse que el concordato de 1753 es el único celebrado, ya que tanto el de 1717, como el de 1737 –inmaduro el uno; incompleto e incumplido el otro– no fueron más que una preparación del mismo. Más aún, el concordato de 1753 puede considerarse como un acuerdo básico de nuestras relaciones concordatarias hasta los días de la República de 1931, ya que la cuestión del patronato quedó como subsidiario del celebrado en 1851 entre Su Santidad Pío IX y la Reina Isabel II<sup>147</sup>. Efectivamente, el concordato de 1753 quedó, como subsidiario en el de 1851, en todo lo referente al Patronato<sup>148</sup>.

El concordato de 1753<sup>149</sup> es, sobre todo, un concordato benefician, por el que se derogaban las reservas pontificias en España, haciéndose a la Monarquía católica concesiones no igualadas hasta entonces al Real Patronato<sup>150</sup>.

El concordato de 1753 posee un “un contenido monocolor”, pues trata, exclusivamente, de cuestiones de patronato. En él no se encuentran referencias a otros campos de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, a pesar de que en el siglo XVIII estaban perfectamente diferenciadas las funciones de ambas sociedades, aunque esas funciones estaban tan confundidas, que no surgió todavía en la mentalidad de la época la idea de distinguir competencias en un tratado de tipo internacional. En el mismo sentido, en el concordato de 1851 son pocos los artículos concordados, que traten de otro tema, que no sea el patronal, con sus secuelas de las materias económicas<sup>151</sup>. En efecto, el concordato de 1753 pretendía regular la provisión de beneficios eclesiásticos, resolviendo de un modo definitivo las graves controversias sobre el patronato universal. Así lo dice claramente el artículo 6. Pero a esta solución se quería llegar eliminando las reservas pontificias y los gravámenes económicos sobre las rentas benefician<sup>152</sup>. El concordato de 1753 fue el cononcordato derogatorio de las reservas pontificias en España<sup>153</sup>; el concordato, que amplía los “derechos de patronato” de los Reyes de España; el concordato, que

<sup>146</sup>.- Vid. SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *El Derecho público de la Iglesia católica* (Granada, 1940).

<sup>147</sup>.- Vid. MARTÍN MARTÍNEZ, ., *En el segundo centenario del Concordato español de 1753*, en MARTÍN MARTÍNEZ, I., *Sobre la Iglesia y el Estado*, loc. cit., pp. 255-256.

<sup>148</sup>.- Vid. SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *El Derecho público de la Iglesia católica*, loc. cit., p. 153.

<sup>149</sup>.- El 11 de enero de 1753, el cardenal Valenti, Secretario de Estado de Su Santidad, como plenipotenciario del Papa Benedicto XIV, y don Manuel Ventura Figueroa, auditor de la Rota Romana, por Aragón, como plenipotenciario de su Majestad don Fernando VI, Rey de España, firmaban en el pontificio palacio del Quirinal un concordato, cuya génesis –iniciada realmente en 1735– había durado casi veinte años, y que, en verda, podrá considerarse como el único concordato español del siglo XVIII. En efecto, el concordato firmado en El Escorial el 17 de junio de 1717 no llegó a ser ratificado por Felipe V, y no alcanzó, por consiguiente, su plenitud jurídica. Por otra parte, aunque España lleo a concertar, en 1737, otro concordato con la Santa Sede, la cuestión más importante –la del pretendido “patronato universal” de la Corona española sobre los beneficios eclesiásticos– quedó sin resolver. Vid. MARTÍN MARTÍNEZ, I., *En el segundo centenario del Concordato español de 1753*, III, R.E.D.C. (1953), p. 745. Reproducido en su recopilación titulado *Sobre la Iglesia y el Estado* (Madrid 1989), p. 255.

<sup>150</sup>.- Vid. PÉREZ MIER, L., *El Concordato español de 1753: significación y caracteres*, I, R.E.D.C. (1954), p. 13.

<sup>151</sup>.- Vid. HERA PÉREZ-CUESTA, A., De La, *El pluralismo y el futuro del sistema concordatario*, LXXXI, I-II, D.E. (1970), pp. 3-21.

<sup>152</sup>.- Vid. MARTÍN MARTÍNEZ, ., *En el segundo centenario del Concordato español de 1753*, en MARTÍN MARTÍNEZ, I., *Sobre la Iglesia y el Estado*, loc. cit., p. 264.

<sup>153</sup>.- En el siglo XVIII, España era, con notable diferencia, la Nación que poseía el mayor número de beneficios, estando las reservas pontificias en todo su vigor; por eso la abolición de las reservas pontificias en España venía a operar una auténtica revolución en el sistema financiero de la Curia Romana, que, `prácticamente, equivalía a la desaparición de las reservas con la Iglesia. Vid. SÁNCHEZ DE LAMADRI, R., *El Concordato español de 1753...*, loc. cit., p. 102.

marca el punto culminante del regalismo español<sup>154</sup>, y, al mismo tiempo, el medio por el que se conjuró la ruptura de la monarquía española con Roma<sup>155</sup>. En realidad, las razones de no haber querido Fernando VI y su Consejo confirmar el concordato de 1753 fue por no obtenerse el patronato con la amplitud deseada por ellos, y no haberse disminuido las reservas pontificias de *annatas*, pensiones, espolios, etcétera<sup>156</sup>.

Los veintitrés artículos de este concordato pretendían solucionar los problemas planteados entre las regalías y las reservas. Por esta razón, el concordato sólo versó sobre las materias benéficas, y dejó de lado las dispensas matrimoniales, las peticiones de particulares y los patronatos laicales<sup>157</sup>.

Con el “patronato universal” se pretendía remediar ciertos perjuicios económicos, como consecuencia de las reservas pontificias, amén de una supremacía del Estado sobre la Iglesia<sup>158</sup>.

El concordato de 1753 es la antítesis del *primer* concordato –Concordato de Constanza, en 1418– estipulado en España, por el que la Santa Sede había introducido, en Castilla, las reservas en 1418. Efectivamente, si Juan II, en 1418, reconocía en un concordato las reservas apostólicas, en 1753, Fernando VI obtenía, por otro concordato, la abolición de las mismas. Por el concordato de Constanza de 1418<sup>159</sup>, Martín V concluía con Juan II la reserva de los beneficios eclesiásticos –“*De reservatione et collatione Beneficiorum*”– y de los frutos benéficos –“*De annatis e communibus servitis*”–; en 1753, Benedicto XIV subroga a Fernando VI el derecho, que, por razón de las reservas tenía la Santa Sede, de conferir los beneficios en los reinos de España –artículo 14 del concordato de 1753<sup>160</sup>–, y renunciaba, en nombre de la Sede Apostólica, al derecho, que ésta tiene, a la percepción de las utilidades de las expediciones benéficas –artículo 17 del mismo concordato de 1753<sup>161-162</sup>.

<sup>154</sup>.- La bibliografía básica sobre el “regalismo” es la siguiente: vid. HERA PÉREZ-CUESTA, A., De la, *El regalismo indiano*, XXXII, 63, I.C. (1992), pp. 411-437. Vid. MARTÍN, I., *Panorama del regalismo español hasta el vigente Concordato de 1953*, V, 11, R.F.D.U.M. (1961), pp. 279-303.

<sup>155</sup>.- Vid. MARTÍN, I., *En el segundo centenario del Concordato español de 1753*, loc. cit., p. 746.

<sup>156</sup>.- Vid. ROBLEDA SOLÍS, O., *Provisión de beneficios no consistoriales en España*, XXXVII, 7, S.T. (1949), p. 419.

<sup>157</sup>.- Vid. OLAECHEA, R., *Concordato de 1753*, en ALDEA VAQUERO, Q., MARÍN MARTÍNEZ, T., y VIVES GATEELL, J., (dirs.), *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*. Tomo I (Madrid 1972), p. 580.

<sup>158</sup>.- Vid. MARTÍN, I., *En el segundo centenario del Concordato español de 1753*, loc. cit., p. 751.

<sup>159</sup> En España no se llegó a un concordato después del de Constanza hasta el siglo XVIII; mas, no se debe, con ello, imaginarse que no hubiera en España resistencia a las reservas. Vid. SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *El Concordato español de 1753...*, loc. cit., p. 103.

<sup>160</sup>.- Este artículo 14 del concordato de 1753 se refiere a esta problemática cuestión:

“Y a mayor abundamiento Su Santidad subroga al Rey Católico y a los reyes sus sucesores el derecho que por razón de las reservas tenía la Santa Sede de conferir los beneficios en los reinos de las Españas, o por sí o por medio de la Dataría, Cancillería apostólica, Nuncios de España, e indultarlos; dando a sus Majestades el derecho universal de presentar a dichos beneficios en los Reinos de las Españas que actualmente posee, con facultad de usar de este derecho del mismo modo que usa y ejerce lo restante del patronato perteneciente a su real Corona; no debiéndose en lo futuro conceder a ningún Nuncio apostólico de España ni a ningún cardenal u obispo en España indulto de conferir beneficios en los meses apostólicos, sin expresa permisión de Su Majestad o de sus sucesores”.

<sup>161</sup>.- El artículo 17 del concordato de 1753 establece:

“Habiendo Su Majestad Católica considerado que por razón del patronato y derechos cedidos a sí, y a sus sucesores, quedando la Dataría y Cancillería apostólica sin las utilidades de las expediciones y annatas, sería grave el incomodo del erario pontificio, se obliga a hacer consignar en Roma a título de recompensa por una sola vez, a disposición de Su Santidad, un capital de trescientos y diez mil escudos romanos, que a razón de un tres por ciento rendirá anualmente nueve mil y trescientos escudos de la misma moneda, suma en que se ha regulado el producto de todos los derechos arriba dichos”.

El concordato de 1753 era, a juicio de SÁNCHEZ DE LAMADRID, “ante todo y sobre todo un concordato benefical, en el que se derogaban las reservas en España y con el que a causa de la verdadera revolución económica que llevaba al sistema financiero de la Curia Romana, habían de sufrir un golpe de muerte las reservas apostólicas en la Iglesia”<sup>163</sup>.

Benedicto XIV, en realidad no cedió a todo, lo que se le pedía: el “patronato universal” fue desestimado, y, aun cuando las reservas fueron abolidas, prácticamente fue esto, más que nada, una concesión económica, con la debida indemnización, que aseguraba la debida retribución de los ministros apostólicos<sup>164</sup>.

Las instituciones y colaciones de los beneficios debían, por otra parte, recibirlas los presentados reales de sus respectivos ordinarios, los que, a su vez, deberían obtener la confirmación pontifica por medio de las acostumbradas *bulas* -artículo 9 del concordato de 1753<sup>165</sup>-, sin que en esto se hiciese la menor innovación. La facultad, de disponer de los espolios y frutos de las iglesias vacantes, no se entendía, sino con la obligación, de emplear dichas rentas eclesiásticas en fines, estrictamente, canónicos. Las pensiones y cédulas bancarias fueron suprimidas, aunque con la correspondiente compensación económica. Se respetaron los derechos adquiridos por los patronos particulares -artículos 9 y 10 del Concordato de 1753-, así como los de pensionistas, que habían obtenido, anteriormente, las pensiones -artículo 19 del concordato de 1753<sup>166</sup>-, y se subrayaba el derecho de la Santa Sede a las provisiones -artículo 14 del mismo concordato<sup>167</sup> y a la percepción de los frutos -artículo 20 del Concordato<sup>168-169</sup>.

<sup>162</sup>.- Vid. SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *El Concordato español de 1753...*, loc. cit., pp. 102-103.

<sup>163</sup>.- Vid. SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *El Concordato español de 1753...*, loc. cit., p. 140.

<sup>164</sup>.- Vid. SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *El Concordato español de 1753...*, loc. cit., p. 142.

<sup>165</sup>.- El artículo 9 del concordato de 1753 se refiere a las colaciones, presentaciones, nóminas e instituciones de los beneficios:

“Para bien regular después las colaciones, presentaciones, nóminas e instituciones de los beneficios que en lo venidero vacarán en dichos Reinos de las Españas, se conviene en primer lugar: Que los arzobispos, obispos y coladores oficiales deban en lo futuro continuar proveyendo aquellos beneficios que proveían en lo pasado siempre que vagen en sus meses ordinarios de marzo, junio, septiembre y diciembre, aunque se halle vacante la Silla Apostólica; y se conviene también que los patronos eclesiásticos en los mismos meses y en el propio modo prosigan presentando los Beneficios de su Patronato; exclusas las alternativas de meses que para conferir se daban antecederamente, las que en lo futuro no se concederán jamás”.

<sup>166</sup>.- Este artículo 19 del concordato de 1753 nos dice:

“Del mismo modo, la Majestad del Rey Católico, no menos por su heredada devoción hacia la Santa Sede que por el afecto particular con que mira la sagrada persona de Su Beatitud, se ha dispuesto a dar por una sola vez un socorro, que si no en el todo, a lo menos alivie en parte el erario pontificio de los gastos que está necesitado a hacer para la manutención de los expresados ministros, y de consecuencia se obliga a hacer consignar en Roma seiscientos mil escudos romanos, que al tres por ciento producen anualmente diez y ocho mil escudos de la misma moneda; con que queda abolido para lo futuro el uso de imponer pensiones y exigir cédulas bancarias, no sólo en el caso de la colación de los 52 beneficios reservados a la Santa Sede, en el de las confirmaciones arriba indicadas, en el de recurso a la misma Santa Sede para obtener alguna dispensación concerniente a la colación de los beneficios; sino también en cual se sea otro caso; de tal manera que en lo venidero queda extinguido para siempre el uso de imponer pensiones y exigir cédulas bancarias; pero sin perjuicio de las ya impuestas hasta el tiempo presente”.

<sup>167</sup>.- Artículo 14 del concordato de 1753, que, refiriéndose al tema en cuestión, nos dice:

“Y a mayor abundamiento Su Santidad subroga al Rey Católico y a los reyes sus sucesores el derecho que por razón de las reservas tenía la Santa Sede de conferir los beneficios en los reinos de las Españas, o por sí o por medio de la Dataría, Cancillería apostólica, Nuncios de España, e indultarios; dando a sus Majestades el derecho universal de presentar a dichos beneficios en los Reinos de las Españas

#### I.4.4. EL CONVENIO DE 27 DE ABRIL DE 1845<sup>170</sup>, COMO TRÁNSITO AL CONCORDATO DE 1851.

Que la sanación estaría vinculada a la dotación del clero dada, como el Gobierno decía, tampoco podía coger de nuevas a los ministros, pues en la Nota del Cardenal de 27 de marzo de 1845, con la promesa de la sanación se especifica claramente, y Castillo previno al Gobierno, en la misma fecha, que la aseguración final de las ventas iría motivada y en términos análogos a los de la promesa<sup>171</sup>.

En el artículo 8 del convenio de 1845 se establece la devolución de todos los bienes eclesiásticos, incluidos los de los regulares, y la administración de dichos bienes hasta su devolución. Respecto al primero, no existía ningún problema, según Castillo, ya que las Cortes acababan de aprobar una ley al efecto, la cual recibió la sanción real el 3 de abril, de 1845. Respecto al segundo, estimaba Castillo, que tampoco había dificultad<sup>172</sup>. Al artículo 8 del convenio de 1845 se presentaron algunas observaciones por parte del Gobierno español: sustituir “restituirán” por “devolverán”<sup>173</sup>. Sin embargo, la observación hecha al artículo 8 del convenio de 1845, de utilizar el verbo “devolver”, en vez de “restituir”, no es admitido por la Santa Sede, ya que “devolvere” es un verbo latino, que significa “voltear”; “restituire”, en cambio, significa “devolver”. El texto latino no puede cambiarse, pero el Gobierno puede traducirlo al español, como quiera. En este artículo 8 el Gobierno también había pedido, que la

---

que actualmente posee, con facultad de usar de este derecho del mismo modo que usa y ejerce lo restante del patronato perteneciente a su Real Corona; no debiéndose en lo futuro conceder a ningún Nuncio apostólico de España ni a ningún cardenal u obispo en España indulto de conferir beneficios en los meses apostólicos, sin expresa permisión de Su Majesta o de sus sucesores”.

<sup>168</sup>.- El artículo 20 de concordato de 1753, refiriéndose a los espolios y los frutos, nos dice:

“Otro capítulo de controversia había también, no ya orden al derecho de la Cámara apostólica y Nunciatura de España sobre los espolios y frutos de las iglesias obispaes vacantes en los Reinos de las Españas; sino sobre el uso, ejercicio y dependencias de dicho derecho; de tal modo que se hacía necesario venir sobre esto a alguna concordia o composición. Para evitar también estas continuas diferencias, la Santidad de nuestro Beatísimo Padre, derogando, anulando y dejando sin efecto todas las Constituciones apostólicas que hayan precedido, y todas las concordias y convenciones que se han hecho hasta ahora entre la reverenda Cámara apostólica, obispos, cabildos y diócesis, y cual se sea otra cosa que haga en contrario, aplica desde el día de la ratificación de este Concordato todos los espolios y frutos de las iglesias vacantes exactos e inexactos a aquellos usos píos que prescriben los sagrados cánones; prometiendo que en lo venidero no acordará por ningún motivo a cual se sea persona eclesiástica, aunque sea digna de especial o especialísima mención, facultad de testar de los frutos y espolios de sus iglesias obispaes, bien que fuese para usos píos, salvo las ya acordadas, que deberán tener su efecto; concediendo para lo futuro a la Majestad del Rey Católico y a sus sucesores la elección de ecónomos y colectores (con tal que sean personas eclesiásticas) con todas las facultades oportunas y necesarias para que dichos efectos, bajo la real protección, sean por éstos fielmente administrados y fielmente empleados en los usos expresados”.

<sup>169</sup>.- Vid. SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *El Concordato español de 1753...*, loc. cit., p. 142.

<sup>170</sup>.- Aunque Castillo sabía, que el convenio de 1845 había producido en el Gobierno un efecto poco favorable, hasta el punto de negarse a ratificarlo, le causó gran impresión, el que le acusasen de “haberse excedido” en sus facultades. Vid. SUÁREZ VERDAGUER, F., *Génesis del Concordato de 1851*, III, I-II, I.C. (1963), p. 143. También vid. MARTÍNEZ Y SANZ, M., *Defensa del Convenio estipulado en Roma el 27 de abril entre el representante del Gobierno español y el del Gobierno pontificio* (Madrid 1845).

<sup>171</sup>.- Vid. SUÁREZ VERDAGUER, F., *Génesis del Concordato de 1851*, loc. cit., 145.

<sup>172</sup>.- Vid. PÉREZ ALHAMA, J., *La Iglesia y el Estado español. Estudio histórico-jurídico a través del Concordato de 1851* (Madrid 1967), pp. 109-110.

<sup>173</sup>.- Vid. SUÁREZ VERDAGUER, F., *Génesis del Concordato de 1851*, loc. cit., 150.

devolución tuviera efecto mediante la oportuna ley hecha en Cortes, pero la Santa Sede no sólo estaba conforme, sino que quería, que todo el convenio se sometiera a las Cortes, y se hiciera ley<sup>174</sup>.

El artículo 9 del convenio de 1845, por el que el Gobierno contraía la obligación de dotar al clero de manera estable, decorosa e independiente, consideraba Castillo, que no merecía ninguna objeción, por ser ésta la intención del Gobierno<sup>175</sup>. En el artículo 9 del convenio de 1845, al tratar de la dotación del clero, quería que la expresión “que la Santidad pueda juzgar y reconocer como segura” se cambiara o suprimiera, pues era contraria a las prerrogativas de las Cortes. La Santa Sede no tuvo inconveniente en modificar la redacción: “se concederá... de acuerdo con Su Santidad, una dotación segura, etc.”<sup>176</sup>.

En cuanto al artículo 10 del convenio de 1845, referido al derecho de propiedad, el Gobierno quería que, en lugar de “quocumque justo título”, se dijera “con arreglo a las leyes”. Sin embargo, la Santa Sede lo rechazó, porque aceptar la expresión “justo título”, es obligar a la Santa Sede a reconocer las leyes de amortización<sup>177</sup>.

Al artículo 11 del convenio de 1845, también se presentaron observaciones por el Gobierno español, pues entendía que la sanación se prometía, para cuando se aseguraba al clero la dotación de que se habla en el artículo 9, en el que se expresa, que tal dotación debe ser aprobada por Su Santidad, “si le parece conveniente”, de donde resultaba, que no se prometía nada. El Gobierno consideraba, que bastaba su Real palabra, de dotar al clero<sup>178</sup>. Este convenio de 1845 no fue ratificado por el gobierno de Madrid, porque varios de sus artículos contrastaban con algunas leyes, derechos y privilegios del Estado español, y, en concreto, el artículo 11 del convenio de 1845, sobre sanación de las ventas de los bienes eclesiásticos, pues a pesar de las promesas, el gobierno español no había previsto, todavía, una dotación del clero suficiente, estable, segura e independiente<sup>179</sup>.

Todos los argumentos del Gobierno español, para que se concediera la sanación de presente en el artículo 11 del convenio de 1845, fueron inútiles. La intransigencia de la Santa Sede, en este punto, es absoluta. Tan solo se acepta suprimir la fecha de fines de 1844, con que se limitaba la sanación de bienes. Quedará igual, pero sin las palabras “ante exitum superiori anni 1844”<sup>180</sup>.

#### **1.4.5. LAS OBSERVACIONES DE BRUNELLI A LOS “44 ARTÍCULOS” DEL PROYECTO DE CONCORDATO<sup>181</sup>.**

<sup>174</sup>.- Vid. SUÁREZ VERDAGUER, F., *Génesis del Concordato de 1851*, loc. cit., 158.

<sup>175</sup>.- Vid. PÉREZ ALHAMA, J., *La Iglesia y el Estado español. Estudio histórico-jurídico a través del Concordato de 1851*, loc. cit., p. 110.

<sup>176</sup>.- Vid. SUÁREZ VERDAGUER, F., *Génesis del Concordato de 1851*, loc. cit., p. 159.

<sup>177</sup>.- Vid. SUÁREZ VERDAGUER, F., *Génesis del Concordato de 1851*, loc. cit., p. 159.

<sup>178</sup>.- Vid. SUÁREZ VERDAGUER, F., *Génesis del Concordato de 1851*, loc. cit., pp. 150-151.

<sup>179</sup>.- Vid. CÁRCEL ORTÍ, V., *El nuncio Brunelli y el Concordato de 1851*, 1, A.V. (1975), pp. 79-80.

Efectivamente, así se recogía en la nota de 1 de enero de 1847, del gobierno español: por no haberse estipulado en dicha convención la sanación de las ventas, ya efectuadas, de bienes eclesiásticos. Vid. CANGA ARGÜELLES, J., *Observaciones de la Santa Sede al despacho del gobierno español sobre las causas de la interrupción de las relaciones recíprocas dirigido á los representantes de la Reina en las cortes extranjeras con fecha 22 de julio de 1855*, en CANGA ARGÜELLES, J., *El Gobierno español en sus relaciones con la Santa Sede. Colección de los documentos oficiales que se han publicado antes y después del rompimiento de las relaciones entre España y Roma, precedida del texto literal del último Concordato y de varios artículos escritos sobre estas materias en la Regeneración* por D. José Canga Argüelles (Madrid 1856), p. 336.

<sup>180</sup>.- Vid. SUÁREZ VERDAGUER, F., *Génesis del Concordato de 1851*, loc. cit., pp. 159 y 162.

<sup>181</sup>.- Las observaciones de Brunelli a los 44 artículos del proyecto del concordato, pueden consultarse en NUSSI, V., *Storia del Concordato di Spagna, conchiuso il 16 Marzo 1851, e della Convenzione addizionale al*

El artículo 41 es considerado por Brunelli, como el más problemático de todos, los recogidos en el “*proyecto de 44 artículos*”. En el mismo se contemplan las promesas hechas por la Santa Sede en el artículo 11 de la Convención de 1845 sobre sanación de las ventas, al oponerse a la dotación del culto y clero, al darse validez a los actos precedentes. Con la concesión de la sanación, surgieron numerosas voces del clero y del pueblo, oponiéndose a esta decisión pontificia<sup>182</sup>.

Con posterioridad el nuncio de la Santa Sede, Brunelli, solicitaba nuevas modificaciones sobre el “*proyecto del concordato*”, y, en concreto, sobre los artículos 1, 9, 20, 25 a 31, 35 a 38, 40, 42 a 44<sup>183</sup>.

#### I.4.6. EL PROYECTO DE DOTACIÓN DEL CULTO Y CLERO, DE 1847.

Bajo el nombre “proyecto de dotación del culto y clero”, presentado al Congreso en 1847, se preparó en el Congreso la más radical medida desamortizadora. La fórmula ideada, consistía en la dotación de aquél, mediante un doble procedimiento, a saber: emisión de inscripciones no negociables de la deuda, consolidada al tres por ciento a favor de cada catedral, colegiata o abadía y parroquia en todo el Reino y subvención de los gastos de conservación y reparación de los edificios, consagrados al culto con cargo al presupuesto general, en el capítulo y artículos correspondientes a obras públicas<sup>184</sup>.

#### I.4.7. EL CONCORDATO “ECONÓMICO”, DE 1851<sup>185</sup>.

---

*medesimo Concordato, stipolata il 25 Agosto 1859*, 20, A.A. (1973), pp. 1034-1056 -edición, introducción y notas de J. De Salazar Abrisqueta-.

<sup>182</sup>.- NUSSI, V., *Storia del Concordato di Spagna, conchiuso il 16 Marzo 1851, e della Convenzione addizionale al medesimo Concordato, stipolata il 25 Agosto 1859*, loc. cit., p. 1054.

<sup>183</sup>.- NUSSI, V., *Storia del Concordato di Spagna, conchiuso il 16 Marzo 1851, e della Convenzione addizionale al medesimo Concordato, stipolata il 25 Agosto 1859*, loc. cit., pp. 1059-1066.

<sup>184</sup>.- Vid. PÉREZ ALHAMA, J., *La Iglesia y el Estado español. Estudio histórico-jurídico a través del Concordato de 1851*, loc. cit., pp. 216-217.

<sup>185</sup>.- El concordato, celebrado en 16 de marzo de 1851, entre Su Santidad el Pontífice Pío IX y Su Majestad Católica, la Reina doña Isabel II, ratificado por Su Majestad la Reina en 1 de abril de 1851 y por Su Santidad, en 23 del mismo mes y año. Puede consultarse en BLASCO IBÁÑEZ, V., *Cantaclaro. Comentarios al Concordato con la semblanza del autor* (Valencia 1909), pp. XV-XXXV. El 16 de marzo de 1851 firman en Madrid, el nuncio apostólico de Su Santidad, Monseñor Brunelli, arzobispo de Telasónica, y el Ministro de Estado, don Manuel Beltrán de Lis, el concordato de 1851. Vid. FERNÁNDEZ DE RETANA GALÍNDEZ, J.M<sup>a</sup>., *En el primer centenario del Concordato de 1851*, loc. cit., p. 235. Este concordato de 1851 fue publicado, en España, oficialmente, en 12 de mayo, al día siguiente del canje de ratificaciones, y fue confirmado, solemnemente por el Papa en *bula Ad Vicariam*, de fecha 5 de septiembre, promulgándose, finalmente, dicha *bula* con el texto del concordato, como Ley del Reino, el 17 de octubre. Vid. PÉREZ MIER, L., *Concordato y Ley Concordada*, II, R.E.D.C. (1946), p. 338. Un interesante estudio del concordato de 1851, añadido con toda la legislación complementaria, en AA.VV., *Concordato celebrado entre S.S. Pío IX y S.M. la Reina Doña Isabel II en 16 de marzo de 1851. Añadido con todas las reales órdenes, decretos, circulares y aclaraciones que se han expedido concernientes al mismo* (Tarazona 1858). Fue un concordato muy esperado. En numerosas ocasiones se habían anunciado, como próxima, su conclusión, pero en todas ellas había fracasado por las ambiciones desmedidas, exigencias inoportunas, pretensiones exageradas o intrigas de mala ley. Vid. TRONCOSO, J., *El Concordato ó sean breves reflexiones político-religiosas sobre este importante documento* (Madrid 1851).

La bibliografía del concordato de 1851 que hemos seleccionado es la siguiente: vid. GELPI BARRIOS, J., *Personalidad jurídica de la Iglesia en Puerto Rico. Vigencia del Concordato español de 1851 a través del Tratado de París*, 33, 95-96, R.E.D.C. (1977), pp. 395-415. Vid. A.G., *Los Concordatos. Su origen é historia. Su carácter*, I. R.E. (1907), pp. 14-17; 114-118; 270-273; 316-319; 549-553.

Aunque es cierto que durante la Segunda República se violó el concordato de 1851 en sus puntos esenciales, tanto por la Constitución de 1931, como por la legislación posterior, no hay documento alguno que avale la denuncia unilateral del concordato de 1851 por parte de la Santa Sede, ni su aceptación por el Estado español. El concordato de 1851 difícilmente podría considerarse plenamente válido en 1939; como consecuencia de la cláusula *rebus sic stantibus*, pero no aplicable a un mero cambio de régimen, y, mucho menos, a un cambio de gobierno, sino a una realidad sociológica, política y religiosa mucho más profunda<sup>186</sup>.

La base del concordato español de 1851 está más en los trabajos de la Junta mixta, que en el convenio de 27 de abril, de 1845<sup>187</sup>.

El concordato de 1851 puede calificarse como “concordato económico”. Esto no quiere decir que se excluyan otros problemas y otros aspectos, tratados en él<sup>188</sup>. Sin embargo, el tiempo ha enseñando que no sirve de nada fijar las dotaciones en los concordatos, si a la vez no se asegura su valor real y efectivo<sup>189</sup>.

En el concordato de 1851 y en el convenio-ley adicional, de 1859, se prevén que en los presupuestos generales del Estado sólo debían figurar tres partidas: a) la de construcción y reparación de templos; b) los de culto -deducido el producto de la bula de cruzada-, y c) la del clero conventual. Todo el resto del presupuesto del culto y clero debía cubrirse con tres fuentes de ingreso: a) con la renta de las inscripciones intransferibles, entregadas a la Iglesia, o que debieron entregársele, por los bienes permutados del clero y monjas; b) con el producto de la bula de la Santa Cruzada; c) con la contribución, que debía recaudar el clero, auxiliado en caso necesario por el Estado; y que no se llevó a cabo por la odiosidad, que creaba a la Iglesia toda clase de exacciones tributarias<sup>190</sup>. Además, el Estado no pagó los intereses de las inscripciones por los bienes permutados, porque se computaban, de hecho, en el presupuesto total del culto y clero, que pagaba el Estado<sup>191</sup>.

En lo que concierne a los bienes de la Iglesia católica, el convenio-ley de 4 de abril de 1860 -que no hizo, sino poner en vigor el concordato entre el Estado español y la Santa Sede de 1851, que hasta entonces no había sido respetado- realizó una distinción respecto a los mismos de enorme trascendencia, estableciendo una normativa diferente según sea:

- a) bienes, que la Iglesia adquiriese con posterioridad a la entrada en vigor de dicha ley: los cuales quedaban excluidos del ámbito de aplicación de las leyes desamortizadoras, no estableciéndose respecto de ellos limitación alguna en cuanto a su disfrute y enajenación;
- b) bienes que la Iglesia poseyera con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de 1860, estos sí que estaban sujetos a desamortización y, por tanto, podían imponerse a su titular la venta forzosa de los mismos. Para este grupo de bienes era necesario establecer, como sucedió con los bienes del Estado, a los que se les aplicaba la legislación desamortizadora, una relación de los mismos, que quedaban en poder de

<sup>186</sup>.- Vid. MARQUINA BARRIO, A., *La diplomacia vaticana y la España de Franco (1936-1945)* (Madrid 1983), pp. 18-19, del prólogo de J. Giménez y Martínez de Carvajal.

<sup>187</sup>.- Vid. PÉREZ ALHAMA, J., *La Iglesia y el Estado español. Estudio histórico-jurídico a través del Concordato de 1851*, loc. cit., p. 460.

<sup>188</sup>.- Vid. PÉREZ ALHAMA, J., *La Iglesia y el Estado español. Estudio histórico-jurídico a través del Concordato de 1851*, loc. cit., p. 461.

<sup>189</sup>.- Vid. PÉREZ MIER, L., *El régimen económico de la Iglesia en los Concordatos*, 19, *Ecclesia* (1941), p. 18.

<sup>190</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ REGATILLO, E., *Concordatos*, XXIII, 266, 3, S.T. (1934), p. 240.

<sup>191</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ REGATILLO, E., *Concordatos*, XXIII, 266, 3, S.T. (1934), pp. 240-241.

la Iglesia y excluido de la venta forzosa; de ahí el evidente paralelismo entre el artículo 6 de la ley de 1860, con el artículo 2 de la ley de 1855<sup>192</sup>.

Como consecuencia de la abolición de los diezmos y primicias, de la desamortización, y de la ruptura en relaciones con la Santa Sede, al firmarse el concordato de 1851, la dotación económica de la Iglesia se hallaba regulada por una serie de disposiciones unilaterales de la potestad civil, sin base canónica alguna, muchas de ellas, contradictorias entre sí, y que no daban estabilidad alguna a la subsistencia del culto y sus ministros. Así lo estipulaba el “*presupuesto del culto y clero para el año 1847, bajo las asignaciones y tipos, que rigieron en los dos anteriores*”, y la ley provisional de dotación del culto y clero, de 21 de julio de 1838<sup>193</sup>.

Aunque la dotación del culto y clero y la sanación de las ventas eran dos cuestiones importantes, y estuvieron presentes en toda la negociación, SALAZAR ABRISQUIETA señala que, en realidad, los problemas de la confesionalidad, el conseguir una mayor independencia y libertad del Estado en la erección, administración, gobierno y planificación académica de los seminarios, una mayor independencia y libertad del clero, con respecto al Estado, etcétera, son problemas mucho más importantes, vitales y trascendentales para la Iglesia, que la cuestión económica. De hecho, las dificultades, para resolver los problemas, -añade- se deben, a que la Iglesia solo admite aquellas soluciones, en las que se garantice completamente su libertad. El Gobierno ofrecía una dotación del culto y clero de inmediato, pero convirtiendo a los sacerdotes en funcionarios del Estado. Solución, que, por supuesto, no podía admitir la Santa Sede<sup>194</sup>.

Las infracciones cometidas al concordato de 1851 han sido frecuentes. De hecho, CANGA ARGÜELLES, en 1856 -tan sólo cinco años más tarde- recogía las siguientes: el artículo 29, al expulsarse a los jesuitas de Loyola; los artículos 31, 32, 33, 34 y 35, por el descuento hecho en la ley de presupuestos a las consignaciones eclesiásticas; el artículo 38, por la ley de desamortización, de 1 de mayo de 1855, que dispone de los bienes, que allí se destinan al culto y clero; el artículo 40, por la misma ley de 1855, que desconoce la propiedad de la Iglesia; el artículo 41, por la misma ley de 1855, que niega a la Iglesia la facultad de adquirir y poseer; el artículo 43, por la Instrucción, circulada por el Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de la ley de desamortización, y, según la cual se priva al clero de la administración de sus bienes<sup>195</sup>.

El artículo 29 del concordato de 1851 no se refiere a las órdenes religiosas, que se han de reconocer o consentir en España, sino de las que el Gobierno se compromete a subvencionar a su costa. Lo confirma el artículo 35 del mismo concordato de 1851 y lo ratifica el artículo 13 del convenio adicional de 1859<sup>196</sup>. Respecto a la tercera orden, en 1868, el Gobierno, de acuerdo con el nuncio de Su Santidad, determinó que cada obispo por separado eligiese la orden religiosa de su mayor agrado, a la cual el Gobierno había de subvencionar; pero la revolución de 1868 impidió que esta subvención se hiciese efectiva<sup>197</sup>.

<sup>192</sup>.- Vid. HAZA DÍAZ, P., De La, *Inmatriculación de bienes de la Iglesia mediante certificación expedida por el Diocesano*, LXXI, 630, R.C.D.I. (1995), pp. 1589-1590.

<sup>193</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ DE RETANA GALÍNDEZ, J.M<sup>a</sup>., *En el primer centenario del Concordato de 1851*, loc. cit., p. 245.

<sup>194</sup>.- NUSSI, V., *Storia del Concordato di Spagna, conchiuso il 16 Marzo 1851, e della Convenzione addizionale al medesimo Concordato, stipolata il 25 Agosto 1859*, loc. cit., pp. 824-826.

<sup>195</sup>.- Vid. CANGA ARGÜELLES, J., *Actos que han precedido a la retirada del Nuncio de Su Santidad (3 de agosto de 1855)*, en CANGA ARGÜELLES, J., *El Gobierno español en sus relaciones con la Santa Sede...*, loc. cit., pp. 19-20.

<sup>196</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ REGATILLO, E., *Concordatos*, XXIII, 266, 3, S.T. (1934), p. 248.

<sup>197</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ REGATILLO, E., *Concordatos*, XXIII, 266, 3, S.T. (1934), p. 249.

El artículo 31 del concordato de 1851 establece la dotación a las distintas instituciones eclesiásticas. Este artículo sería complementado por el real decreto de 29 de noviembre de 1851 y el real decreto de 23 de abril de 1853<sup>198</sup>. En España hay un impuesto especial, que es el llamado “donativo del clero y monjas”. Viene a ser el impuesto sobre la dotación del clero y correspondería al impuesto de utilidades, que grava el trabajo personal: impuesto sobre los sueldos. Se le llama así por un cierto respeto a la Iglesia y para que no aparezca que está sometida a la fiscalidad del Estado<sup>199</sup>. Este “donativo del clero y monjas” fue establecido por el artículo 5 de la ley de 31 de marzo de 1900, que gravó las asignaciones garantizadas por los artículos 31 al 38 del concordato de 1851; para estas asignaciones se consigna en el artículo 3 de la ley de presupuestos del año económico 1867-1868 la invitación de someterlas voluntariamente al impuesto del 5 por 100, que entonces gravaba a los funcionarios públicos<sup>200</sup>.

El artículo 34 del concordato de 1851<sup>201</sup> sería complementado por real orden de 16 de diciembre de 1851 sobre presupuestos de las iglesias, gastos del culto, etcétera y el real decreto de 23 de abril de 1853<sup>202</sup>.

El artículo 36 del concordato de 1851 establece las dotaciones para los gastos del culto y del clero:

“Las dotaciones asignadas en los artículos anteriores para los gastos del culto y del clero, se entenderán sin perjuicio del aumento que se pueda hacer en ellas cuando las circunstancias lo permitan. Sin embargo, cuando por razones especiales no alcance en algún caso particular alguna de las asignaciones expresadas en el art. 34, el Gobierno de S.M. proveerá lo conveniente al efecto: del mismo modo proveerá a los gastos de las reparaciones de los templos y demás edificios consagrados al culto”.

Este artículo 36 del concordato de 1851 prueba que las cantidades señaladas se consideran como el “minimum”, de las cuales no podía el gobierno hacer ninguna rebaja, y que debía, por el contrario, aumentar cuando le fuera posible<sup>203</sup>. En este artículo 36 del concordato de 1851 el Estado español se compromete a satisfacer la dotación del culto y clero, como *minimum*, de lo que debe a la Iglesia española. Pero además, el artículo 36 del concordato de

<sup>198</sup>.- Vid. ELÍAS DE MOLINS, *El Concordato de 1851 anotado con las leyes, decretos y disposiciones que se han publicado en su aclaración* (Madrid 1882), pp. 135 a 140.

<sup>199</sup>.- Vid. GONZÁLEZ RUIZ, M., *La Iglesia y la legislación fiscal del Estado*, I, R.E.D.C. (1950), p. 143.

<sup>200</sup>.- Vid. VALLE Y ALONSO, G., Del, *La legislación fiscal del Estado en relación con la Iglesia*, I, R.E.D.C. (1950), p. 180.

<sup>201</sup>.- El artículo 34 del concordato de 1851 nos dice:

“Para sufragar los gastos del culto tendrán las iglesias metropolitanas anualmente de 90 a 140.000 reales; las sufragáneas, de 70 a 90.000, y las colegiadas, de 20 a 30.000.

Para los gastos de administración y extraordinarios de visita tendrán de 20 a 30.000 reales los metropolitanos, y de 16 a 20.000 los sufragáneos.

Para los gastos del culto parroquial se asignará a las iglesias respectivas una cantidad anual que no bajará de 1.000 reales, además de los emolumentos eventuales y de los derechos que por ciertas funciones estén fijados o se fijaren para este objeto en los aranceles de las respectivas diócesis”.

<sup>202</sup>.- Vid. ELÍAS DE MOLINS, *El Concordato de 1851 anotado con las leyes, decretos y disposiciones que se han publicado en su aclaración* (Madrid 1882), pp. 142 a 145.

<sup>203</sup>.- Vid. CANGA ARGÜELLES, J., *Negociaciones y ruptura del gobierno español con la Santa Sede (II: 29 de agosto de 1855)*, en CANGA ARGÜELLES, J., *El Gobierno español en sus relaciones con la Santa Sede...*, loc. cit., p. 61.

1851 añade que esa dotación se entenderá sin perjuicio del aumento, que se pueda hacer en ella, cuando las circunstancias lo permitan<sup>204</sup>.

Durante el periodo liberal la Iglesia fue perdiendo sus tradicionales fuentes de financiación, desde los bienes raíces hasta los diezmos, primicias y derechos de estola. Antes del concordato de 1851 el ministro Mon estableció las cuatro formas fundamentales de financiación del culto y clero a partir de ese momento: el producto de las rentas retornadas a la Iglesia en virtud de la ley de 3 de abril de 1845; el producto de la bula de cruzada; el producto de las rentas de las encomiendas y maestrazgos de las cuatro órdenes militares y la cuarta, que era el impuesto sobre la propiedad rústica, urbana y la riqueza pecuaria. Con la entrada en vigor del concordato de 1851, su artículo 38 consagra estas formas de financiación<sup>205</sup>.

El artículo 38 del concordato de 1851 establece los fondos, que se utilizarán para la dotación del culto y del clero:

“Los fondos con que ha de atenderse a la dotación del culto y clero serán:

- 1.º El producto de los bienes devueltos al Clero por la ley de 3 de abril de 1845.
- 2.º El producto de las limosnas de la Santa Cruzada.
- 3.º Los productos de las encomiendas y maestrazgos de las cuatro órdenes militares vacantes y que vacaren.
- 4.º Un imposición sobre las propiedades rústicas y urbanas y riqueza pecuaria en la cuota que sea necesaria para completar la dotación, tomando en cuenta los productos expresados en los párrafos 1.º, 2.º y 3.º y demás rentas que en lo sucesivo, y de acuerdo con la Santa Sede, se asignen a este objeto.

El clero recaudará esta imposición, percibiéndola en frutos, en especie o en dinero, previo concierto, que podrá celebrar con las provincias, con los pueblos, con las parroquias o con los particulares, y en los casos necesarios será auxiliado por las autoridades públicas en la cobranza de esta imposición, aplicando al efecto los medios establecidos para el cobro de las contribuciones.

Además se devolverán a la Iglesia, desde luego y sin demora, todos los bienes eclesiásticos no comprendidos en la expresada ley de 1845, y que todavía no hayan sido enajenados, incluso los que restan de las comunidades religiosas de varones. Pero atendidas las circunstancias actuales de unos y otros bienes y la evidente utilidad que ha de resultar a la Iglesia, el Santo Padre dispone que su capital se convierta, inmediatamente y sin demora en inscripciones intransferibles de la Deuda del Estado del 3 por 100, observándose exactamente la forma y reglas establecidas en el art. 35 con referencia a la venta de los bienes de las religiosas.

Todos estos bienes serán imputados por su justo valor, rebajadas cualesquiera cargas, para los efectos de las disposiciones contenidas en este artículo”.

<sup>204</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ REGATILLO, E., *Concordatos*, XXIII, 266, 3, S.T. (1934), p. 241.

<sup>205</sup>.- Vid. JIMÉNEZ-RIDRUEJO AYUSO, J., *Aproximación a las relaciones económicas entre la Iglesia y el Estado en el bienio progresista. Un estudio presupuestario y el hecho desamortizador*, en LA PARRA LÓPEZ, E., y PRADELLS NADAL, J., *Iglesia y Estado en España, Francia e Italia (ss. XVIII al XX)* (Alicante 1991), p. 139.

Se respetan los derechos del clero secular y se les devuelven, en virtud del artículo 38, los bienes que le pertenecieron y que no hayan sido enajenados. Se atiende con preferencia al alto clero, y se le señala una dotación, que, si bien no es exagerada, no deja de contrastar notablemente con la asignada al clero parroquial. Sólo los regulares quedan excluidos de toda participación, de todo derecho; nada dispone acerca de su subsistencia ni de su suerte. La única mención es la del artículo 38, que señala que se adjudiquen a las atenciones del culto y del clero los bienes no vendidos, que pertenecieran a las extinguidas comunidades de varones. Sin dejárseles ningún medio de recursos para su subsistencia<sup>206</sup>.

Se respetan, en el artículo 42 del concordato de 1851, los derechos de los compradores de bienes eclesiásticos<sup>207</sup>.

#### **1.4.8. EL CONVENIO-LEY DE 1859<sup>208</sup>, COMO INTENTO DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS, SURGIDOS CON LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIASTICA.**

La cuestión desamortizadora, ciertamente -y, como veremos, jurisprudencialmente- no es una cuestión pasada y que no atañe a nuestros días. Por el contrario, las leyes desamortizadoras no están -como recuerda CECILIO, en 1972- derogadas; por lo cual hay que hacer la distinción, en cuanto a los bienes adquiridos por la Iglesia, entre los adquiridos después del convenio-ley, de 1860, y los adquiridos con anterioridad al mismo<sup>209</sup>. Efectivamente, el artículo 3 del citado convenio-Ley, de 4 de abril de 1860, dispone que:

“Primeramente, el Gobierno de Su Majestad reconoce de nuevo formalmente el libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar en propiedad y sin limitación ni reserva toda especie de bienes y valores, quedando en consecuencia derogada por este convenio cualquier disposición que le sea contraria, y señaladamente y en cuanto se le oponga, la ley de 1.º de mayo de 1855.

Los bienes que en virtud de este derecho adquiera y posea en adelante la Iglesia no se computarán en la dotación que le está asignada por el concordato”.

Las vicisitudes, por las que pasó la legislación desamortizadora en España, concluyeron con el convenio-ley, de 4 de abril de 1860. En virtud de él, se reconoce la plena facultad de disposición de sus bienes a la Iglesia; ya que, si bien el artículo 3 del convenio es notoriamente impreciso, y no hace referencia a tal facultad de disposición, sin embargo, ésta se deduce claramente de dicho precepto, al reconocer “en propiedad y sin limitación ni reserva alguna”, y al derogar la ley desamortizadora de 1 de mayo de 1855. Pero respecto a los bienes, que la Iglesia adquirió con anterioridad al indicado convenio, continuaron vigentes las indicadas leyes, en virtud de lo cual, hay que considerarlos sometidos en desamortización, y, por tanto, ni son inscribibles a nombre de la Iglesia en el registro de la propiedad, ni puede disponer la Iglesia de

<sup>206</sup>.- Vid. TRONCOSO, J., *El Concordato ó sean breves reflexiones político-religiosas sobre este importante documento*, loc. cit., pp. 34-35.

<sup>207</sup>.- Vid. TRONCOSO, J., *El Concordato ó sean breves reflexiones político-religiosas sobre este importante documento*, loc. cit., p. 34.

<sup>208</sup>.- El convenio entre la Santa Sede y el Gobierno español, adicional al concordato, otorgado en 1859, y publicado como ley, en 4 de abril de 1860, puede consultarse en BLSCO IBÁÑEZ, V., *Cantaclaro. Comentarios al Concordato con la semblanza del autor*, loc. cit., pp. XXXVI-XLII.

<sup>209</sup>.- Vid. CECILIO, L., *El patrimonio eclesiástico en España*, XVI, 43, R.F.D.U.C. (1972), pp. 259-260.

ellos, ya que, con arreglo al procedimiento desamortizador la disposición de ellos se realiza por el Estado<sup>210</sup>. No se aplica esta regla a los bienes exceptuados de desamortización, lo que debe acreditarse mediante traslado de la orden ministerial, en que conste, o mediante certificado del Diocesano, de que se halla comprendido en la lista por triplicado de bienes, no incluidos en los inventarios, de los sujetos a desamortizar. La consecuencia de todo ello es que los bienes, adquiridos por la Iglesia con anterioridad al convenio-ley, de 1860, sometidos a desamortización, y que conserve la Iglesia en su poder, no pueden ser enajenados por ésta, ya que es el Estado, el que debe venderlos<sup>211</sup>. Por todo ello, cabe concluir que, en virtud del artículo 3 del convenio-ley, de 1860, la Iglesia volvió a tener, ante el poder civil, el tratamiento común de toda persona jurídica, quedando plenamente, respetada su propiedad. De hecho, este criterio de respeto a la Iglesia fue ya proclamado con anterioridad al concordato de 1851, cuyo artículo 41 quiso cerrar el ciclo desamortizador de bienes eclesiásticos. Pero sobrevino cierto cambio político, se inició una nueva fase desamortizadora por la ley de 1 de mayo de 1855, poniéndose en estado de venta, nuevamente, los bienes de la Iglesia, hasta que, reanudadas las buenas relaciones con la Santa Sede, se concertó el indicado -y esperado- convenio de 1860<sup>212</sup>.

Entre los bienes inmuebles, procedentes de la Iglesia, que fueron adquiridos por la misma antes del convenio-ley de 1860, hay que distinguir entre sujetos a la desamortización y exceptuados de ella:

- a) bienes sujetos a la desamortización. Lo son todos los no comprendidos en el artículo 6 del convenio-ley<sup>213</sup>. Dicho artículo exceptuaba de la desamortización los bienes siguientes:
  - a.1. los palacios, huertas, jardines u otros edificios, que, en cualquier lugar de la diócesis estén destinados al uso y esparcimiento de los obispos;
  - a.2. las casas destinadas a la habitación de los párrocos, con sus huertos y campos anejos;
  - a.3. los edificios de los seminarios conciliares con sus anejos y las bibliotecas.

<sup>210</sup>.- Vid. PRADA GONZÁLEZ, J., J.Mª., De, *¿Se hallan vigentes aún las leyes desamortizadoras?*, XIII, 37, R.E.D.C. (1958), p. 233.

<sup>211</sup>.- Vid. PRADA GONZÁLEZ, J., J.Mª., De, *¿Se hallan vigentes aún las leyes desamortizadoras?*, loc. cit., p. 233.

<sup>212</sup>.- Vid. CECILIO, L., *El patrimonio eclesiástico en España*, loc. cit., p. 260.

<sup>213</sup>.- Este artículo 6 del convenio-ley, de 1860, nos dice:

“Serán eximidos de la permutación y quedarán en propiedad de la Iglesia en cada diócesis todos los bienes enumerados en los artículos 31 y 33 del concordato de 1851, a saber, los huertos, jardines, palacios y otros edificios que en cualquier lugar de la diócesis estén destinados al uso y esparcimiento de los obispos. También se le reservarán las casas destinadas a la habitación de los párrocos, con sus huertos y campos anejos, conocidas bajo las denominaciones de *iglesarios*, *mansos* y otras. Además, retendrá la iglesia en propiedad los edificios de los seminarios conciliares con sus anejos, y las bibliotecas, y casas de corrección o cárceles eclesiásticas, y en general todos los edificios que sirven en el día para el culto, y los que se hallan destinados al uso y habitación del clero regular de ambos sexos, así como los que en adelante se destinen a tales objetos.

Ninguno de los bienes enumerados en este artículo podrá imputarse en la dotación prescrita para el culto y clero en el concordato.

En fin, siendo la utilidad de la Iglesia el motivo que induce a la Santa Sede a admitir la expreada permutación de valores, si en alguna diócesis estimare el obispo que por particulares circunstancias conviene a la Iglesia retener alguna finca sita en ella, aquella finca podrá eximirse de la permutación, imputándose el importe de su renta en la dotación del clero”.

- a.4. las casas de corrección o cárceles eclesiásticas;
- a.5. edificios, que, a la fecha servían para el culto;
- a.6. los edificios destinados al uso y habitación de los religiosos, de ambos sexos<sup>214</sup>.

Los demás bienes no incluidos en el artículo 6, estaban sujetos a la desamortización; bienes que, por ello, han sido o debían ser enajenados por el Estado. La Iglesia no puede disponer de ellos, ya que son bienes nacionales con arreglo a las leyes desamortizadoras, y esto, aunque se trate de bienes pendientes de permutación. Concertado el convenio-ley de 1860, se reguló la situación de estos bienes, distinguiendo también, los que ya habían sido enajenados, y, lo que no lo habían sido aún. En cuanto a los primeros -enajenados conforme a la ley de 1855-, la Santa Sede les extendió el benigno saneamiento del concordato. Respecto a los segundos -revueltos por el concordato de 1851, y, que aún no se había enajenado-, el Estado reconoció a la Iglesia como propietaria absoluta de los mismos, pero debiendo permutarlos por títulos e inscripciones intransferibles al tres por ciento de la deuda consolidada del Estado. En consecuencia, todos estos bienes de la Iglesia sólo puede enajenarlos el Estado; los unos, por haber sido ya objeto de venta conforme a la desamortización y con saneamiento retroactivo de la Santa Sede; y los otros, porque la Iglesia se comprometió a cederles al Estado en permutación de deuda pública. De aquí que no pueda autorizar instrumento alguno de tipo dispositivo, si no es el Estado, quien le otorga, sobre los bienes procedentes de la Iglesia, que fueron adquiridos por ésta antes del expresado convenio-ley, de 1860, y que no estén, explícitamente, exceptuados de la desamortización<sup>215</sup>. El artículo 20 del reglamento hipotecario, de 14 de febrero de 1947 se refiere a los inmuebles de la Iglesia, que deban enajenarse con arreglo a la legislación deamortizadora<sup>216</sup>.

- b) bienes exceptuados de la desamortización. Son los comprendidos en el artículo 6 del convenio-ley, antes indicado. Estos bienes, por pertenecer a la Iglesia en propiedad libre, pueden ser enajenados por la misma, pudiéndose autorizar por mutación real, exactamente igual, que si hubieran sido adquiridos con posterioridad al referido convenio-ley, pero con una diferencia fundamental: que estos bienes, adquiridos por la Iglesia con anterioridad al convenio-ley, la regla general es que están sujetos a desamortización, lo que viene a constituir una presunción *iuris tantum*, que obliga al notario y al registrador, a reputarlos bienes desamortizables, por lo que haya de demostrar, que están exceptuados de la desamortización, por medio del traslado de la orden ministerial, en que así conste, o mediante certificación

<sup>214</sup>.- Vid. CECILIO, L., *El patrimonio eclesiástico en España*, loc. cit., p. 261.

<sup>215</sup>.- Vid. CECILIO, L., *El patrimonio eclesiástico en España*, loc. cit., pp. 261-262.

<sup>216</sup>.- Este artículo 20 del reglamento hipotecario, de 1947, nos dice:

“Los bienes inmuebles o derechos reales que pertenezcan al Estado o a las Corporaciones civiles o eclesiásticas y deban enajenarse con arreglo a la legislación desamortizadora, no se inscribirán en el Registro de la Propiedad hasta que llegue el caso de su venta o redención a favor de los particulares, aunque entretanto se transfiera al Estado la propiedad de ellos por efecto de la permutación acordada con la Santa Sede”.

expedida por el ordinario respectivo, acreditativa de que la finca o derecho real, de que se trate, figura en las relaciones triplicadas de los bienes no incluidos en los inventarios de los sujetos a desamortización<sup>217</sup>. Así pues, los bienes eclesiásticos, no sujetos a las leyes desamortizadoras, o exceptuados de la misma, conforme a lo expuesto, adquiridos por la Iglesia por cualquier título hábil en derecho son, en general, inscribibles a su favor -artículo 2.6 de la ley hipotecaria, de 8 de febrero de 1946-<sup>218</sup> y para su inscripción le aplica las reglas de los bienes del Estado -artículo 19 del reglamento hipotecario de 14 de febrero de 1947-<sup>219</sup>.

Sea como fuere, lo cierto es que -como es de suponer- no existe en el ámbito civil un precepto expreso, que derogue la legislación desamortizadora, tal y como requiere el artículo 5 del Código Civil<sup>220</sup> -hoy día, y tras la nueva redacción dada al Título Preliminar del Código Civil, por decreto 1.836/1974, de 31 de mayo, publicado en B.O.E., n. 163, de 9 de julio-, en el artículo 2 del Código Civil vigente.

Tampoco parece que el Fuero de los Españoles derogase las indicadas leyes desamortizadoras. De hecho, el reglamento hipotecario, de 14 de febrero de 1947, en su artículo 19, parece darles vigencia, al esclarecer que:

“En la misma forma -se refiere a la misma forma que los bienes del Estado que se regulan en los artículos anteriores- se inscribirán los bienes que pertenezcan a la Iglesia o a las Entidades eclesiásticas, o se les devuelvan, y deban quedar amortizados en su poder”.

Es decir, presupone que hay bienes de la iglesia que no deben quedar amortizados, y limita la inscripción a aquéllos<sup>221</sup>.

La desamortización parecía llegar a feliz término con la real orden de 11 de enero de 1862, que disponía la entrega a los diocesanos de las inscripciones intransferibles de la deuda consolidada del tres por ciento a la que se refería el convenio-ley de 4 de abril de 1860. Mas, una vez éstas en poder de la Iglesia, y, cuando se cobraban los primeros vencimientos de intereses, otra orden del Ministerio de Hacienda suspendió, hasta nuevo aviso, el pago de los mismos. Y, de esta manera, con el paso del tiempo, muchas de aquellas láminas desaparecieron

<sup>217</sup>.- Vid. CECILIO, L., *El patrimonio eclesiástico en España*, loc. cit., p. 262.

<sup>218</sup>.- El artículo 2.6 de la Ley hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, nos dice:

“En los registros expresados en el artículo anterior se inscribirán:

6.º Los títulos de adquisición de los bienes inmuebles y derechos reales que pertenezcan al Estado, o a las Corporaciones civiles o eclesiásticas, con sujeción a lo establecido en las leyes o reglamentos”.

<sup>219</sup>.- Vid. CECILIO, L., *El patrimonio eclesiástico en España*, loc. cit., p. 263. Este artículo 19 del reglamento hipotecario de 1947, nos dice:

“En la misma forma se inscribirán los bienes que pertenezcan a la Iglesia o a las Entidades eclesiásticas, o se les devuelvan, y deban quedar amortizados en su poder”.

<sup>220</sup>.- Vid. PRADA GONZÁLEZ, J., J.Mª., De, *¿Se hallan vigentes aún las leyes desamortizadoras?*, loc. cit., p. 233.

<sup>221</sup>.- Vid. PRADA GONZÁLEZ, J., J.Mª., De, *¿Se hallan vigentes aún las leyes desamortizadoras?*, loc. cit., p. 234.

por múltiples circunstancias<sup>222</sup>. Posteriormente, se buscaron las láminas, que quedaban, y se trató de reconstruir, con la mayor aproximación posible, el importe del patrimonio eclesiástico en este concepto, calculándose en unos 1.200 millones de reales de vellón -equivalentes a unos 400 millones de pesetas antiguas, aproximadamente-. Durante algún tiempo, estuvo en tramitación el expediente de devolución, hasta que el artículo 16 de la ley de presupuestos generales del Estado, correspondiente al bienio 1960-1961, se concretó la transformación de las antiguas láminas en otras de deuda interior, al cuatro por ciento, descontando el veinticinco por ciento de su valor nominal, y con intereses a partir del 1 de enero de 1959 -B.O.E. de 26 de diciembre de 1959-. Como consecuencia, se hará entrega a la Iglesia de una suma, aproximadamente, de 300 millones de pesetas en bonos de deuda pública<sup>223</sup>; lo cual, naturalmente, suponía una gran pérdida para la Iglesia, como consecuencia de la devaluación de la moneda<sup>224</sup>.

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de febrero de 1974<sup>225</sup> contempla la mencionada vigencia de las normas desamortizadoras. En la misma una orden de Frailes Menores Capuchinos pretende recuperar una antigua propiedad, destinada hasta 1968, a cárcel. En sus considerandos, el Tribunal Supremo, nos indica que:

“CONSIDERANDO: Que el motivo segundo del presente recurso correctamente formulado al amparo del núm. 1.º del art. 1692 de la L.E.Civil, por aplicación indebida del párr. 1.º del art. 1963 del C.Civil es estimable porque siendo el Concordato de 1851 y el Convenio Ley de 1860 verdaderos Tratados internacionales, no pueden ser modificados unilateralmente por una de las Altas Partes, por lo que el Derecho común español sólo es aplicable en el desarrollo de los derechos y obligaciones que prevén en tanto no desvirtúen su contenido, como ha reconocido la sentencia de esta Sala de 13 de junio de 1916 al declarar que cualquiera que sea la interpretación que quiera darse a la eficacia que puedan tener las disposiciones legales mencionadas en orden al ejercicio de los derechos de la Iglesia con respecto a la propiedad del Convento de San Pablo, es lo cierto que no pueden ser aplicables al caso de autos lo preceptos de caducidad previstos en las Leyes administrativas ni en las de Derecho común, porque tratándose como se trata de deudas y derechos reconocidos por pactos internacionales convenidos por la Santa Sede en el Concordato de 1851 y Convenio de 1860, no pueden ser aplicables aquéllos, sin que medie el debido Convenio entre ambas partes.

CDO.: Que a mayor abundamiento, tampoco desde el aspecto del Derecho común español existe prescripción de la acción entablada, porque la afectación de los bienes reivindicados, sólo desapareció en el año 1968, al ser trasladados los servicios públicos carcelarios a otros inmuebles, siendo desde entonces cuando podía comenzar el cómputo del plazo prescriptivo, que por tanto en modo alguno se ha consumado.

CDO.: Que la estimación del motivo examinado hace inútil el examen del primero, con el único que podría tener conexión la sentencia de esta Sala de 24 de enero de 1970 (R. 319), por no dar lugar a la casación los considerando que constituyen base indispensable del fallo, procediendo por todo lo expuesto la desestimación íntegra del recurso”.

Otra sentencia del Tribunal Supremo trascendental es la de 10 de diciembre, de 1983. El pleito se plantea entre la orden de los Predicadores Dominicos y el Ministerio de Defensa, sobre

<sup>222</sup>.- Vid. PORTERO SÁNCHEZ, L., *Hacia el fin de la desamortización*, XVII, 49, R.E.D.C. (1962), p. 156.

<sup>223</sup>.- Vid. PORTERO SÁNCHEZ, L., *Hacia el fin de la desamortización*, loc. cit., p. 156.

<sup>224</sup>.- Vid. PORTERO SÁNCHEZ, L., *Hacia el fin de la desamortización*, loc. cit., p. 160.

<sup>225</sup>.- Puede consultarse en la R. 441 del R.J.A.. Hemos suprimido los subrayados.

el actual “Hospital Militar”, antes denominado “Convento de Santiago”, que en su día, fue objeto de desamortización, por real decreto de 1842. Cuando en tiempos recientes, el Ministerio de Defensa lo trata de ceder al Ayuntamiento, la orden de Predicadores y el arzobispado de Pamplona demandan la restitución del inmueble y el reconocimiento de su propiedad. A tal petición se opuso el Abogado del Estado en nombre del Estado español, fallándose en primera instancia a favor de los Predicadores Dominicos; recurrida la sentencia, el Tribunal Supremo la confirma, y ordena, que se le entregue a éstos la posesión del inmueble, que se le inscriba en el Registro de la Propiedad a su nombre, y que se cancele la inscripción, que en él figura a nombre del Estado. Las razones, en que se fundamenta tal decisión, están en que el edificio en cuestión no fue vendido tras la acción desamortizadora, sino que quedó como bien del Estado, de acuerdo con el real decreto de 19 de febrero, de 1936 -artículo 2-, el de 9 de enero de 1875, y las leyes de mayo de 1855. Los bienes no vendidos experimentaron, a través del proceso desamortizador, ciertas limitaciones y alternativas, como la suspensión de ventas, según el real decreto de 26 de julio, de 1844, o la devolución a la Iglesia por ley de 3 de abril de 1845, hasta llegar al concordato de 1851 y la ley de 4 de abril, de 1860, en la que se dice, en su artículo 4, que “el Gobierno de Su Majestad reconoce a la Iglesia como propietaria absoluta de todos y cada uno de los bienes que le fueron devueltos por el concordato”. Estando el citado convento de Santiago, entre aquellos bienes, que no debieron ser devueltos, sin demora, a causa de la utilización pública, no puede achacarse a la Iglesia, el no haberlo vendido -como se preconizaba en la legislación-, y haber empleado su valor en títulos de deuda pública. Por todo ello, parece evidente -dice el Tribunal Supremo-, que, a partir de tal situación, el edificio objeto del litigio ya no pertenecía al Estado, quien únicamente podía detentarlo, como ocupante o poseedor, en atención a su destino -y así se acredita, cuando el 18 de septiembre, de 1900 se insta en el Registro de la Propiedad inscripción de posesión, simplemente-. De este modo, se rechaza el punto base del recurso, que hablaba de errónea interpretación de los artículos 35 y 40 del concordato de 1851. Se rechaza, igualmente el alegato de errónea aplicación del artículo XIX del concordato de 1953, puesto que en dicho precepto, lo que se persigue, es compensar a la iglesia, de forma general, de los perjuicios, que pudiera haberle producido la pasada desamortización, tanto por la venta de sus bienes, como por la ocupación de los mismos, al quedar algunos destinados a servicios públicos. Finalmente, también se rechaza otra serie de argumentos, esgrimidos por el representante del Estado, tales como el hecho de que ahora figure inscrita la propiedad del inmueble a favor de éste, o el que, durante mucho tiempo, se hayan realizado obras de remodelación y mejoras en el mismo<sup>226</sup>.

Como conclusión, y haciendo una valoración de la misma desamortización, puede concluirse que, aunque necesaria, el método escogido para llevarla a cabo, en nada puede alabarse, pues sacar de golpe una ingente cantidad de bienes al mercado, los desvaloriza enormemente, y, únicamente, se beneficiaron, los que tenían ya buenos capitales<sup>227</sup>.

#### **I.4.9. LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DE LA LEY ORGÁNICA 7/1980, DE 5 DE JULIO, DE LIBERTAD RELIGIOSA, COMO ÚLTIMA NORMA LEGAL, REFERIDA A LA DESAMORTIZACIÓN DECIMONÓNICA.**

La disposición transitoria segunda de la ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, puede considerarse, a mi juicio, como un remanente de la legislación desamortizadora

<sup>226</sup>.- Vid. el comentario, a esta sentencia del Tribunal Supremo, de PORTERO SÁNCHEZ, en 40, 117, R.E.D.C. (1984), pp. 535-536.

<sup>227</sup>.- Vid. PORTERO SÁNCHEZ, L., *Hacia el fin de la desamortización*, loc. cit., p. 160.

del siglo XIX. En el mismo se hace mención a bienes inmuebles de las asociaciones religiosas, que aparezcan inscritas a nombre de terceros:

“Las Asociaciones religiosas que al solicitar su reconocimiento legal, de conformidad con lo establecido en la Ley 44/1977, de 28 de junio, hubieran hecho expresa declaración de ser propietarios de bienes inmuebles o de otra clase sujetos a registro público para la plena eficacia de su transmisión, cuya titularidad dominical aparezca a nombre de terceros, y aquellas que habiendo ya formulado ante la Administración esta declaración patrimonial solicitaren su inscripción legal con arreglo a lo prevenido en la presente Ley, podrán, en el plazo de un año, regularizar su situación patrimonial, otorgando los documentos en los que se reconozca la propiedad a favor de las impuestas o utilizando cualquier otro procedimiento legal para justificar adecuadamente su dominio, hasta obtener la inscripción de los títulos en el Registro de la Propiedad, con exención de toda clase de impuestos, tasas y arbitrios que pudieran gravar la transmisión, los documentos o las actuaciones que con tal motivo se originen”.

Los requisitos exigidos por esta disposición adicional segunda de la ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, concurren en el presente caso, ya que la inscripción en el registro de entidades religiosas se intentó al amparo de la ley 7/1980, no produciéndose hasta 1988 por problemas legales independientes de la voluntad de los interesados, existiendo suficientes documentos anteriores, que acreditan que los fundadores de la Iglesia aparecen, como titulares de los bienes, como personas interpuestas<sup>228</sup>.

## **I.5. UN ESTUDIO HISTÓRICO-CONSTITUCIONAL, COMO *FUNDAMENTO* CONSTITUCIONAL DE LA DOTACIÓN Y DE LA MISMA DESAMORTIZACIÓN.**

### **I.5.1. LA CONSTITUCIÓN, DE 1808, COMO NACIMIENTO DE LA CUESTIÓN RELIGIOSA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA, Y NORMATIVA COMPLEMENTARIA.**

En los acuerdos pactados por la Constitución de Madrid, de 4 de diciembre de 1808, se estipuló: “La conservación de la religión católica, apostólica y romana sin tolerancia de otra alguna, así como la conservación de las vidas, derechos y propiedades de los eclesiásticos seculares y regulares, conservándose el respeto debido a los templos conforme a nuestras leyes”. En este pacto se sigue la línea establecida en el texto constitucional. Esta línea, de marcada profesionalidad, se quiebra fácil y rápidamente con las reformas religiosas, que, retiradas en un principio de la Constitución, aparecen ahora. El Santo Oficio queda suprimido y los bienes incorporados a la Corona. Los conventos quedaron reducidos, con el pretexto de que su número era excesivo, y perjudicial a la prosperidad del Estado -decreto de Chamartín-<sup>229</sup>.

De las Cortes emanaron multitud de disposiciones que regularon los fondos de obras pías, la retribución de clérigos, la provisión de beneficios, la enajenación de bienes

<sup>228</sup>.- Vid. resolución del Tribunal Económico-Administrativo, de 11 de enero de 1996, en IV, A.F. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados e impuesto sobre sucesiones y donaciones (1996), p. D-TEAC 30-31.

<sup>229</sup>.- Vid. MONTESINOS I SÁNCHEZ, N., *Aproximación al nacimiento de la cuestión religiosa*, 6, A.U.A (1991), pp. 160-161.

eclesiásticos.. Es el caso de los decretos de 1 de diciembre de 1810, de 16 de abril de 1811, de 22 de agosto de 1811, y órdenes de 17 de abril de 1811, de 6 de mayo de 1811, de 2 de diciembre de 1810, sobre prebendas eclesiásticas; decretos de 28 de enero de 1811, e instrucción de 20 de mayo de 1811 sobre fondos de obras pías, aplicados a gastos del Estado; decreto de 20 de abril de 1811, sobre pensiones eclesiásticas, que se aplican al Estado; y decreto de 8 de mayo de 1811, sobre bienes de iglesia, que tienen el mismo destino. Se establece el secuestro en beneficio del Estado de todos los bienes, pertenecientes a establecimientos públicos, cuerpos seculares eclesiásticos o religiosos de ambos sexos, que hubieran sido disueltos, extinguidos o reformados por resultas de la invasión enemiga y de providencias del Gobierno. La Iglesia pagó, más que ninguna otra organización, el mantenimiento de la guerra de la Independencia, y si dieron oposiciones por parte de prelados fue, fundamentalmente, por considerar que la manera autoritaria con que eran erigidas las exacciones, iba en contra de la inmunidad eclesiástica, o porque, al prohibir la concesión de prebendas, se privaba a los obispos de la libertad y el derecho, que tenían a otorgarlas. Siguiendo la misma línea, por decreto de 1812 quedó suprimida la carga conocida en varias provincias como “voto de Santiago”, o contribución, que era pagada por los campesinos de algunas regiones al cabildo compostelano. Todas estas medidas limitaban, en gran medida, la influencia y actuación de la Iglesia<sup>230</sup>.

### **I.5.2. LA CONSTITUCIÓN DE 18 DE JUNIO, DE 1837<sup>231</sup>, COMO PRIMER RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA DOTACIÓN ESTATAL A LA IGLESIA, TRAS LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIASTICA.**

El artículo 11 de la Constitución de 18 de junio, de 1837<sup>232</sup> está, al menos implícitamente, reconociendo a la religión católica, la que sociológicamente profesan los españoles, en la medida en que se impone a la Nación la obligación, de mantener su culto y los ministros; carga que no se da a favor de ninguna otra confesión religiosa, que la Constitución considera institucionalmente inexistente. A la vez se está, también implícitamente, admitiendo la intolerancia para los demás cultos<sup>233</sup>. El artículo 11 de la Constitución de 1837 es una consecuencia, plasmada constitucionalmente, de la desamortización<sup>234</sup>.

Junto a la Constitución de 1837 se aprueban otras leyes, que permiten seguir la opresión de la Iglesia, con la supresión de conventos y venta de bienes. Por ello, puede afirmarse que la carga de mantener el culto católico y sus ministros, es tan sólo la compensación expropiadora. Aún así, el artículo 11 de la Constitución de 1837, implícitamente, contiene el reconocimiento del servicio, que los ministros encargados de mantener el culto católico, prestan, al sentir religioso unánime del Pueblo, que el Estado mismo, sigue considerando factor decisivo para la

<sup>230</sup>.- Vid. MONTESINOS I SÁNCHEZ, N., *Aproximación al nacimiento de la cuestión religiosa*, 6, A.U.A (1991), pp. 164-165.

<sup>231</sup>.- Sobre la Constitución de 1837, vid. TOMÁS VILLARROYA, J., *El Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837* (Madrid 1985).

<sup>232</sup>.- Este artículo 11 de la Constitución de 1837, nos dice:

“La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles”.

<sup>233</sup>.- Vid. PÉREZ-LLANTADA Y GUTIÉRREZ, J., *¿Ambivalencia política de los regímenes jurídicos españoles de relaciones Iglesia-Estado, anteriores al vigente de 1967?*, XVII, 33, I.C. (1977), p. 326.

<sup>234</sup>.- Vid. MONTESINOS I SÁNCHEZ, N., *La cuestión de la confesionalidad en la historia constitucional española. Un análisis de legislación (1808-1931)*, 51, 136, R.E.D.C. (1994), p. 128.

unidad política nacional<sup>235</sup>. En realidad, las subvenciones, en sentido moderno, aparecen históricamente, consecuencia de las leyes desamortizadoras -por la filosofía de la Ilustración y doctrinas económicas fisiocráticas, entre las que destacan Jovellanos, Campomanes y Floridablanca-. Nuestro primer texto legal, que obliga al Estado, a amparar económicamente, a la Iglesia es, precisamente, el artículo 11 de la Constitución española de 1837<sup>236</sup>.

### **I.5.3. LA CONSTITUCIÓN DE 23 DE MAYO, DE 1845<sup>237</sup>.**

El artículo 11 de la Constitución de 23 de mayo, de 1845 se refiere a la obligación de mantener el culto y sus ministros: “La religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros”.

### **I.5.4. EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN, DE 1856<sup>238</sup>.**

El artículo 14.1 del proyecto de Constitución de 1856 también hace referencia a la obligación de mantener y proteger el culto y los ministros de la religión católica, que profesan los españoles:

“La Nación se obliga a mantener y proteger el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles”.

### **I.5.5. LA CONSTITUCIÓN DE 1 DE JUNIO, DE 1869<sup>239</sup>.**

<sup>235</sup>.- Vid. PÉREZ-LLANTADA Y GUTIÉRREZ, J., *¿Ambivalencia política de los regímenes jurídicos españoles de relaciones Iglesia-Estado, anteriores al vigente de 1967?*, loc. cit., pp. 326-327.

<sup>236</sup>.- Vid. GARCÍA BARBERENA, T., *Las subvenciones económicas a la Iglesia*, en AA.VV., *Iglesia y comunidad política* (Salamanca 1974), pp. 209-210.

<sup>237</sup>.- Sobre la Constitución de 1845, vid. MEDINA MUÑOZ, M.A., *La reforma constitucional de 1845*, 203, R.E.P. (1975), pp. 75-105. Vid. MEDINA MUÑOZ, M.A., *Las Cortes en la Constitución de 1845*, 208-209, R.E.P. (1976), pp. 131-148. Vid. CASANOVA AGUILAR, I., *Las Constituyentes de 1854. Origen y fisonomía general*, 37, R.E.P.N.E. (1984), pp. 135-172. Vid. PÉREZ-PRENDES Y MUÑOZ DE ARRACÓ, J.M., De “*Metafísica constitucional*”. *Ensayo de comentario al Dictamen de “reforma” en 1845*, 39, R.D.Pol. (1994), pp. 9-43. Vid. TOMÁS FONT DE MORA, M<sup>a</sup>.A., *La preparación de la Constitución de 1845*, 73, R.E.P.N.E. (1991), pp. 229-241.

<sup>238</sup>.- Sobre la Constitución de 1856 vid. CANGA ARGÜELLES, J., *La Segunda Base. Reseña histórica y documentos relativos a la base religiosa aprobada por las Cortes Constituyentes de 1854* (Madrid 1855). Vid. CASANOVA AGUILAR, I., *Aproximación a la Constitución nonnata de 1856. Presentación general y primera publicación del texto íntegro* (Madrid 1985). Vid. SEVILLA ANDRÉS, D., *La Constituyente de 1854*, 106, R.E.P. (1959), pp. 129-165.

<sup>239</sup>.- En este período es interesante la siguiente bibliografía. Sobre el período revolucionario, vid. CÁRCCEL ORTÍ, V., *Los Obispos españoles ante la Revolución de 1868 y la Primera República*, XXVIII, H.S. (1975), pp. 339-442. Vid. NÚÑEZ MUÑOZ, M<sup>a</sup>.F., *El episcopado español en los primeros años de la Restauración (1875-1880). Nombramiento de obispos*, XXVII, H.S. (1974), pp. 285-363. Vid. CÁRCCEL ORTÍ, V., *El clero durante la Revolución de 1868 y la Primera República española*, XLVIII, A.S.T. (1975), pp. 149-191. Vid. CÁRCCEL ORTÍ, V., *Instrucciones a Simenoni, primer nuncio de la Restauración*, 33, 94, R.E.D.C. (1977), pp. 143-172. Vid. ARBELOA MURU, V.M., *Los obispos ante la ley de unificación de fueros (notas históricas al Decreto de 6 de diciembre de 1868)*, XXIX, 83, R.E.D.C. (1973), pp. 431-460. Vid. ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, L., *La revolución de 1868 ante la opinión pública alemana. Tomo I. De la crisis de julio a la disolución de las Juntas*

Los obispos se opusieron a jurar la Constitución de 1869, a pesar de que el Papa les dio su permiso, por violar con el artículo 21 los tradicionales principios de unidad católica y los privilegios reconocidos a la Iglesia española en el concordato de 1851<sup>240</sup>.

El 12 de octubre de 1868, ya constituido el gobierno provisional, la Junta Superior acuerda proponer al Gobierno como medidas de urgencia y de salvación pública: la extinción de todas las comunidades y asociaciones religiosas, establecidas desde 1835; la exclaustación voluntaria en las restantes comunidades religiosas; la abolición de los privilegios concedidos a las corporaciones religiosas. El mismo día se suprime la Compañía de Jesús, concediendo un plazo de tres días para cerrar sus centros y ocupar y nacionalizar sus bienes<sup>241</sup>. Efectivamente, por el decreto de 12 de octubre, de 1868 se suprime la Compañía de Jesús, pasando todos sus bienes a la Nación<sup>242</sup>.

El decreto de 18 de octubre, de 1868 -Gaceta del 19- endurece las condiciones, al ordenar no sólo la supresión de las casas extintas, sino además, la reducción -“en cada provincia a la mitad”- de “todos los conventos, monasterios, colegios, congregaciones y demás casas religiosas que quedaron subsistentes por la ley de 29 de julio de 1837” -artículo 5-<sup>243</sup>. En realidad, y como es de suponer, este ambiente revolucionario favorece las continuas violaciones del concordato de 1851<sup>244</sup>.

El decreto de 22 de octubre de 1868 -Gaceta del 29- restablece en toda su fuerza y vigor la ley de regulares, de 29 de julio, de 1837, en lo que concierne a las pensiones percibidas por los religiosos exclaustados. Con ello se suprimen todas las consignaciones estatales para la Iglesia, o, al menos, de las que no se derivasen, estrictamente, de la contraprestación por los bienes desamortizados<sup>245</sup>.

En las Cortes constituyentes de 1869-1871 se adoptaron múltiples medidas anticlericales, como la cesión de los bienes de la desamortización -junio y julio del 69-, la reforma del concordato de 1851 -junio del 69-, las dotaciones del culto y clero -enero, febrero, abril y junio del 70-, y la discusión de los artículos 20 y 21 del proyecto de Constitución<sup>246</sup>.

revolucionarias (Madrid 1976). Vid. CAMPOMAR FORNIELES, M.M., *La cuestión religiosa en la Restauración. Historia de los Heterodoxos españoles* (Santander 1984).

Sobre el período constitucional, vid. DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, J.M.<sup>a</sup>, *La Constitución de 1869 y la Revolución burguesa* (Madrid 1985). Vid. ESPÍN CÁNOVAS, D., *La Constitución de 1869 y la legislación civil española hasta 1874*, 163, R.E.P. (1969), pp. 117-138. Vid. CLAVERO, B., *Por una historia constituyente: 1869, de los derechos a los poderes*, 7, R.C.E.C. (1990), pp. 79-97. Vid. CUADRADO, M.M., *La elección general para Cortes Constituyentes de 1869*, 132, R.E.P. (1963), pp. 65-101. Vid. CARRO MARTÍNEZ, A., *Dos notas a la Constitución de 1869*, XXXVIII, 58, R.E.P. (1951-I), pp. 87-95. Vid. OLTRA, J., *La influencia norteamericana en la Constitución española de 1869* (Madrid 1972). Vid. RODRÍGUEZS GONZÁLEZ, J.J., *La sociedad española ante la libertad religiosa 1869. Valoración cuantitativa*, XXXIX, 79, H.S. (1987), pp. 239-296. Vid. PETSCHEN, S., *Iglesia-Estado. Un cambio político. Las constituyentes de 1869* (Madrid 1975).

<sup>240</sup>.- Vid. HUESO MONTÓN, Á.L., *Los bienes de la Diócesis de Segorbe en el siglo XIX. (Proceso desamortizador)*, XXVIII, H.S. (1975) p. 380.

<sup>241</sup>.- Vid. SÁNCHEZ FÉRRIZ, R., *La Restauración y su Constitución política* (Valencia 1984), p. 335.

<sup>242</sup>.- Vid. ANDRÉS-GALLEGO, J., *La legislación religiosa de la revolución española de 1868 (período constituyente)*, XVII, 33, I.C. (1977), p. 261.

<sup>243</sup>.- Vid. ANDRÉS-GALLEGO, J., *La legislación religiosa de la revolución española de 1868 (período constituyente)*, loc. cit., p. 266; reproduce en su nota 23 este decreto de 18 de octubre de 1868.

<sup>244</sup>.- Sobre tales violaciones del concordato de 1851, en este período revolucionario, vid. CÁRCEL ORTÍ, V., *La Santa Sede y la revolución de 1868*, III, 5, A.V. (1977), pp. 55-113.

<sup>245</sup>.- Vid. ANDRÉS-GALLEGO, J., *La legislación religiosa de la revolución española de 1868 (período constituyente)*, loc. cit., p. 282.

<sup>246</sup>.- Vid. PETSCHEN, S., *El anticlericalismo en las Cortes Constituyentes de 1869-1871*, XXXIV, 64, M.C. (1976-II), p. 67.

El 28 de junio, de 1869 se presenta un proyecto de reforma del concordato, de 1851, para legalizar la nueva situación: el Estado ya no es confesional. Es la Nación, la que, libremente, se ha comprometido, a mantener el culto y los ministros de la religión católica. A consecuencia de la no confesionalidad del Estado, éste proyecta, unilateralmente, modificar no pocos artículos del concordato, de 1851<sup>247</sup>.

El punto culminante de las manifestaciones anticlericales en las Cortes constituyentes lo marcó la discusión de los artículos 20 y 21 del proyecto de Constitución. Además, se trataron otros temas con ideas anticlericales -la cesión de los bienes de la desamortización, en junio y julio del 69; la reforma del concordato de 1851, en junio del 69-<sup>248</sup>.

El debate sobre la cuestión religiosa tenía por objeto el contenido de los artículos 20 y 21 del proyecto de la Constitución, presentado por la comisión constitucional. Los artículos 20 y 21 del proyecto de Constitución de 1869 eran contrarios a la unidad católica de España y la supresión del mantenimiento del culto y clero. El artículo 20 del citado proyecto de Constitución señalaba que “la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica”<sup>249</sup>. Con esta fórmula se hace pública una vinculación de tipo económico, sin aclarar, como quería el obispo de Jaén, que la obligación se fundaba en razones de justicia y con carácter de indemnización<sup>250</sup>. El proyecto de Constitución reconocía el derecho a la libertad religiosa y -sin hacer ninguna declaración explícita de confesionalidad, ni referencia alguna a un posible derecho de la Iglesia, a ser indemnizado por los graves perjuicios, que le originó la desamortización-, el Estado se obliga, a mantener el culto y clero católicos. La discusión, que se suscitó en la Cámara, fue extraordinaria<sup>251</sup>. En vísperas de proclamar una nueva Constitución, la Iglesia católica española defendía el artículo del proyecto de Constitución, que decía que el Estado se comprometía al mantenimiento del culto y clero. Los republicanos se opusieron, porque daría lugar a una Iglesia privilegiada, que ejercería presión sobre las otras Iglesias y sobre el mismo Estado. Pi i Margall, Fernando Garrido y García Ruiz decían que la Hacienda no contaba con recursos, para mantener al clero, y otros, que, si la Iglesia percibía dinero del pueblo, no era necesario, que pagara sus gastos el Estado<sup>252</sup>. Los demócratas aceptaron unas razones similares a las expuestas por los republicanos. Entre ellas, su negativa, a considerar, como indemnización, el mantenimiento por parte del Estado, del culto y clero. A excepción de Moret, ninguno mostró razones para ello y, aunque, por transacción, aceptaron el texto propuesto por los progresistas con respecto al problema del mantenimiento, sin duda, fueron ellos, los que en la comisión no quisieron, que en el artículo figurase el motivo concreto de la indemnización, que podría ligar, jurídicamente, al Estado, impidiendo, en el futuro, la evolución, que ellos deseaban<sup>253</sup>. Un grupo reducido de demócratas, encabezado por Pastor y Huerta, y entre, los que se encontraban Manuel Mereló, Fernández de las Cuevas, Luis de Moliní y Tomás Carretero, firmaron una enmienda, que pretendía, refundir los artículos 20 y 21 del proyecto de Constitución en el siguiente texto:

<sup>247</sup>.- Vid. SANZ DE DIEGO, R.Mª., *La legislación eclesiástica del sexenio revolucionario (1868-1874)*, 200-201, R.E.P. (1975), p. 206.

<sup>248</sup>.- Vid. PETSCHEN, S., *El anticlericalismo en las Cortes Constituyentes de 1869-1871*, loc. cit., p. 67.

<sup>249</sup>.- Vid. PETSCHEN, S., *La cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes de 1869*, XXXII, 60, M.C. (1974-I), pp. 128-129. El citado proyecto de Constitución de 1869 puede consultarse en el *Diario de Sesiones. Cortes Constituyentes de 1869, de 30 de marzo. Apéndice*.

<sup>250</sup>.- Vid. PERLADO, P.A., *La libertad religiosa en las constituyentes del 69*, Pamplona, 1970, pp. 221-222.

<sup>251</sup>.- Vid. PETSCHEN, S., *Posición transaccionista del partido demócrata en las constituyentes de 1869 respecto a las relaciones de la Iglesia y el Estado*, 193, R.E.P. (1974), pp. 118-119.

<sup>252</sup>.- Vid. PETSCHEN, S., *Posición transaccionista del partido demócrata en las constituyentes de 1869 respecto a las relaciones de la Iglesia y el Estado*, loc. cit., p. 139.

<sup>253</sup>.- Vid. PETSCHEN, S., *Posición transaccionista del partido demócrata en las constituyentes de 1869 respecto a las relaciones de la Iglesia y el Estado*, loc. cit., p. 139.

“El Estado garantiza la libertad y la igualdad de todos los cultos. En consecuencia, ni sostiene el culto ni los ministros de la religión católica, ni mantiene relaciones oficiales con Iglesia alguna”.

Tras la discusión, sin embargo, Moret convenció a Mereló y a su grupo, para que retirase la enmienda -a pesar de que, en la votación final, demostraron, conservar su criterio de fondos, con lo que prevaleció el espíritu y actitud transaccionista-<sup>254</sup>.

El artículo 21 de la Constitución, de 1869, nos dice:

“La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica.

El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho.

Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior”.

El artículo 21 de la Constitución de 1869 es un artículo peculiar, ya que ni en él se niega el catolicismo, ni se le reconoce de manera taxativa; más bien se introduce la posibilidad de nuevos cultos, pero de una manera indirecta<sup>255</sup>.

Ciertamente, el artículo 21.1 de la Constitución de 1 de junio, 1869 no innova –por el contrario, reproduce la declaración de 1837- en materia de dotación al culto y los ministros de la religión católica:

“La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica”.

La ley de arreglo del clero, de 22 de marzo, de 1870 representa otro paso más en la separación Iglesia-Estado. Sustancialmente, equipara los sacerdotes con los demás ciudadano, y limita la competencia de los tribunales eclesiásticos. El Estado renuncia, de este modo, al “pase ergio”, a la “agencia de preces” y al “patronato” sobre las piezas eclesiásticas, no subvencionadas por la Nación. El aspecto económico era, sin embargo, el más llamativo de la ley. Prácticamente, reducía a un veinte por ciento la subvención estatal a la Iglesia en comparación con el concordato, de 1851<sup>256</sup>.

El decreto de 16 de enero, de 1871, dedica al culto el producto de las rentas de la cruzada, restableciéndose, así, la práctica antigua, aunque se hacía una excepción con la diócesis de Vitoria<sup>257</sup>.

También hay una exención de impuestos para los sacerdotes, que no cobran sus haberes, por haberse negado, a jurar la Constitución, según estipula el decreto de 27 de noviembre, de 1871<sup>258</sup>.

<sup>254</sup>.- Vid. PETSCHEN, S., *Posición transaccionista del partido demócrata en las constituyentes de 1869 respecto a las relaciones de la Iglesia y el Estado*, loc. cit., pp. 139-140.

<sup>255</sup>.- Vid. MONTESINOS I SÁNCHEZ, N., *La cuestión de la confesionalidad en la historia constitucional española. Un análisis de legislación (1808-1931)*, 51, 136, R.E.D.C. (1994), pp. 137-138.

<sup>256</sup>.- Vid. SANZ DE DIEGO, R.M<sup>a</sup>., *La legislación eclesiástica del sexenio revolucionario (1868-1874)*, loc. cit. p. 207.

<sup>257</sup>.- Vid. SANZ DE DIEGO, R.M<sup>a</sup>., *La legislación eclesiástica del sexenio revolucionario (1868-1874)*, loc. cit. p. 209.

<sup>258</sup>.- Vid. SANZ DE DIEGO, R.M<sup>a</sup>., *La legislación eclesiástica del sexenio revolucionario (1868-1874)*, loc. cit. p. 209.

### 1.5.6. EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN REPUBLICANO, DE 1873<sup>259</sup>.

Sobre este proyecto, de 1873, nos remitimos a la bibliografía, que hemos seleccionado.

### 1.5.7. LA CONSTITUCIÓN DE 29 DE JUNIO, DE 1876<sup>260</sup>.

La Constitución de 29 de junio, de 1876 ha sido el texto fundamental de mayor período de vigencia en nuestra Historia constitucional<sup>261</sup>. La cuestión religiosa es la más debatida en las Cortes de 1876<sup>262</sup>.

El artículo 11.1 de la Constitución de 1876<sup>263</sup> recoge la obligación, tradicionalmente establecida, de dotar el culto y sus ministros:

“La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros”.

<sup>259</sup>.- Sobre el período republicano, vid. FERRANDO BADÍA, J., *La República de 1873: de la República de los Radicales a la de los Federales*, en AA.VV., *Estudios de Ciencia Política y Sociología. Homenaje al Profesor Carlos Ollero* (Madrid 1972), pp. 111-129. Vid. FERRANDO BADÍA, J., *Ocaso de la República española de 1873: la quiebra federal*, 183-184, R.E.P. (1972) pp. 49-65. Vid. LÓPEZ GONZÁLEZ, J.L., *La I República española: Desunión e inestabilidad políticas en el debate parlamentario*, 78, R.E.P.N.E. (1992), pp. 303-330. Vid. FERNÁNDEZ-RÚA, J.L., *1873. La Primera República* (Madrid 1975). Vid. FERRANDO BADÍA, J., *La Primera República española* (Madrid 1973).

<sup>260</sup>.- Sobre la etapa de la Restauración y la Constitución de 1876 es muy importante la siguiente bibliografía: vid. ROBLES MUÑOZ, C., *La Santa Sede ante la Restauración. La conciliación, una opción para el catolicismo*, 33, A.A. (1986), pp. 303-361. Vid. ROBLES MUÑOZ, C., *Frente a la supremacía del Estado. La Santa Sede y los católicos en la crisis de la restauración (1898-1912) (III)*, 37, A.A. (1990), pp. 131-252. Vid. ROBLES MUÑOZ, C., *Frente a la supremacía del Estado. Los católicos y la crisis de la Restauración (1898-1913) (IV)*, 38, A.A. (1991), pp. 229-333. Vid. CÁRCCEL ORTÍ, V., *1874. Comienzo de un siglo de relaciones Iglesia-Estado en España*, XXX, 86, R.E.D.C. (1974), pp. 265-311. Vid. ROBLES MUÑOZ, C., *Política y clero en la restauración, la crisis de 1881-1883*, XXXVIII, 78, H.S. (1986), pp. 355-398. Vid. ROBLES MUÑOZ, C., *Algunos aspectos de la legalidad de la restauración y la Santa Sede (1875-1888)*, XXV, 50, I.C. (1985), pp. 781-817. Vid. SÁNCHEZ FERRIZ, R., *Relaciones Iglesia-Estado: 1874-1875*, 26, R.E.P.N.E. (1982), pp. 77-98. Vid. FERRANDO BADÍA, J., *La República de 1873. Ocasión revolucionaria: Un enfoque parlamentario*, 156, R.E.P. (1967), pp. 119-143. Vid. ÁLVAREZ CONDE, E., *La Constitución española de 30 de junio de 1876: cuestiones previas*, 3, R.E.P.N.E. (1978), pp. 79-99. Vid. ANDRÉS-GALLEGO, J., *Transformación política y actitud religiosa del Gobierno largo de Maura (1907-1909)*, 189-190, R.E.P. (1973), pp. 131-164. Vid. ANDRÉS-GALLEGO, J., *El Estado de la Restauración (I)*, 7, R.D.Pol. (1980), pp. 133-159. Vid. ANDRÉS-GALLEGO, J., *El Estado de la Restauración (II)*, 8, R.D.Pol. (1981), pp. 137-168. Vid. PÉREZ-PRENDES y MUÑOZ DE ARRACO, J.M., *Continuidad y discontinuidad en la Constitución de 1876*, 8, R.D.Pol. (1981), pp. 21-32. Vid. CUADRADO, M.M., *Perspectiva sumaria comparada de dos restauraciones españolas: las de 1875 y 1975*, 8, R.D.Pol. (1981), pp. 97-111. Vid. GARCÍA CANALES, M., *Los intentos de reforma de la Constitución de 1876*, 8, R.D.Pol. (1981), pp. 113-135. Vid. GONZALO, M., y GARCÍA-ATANCE, Mª.V., *Crónica parlamentaria sobre la Constitución española de 1876*, 8, R.D.Pol. (1981), pp. 171-190. Vid. CAMPOMAR FORNIELES, M.M., *La cuestión religiosa en la Restauración. Historia de los Heterodoxos españoles* (Santander 1984). Vid. ROBLES MUÑOZ, C., *Catolicismo antiliberal y restauración (1875-1876)*, 45, H.S. (1993), pp. 707-737. Vid. CLÉMESSY, N., *L'Espagne de la Restauration 1874-1902* (Paris 1973). Vid. AA.VV., *La restauración monárquica de 1875 y la España de la restauración* (Madrid 1978).

<sup>261</sup>.- Vid. MARTÍNEZ SOSPEDRA, M., *Las fuentes de la Constitución de 1876 (Continuidad y cambio en el constitucionalismo español del siglo XIX)*, 8, R.D.Pol. (1981), p. 71. También SANZ DE DIEGO, R.Mª., *La actitud de Roma ante el artículo 11 de la Constitución de 1876*, XXVIII, H.S. (1975), p. 167.

<sup>262</sup>.- Vid. SÁNCHEZ FERRIZ, R., *El artículo 11 de la Constitución de 1876*, 15, R.E.P.N.E. (1980), pp. 119 y ss.

<sup>263</sup>.- Posturas a favor y en contra de este artículo 11 de la Constitución de 1876, vid. SÁNCHEZ FERRIZ, R., *El artículo 11 de la Constitución de 1876*, loc. cit., pp. 119-146.

Este artículo 11 de la Constitución de 1876, según la Santa Sede, no respetaba las disposiciones de los artículos 1, 2 y 3 del concordato de 1851, en vigor entonces<sup>264</sup>. Efectivamente, para el Papa, el artículo 11 de la Constitución de 1876, que admitía la libertad y la tolerancia era contrario al concordato de 1851<sup>265</sup>.

### **1.5.8. LA CONSTITUCIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA, DE 9 DE DICIEMBRE, DE 1931<sup>266</sup>.**

El gobierno provisional de 1931 manifestó su anticlericalismo incluso antes del proceso constituyente. En abril y mayo promulgó una serie de decretos, que, de hecho, derogaban el concordato de 1851<sup>267</sup>. De hecho, la nueva Constitución republicana, aprobada el 9 de diciembre, de 1931, en sus artículos 2, 14, 26, 27, 43, 44 y 48 violaba claramente el concordato de 1851. Por ello, tanto la Santa Sede, como la República, consideraron que el concordato ya no estaba en vigor<sup>268</sup>.

El error de la República fue haber atacado, frontalmente, a la Iglesia y no haber actuado con firmeza contra los ataques, dirigidos contra ella -incendios y saqueos de conventos e Iglesias en mayo de 1931, septiembre-octubre de 1933, octubre de 1934, febrero de 1936, etcétera-<sup>269</sup>.

<sup>264</sup>.- Vid. BARBERINI, G., *El artículo 11 de la Constitución de 1876. La controversia diplomática entre España y la Santa Sede*, 9, A.A. (1961), pp. 279-280, y 293 y ss.

<sup>265</sup>.- Vid. SANZ DE DIEGO, R.Mª., *La actitud de Roma ante el artículo 11 de la Constitución de 1876*, loc. cit. p. 190.

<sup>266</sup>.- La selección de la bibliografía sobre las relaciones Iglesia-Estado, durante la Segunda República, ha sido, necesariamente selectiva: vid. ARBELOA MURU, V.M., *La separación de la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1931*, 34-98, R.E.D.C. (1978), pp. 347-374. Vid. CONTRERAS, M., y MONTERO, J.R., *Una Constitución frágil: revisionismo y reforma constitucional en la II República española*, 12, R.D.Pol. (1981-1982), pp. 23-63. Vid. IBÁN, I.C., *El Derecho eclesiástico de la "Zona Nacional" durante la Guerra Civil (18-VII-1936 a I-IV-1939)*, LVII, A.H.D.E. (1987), pp. 633-663. Vid. ARBELOA MURU, V.M., *El proyecto de Constitución de 1931 y la Iglesia*, XXXII, 91, R.E.D.C. (1976), pp. 87-109. Vid. DE MEER, F., *La Iglesia en la Constitución de la II República española*, 153, Palabra (1978), pp. 19-23.

La legislación de la Segunda República, de carácter eclesiástico es la siguiente:

- Ley de 9 de noviembre, de 1939, restableciendo el presupuesto del clero.
- Decreto de exención de contribución territorial a la Iglesia, de 2 de marzo, de 1939. Con fecha de 11 de marzo se publica una orden relativa a las normas, que había que ajustarse, para aplicar dicha ley.
- Ley de 12 de enero, de 1940, modificando la de los impuestos de derechos reales y transmisiones de bienes y sobre los bienes de las personas jurídicas, en relación con las adquisiciones para la contribución y reparación de templos de la Religión católica.
- Ley de 2 de febrero, de 1939, derogatoria de la de confesiones y congregaciones religiosas, de 28 de julio, de 1932, por ser contraria a la tradición católica española.
- Decreto de 3 de mayo, de 1938, por el que se establece la Compañía de Jesús, disuelta por las fuerzas secretas de la Revolución. Vid. MOLINER PRADA, A., *La Iglesia española y el primer franquismo*, 45, H.S. (1993), pp. 357-358.

<sup>267</sup>.- Vid. GÜNTHER, R., y BLOUGH, R.A., *Conflicto religioso y consenso en España. Historia de dos Constituciones*, 14, R.E.P.N.E. (1980), pp. 65-109 -tr. de J.J. Solozábal Echevarría-.

<sup>268</sup>.- Vid. MARQUINA BARRIO, A., *Introducción histórico-jurídica*, en CORRAL SALVADOR, C., y ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., *De, Los acuerdos entre la Iglesia y España* (Madrid 1980), p. 6.

<sup>269</sup>.- Vid. MOLINER PRADA, A., *La Iglesia española y el primer franquismo*, loc. cit., p. 344.

El anteproyecto de Constitución de la “comisión jurídico asesora”, en su artículo 8 –en el Título I- nos dice:

“No existe religión de Estado.

La Iglesia católica será considerada como Corporación de Derecho Público.

El mismo carácter podrán tener las demás confesiones religiosas cuando lo soliciten y, por su constitución y el número de sus miembros, ofrezcan garantías de subsistencia”<sup>270</sup>.

Aunque en el proyecto de la Constitución se pretendía configurar a la Iglesia católica como corporación de derecho pública, finalmente quedó sujeto a las disposiciones de la ley de congregaciones y confesiones religiosas, de 1933<sup>271</sup>.

El artículo 26 de la Constitución de 9 de diciembre, de 1931, nos dice:

“Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.

Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además, de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéfico y docentes.

Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:

- 1.<sup>a</sup> Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.
- 2.<sup>a</sup> Inscripción de las que deben subsistir, en un Registro especial dependientes del Ministerio de Justicia.
- 3.<sup>a</sup> Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.
- 4.<sup>a</sup> Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
- 5.<sup>a</sup> Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
- 6.<sup>a</sup> Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.

Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados”.

El artículo 26 de la Constitución de 1931 exige que una ley regule la extinción del presupuesto del clero -en el plazo máximo de dos años-. Pero esta ley especial no se puede

<sup>270</sup>.- Vid. el citado anteproyecto de Constitución de la “comisión jurídico-asesora”, íntegro en , 159, R.G.L.J. (1932), pp. 363-388- El proyecto de la “comisión parlamentaria”, puede consultarse en sus pp. 483-509. El texto, ya definitivo, de la Constitución de la República española, de 9 de diciembre de 1931, en sus pp. 723-755. Un estudio de este anteproyecto de constitución, de 1931, en ARBELOA MURU, V.M., *Iglesia y Estado en el anteproyecto de constitución de 1931*, XXVII, 77, R.E.D.C. (1971), pp. 313-347.

<sup>271</sup>.- Vid. ÁLVAREZ DE TOLEDO, J., *La Iglesia católica en la Constitución*, II, 19-20, R.D.Púb. (1933), p. 198.

limitar a declarar extinguido el presupuesto del clero, sino que la Constitución se refiere a un ley, que regule las etapas, que sean prudentes para la gradual supresión del presupuesto del clero hasta la total extinción. Sin embargo, las Cortes Constituyentes y el Gobierno Azaña hicieron la supresión gradual del presupuesto, no por una ley especial, sino por dos leyes ordinarias de presupuestos; la de 1932 y la de 1933. La primera y segunda redujeron las obligaciones eclesiásticas a extinguir a la misérrima cantidad de 4.842.000 pesetas, que permite dar en líquido 43 pesetas escasas al mes a todos los sacerdotes, que el 14 de abril de 1931 tenían título en propiedad y habían cumplido cincuenta años antes del 1 de enero último<sup>272</sup>. Y ello, porque, aunque el 1 de enero de 1933 se extinguiese automáticamente el presupuesto del clero en concepto de derechos adquiridos, debería mantenerse esa exigua pensión<sup>273</sup>.

#### **I.5.8.1. LAS NEGOCIACIONES DE CONCORDATOS EN EL PERÍODO REPUBLICANO.**

La negociación secreta para un acuerdo entre el Estado español y la Iglesia católica española, a fecha de 19 de septiembre, en 1931, en Madrid<sup>274</sup>.

#### **I.5.8.2. LA LEY DE CONFESIONES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS, DE 1933<sup>275</sup>.**

La ley de congregaciones religiosas es inconstitucional y constituye un grave atentado a la libertad, a la propiedad y a la personalidad jurídica de la Iglesia<sup>276</sup>. Es inconstitucional, porque sobrepasa el artículo 26 de la Constitución española, de 1931, y sitúa a la Iglesia católica en un grado de desigualdad respecto a otras confesiones<sup>277</sup>.

#### **I.5.8.3. EL PROYECTO REPUBLICANO DE CONCORDATO, DE 1934, CON LA SANTA SEDE.**

Una cuestión poco conocida –por el carácter secreto de sus negociaciones– es la cuestión del proyecto de concordato, de 1934, durante la Segunda República, iniciado por el Padre Juan Postíus<sup>278</sup>.

<sup>272</sup>.- Vid. YABEN, H., *El Estado y la situación económica del clero*, V, 28, R.E. (1933), pp. 569-570.

<sup>273</sup>.- Vid. YABEN, H., *El Estado y la situación económica del clero*, loc. cit., pp. 571-572.

<sup>274</sup>.- Vid. reproducido y comentado en ARBELOA MURU, V.M., *Los esfuerzos de la jerarquía española por una acuerdo con el Estado en materia religiosa, en 1931*, XXVI, 75, R.E.D.C. (1970), pp. 661-673.

<sup>275</sup>.- Sobre la ley de confesiones y congregaciones religiosas, de 1933, es interesante la siguiente bibliografía: vid. ARZA ARTEAGA, A., *Influencia de la ley de las confesiones y congregaciones religiosas de 1933 en la ley de libertad religiosa de 1967*, 194, R.E.P. (1974), pp. 171-207. Vid. BLANCO NÁJERA, F., *Comentario a la ley de Congregaciones Religiosas*, V, 26, R.E. (1933), pp. 301-312.

<sup>276</sup>.- Vid. BLANCO NÁJERA, F., *Comentario a la ley de Congregaciones Religiosas*, V, 25, R.E. (1933), pp. 174-180.

<sup>277</sup>.- Vid. BLANCO NÁJERA, F., *Comentario a la ley de Congregaciones Religiosas*, V, 26, R.E. (1933), pp. 174-175.

<sup>278</sup>.- El texto del proyecto del concordato del Padre Juan Postíus, puede consultarse en ARBELOA MURU, V.M., *El proyecto de Concordato del Padre Postíus en 1934*, XXIX, 82, R.E.D.C. (1973), pp. 216-220. Vid. sobre la misma ARBELOA MURU, V.M., *En torno al “modus vivendi” de España con el Vaticano en 1934*, 33, 95-96, R.E.D.C. (1977), pp. 505-520.

Proyecto del Padre Juan Postíus, que fue presentado al Ministro de Estado el 28 de julio de 1934, bajo el título “Sugerencias para un Concordato con España”,<sup>279</sup>.

#### **I.5.9. EL ARTÍCULO 6 DEL FUERO DE LOS ESPAÑOLES, DE 17 DE JULIO, DE 1945<sup>280</sup>.**

Este artículo 6 del Fuero de los Españoles, de 17 de julio, de 1945, nos dice:

“La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial.

El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público”.

---

<sup>279</sup>.- Vid. ARBELOA MURU, V.M., *En torno al “modus vivendi” de España con el Vaticano en 1934*, loc. cit., p. 205.

<sup>280</sup>.- Sobre este artículo 6 del Fuero de los Españoles, vid. FUENMAYOR, A., De, *Estado y Religión. (El artículo 6.º del Fuero de los Españoles)*, 152, R.E.P. (1967), pp. 99-120. Vid. MARTÍN, I., *La libertad religiosa en la Ley Orgánica del Estado*, 182, R.E.P. (1972), pp. 181-215.

## II. CAPÍTULO SEGUNDO: EL CONCORDATO ESPAÑOL ENTRE LA SANTA SEDE Y EL ESTADO ESPAÑOL, DE 27 DE AGOSTO, DE 1953.

### II.1. EL SISTEMA DE DOTACIÓN DEL CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL ESTADO ESPAÑOL, DE 27 DE AGOSTO, DE 1953<sup>1</sup>. UN MOMENTO HISTÓRICO TRANSCEDENTAL EN LA HISTORIA ECLESIASTICA: EL CONCILIO VATICANO II (1962-1965).

El convenio entre el Gobierno y la Santa Sede acerca del modo de ejercicio del privilegio de presentación, de 7 de junio, de 1941, se incorporó, posteriormente, en los artículos VII y VIII del concordato español, de 1953<sup>2</sup>. En el acuerdo de 7 de junio, de 1941, se van a solucionar los más graves problemas hasta entonces planteados, como eran los de la vigencia o no del concordato de 1851, la confesionalidad del Estado español, la tutela de la ortodoxia y la enseñanza de la religión, la libertad de los prelados en el ejercicio de sus funciones y el Derecho de patronato y nombramiento de obispos<sup>3</sup>. Sin embargo, ni el convenio de 7 de junio, de 1941, ni el de 16 de julio, de 1946, son un concordato propiamente dicho, ni por el contenido ni por su forma. No lo es por su contenido, porque los convenios son parciales, mientras que un concordato pretende ser un ordenamiento jurídico del conjunto. Además, tanto por razones históricas, como jurídicas, el convenio de 16 de julio, de 1946, se puede considerar como un complemento del convenio de 7 de junio, de 1941<sup>4</sup>. Ni el convenio de 7 de junio, de 1941, ni el de 16 de julio, de 1946 hablan nunca del derecho de patronato, utiliza el circunloquio: “sobre los que el Rey de España gozaba de particulares privilegios”. Además, utiliza la expresión “privilegio de presentación”. De hecho, el título que lleva el Boletín Oficial del Estado en el convenio de 1941 es: “convenio acerca del modo del ejercicio del privilegio de presentación”.

<sup>1</sup>.- Por “dotación”, cabe entender “la consignación y entrega de una determinada cantidad de dinero, periódicamente, del Estado a la Iglesia, para contribuir a los gastos de la misma Iglesia”. Esta dotación, que puede realizarse de muchas maneras, se entiende incluida en el presupuesto estatal; la “financiación de la Iglesia”, por el contrario, es un concepto más amplio: “la ordenación económica de todo el quehacer externo de la Iglesia, cualquiera que fuera este quehacer, y cualquiera que fuera la forma jurídica que adopte ese quehacer”. Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, XIX, 37, I.C. (1979), p. 306.

<sup>2</sup>.- Vid. MAESTRE ROSA, J., *Los nombramientos episcopales y las circunscripciones eclesísticas dentro de la problemática que plantea la revisión del Concordato español de 1953*, 191, R.E.P. (1973), pp. 171-195. Estos artículos VII y VIII del concordato español, de 1953, nos dice:

“VII. Para el nombramiento de los Arzobispos y Obispos residenciales y de los Coadjutores con derecho de sucesión, continuarán rigiendo las normas del Acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de junio de 1941.

VIII. Continuará subsistiendo en Ciudad Real el Priorato *Nullius* de las Órdenes Militares.

Para el nombramiento del Obispo Prior se aplicarán las normas a que se refiere el artículo anterior”.

Sobre el concordato de 1941, vid. PÉREZ MIER, L., *La Acción Católica en los Concordatos*, 3, Ecclesia (1941), p. 22. Vid. *El acuerdo firmado con la Santa Sede*, 12, Ecclesia (1941), pp. 16-17. Vid. *El acuerdo con Roma* (editorial), 13, Ecclesia (1941), p. 2.

<sup>3</sup>.- Vid., MARQUINA BARRIO, A., *La diplomacia vaticana y la España de Franco (1936-1945)*, loc. cit., pp. 15-16, en el Prólogo de J. Giménez y Martínez de Carvajal.

<sup>4</sup>.- Vid. PÉREZ DE MIER, L., *El convenio español para la provisión de beneficios no consistoriales*, III, R.E.D.C. (1946), pp. 729-775.

Sin embargo, el derecho de presentación, tal y como lo recoge los convenios de 1941 y de 1946, es cosa nueva y totalmente diferente del real patronato y del simple derecho de patronato<sup>5</sup>.

El concordato entre el Estado español y la Santa Sede, fue firmado el 27 de agosto, de 1953<sup>6</sup>. El concordato, aunque es frecuente en los Estados confesionales, no es un requisito indispensable de los mismos y puede existir también en los Estados separatistas<sup>7</sup>. Las características del concordato son las siguientes: a) es un concordato complejo, porque abarca las cuestiones que afectan a la Iglesia y al Estado; b) es un concordato íntegro -de tesis-, ya que recoge en su artículo numerosos preceptos de Derecho eclesiástico y los desarrolla; además es un concordato de amistad, en cuanto que no viene a poner término a un período de lucha<sup>8</sup>.

El concordato de 1953 no es un concordato de pacificación, como lo fue el de 16 de marzo de 1851, que vino a poner fin a una serie de atropellos, que había sufrido la Iglesia en España en la primera mitad del siglo décimonono. El concordato de 1953 se ha celebrado en un ambiente de cordialidad y mutua cooperación entre la Iglesia y España<sup>9</sup>. El concordato de 1953, en su conjunto, no crea una situación jurídica nueva en España, sino que consagra, solemnemente, y por escrito, una situación creada en España a lo largo de los años de la postguerra<sup>10</sup>.

<sup>5</sup>.- Vid. PÉREZ DE MIER, L., *El convenio español para la provisión de beneficios no consistoriales*, loc. cit., p. 734.

<sup>6</sup>.- Ratificándose en 26 de octubre, y publicado en el *Boletín Oficial del Estado* del 19 de noviembre. Entre la bibliografía sobre el concordato de 1953, destaca la siguiente: vid. DIEGO-LORA, C., *Ámbito de las jurisdicciones eclesiástica y civil en el Concordato Español de 1953*, III, I-II, I.C. (1963), pp. 507-677. Vid. MARTÍN, I., *Libertad de la Iglesia y Concordatos. Reflexiones sobre la reforma del Concordato de 1953*, XIV, 37, R.F.D.U.M. (1970), pp. 7-36. Vid. PÉREZ MIER, L., *El Concordato español de 1953: significación y caracteres*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 7-41. Vid. FOGLIASSO, E., *El nuevo Concordato español y el Derecho público eclesiástico*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 43-63. Vid. ALONSO MORÁN, S., *Los clérigos y los cargos públicos en el Concordato español*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 79-89. Vid. ALONSO LOBO, A., *Las actividades de la Acción Católica según el Concordato español*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 91-115. Vid. CABREROS DE ANTA, M., *Los religiosos en el Concordato de 1953*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 117-136. Vid. MARTÍNEZ ALEGRÍA, A., *La parroquia de Valcarlos y el nuevo concordato español*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 203-208. Vid. USEROS CARRETEROS, M., *A propósito de la neutralidad confesional del Estado y el nuevo Concordato español*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 225-239. Vid. RÍUS SERRA, J., *El Decreto sobre el alcance del artículo 6.º del Concordato*, II, R.E.D.C. (1954), pp. 353-378. Vid. PÉREZ MIER, L., *Dos obras del Derecho concordatario*, II, R.E.D.C. (1954) pp. 515-528. Vid. *¿Algo nuevo sobre el Concordato?* (editorial), 835, V.N. (1972-I), p. 5. Vid. *El espíritu del Concordato* (editorial), 853, V.N. (1972-II), p. 5. Vid. *Diga usted lo que piensa sobre el Concordato* (editorial), V.N. (1971-II), p. 5. Vid. *Sondeo de opinión sobre el Concordato*, 766, V.N. (1971-II), pp. 32-35. Vid. MOYA, R., *El Concordato en las actuales relaciones entre la Iglesia y el Estado*, 49, *Angelicum* (1972), pp. 348-366. MIGUÉLEZ DOMÍNGUEZ, L., *El concordato entre la Santa Sede y el Estado español*, III, R.D.N. (1954), pp. 7-48. Vid. FERNÁNDEZ REGATILLO, E., *El concordato español visto desde fuera*, 151, R. Y F. (1955), pp. 341-360. Vid. OLIVARES, E., *La autoridad eclesiástica competente en los Concordatos*, 91, *Proyección* (1974), pp. 170-176. Vid. GUTIÉRREZ TEJERINA J., *Sobre el Concordato español*, III, 4, *Colligite* (1957), pp. 50-59. Vid. CORRAL SALVADOR, C., *El Concordato español de 1953 en revisión*, 57, 2, S.T. (1969), pp. 83-98. Vid. CORRAL SALVADOR, C., *El Concordato español de 1953 en revisión*, XV, 60, *Colligite* (1969), pp. 56-57. Vid. MUÑOZ PALACIOS, R., *Concordatos y sociedad democrática*, XLVI, 399, H.D. (1966), pp. 716-721. Vid. PACIOS GALLEGOS, H., *Trayectoria de un Concordato*, XVII, 65, *Colligite* (1971), pp. 50-88. Vid. CIERCO, E., *Concordato, legislación española y Concilio*, XLIII, 367, H.D. (1966), pp. 730-741. Vid. CIERCO, E., *Concordato, legislación española y concilio*, XLIII, 368, H.D. (1966), pp. 823-835. Vid. BIDAGOR, J., *El concordato de 1953: expresión jurídica de las relaciones entre la Iglesia y el nuevo Estado*, en AA.VV., *Iglesia y sociedad en España: 1939/1975* (Madrid 1977).

<sup>7</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Régimen de confesionalidad y laicidad o separación: valoración y perspectivas*, XXXV, 66, M.C. (1977-I), p. 44.

<sup>8</sup>.- Vid. MARTÍN MARTÍNEZ, I., *En el segundo centenario del Concordato español de 1753*, en MARTÍN MARTÍNEZ, I., *Sobre la Iglesia y el Estado*, loc. cit., p. 393.

<sup>9</sup>.- Vid. *La firma del Concordato* (editorial), 633, *Ecclesia* (1953-II), p. 3.

<sup>10</sup>.- Vid. GARCÍA BARBERENA, T., *Breve comentario al Concordato*, II, *Lumen* (1953), p. 274.

Es difícil aceptar que el concordato español de 1953, fuera acusado, en los años sesenta, de “viejo”; cuando en esos momentos, estaban vigentes el concordato portugués, de 1940, el alemán, de 1933, el austríaco de esa misma fecha, el italiano, de 1929 y -para Alsacia y Lorena- el napoleónico, de 1801. Máxime cuando el concordato alemán, de 1933, se celebró en tiempos de Hitler, el italiano en tiempos de Mussolini y en Alsacia, con Napoleón. Por todo ello, el envejecimiento tan prematuro, se debe, en realidad, a su propia imperfección<sup>11</sup>. Sin embargo, en el número 50 del documento de *La Iglesia y la comunidad política* de 23 de enero de 1973, nos dice: “Todo el mundo conviene hoy en que el concordato suscrito en 1953 entre la Santa Sede y el Estado español debe ser sometido a revisión”, porque “no responde ya ni a las verdaderas necesidades del momento ni a la doctrina establecida por el concilio Vaticano II”<sup>12</sup>.

Un momento trascendental en las relaciones Iglesia-Estado, y que, en realidad, propició la “caída” del concordato español, de 1953, fue la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965)<sup>13</sup>.

Aunque en el artículo XXXVI del concordato de 1953 se establecía expresamente que el Estado español promulgaría en el plazo de un año las disposiciones de derecho interno, que fueran necesarias para la ejecución del concordato. Plazo que, con creces, no se cumplió en numerosos aspectos<sup>14</sup>.

El artículo IV del concordato de 1953<sup>15</sup> reconoce la plena capacidad, de adquirir, poseer y administrar, pero silencia la facultad, de disponer -y, precisamente, las leyes desamortizadoras juegan sobre dicha facultad de disposición, impidiendo hacerlo a la Iglesia, y traspasando aquella facultad al Estado-. Civilmente, en efecto, se separa la facultad de administrar de la de disponer, y, si bien las relaciones entre una y otra son dudosas, parece evidente, que el concepto de administración, en principio al menos, no implica una facultad de disponer, sin perjuicio de que no repugne tampoco un concepto de administración, que incluya dicha facultad La

<sup>11</sup>.- Vid. HERA PÉREZ-CUESTA, A., De La., *Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España (1953-1974)*, 211, R.E.P. (1977), pp. 13-14.

<sup>12</sup>.- Vid. MARTÍN MARTÍNEZ, I., *La Iglesia y la comunidad política. Documentos colectivos de los Episcopados católicos de todo el mundo 1965-1975* (Madrid 1975), p. 26.

<sup>13</sup>.- Sobre este momento histórico trascendental, hemos seleccionado la siguiente bibliografía: vid. TARÍO BERCOZANA, A., *Relaciones del Estado español con la Iglesia a la luz del Concilio Vaticano II*, 178, R.E.P. (1971), pp. 174-175.

<sup>14</sup>.- Vid. TAPIADOR PERAL, A., *El derecho -canónico y civil- de sepultura, a los cinco años del Concordato*, 895, *Ecclesia* (1958-II), pp. 11-12.

<sup>15</sup>.- Sobre este artículo IV del concordato de 1953 es interesante, amén de la bibliografía citada, la siguiente: vid MARTÍN SÁNCHEZ, C.I., *Notas sobre la personalidad de los entes eclesiásticos en el Derecho español*, 185, R.E.P. (1972), pp. 209-237.

Este artículo IV del Concordato de 1953 se refiere a la problemática cuestión, que ha recorrido todos los textos con la Santa Sede:

“1. El Estado español reconoce la personalidad jurídica y la plena capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes a todas las instituciones y asociaciones religiosas, existentes en España a la entrada en vigor del presente Concordato, constituidas según el Derecho Canónico; en particular, a las Diócesis con sus instituciones anejas, a las Parroquias, al as Órdenes y Congregaciones religiosas, las Sociedades de vida común y los Institutos seculares de perfección cristiana canónicamente reconocidos, sean de derecho pontificio o de derecho diocesano, a sus provincias y a sus casas.

2. Gozarán de igual reconocimiento las entidades de la misma naturaleza que sean ulteriormente erigidas o aprobadas en España por las Autoridades eclesiásticas competentes, con la sola condición de que el decreto de erección o de aprobación sea comunicado oficialmente por escrito a las Autoridades competentes del Estado.

3. La gestión ordinaria y extraordinaria de los bienes pertenecientes a entidades eclesiásticas o asociaciones religiosas y la vigilancia e inspección de dicha gestión de bienes corresponderán a las Autoridades competentes de la Iglesia”.

disposición, pues, del artículo IV del concordato de 1953 deja perplejo al intérprete, ya que si verdaderamente se hubiera querido desautorizar la opinión, que da por vigentes las indicadas leyes, habría sido muy oportuno, o bien una declaración expresa derogatoria, o bien, al menos, la concesión clara de una facultad de disposición a la Iglesia, que silencia el artículo IV del concordato de 1953<sup>16</sup>. Y esto es tanto más grave, cuanto que la “plena capacidad”, que reconoce el precepto, parece luego limitarse a las tres series de actos, que añade: “adquirir, poseer y administrar”<sup>17</sup>. Quizás, el punto de apoyo a una interpretación, que, incluya la facultad de disposición, entre las reconocidas a la Iglesia en el artículo IV del concordato de 1953, se halle en el último párrafo, que habla, para atribuirlo a la Iglesia de “gestión ordinaria y extraordinaria”. Hoy va adquiriendo más difusión, la idea de que, junto a una *administración ordinaria*, existe otra *extraordinaria*, formada por actos de disposición. Quizás esta interpretación amplia del término administración pudiera salvar la incongruencia, que implica el artículo IV.1 del concordato de 1953, y suprimiría, de una vez, el anacronismo, que significa la vigencia actual de la legislación desamortizadora, aunque sea dentro de muy estrictos términos. Sin embargo, de la lectura del precepto, parece desprenderse, que los autores del concordato de 1953 no tuvieron en cuenta, al redactarlo, la existencia de la legislación en cuestión, ya que, de otra suerte, resulta incomprensible no hicieran alguna referencia a la misma<sup>18</sup>.

La declaración sobre “La Iglesia y la comunidad política”, de 1973, entiende que el tema de la ayuda económica a la Iglesia es propio para engendrar equívocos, sobre todo porque falta en muchos el conocimiento de la razón de esa ayuda y porque no se tiene un concepto exacto de la misión que cumple la Iglesia en la sociedad. Para los obispos españoles en este documento esta colaboración económica del Estado a favor de la Iglesia se justifica hoy por dos motivos. En primer lugar, con un sentido más profundo, como un servicio a los ciudadanos para el desarrollo de su misión religiosa. En segundo término, como una ayuda al esfuerzo constante de la Iglesia a favor de los necesitados y de la promoción humana. Por estos servicios sabe la Iglesia que no puede reclamar nada y que cualquier ayuda, dicen los obispos, que reciba va siempre destinada al servicio de Dios y a la salvación de los hombres –párrafo 60-. En este documento se hace una distinción entre las prestaciones, para retribuir a las personas eclesiásticas y destinadas a servicios educativos y asistenciales o a la conservación del tesoro religioso histórico-artístico o a la reparación de templos y otros inmuebles<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup>.- Vid. PRADA GONZÁLEZ, J., J.M<sup>a</sup>., De, *¿Se hallan vigentes aún las leyes desamortizadoras?*, loc. cit., pp. 235-236.

<sup>17</sup>.- Vid. PRADA GONZÁLEZ, J., J.M<sup>a</sup>., De, *¿Se hallan vigentes aún las leyes desamortizadoras?*, loc. cit., p. 236.

<sup>18</sup>.- Vid. PRADA GONZÁLEZ, J., J.M<sup>a</sup>., De, *¿Se hallan vigentes aún las leyes desamortizadoras?*, loc. cit., p. 236.

<sup>19</sup>.- Vid. MARTÍN MARTÍNEZ, I., *La revisión del Concordato de 1953 en la perspectiva del episcopado español* (Madrid 1974), pp. 36-37.

El artículo XIX del concordato de 1953<sup>20</sup> no habla de bienes muebles o inmuebles, sino, simplemente, de un “patrimonio eclesiástico”, constituido por un conjunto de bienes, que para ser eclesiástico debería estar en manos de alguna persona jurídica eclesiástica, que no determina el concordato quién ha de ser; ni tampoco se ha determinado nada después, porque todo lo referente al patrimonio aludido en el artículo XIX ha quedado en letra muerta<sup>21</sup>. El artículo XIX.1 del concordato de 1953 dice que: “La Iglesia y el Estado estudiarán, de común acuerdo, la creación de un adecuado patrimonio eclesiástico que asegure una congrua dotación del culto y del clero”. Aún cuando la expresión “estudiarán, de común acuerdo” podría significar un mero estudio y no una obligación, a juicio de ARZA ARTEAGA, éste no sería el sentido de la expresión, como se puede deducir del párrafo siguiente, en el que se indica que, mientras tanto, es decir, mientras no se cree el patrimonio, el Estado asignará, anualmente, una cantidad para esta dotación. Ese patrimonio comprendería un conjunto de bienes, muebles o inmuebles, de cuyo interés cada año la Iglesia podría subvenir a los gastos del culto y clero, como una congrua o adecuada dotación<sup>22</sup>. De la contextura del artículo se deduce que el patrimonio, aún cuando sea estudiado por ambas partes contratantes, Iglesia y Estado, lo debería constituir el Estado, como aparece claramente en el apartado 2 del mismo artículo XIX. Este patrimonio, una vez constituido, se convertiría en un patrimonio eclesiástico, es decir, su propiedad pasaría a ser de la Iglesia, la cual, por sus representantes legítimos, haría su distribución de los intereses o rentas, según las necesidades del culto y clero<sup>23</sup>. La constitución de un patrimonio eclesiástico, previsto en el artículo XIX del concordato de 1953 es uno de los puntos, que han permanecido como letra muerta. Acaso porque el tema es demasiado difícil y complicado y cualquier

<sup>20</sup>.- Este artículo XIX del concordato de 1953, nos dice:

“1. La Iglesia y el Estado estudiarán, de común acuerdo, la creación de un adecuado patrimonio eclesiástico que asegure la congrua dotación del culto y del clero.

2. Mientras tanto el Estado, a título de indemnización por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos y como contribución a la obra de la Iglesia a favor de la Nación, le asignará anualmente una adecuada dotación. Ésta comprenderá, en particular, las consignaciones correspondientes a los Arzobispos y Obispos diocesano, los Coadjutores, Auxiliares, Vicarios Generales, los Cabildos Catedralicios y de las Colegiatas, el Clero parroquial así como las asignaciones a favor de Seminarios y Universidades eclesiásticas y para el ejercicio del culto.

Por lo que se refiere a la dotación de Beneficios no consistoriales y a las subvenciones para los Seminarios y las Universidades eclesiásticas, continuarán en vigor las normas fijadas en los respectivos Acuerdos del 16 de Julio y 8 de Diciembre de 1946.

Si en el futuro tuviese lugar una alteración notable de las condiciones económicas generales, dichas dotaciones serán oportunamente adecuadas a las nuevas circunstancias, de forma que siempre quede asegurado el sostenimiento del culto y la congrua sustentación del clero.

3. El Estado, fiel a la tradición nacional, concederá anualmente subvenciones para la construcción y conservación de Templos parroquiales y rectorales y Seminarios; el fomento de las Órdenes, Congregaciones o Institutos eclesiásticos consagrados a la actividad misional y el cuidado de los Monasterios de relevante valor histórico en España, así como para ayudar al sostenimiento del Colegio Español de San José y de la Iglesia y Residencia españolas de Monserrat, en Roma.

4. El Estado prestará a la Iglesia su colaboración para crear y financiar Instituciones asistenciales a favor del clero anciano, enfermo o inválido. Igualmente asignará una adecuada pensión a los Prelados residenciales que, por razone de edad o salud, se retiren de su cargo”.

<sup>21</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, XXXV, 66, M.C. (1977), p. 91.

<sup>22</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., p. 137.

<sup>23</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., p. 138.

solución tiene inconvenientes notorios<sup>24</sup>. La constitución del patrimonio, del que habla el concordato de 1953, hubiera tenido graves dificultades en la forma de su constitución, como fundación o un patrimonio, destinado a sufragar con sus intereses los gastos del culto y la sustentación del clero. Su administración hubiera creado graves dificultades, sobre todo, cuando no estaba constituida la Conferencia Episcopal y también hubiera sido difícil hablar de Iglesia pobre, cuando tuviera un patrimonio, que aseguraba los gastos del culto y el sustento del clero. Desde la constitución del presupuesto o dotación del culto y clero ha sido una aspiración constante de la Iglesia tener una dotación suficiente e independiente. Esta independencia la consideraba la Iglesia en dos sentidos: una en el sentido de que la Iglesia pudiera disponer de este patrimonio libremente, sin tener que depender del Estado para ello, y otra que la dotación estatal no coartara la libre acción pastoral de la Iglesia. El Gobierno aceptó la posible formación de un patrimonio económico para la Iglesia, pero sólo como declaración de principios, porque sabía que técnicamente era casi imposible la constitución de ese patrimonio; pero si hubiera sido posible su constitución el Estado hubiera puesto la mayoría de obstáculos a su creación, porque, con ello, la Iglesia se independizaría demasiado del Estado y podía tener en su seno un agente peligroso<sup>25</sup>. Como las altas partes contratantes sabían, que era prácticamente imposible la constitución de este patrimonio, establecieron una forma de suplir ese patrimonio, de manera que el clero tuviera su honesta y adecuada sustentación y el culto estuviera suficientemente bien atendido en sus gastos. Por eso, el concordato, en su artículo XIX.2, establece: “Mientras tanto el Estado, a título de indemnización por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos, y como contribución a la obra de la Iglesia a favor de la Nación, le asignará anualmente una adecuada dotación” -artículo XIX.2 del concordato de 1953-. El patrimonio de la Iglesia tenía que ser el medio, que asegurara a la Iglesia una dotación adecuada del culto y clero. En el número 2 habla de adecuada dotación para ambos fines, a saber, para el culto y para el sostenimiento del clero. Esta asignación nunca ha sido excesivamente generosa. No sería hasta 1957, cuando se equiparó la dotación de los párrocos a la de los maestros de entrada y la de los demás en la misma proporción. Pero esta disposición nunca se llevó a la práctica en su totalidad. Además, los maestros en sus percepciones económicas nunca han sido funcionarios, que gozaran de grandes sueldos, antes al contrario los sueldos de los maestros, hasta casi nuestros días, han sido casi siempre deficientes<sup>26</sup>.

La finalidad de este patrimonio es, solamente, la subvención o dotación del culto y del clero. Es decir, solamente se hace este patrimonio para pagar los gastos, que produce la realización del culto en todos sus aspectos de templos, objetos de culto, gastos derivados de los actos, etcétera, y la dotación del clero en todo su contenido, de una dotación congrua para su sustento y para sus seguros, aunque para esto el Estado se compromete en un apartado sin referencia a este patrimonio<sup>27</sup>. Pero, sin duda, la constitución de este patrimonio, tiene graves dificultades, tanto en la cuantía, como en la forma de constitución:

- a) En la cuantía. Si efectivamente de los intereses de este patrimonio se habían de pagar todos los gastos del culto y toda la dotación del clero, esto hubiese requerido un capital, que produjese cada año unos cuantiosos intereses. La cuantía del patrimonio hubiera tenido que ser tan grande, que ha resultado

<sup>24</sup>.- Vid. MARTÍN MARTÍNEZ, I., *La revisión del Concordato de 1953 en la perspectiva del episcopado español* (Madrid 1974), pp. 36-37 y 39.

<sup>25</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *El nuevo sistema de dotación económica del Estado a la Iglesia* (Salamanca 1988), p. 54.

<sup>26</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *El nuevo sistema de dotación económica del Estado a la Iglesia* (Salamanca 1988), p. 55.

<sup>27</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., p. 138.

imposible constituir un patrimonio, que pudiera, realmente, producir esos intereses al año. Por otra parte, si la Iglesia iba a poseer, en propiedad, ese patrimonio, lógicamente, tendría que exigir un patrimonio, por el que pudiera subvenir holgadamente las necesidades del culto y del clero, y no se hubiera contentado, con unas cantidades, que hubieran podido bastar, para resolver las situaciones, con una estrechez agobiante. Quizá, la única solución hubiera sido que la Iglesia, cada año, hubiese realizado reservas de los bienes recibidos del Estado, educando, previamente, a los gastos del culto y clero. Quizá no se hubiese llegado a alcanzar ese patrimonio suficiente, para poder solucionar todos los problemas económicos de la Iglesia, pero hubiese tenido un fondo, para ayuda, de las necesidades más graves, o un fondo, al menos, básico, para todos los gastos del culto y clero; y un pueblo educado, para poder suplir la falta, que, desde esa base, necesitaba el culto y clero de una adecuada dotación. Todo ello ha llevado, a que, al finalizar la vigencia del concordato de 1953, la Iglesia se encontrase sin un fondo, y, al mismo tiempo, con un pueblo, sin una educación suficiente, para poder ayudar a su propio clero, y a los gastos del culto, al menos, en gran parte<sup>28</sup>.

- b) En cuanto a la forma. Si se hubiese llegado a alcanzar ese patrimonio, posiblemente hubiese tenido, dentro de la legislación eclesiástica, la forma de un instituto no colegiado, es decir, un conjunto de bienes, cuyos réditos están destinados a la dotación del culto y clero, y al que la autoridad eclesiástica competente, le hubiera dado personalidad jurídica. Las dificultades, si se hubiera creado, hubieran surgido en su administración; porque un fondo de bienes tan grande, como tendría que ser ese patrimonio, hubiera exigido una administración muy compleja y una distribución muy perfilada, y, ambas cosas, son muy difíciles y muy costosas. Sin embargo, con la constitución de la Conferencia Episcopal -tal y como hoy día ocurre-, la administración y la distribución no hubiera sido cosa tan difícil; pero hubiera planteado el inconveniente de que el capital, con sus rentas, daría la impresión, de que los sacerdotes y la Iglesia son ricos, a pesar de haber sido legítimamente adquiridas. Otro problema era -y es-, que esos bienes tienen que estar invertidos, de alguna manera, en inversiones productivas, es decir, en un sistema capitalista, con ello, la Iglesia, colaboraría a mantener ciertas empresas capitalistas, y, entre éstas, las más rentables a poder ser, porque una buena administración debería buscar el mayor interés posible, dentro de una legalidad de la empresa, en que se invierten esos bienes<sup>29</sup>.

Lo cierto es que dicho patrimonio nunca se ha creado; quizá le hubiera proporcionado a la Iglesia su independencia económica. Al Estado, ciertamente, no le interesaba la creación de este patrimonio, ni desde el punto de vista económico, ni político, porque con una independencia económica, la independencia de la iglesia, para el cumplimiento más integro de su misión, hubiera sido mucho mayor<sup>30</sup>. Por ello, una de las dos cuestiones, que el concordato de 1953, deja pendiente es la creación de un adecuado patrimonio eclesiástico, que asegure la dotación del culto y del clero -artículo XIX.1 del concordato de 1953-. Algunas tentativas, para iniciar la creación de este patrimonio, ya las hizo el Gobierno en el artículo 16 de la ley de 23 de

<sup>28</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., pp. 138-139.

<sup>29</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., pp. 139-140.

<sup>30</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., p. 140.

diciembre, de 1959, de presupuestos, con la conmutación de ciertos títulos, pertenecientes a diversas diócesis. Mas la confusión de aquellos títulos era tal, que no pudo disiparse y se desistió, por entonces, de la práctica de aquella gestión de un capital, que podía ser una partida de aquel patrimonio; y hubo que seguir con el presupuesto del culto y clero, que se consiguió con el concordato de 1851, que se suprimió por la Segunda República, siendo restablecido por Franco por ley de 9 de diciembre, de 1939; y ratificado en el artículo XIX del concordato de 1953, en tanto no se realizase la creación del mencionado patrimonio<sup>31</sup>. La ley de 20 de julio, de 1957, asigna a los curas párrocos un sueldo idéntico al de la categoría de entrada de los maestros de primera enseñanza<sup>32</sup>.

ARZA, en 1977, proponía educar al pueblo para poder ayudar a su propio clero a los gastos de culto. Este fue el principal problema, a que dio lugar un mal planteamiento del artículo XIX del concordato, que proponía crear un adecuado patrimonio del clero. Tal patrimonio no se ha creado, pero si se hubiera logrado habría supuesto una independencia económica de la Iglesia. Lo cierto es que al Estado no le interesaba la creación de este patrimonio, pues una independencia económica de la Iglesia hubiera dado lugar a una independencia mayor de la Iglesia<sup>33</sup>.

El artículo XIX.2 del concordato de 1953, a diferencia del vigente acuerdo sobre asuntos económicos de 1979, menciona la desamortización como título legitimador de tales indemnizaciones:

“Mientras tanto el Estado, a título de indemnización por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos y como contribución a la obra de la Iglesia a favor de la Nación, le asignará anualmente una adecuada dotación. Ésta comprenderá, en particular, las consignaciones correspondientes a los Arzobispos y Obispos diocesanos, los Coadjutores, Auxiliares, Vicarios Generales, los Cabildos Catedralicios y de las Colegiatas, el Clero parroquial así como las asignaciones a favor de los Seminarios y Universidades eclesiásticas y para el ejercicio del culto”.

El concordato de 1953 señala, expresamente, los títulos, que justifican la aportación del Estado. Dos son los títulos, que señala el concordato en este apartado segundo del artículo XIX: indemnización por las pasadas desamortizaciones y contribución de la Iglesia a favor de la nación. El concordato asumía la indemnización por las desamortizaciones, como un título válido para justificar la aportación. Cuando se hizo el concordato, todos los canonistas asumían como válido este título, aunque algunos, sobre todo políticos, consideraban que la indemnización ya no tenía o no podía tener lugar por haber pasado tanto tiempo después de la desamortización. Les parecía que había prescrito ya esa situación. Sin embargo, tanto el Gobierno de España, como la Santa Sede, consideraban que aún era exigible esa indemnización y así lo admitió la Iglesia y lo asumió el Estado. Este título desaparece en los nuevos acuerdos. El segundo título, que se aduce, es el de la contribución a la obra de la Iglesia a favor de la Nación. Este es el posible título, que se puede aducir, para justificar la aportación del Estado actualmente en los acuerdos. El Estado consideraba la aportación como una contribución a la obra de la Iglesia a favor de la Nación, es decir, consideraba que prestaba una ayuda a la Iglesia en su obra a favor de la Nación. Esta acción de la Iglesia a favor de la Nación hay que catalogarla entre aquellas acciones, por las que la Iglesia no recibe una paga. Por eso hay que

<sup>31</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ REGATILLO, E., *Los veinte años del Concordato*, XXIX, 83, R.E.D.C. (1973), p. 489.

<sup>32</sup>.- Vid. BERNABÉ, J.A., *Hacia un nuevo estatuto económico de la Iglesia española*, 59, 3, S.T. (1971), pp. 212-213.

<sup>33</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., p. 140.

compensarle económicamente. No se aduce, como título, a pesar de declararse el Estado confesional, el que los ministros de la Iglesia hacen posible a los ciudadanos la práctica de su religión, que es también la del Estado. Esto daría a los ministros de la religión cierto aspecto de funcionarios del Estado y en el concordato se ha querido evitar, sin duda, este sentido peyorativo para los ministros de la religión y el sentido de intromisión del Estado en la acción de la Iglesia<sup>34</sup>.

Efectivamente, tal dotación va, generalmente, a las consignaciones del personal eclesiástico y para el ejercicio del culto. No se establecen cantidades fijas, sino que eso queda a la determinación del Gobierno, que, en sus presupuestos anuales, determina la cantidad, que ha de destinarse a estos fines<sup>35</sup>. Entre las personas, a las que se concedía tal asignación, estaban: los obispos, en todos sus grados, los vicarios generales, el clero parroquial. También en este mismo artículo, se comprendían las asignaciones para el clero o cabildo catedral y las asignaciones para los seminarios y universidades eclesiásticas<sup>36</sup>.

En enero de 1969 se plantea un problema con la paga de los sacerdotes, que renunciaron a la misma. Efectivamente, cuarenta y tres sacerdotes de la archidiócesis de Barcelona renunciaron al sueldo, que percibían del Estado -párracos, coadjutores, profesores del seminario-. La cantidad que han dejado de percibir asciende a unas 140.000 pesetas, es decir, unas 3.300 por sacerdote. Con ello querían testimoniar la libertad de la Iglesia frente a los poderes públicos, y demostrar que el sacerdote no es un funcionario del culto. Estos sacerdotes, para su sostenimiento, trabajan en diversos menesteres<sup>37</sup>. Eventualmente, la dotación económica a la Iglesia católica se utilizó por alguna personalidad política, como arma arrojadiza, de lo que se presumía -ante los progresivos deseos de independencia eclesial- ingratitud de la Iglesia al régimen. A finales de 1972, el Vicepresidente del Gobierno, Almirante Carrero Blanco, en un discurso pronunciado en diciembre ante el Consejo de Ministros, lamentaba la ingratitud de la Iglesia, recordando la cifra de trescientos mil millones de pesetas, como suma de la ayuda económica, prestada a la Iglesia por el régimen de Franco<sup>38</sup>.

El artículo XX.3 del concordato de 1953 dispone: “Están igualmente exentas de todo impuesto o contribución, las dotaciones del culto y clero a que se refiere el artículo XIX, y el ejercicio del ministerio sacerdotal”. Las dotaciones, que enumera el artículo XIX del concordato son las correspondientes a los arzobispos, y obispos residenciales, los coadjutores, auxiliares, vicarios generales, cabildos catedrales y de las colegiadas, el clero parroquial y las que se figuren a favor de los seminarios y universidades eclesiásticas y para el ejercicio del culto<sup>39</sup>. La orden del Ministerio de Hacienda de 6 de julio de 1955 aclaró que “la exención concedida por el número 3 del artículo XX del concordato celebrado entre la Santa Sede y el Estado español, de todo impuesto o contribución sobre las dotaciones del culto y clero a que se refiere el artículo XIX y el ejercicio del ministerio sacerdotal, ha de entenderse que afecta única y exclusivamente, en cuanto a las percepciones de carácter personal, a los haberes de las clases eclesiásticas que se satisfacen con cargo a los presupuestos del Estado y que se sometían al

<sup>34</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *El nuevo sistema de dotación económica del Estado a la Iglesia*, loc. cit. pp. 56-57.

<sup>35</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., pp. 140-141.

<sup>36</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., p. 141.

<sup>37</sup>.- Vid. *Cuarenta y tres sacerdotes de Barcelona renuncian al sueldo del Estado*, 1424, *Ecclesia* (1969-I), p. 31. Sobre esta cuestión vid. también *El problema de la paga de los sacerdotes*, 668, V.N. (1969-I), pp. 3-4. Vid. BUQUERAS SEGURA, M<sup>a</sup>.E., *Posición del Episcopado español ante la revisión del Concordato de 1953*, XXIII, 45, I.C. (1982), p. 412.

<sup>38</sup>.- Vid. BUQUERAS SEGURA, M<sup>a</sup>.E., *Posición del Episcopado español ante la revisión del Concordato de 1953*, loc. cit., p. 414.

<sup>39</sup>.- Vid. PÉREZ HERNÁNDEZ, A., *Exenciones tributarias en el Concordato de 1953*, III, I-II, I.C. (1963), p. 455.

descuento del Donativo del Clero y Monjas, según el real decreto de 3 de enero de 1928”. Esta interpretación unilateral, que en la práctica es correcta -porque de hecho, no venía exigiéndose el impuesto de utilidades ni la contribución industrial por el ejercicio del ministerio sacerdotal- no es válida legalmente, pues olvida que los eclesiásticos pueden tener otras percepciones de carácter personal, que no se satisfacen con cargo a ninguna consignación presupuestaria, sino que proceden del ejercicio ministerial -tales como los estipendios de misas manuales, los derechos de estola, las gratificaciones por la predicación, las remuneraciones asignadas a los capellanes no beneficiados, etcétera-, que, normalmente, estarían sujetas al impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal, pero que se hallan exentas, en virtud de lo dispuesto en el número 3 del artículo XX del concordato<sup>40</sup>. En cambio, todas las demás percepciones de los eclesiásticos por el ejercicio de una actividad distinta del ministerio sacerdotal, están sujetas al impuesto sobre el rendimiento del trabajo personal, tal y como establece la regla general del artículo XX.4 del concordato de 1953, cuando dice que “todos los demás bienes de entidades o personas eclesiásticas, así como los ingresos de éstas que no provengan del ejercicio de actividades religiosas propias de su apostolado quedarán sujetos a tributación conforme a las leyes generales del Estado, en paridad de condiciones con las demás instituciones o personas”<sup>41</sup>.

El artículo XX.3 del concordato de 1953, nos recuerda que “están igualmente exentas de todo impuesto o contribución, las dotaciones del culto y clero a que se refiere el artículo XIX, y el ejercicio del ministerio sacerdotal”. En este aspecto es interesante el acuerdo de 17 de julio, de 1967, del Tribunal Económico-Administrativo Central, que se declara la exención del impuesto, que grava las sucesiones -bienes de personas jurídicas- de los títulos de deuda pública, que poseía una diócesis, producto de la desamortización, y correspondiente al concepto de “clero por permutaciones” del tres por ciento consolidado, y permutarse por otros de deuda perpetua interior al cuatro por ciento<sup>42</sup>. El Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de octubre, de 1969, vuelve a pronunciarse sobre una cuestión parecida<sup>43</sup>.

<sup>40</sup>.- Vid. PÉREZ HERNÁNDEZ, A., *Exenciones tributarias en el Concordato de 1953*, loc. cit., pp. 455-456.

<sup>41</sup>.- Vid. PÉREZ HERNÁNDEZ, A., *Exenciones tributarias en el Concordato de 1953*, loc. cit., pp. 456-457.

<sup>42</sup>.- Vid. PORTERO SÁNCHEZ, L., *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*, XXIV, 68, R.E.D.C. (1968), p. 392. El Tribunal Económico-Administrativo Central, en este acuerdo de 17 de julio de 1967, fundamentó su fallo en considerar, que los rendimientos de la inscripción nominativa no transferible a favor de las monjas de la diócesis están afectos, legalmente, a las atenciones del culto y clero, de que habla el concordato en el artículo XX del concordato, de 1953. Ello es consecuencia, según este Tribunal, de lo concertado en el convenio de 4 de abril, de 1860, la real orden de 14 de enero, de 1862 y la orden ministerial de 26 de noviembre, de 1948, que ordena alzar la suspensión del pago de intereses de las inscripciones por permutación de bienes del clero y monjas y da reglas para la conversión de la clave de deuda con arreglo a las disposiciones vigentes. Vid. PORTERO SÁNCHEZ, L., *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*, XXIV, 68, R.E.D.C. (1968), p. 392.

<sup>43</sup>.- El supeusto, que se planteaba, era el siguiente: unas monjas de la diócesis de Tortosa recibieron, en 1966, cédulas de deuda pública, procedentes del reparto de un lote de ellas, entregadas por el Estado a la Iglesia. Al inscribirlas a su nombre, solicitaron la exención del impuesto sobre sucesiones de bienes de las personas jurídicas, cosa que le fue denegada por la Dirección General de lo Contencioso. El Tribunal Económico-Administrativo Central rectificó, posteriormente, el primer fallo, accediendo a lo pedido, y el Abogado del Estado interpuso recurso contencioso-administrativo, por entender que dicho fallo era lesivo. El Tribunal Supremo estima el recurso, en sentencia de 23 de octubre, de 1969, y confirma el primer fallo denegatorio de exención. Las razones que se aducen, son las siguientes: que se trata de una confrontación entre los preceptos de la ley de reforma tributaria, de 11 de junio, de 1964, y los del concordato, de 1953; que, en la primera disposición citada, el artículo 136 declara “exentos el dominio de los bienes y demás derechos reales impuestos sobre los mismos pertenecientes: a la Iglesia, con sujeción a lo previsto en el artículo XX del Concordato”. Ahora bien, en el artículo XX.3 del concordato, de 1953, se declara exento de todo impuesto o contribución -además de los que, específicamente, cita en sus dos primeros números- las dotaciones del culto y clero, a que se refiere el artículo XIX; y éste, a su vez, después de decir que la Iglesia y el Estado estudiarán, de mutuo acuerdo, la creación de un adecuado patrimonio eclesiástico, establece, que, mientras tanto, el Estado asignará, anualmente, una adecuada dotación. De todo ello, se deduce que el caso estudiado no se puede encuadrar ni en el artículo XIX ni en el XX del concordato de 1953. No en el primero, pues el patrimonio eclesiástico no se ha creado aún; ni en el segundo, porque no se trata de la dotación del

La dotación del culto y clero a que se refiere el artículo XIX del concordato de 1953 queda también exenta del impuesto y contribución. Comprende, naturalmente, todas las asignaciones mencionadas en el apartado 2 del mismo artículo XIX; pero no queda meridianamente claro, que alcance a las subvenciones de las que habla en los siguientes apartados. Sin embargo, parece por la propia ley tributaria, que alcanza también a éstas. El impuesto del que quedan exento es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales *inter vivos*. En efecto, la ley tributaria, en su artículo 146, afirma:

“Estarán exentos:

8) Las subvenciones, primas, anticipos sin interés y auxilios concedidos por el Estado, organismos autónomos y corporaciones locales”<sup>44</sup>.

El concordato de 1953 prevé, en su apartado 3 del artículo XIX.2<sup>45</sup>, la posibilidad de alteración, acordando las partes contratantes, que, en caso de notable alteración de las condiciones económicas generales, dichas asignaciones serían, oportunamente, adecuadas a las nuevas circunstancias, de forma que quedase siempre asegurado el sostenimiento del culto y congrua sustentación del clero. Disposición que, durante gran período de tiempo, se incumplió, pues las cantidades, que recibieron los sacerdotes, y aun los mismos obispos del Estado, permaneció “congelada”, e, incluso, se incumplió la normativa de 20 de julio de 1957 -B.O.E. de 30 de junio de 1957-, que equiparaba la dotación de los párrocos a la de los maestros de entrada y de los demás en la misma proporción. Tal disposición nunca se llevó a la práctica<sup>46</sup>.

Pero la Iglesia, como es de suponer, no sólo recibe, según este concordato de 1953, la dotación del culto y clero, sino que, por convenios diversos, recibe también otras dotaciones, que quedarían también suprimidas, al cesar el concordato. El artículo 9 del convenio sobre los beneficios no consistoriales, de 1946, afirma que:

“El Gobierno español conservará las dotaciones señaladas a los beneficios objeto del presente Convenio, en la cuantía consignada actualmente.

Si en el futuro se verificasen cambios notables en las condiciones económicas generales, las dotaciones del Gobierno se acomodarán a la nueva situación en la medida no inferior al valor real de las asignadas actualmente”.

Todos los canónigos de las iglesias catedrales tienen en España unas asignaciones, lo mismo que los beneficiados, de determinadas colegiadas y de las capillas de los Reyes de Toledo, de los Reyes Católicos de Granada y de San Fernando de Sevilla<sup>47</sup>.

A lo largo de todo el concordato aparecen diversas subvenciones, que el Estado se compromete a prestar a la Iglesia, con motivo de determinados actos o de determinadas

culto y clero, anualmente incluida en presupuesto. Vid. PORTERO SÁNCHEZ, L., *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesíásticas*, XXVI, 74, R.E.D.C. (1970), p. 408.

<sup>44</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., pp. 133-134.

<sup>45</sup>.- En el mismo se recoge estas ideas:

“Si en el futuro tuviese lugar una alteración notable de las condiciones económicas generales, dichas dotaciones serán oportunamente adecuadas a las nuevas circunstancias, de forma que siempre quede asegurado el sostenimiento del culto y la congrua sustentación del clero”.

<sup>46</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., pp. 141-142.

<sup>47</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., p. 142.

situaciones concretas. Tales obligaciones son, realmente, una obligación a una promesa de parte del Estado. Veámoslas:

- a) Diócesis. En las nuevas Diócesis, que se vayan a crear, el Estado se compromete a proveer a las necesidades económicas, aumentando, adecuadamente, la dotación establecida en el artículo XIX. Pero además, el Estado se compromete a contribuir con una subvención extraordinaria a los gastos iniciales de la organización de las Diócesis nuevas; en particular, se subvencionará la construcción de las nuevas catedrales y de los edificios destinados a la residencia del prelado, oficinas de la curia y seminarios diocesanos -artículo IX.3 del concordato de 1953-<sup>48</sup>.
- b) Parroquias. En la creación de nuevas parroquias, si esta creación implica un aumento de la contribución económica del Estado, el obispo deberá comunicar dicha creación a la competente autoridad del Estado, y ponerse de acuerdo con ella, por lo que se refiere a dicha contribución económica -artículo XI.1,2 del concordato de 1953-. En caso de que la Autoridad eclesiástica considere oportuno agrupar, de modo provisional o definitivo, varias parroquias, el Estado mantendrá inalterables las dotaciones asignadas a dichas parroquias. Las dotaciones para las parroquias, que estén vacantes, no pueden ser distintas de las dotaciones para las parroquias, que estén provistas -artículo XI.2 del concordato de 1953-. Esta conservación de las dotaciones de las parroquias vacantes ha permitido a muchos obispos maniobrar con esos fondos, para poder solucionar muchos problemas económicos. La dotación del culto y clero de que habla el artículo XIX no obligaba al Estado a mantener estas dotaciones a las parroquias vacantes, sobre todo, cuando la obligación se refería en este artículo al clero parroquial y no, precisamente, a las parroquias<sup>49</sup>.
- c) Subvenciones anuales. El Estado se compromete, en el artículo XIX.3 del concordato de 1953, a conceder subvenciones anuales para diversos fines:
  - constitución y conservación de templos parroquiales.
  - construcción y conservación de casas rectorales y seminarios;
  - el cuidado de los monasterios de relevante valor histórico en España;
  - fomento de órdenes, congregaciones e institutos eclesiásticos consagrados a la actividad misional;
  - para la ayuda al sostenimiento del Colegio español de San José en Roma;
  - ayuda a la Iglesia y Residencia españolas de Monserrat, en Roma.

Estas subvenciones, como se ve, son para los más variados fines. Muchas de estas obligaciones fueron, en su momento, cumplidas por el Estado; pero, si alguna vez, el Estado no ha llegado a conceder algunas subvenciones, tampoco se puede imponer al Estado la obligación de asumir

<sup>48</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., pp. 144-145.

<sup>49</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., p. 122.

la conservación o construcción de todos los templos parroquiales, casas rectorales, seminarios, etcétera.

- d) Instituciones asistenciales para el clero. El Estado prestará su colaboración para crear y financiar instituciones asistenciales a favor del clero anciano, enfermo o inválido –artículo XIX.4 del concordato de 1953-. Ha sido, en este campo, donde menos se ha alcanzado.
- e) Pensiones a los prelados retirados. El Estado se compromete a asignar una pensión adecuada a los prelados residenciales, que, por razones de edad o salud, se retiran de su cargo -artículo XIX.4 del mismo concordato de 1953-.
- f) Casas de formación de congregaciones religiosas. El Estado procurará ayudar económicamente, en la medida de lo posible, a las casas de formación de las órdenes y congregaciones religiosas, especialmente a aquellas de carácter misional -artículo XXX.1,3 del concordato de 1953-. La ayuda de que se habla aquí alcanza a todos los gastos de estas casas -manutención de los miembros en formación, conservación de los recursos...-. La cláusula “en la medida de lo posible”, parece indicar que el Estado no se obliga a subvenir a todos los gastos, sino, limitadamente. Aunque parece ser que, durante la vigencia del concordato de 1953, el Estado fue generoso para con muchas de estas instituciones<sup>50</sup>.

Realmente las concesiones obtenidas por la Iglesia para sus bienes eclesiásticos fueron muy reducidas y casi todas estaban ya concedidas a la Iglesia en la ley tributaria anterior al concordato. Las concesiones en el régimen tributario son más bien de tipo de exenciones o bonificaciones, otorgadas a bienes muy concretos y a determinadas clases de impuestos y no a otros a los que pudieran estar sujetos esos bienes<sup>51</sup>.

El régimen fiscal de las exenciones del artículo XX del concordato de 1953 representa una novedad muy notable en el ordenamiento jurídico español. En el concordato de 1851, anterior al de 1953, no figuraba ninguna estipulación sobre esta materia; únicamente el artículo 31 del concordato de 1851, relativo a las dotaciones e los obispos, decía que estas dotaciones no sufrirían descuento alguno, aunque refiriéndose más bien a los gastos de las Bulas. Y no vale la pena acudir a otros convenios más antiguos, porque, en realidad, el sistema tributario español tiene su origen en la ley de presupuestos de 1845, refrendada por D. Alejandro Moon, y es sólo a partir de entonces, cuando se sistematizan los impuestos estatales<sup>52</sup>. Sin embargo, el Estado español, en épocas de confesionalismo religioso, ha concedido unilateralmente algunas exenciones tributarias a favor de la Iglesia, cuya vigencia ha corrido paralela a las fluctuaciones políticas del país. Ya la ley de 29 de diciembre de 1910, recogiendo y ampliando el precedente de la de 18 de junio de 1885, al enumerar en su artículo 14 los bienes inmuebles exentos a perpetuidad de la contribución territorial, incluía los templos católicos y los huertos y jardines destinados al servicio de los mismos o a habitación y recreo de los obispos y párrocos, así como los seminarios conciliares; y el decreto-ley de 3 de abril de 1925, relativo al régimen catastral, extendió el mismo beneficio a los edificios ocupados por las casas religiosas. Pero con el advenimiento de la Segunda República este decreto-ley quedó derogado por la de 6 de agosto de

<sup>50</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., pp. 145-146.

<sup>51</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., p. 122.

<sup>52</sup>.- Vid. PÉREZ HERNÁNDEZ, A., *Exenciones tributarias en el Concordato de 1953*, loc. cit., p. 421. Otros autores, por el contrario, opinan que aunque el concordato de 1953 en materia de exenciones y bonificaciones de impuestos en bienes inmuebles es donde se ha considerado que la Iglesia obtuvo mayores ventajas, realmente las concesiones obtenidas por la Iglesia fueron muy reducidas y casi todas ya se les había concedido en la ley tributaria anterior al concordato. Vid. ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, loc. cit., p. 122.

1932<sup>53</sup>. El problema, que ha planteado este artículo XX es que el Ministerio de Hacienda, no adoptó, en un amplio período de tiempo, ninguna medida a este respecto. Por esta razón el Ministerio de Justicia remitió el asunto al Consejo de Estado, el cual, después de recabar los informes de los servicios competentes -dictamen n.º 16.080, de 14 de julio de 1955- dictaminó, que el concordato tiene fuerza de ley, desde el momento, en que fue ratificado por las Cortes -24 de octubre de 1953- y, a tenor de lo estipulado en el artículo XXXVI.2 del concordato de 1953, con la entrada en vigor del mismo se entienden derogadas todas las disposiciones contenidas en leyes, decretos, órdenes y reglamentos, que, en cualquier forma, se opongan, a los que en él se establece. En consecuencia -sigue diciendo el Consejo de Estado-, las exenciones fiscales del concordato tienen, en el orden sustantivo, plena fuerza de obligar por sí mismas, sin que sea preciso dictar norma alguna complementaria, para que tenga plena eficacia, debiendo limitarse la actuación reglamentaria, en este orden, a la mera transcripción del texto concordado en la normativa de cada impuesto o contribución de índole estatal o local -dictamen n.º 20.679, de 13 de julio de 1957-. Sobre lo que no se pronunció el Consejo de Estado es, si la aplicación de las exenciones a cada caso concreto, ha de hacerse de oficio o a instancia de parte. Quizá no pueda establecerse una regla general, sino que el criterio dependa de la naturaleza de cada impuesto<sup>54</sup>.

El artículo XXXV.1 del concordato de 1953 nos dice:

“La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Concordato, inspirándose para ello en los principios que lo informan”.

## II.2. EL ANTEPROYECTO OFICIAL DEL CONCORDATO, DE 1970<sup>55</sup>.

En el editorial de Vida Nueva -núm. 769, de 13 de febrero, de 1971-, se recogen los textos del anteproyecto del concordato. Gran sorpresa y decepción causó. Aunque se habla de la existencia de un segundo anteproyecto, atribuido a Mons. Benelli, y hasta de un tercero, que se adscribía al subsecretario del ministerio de Justicia, la realidad es que la jerarquía y el gobierno, oficialmente, señalaban que sólo ha existido un único anteproyecto oficial. Ha sido un simple retoque; una actualización del mismo en su expresión y en su adaptación conciliar<sup>56</sup>. Las

<sup>53</sup>.- Vid. PÉREZ HERNÁNDEZ, A., *Exenciones tributarias en el Concordato de 1953*, loc. cit., pp. 421-422.

<sup>54</sup>.- Vid. PÉREZ HERNÁNDEZ, A., *Exenciones tributarias en el Concordato de 1953*, loc. cit., p. 425.

<sup>55</sup>.- Sobre los preceentes a la modificación del concordato de 1953, que se inicia a principios de la década de los setenta, puede citarse la siguiente bibliografía: vid. ORTEGA, J.L., *La reactivación de las negociaciones en torno al Concordato ¿Noticia o rumor?*, 852, V.N. (1972-II), pp. 6-7. Vid. *Puntualizaciones sobre un Anteproyecto de Concordato*, 763, V.N. (1971-II), p. 7. Vid. *El anteproyecto del Concordato preparado conjuntamente por la Santa Sede y la Embajada de España*, 1523, Ecclesia (1971-I), p. 27. Vid. *Nuestros Obispos estudian el Anteproyecto del Concordato*, 1527, Ecclesia (1971-II) p. 27. Vid. *Nuestros Obispos ante la revisión del Concordato* (editorial), 1530, Ecclesia (1971-I), pp. 3-4. Vid. *El anteproyecto del Concordato será remitido a Roma*, 1533, Ecclesia (1971-I), p. 25. Vid. M.C.G., *La Iglesia en España sin Concordato (Una hipótesis de trabajo)*, 1776, Ecclesia (1976-I), pp. 18-20.

<sup>56</sup>.- Vid. CORRAL SALVADOR, C., *La revisión del Concordato español. Presentación del problema (o Problema en torno al concordato de 1953)*, 59, 3, S.T. (1971), p. 163.

cuestiones sobre el privilegio de presentación por parte del Estado y el privilegio del fuero, por parte de la iglesia y la cuestión patrimonial, matrimonial y escolar han sido las principales<sup>57</sup>.

Mientras que la jerarquía eclesiástica quería una revisión a fondo mediante acuerdos parciales con la Santa Sede; el Gobierno español prefería una revisión “abierta”, mediante un acuerdo global -vulgarmente concordato-.

En el texto del anteproyecto de 1970, que era una reforma del anteproyecto de 1953, se conservan los privilegios fundamentales, que debían ser abolidos. Entre ellos el privilegio de presentación de obispos, que se sustituye por un privilegio de prenotificación con derecho a objetarlo. El artículo XIX del concordato de 1953 pasa a ser el XVII y el XX el XVIII. Este anteproyecto -el primero-, en realidad, iba contra el Concilio, pues no se respetaba la libertad religiosa. En un segundo anteproyecto para el nuevo concordato, ya se favorece la independencia económica de la Iglesia y se sostiene la prenotificación en el caso de nombramiento de obispos. El Estado contribuirá de una manera concreta, en un plazo determinado, a ayudar a la iglesia a su autofinanciación, formando un patrimonio, que le permita independencia económica. De este modo, la Iglesia financiará sus propias actividades. El Estado, en reconocimiento a la labor a favor del bien común, que realiza la Iglesia, y siempre bajo la perspectiva de una independencia económica de ésta, entregará a la Conferencia Episcopal, durante cada uno de los años, comprendidos en un determinado período de tiempo, una cantidad global. Ni el plazo ni su cantidad vienen especificados en el texto<sup>58</sup>.

Parece que existió un anteproyecto de concordato, redactado por algún departamento del Ministerio de Asuntos Exteriores o/y de Justicia. Se desconoce, sin embargo, la fecha exacta, en la que la Embajada de España ante la Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno español, y el Consejo para los Asuntos Públicos de la Secretaría de Estado del Vaticano comienzan a elaborar, con sus respectivos equipos de expertos, este texto, que es conocido, como anteproyecto Casaroli-Garrigues. En agosto de 1970 se presenta, según parece, este texto *ad referendum* al Consejo de Ministros, para su conocimiento y, en su caso, aprobación. Pero el texto pasa a la prensa, y, primeramente, de modo sucinto y más tarde en su totalidad es ampliamente conocido y difundido. En diciembre de este mismo año, la Secretaría de Estado lo hace llegar a los obispos españoles, que estaban reunidos en la XIII Asamblea General de la Episcopal nombra una comisión para su estudio, y convoca para febrero de 1971 la XIV Asamblea General, en la que se rechazaba el texto *ad referendum*, por el 90 por 100 e los votos, como inhábil, para regular, jurídicamente, las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Este anteproyecto Casaroli-Garrigues consta de treinta y tres artículos -tres menos que el concordato de 1953-, que están elaborados, básicamente, sobre el texto del concordato vigente, introduciendo sólo aquellas reformas que los hagan mínimamente viable. El artículo XIX de este anteproyecto Casaroli-Garrigues regula la contribución económica del Estado a la Iglesia, aduciendo como título y fundamento de la misma “la consideración del hecho de que la religión católica es la de la nación española y como contribución a la obra de la Iglesia a favor del bien común”. Ha desaparecido cualquier referencia a la indemnización por la desamortización y se globaliza la asignación anual, entregándola anualmente a la Conferencia Episcopal Española. En realidad, este anteproyecto Casaroli-Garrigues se trataba, en su conjunto, de una revisión del concordato de 1953, introduciendo en el texto entonces vigente sólo aquellas modificaciones que aparecían como imprescindibles o muy convenientes. Pero la divulgación del texto produjo una reacción enteramente negativa. La votación negativa de la Conferencia Episcopal y la falta

<sup>57</sup>.- Vid. CORRAL SALVADOR, C., *La revisión del Concordato español. Presentación del problema (o Problema en torno al concordato de 1953)*, loc. cit., p. 165.

<sup>58</sup>.- Vid. AA.VV., *Situación actual de la Iglesia en España. Instituto Nacional de Enseñanza Media “Nrta. Sr. de la Victoria”*, Málaga, 14 de mayo de 1971 (Málaga 1971), pp. 92, 104-106.

de respaldo por parte de las autoridades estatales hizo que se abandonase definitivamente el primer intento de seguir negociando su viabilidad jurídica y su oportunidad política<sup>59</sup>.

En el quinquenio 1971-76 no existe ningún texto que se elaborase con la finalidad de revisar y sustituir el concordato vigente. Sólo parece que hubo un intento serio en el año 1974, como fruto de las conversaciones, en Madrid, entre Mons. Casaroli y el Ministro Cortina. Se trata, más que de un nuevo texto, de un conato de revisión del elaborado por el Consejo de Asuntos Públicos de la Iglesia y por la Embajada ante la Santa Sede. Pero parece ser que sobre los puntos más conflictivos -nombramiento de obispos, enseñanza, matrimonio, contribución económica- no se llegó ni tan siquiera a un acuerdo de base, para iniciar propiamente la negociación. Por ello puede calificarse, al igual que en otras constituciones, como un texto *nonnato*<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup>.- Vid. DÍAZ MORENO, J.Mª., *Historia del texto*, en CORRAL SALVADOR, C., y ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., De, *Los acuerdos entre la Iglesia y España*, loc. cit., pp. 88-91.

<sup>60</sup>.- Vid. DÍAZ MORENO, J.Mª., *Historia del texto*, en CORRAL SALVADOR, C., y ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., De, *Los acuerdos entre la Iglesia y España*, loc. cit., p. 92.

### III. CAPÍTULO TERCERO. EL SISTEMA DE AUTOFINANCIACIÓN<sup>1</sup>, COMO ÚLTIMA FASE EN EL ACUERDO SOBRE ASUNTOS ECONÓMICOS DE 3 DE ENERO, DE 1979, ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE<sup>2</sup>.

#### III.1. LOS ACUERDOS ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL CON LA SANTA SEDE DE 1976 Y 1979<sup>3</sup>. UNA ESPECIAL REFERENCIA AL ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE SOBRE ASUNTOS ECONÓMICOS, FIRMADO EL 3 DE ENERO, DE 1979<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>.- Al comenzar el Capítulo II, en el mismo encabezamiento, distinguimos entre "dotación" y "financiación". Decíamos, que por "dotación", cabe entender "la consignación y entrega de una determinada cantidad de dinero, periódicamente, del Estado a la Iglesia, para contribuir a los gastos de la misma Iglesia". Esta dotación, que puede realizarse de muchas maneras, se entiende incluida en el presupuesto estatal: la "financiación de la Iglesia", por el contrario, es un concepto más amplio: "la ordenación económica de todo el quehacer externo de la Iglesia, cualquiera que fuera este quehacer, y cualquiera que fuera la forma jurídica que adopte ese quehacer". Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 306. En este mismo sentido vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, 79, R.F.D.U.C. Curso 1991-92 (1992), p. 219. Idea, que vuelve a retirarse en PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, 2, R.G.L.J. (1984), p. 172. En este Tercer Capítulo, estamos más cerca de la "autofinanciación", última fase del acuerdo sobre asuntos económicos.

<sup>2</sup>.- En el acuerdo sobre asuntos económicos, en la Introducción, se habla del "Estado español"; pero, quienes hacen el acuerdo son la Santa Sede y el Gobierno español; luego se habla siempre del "Estado español", excepto en el consabido tema de las dudas y dificultades -artículo IV del acuerdo económico-, que se dejan a la "Santa Sede y el Gobierno español". En el artículo VII del acuerdo sobre asuntos económicos, al recordar las derogaciones, dice que se deroga el "Acuerdo entre la Santa sede y el Estado español sobre Seminarios y Universidades de Estudios Eclesiásticos de 8 de diciembre de 1946". El acuerdo básico de 1976, ratificado el 20 de agosto del mismo año, comienza refiriéndose a la "Santa Sede y el Gobierno español"; luego, en la Introducción, habla del "Estado", y al concretar las normas se refiere al "Gobierno"; citando -en su artículo 1.4- el acuerdo de 7 de junio de 1941 "entre la Santa Sede y el Gobierno español". El artículo II.4 vuelve a hablar del Estado español. A su vez, el acuerdo sobre asuntos jurídicos, en su Introducción o preámbulo utiliza los términos de "la Santa Sede y el Gobierno español", pero, luego, habla, constantemente, en el texto de "Estado español", excepto en el artículo VII, que, al hablar de la resolución de dudas y dificultades, vuelve a decir el "Gobierno español". Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 303-304, en su nota 1.

<sup>3</sup>.- Son seis los acuerdos suscritos entre la Santa Sede y el Estado español, que están vigentes, actualmente:

- Convenio de 5 de abril, de 1962, sobre reconocimiento, a efectos civiles, de estudios no eclesiásticos, realizados en Universidades de la Iglesia;
- Acuerdo de 28 de julio, de 1976, por el que el Estado español renuncia al llamado privilegio de presentación;
- Acuerdo sobre asuntos jurídicos, de 1979;
- Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, de 1979;
- Acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio militar de clérigos y religiosos, de 1979;
- Acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979. Vid. RUANO ESPINA, L., *Los Acuerdos o Convenios de cooperación entre los distintos poderes públicos y las confesiones religiosas*, 53, 140, R.E.D.C. (1996), pp. 163-164.

<sup>4</sup>.- Este acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos fue firmado, al igual que los restantes de fecha de 1979, el 3 de enero de 1979, en Madrid, y ratificado, en el Vaticano, el 4 de diciembre -B.O.E., núm. 300, de 15 de diciembre de 1979-.

El acuerdo de 28 de julio de 1976 se firmó<sup>5</sup> con el compromiso, entre las partes, de llegar a la total revisión dentro de un plazo fijo de dos años, expirado el cual, el concordato de 1953 perdería, completamente, su eficacia. De qué modo se formalizó ese compromiso es algo que se desconoce, probablemente mediante una cláusula adicional secreta al acuerdo de 1976<sup>6</sup>. Efectivamente, Marcelino Oreja declaró que el plazo para finalizar los acuerdos sería de dos años, a contar de la firma del primero de ellos. Transcurrido dicho plazo, el concordato, en todo caso, cesaría. La Santa Sede nunca se pronunció sobre este punto. Sin embargo, el plazo no se cumplió. Pasaron casi dos años y medio, antes de que se firmaran, el 3 de enero de 1979, los cuatro nuevos y definitivos acuerdos<sup>7</sup>. Para ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, este plazo de dos años fue impuesto, de forma unilateral, en el discurso e presentación del Convenio, de 1976, a la Comisión de las Cortes, en el que el Ministro establecía, como plazo para sustituir el concordato, de 1953, el de "dos años". Y todo ello, a pesar de que el penúltimo párrafo del preámbulo<sup>8</sup> del convenio, se limita a decir:

---

Además, de la bibliografía citada, sobre los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, es interesante la siguiente bibliografía: vid. SÁNCHEZ AGESTA, L., *Los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede*, I, 78, R.D.Púb. (1980), pp. 5-38. Vid. BERNÁRDEZ CANTÓN, A., *Sobre los Acuerdos con la Santa Sede*, 37, 106-107, R.E.D.C. (1981), pp. 239-243.

<sup>5</sup>.- El Convenio de 1976 fue ratificado por el Rey el 19 de agosto, verificándose al día siguiente, 20 de agosto, el cambio de ratificaciones, en Madrid. Fue promulgado en *Acta Apostolicae Sedis* -A.A.S.- del 31 de agosto y en el *Boletín Oficial del Estado* -B.O.E.- de 24 de septiembre. Vid. ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., De, *El Convenio español sobre nombramiento de Obispos y privilegio del fuero*, 33, 94, R.E.D.C. (1977), p. 101. En concreto, 68, A.A.S. (1976), pp. 509-512. La diferencia de fechas no ha de inducir a engaño, ya que, mientras el *Boletín Oficial del Estado* se distribuyó, efectivamente, el día de la fecha, la *Acta Apostolicae Sedis* no se recibió en España hasta el 26 de octubre, habiendo aparecido en Roma una semana antes, pese a su fecha. Vid. ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., De, *La recíproca renuncia de la Iglesia y del Estado a los privilegios del Fuero y de Presentación de Obispos*, 52, 201, E.E. (1977), p. 197, y en CORRAL SALVADOR, C., *Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español y la legislación complementaria*, en GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., *Iglesia y Estado en España. Régimen Jurídico de sus relaciones* (Madrid 1980), p. 285.

Este convenio de 1976, aunque deja como vigente el convenio de 16 de julio de 1946, entre la Santa Sede y el Gobierno español para la provisión de beneficios no consistoriales, deroga el de 7 de junio de 1941, entre el Gobierno y la Santa Sede acerca del modo de ejercicio del privilegio de presentación -apartado 4 del artículo I del acuerdo de 1976-. Vid. LÓPEZ ALARCÓN, M., *La cláusula política en el Derecho concordatario español*, 34, 97, R.E.D.C. (1978), pp. 25-56. Pero el convenio de 16 de julio, de 1946, entre la Santa Sede y el Gobierno español para la provisión de beneficios no consistoriales quedaría derogado por el artículo VIII del acuerdo sobre asuntos jurídicos, de 1979, dejando expedito el derecho de la Iglesia a nombrar para los beneficios no consistoriales. Vid. ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., De, *Los acuerdos entre la Santa Sede y España*, 37, 108, R.E.D.C. (1981), p. 442.

<sup>6</sup>.- Vid. LOMBARDÍA, P., *Los acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas en el nuevo Derecho eclesiástico español*, en AA.VV., *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica. Atti del II Convegno nazionale di Diritto ecclesiastico, Siena, 27-29 novembre 1980* (Milano 1981), p. 446. De hecho, la misma prensa recogía las siguientes palabras del Ministro Oreja: "la caída del telón del Concordato será, en todo caso, en un plazo máximo de dos años". Vid. HERA PÉREZ-CUESTA, A., De La, *Comentario al acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 28 de julio de 1976*, XVI, 32, I.C. (1976), p. 158.

<sup>7</sup>.- Vid. GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., *Principios informadores del actual régimen español de relaciones entre la Iglesia y el Estado*, en GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., *Régimen jurídico de sus relaciones* (Madrid 1980), p. 27.

<sup>8</sup>.- En realidad, el convenio de 1976, recoge un preámbulo, que dista mucho de ser puramente protocolario, hallándose lleno de interés político y doctrinal y hasta práctico. La costumbre, hasta este momento, había sido contraria a este tipo de declaraciones. Ni el convenio, de 1941, ni el de 1946, llevaban preámbulo alguno. Vid. ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., De, *El Convenio español sobre nombramiento de Obispos y privilegio del fuero*, loc. cit., p. 104. El preámbulo o exposición de motivos del acuerdo de 1976 sirve también de introducción a los cuatro acuerdos suscritos en 1979. Vid. DIEGO-LORA, C., de, *Hacia la plena vigencia de los*

"[Ambas Partes] se comprometen, por tanto, a emprender, de común acuerdo, el estudio de estas diversas materias con el fin de llegar, cuanto antes, a la conclusión de Acuerdos que sustituyan gradualmente las correspondientes disposiciones del vigente Concordato".

Por ello, para ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, la declaración del Ministro, que establecía un plazo de "dos años" para terminar el concordato destaca por su *unilateralidad*; ya que en el convenio, de 1976, no se refleja tal afirmación<sup>9</sup>.

Los acuerdos de 1976 y 1979, tanto por la identidad de sus principios, como por las conexiones internas entre ellos, el valor programático e introductorio general del preámbulo, forman un único cuerpo normativo; o, lo que es igual, un concordato<sup>10</sup>. El sistema de acuerdos parciales, que se inicia con el acuerdo de 1976, ya había sido utilizado entre 1940 y 1953, por el propio Estado español y la Santa Sede, si bien en un contexto diferente; en lugar de ir entonces revisando, paulatinamente, el concordato anterior, de 1851, se firmaron sucesivos acuerdos sobre materias determinadas, mientras que no se podía llegar a la redacción y firma de un concordato nuevo; finalmente, tales acuerdos precedentes se subsiguieron en el concordato de 1953. El acuerdo de 1976, por el contrario, tiene la finalidad de privar al Estado del viejo privilegio de presentación y librar a la Iglesia de la carga del fuero procesal y penal de los clérigos<sup>11</sup>. Este acuerdo de 1976 sólo aborda dos temas concretos: el de nombramiento de obispos y el de la igualdad de todos los ciudadanos frente a la Administración de Justicia, por las tensiones, que, en los últimos años, se habían producido en la aplicación del concordato de 1953<sup>12</sup>.

La renuncia al privilegio de presentación<sup>13</sup> se ofreció a la opinión pública, como la renuncia por parte del Rey de un derecho, que aparecía recogido en el concordato, de 1953, y

---

*Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede*, VII, A.D.E.E. (1991), p. 190. En este mismo sentido vid. FORNÉS, J., *El nuevo sistema concordatario español. (Los Acuerdos de 1976 y 1979)*, loc. cit., p. 42.

<sup>9</sup>.- Vid. ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., De, *El Convenio español sobre nombramiento de Obispos y privilegio del fuero*, loc. cit., pp. 102-103.

<sup>10</sup>.- Vid. FORNÉS, J., *El nuevo sistema concordatario español. (Los Acuerdos de 1976 y 1979)*, loc. cit., pp. 43-44.

<sup>11</sup>.- Vid. HERA PÉREZ-CUESTA, A., De La, *Comentario al acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 28 de julio de 1976*, loc. cit., pp. 153-154.

<sup>12</sup>.- Vid. ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., De, *La recíproca renuncia de la Iglesia y del Estado a los privilegios del Fuero y de Presentación de Obispos*, loc. cit., p. 200.

<sup>13</sup>.- Estudios sobre el nombramiento de los obispos -posteriores al acuerdo de 1976- son los siguientes: vid. CÁRCCEL ORTÍ, V., *Nombramiento de Obispos en la España del siglo XX. Algunas cuestiones canónicas concordatarias y políticas*, 50, 135, R.E.D.C. (1993), pp. 553-589.

La bibliografía anterior al acuerdo de 1976 es la siguiente: vid. GARCÍA BARBERENA, T., *Nuevas normas sobre nombramientos de obispos (textos y comentario)*, XXVIII, 81, R.E.D.C. (1972), pp. 657-682. Vid. TIBAU, N., *Precisiones históricas sobre el nombramiento de Obispos auxiliares en España y fuera de España*, XXX, 87, R.E.D.C. (1974), pp. 553-565. Vid. ARBELOA MURU, V.M., *El nombramiento de Obispos durante la Dictadura y la II República*, XXXI, 88, R.E.D.C. (1975), pp. 143-175.

Sobre los privilegios, recogidos en el artículo XVI del concordato, de 1953, puede consultarse la siguiente bibliografía en MONTSERRAT, V., *El art. 16 del nuevo Concordato español*, XXVIII, 196, R.G.L.J. (1954), pp. 273-290. Vid. EGUREN, J.A., *El fuero eclesiástico, ¿privilegio o derecho del estado clerical?*, XXX, 85, R.E.D.C. (1974), pp. 131-141. Vid. CÁRCCEL ORTÍ, V., *Los nombramientos de obispos durante el régimen de Franco*, 51, 137, R.E.D.C. (1994), pp. 503-566. Vid. MARTÍN SEMINARIO, J., *El fuero de los clérigos en el Concordato español*, II, R.E.D.C. (1954), pp. 379-393. Vid. MORTA FIGULS, Á., *El "privilegio del fuero" en el Derecho concordatario*, III, R.E.D.C. (1954), pp. 779-840. Vid. DELGADO, Gr., *Elección y nombramiento de obispos en la Iglesia latina*, XIV, 28, I.C. (1974), p. 268-307. Vid. DELGADO, Gr., *El nombramiento de Obispos auxiliares*, XVI, 31, I.C. (1976), pp. 317-339.

que habían poseído los Reyes de España desde muchos siglos antes. Sólo días después, lo que apareció como una renuncia unilateral, jurídicamente muy confusa, se concretó en el anuncio de la firma de un acuerdo bilateral, que venía a sustituir a determinados artículos del concordato de 1953, iniciándose sí la revisión de éste a través de la vía de los acuerdos parciales. Naturalmente, la Santa Sede aceptó el acuerdo, de 1976, pues suponía la renuncia estatal a la presentación de los obispos, quedándose el gobierno sin muchas bazas para la negociación futura<sup>14</sup>.

Ya HERA PÉREZ-CUESTA avanza que el preámbulo o exposición de motivos, que precede al acuerdo, de 1976, no lo es sólo al citado acuerdo, sino a todos, los que puedan seguirle. En efecto, las Partes adquieren, de modo expreso, el compromiso de sustituir las disposiciones del concordato, 1953, por una serie gradual de acuerdos. Se puede hablar, pues, de que el acuerdo de 28 de julio, de 1976, es doble: contiene un compromiso -sustituir el concordato, de 1953<sup>15</sup>- y un acuerdo<sup>16</sup>, como dos pactos distintos, reunidos en un mismo texto<sup>17</sup>. Este preámbulo del acuerdo, de 1976, sirve no sólo, para introducir en el articulado de dicho

<sup>14</sup>.- Vid. HERA PÉREZ-CUESTA, A., De La, *Comentario al acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 28 de julio de 1976*, loc. cit., pp. 156-157.

<sup>15</sup>.- La exposición de motivos del acuerdo, de 1976, en este intento de sustituir el concordato, de 1953, nos dice:

"La Santa Sede y el Gobierno español:

a la vista del profundo proceso de transformación que la sociedad española ha experimentado en estos últimos años aún en lo que concierne a las relaciones entre la comunidad política y las confesiones religiosas y entre la Iglesia católica y el Estado.

Considerando que el Concilio Vaticano II, a su vez, estableció como principios fundamentales, a los que deben ajustarse las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia, tanto la mutua independencia de ambas Partes, en su propio campo, cuanto una sana colaboración entre ambas; afirmó la libertad religiosa como derecho de la persona humana, derecho que debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad; y enseñó que la libertad de la Iglesia es principio fundamental de las relaciones entre la Iglesia y los Poderes Públicos y todo el orden civil;

dado que el Estado español recogió en sus leyes el derecho de libertad religiosa, fundado en la dignidad de la persona humana (Ley de 1 de julio de 1967), y reconoció en su mismo ordenamiento que debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica.

juzgan necesario regular mediante Acuerdos específicos las materias de interés común que en las nuevas circunstancias surgidas después de la firma del Concordato de 27 de agosto de 1953 requieren una nueva reglamentación;

se comprometen, por tanto, a emprender, de común acuerdo, el estudio de estas diversas materias con el fin de llegar, cuanto antes, a la conclusión de Acuerdos que sustituyan gradualmente las correspondientes disposiciones del vigente Concordato".

<sup>16</sup>.- En la segunda parte de la exposición de motivos de este acuerdo, de 1976, se establecen las materias, que regula este acuerdo:

"Por otra parte, teniendo en cuenta que el libre nombramiento de Obispos y la igualdad de todos los ciudadanos frente a la administración de la justicia tienen prioridad y especial urgencia en la revisión de las disposiciones del vigente Concordato, ambas Partes contratantes concluyen, como primer paso de dicha revisión, el siguiente: [...]". Efectivamente, al decir "Por otra parte [...]", queda de manifiesto que se va a pasar a otra cuestión. Vid. HERA PÉREZ-CUESTA, A., De La, *Comentario al acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 28 de julio de 1976*, loc. cit., p. 162.

<sup>17</sup>.- Vid. HERA PÉREZ-CUESTA, A., De La, *Comentario al acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 28 de julio de 1976*, loc. cit., p. 161.

acuerdo, sino también en los demás, puesto que en él se dejan sentados los principios de marco constitucional de los otros textos normativos<sup>18</sup>.

Las esperanzas, de que la prenotificación había de alcanzar también a los auxiliares y administrativos apostólicos, no se confirman<sup>19</sup>.

Los acuerdos de 1979<sup>20</sup> los estudiaremos más detenidamente en su momento.

### **III.2. LA ACTIVIDAD PATRIMONIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, DE 1978, Y EN EL ACUERDO SOBRE ASUNTOS ECONÓMICOS, DE 1979, COMO PRESUPUESTO BÁSICO -Y LÓGICO- PARA LA AUTOFINANCIACIÓN.**

El derecho de la Iglesia a tener y administrar su patrimonio, aunque no se encuentra explícitamente reconocido en las normas constitucionales, sí que está, de forma implícita, en nada menos que el artículo 16.1 de la Constitución española de 1978, pues la actividad patrimonial es una manifestación necesaria de la libertad<sup>21</sup>. Este artículo 16.1 de la Constitución nos dice:

"Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".

Esta realidad no ha podido menos que ser contemplada en la ley orgánica de la libertad religiosa, de 1980, que establece, en su disposición transitoria segunda, el sistema para regularizar la situación patrimonial de las asociaciones religiosas, cuyos bienes figuraban a nombre de personas interpuestas<sup>22</sup>.

En el artículo I del acuerdo sobre asuntos jurídicos de 1979<sup>23</sup> se garantiza la independencia organizativa y de actuación de la Iglesia, a la que se halla ligada la actividad económica, y los distintos modos de adquisición y reconocimiento de la personalidad civil de los entes eclesiales. Este reconocimiento aparece como un presupuesto en el acuerdo sobre

<sup>18</sup>.- Vid. FORNÉS, J., *La revisión concordataria de España mediante los Acuerdos de 1976 y 1979*, XIX, 37, I.C. (1979), p. 37.

<sup>19</sup>.- Vid. HERA PÉREZ-CUESTA, A., *De La, Comentario al acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 28 de julio de 1976*, loc. cit., p. 163.

<sup>20</sup>.- Sobre la bibliografía de los acuerdos de 1979, vid. ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., *De, El régimen pacticio Iglesia-Estado. Valoración pastoral en sí y en su actual aplicación a España*, 35, 102, R.E.D.C. (1979), pp. 611-623.

<sup>21</sup>.- Vid. MARTÍN DE AGAR, J.-T., *Notas sobre la cooperación económica del Estado con la Iglesia Católica*, XXI, 42, I.C. (1981), p. 785.

<sup>22</sup>.- Vid. MARTÍN DE AGAR, J.-T., *Notas sobre la cooperación económica del Estado con la Iglesia Católica*, loc. cit., p. 785.

<sup>23</sup>.- Aunque es interesante la lectura íntegra de este artículo I, nos limitaremos a reproducir los apartados 1 y el párrafo 2 del apartado 1 de este artículo I del acuerdo sobre asuntos jurídicos, de 1979, que dice:

"1. El Estado Español reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio.

2. La Iglesia puede organizarse libremente. En particular, puede crear, modificar o suprimir Diócesis, Parroquias y otras circunscripciones territoriales, que gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica y ésta sea notificada a los órganos competentes del Estado".

asuntos económicos, que entra directamente a tratar de los sistemas de colaboración del Estado en la financiación de la Iglesia, es decir, de la aplicación del principio de cooperación. De hecho, el artículo IV del concordato de 1953 está derogado en el acuerdo sobre asuntos jurídicos -artículo VIII del acuerdo sobre asuntos jurídicos de 1979-, y no en el acuerdo sobre asuntos económicos<sup>24</sup>. Aunque en el acuerdo sobre asuntos jurídicos, de 1979, no se encuentra referencia directa alguna a la capacidad patrimonial de la Iglesia o de sus entes, sin embargo, sí la encontramos en el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, ya que en su artículo IV.1 se realiza una enumeración de los sujetos pasivos de algunos impuestos de los que quedarán exentos; parece claro, por ello, que tal referencia implica la existencia de una capacidad patrimonial por parte de aquellos sujetos pasivos, ya que las exenciones lo son de tributos, que implican la existencia de un derecho de propiedad -contribución territorial urbana, hoy como impuesto sobre bienes inmuebles; e impuestos reales o de producto sobre la renta o sobre el patrimonio-. Esos sujetos pasivos, posibles titulares del derecho de propiedad, están enumerados, por tanto, en el artículo IV.1 del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979. Sea como fuere, lo cierto es que no se alude a la Iglesia católica, como posible sujeto pasivo de un tributo, y, por ende, como posible titular de un derecho de propiedad<sup>25</sup>.

El tema económico es uno, de los que más importancia alcanza en la Historia concordataria: desde el de Constanza de 1448 hasta el último de 1953, pasando por los de 1737, 1753 y 1851, el problema económico ha tenido gran trascendencia<sup>26</sup>.

### **III.3. CONCEPTO JURÍDICO DE COOPERACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA<sup>27</sup>. LOS PRINCIPIOS DE DERECHO ESPAÑOL, QUE POSIBILITAN LA COOPERACIÓN CON LA IGLESIA CATÓLICA. LA COOPERACIÓN, COMO MEDIO PARA HACER REAL Y EFECTIVA LA IGUALDAD DE TODOS LOS CIUDADANOS EN LA LIBERTAD RELIGIOSA E IDEOLÓGICA.**

Aunque el artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978, no recoge ninguna definición del concepto de cooperación, no faltan los elementos necesarios, tanto en la Constitución española, como en otras normas legales para perfilar su significado<sup>28</sup>.

La cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas responde a la inspiración democrática de que los grupos sociales afectados -entre ellos las confesiones religiosas- participen habitual y normalmente en la elaboración y aplicación de sus *status* jurídico, para evitar una antidemocrática incomunicación entre las confesiones y el Estado<sup>29</sup>.

<sup>24</sup>.- Vid. MARTÍN DE AGAR, J.-T., *Notas sobre la cooperación económica del Estado con la Iglesia Católica*, loc. cit., p. 785.

<sup>25</sup>.- Vid. la Lección VII, titulada *Los grupos relevantes para el Derecho Eclesiástico*, realizada por IBÁN, en IBÁN, I.C., y PRIETO SANCHÍS, L., *Lecciones de Derecho Eclesiástico* (Madrid 1985), p. 135.

<sup>26</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Sistema español de dotación estatal a la Iglesia*, en GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., *Régimen jurídico de sus relaciones* (Madrid 1980), p. 27.

<sup>27</sup>.- Sobre la cooperación es interesante la siguiente bibliografía: vid. FERNÁNDEZ CORONADO GONZÁLEZ, A., *La colaboración económica del Estado con las confesiones religiosas*, 108, R.A.P. (1985), pp. 365-401.

<sup>28</sup>.- Vid. VILADRICH, P.J., *El principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas en la Constitución española de 1978*, 3-4, D.E. (1987), p. 1156.

<sup>29</sup>.- Vid. VILADRICH, P.J., *El principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas en la Constitución española de 1978*, loc. cit., pp. 1154. La cooperación se dirige, en última instancia, a hacer efectivos los derechos y libertades no sólo de los individuos, sino también de los grupos. Vid. BLANCO, M<sup>a</sup>., *La*

La cooperación respecto de la regulación jurídica de las confesiones en contribución al bien común legitima a los poderes públicos y las confesiones, para establecer relaciones de entendimiento para la elaboración convencional de los pertinentes instrumentos jurídicos, en los que se plasma tal acción concertada.

Con el único límite constitucional de lesionar los principios de libertad religiosa y laicidad del Estado<sup>30</sup>. El principio de cooperación tiene su fundamento en el principio de libertad religiosa y en el de laicidad su límite<sup>31</sup>. En realidad, cualquier discriminación en materia religiosa lesiona su laicidad<sup>32</sup>. LEJEUNE VALCÁRCEL señala que, aunque en el acuerdo sobre asuntos económicos no se hace ninguna mención al fundamento legitimador de la cooperación económica, hay que buscarlo en el artículo 16 de la Constitución española, de 1978<sup>33</sup>. Efectivamente, el principio constitucional de cooperación con las iglesias es un principio subordinado a los de igualdad y libertad religiosa, de un lado, y al de laicidad, de otro<sup>34</sup>. Laicidad y cooperación del Estado con las confesiones religiosas no están reñidas. Es más, esa cooperación es obligada en un Estado de Derecho. Pero el fundamento de esa cooperación no es una valoración positiva del fenómeno religioso en cuanto tal, que no se compadecería con la laicidad, sino que desembocaría en una confesionalidad o pluriconfesionalidad más o menos larvada. En un Estado laico, la obligación de cooperación tiene su razón de ser en los principios definidores del Estado social de Derecho<sup>35</sup>.

La colaboración económica del Estado con la Iglesia católica resulta una de las manifestaciones, singularmente relevantes, de las relaciones de cooperación, que el artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978, impone a los poderes públicos, respecto a las confesiones religiosas<sup>36</sup>.

Al relacionarse el artículo 16.3 con el 9.2 de la Constitución española, de 1978, se intenta proteger, especialmente, el derecho fundamental de los ciudadanos a la libertad religiosa<sup>37</sup>.

Se constitucionaliza el principio de cooperación, o, lo que es lo mismo, el común entendimiento bilateral o plurilateral, como principio conformador de las relaciones entre el Estado y las confesiones, pero no se constitucionaliza ninguna forma concreta o modalidad

---

*cooperación del Estado español con las confesiones religiosas. Especial referencia a la cooperación económica*, 76, I.C. (1998), p. 524.

<sup>30</sup>.- Vid. VILADRICH, P.J., *El principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas en la Constitución española de 1978*, loc. cit., pp. 1158-1159. Sobre el concepto de laicidad vid. GARCIMARTÍN MONTERO, C., *La laicidad de las Cortes Constituyentes de 1978*, 72, I.C. (1996), pp. 539-594.

<sup>31</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas: fundamentos, alcances y límites*, V, A.D.E.E. (1989), p. 74. Esta colaboración también puede consultarse en 3, R.C.E.C. (1989), pp. 199-231, aunque aludiremos, de forma indistinta, a ambas ediciones.

<sup>32</sup>.- Vid. FERRER ORTIZ, J., *Laicidad del Estado y cooperación con las confesiones*, III, A.D.E.D. (1987), p. 243. Tampoco al de no confesionalidad. Vid. BLANCO, M., *La cooperación del Estado español...*, loc. cit., p. 527.

<sup>33</sup>.- Vid. LEJEUNE VALCÁRCEL, E., *Los problemas financieros y tributarios de la Iglesia a la luz de la Constitución española de 1978*, en AA.VV., *El hecho religioso en la nueva Constitución española* (Salamanca 1979), p. 350.

<sup>34</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas: fundamentos, alcances y límites*, loc. cit., p. 99, en su Conclusión primera.

<sup>35</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *Los acuerdos y el principio de igualdad; comparación con los acuerdos con la Iglesia Católica y situación jurídica de las confesiones sin acuerdo*, en REINA V., De, y FÉLIX BALLESTA, M.ª.Á., (coord.), *Acuerdos del Estado español con confesiones religiosas minoritarias. Actas del VII Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado* (Barcelona 1994), p. 156.

<sup>36</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 220.

<sup>37</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas: fundamentos, alcances y límites*, loc. cit., p. 75.

definida para ese común entendimiento de cooperación. El concordato, los acuerdos entre Gobierno y Santa Sede o los convenios entre el Estado y concretas confesiones son formas posibles, modalidades diversas de plasmar el común entendimiento, pero no son formas preceptuadas o exigidas por la Constitución española de 1978<sup>38</sup>.

La Constitución española no constitucionaliza ni el sistema concordatorio, ni ningún género concreto de acuerdos y convenios en su artículo 16.3 de la Constitución, por ello es coherente la corrección del artículo 7 del proyecto de ley orgánica de libertad religiosa, que, en vez de decir que el Estado "deberá establecer Acuerdos o Convenios [...]", emplea un tenor facultativo: "establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios [...]", pues la Constitución española de 1978 consagra el principio de cooperación, pero no las formas o modalidades de plasmación del mismo<sup>39</sup>.

En el modelo diseñado en la Constitución, de 1978, ni se prohíbe ni se constitucionaliza la aportación financiera del Estado a las confesiones; tan sólo queda constitucionalizada la obligación de los poderes públicos, de cooperar con las confesiones, sin que se haga explicación, de en qué deba consistir esa cooperación, que, por tanto, no necesariamente tiene que ser financiera<sup>40</sup>. Efectivamente, la Constitución sólo impone a los poderes públicos un mandato de cooperación "genérico" para con las confesiones, sin que, expresamente, se les imponga la obligación de colaborar económicamente a su sostenimiento. Pero, igualmente, es cierto que el texto constitucional tampoco prohíbe una colaboración de tal naturaleza. Por tanto, manteniendo el Estado una relación de cooperación económica con la Iglesia católica, manifestada, técnicamente, a través del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, la obligación o compromiso jurídico, adquirido por aquél en esta materia, viene dado solamente por el acuerdo y en sus términos y contenidos<sup>41</sup>. Al no constitucionalizarse en la Constitución ninguna forma o modalidad concreta de plasmación de cooperación, los acuerdos con la Santa Sede y los convenios con las demás confesiones religiosas no son anticonstitucionales, por que la Constitución no prohíbe que se plasme en acuerdos de índole internacional o en otros acuerdos y convenios de derecho interno para las demás confesiones, si carecen de personalidad jurídica internacional<sup>42</sup>.

Es más, de la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, tampoco cabe deducir, a juicio de MARTÍN SÁNCHEZ, la obligación de financiación por parte del Estado, pues de su artículo 7 no se deduce, que la cooperación con las confesiones religiosas tenga que ser, necesariamente, de tipo económico, ni que tenga que ser llevada a cabo mediante un acuerdo con las mismas, ni que quede, por tanto, reservado sólo a las confesiones, que hayan alcanzado "notorio arraigo" en España. Ciertamente que, refiriéndose a la cooperación financiera indirecta, el artículo 7.2 de la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, dispone que en los acuerdos, que el Estado firme con las confesiones religiosas, se podrán extender a éstas "los beneficios fiscales previstos en el Ordenamiento jurídico general para las Entidades sin fin de lucro y demás de carácter benéfico". Pero la única interpretación, que es posible, es entender, que dichos beneficios podrán, potestativamente, incluirse en los eventuales acuerdos, que el Estado firme con las confesiones

<sup>38</sup>.- Vid. VILADRICH, P.J., *El principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas en la Constitución española de 1978*, loc. cit., p. 1161.

<sup>39</sup>.- Vid. VILADRICH, P.J., *El principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas en la Constitución española de 1978*, loc. cit., p. 1163.

<sup>40</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas: fundamentos, alcances y límites*, loc. cit., p. 71. En el mismo sentido se pronuncia MARTÍN SÁNCHEZ, I., *La financiación de las confesiones religiosas en el Derecho español*, loc. cit., p. 135.

<sup>41</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 220.

<sup>42</sup>.- Vid. VILADRICH, P.J., *El principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas en la Constitución española de 1978*, loc. cit., p. 1162.

religiosas. Es decir, el artículo 7.2 de la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, habla de una posibilidad, pero no impone una obligación del Estado. De hecho, aunque la legislación tributaria ha equiparado las confesiones religiosas con las "entidades sin fin de lucro", respecto de algunos beneficios fiscales; pero, en estos casos, la equiparación deriva de una disposición unilateral del Estado, y no de una exigencia contenida en la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980. En realidad, la cooperación económica directa o indirecta, con las confesiones, es potestativa y no obligatoria para el Estado, y puede instrumentarse, a través de un acuerdo o mediante la legislación tributaria, de forma unilateral<sup>43</sup>.

Para GOTI ORDEÑANA, debe dársele un nuevo significado al concepto de "cooperación económica". En este sentido, nos matiza:

"La cooperación económica tiene que tener un nuevo significado, es decir, ha de dejar de ser una subvención para mantener las confesiones y ha de adquirir la naturaleza de una promoción de la persona para el desarrollo de sus derechos"<sup>44</sup>.

Si bien no hay razones, para oponerse a las subvenciones estatales a las iglesias y otras ayudas materiales; otra cosa es que tales prestaciones se materialicen mediante unas relaciones de cooperación, expresamente mandadas por la Constitución; dicho de otra manera, lo que es inaceptable, desde unos esquemas racionales, es que las iglesias -y, especialmente, la católica- tengan asegurados por la máxima norma -que debe ser, en este contexto, una norma básica, enunciativa de principios jurídicos, sin descender al terreno de las normas particulares, que regulan los destinatarios individualizados y las concretas situaciones específicas-, unos beneficios económicos estables, en tanto que otros colectivos e instituciones sociales tienen, que concurrir y demostrar sus necesidades en un ambiente de competencia, para obtener el favor del Estado<sup>45</sup>. Por ello, LLAMAZARES FERNÁNDEZ entiende que queda fuera del concepto de cooperación el apoyo o ayuda, que el Estado presta a las confesiones religiosas por su participación en la consecución de objetivos estatales, o, al menos, preferentemente estatales, que, naturalmente, no están prohibidas, pero en relación con los cuales las confesiones religiosas se someten al Derecho común. El fundamento de tales ayudas es muy distinto, y, consecuentemente, su régimen jurídico es diferente. Las subvenciones o tratamiento fiscal, especialmente favorable, a que se someten esas actividades, tienen su fundamento en su consideración, como actividades de "interés público", porque se entiende, que contribuyen positivamente a la realización de un objetivo estatal y de un servicio público<sup>46</sup>. El fundamento

<sup>43</sup>.- Vid. MARTÍN SÁNCHEZ, I., *La financiación de las confesiones religiosas en el Derecho español*, loc. cit., pp. 136-137.

<sup>44</sup>.- Vid. GOTI ORDEÑANA, J., *Del sistema de dotación al de colaboración económica con las Confesiones religiosas*, IV, A.D.E.E. (1988), p. 165.

<sup>45</sup>.- Vid. SORIANO, R., *Del pluralismo confesional al pluralismo religioso: los límites al principio de igualdad religiosa*, loc. cit., p. 135.

<sup>46</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas: fundamentos, alcances y límites*, loc. cit., p. 74. En esta línea se mueve el número 60 del documento de *La Iglesia y la comunidad política*, de 23 de enero de 1973:

"Es éste un tema singularmente propicio para engendrar equívocos, sobre todo porque de ordinario falta en muchos suficiente conocimiento de causa o porque se tiene un concepto deformado de lo que es la misión de la Iglesia en relación con la sociedad.

No es exclusiva de España la asignación a la Iglesia católica o a otras confesiones de una determinada partida del presupuesto estatal, destinada a facilitar su labor. Ni siquiera se reduce a Estados que, como el nuestro, son confesionales.

En una concepción, hoy superada, de dicha ayuda, se entendía que la institución eclesiástica o, más exactamente, los ministros de culto, eran los destinatarios exclusivos de estas subvenciones. Hoy, con

jurídico de la ayuda económica que el Estado presta a la Iglesia radica en el servicio que ésta rinde a la sociedad más que en las pretéritas y caducas obligaciones jurídicas contraídas por el Estado<sup>47</sup>.

La posible ayuda –directa o indirecta– del Estado a las actividades docentes o asistenciales de la Iglesia nada tiene que ver con el principio de cooperación del artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978. No se trata de actividades religiosas, aunque puedan tener interés también desde el punto de vista religioso<sup>48</sup>.

Una Constitución, a juicio de SORIANO, en ningún caso está legitimada, para ordenar la cooperación del Estado con un colectivo social, porque, sencillamente, tal colectivo, puede perder fuerza en la sociedad, o hasta desaparecer. Por ello, la constitucionalización de las relaciones de cooperación y la mención expresa de la Iglesia católica son dos fórmulas desafortunadas; la primera crea un clima de agravios comparativos, con los no creyentes; y la segunda provoca el rechazo por parte del resto de las confesiones religiosas, que se sienten, injustamente, marginadas del texto constitucional<sup>49</sup>.

Sea como fuera, lo cierto es que la cooperación del Estado con las confesiones religiosas, debe llegar, hasta donde sea necesario, para hacer real y efectiva la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de la libertad religiosa e ideológica, y no puede rebasar los límites, que pudieran poner en peligro la realización de esa igualdad y de las exigencias,

---

mayor profundidad y precisión, se tiende a considerar dichas prestaciones como un servicio a los ciudadanos destinado a desarrollar su dimensión religiosa.

Mayor importancia si cabe se concede hoy al dato de que la Iglesia católica, inspirada en el ministerio de la Encarnación y en el amor evangélico a los hombre, ha empeñado siempre, y sigue empeñando grandes esfuerzos en la creación y mantenimiento de centros docentes, hospitales, asilos de ancianos, viviendas, centros juveniles y toda clase de servicios de asistencia y de promoción humana. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido muchas veces por delante del Estado en la atención a incontables necesidades de los hombres [...].

Nada puede reclamar la Iglesia por estos servicios. Siempre serán menores que los que exige de sus miembros nuestra condición de discípulos de Cristo, que se hizo uno de nosotros y murió por nosotros. La Iglesia se presenta en el concilio como maestra de la humanidad y servidora de los pobres. Y cualquier ayuda que reciba de personas o de instituciones va destinada siempre al servicio de Dios y a la salvación de los hombres. Aunque es natural que, para desarrollar plenamente su misión, necesite de medios materiales, una Iglesia rica carece de sentido.

A esta luz deben mirarse todos los sistemas vigentes en el modo de ayuda estatal a la labor de la Iglesia, a los que nadie califica de privilegios. Y en estos principios se inspiran las prestaciones que ella viene recibiendo del Estado español. Por otra parte, conviene distinguir bien entre aquellas –ciertamente módicas– que retribuyen a la personas y aquellas otras –lógicamente cuantiosas– que van destinadas a los servicios educativos y asistenciales, a la conservación del tesoro religioso histórico-artístico o a la reparación y construcción de templos y otros inmuebles.

La Iglesia debe educar en sus fieles una conciencia de colaboración económica que haga posibles la evangelización, el culto y la caridad. Pero ni rechaza aquellas ayudas que, sin oscurecer la pureza de su testimonio, potencien su misión de servicio, ni considera un privilegio recibirlas del pueblo español a través del Estado, gerente y responsable principal del bien común.

Es de esperar, en fin, que la revisión concordataria consiga dar a este problema la equitativa solución que requiere. La Iglesia es consciente de su vocación de servicio. Ni pretende ponerle precio alguno ni puede hipotecar su libertad a cambio de las prestaciones que reciba. Y en este espíritu de sencillez, de respetuosa dignidad y de desprendimiento evangélico deseamos actuar siempre en materia económica". Vid. MARTÍN MARTÍNEZ, I., *La Iglesia y la comunidad política...*, loc. cit., pp. 33-35.

<sup>47</sup>.- Vid. FORNÉS, J., *El nuevo sistema concordatario español. (Los Acuerdos de 1976 y 1979)*, loc. cit., p. 25.

<sup>48</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas: fundamentos, alcances y límites*, loc. cit., p. 75 y p. 99, en su Conclusión segunda.

<sup>49</sup>.- Vid. SORIANO, R., *Del pluralismo confesional al pluralismo religioso íntegro: los límites al principio de igualdad religiosa*, loc. cit., p. 135.

derivadas del principio de laicidad<sup>50</sup>. El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas se refiere, únicamente, al apoyo del Estado a las actividades religiosas de las confesiones, que se estiman necesarias, para que la igualdad en la libertad religiosas e ideológica de los ciudadanos sea real y efectiva, y alcance su plenitud<sup>51</sup>. En base al principio de laicidad y del de igualdad, del mismo modo que no tendría sentido el sometimiento a impuestos de las actividades religiosas, tampoco lo tendría el sostenimiento de las confesiones con fondos públicos: en ambos casos se estaría violando el principio de igualdad, que no permite la discriminación, en este caso económica, ni positiva ni negativa, de sus ciudadanos por razón de sus creencias. De acuerdo con estos principios, los ciudadanos creyentes no deben pagar más impuestos al Estado -se estaría violando el artículo 31 en relación al 14 de la Constitución española- que el no creyente, pero tampoco pueden ser más favorecidos con fondos públicos, que los no creyentes, y eso es lo que ocurriría si el Estado contribuyera con fondos públicos al sostenimiento de las actividades religiosas de las confesiones. Y sin embargo, ésta es la situación en que está la Iglesia católica, mediante la "asignación tributaria", lo que ocurre es que, como reiteradamente ha declarado el Tribunal Constitucional la igualdad sólo es violada si el trato discriminatorio no está razonablemente fundado, y en el caso de la Iglesia católica lo está por su pasado histórico, durante el cual, como consecuencia de la confesionalidad del Estado, siempre ha estado sostenida con fondos públicos desde la desamortización, con lo cual no existe conciencia entre los ciudadanos católicos de la necesidad imperiosa de su contribución directa, a sostener económicamente su Iglesia. De ahí que se configure el sistema como transitorio, salvando la posible colisión con el principio de igualdad y con el de no confesionalidad. Todos los acuerdos reconocen a las Iglesias, confesiones y comunidades el derecho a recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosnas y oblacones -artículo I del acuerdo económico, de 1979 y 11.1 de los acuerdos del 92-, que no estarán sujetas a imposición fiscal -artículo III.b) del acuerdo económico, de 1979 y artículo 2.a) de los acuerdos el 92-<sup>52</sup>.

La ayuda económica de la Iglesia católica no se opone al principio de libertad religiosa ni al de laicidad del Estado, porque la actitud de cooperación del Estado con las confesiones religiosas tiene su fundamento último en el derecho de libertad religiosa, que trae consigo, a su vez, la tutela de la igualdad y no discriminación<sup>53</sup>.

Las aportaciones indirectas del Estado, en forma de beneficios fiscales, en principio no chocan con el principio de laicidad; por el contrario, pueden considerarse, como exigencias obligadas del principio de cooperación. Sin embargo, el sistema de dotación económica directa del Estado a las confesiones es radicalmente incompatible con el principio de laicidad del Estado. Es congruente con un Estado confesional o pluriconfesional, pero no con uno laico. Tampoco son completamente compatibles con un modelo de relaciones Estado-confesiones religiosas, fundado en los principios de igualdad en la libertad ideológica y religiosa y de laicidad, el sistema alemán, y, más dudoso aún, es que lo sea en el sistema español vigente. En el alemán, porque es inconciliable con la libertad religiosa: el Estado obliga con su fuerza

<sup>50</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas: fundamentos, alcances y límites*, loc. cit., p. 73.

<sup>51</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas: fundamentos, alcances y límites*, loc. cit., p. 74.

<sup>52</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *Los acuerdos y el principio de igualdad: comparación con los acuerdos con la Iglesia Católica y situación jurídica de las confesiones sin acuerdo*, en REINA, V., De, y FÉLIX BALLESTA, M<sup>a</sup>.Á., (coord.), *Acuerdos del Estado español con confesiones religiosas minoritarias. Actas del VII Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado*, loc. cit., pp. 201-202.

<sup>53</sup>.- Vid. BLANCO, M<sup>a</sup>., *Cooperación del Estado con las confesiones religiosas en materia económica*, en AA.VV., *Tratado de Derecho Eclesiástico* (Pamplona 1994), p. 633.

coactiva a pagar un "impuesto religioso" a las confesiones respectivas. En España, porque siendo una "dotación estatal", aunque sea sobre la base de una libre asignación de los ciudadano, y, por tanto, difícilmente conciliable con el principio de laicidad del Estado. Ello hace que tenga reminiscencia de la confesionalidad del Estado. De otra parte, no se otorga libertad para hacer la aportación o no, puesto que se trata de un "impuesto estatal". De este modo, se ataca la libertad religiosa e ideológica, indirectamente, al hacerla obligatoria<sup>54</sup>. En realidad, la contribución del Estado, como expresión de la sociedad, a la Iglesia está plenamente justificada y es, perfectamente, compatible con la distinción entre Iglesia y Estado y la naturaleza no confesional por múltiples razones:

- a) porque la gran voracidad fiscal del Estado moderno no deja a los ciudadanos capacidad de cumplir ellos, directamente, con muchas de sus obligaciones o devociones sociales. Por eso, el Estado ha de subvencionar la cultura, el ocio, el teatro, el deporte y tantas otras aficiones o conveniencias positivas de los ciudadanos, que, en principio, tendrían que pagar o financiar, directamente, ellos mismos, según sus gustos y preferencias sociales;
- b) porque la religión y el ejercicio de la vida religiosa es parte del bien común, en una sociedad libre, y debe, por tanto, ser, positivamente favorecido por el Estado, como en el ejercicio de otras muchas libertades sindicales, laborales, políticas, culturales y recreativas. Esto no es confesionalidad, es, simplemente, consideración, socialmente positiva, de la libertad religiosa, como una de las libertades fundamentales del ciudadano, que la sociedad y el Estado, en su nombre, tienen que proteger y favorecer positivamente;
- c) además, la Iglesia presta muchos servicios de interés social en sus actividades estrictamente religiosas y asistenciales<sup>55</sup>.

El anteproyecto de Constitución, de 17 de abril de 1978, informado por la *Ponencia*, sustituía al genérico "relaciones de cooperación" del anteproyecto de 5 de enero de este mismo año, por el más concreto "relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas", que pasó, sin mácula, todo el proceso constitucional<sup>56</sup>.

El sistema constitucional español difiere sustancialmente del propio de la Constitución italiana -artículos 7 y 8-, que constitucionaliza el concordato con la Iglesia católica y el régimen de *intese* para el resto de los cultos admitidos. Las *inteses* consisten en un procedimiento bilateral en su elaboración, que da lugar a una normativa de base pacticia, aunque de promulgación formal unilateral del Estado, mediante el cual las confesiones admitidas en el Derecho italiano, convienen sus relaciones con el Estado. Una vez firmados por las representaciones oficiales de las dos partes, estado y confesión se presentan al Parlamento italiano, como proposición de ley unilateral del Estado<sup>57</sup>. En el sistema italiano, el Estado está constitucionalmente obligado a tenerse a la fórmula y procedimiento de las *intese* siempre que legisle sobre confesiones, mientras que éstas son libres de adoptar o no ese procedimiento en sus relaciones con el Estado. En el sistema español, en cambio, el Estado debe mantener, según

<sup>54</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas: fundamentos, alcances y límites*, loc. cit., p. 100, en sus Conclusiones sexta, séptima y octava.

<sup>55</sup>.- Vid. SEBASTIÁN AGUILAR, F., *¿Quién tiene que sostener a la Iglesia?*, 2350, Ecclesia (1987), pp. 10-11.

<sup>56</sup>.- Vid. SORIANO, R., *Del pluralismo confesional al pluralismo religioso íntegro: los límites al principio de igualdad religiosa*, loc. cit., p. 136.

<sup>57</sup>.- Vid. VILADRIK, P.J., *El principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas en la Constitución española de 1978*, loc. cit., p. 1162.

la Constitución española, las consiguientes relaciones de cooperación o común entendimiento con las confesiones, pero no está obligado a atenerse a una forma concreta y a un procedimiento jurídico igualmente definido a la hora de relacionarse con dichas confesiones. Estas tienen derecho a que el Estado español no las regule unilateral e incommunicadamente, sino a través de relaciones de mutuo entendimiento, pero no pueden exigir una forma y un procedimiento concreto en base a la Constitución<sup>58</sup>. En el sistema italiano las *intese* representan no sólo un límite al contenido de la ley estatal, sino la condición primera de su validez. En el sistema español, al no existir constitucionalización de forma alguna, lo único que atentaría a la Constitución sería aquel proceder del Estado que pretendiera regular la posición jurídica de las confesiones, al margen del común entendimiento con las mismas<sup>59</sup>.

En el sistema italiano, la Constitución no obliga al legislador a elaborar *intese*, si bien, si decide regular la posición jurídica básica de las confesiones –opción de la que es libre– ha de hacerlo, necesariamente, a través del sistema concordatario con la Iglesia católica y mediante el procedimiento de las *intese* con el resto de los cultos legalmente reconocidos. En cambio, en el sistema español la Constitución española obliga a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y a mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones, pero no impone al Estado forma o procedimiento concreto alguno de plasmar dicho entendimiento<sup>60</sup>.

### **III.3.1.LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, DE 1978, Y LA LEY ORGÁNICA 7/1980, DE LIBERTAD RELIGIOSA, DE 5 DE JULIO DE 1980<sup>61</sup>.**

La Constitución española, de 1978, al regular, expresamente, el derecho de libertad religiosa y los principios de la actividad del Estado ante el fenómeno religioso, establece, en sus artículo 9.2 y 16.3 de la Constitución española, de 1978, una promoción del derecho de libertad religiosa de ciudadanos y confesiones. De este modo, se excluye someterlas a un derecho común, destinado a regir realidades distintas de las religiosas. Por ello, la única opción es la de crear un derecho especial del Estado, que regula las manifestaciones del ciudadano con índole religiosa<sup>62</sup>.

Aunque la Constitución española de 1978, al hablar de cooperación, no impone un sistema de acuerdos, sí le proporciona un indirecto, pero eficaz apoyo. Que el legislador constitucional, al hablar de relaciones de cooperación, tenía en cuenta las relaciones pacticias, es algo que se demuestra, claramente, de los trabajos parlamentarios, que llevaron a la redacción

<sup>58</sup>.- Vid. VILADRIK, P.J., *El principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas en la Constitución española de 1978*, loc. cit., pp. 1162-1163.

<sup>59</sup>.- Vid. VILADRIK, P.J., *El principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas en la Constitución española de 1978*, loc. cit., p. 1163.

<sup>60</sup>.- Vid. VILADRIK, P.J., *El principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas en la Constitución española de 1978*, loc. cit., p. 1163.

<sup>61</sup>.- La ley orgánica de libertad religiosa, de 5 de julio de 1980, presenta deficiencias técnicas en la regulación del régimen de las confesiones religiosas y de las entidades religiosas, y no siempre concuerda con el texto constitucional, ni con el acuerdo jurídico, de 1979. Vid. LÓPEZ ALARCÓN, M., *Dimensión orgánica de las confesiones religiosas en el derecho español*, XX., 40, I.C. (1980), p. 42.

<sup>62</sup>.- Vid. MOTILLA DE LA CALLE, A., *Los acuerdos o convenios de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas en el Derecho español*, II, 99, R.D.Púb. (1985), p. 393.

del artículo 16 de la Constitución española<sup>63</sup>. El artículo 16.3 de la Constitución de 1978<sup>64</sup> establece el deber de los poderes públicos de mantener relaciones de cooperación con las confesiones religiosas<sup>65</sup>, sin imponer ni excluir que tales relaciones se concreten en acuerdos normativos. A su vez, el artículo 7 de la ley orgánica de libertad religiosa de 1980<sup>66</sup> determina, que tales relaciones de cooperación se podrán concretar en la estipulación de acuerdos o convenios del Estado con las confesiones. En aplicación del artículo 7 de la ley orgánica de libertad religiosa pueden concertarse acuerdos o convenios con confesiones religiosas. Por tanto, el engarce de los acuerdos con cualquier confesión -incluida la Iglesia católica- con el artículo 16.3 de la Constitución de 1978, pasa por el artículo 7 de la ley orgánica de libertad religiosa<sup>67</sup>. Aunque no se constitucionaliza ninguna forma específica de cooperación, en la ley orgánica de libertad religiosa quedan explicitados los acuerdos y convenios de cooperación, como las formas preferenciales de llevarla a cabo. Pero no se excluye cualquier otra, al no imponerse en la Constitución ninguna forma concreta. En cualquier caso, no es descabellado creer que el establecimiento de los acuerdos y cooperación de los poderes públicos con las confesiones vino influenciado directamente por el peso específico de la forma que en el acuerdo

<sup>63</sup>.- Vid. LOMBARDÍA, P., *Los acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas en el nuevo Derecho eclesiástico español*, en AA.VV., *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica...*, loc. cit., p. 422.

<sup>64</sup>.- El artículo 16.3 de la Constitución española de 1978 nos dice que:

"Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas".

<sup>65</sup>.- El término confesión religiosa, utilizado en el artículo 16.3 de la Constitución, de 1978, no es nuevo en nuestro ordenamiento. Fue empleado por el régimen de la Segunda República, y, bajo la denominación de "asociación confesional", por el régimen franquista de las leyes fundamentales. Sin embargo, los muy diferentes principios, que asentaban dichos regímenes en materia eclesiástica, hacen que su significado normativo no pueda servir de precedente, a fin de desentrañar su concepto en el Derecho vigente. Si nos son útiles, las construcciones doctrinales de otros países -como Alemania e Italia-, en los que, coincidiendo o no la denominación del sujeto tipificado, con la del ordenamiento español, las similitudes de los valores y actitud del Estado ante el fenómeno religioso colectivo, hace trasplantables las teorías más generales sobre la categoría de confesión, aunque, al igual que sucede en los ordenamientos de los países mencionados, la determinación de este concepto, tan importante para el Derecho eclesiástico, siga siendo una cuestión no resuelta por la doctrina eclesiasticista. En el ordenamiento italiano se refiere a "confessioni religiose", aunque en la propia Constitución republicana, de 1948, se limita tal noción a las "confessioni religiose diverse dalla cattolica" -artículo 8.2 de la Constitución italiana, de 1948-, reservando un status y denominación especial para la "Chiesa cattolica" -artículo 7 de la Constitución italiana, de 1948-. En el Derecho alemán, la Ley fundamental de Bonn, de 1949, habla, en su artículo 7.3 de "comunidades religiosas" y los artículos en materia eclesiástica de la Constitución de Weimar, de 1919, de "sociedades religiosas" y "asociaciones religiosas" -artículos 136 a 141-. Vid. MOTILLA DE LA CALLE, A., *Aproximación a la categoría de confesión religiosa en el derecho español*, 8-9, R.J.C.M. (1989/1990)9, pp. 19-20.

<sup>66</sup>.- Mientras que la ley de libertad religiosa, de 1967, era de aplicación tan sólo para las asociaciones religiosas no católicas, con exclusión total de la Iglesia católica, la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, es de aplicación para todas las confesiones religiosas, incluida la Iglesia católica. Vid. SOUTO PAZ, J.A., *La Comisión Asesora de Libertad Religiosa*, 14, R.D.Pol. (1982), p. 47.

<sup>67</sup>.- Vid. LOMBARDÍA, P., *Los acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas en el nuevo Derecho eclesiástico español*, en AA.VV., *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica...*, loc. cit., p. 425. No debemos olvidar, que este artículo 7 de la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, se encuentra entre los artículos 5-8, que regulan las relaciones institucionales del Estado con las confesiones, pero, como ha manifestado MARTÍNEZ-TORRÓN, "sólo constituirán el marco jurídico de las relaciones con las Confesiones en la medida en que éstas no hayan llegado a un convenio con el Estado"; matizando que "cuando éste se produce, la confesión dispone de un régimen específico que lo sustrae al régimen general establecido en la segunda parte de la L.O.L.R., ya que este último quedaría circunscrito a los artículos 5 y 6, los cuales tendrán presumiblemente una escasa incidencia, al estar probablemente esos aspectos contemplados de modo más precisos en el Convenio". Vid. MARTÍNEZ-TORRÓN, J., *Jerarquía y antinomias de las Fuentes del nuevo Derecho eclesiástico español*, III, A.D.E.E. (1987), p. 145.

básico de 1976 pactaron Estado y Santa Sed, esto es, el sistema de acuerdos caracterizados según materias y sus resultados efectivos: los cuatro acuerdos, signados entre Gobierno y Santa Sede en 1979<sup>68</sup>.

Pero, a diferencia de los artículos 7 y 8 de la Constitución italiana, de 1948, la doctrina es unánime en afirmar, que el artículo 16.3 de la misma Constitución española no constitucionaliza el establecimiento de acuerdos. Pese a ello, no cabe duda de que, tanto en el período de reforma política, como en el período constituyente, existen claras manifestaciones en los actos de los poderes legislativos y ejecutivo, para considerar los acuerdos con las confesiones, como fórmulas, que desarrollan las relaciones de cooperación del artículo 16.3 de la Constitución de 1978. Que el legislador constitucional, al hablar de relaciones de cooperación tenía en cuenta el hecho de las relaciones pacticias es algo que se desprende, claramente, de los trabajos parlamentarios, que llevaron a la redacción de dicho precepto. Así, por ejemplo, en los debates parlamentarios, que precedieron a la aprobación del texto constitucional, encontramos una referencia de D. Manuel Fraga Iribarne, diputado de Alianza Popular, que parece dar a entender que los acuerdos con la Iglesia católica son una manifestación real del deber de cooperación: "[...] las relaciones de cooperación facilitan su concreción, porque son susceptibles de precisar por la ley y por los inevitables Acuerdos con la Santa Sede y con las jerarquías católicas en su caso, y en los demás casos con quienes corresponda" -discusión en el pleno del Congreso del proyecto de Constitución. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, de 7 de julio, de 1978, pp. 3975 a 3979-<sup>69</sup>. Esta conexión entre el artículo 16.3 de la Constitución y los acuerdos del Estado con las confesiones religiosas está también presente en el artículo 7 de la ley orgánica de libertad religiosa, de 5 de julio, de 1980<sup>70</sup>. En el número 1 de este artículo 7 de la ley orgánica de la libertad religiosa, de 1980, se prevé, explícitamente, la posibilidad de emanar fuentes bilaterales del Derecho Eclesiástico:

"El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española —expresión casi idéntica a la del artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978-, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes haya alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos Acuerdos se aprobarán por Ley de las Cortes Generales".

Siendo los acuerdos y convenios de cooperación la forma principal de llevar a efecto el mandato constitucional del artículo 16.3, su eventual contenido tampoco queda especificado, por lo que cada confesión podrá alcanzarlos sobre las materias concretas, que entiendan han de ser reguladas de semejante forma convencional. No es, por tanto, preceptiva una regulación, en esos eventuales acuerdos y convenios, de los mismos objetos para todas las confesiones, si bien regulados y pactados por algunas, como en el caso actual de la Iglesia católica, no puede impedirse a las demás, si así es su voluntad, llegar a convenios sobre las mismas materias y con el mismo alcance. Impedir la regulación de una materia ya regulada con otra confesión por

<sup>68</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *El impuesto religioso. Cooperación económica estatal con las confesiones religiosas* (Vizcaya 1990), p. 110.

<sup>69</sup>.- Vid. RUANO ESPINA, L., *Los Acuerdos o Convenios de cooperación entre los distintos poderes públicos y las confesiones religiosas*, loc. cit., p. 160 y nota 9.

<sup>70</sup>.- Vid. RUANO ESPINA, L., *Los Acuerdos o Convenios de cooperación entre los distintos poderes públicos y las confesiones religiosas*, loc. cit., p. 160.v

acuerdos, o limitar el contenido de éstos, sería, evidentemente, una violación del principio de igualdad<sup>71</sup>.

De hecho, el artículo 7.1 de la ley orgánica de la libertad religiosa, de 1980<sup>72</sup>, se fundamenta, implícitamente, en el artículo 16.3 de la Constitución, al concebir los acuerdos o convenios en él previstos, como expresión de las relaciones de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas<sup>73</sup>. Esta relación queda manifiesta en la exposición de motivos del proyecto de ley, presentado por el Gobierno, texto que desapareció en el dictamen de la Comisión del Congreso y que declaraba: "Se contempla la posibilidad de que las relaciones de cooperación de los poderes públicos con la Iglesia Católica y las demás confesiones se concreten en Convenios o Acuerdos de cooperación con aquellas Iglesias, confesiones o comunidades que, teniendo en cuenta las creencias de la sociedad española, hayan alcanzado notorio arraigo en España..."<sup>74</sup>.

No cabe duda, de que la ley orgánica de la libertad religiosa de 1980 entiende, que el principio constitucional de cooperación puede concretarse en fuentes bilaterales de Derecho Eclesiástico. Ley orgánica de libertad religiosa de 1980, que no sólo es aplicable a las confesiones distintas de la Iglesia católica, como ocurría con la ley de 1967, sino que la ley se refiere a todos los grupos religiosos, sin exceptuar la confesión mayoritaria<sup>75</sup>.

<sup>71</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *El impuesto religioso. Cooperación económica estatal con las confesiones religiosas*, loc. cit., p. 110.

<sup>72</sup>.- Este artículo 7.1 de la ley orgánica de la libertad religiosa, de 1980, nos dice:

"El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes haya alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos acuerdos se aprobarán por Ley de las Cortes Generales".

<sup>73</sup>.- Vid. LOMBARDÍA, P., *Los acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas en el nuevo Derecho eclesiástico español*, en AA.VV., *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica...*, loc. cit., p. 423. En este mismo sentido vid. RUANO ESPINA, L., *Los Acuerdos o Convenios de cooperación entre los distintos poderes públicos y las confesiones religiosas*, loc. cit., p. 161. Un acuerdo con el Estado, negociado y formalizado según el artículo 7.1 de la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, representa la máxima expresión normativa de la relación de cooperación, establecida con una concreta confesión, pero no la única. De hecho, determinadas confesiones acatólicas, antes de la promulgación de las respectivas leyes, que aprueban los acuerdos evangélico, judío y musulmán, habían alcanzado pactos con la Administración de limitado contenido material, a los cuales se da ejecución a través de normas unilaterales del Estado -es el caso de la orden de 9 de abril, por la que se incorpora a los niveles de Educación Preescolar y Educación General Básica el programa, establecido por la Federación de Comunidades Israelitas de España-. O la orden de 1 de julio, de 1983, por la que se incorpora a los niveles de Educación Preescolar y Educación General Básica el programa de enseñanza religiosa adventista, propuesto por la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día. Orden de 7 de noviembre, de 1983, por la que se incorpora al bachillerato el programa de la enseñanza religiosa adventista, propuesto por la Unión de las Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día. Orden de 19 de junio, de 1984, por la que se incorpora las enseñanzas de formación religiosa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Bachillerato y Formación Profesional. Vid. MOTILLA DE LA CALLE, A., *Algunas consideraciones en torno a la naturaleza jurídica y eficacia normativa de los Acuerdos aprobados según el acuerdo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa*, X, A.D.E.E. (1994), p. 349.

<sup>74</sup>.- Vid. *Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados*, I Legislatura, Serie A: Proyectos de ley, 17 de octubre, de 1979, n. 77-I, p. 484. Vid. reproducido en RUANO ESPINA, L., *Los Acuerdos o Convenios de cooperación entre los distintos poderes públicos y las confesiones religiosas*, loc. cit., p. 161.

<sup>75</sup>.- Vid. LOMBARDÍA, P., *Los acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas en el nuevo Derecho eclesiástico español*, en AA.VV., *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica...*, loc. cit., p. 424.

Este artículo 7.1 de la ley orgánica de la libertad religiosa, de 1980, de hecho, no afecta a la Iglesia católica, pues su estatuto está localizado en la Constitución, por lo que sólo afecta, actualmente, a las confesiones no católicas<sup>76</sup>.

El que los acuerdos con la Santa Sede de 1979 fueran ratificadas por el artículo 94 de la Constitución, equiparándose, de este modo, a los tratados internacionales, no se opone a lo que prevé el artículo 7 de la ley orgánica de la libertad religiosa: lo único que se establece para todos los acuerdos con confesiones es que se estipulen por pacto entre el Estado y las confesiones, y que tales acuerdos sean aprobados por las Cortes Generales. A las "demás confesiones", por carecer de personalidad internacional, no es aplicable el artículo 94 de la Constitución<sup>77</sup>.

#### **III.4. LA MENCIÓN EXPRESA DE "LA IGLESIA CATÓLICA" EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, DE 1978, LA LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD RELIGIOSA, DE 5 DE JULIO, DE 1980 Y LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS, DE 1964.**

La mención de la Iglesia católica no supone una excepción constitucional al principio de no confesionalidad del Estado: lo impide el significado propio del principio de libertad religiosa. Tampoco excepciona el principio de igualdad, desde el momento en que las relaciones de cooperación no dejan de extenderse a todas las confesiones religiosas, que aparecen también mencionadas en el texto del artículo 16.3<sup>78</sup>.

En los fundamentos del recurso de la sentencia el Tribunal Constitucional de 13 de mayo, de 1982, se alude al alcance de la mención constitucional de la Iglesia católica "como paradigma extensivo del trato específico de las demás confesiones"<sup>79</sup>.

La mención expresa<sup>80</sup> de la Iglesia católica fue el punto más discutido, a lo largo de los debates parlamentarios, sobre el artículo 16 de la Constitución española, de 1978. Se enfrentaron aquí dos posturas: una, mantenida por Unión de Centro Democrático -U.C.D.-, Alianza Popular -A.P.-, Partido Nacionalista Vasco -P.N.V.-, y, en cierto modo, el Partido Comunista de España -P.C.E.-, favorable a la mención constitucional de la Iglesia católica; y otra, defendida, fundamentalmente, por el Partido Socialista Obrero Español -P.S.O.E.- y algunos grupos nacionalistas, contrarios a dicha mención<sup>81</sup>.

La ponencia constituida en el seno de la "comisión de asuntos constitucionales y libertades públicas" del Congreso de los Diputados elaboró un borrador de Constitución. El artículo 17 decía:

<sup>76</sup>.- Vid. VIANA TOMÉ, A., *La igualdad constitucional en el régimen jurídico español sobre confesiones religiosas*, loc. cit., p. 399.

<sup>77</sup>.- Vid. LOMBARDÍA, P., *Los acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas en el nuevo Derecho eclesiástico español*, en AA.VV., *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica...*, loc. cit., pp. 426-427.

<sup>78</sup>.- Vid. VIANA TOMÉ, A., *Los acuerdos con las confesiones religiosas y el principio de igualdad*. (Sistema español), loc. cit., p. 132.

<sup>79</sup>.- Vid. VIANA TOMÉ, A., *Los acuerdos con las confesiones religiosas y el principio de igualdad*. (Sistema español), loc. cit., p. 140. Algunos autores más que "paradigma" lo han calificado como "paradoja". Vid. BUENO GALLARDO, E., DOMÍNGUEZ POYATO, Y., GALLARDO CAMACHO, J.J., y MUÑOZ TORRES, M.P., *Los acuerdos con las minorías religiosas*, en AA.VV., *Laicidad, cooperación y sistema de acuerdos*. Actas del VI Congreso interuniversitario de Derecho eclesiástico para estudiantes (Madrid 1997), p. 187.

<sup>80</sup>.- Sobre la evolución de la mención expresa de la Iglesia católica, es interesante el estudio de los textos parlamentarios, del Congreso y del Senado, realizado por CIÁURRIZ, M<sup>a</sup>.J., *La libertad religiosa en el Derecho español*. (La Ley Orgánica de Libertad Religiosa) (Madrid 1984), pp. 36.63.

<sup>81</sup>.- Vid. ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, 2 (monográfico), R.F.D.U.C.N.E. (1979), pp. 251-252.

- "1. Se garantiza la libertad religiosa y de cultos así como la de profesión filosófica o ideológica, con la única limitación del orden público protegido por las leyes.
2. Nadie podrá ser compelido a declarar sobre sus creencias religiosas<sup>82</sup>".

El artículo 3 de la ponencia constituida en el seno de la "comisión de asuntos constitucionales y libertades públicas" del Congreso de los Diputados recogía la no confesionalidad del Estado español:

"El Estado español no es confesional. Garantiza la libertad religiosa en los términos del artículo".

La opinión de los obispos parece que fue tenida en cuenta por los ponentes de la Constitución, que, en un segundo borrador, eliminaron la referencia a la no confesionalidad del Estado, e introdujeron la necesidad de cooperación del Estado a las diversas confesiones religiosas<sup>83</sup>.

El Boletín Oficial de las Cortes -B.O.C.-, número 44, de 5 de enero de 1978, publicó el anteproyecto de Constitución redactado por la ponencia, designada al efecto, en el seno de la "comisión de asuntos constitucionales" del Congreso de los Diputados, junto con los votos particulares presentados por los grupos parlamentarios. En la nueva redacción se suprimió el primitivo artículo 3, cuyo contenido -reformado- y el del anterior artículo 17 se refundieron en un nuevo artículo 16, que rezaba así:

- "1. Se garantiza la libertad religiosa y de cultos de los individuos y de las comunidades, así como la de profesión filosófica o ideológica, con la única limitación del orden público protegido por las leyes.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre sus creencias religiosas.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación".

El artículo 16 de la Unión de Centro Democrático -U.C.D.- presentó una enmienda, que añade en el tercer párrafo a "la Iglesia católica y las demás confesiones"<sup>84</sup>. El anteproyecto de Constitución, de 17 de abril de 1978 -publicado en el *Boletín Oficial de las Cortes*, número 82, de 17 de abril de 1978- informado por la *Ponencia*, sustituía el genérico "relaciones de cooperación" del anteproyecto de 5 de enero de este mismo año, por el más concreto de "relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas", que pasó, sin mácula alguna, todo el proceso constitucional<sup>85</sup>. Efectivamente, en el texto del anteproyecto constitucional, informado por la ponencia, de 17 de abril de 1978, el anterior artículo 16 pasó a ser artículo 15, recogiendo en su nueva redacción gran parte de las enmiendas presentadas,

<sup>82</sup>.- Vid. ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 230.

<sup>83</sup>.- Vid. ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 231.

<sup>84</sup>.- Vid. ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., pp. 231-232.

<sup>85</sup>.- Vid. SORIANO, R., *Del pluralismo confesional al pluralismo religioso íntegro: los límites al principio de igualdad religiosa*, loc. cit., p. 136.

especialmente las de Unión de Centro Democrático -U.C.D.- y Alianza Popular -A.P.-, en relación con el número 3. El referido precepto decía:

- "1. Se garantiza la libertad religiosa y de cultos de los individuos y de las comunidades, así como la de profesar cualquier creencia o ideología, con la única limitación, en sus manifestaciones externas, del orden público protegido por las leyes.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión, creencias o ideologías.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones"<sup>86</sup>.

En la misma, por tanto, se recoge la enmienda de Unión de Centro Democrático, de mencionar la Iglesia católica y las demás confesiones, con la oposición de socialistas, comunistas y minoría catalana. El 5 de mayo de 1978 se iniciaron las sesiones en la "comisión constitucional" del Congreso sobre la base del informe de la ponencia. El artículo 15.3 planteó polémica. Barrera Costa, de Esquerra de Catalunya -E.C.- propuso suprimir la referencia a las relaciones de cooperación, que estimaba innecesarias –pues era consecuencia de tener en cuenta las creencias religiosas-, imprecisa –no aclara los términos y fines de la cooperación: ¿patrimonio artístico, enseñanza?-, contradictoria con el carácter no confesional del Estado –cierto carácter estatal de todas las confesiones religiosas, y, especialmente, de la Iglesia católica- y difícil de cumplir –dado el elevado número de confesiones, que entraña un aumento del gasto y de la burocracia, con la posible creación de un Ministro de Cultos-. En relación con la mención de la Iglesia católica, el diputado catalán estimó que debía rechazarse, pero defendiendo la necesidad de que la Iglesia católica se circunscriba al ámbito espiritual<sup>87</sup>. Se opuso a la enmienda de la minoría catalana Fraga Iribarne, de Alianza Popular, por considerar insuficiente la mera referencia a las creencias religiosas de la sociedad española, debiendo referirse a las creencias religiosas de la sociedad española, pues las creencias deben referirse a los individuos, reunidos en grupos confesionales –confesiones-<sup>88</sup>. La oposición a la mención de la Iglesia católica corrió a cargo de Enrique Barón, del grupo socialista, por entender que introducía "una cierta confesionalidad solapada por parte del Estado" y creaba una división entre los españoles en materias como enseñanza, matrimonio, conservación del tesoro artístico, régimen fiscal, etcétera<sup>89</sup>. También se manifestó contrario a la mención de la Iglesia católica,

<sup>86</sup>.- Vid. ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 232.

<sup>87</sup>.- *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados* (Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas), núm. 69, sesión 8, 18 de mayo de 1978, p. 2475. Vid. comentada dicha intervención en ALONSO DE ANTONIO, J., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., pp. 233-234.

<sup>88</sup>.- *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados* (Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas), núm. 69, sesión 8, 18 de mayo de 1978, p. 2475. Vid. comentada dicha intervención en ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 234.

<sup>89</sup>.- *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados* (Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas), núm. 69, sesión 8, 18 de mayo de 1978, p. 2477. Vid. comentada dicha intervención en ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 2345.

Martín Toval, del grupo de socialistas de Cataluña<sup>90</sup>. Sometido a votación el informe de la ponencia, se aprobaron, por unanimidad, los tres apartados, rechazándose todas las enmiendas. Peces-Barba, al explicar su voto del grupo socialista votó en contra del apartado 3 por incluir el término "Iglesia católica", al ser contradictorio con el principio de secularización del mundo moderno -en contra, incluso, del Concilio Vaticano II-, y discriminatoria respecto a las demás confesiones religiosas<sup>91</sup>. En consecuencia, el texto aprobado por la "comisión de asuntos constitucionales" del Congreso -*Boletín Oficial de las Cortes*, núm. 121, 1 de julio de 1978- como artículo 15 coincide con el aprobado por la ponencia. A este texto se presentó una enmienda del grupo socialista del Congreso -P.S.O.E.- y de socialistas de Cataluña en el sentido de suprimir en el artículo 15.3 la referencia a la Iglesia católica, volviendo a la redacción del anteproyecto, publicado en el *Boletín Oficial de las Cortes* del 5 de enero de 1978<sup>92</sup>.

El 7 de julio de 1978 se debatió en el pleno del Congreso<sup>93</sup> el anteproyecto dictaminado por la "comisión de asuntos constitucionales". Los debates giraron en torno al artículo 15.3<sup>94</sup>, Barrera Costa -E.C.-, defendió su enmienda, solicitando la supresión de las referencias a las relaciones de cooperación, y a la Iglesia católica, por producir recelos en otras confesiones, e, incluso, incompatible con el espíritu conciliar de la Iglesia católica española, en cuanto que instituía un régimen de privilegios<sup>95</sup>. También en contra de la mención de la Iglesia católica habló el socialista Barón Crespo, que ratificó sus ideas expuestas en la comisión, añadiendo que la mención no está justificada por el hecho de que España sea mayoritariamente católica, pues la cuestión religiosa afecta a la conciencia, y lo único que el Estado debe hacer es respetar la libertad interna y sus manifestaciones externas<sup>96</sup>. Fraga Iribarne -A.P.- defendió la necesidad de la cooperación, que -frente a Barrera- calificó de necesaria -por ejemplo, la conservación del patrimonio artístico eclesiástico-, precisa -a nivel de legislación ordinaria-, no difícil de cumplir, ni necesitada de un Ministerio de Cultos, pues su función puede corresponder al Ministerio de Justicia, y no discriminatoria respecto de otras confesiones no católicas. Por último, se mostró partidario de mencionar a la Iglesia católica, como "referencia al hecho indudable, histórico y sociológico de que España es un país cristiano y, dentro de eso, un país católico"<sup>97</sup>. Santiago Carrillo, del grupo comunista, en el turno de explicación de voto, habló en defensa del dictamen, por entender que supone el reconocimiento de la importancia social de la Iglesia

<sup>90</sup>.- *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados* (Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas), núm. 69, sesión 8, 18 de mayo de 1978, pp. 2482-2483. Vid. comentada dicha intervención en ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 235.

<sup>91</sup>.- *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados* (Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas), núm. 69, sesión 8, 18 de mayo de 1978, pp. 2486-2487. Vid. comentada dicha intervención en ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 235.

<sup>92</sup>.- Vid. ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 235.

<sup>93</sup>.- *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 106, sesión plenaria número 35, de 7 de agosto de 1978, pp. 3971-4002.

<sup>94</sup>.- Vid. ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 235.

<sup>95</sup>.- *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 106, sesión plenaria número 35, 7 de agosto de 1978, p. 3973. Vid. comentada dicha intervención en ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 236.

<sup>96</sup>.- *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 106, sesión plenaria número 35, 7 de agosto de 1978, pp. 3979 y ss. Vid. comentada dicha intervención en ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 236.

<sup>97</sup>.- *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 106, sesión plenaria número 35, 7 de agosto de 1978, pp. 3975-3976. Vid. comentada dicha intervención en ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 238.

católica, manifestando la necesidad de "no topar" con la Iglesia en cuanto posible obstáculo en el avance de la democracia y del socialismo<sup>98</sup>. En el Senado se presentaron 1.254 enmiendas al proyecto del pleno del Congreso, estudiadas por la comisión de Constitución de la Alta Cámara. Los debates comenzaron el día 18 de agosto de 1978, y, concretamente, el tema, que nos ocupa fue tratado el día 24 del mismo mes<sup>99</sup>. Villar Arregui -P.S.I.- solicitó la exclusión del término "Iglesia católica", por considerarla contraria al artículo 13 -igualdad-, y porque la iglesia se mueve en otro plano, que nada tiene que ver con el plano -temporal- de la Constitución<sup>100</sup>. Audet Puncernau -E.D.C.- se opuso a constitucionalizar las relaciones e cooperación, utilizando los mismos argumentos, expuestos en el Congreso, por el diputado Barrera Costa, por ser España un "Estado pluriconfesional"; además de ser discriminatorio respecto a las demás Iglesias<sup>101</sup>. También Benet -E.D.C.-<sup>102</sup>, Ramos Fernández-Torrecilla, del grupo socialista<sup>103</sup>, y Azcárate Flórez<sup>104</sup> acudieron al criterio de la discriminación para oponerse a la mención de la Iglesia católica<sup>105</sup>. El pleno del Senado debatió el artículo 16 del proyecto constitucional el día 26 de septiembre de 1978 limitándose la discusión al apartado 3 y a un propuesto apartado 4<sup>106</sup>. El senador Xirinachs -E.D.C.- defendía la neutralidad del Estado ante las confesiones religiosas; sin mencionar expresamente, la Iglesia católica, por ser un privilegio. También otros senadores solicitaron suprimir la mención expresa de la Iglesia católica: Audet Puncernau -E.D.C.-, Yuste Grijalba, socialista, Bandrés -E.E.- y Villar Palasí -P.S.I.-<sup>107</sup>.

La mención explícita de la Iglesia católica en el artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978, a juicio de SOUTO PAZ, lo único que hace es manifestar, que la Iglesia católica no necesita probar su "notorio arraigo" en la sociedad española. No significa una situación de privilegio, confesionalidad encubierta o discriminación de las "demás confesiones". Es, simplemente, el reconocimiento de un hecho social<sup>108</sup>.

La Constitución española e italiana se parecen claramente en la expresa mención a la Iglesia católica. Curiosamente, esta mención fue, en ambos casos, objeto de una acalorada discusión parlamentaria, y, tanto en 1949, en Italia, como en 1978, en España, el Partido

<sup>98</sup>.- *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 106, sesión plenaria número 35, 7 de agosto de 1978, pp. 3993 y ss. Vid. comentada dicha intervención en ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 238.

<sup>99</sup>.- *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 43, Comisión de Constitución, sesión número 5, 24 de agosto de 1978, pp. 1814-1827. Vid. comentada dicha intervención en ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 238.

<sup>100</sup>.- *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 43, Comisión de Constitución, sesión número 5, 24 de agosto de 1978, pp. 1814-1815. Vid. comentada dicha intervención en ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 238.

<sup>101</sup>.- *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 43, Comisión de Constitución, sesión número 5, 24 de agosto de 1978, p. 1817. Vid. comentada dicha intervención en ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 238.

<sup>102</sup>.- *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 43, Comisión de Constitución, sesión número 5, 24 de agosto de 1978, p. 1821.

<sup>103</sup>.- *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 43, Comisión de Constitución, sesión número 5, 24 de agosto de 1978, p. 1821.

<sup>104</sup>.- *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 43, Comisión de Constitución, sesión número 5, 24 de agosto de 1978, p. 1820.

<sup>105</sup>.- Vid. comentada dicha intervención en ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 238.

<sup>106</sup>.- *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 59, sesión plenaria núm. 33, 26 de septiembre de 1978, pp. 2963-2972. Vid. comentada dicha intervención en ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 240.

<sup>107</sup>.- Vid. ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, loc. cit., p. 240.

<sup>108</sup>.- Vid. SOUTO DE PAZ, J.A., *La Comisión Asesora de Libertad Religiosa*, loc. cit., p. 43.

Comunista votó a favor de la inclusión constitucional de la referencia a la Iglesia católica; la conquista de la Constitución y el mismo sistema político democrático exigía concesiones, que pasaban por el mantenimiento de la paz religiosa; así se manifestó Palmiro Togliatti, con ocasión de la elaboración de la Constitución italiana y, en su momento, los representantes comunistas en las Cortes Constituyentes españolas<sup>109</sup>. Tanto en España, como en el Derecho comparado italiano, existe una macro-religión -la católica- y un conjunto de religiones-apostillas, que parecen tener como objetivo la justificación y demostración del principio de libertad religiosa<sup>110</sup>.

Pero también existen algunas diferencias. Aunque en la Constitución española, de 1978 se mencionan -a diferencia que la Constitución italiana, de 1948 que recoge expresamente, en su artículo 7.2, la mención a los Pactos lateranense, de 1929-, los acuerdos con la Iglesia católica, e incluso se reconoce la posibilidad de pactar acuerdos con "las demás confesiones" -hecho que ha tenido lugar a fecha de 1992-, en realidad, tal mención no es sino una coartada, para poder decir que la igualdad es respetada en el plano religioso, cuando las diferencias entre "la Iglesia Católica" y "las demás confesiones" son patentes. Si bien, tanto en el acuerdo jurídico con la Iglesia católica, de 1979, como en los de las confesiones de 1992, se habla de matrimonio, sólo en el acuerdo con la Santa Sede hay una remisión a algunos aspectos de Derecho sustantivo; aunque en ambos se habla de enseñanza de la religión, el Estado sólo pagará a los profesores de la religión católica; del mismo modo que, de entre los ministros de culto, que presten asistencia a las Fuerzas Armadas, sólo pagará a los católicos, y los ejemplos podrían ser muy numerosos<sup>111</sup>.

LLAMAZARES FERNÁNDEZ y SUÁREZ PERTIERRA señalan que como "no existe mandato constitucional de igualdad para las confesiones, que sería el único modo de obviar la explícita mención de una confesión concreta" se debe ser muy prudente. Además, existen otros riesgos:

"Consideramos, en conclusión, que si el *principio de cooperación* constituye un límite obligado al a desconfesionalización del Estado español, el mandato especial de cooperación con la Iglesia católica, dependiente de la asunción por el Estado de un sustrato sociológico, limita aún más la no confesionalidad y arriesga la implantación de un régimen privilegiario lesivo de la igualdad y, por ese camino, de la libertad religiosa"<sup>112</sup>

SORIANO considera desafortunada la mención de la Iglesia católica, por contravenir el principio de igualdad religiosa del artículo 14 de la Constitución, por varios motivos:

- a) se menciona a la Iglesia católica, cuando un reglón antes se ha proclamado la aconfesionalidad del Estado. Lo lógico hubiera sido el silencio, ni tan siquiera aludir a esas relaciones de cooperación con las confesiones; pero, de hacerlo, mencionar las confesiones en general, como destinatarias de tales relaciones de cooperación. Además, lo lógico hubiera sido anteponer las confesiones religiosas a la expresión "Iglesia católica";

<sup>109</sup>.- Vid. SORIANO, R., *Del pluralismo confesional al pluralismo religioso íntegro: los límites al principio de igualdad religiosa*, loc. cit., pp. 117-118, en su nota 16.

<sup>110</sup>.- Vid. SORIANO, R., *Del pluralismo confesional al pluralismo religioso íntegro: los límites al principio de igualdad religiosa*, loc. cit., p. 119.

<sup>111</sup>.- Vid. IBÁN, I.C., *Hacia un Derecho Eclesiástico convencional*, 14, R.J.C.M. (1992), pp. 13-15.

<sup>112</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., y SUÁREZ PERTIERRA, G., *El fenómeno religioso en la nueva Constitución española. Bases de su tratamiento jurídico*, 61, R.F.D.U.C.N.E. (1980), p. 34.

- b) la Constitución debe recoger normas generales y abstractas; las alusiones concretas a las relaciones jurídicas y destinatarios de las normas deben incorporarse a las normas legislativas y reglamentarias de desarrollo de los preceptos constitucionales. No sería coherente hacer referencia a un determinado sindicato, partido político, etcétera. Una Constitución debe quedar al margen de los cambios sociales sectoriales, por su carácter de intemporalidad y universalidad<sup>113</sup>.

El principio de igualdad es también un límite para los acuerdos o convenios de cooperación, previstos en el artículo 7.1 de la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980. Es decir, el trato específico -permitido por el principio de igualdad-, que una confesión reciba por vía de acuerdos, no podrá producir resultados discriminatorios para los demás grupos religiosos o ciudadanos. Lo anterior no quiere decir que siempre que se extienda, a través del trato específico, los aspectos favorables de la libertad religiosa a favor de una determinada confesión, se esté produciendo allí una discriminación en perjuicio de las confesiones y ciudadanos, que *de facto* no disfruten de aquellos. Si esto fuera así, se estaría produciendo un vicio de inconstitucionalidad por omisión y el Tribunal Constitucional únicamente admite esta figura cuando la Constitución impone al legislador la necesidad de dictar normas de desarrollo constitucional y el legislador no lo hace<sup>114</sup>.

En la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, la mención expresa de la Iglesia católica fue también objeto de discusión. Insertada, en un primer momento, quedó excluida posteriormente. Omitida en los proyectos del Gobierno -documento 1-, como de la ponencia -documento 2-, fue incluida en el proyecto de la comisión, tras su dictamen, la mención expresa de la Iglesia católica en el artículo 7.1 de la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980. En él se establecía que el Estado deberá establecer "Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro". Éste es el único artículo, donde viene mencionada, expresamente, la Iglesia católica; mientras que en los artículos paralelos -artículo 2.2; artículo 5.1; artículo 6.1 y artículo 8.1- vienen nombradas en plural, tanto las iglesias, como las confesiones o comunidades religiosas o federaciones de la misma. Pero en el pleno del Congreso se volvía a excluir la mención expresa, sin que, en adelante, prosperaran los intentos renovados en el Senado<sup>115</sup>. En el pleno del Congreso se suprimió la mención a la Iglesia católica en la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, en su artículo 7, facilitando el llegar a un acuerdo y evitando un duro enfrentamiento<sup>116</sup>.

La sentencia 340/1993, de 16 de noviembre<sup>117</sup> resuelve las cuestiones de inconstitucionalidad, planteadas por diversos órganos judiciales y que se resuelven, acumuladamente, en esta sentencia. En ella se analizan los apartados primero y segundo del artículo 76 de la ley de arrendamientos urbanos, de 1964 -texto refundido, aprobado por decreto 4.104/1964-, si bien solamente una de las cuestiones -la planteada por el juzgado de distrito número 1 de Toledo- se refiere a la Iglesia católica, en su posición de arrendadora. El precepto de la ley de arrendamiento urbanos, de 1964, objeto de la duda de constitucionalidad, consagra

<sup>113</sup>.- Vid. SORIANO, R., *Del pluralismo confesional al pluralismo religioso íntegro: los límites al principio de igualdad religiosa*, loc. cit., pp. 137-138.

<sup>114</sup>.- Vid. VIANA TOMÉ, A., *Los acuerdos con las confesiones religiosas y el principio de igualdad. (Sistema español)*, loc. cit., p. 137.

<sup>115</sup>.- Vid. CORRAL SALVADOR, C., *La Ley Orgánica de Libertad Religiosa*, 37, 106-107, R.E.D.C. (1981), p. 71.

<sup>116</sup>.- Vid. CELADA, C., *La ley de Libertad Religiosa, aprobada sin la mención a la Iglesia Católica*, 1977, *Ecclesia* (1980-I), p. 21.

<sup>117</sup>.- La misma puede consultarse en 2, *La Ley* (1994), pp. 28-46.

un diferencia de régimen legal, en lo que respecta a la justificación de la necesidad de ocupación de la vivienda, ya que, si conforme al régimen general el arrendador habrá de justificar tal necesidad, el artículo 76.1 de la ley de arrendamientos urbanos, de 1964, establece que "cuando el Estado, la Provincia, el Municipio, la Iglesia Católica y las Corporaciones de derecho público tengan que ocupar sus propias fincas para establecer sus oficinas o servicios no vendrán obligados a justificar la necesidad [...]". Tras una pormenorizada cita de los antecedentes del precepto cuestionado, el fundamento primero de la sentencia fija 340/1993, de 16 de noviembre, fija su atención en la expresa mención, que se efectúa a la Iglesia católica entre las entidades reseñadas en el mismo, señalando, que tal inclusión se produce "por obra del Decreto de 22 de julio de 1948, al equipararlas con las Corporaciones de Derecho Público a las que la Ley de Bases de Arrendamientos Urbanos de 1946 extendió la dispensa de justificación de la necesidad de la ocupación". Al desarrollar el Gobierno la Base VIII.15 de la ley de bases de 22 de diciembre, de 1955, la anterior equiparación se sustituyó por una expresa mención de la Iglesia católica junto al Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público en el artículo 76.1 del texto articulado de la ley de arrendamientos urbanos, de 1956. La cuestión se centra en determinar, si el distinto y más favorable régimen legal, que la norma cuestionada concede a la Iglesia católica, como arrendador, posee un fundamento objetivo y razonable en relación con la finalidad, que la disposición persigue y con los efectos que la disposición genera. En este sentido, afirma la sentencia que "los ya indicados antecedentes del precepto evidencian que el mismo se halla en este asunto estrechamente vinculado al carácter confesional del Estado en la época en que el artículo 76.1 fue promulgado. Pues hasta observar que si este carácter confesional se proclama en el Fuero de los Españoles de 1945 (art. 6), a ello se corresponde la asimilación de la Iglesia, a los efectos del artículo 100 de la L.A.U. de 1947, a las Corporaciones de Derecho Público por el Decreto de 22 de julio de 1948. Y a la solemne proclamación en igual sentido del artículo I del Concordato con la Santa sede de 27 de agosto de 1953 también se corresponde la expresa inclusión de la Iglesia Católica -en paridad con el Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho Público-, en el artículo 76.1 del Texto articulado de la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobado por Decreto de 13 de abril de 1956, mención que se mantuvo, tras la nueva proclamación de la confesionalidad del Estado, contenida en la Ley de Principios de Movimiento Nacional de 1958 (Principio II), en el artículo 76 del Texto Refundido hoy vigente de la L.A.U., aprobado por el Decreto 4.104/1964, de 24 de diciembre. En lo que se refiere, por tanto, a la Iglesia Católica", la justificación del precepto impugnado se basa en un fundamento no conforme con la Constitución Española de 1978, que ha dispuesto, que "ninguna confesión tendrá carácter estatal" -artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978-<sup>118</sup>. No obstante, como ha sostenido el Abogado del Estado y el Fiscal del Estado, el carácter preconstitucional del precepto impugnado no impide, sin más, que pueda incardinarse y encontrar su justificación en una norma de la Constitución. Alegándose por los mencionados intervinientes, que así ocurre, precisamente, respecto al artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978, pues, aunque allí, inicialmente, se proclame la no confesionalidad, no se excluye, sin embargo, que los poderes públicos mantengan "relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones". Ahora bien, sin necesidad de entrar, a considerar el fundamento y los límites de estas relaciones de cooperación, tal justificación del precepto cuestionado no puede ser acogida. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta, que los términos, empleados por el inciso del artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978, no sólo expresan el carácter no confesional del Estado, en atención al pluralismo de la libertad religiosa de todos, reconocidas en los apartados primero y segundo de este precepto

<sup>118</sup>.- Vid. el comentario a esta sentencia 340/1993, de 16 de noviembre, por PEÑA JORDÁN, en X, A.D.E.E. (1994), pp. 499-500.

constitucional. Al determinar, que "ninguna confesión tendrá carácter estatal", cabe estimar, que el constituyente ha querido expresar, además, que las confesiones religiosas, en ningún caso, puedan trascender los fines, que le son propios y ser equiparadas al Estado, ocupando una igual posición jurídica; pues, como se ha dicho en la sentencia del Tribunal Constitucional 24/1982, fundamento jurídico primero, el artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978, "veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales". Lo que es, especialmente, relevante en relación con el artículo 76.1 de la ley de arrendamientos urbanos, de 1964, dado que este precepto ha llevado a cabo, precisamente -por las razones históricas antes expuestas- una equiparación de la posición jurídica de la Iglesia con el Estado y los otros entes de Derecho público en materia de arrendamientos urbanos. En definitiva, ha de concluirse, que la justificación del precepto cuestionado, que equipara a la Iglesia católica con los entes públicos allí mencionados, se encuentra, únicamente, en el carácter confesional del Estado con anterioridad a la vigencia de la Constitución española, de 1978, lo que es contrario al inciso final del artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978. Y el artículo 76.1 de la ley de arrendamientos urbanos, de 1964, tampoco puede encontrar justificación en la previsión de dicho precepto constitucional sobre relaciones de cooperación entre el Estado español y las confesiones religiosas. Lo que conduce, a estimar, en definitiva, que este precepto carece de la justificación objetiva y razonable, que toda diferenciación normativa, por imperativo del artículo 14 de la Constitución española, de 1978, debe poseer, para ser considerada legítima; resultando, pues, sobrevenidamente inconstitucional, y, por consiguiente, nulo en cuanto a la mención de "la Iglesia católica". El fallo se pronuncia, por estimar la cuestión de inconstitucionalidad, planteada por el juzgado de distrito número 1 de Toledo, y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad sobrevenida y consiguiente nulidad del artículo 76.1 del texto refundido de la ley de arrendamientos urbanos, aprobado por decreto 4.104/1964, de 24 de diciembre, en cuanto a la mención de "la Iglesia Católica". La sentencia cuenta con dos votos particulares, cuyo contenido no afecta al sentido del fallo, en lo que se refiere a la mención de la Iglesia"<sup>119</sup>.

### **III.5. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA, ESTABLECIDO EN EL ACUERDO SOBRE ASUNTOS ECONÓMICOS DE 3 DE ENERO, DE 1979, PRINCIPIOS BÁSICOS DE ESTE ACUERDO ECONÓMICO.**

La Iglesia católica y las demás confesiones cristianas no han tenido nunca un programa económico concreto. Se diferencia en esto del judaísmo y del mahometismo. Tanto la "ley mosaica", como el Corán, mantiene normas, que aspiran, a regular la vida económica, de los que aceptan sus principios religiosos; aunque el cumplimiento de estas normas no ha sido nunca perfecto, y en los últimos siglos lo ha sido cada vez menos<sup>120</sup>.

Un programa económico concreto, a juicio de BELTRÁN, no sería conveniente para la Iglesia, ya que con el transcurrir del tiempo, pronto quedaría anticuado y habría sido necesario reemplazarlo por otro, consecuencia de los cambios políticos, económicos, sociales y técnicos. Por ello, la Iglesia a lo largo de la Historia, ha dado orientaciones generales, de carácter general, sobre la actividad económica. Otra alternativa conllevaría dificultades y peligros. Hoy, redactar un programa económico concreto, exigiría una gran cantidad de conocimientos, no sólo

<sup>119</sup>.- Vid. el comentario a esta sentencia 340/1993, de 16 de noviembre, por PEÑA JORDÁN, en X, A.D.E.E. (1994), pp. 500-501-

<sup>120</sup>.- Vid. BELTRÁN, L., *Estudio introductorio*, en el número monográfico titulado "Religión y economía", 1, R.I.E.E. (1986), pp. XIII-XV.

económicos, sino también sociales, políticos y tecnológicos. Además, si diese malos resultados, pronto el descrédito recaería sobre la Iglesia. Incluso, si los resultados inmediatos fueran buenos, con el tiempo y el cambio de las circunstancias, su aplicación empezaría a tener malas consecuencias<sup>121</sup>.

El sistema de dotación de la Iglesia católica española, existente hasta el vigente acuerdo económico, de 1978, reproducirá la solución dada para Francia por el General Bonaparte<sup>122</sup>.

El sistema de dotación recogido en el artículo XIX del concordato de 1953 llegó hasta 1977, fecha, por tanto, histórica -y no, precisamente, por la lejanía en el tiempo, sino por su trascendencia-, con las siguientes características:

- a) una partida en el Presupuesto del Estado, dentro del Ministerio de Justicia, donde se asignaba, concretamente, a oficios y beneficios determinados una cantidad determinada, bien como base, o como complementos y suplementos posteriores;
- b) un concepto de "piezas eclesiásticas", o de "objetos dotados";
- c) un concepto de "fondo de vacantes" o "fondo de reserva", que intentaba corregir, sin lograrlo, los absurdos del sistema de piezas;
- d) una distribución anárquica y, objetivamente, desacertada, de la dotación, apoyada, principalmente, en el número de parroquias existentes, número tan diverso y de tan distinto significado en las diversas regiones de España, que ni correspondía a número de clero, ni a número de habitantes, ni a extensión, ni a realidades de necesidades concretas y verdaderas<sup>123</sup>.

Sin embargo, incluso en los años anteriores a ponerse en práctica la programación completa de los acuerdos, se introdujeron cambios:

- a) un primer cambio lo supuso el paso de una dotación personal a "piezas" o a "objetivos", a una dotación global a la Iglesia, dejando en principio, el reparto a una decisión intraeclesial;
- b) otro cambio fue el ingreso del clero parroquial y secular en la seguridad social del Estado<sup>124</sup>.

PIÑERO CARRIÓN, al señalar los cambios más importantes en el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, nos señala los siguientes :

- a) se suprime el compromiso de ir hacia la creación de un patrimonio eclesiástico -artículo XIX.1 del concordato de 1953-;
- b) se suprime, totalmente, el concepto de "piezas" o retribución a cada oficio concreto -artículo XIX.2 del concordato de 1953-;

<sup>121</sup>.- Vid. BELTRÁN, L., *Estudio introductorio*, en el número monográfico titulado "Religión y economía", loc. cit., pp. XIV-XV.

<sup>122</sup>.- Vid. GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M., *El Estado y la financiación de las confesiones*, XXXIII, 65, I.C. (1993), p. 125.

<sup>123</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 308.

<sup>124</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 308-309.

Sobre la cuestión de la seguridad social del clero, aunque presenta gran interés, no será objeto de estudio. Aunque citaremos alguna bibliografía sobre la materia: vid. QUINTANA GÓMEZ, M., *La seguridad social del clero en España*, XVII, 48, R.F.D.U.C. (1973), pp. 607-642.

- c) se suprime la alusión directa a la labor asistencia del clero -artículo XIX.4 del concordato de 1953-;
- d) se suprime la alusión directa a las desamortizaciones -artículo XIX.2 del concordato de 1953-;
- e) se reorganiza por completo el espíritu y el sistema de aportación estatal, incluso en la primera etapa de transición, que ya pasó a ser global y única, y la memoria previa de la Iglesia fue sustituida por la rendición de cuentas. Además, muchas aportaciones a que se refería el concordato quedarían englobadas en la dotación única -a modo de ejemplo, seminarios y universidades del artículo XIX.2 y del artículo XXX.1; construcción y conservación de templos del artículo XIX.3 del mismo concordato de 1953-<sup>125</sup>.

Si queremos conocer, oficialmente, las razones de la reforma del concordato de 1953, en la materia económica, es necesario una lectura de la Introducción del acuerdo sobre asuntos económicos:

"La revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia católica resulta de especial importancia al tratar de sustituir los nuevos Acordos el Concordato de 1953.

Por una parte, el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado. Por otra partes, dado el espíritu que informa las relaciones entre Iglesia y el Estado, en España resulta necesario dar nuevo sentido tanto a títulos de la aportación económica como al sistema según el cual dicha aportación se lleve a cabo"

Efectivamente, en la misma Introducción, se habla de "revisión" del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia católica, no es una supresión, ni siquiera la creación de un sistema totalmente nuevo<sup>126</sup>. En la misma Introducción se añade que "el Estado no puede [...] desconocer [...] obligaciones jurídicas contraídas en el pasado". ¿Qué se quiere decir con tal expresión? Analicémosla:

- a) Se parte de una clara referencia a obligaciones anteriores, cuyo valor se admite: no se entra a determinar cuál es el último fundamento exigitivo de esas obligaciones, ya que, sea la que sea, el determinante definitivo es el Derecho concordato;
- b) Por eso se dice que son obligaciones jurídicas: sea lo que sea de su fundamentación moral o ética, esas obligaciones han sido controvertidas, en la Historia, en jurídicas;
- c) Y, además, esas obligaciones contractuales, habían sido contraídas.

Pero, se añade, "el Estado no puede [...] prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado". De tal afirmación, caben extraer las siguientes consecuencias: :

<sup>125</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *Un nuevo espíritu. (Acuerdo sobre asuntos económicos) en Iglesia-Estado: nueva situación (Comentario técnico a los Acuerdos parciales)*, 1163, V.N. (1979-I), p. 26.

<sup>126</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 310.

- a) esas obligaciones tenían un carácter *circunstancial*, ya que, al menos, en la forma de cumplirlas, obedecían a situaciones históricas concretas;
- b) al cambiar esas circunstancias concretas, debe cambiar también el *sentido* de esas obligaciones y la *forma* de cumplirlas: donde subyace, claramente, la afirmación de que la dotación, tal como se ha dado en España, más que el fruto lógico de unos principios doctrinales, era la desembocadura práctica de una solución de hecho;
- c) no cabe mantener el sentido y la forma de esas obligaciones indefinidamente, de lo contrario, se estaría "haciendo fijo" lo que no era consecuencia práctica de unas circunstancias temporales<sup>127</sup>.

La misma jerarquía de la Iglesia católica no alude a las desamortizaciones, como fundamento de la ayuda económica estatal en el documento de la Conferencia Episcopal española, sobre "La Iglesia y la Comunidad política", de 23 de enero de 1973<sup>128</sup>. Sin embargo, DE LUIS entiende que, aunque el acuerdo de 1979 no ha recogido expresamente la obligación de indemnizar a la Iglesia por las pasadas desamortizaciones, es indudable que, moralmente, sirve para fundar cualquier contribución del Estado a la financiación de la Iglesia. También lo justifica la labor de la Iglesia en materia cultural, asistencial, de enseñanza, etcétera, que libera al Estado de prestar una serie de servicios, que si no tendría que financiar directamente<sup>129</sup>.

El fundamento de la financiación estatal a las confesiones se encuentra en el artículo 9.2 de la Constitución española, de 1978, el cual, al señalar el cometido del moderno Estado Social de Derecho, establece un principio genérico, que luego el artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978, especifica respecto de la materia religiosa<sup>130</sup>. Efectivamente, una interpretación conjunta del artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978 y los artículos 1.1 y 9.2 de la misma, nos lleva a la conclusión de que la cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas perseguirá, como objetivo fundamental, la promoción por parte de los poderes públicos de la libertad e igualdad de los individuos y de los grupos sociales -confesiones religiosas-, en que se integran, y la participación en las decisiones políticas, que les afecten. Pero sin determinar cuáles deben ser los instrumentos jurídicos más adecuados para que los poderes públicos cooperen en la promoción de la libertad y la igualdad de las confesiones religiosas. La exigencia constitucional del artículo 16.3, sólo puede ser entendida, si se parte de la consideración del fenómeno religioso, como factor social específico, que el Estado promueve y garantiza, porque contribuye a la consolidación del bien social y si las relaciones de cooperación, a que se refiere este párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución, de 1978, se inscriben dentro del fenómeno general de la participación de los grupos sociales en las decisiones del poder político, que les afecten, para lograr una mayor efectividad de las medidas, adoptadas por los poderes públicos. Por esta razón, una adecuada interpretación del artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978, sólo puede hacerse partiendo de lo preceptuado por los artículos 1.1 y 9.2 de la misma Constitución<sup>131</sup>. FORNÉS rechaza también fundamentar la

<sup>127</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 310-311.

<sup>128</sup>.- Vid. MARTÍN SÁNCHEZ, I., *La financiación de las confesiones religiosas en el Derecho español*, loc. cit., p. 138.

<sup>129</sup>.- Vid. LUIS, F., De, *La contribución del Estado en la financiación de la Iglesia*, 2372, *Ecclesia* (1988-I), p. 19.

<sup>130</sup>.- Vid. MARTÍN SÁNCHEZ, I., *La financiación de las confesiones religiosas en el Derecho español*, loc. cit., p. 138.

<sup>131</sup>.- Vid. RUANO ESPINA, L., *Los Acuerdos o Convenios de cooperación entre los distintos poderes públicos y las confesiones religiosas*, loc. cit., p. 159.

cooperación del Estado con las confesiones religiosas en las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos, ni siquiera en la función social de las confesiones religiosas, sino en el propio derecho fundamental de libertad religiosa. El Estado social y democrático de Derecho ha de reconocer y tutelar el derecho humano de libertad religiosa, haciendo que su ejercicio sea, realmente, posible para todos, a través de una cooperación eficaz: también en el campo de la financiación<sup>132</sup>.

El preámbulo del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, al señalar que "el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado", se refiere a las obligaciones económicas contraídas con la Iglesia a raíz de la desamortización de Mendizábal, a las que hacen referencia nuestras Constituciones desde la de 1837 y nuestros concordatos de 1851 y 1953 -artículo 11 de la Constitución de 1837; artículo 11 de la de 1845; artículo 14 de la no promulgada de 1856; artículo 21 de la Constitución de 1869; artículo 11 de la Constitución de 1876; y artículos 31 y 41 del concordato de 1851 y el concordato de 1953-<sup>133</sup>. Si bien por primera vez desde 1837 se ha omitido cualquier referencia al tema de las ayudas económicas a la Iglesia católica, de forma que las relaciones de cooperación, a las que alude el artículo 16 de la Constitución, de 1978, no imponen ninguna obligación al futuro legislador, de manera que lo mismo podría optarse por la liquidación del presupuesto del culto y clero, que por el mantenimiento del régimen vigente<sup>134</sup>. La introducción al acuerdo económico guarda silencio sobre cuáles sean los títulos, que fundamentan la aportación económica a la Iglesia. El concordato de 1953, en su artículo XIX.2, expresamente indicaba dos títulos o motivos, que justificaban la dotación del Estado a la Iglesia: "a título de indemnización por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos y como contribución a la obra de la Iglesia a favor de la Nación". Hoy día, a juicio de MOSTAZA RODRÍGUEZ, no es válido el primero de dichos títulos, en conformidad con la doctrina actual, lo que justifica, plenamente, la subvención estatal a la Iglesia en la actividad de ésta en pro del bienestar de la sociedad<sup>135</sup>.

En el anteproyecto oficial de revisión del concordato español de 1953, hecho en 1970, -artículo XVIII-<sup>136</sup> se ha optado por mantener el sistema hasta ahora en vigor, pero profundamente transformado. La novedad estriba sólo en que "la dotación será entregada

<sup>132</sup>.- Vid. FORNÉS, J., *Régimen jurídico-patrimonial y financiación de la Iglesia desde la perspectiva de la libertad religiosa*, XXXVI, 71, I.C. (1996), p. 58.

<sup>133</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Sistema español de dotación estatal a la Iglesia*, en GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., *Régimen jurídico de sus relaciones*, loc. cit., p. 167.

<sup>134</sup>.- Vid. PREDIERI, A., y GARCÍA DE ENTERRÍA, E., *La Constitución española de 1978* (Madrid 1980), p. 347.

<sup>135</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Sistema español de dotación estatal a la Iglesia*, en GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., *Régimen jurídico de sus relaciones*, loc. cit., pp. 169-170.

<sup>136</sup>.- El artículo XVII del anteproyecto nos dice:

"1. En consideración del hecho de que la religión católica es la de la nación española, y como contribución a la obra de la Iglesia a favor del bien común, el Estado le asignará anualmente una adecuada dotación que asegure el sostenimiento del culto y la formación y congrua sustentación del clero, así como el fomento de las Órdenes, Congregaciones o Institutos eclesiásticos consagrados a la actividad misional.

Esta dotación será *entregada globalmente a la Conferencia Episcopal Española*, previo acuerdo con la misma sobre el importe a que debe ascender.

El Estado procurará ayudar económicamente, en la medida de lo posible, a las casas de formación de las Órdenes y Congregaciones religiosas, especialmente a aquellas de carácter misional".

globalmente a la Conferencia española, previo acuerdo con la misma sobre el importe a que debe ascender". De raíz se suprime toda alusión al fundamento último de la misma, el título de indemnización. Tal transformación sigue, sin embargo, manteniendo una motivación ya desfasada, la confesionalidad de la Nación española y pretende resaltar propagandísticamente "cuánto" se entrega. Máxime cuando se establece la necesidad de un previo acuerdo -ajuste sobre la cantidad que recibir-. El criterio más adecuado ha de ser el servicio prestado y el número de titulares necesarios que lo ha de prestar, como se hace con los demás servicios públicos o de interés social<sup>137</sup>. Aunque en el anteproyecto oficial se prescinde del título de indemnización, no sería contrario ni a la libertad religiosa ni a la igualdad jurídica, garantizada por nuestras leyes, que el Estado español, como Estado moderno –es decir, Estado social de Derecho, que garantiza y faculta el ejercicio de las libertades fundamentales-, ayudara, como en Bélgica, Luxemburgo -países con sistema de separación de Iglesia y Estado-, a subvencionar en parte la realización de un servicio de interés social, cual es el religioso -prestado por la Iglesia católica o cualquier confesión religiosa, debidamente reconocida-. Lo cierto es que era necesaria una reforma profunda del sistema concordatario, no bastando una simple revisión del concordato, como en el anteproyecto oficial; pero tampoco eran viables en España, en 1971, ni la supresión sin más de todo concordato, y menos de todo acuerdo, ni la elaboración y conclusión de un nuevo concordato absolutamente inédito y original<sup>138</sup>.

ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA entiende que los bienes inmuebles, ocupados por el Estado español en el siglo XIX sin compensación, no pueden constituir "ad finitum" el respaldo financiero de las dotaciones eclesiásticas, que vienen figurando en los presupuestos generales del Estado desde hace un siglo -con la excepción del período de la II República española y no en toda su extensión-. No hay imposición de capital, que genere una renta sin plazo -determinado o vitalicio- de tal magnitud. Los propios obispos españoles en su documento *La Iglesia y la comunidad política* de 1973, silencian toda vinculación de tales obligaciones presupuestarias del Estado con la llamada "subrogación de los bienes ocupados a la Iglesia"<sup>139</sup>.

Para PÉREZ DE AYALA el fundamento de la indemnización o reparación de la obra desamortizadora no tiene acogida en el momento actual, precisamente, por la Introducción del acuerdo económico, de 1979, al señalarse, expresamente, que "el Estado no puede [...] prolongar indefinidamente las obligaciones jurídicas contraídas en el pasado". Por supuesto, tampoco se puede pretender justificarla en la confesionalidad del Estado<sup>140</sup>. Para GONZÁLEZ CARVAJAL SANTABÁRBARA existen títulos sobrados, para legitimar la subvención del Estado a la Iglesia, y no ya como indemnización por la desamortización de los bienes eclesiásticos -que eso queda muy atrás-, sino por los servicios, que la Iglesia presta hoy a la sociedad. El argumento, de que no todos los ciudadanos son creyentes, carece de valor. Tampoco a toda la comunidad le interesa el teatro o el fútbol, y el Estado hace bien en subvencionarlo<sup>141</sup>. Para DUATO, aunque el acuerdo sobre asuntos económicos no dice los títulos se supone que sólo se puede justificar por la cooperación con la Iglesia para facilitar el

<sup>137</sup>.- Vid. CORRAL SALVADOR, C., *El Concordato español ante los concordatos vigentes (II)*, 184, R. y F. (1971), pp. 106-107 y 120.

<sup>138</sup>.- Vid. CORRAL SALVADOR, C., *El Concordato español ante los concordatos vigentes (II)*, loc. cit., p. 106.

<sup>139</sup>.- Vid. ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, C., *El régimen jurídico-económico de la Iglesia en España*, en AA.VV., *Constitución y relaciones Iglesia-Estado en la actualidad* (Salamanca 1978), p. 105.

<sup>140</sup>.- Vid. PÉREZ DE AYALA, J.L., *La asignación tributaria a la Iglesia católica y sus implicaciones constitucionales. Una reflexión*, 15 (monográfico), R.F.D.U.C. (1989), p. 647.

<sup>141</sup>.- Vid. GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA, L., *Los dineros de la Iglesia ante el Evangelio*, 80-3, 944, S.T. (1992), p. 185.

ejercicio de la libertad religiosa, y, temporalmente, por las obligaciones históricas, que, sin embargo, no se pueden prolongar indefinidamente<sup>142</sup>.

El acuerdo sobre asuntos económicos habla, en su introducción, de dar un nuevo sentido a los títulos de aportación económica: "dado el espíritu que informa las relaciones entre Iglesia y Estado, en España resulta necesario dar nuevo sentido tanto a los títulos de la aportación económica como al sentido según el cual dicha aportación se lleve a cabo". Pero no dice nada de cuáles son esos títulos ni del nuevo sentido, que haya de darles. Solamente alude al espíritu, que informa las relaciones de la Iglesia y el Estado en España. Parece que lo que ha querido decir es que estas relaciones se fundan en bases distintas en que se crearon y funcionaron las obligaciones económicas durante el tiempo del concordato. En efecto, el Estado que firmó el concordato de 1953 era confesional -artículo 1 del concordato-, mientras que el Estado que ha hecho los acuerdos se declara aconfesional -artículo 16 de la Constitución-. Estas nuevas relaciones exigía un nuevo planteamiento de las relaciones de hecho en sus diversos aspectos y también en el campo económico los títulos de la aportación del Estado no podían ser los mismos. En primer lugar, al no ser el Estado confesional, la ayuda económica, que podía estar basada en el servicio religioso de la Iglesia a la religión del Estado carecía de sentido. Al ser un Estado confesional éste tiene que ofrecer a los ciudadanos un servicio propio de religión. Y como se declaraba católico el Estado y este servicio lo prestaba la Iglesia, el Estado debía sostener económicamente ese servicio. Pero si una confesión religiosa no tiene carácter estatal, el Estado no está obligado a ayudar económicamente a una institución religiosa por motivos estrictamente religiosos<sup>143</sup>.

Por otra parte, se parte ahora del "espíritu que informa las relaciones entre Iglesia y Estado, en España". Tal manifestación conlleva, implícitamente, las siguientes afirmaciones:

- a) se admite una evolución en el espíritu de las relaciones entre la Iglesia y el Estado;
- b) no se concreta en qué consiste ese espíritu: se indica que es un *espíritu nuevo*, puesto que, inmediatamente, se nos va a decir que exige un nuevo sentido de la dotación;
- c) ese espíritu nuevo habrá que buscarlo en textos paralelos o simultáneos, del mismo tipo concordatario. De hecho, el acuerdo básico de 1976 se entretuvo en darnos en su Introducción, la síntesis de ese espíritu nuevo:
  - por el "profundo proceso de transformación que la sociedad española ha experimentado en estos últimos años";
  - "aún en lo que concierne a las relaciones entre la comunidad política y las confesiones religiosas y entre la Iglesia católica y el Estado";
  - "considerando que el Concilio Vaticano II, a su vez, estableció como principios fundamentales [...]";
  - "la mutua independencia de ambas Partes en su propio campo";
  - "una sana colaboración entre ellas";
  - "la libertad religiosa como derecho de la persona humana";

<sup>142</sup>.- Vid. DUATO, A., *El acuerdo sobre asuntos económicos*, 79, I.V. (1979), p. 65.

<sup>143</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *El nuevo sistema de dotación económica del Estado a la Iglesia*, loc. cit., pp. 87-88.

- "la libertad de la Iglesia es principio fundamental de las relaciones entre la Iglesia y los Poderes Públicos y todo el orden civil";
- "dado que el Estado español recogió en sus leyes el derecho de libertad religiosa fundado en la dignidad de la persona humana (Ley de 1 de julio de 1967), y reconoció en su mismo ordenamiento que debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica";
- por todo ello, está claro que el espíritu nuevo procede de *ambas partes*, de la Iglesia y del Estado<sup>144</sup>

Ese espíritu nuevo exige dar "nuevo sentido" a dos cuestiones: "a los títulos de la aportación económica":

- a) Tampoco se refiere al acuerdo sobre asuntos económicos a cuáles eran los títulos de la dotación hasta ahora; pero sí lo decía, taxativamente, el concordato de 1953, en su artículo XIX.2, señalando que eran dos:
  - la indemnización por las pasadas desamortizaciones;
  - y la contribución de la Iglesia a favor de la Nación;
- b) A esos títulos hay que darles, por Lo menos, un nuevo sentido: nada se dice de si ha desaparecido el "título de indemnización", por las pasadas desamortizaciones, y, tal vez, podríamos decir que se ha eludido el tema doctrinal, quedando, simplemente, arropado como un hecho histórico, sin más valor jurídico, que el que, expresamente, le conceda el mismo acuerdo, ya que, según PIÑERO CARRIÓN, el fundamento jurídico positivo de la aportación del Estado a la Iglesia tenía y tiene un carácter netamente contractual, sean cuales fueran las razones éticas y morales, e, incluso, jurídico-naturales, que apoyasen ese contrato;
- c) Tampoco es afirmado, expresamente, ahora, el otro título de "contribución a la obra de la Iglesia a favor de la Nación", si bien se entrevé, en el fondo, como verdadero único título real, que apoya la dotación y toda ayuda del Estado a las Iglesias<sup>145</sup>.

En el concordato de 1953, además de la confesionalidad del Estado basaba su aportación en dos títulos especiales: una indemnización por pasadas desamortizaciones, y segunda, como contribución a la obra de la Iglesia a favor de la Nación -artículo XIX.2 del concordato-. Actualmente, muchos autores consideran que las pasadas desamortizaciones no pueden alegar, como título, que justifique una aportación. Es cierto que una imposición de un capital no produce una renta sin plazo y es también cierto que el Estado no puede prolongar indefinidamente obligaciones contraídas en el pasado. Pero creemos que aquí no se trata de un

<sup>144</sup> Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 311-312.

<sup>145</sup> Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 312.

capital impuesto por la Iglesia, sino de un capital arrebatado a la Iglesia, y, por lo tanto, hay que probar que ese capital ha sido devuelto, para que cese la obligación. Si el Estado ha robado unos bienes, siempre tendrá la obligación de devolverlos, mientras no termine su devolución o el dueño no los condone. Sin embargo, parece que la Iglesia considera ya extinguida esa deuda, que el Estado tuviera con ella por este título. En el acuerdo sobre asuntos económicos no se dice nada de los títulos concretos de aportación, aunque en la introducción se hacía referencia a dar un nuevo sentido a los títulos de aportación económica. Pero ARZA ARTEAGA opina que, una vez que se ha abandonada la desamortización, sólo hay un título válido, que es el del servicio o contribución a la obra de la Iglesia a favor de la Nación<sup>146</sup>.

Pero ese *espíritu nuevo* exige dar otro cambio "al sistema según el cual dicha aportación se lleve a cabo":

- a) Por ello, no basta con renovar la teoría de los principios; si queremos que una renovación sea real, hay que cambiar el sistema, que traduce a realidad esos principios;
- b) Los sistemas entorpecen la eficacia de los principios, cuando se superponen a ellos, y quieren tener valor por sí mismos; incluso cuando se desconectan, por desgaste histórico, de los mismos principios, que les dijeron el ser: un sistema empeñado en mantenerse, por sí, deja de reflejar el principio, que debe ser iluminado<sup>147</sup>.

Ese "espíritu que informa las relaciones", indica la nueva ideología, que va a regir éstas. Pero lo que determina estas relaciones es el modelo constitucional, aprobado por el pueblo español, y los principios informadores del tratamiento del fenómeno religioso. Por tanto, debe entenderse, en una interpretación jurídica, que aquello que hace necesario conferir un nuevo sentido, tanto a los títulos de aportación económica estatal a la Iglesia católica, como al sistema misma de la aportación, es el sistema de neutralidad establecido en la Constitución española, de 1978, y fundamentado en los principios de igualdad y libertad religiosa. Por ello, el sistema de colaboración económica estatal, establecido, prácticamente en el acuerdo sobre asuntos económicos, ha de ser, inexcusablemente, respetuoso con esos principios de igualdad y libertad religiosa y neutralidad del Estado en el tratamiento del fenómeno religioso, tanto en la vertiente individual, como en la constitucional<sup>148</sup>.

Para ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, los bienes inmuebles, ocupados por el Estado español en el siglo XIX sin compensación, no pueden constituir "ad infinitum" el respaldo financiero de las dotaciones eclesiásticas, que vienen figurando en los presupuestos generales del Estado, desde hace un siglo -con la excepción del período de la Segunda República española, y no en toda su extensión; artículo 26 de la Constitución de 1931-. No hay imposición de capital, que genere una renta sin plazo -determinado o vitalicio- de la magnitud, a que ha dado lugar. Los propios obispos españoles, en su documento "La Iglesia y la Comunidad política" silencian toda vinculación de tales obligaciones presupuestarias del Estado con la llamada "subrogación de los bienes ocupados a la Iglesia"<sup>149</sup>.

<sup>146</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *El nuevo sistema de dotación económica del Estado a la Iglesia*, loc. cit., pp. 89-90.

<sup>147</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 312-313.

<sup>148</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., pp. 220-221.

<sup>149</sup>.- Vid. ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, C., *La financiación de las iglesias*, 14, R.E.D.F. (1977), pp. 326-327.

El artículo II.1 del acuerdo sobre asuntos económicos de 3 de enero de 1979, nos dice:

"El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa".

En el citado artículo II.1 del acuerdo económico de 1979, queda patente que se trata de un compromiso del Estado: la fórmula usada reconoce el valor jurídico contractual, del contenido de este apartado 1. Se trata de un compromiso *a colaborar*: el Estado no asume el sostenimiento económico de la Iglesia, ni tiene por qué asumirlo. Se trata de una colaboración; se cree conveniente esta colaboración por un elemental sentido de sucesión histórica, pero, inspirado por una nueva mentalidad; es decir, se mantiene la colaboración, pero se le va a dar una nueva contxtura, que responda a la nueva ideología. Nada hubiera impedido que se le hubiera buscado sentido a los hechos históricos anteriores, suprimiendo la colaboración estructurada, pero desde luego, lo que aquí se presenta es sólo una colaboración, lo cual comporta, en el fondo, un reconocimiento, de que el sostenimiento económico de la Iglesia es tarea de la propia Iglesia, afirmación, que se hará expresamente en el apartado 5 de este mismo artículo II del acuerdo sobre asuntos económicos. Pero la palabra "colaboración" de este artículo II.5 del acuerdo económico, ya es un reconocimiento de este sentido, por ambas Partes<sup>150</sup>. En este artículo II.1 del acuerdo económico también se habla de colaboración "en la consecución de su adecuado sostenimiento económico". Con ello se está refiriendo a la colaboración parcial, y no se puede fundamentar ese "adecuado sostenimiento económico" para esperar determinadas cuantías. Tampoco será viable establecer demasiada comparación entre lo que el Estado dé y lo que la Iglesia necesita; a lo más, en los comienzos del sistema se atenderá un poco a las necesidades, para "adecuar" a ellas la aportación; pero, la relación entre necesidades y aportación, debiera desaparecer pronto<sup>151</sup>. En el artículo II.1, *in fine*, del acuerdo sobre asuntos económicos, se añade "con respeto absoluto del principio de libertad religiosa", aunque no se concreta en el mismo, en qué consiste, en el apartado siguiente se alude a uno de los casos: para respetar la voluntad el contribuyente sobre el destino de su parte. De hecho, en la Introducción del acuerdo básico, de 1976, se reconoce la "libertad religiosa", como derecho de la persona<sup>152</sup>. Aunque no hubiese hecho falta explicitar que el compromiso estatal de colaboración económica con la Iglesia, para el logro de su adecuado sostenimiento económico, habría de ser siempre acorde con el principio de libertad religiosa, ya aludido, el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, en su artículo II.1 se refiere, expresamente, a ello. La explicitación no hubiera sido necesaria, porque el acuerdo sobre asuntos económicos tenía que supeditarse al nuevo modelo constitucional, y a sus principios rectores, siendo que, entre éstos, el de libertad religiosa, junto al de igualdad, es el determinante del establecimiento de un sistema de relaciones neutral, pues es el principio de libertad religiosa el que personaliza el sistema y hace que sea de neutralidad, y no a la inversa<sup>153</sup>. No obstante, la enunciación en el acuerdo sobre asuntos económicos del respeto absoluto del sistema de colaboración económica estatal al principio de libertad religiosa, como principio informador límite infranqueable de la "colaboración" del Estado, no es, en modo

<sup>150</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 313-314.

<sup>151</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 314.

<sup>152</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 314.

<sup>153</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 221.

alguno, desdeñable, en cuanto supone una reafirmación, de que con la Constitución el Estado español vino a constituirse en un Estado de libertad religiosa. El respeto absoluto a la libertad religiosa ha de suponer -como veremos-, cuando menos, que la Iglesia, mediante la colaboración aportada por el Estado, no será financiada por esta vía más que por los ciudadanos, que así libremente lo quieran, y no por el cómputo de la ciudadanía, lo que implicará que el Estado deberá asumir sus compromisos de colaboración con la Iglesia, y, en atención a su función social, dotarla, a través del sistema del acuerdo sobre asuntos económicos, de los medios para su financiación<sup>154</sup>.

Lo cierto es que el patrimonio, cualquiera que sea su importancia y su rentabilidad, no puede ser hoy fuente exclusiva de rendimientos, para atender los gastos de entidades e instituciones, abiertas a las necesidades de carácter colectivo. Ciertamente, la rigidez de los ingresos patrimoniales no permite atender las demandas, siempre crecientes, de los consumidores de bienes sociales o públicos. Tampoco se puede acudir a la enajenación del patrimonio -ingresos extraordinarios- por razones obvias. Hoy, en fin, no se concibe una Hacienda institucional, que sea autosuficiente, con ingresos de su patrimonio tan sólo. Y ello, a pesar de que el artículo XIX.1 del concordato de 1953 nos dice: "La Iglesia y el Estado estudiarán de común acuerdo, la creación de un adecuado patrimonio eclesiástico, que asegure una congrua dotación del culto y del clero"<sup>155</sup>. Hoy el artículo II.5 del acuerdo sobre asuntos económicos nos dice:

"La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia y el Estado".

GONZÁLEZ ARMENDÍA ha descartado la posibilidad de legitimar la aportación estatal a la Iglesia católica en base a la labor social, cultural o asistencial, pues si lo fuera, lo más lógico hubiera sido inclinarse por un sistema de subvenciones en áreas o actividades concretas, y no por la concentración de una aportación genérica y amplia, como la pactada en el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979. En verdad, el único fundamento para legitimar la cooperación estatal, debe buscarse en el propio texto constitucional. Más concretamente, en el artículo 9.2 de la Constitución española, de 1978<sup>156</sup>: podría estimarse que, en tanto en cuanto las confesiones religiosas desempeñen actividades de promoción efectiva del derecho fundamental de libertad religiosa de los ciudadanos, pueden ser acreedoras de aportaciones económicas estatales, como cooperación estatal a la realización de los derechos fundamentales, siguiendo el mandado del artículo 9.2 de la Constitución española, de 1978<sup>157</sup>.

<sup>154</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 221.

<sup>155</sup>.- Vid. ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, C., *La financiación de las iglesias*, loc. cit., p. 337.

<sup>156</sup>.- El artículo 9.2 de la Constitución española, de 1978, nos dice:

"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

<sup>157</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *Colaboración económica del Estado español con las Confesiones religiosas: contenido "mínimo" de la vertiente "indirecta"*, IV. A.D.E.E. (1988), p. 514.

### III.6. FASES DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN "DIRECTA" DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL ACUERDO SOBRE ASUNTOS ECONÓMICOS DE 3 DE ENERO, DE 1979.

El sistema de dotación previsto en el acuerdo sobre asuntos económicos, se prolonga en cuatro períodos, y ello, aunque algunos autores entienden el texto, como si se tratara de tres períodos<sup>158</sup>, o, incluso, dos, por la propia confusión del texto:

- a) *Período 1.* Dotación de presupuestos generales (1980-1981-1982);
- b) *Período 2.* Aplicación simultánea de:
  - b.1. dotación en presupuestos generales, minorada según la cuantía del otro capítulo;
  - b.2) y porcentaje sobre rendimiento de la imposición (1983-1984-1985);
- c) *Período 3.* Sólo porcentaje sobre rendimiento de la imposición (1986, y siguientes, *sine die*);
- d) *Período 4.* La Iglesia busca los recursos por sí misma, y se dan otras formas de colaboración económica, por parte del Estado -cuando fuera conseguido-

<sup>158</sup>.- PANIZO Y ROMO DE ARCE diferencia tres fases en la financiación, en este acuerdo sobre asuntos económicos, sin incluir la cuarta que es la autofinanciación. Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., pp. 221 y ss. También PÉREZ DE AYALA distingue tres etapas, sin referirse a la autofinanciación. Vid. PÉREZ DE AYALA, J.L., *La asignación tributaria a la Iglesia católica y sus implicaciones constitucionales. Una reflexión*, loc. cit., pp. 643 y ss. Otros hablan de tres etapas, pero incluyendo la autofinanciación. Es el caso de HIGUERA, que establece tres etapas:

- a) La primera, inicial y provisionalísima, durante la cual el Estado colaboraría al sostenimiento económico de la Iglesia católica con una dotación global durante tres ejercicios económicos -en la práctica, el sistema se ha prolongado durante cinco presupuestos más-;
- b) La segunda etapa, intermedia y provisional: el Estado podrá asignar a la Iglesia católica un porcentaje del rendimiento del impuesto general sobre la renta de las personas físicas;
- c) La tercera, final y definitiva, a partir de la cual la Iglesia católica se autofinanciará con los suficientes recursos, que se propone y espera, lograr de los propios fieles por sí misma para la atención de sus necesidades. Vid. HIGUERA, G., *La asignación tributaria a la Iglesia católica*, 2, 8, 1077-1078, R. y F. (1988), pp. 103-104, y en su colaboración de ese mismo año, bajo el título *¿Impuesto religioso o asignación tributaria? Pequeñas aclaraciones*, 76-7, 8, S.T. (1988), pp. 563-566.

MOSTAZA RODRÍGUEZ también diferencia tres etapas o períodos:

- a) aportación directa del Estado a la Iglesia de una cantidad global y única del presupuesto del Estado;
- b) de aplicación simultánea de la dotación presupuestaria y de asignación tributaria;
- c) sistema de consignación tributaria. Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Sistema español de dotación estatal a la Iglesia*, en GIMÉNEZ Y MÁRTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., *Régimen jurídico de sus relaciones*, loc. cit., pp. 175 y ss.

<sup>159</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 315.

En las tres primeras fases, todavía se está en momentos de dotación por parte del Estado. La primera, sin determinación de interesados; la segunda y tercera, con señalamiento de las personas, que quieren colaborar. Por el contrario, en la última fase -cuarta: autofinanciación-, libre el Estado de todo compromiso, hay una directa relación de las confesiones con sus miembros<sup>160</sup>.

A pesar de que las líneas maestras de la financiación de la Iglesia católica, en España, están perfiladas, para establecer un sistema financiero estable, falta desarrollo normativo bilateral de ese acuerdo sobre asuntos económicos, por lo que se deberán interpretar y desarrollar las normas de forma bilateral<sup>161</sup>. De hecho, hace algunos años, se filtraron noticias acerca de un borrador de convenio entre la Conferencia Episcopal española y el Gobierno, lo cual ya es indicativo, de que existe, al menos una voluntad de diálogo<sup>162</sup>.

### **III.6.A. PERIODO 1. PLAZO EXCLUSIVO DE DOTACIÓN GLOBAL Y ÚNICA EN PRESUPUESTO<sup>163</sup> (artículo II.2; II.3 y II.4 y el número 1 del protocolo adicional del acuerdo económico) (hasta 1988). SITUACIÓN ANTERIOR A LA FIRMA DEL ACUERDO SOBRE ASUNTOS ECONÓMICOS.**

La Iglesia ha sido un desastre en cuanto a su organización económica. Diez mil o cien mil "reinos de Taifas". Cada cura era su propio ministro de Hacienda; sin obligación de dar cuentas a nadie de su funcionamiento económico. Cien mil contabilidades diferentes, si es que existían contabilidades<sup>164</sup>. Pero este sistema de reino de Taifas actualmente ha desaparecido y la gestión económica hoy día es a escala nacional, para evitar la dispersión, y garantizar de este modo, que las más pobres sean ayudadas por las más ricas<sup>165</sup>. La principal dificultad de carácter jurídico-canónico, que ha encontrado la reforma económica de la Iglesia en nuestros tiempos, no ha sido ni la pobreza de nuestras instituciones eclesiales ni la falta de generosidad de nuestros fieles, sino el desorden producido por una vivencia práctica exagerada de la autonomía de las distintas personas jurídicas de la Iglesia<sup>166</sup>.

En España, siguiendo el modelo francés, se adoptarán medidas similares a las tomadas en 1789 por la asamblea constituyente, sólo que aquí esto va a hacerse con, prácticamente, medio siglo de retraso. Es decir, que en el Estado español también va a dismantelarse el sistema de autofinanciación eclesiástica, a la vez que los poderes públicos se obligan a dotar al culto y clero español. Sin embargo, en España, por sus propias características y especiales vicisitudes

<sup>160</sup>.- Vid. GOTI ORDEÑANA, J., *Del sistema de dotación al de colaboración económica con las Confesiones religiosas*, loc. cit., p. 169.

<sup>161</sup>.- Vid. GARCÍA-HERVÁS, D., *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, 3-4, D.E. (1994), p. 833.

<sup>162</sup>.- Vid. GARCÍA-HERVÁS, D., *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, loc. cit., pp. 853-854.

<sup>163</sup>.- La división, que haremos, será distinguiendo cuatro fases; postura defendida, entre otros, por PIÑERO CARRIÓN. Por tanto, denominaremos las distintas fases, según el mencionado autor. Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 316 y ss.

Sobre la dotación económica hemos seleccionado la siguiente bibliografía: vid. BORDEJÉ, M., *La dotación económica de la Iglesia*, 1903, Ecclesia (1978-II), p. 27.

<sup>164</sup>.- Vid. ALBARRÁN, A., *Cómo funciona la economía en la Iglesia de España*, 4-5, P.M. (1975), p. 266.

<sup>165</sup>.- Vid. CARRO CELADA, J.A., *La nueva organización de la economía de la Iglesia española (II)*, 1861, Ecclesia (1977-II), p. 27.

<sup>166</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *Consecuencias internas en la Iglesia del nuevo sistema económico*, en AA.VV., *El hecho religioso en la nueva Constitución española*, loc. cit., pp. 363-364.

políticas, el sistema estatal de dotación a la Iglesia, durante gran parte del siglo XIX, no va a asentarse sobre unas bases y sistemas firmes y consolidados<sup>167</sup>.

La financiación estatal de la Iglesia católica, en España, tiene su origen en la Constitución progresista, de 18 de junio de 1837, que, en su artículo 11, establecía: "La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles"<sup>168</sup>. Pero si el origen lo queremos buscar en el *Derecho comparado* hay que remontarse al a dotación prevista en el concordato de Napoleón, en 1801, que se puede considerar como el primer intento serio de crear un sistema de dotación total<sup>169</sup>.

Desde 1976, aproximadamente, con la creación de la *Gerencia económica del Episcopado*, se puso en marcha un plan contable propio de la Iglesia, homogéneo y aplicable a todos los niveles, desde la base parroquial hasta la propia Conferencia Episcopal, que poco a poco va haciendo posible mayor organización. El objetivo de este plan contable homogéneo es el de poder llegar a decir qué es lo que la Iglesia recibe, y bajo qué conceptos, y en qué se gasta el dinero<sup>170</sup>.

El planteamiento general de la economía eclesiástica en el Código de Derecho Canónico, de 1917, estaba basado en el sistema benefical<sup>171</sup>. A pesar de que con la desamortización y la supresión de los diezmos la economía de la Iglesia quedó aminorada, sin embargo permaneció, jurídicamente, anclada en el sistema benefical, como puede verse en el Código de Derecho Canónico, de 1917, y ello, aunque no disponía ya de bienes. Con la confesionalidad se va a perpetuar la economía benefical, pues la dotación del Estado viene a ser, como la renta de los beneficios<sup>172</sup>. Si bien la propiedad benefical concedía al beneficiario la plena propiedad en todos los frutos, producidos por el beneficio, tenía la obligación de dedicar el sobrante, después de sustentarse, a causas piadosas<sup>173</sup>. Cada "pieza eclesiástica" llevaba anejo el disfrute de tal beneficio. Y cada beneficiario, por tanto, podía ampararse en el Código de Derecho Canónico, de 1917, para defender "sus" derechos. En la práctica, este sistema benefical no afectaba, en 1979, ni siquiera al diez por ciento de los curas -a unos dos mil sobre los veinticuatro mil curas con actividad pastoral-. Es decir, afectaba directamente a los canónigos y beneficiarios de las catedrales y poco más. Sin embargo, esa legislación seguía vigente para todos. De forma, que si un obispo quería hacer las cosas un poco mejor podía encontrarse con la oposición de unos

<sup>167</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *El impuesto religioso. Cooperación económica estatal con las confesiones religiosas*, loc. cit., p. 41.

<sup>168</sup>.- Vid. MARTÍN SÁNCHEZ, I., *La financiación de las confesiones religiosas en el Derecho español*, loc. cit., p. 130.

<sup>169</sup>.- Vid. ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., De, *Estructura ideal del patrimonio eclesiástico*, I, R.E.D.C. (1950), pp. 82-83.

<sup>170</sup>.- Vid. ALBARRÁN, A., *Cómo funciona la economía en la Iglesia de España*, loc. cit., p. 266.

<sup>171</sup>.- Las preocupaciones eclesiásticas por la cobertura de determinadas situaciones, consideradas como objeto típico de la acción protectora de la Seguridad Social, se inician, precisamente, con la crisis del sistema benefical. Efectivamente, el sistema benefical se corresponde plenamente con el criterio de suficiencia mantenido por la Iglesia; lógicamente, excluía toda intervención del Estado en el sustento del clero, como no fuera la propia a las demás personas jurídicas: donaciones o prestaciones d tipo similar. La desamortización y después el concordato de 1851 impusieron una participación importante del Estado en la financiación del culto y del clero, pero sin cambiar, por ello, la naturaleza del sistema benefical. Pero tal sistema excluía, *per se*, al clero del naciente sistema de seguros sociales, centrado en prestaciones, cuya causa era absolutamente ajeno a la función sacerdotal, como son los accidentes de trabajo. Sorprendentemente, nuestro acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979 -ni los restantes- nada contiene, ni directa ni indirectamente, en relación a la Seguridad Social del clero. Vid. GARCÍA FERNÁNDEZ, M., *Notas sobre la seguridad social del clero*, I, C.F.D.U.P.M. (1982), pp. 211-212.

<sup>172</sup>.- Vid. GOTI ORDEÑANA, J., *Del sistema de dotación al de colaboración económica con las Confesiones religiosas*, loc. cit., p. 153.

<sup>173</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *El tránsito del régimen centralizado al régimen benefical, desde el punto de vista económico*, II, I.C. (1962), p. 482.

curas, que se negasen a obedecerles, amparados en el Código de Derecho Canónico, de 1917<sup>174</sup>. Gran incongruencia ésta. Hasta entonces, los obispos sólo tenían la vía persuasiva. Hasta 1975 ó 1976 no había más que desbarajuste. Pero la gran dificultad para el cambio era el propio corsé anacrónico y antievangélico del Código de Derecho Canónico, de 1917, en sus planteamientos económicos. También existía un miedo -o excusa- a presentar a la iglesia, como una gran empresa centralizada. Sin embargo, tal miedo, quizá, no fuese más que una excusa, de aquéllos que ya gozaban de un *status* económico medianamente privilegiado, ante el temor de que con algún control contable pudiese ser descubierta su situación<sup>175</sup>. Hasta tal punto ha sido crítico el mantenimiento del sistema benefical, que el convenio adicional, de 1859, que establece los mecanismos de financiación de la Iglesia, han estado vigentes hasta, incluso, la Constitución española, de 1978<sup>176</sup>.

El sistema de "piezas eclesiástica", ciertamente, ha sido problemático. En el documento de la *"Nueva ordenación económica de la Iglesia española, de 12 de marzo, de 1981"*<sup>177</sup> se especifican los problemas, que, a lo largo de la Historia, había planteado este sistema:

"Según el citado Concordato -refiriéndose al soncordato de 1953-, la dotación económica consistía fundametalmente en la asignación de una subvención estatal a las llamadas "piezas eclesiásticas" o unidades personales e instituciones de la Iglesia.

Este sistema no parecía equitativo. Algunas diócesis contaban con un número elevado de "piezas" que no estaban cubiertas en su totalidad, y la Administración consentía en que sus dotaciones engrosaran el "fondo de reserva" para otras necesidades no dotadas. Otras diócesis, en cambio, por razones históricas y por el agrupamiento de su población en núcleos mayores, tenían un número reducido de parroquias y consiguientemente un número notablemente inferior de "piezas". Por ello su fondo de reserva apenas recibía ingresos estatales y resultaba insuficiente para atender a las necesidades generales.

Por otra parte, no todos los sacerdotes estaban adscritos a una "pieza eclesiástica". La congrua sustentación de muchos tenía que ser atendida con los fondos diocesanos o con la retribución conseguida por servicios prestados como capellanes o como profesores en entidades no eclesiales.

La Conferencia Episcopal, al gestionar la dotación globalizada trataba de poner remedio a lo que consideraba injusto organizando con distintos criterios, más eclesiales y pastorales, la distribución de la cantidad total que recibiera del Estado.

No fue posible, sin embargo, conseguir el cambio del sistema de dotación estatal a la Iglesia pasados diez años de las primeras gestiones. Durante ellos se manifestaron más claramente los inconvenientes del sistema que entraba en vigor por la situación de desigualdad que producía.

Esta situación fue considerada en la XXVI Asamblea Plenaria (20.25 de junio 1977) del siguiente modo: "La participación actual de la diócesis en la dotación del culto y clero viene determinada por un proceso de regulación de este fondo y por criterios de aplicación muy heterogéneos dentro de las distintas diócesis. Se trata, por tanto, de una distribución que no es equitativa ni responde a criterios objetivos. Además, "el sistema

<sup>174</sup>.- Sobre el sueldo de los clérigos en el nuevo Código de Derecho Canónico, de 1983, vid. MARCHI, T., *La remunerazione dei chierici nel nuovo Codice*, CIX, M.E. (1984-I-II), pp. 187-195.

<sup>175</sup>.- Vid. ALBARRÁN, A., *Cómo funciona la economía en la Iglesia de España*, loc. cit., pp- 268-269.

<sup>176</sup>.- Vid. GOTI ORDEÑANA, J., *Del sistema de dotación al de colaboración económica con las Confesiones religiosas*, loc. cit., p. 158.

<sup>177</sup>.- Vid. el texto de este documento en AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y Comentario)*, 38, 110, R.E.D.C. (1982), pp. 314-317.

actual, sin cauces propios para orientar la posible ayuda a una cierta planificación nacional dentro de un clima de caridad y comunión interdiocesana, resulta un sistema trasnochado y obstaculizante del programa de la renovación eclesial" (informe del gerente).

La misma XXVI Asamblea Plenaria aprobó unos criterios generales de acción, trazó un procedimiento para el estudio de la organización de la economía de la Iglesia en España y constituyó un consejo de economía que preparara las conclusiones conforme a las cuales habría de organizarse la economía de la Iglesia, a fin de someterlas a la deliberación de la asamblea plenaria".

El sistema de "piezas eclesiásticas" no parecía equitativo. Se seguían dotando piezas y plazas, que hace mucho quedaron vacante; tampoco tenían en cuenta que muchas diócesis, obligadas por el aumento de la creciente demografía, se veían presionadas a crear nuevas parroquias, aumentar el número de los coadjutores de otras, dividir feligresías, que sehabían hecho mastodónticas, etcétera. A veces las diócesis lograban de la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos, que estas nuevas piezas fueran dotadas por el Estado; pero en otras muchas ocasiones no lo conseguían y las diócesis tenían que arreglárselas para encontrar fondos, con que satisfacer las nóminas de los sacerdotes de tales nuevos puestos apostólicos. El presupuesto estatal también ha ignorado la existencia de nuevos puestos de trabajo apostólico extraparroquiales, como suelen ser las consiliarias de los movimientos apostólicos, los secretariados y delegaciones de diferentes ámbitos de pastoral especializados, etcétera. Toda la estructura nacional y diocesana de la nueva pastoral quedaba fuera del presupuesto del Estado. De forma que sacerdotes se han tenido que hacer cargo de varias parroquias a un tiempo, recibiendo algunos "extras" por parte de la diócesis con las nóminas estatales no empleadas. De modo que el resultado era bastante lamentable: diócesis con muchos dineros y otras con muy poca dotación<sup>178</sup>. Algunas diócesis contaban con un número elevado de "piezas", que no estaban cubiertas en su totalidad, y la Administración consentía, en que sus dotaciones engrosaran el "fondo de reserva" para otras necesidades generales no dotadas. Otras diócesis, en cambio, por razones históricas, y por el agrupamiento de su población en núcleos mayores, tenían un número reducido de parroquias, y, consiguientemente, un número notablemente inferior de "piezas". Por ello, su "fondo de reservas" apenas recibía ingresos estatales y resultaba insuficiente, para atender a las necesidades generales. Por otra parte, no todos los sacerdotes estaban adscritos a una "pieza eclesiástica". La congrua dotación de muchos tenía que ser atendida con los fondos diocesanos o con la retribución conseguida por servicios prestados, como capellanes o como profesores en entidades no eclesiales. No fue, sin embargo, posible conseguir el cambio de sistema de dotación estatal a la Iglesia hasta pasados diez años de las primeras gestiones. Sería a partir de primero de enero de 1978, cuando el Estado español entregase a la Conferencia Episcopal española la cantidad globalizada de la subvención a la Iglesia católica, para conseguir una mayor igualdad o equidad en el reparto<sup>179</sup>.

A juicio de GOTI ORDEÑANA, lo lógico hubiera sido que, con la desamortización, se hubiese creado algún "impuesto religioso", para la financiación de los ministros de la religión por los mismos usuarios, en vez de reconducirse siempre a una dotación directa del Estado<sup>180</sup>.

Problemas, que planteaba la dotación estatal:

<sup>178</sup>.- Vid. UNCITI, M., De, *La Iglesia hace sus cuentas*, 1106, V.N. (1977-II), p. 25.

<sup>179</sup>.- Vid. F.F.C., *Hacia una nueva economía*, 194, Palabra (1981), p. 10.

<sup>180</sup>.- Vid. GOTI ORDEÑANA, J., *Del sistema de dotación al de colaboración económica con las Confesiones religiosas*, loc. cit., p. 160.

- a) Los sacerdotes aparecen como empleados del Estado, máxime cuando no se da una aportación del Estado a las necesidades de la Iglesia, en general, sino de una asignación personal y determinada;
- b) Por el "fondo de reservas" la diócesis puede administrar, libremente, la cantidad correspondiente a los oficios o beneficios -piezas eclesiásticas-vacantes. Estos oficios vacantes estaban siendo cubiertos por suplentes, que, muchas veces, necesitarían de esa asignación con más razón que otras necesidades;
- c) La asignación del presupuesto estatal por oficios sacerdotales viene a reducirse a una asignación por el número de parroquias: ya que, supuestas las asignaciones de los cargos diocesanos y de las capellanías de religiosos de clausura, el contenido casi total del presupuesto para cada diócesis viene determinado por el número de parroquias y coadjutorías, que la misma tiene. Ahora bien, este concepto no es el real ni objetivo, ya que no tiene en cuenta ni el número de habitantes, ni el de sacerdotes, ni el de templos, sino sólo el número de figuras jurídicas parroquiales, las más de las veces fruto de una evolución histórica<sup>181</sup>.

Esta primera fase continúa con el sistema hasta entonces vigente, aunque con el matiz de que el Estado, a petición de la XXVII asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal española, celebrada en noviembre de 1977, en vez de entregar a cada diócesis la cantidad, que le correspondía, según el número de piezas eclesiásticas -oficio y beneficios dotados, que tuviese- y demás subvenciones adicionales, consignadas en el concordato, la entrega a dicha conferencia va a ser en una cantidad global y única, a fin de que la propia conferencia la distribuya equitativamente entre todas las diócesis, según el espíritu del Vaticano II, de manera que "las diócesis más ricas puedan ayudar a las más pobres"<sup>182</sup>. Por tanto, esta primera fase continuó el sistema, vigente a la firma del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, constituido por una consignación global en el presupuesto general del Estado; esta modalidad tuvo su origen en la solicitud de la XXVII asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal española, de noviembre, de 1977, en la que se acordó -de forma unilateral- la sustitución de las dotaciones por "piezas" eclesiásticas -oficios y beneficios dotados- por una dotación global, reflejado en el presupuesto general del Estado, y, consistente en la entrega, por este último, a la Conferencia Episcopal de una cantidad fija, a fin de que fuese la propia Conferencia Episcopal, la que repartiera la cuantía asignada entre todas sus diócesis, de acuerdo con los criterios de justicia distributiva, emanada del Vaticano II<sup>183</sup>.

El Código de Derecho Canónico, de 1917, no supuso, en realidad, una clarificación organizativa en el área de la economía eclesial en las diócesis españolas: la

<sup>181</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *Pobreza del clero y dotación estatal*, 15, 37, Seminarios (1969), pp. 105-106.

<sup>182</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Sistema español de dotación estatal a la Iglesia*, en GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., *Régimen jurídico de sus relaciones*, loc. cit., pp. 175-176.

<sup>183</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 222. Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, loc. cit., p. 178. Vid. MARTÍN SÁNCHEZ, I., *La financiación de las confesiones religiosas en el Derecho español*, loc. cit., pp. 134-135.

Sobre la retribución económica de los sacerdotes es interesante vid. AZNAR GIL, F.R., *La retribución económica de los sacerdotes en el ordenamiento canónico español*, 43, 121, R.E.D.C. (1986), pp. 411-479.

aplicación del Código de Derecho Canónico, de 1917, en este campo, consistió, fundamentalmente, en la yuxtaposición de los nuevos organismos, establecidos por la legislación general -es el caso del "consejo diocesano de la administración", "administrador diocesano", "oficio administrativo diocesano, etcétera-, a los ya existentes en ellas, por haber sido creado por las leyes españolas eclesiásticas y civiles. Ello originó una proliferación de organismos. El cambio profundo en la ordenación de la economía de la Iglesia española, a nivel organizativo y de orientación de fondo, comenzó a partir de la celebración de la asamblea conjunta obispos-sacerdotes, de 1971: el Concilio Vaticano II, las numerosas conclusiones, que la misma asamblea conjunta dedicó al tema de la economía eclesial, la nueva situación socio-política española configurada, en las relaciones Iglesia-Estado, por la firma de los nuevos acuerdos Santa Sede-Estado español, de 1979, etcétera, reclamaban, imperiosamente, el cambio realizado en esta parcela de la actividad eclesial<sup>184</sup>.

Una de las preocupaciones constantes de la Iglesia española, desde la celebración del Concilio Vaticano II, ha sido el intento de reordenar su economía con el intento de adaptarla al las necesidades de la Iglesia en la actualidad. Fruto de esta preocupación ha sido la publicación de varios documentos sobre la economía de la Iglesia por parte de la Conferencia Episcopal española y la realización de un serio esfuerzo a nivel de las Iglesias diocesanas por adaptar sus estructuras a esta nueva situación<sup>185</sup>.

Acabado el Concilio Vaticano II, las nuevas circunstancias socio-políticas y eclesiales de la sociedad española mostraron, rápidamente, que el sistema organizativo económico de la Iglesia católica en España se había quedado desfasado en muchos aspectos. Diferentes documentos de la Conferencia Episcopal española fueron poniendo las bases de la nueva ordenación de la economía en la Iglesia española:

- a) El *motu proprio* "*Ecclesia sanctae*".
- b) El *motu proprio* "*Firma in traditione*" sobre los estipendios de misas<sup>186</sup>.
- c) La Asamblea conjunta obispos-sacerdotes, de 1971<sup>187</sup>.
- d) El directorio sobre el ministerio pastoral de los obispos, de 1973.
- e) El real decreto de 27 de agosto, de 1977 -B.O.E., de 19 de septiembre-, por el que se establecía, que, a partir del 1 de enero de 1978, se sustituía el sistema de dotación estatal a las denominadas piezas eclesiásticas, por el de la dotación global al a Conferencia Episcopal española, para que ésta la distribuyera para los fines y necesidades de la Iglesia<sup>188</sup>. En el documento de la "*Nueva ordenación económica de la Iglesia española, de 12 de marzo de*

<sup>184</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y comentario)*, 38, 110, R.E.D.C. (1982), pp. 329-330.

<sup>185</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y comentario)*, loc. cit., p. 327.

<sup>186</sup>.- Un estudio sobre este *motu proprio* puede consultarse en GARCÍA BARBERENA, T., *El motu proprio "Firma in traditione" sobre estipendios de Misas*, XXXI, 88, R.E.D.C. (1975), pp. 83-98. El texto íntegro del mismo puede consultarse en las pp. 83-85.

<sup>187</sup>.- Vid. 68, A.A.S. (1971), p. 921.

<sup>188</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *El Fondo Diocesano de la sustentación del clero (c. 1284§1)*, 48, 131, R.E.D.C. (1991), p. 631 y en la colaboración de este mismo autor titulada *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y Comentario)*, loc. cit., pp. 327-328.

1981"<sup>189</sup> se recoge el camino seguido, para pasar de un sistema de "piezas eclesíásticas" a una cantidad global:

"A partir de 1 de enero de 1978 el Estado español, por decisión unilateral, entregó a la Conferencia Episcopal la cantidad globalizada de la subvención a la Iglesia, en conformidad con el siguiente artículo de los Presupuestos del Estado: "A la Iglesia católica, para hacerla efectiva a través de la Conferencia Episcopal Española para el cumplimiento de sus fines, en particular las asignaciones correspondientes a los arzobispos y obispos diocesanos, los coadjutores, auxiliares, vicarios generales, los cabildos catedralicios y de las colegiadas, el clero parroquial, así como las asignaciones a favor de seminarios y universidades eclesíásticas, para el ejercicio del culto y para cualquier otra obligación de naturaleza análoga, asumida por el Estado".

Simultáneamente, con la decisión del Estado español de entregar globalmente a la Conferencia Episcopal la dotación asignada a la iglesia católica, y responsabilizar a la misma Conferencia de su distribución, la XXVIII Asamblea Plenaria (21-26 diciembre 1977) aprobó unas proposiciones con los criterios conforme a los cuales se distribuiría dicha dotación, que a partir de este momento se llama ya Fondo Común Interdiocesano. Dichos criterios están inspirados en las orientaciones del decreto *Presbyterorum Ordinis*, número 20 y del *motu proprio Ecclesiae Sanctae*. Se pretendía, entre otros, los siguientes objetivos:

- 1.º evitar las desigualdades poco equitativas en la retribución a los sacerdotes;
  - 2.º incluirlos a todos en el régimen general de la Seguridad Social del Estado;
  - 3.º integrar las distintas fuentes de recursos existentes en la Iglesia (v. Fr., aportaciones a los fieles; ingresos por el Patrimonio Artístico, etc.) en una ordenación general homologable en cada una de las diócesis;
  - 4.º uniformar modelos presupuestarios y los sistemas contables de la diócesis y de las instituciones diocesanas;
  - 5.º procurar una comunicación de bienes de unas diócesis con otras".
- f) El acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero, de 1979, por el que se fijó una nueva fórmula de colaboración económica estatal a la Iglesia -artículo II.2 a II.4-<sup>190</sup>.
- g) En la XXVI asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal española, celebrada del 20 al 26 de junio, de 1977, fueron aprobadas unas *Proposiciones sobre la organización económica de la Iglesia*

<sup>189</sup>.- Vid. el texto de este documento en AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y Comentario)*, loc. cit., pp. 314-317.

<sup>190</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *El Fondo Diocesano de la sustentación del clero (c. 1284§1)*, loc. cit., p. 631.

*española y la inclusión del clero diocesano en la seguridad social.* Las principales innovaciones de las primeras consistían en el cambio de la forma de percepción de la dotación estatal de "piezas eclesiásticas" a la "cantidad globalizada", percibida por la Conferencia Episcopal española; la aprobación de unos criterios de acción respecto al estudio de la organización de la economía de la Iglesia católica en España; y la creación de un "consejo de economía" en el seno de la Conferencia Episcopal<sup>191</sup>.

- h) Los criterios aprobados por la XXVII y XXVIII asambleas plenarias de la Conferencia Episcopal española, celebradas los días 21 a 26 de noviembre, de 1977, y 27 de febrero a 4 de marzo, de 1978, respectivamente<sup>192</sup>. En la XXVII asamblea plenaria del Episcopado español, que se celebró en Madrid del 21 al 26 de noviembre, de 1977, poco se había hecho, para solucionar la idea de una Iglesia con fama "burguesa". Máxime cuando cada diócesis llevaba "sus" cuentas, como Dios daba a entender a los distintos responsables. No se tenía conocimiento de "qué y cuánto" tenía la Iglesia, ni "cómo" lo empleaba, y, sobre todo, racionalizar, burocráticamente, los capítulos de ingresos y gastos. A todo ello, había favorecido la cerrada administración diocesana, por un lado, y la dotación del culto y clero, expresamente entregada a cada diócesis por el caduco sistema de "piezas eclesiásticas" -un sueldo para cada "cargo" desmenzado-, por otro, convertían la administración económica en un laberinto inextricable. Máxime cuando en la Iglesia católica existen infinidad de instituciones religiosas asistenciales, etcétera, con autonomía financiera<sup>193</sup>. Esta XXVII asamblea plenaria tomó las decisiones para la nueva ordenación, principalmente en lo que se refiere al nuevo modo de realizar el Estado su dotación<sup>194</sup>.

En la XXVII asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal española se confirmaron los acuerdos sobre la organización económica de la Iglesia, aprobados en la XXVI asamblea plenaria. Al mismo tiempo, se procedía a una reestructuración de sus órganos administrativos en materia de economía: se creó un "consejo de economía", en dependencia de la "comisión permanente" y un "comité de gestión" dependiendo de la "secretaría general", a cuyo frente se colocó un "vicesecretario general para asuntos económicos"<sup>195</sup>.

En la XXVIII asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal española, se aprobaron unos criterios, basados en una valoración uniforme sobre los ingresos y gastos de cada diócesis, para la distribución de la dotación estatal entre las diócesis españolas.

<sup>191</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y Comentario)*, loc. cit., p. 330.

<sup>192</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *El Fondo Diocesano de la sustentación del clero (c. 1274§1)*, 48, 131, R.E.D.C. (1991), p. 631.

<sup>193</sup>.- Vid. BODEN, A., *Las cuentas (¡por fin!) claras. Economía de la Iglesia, tema-príncipe de la próxima Plenaria Episcopal*, 103-104, V.N. (1977-II), p. 8.

<sup>194</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *Consecuencias internas en la Iglesia del nuevo sistema económico*, en AA.VV., *El hecho religioso en la nueva Constitución española*, loc. cit., pp. 363-364.

<sup>195</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y Comentario)*, loc. cit., p. 330.

Asimismo, se decidió uniformar los modelos presupuestarios y los sistemas contables de las diócesis y de las instituciones eclesiásticas<sup>196</sup>.

- i) Especial importancia tuvo la XXXI asamblea plenaria, celebrada los días 2 a 7 de julio, de 1979, en la que se aprobaron unas conclusiones necesarias para una mejor ordenación de la economía de la Iglesia en España. Conclusiones, que fueron reconocidas por decreto de la Sagrada Congregación por la XXXV asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal española, celebrada los días 23 a 24 de noviembre, de 1981<sup>197</sup>. Las normas establecidas por esta XXXI asamblea plenaria del episcopado español, celebrada del 2 al 7 de julio, de 1979, y para las que se solicitó la correspondiente aprobación a la Sede Apostólica, se entienden y comprenden, sin duda, dentro de este proceso actualizador de la organización económica de la Iglesia católica española. En realidad, eran necesarias, si se quería seguir con esta renovación<sup>198</sup>.

En las diócesis españolas -y anticipándose a lo previsto en el canon 1274 del futuro Código de Derecho Canónico, de 1983, que estudiaremos más ampliamente-, se fueron estableciendo, de forma progresiva, unas "masas o fondos de bienes comunes diocesanos", para atender a las necesidades diocesanas. En un primer momento, se denominó "caja diocesana de compensación del clero", y su finalidad fundamental -y casi exclusiva- era atender las necesidades concretas de los sacerdotes diocesanos, para lograr, de este modo, una remuneración equitativa. Posteriormente, sin embargo, se fue imponiendo otra institución y denominación mucho más acertada: el "fondo común diocesano". En este último caso, se constituía una única masa con todos los bienes diocesanos, para atender a todas las necesidades económicas diocesanas, y no sólo a la retribución de los sacerdotes, aunque esta partida de gastos fuera la mayor de todas las previstas<sup>199</sup>. Efectivamente, el sistema de caja nacional permite una misma retribución en toda la Nación; mientras que el sistema de administración parroquial o benefical sólo permite que cada parroquia, Iglesia o beneficio administre sus propios ingresos, independientemente de los demás<sup>200</sup>.

Este primer período plantea varias cuestiones. Aunque el acuerdo es taxativo, al señalar "tres ejercicios completos" -artículo II.2 del acuerdo sobre asuntos económicos-, como plazo mínimo, en que seguirá vigente el actual sistema de dotación global y única, y no se aplicará el nuevo, cabe preguntarse cómo se cuenta este trienio. El texto dice que "desde la firma de este Acuerdo" -mismo artículo II.2-. En rigor estricto, el arranque de la cuenta es la firma, o sea, el 3 de enero de 1979. Sin embargo, cabría plantear si el concepto de "firma", en el lenguaje diplomático de los tratados internacionales, se ha de entender firma de las partes, o ratificación, pues las diferencias son notables<sup>201</sup>. Pero, además, el texto dice "transcurridos tres ejercicios completos", y, por tanto, abarcando el año entero, que es lo que se entiende por ese calificativo

<sup>196</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y Comentario)*, loc. cit., p. 330.

<sup>197</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *El Fondo Diocesano de la sustentación del clero (c. 1274§1)*, loc. cit., p. 631.

<sup>198</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y Comentario)*, loc. cit., p. 335.

<sup>199</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *El Fondo Diocesano de la sustentación del clero (c. 1274§1)*, loc. cit., p. 631.

<sup>200</sup>.- Vid. AIZPÚN, L., *El sostenimiento del Culto y clero en diversas regiones*, 5, 29, R.E. (1929), pp. 577-578-578.

<sup>201</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 316.

de "completos". Suponiendo, por tanto, que los acuerdos fueron ratificados a finales de 1979, la cuenta comenzará en enero de 1980, ya que, firmados el 3 de enero, el ejercicio de 1979 no ha sido completo: por ello, pierde importancia la interpretación de la palabra "firma". Pero si la ratificación no hubiera tenido lugar en 1979, sí que tendría relevancia, ya que si se cuenta desde la firma, el trienio es 1980-1981-1982; pero si se cuenta desde la ratificación, que tuviese lugar, por hipótesis, en 1980, el trienio sería 1981-1982-1983. Con todo, a juicio de PIÑERO CARRIÓN, debe contarse desde la firma, y no desde la ratificación, ya que las partes hubieran podido indicar, expresamente, "el de la ratificación", o "el de la entrada en vigor"<sup>202</sup>. MARTÍN DE AGAR también entiende que la duración mínima -prevista en el artículo II.2 del acuerdo económico-, de los "tres ejercicios completos desde la firma de este Acuerdo" comprendería el trienio 1980-1981-1982, ya que la entrada en vigor de los acuerdos se produjo dentro del ejercicio de 1979<sup>203</sup>. Aunque el primer período del acuerdo sobre asuntos económicos debía durar, como mínimo, tres años o tres ejercicios económicos completos, como el nuevo sistema era potestativo, ha durado muchos años más. Podía haber entrado en vigor en el ejercicio de 1982 y no ha entrado hasta el año 1988, en cuyo presupuesto empezó el sistema de impuesto y presupuesto, que había de durar tres años<sup>204</sup>.

Esta duración mínima de tres años a partir de la firma del acuerdo económico, de 1979 podrá prolongarse hasta que entre en vigor la autofinanciación de la Iglesia, ya que el segundo período transitorio de aplicación simultánea de dotación y asignación tributaria es facultativo del Estado, y, en consecuencia, también el tercero de la única asignación tributaria<sup>205</sup>.

El acuerdo económico, de 1979, expresa -a juicio de PIÑERO CARRIÓN, con claridad<sup>206</sup>, que, al pasar tres ejercicios completos, el Estado, "podrá" -artículo II.2- dar paso al sistema nuevo; establece, por ello, no una obligación, sino una opción. De modo que si el Estado no hace uso de la opción, y, por tanto, no da paso al sistema nuevo, una vez transcurridos los tres ejercicios completos, continúa -como finalmente sucedió- en vigor el sistema de presupuestos, o sea, continúa el período primero. Sin embargo, este "podrá" del artículo II.2 del acuerdo económico, no es absoluto, sino sólo una opción de comienzo. Si se entendiera como totalmente optativo el acuerdo no aportaría nada original, fuera del propósito de la Iglesia de llegar al a autofinanciación. Ello hace posible, pues, que el período primero dure más de los tres ejercicios completos -"podrá"-, pero se dejaría sin sentido al acuerdo, si ese "podrá", se entendiera como opción para siempre<sup>207</sup>. El que la primera etapa se prolongase más

<sup>202</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 316.

<sup>203</sup>.- Vid. MARTÍN DE AGAR, J.-T., *Notas sobre la cooperación económica del Estado con la Iglesia Católica*, loc. cit., p. 789. Las mismas cuentas son realizadas por PANIZO Y ROMO DE ARCE. Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, loc. cit., p. 178.

<sup>204</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *El nuevo sistema de dotación económica del Estado a la Iglesia*, loc. cit., p. 82.

<sup>205</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *El nuevo régimen económico de la Iglesia en España*, 205, 1005, R. y F. (1982), p. 148.

<sup>206</sup>.- Precisamente este "podrá" lleva a PANIZO Y ROMO DE ARCE a calificar la duración de esta primera fase como "oscura", al darle un margen tan amplio de discrecionalidad al Estado para la sustitución del sistema. Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, loc. cit., p. 222.

<sup>207</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 317-318. También PANIZO Y ROMO DE ARCE califica de "oscuro" lo concerniente a la duración de esta primera fase en el acuerdo sobre asuntos económicos, precisamente, por la discrecionalidad, que se otorga al Estado, para la sustitución del sistema, al emplear el acuerdo sobre asuntos económicos el término podrá. Igualmente también entiende que la vigencia de este período debe ser de, al menos, tres ejercicios completos, de tal forma que, al haberse firmado el acuerdo sobre asuntos económicos, en 1979,

de tres ejercicios, no significa que el Estado haya incumplido lo pactado, precisamente, por el carácter potestativo de la sustitución del sistema<sup>208</sup>. Efectivamente, si bien este primer período debía cumplir, como mínimo, los tres años completos siguientes a la ratificación del acuerdo económico, de 1979, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1982, se mantendría el sistema de dotación presupuestaria del Estado a la Iglesia católica, financiada con cargo a los presupuestos generales de la Hacienda Pública hasta el 31 de diciembre de 1987<sup>209</sup>. Este primer período tiene una duración mínima de tres años, a partir de la firma del acuerdo, aunque hubiera podido prolongarse hasta que entrase en vigor la autofinanciación de la Iglesia, ya que el segundo período transitorio de aplicación simultánea de dotación y asignación tributaria es facultativo del Estado, y, en consecuencia, también el tercero de la única "asignación tributaria"<sup>210</sup>.ç

El artículo II.3 del acuerdo económico nos especifica que "este sistema sustituirá a la dotación a que se refiere el apartado siguiente [...]".

El artículo II.4 del acuerdo económico contempla el carácter de esta dotación:

"En tanto no se aplique el nuevo sistema, el Estado consignará en sus Presupuestos Generales la adecuada dotación a la Iglesia católica, con carácter global y único, que será actualizada anualmente".

La cantidad global y única deberá actualizarse cada año, a fin de que no deje de ser adecuada, según el artículo II.4 del convenio sobre asuntos económicos, de 1979<sup>211</sup>. La citada cantidad, de carácter global y única, que constituye "la adecuada dotación a la Iglesia católica" –apartado 4 del artículo II– en este primer período "se fijará cada año", según el protocolo adicional al acuerdo sobre asuntos económicos, "mediante la aplicación de los criterios de cuantificación que inspiren los correspondientes Presupuestos Generales del Estado, congruentes con los fines a que destine la Iglesia los recursos recibidos del Estado en consideración a la Memoria", que deberá presentar la Iglesia anualmente sobre la aplicación de los recursos, recibidos del Estado en el año anterior, para atender el conjunto de sus necesidades y de las cantidades, a incluir en el nuevo presupuesto, con el fin de hacer frente a los gastos, que se prevean, para satisfacer dichas necesidades en el próximo año<sup>212</sup>.

El número 1 del protocolo adicional del acuerdo sobre asuntos económicos, nos dice:

"La dotación global en los Presupuestos Generales del Estado se fijará cada año, tanto durante el plazo exclusivo de tal ayuda como durante el período de aplicación simultánea del sistema previsto en el artículo II, apartado 2, de este Acuerdo, mediante

---

dichos ejercicios deben de empezar a contarse a partir de 1980, finalizando en 1982; no obstante, la fase de referencia vio considerablemente retrasada su entrada en vigor, al ser una prerrogativa del Estado, consignada en el propio texto del acuerdo sobre asuntos económicos. Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 222.

<sup>208</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, loc. cit., p. 179.

<sup>209</sup>.- Vid. PÉREZ DE AYALA, J.L., *La asignación tributaria a la Iglesia católica y sus implicaciones constitucionales. Una reflexión*, loc. cit., p. 643.

<sup>210</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Sistema español de dotación estatal a la Iglesia*, en GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., *Régimen jurídico de sus relaciones*, loc. cit., p. 176.

<sup>211</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Sistema español de dotación estatal a la Iglesia*, en GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., *Régimen jurídico de sus relaciones*, loc. cit., p. 176.

<sup>212</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Sistema español de dotación estatal a la Iglesia*, en GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., *Régimen jurídico de sus relaciones*, loc. cit., p. 176.

la aplicación de los criterios de cuantificación que inspiren los correspondientes Presupuestos Generales del Estado, congruentes con los fines a que destine la Iglesia los recursos recibidos del Estado en consideración a la Memoria a que se refiere el párrafo siguiente.

La aplicación de los fondos, proyectada y realizada por la Iglesia, dentro del conjunto de sus necesidades, de las cantidades a incluir en el Presupuesto o recibidas del Estado en el año anterior, se describirá en la Memoria que, a efectos de la aportación mencionada, se presentará anualmente".

PIÑERO CARRIÓN le atribuye, a este primer período, las siguientes características:

- a) durará, al menos, tres ejercicios completos;
- b) podrá durar algo más, pero no más de seis ejercicios completos;
- c) el período segundo podrá empezar transcurridos tres ejercicios completos desde la firma;
- d) aunque podrá empezar más tarde, si bien no después del plazo de seis años totales, que se le señala para terminar;
- e) ya que el período segundo deberá estar terminado, dando paso al período tercero, una vez transcurridos los seis años desde la firma, aún en el caso, de que haya empezado más tarde. En caso de que no se diera paso del primero al segundo período seguirá, según el texto del Acuerdo, indefinidamente el primero, ya que el artículo II.4 dice: "En tanto no se aplique el nuevo sistema, el Estado consignará en sus Presupuestos Generales la adecuada dotación [...]". Sea cual sea el motivo, que llevase a no implantar el segundo período, seguirá en pie el primero<sup>213</sup>.

Según el artículo II.4 del acuerdo económico la dotación es global y única. Aunque el concordato de 1953 señalaba una dotación por "piezas" u "objetivos" concretos, desde primero de enero de 1978, antes de la entrada en vigor del acuerdo de 1979, ya se había convertido en una dotación global, de modo que el Estado entregaba la cantidad mensual correspondiente, a la Gerencia del Episcopado, quedando a disposición de la misma Conferencia Episcopal la distribución de la cantidad entre las diócesis, al menos, en principio<sup>214</sup>. En realidad, esta primera fase ha sido una continuación del sistema de dotación tradicional, con la única variante, de que se dé una cantidad "con carácter global y único" -artículo II.4 del acuerdo sobre asuntos económicos-. Y aunque se estableció que fuera de tres años su duración, el Estado, si no se llegaba a un buen momento democrático, podía, como efectivamente sucedió, prorrogarlo<sup>215</sup>.

La palabra "único" del artículo II.4 del acuerdo económico, en realidad, es una mera redundancia del término "global" significando lo mismo. Por eso, la palabra "única" ha querido insistir, en que desaparece el sistema de "piezas" individualizadas, según los diversos beneficios y oficios, o por objetivos concretos, y se adopta la consignación en una sola partida de ayuda a la Iglesia católica como tal dotación<sup>216</sup>.

<sup>213</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 318.

<sup>214</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 318-319.

<sup>215</sup>.- Vid. GOTI ORDEÑANA, J., *Del sistema de dotación al de colaboración económica con las Confesiones religiosas*, loc. cit., p. 170.

<sup>216</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 319.

El artículo II.4 del acuerdo económico dice que la dotación "será actualizada anualmente"; concretándose en el número 1 del protocolo adicional el método para esta actualización. De modo que el criterio lo dará las partidas del presupuesto del Estado. El protocolo adicional, en su número 1, al establecer el método de actualizar anualmente la cantidad de la dotación, alude a "los fines a que destine la Iglesia los recursos recibidos del Estado", y esto tanto con las cantidades a incluir en el presupuesto, como las recibidas en el año anterior<sup>217</sup>. De tal modo, que hay una continua intervención del Estado en el destino de los recursos, siquiera sea totalmente a título informativo, previo o posterior<sup>218</sup>.

Cabe preguntarse si se trata de una memoria o de dos memorias anuales, porque si la memoria ha de dar cuenta del uso de lo recibido en el ejercicio anterior, ha de ser a ejercicio cerrado. Pero si, a la vez, la memoria ha de presentar la programación para el año siguiente, ha de ser antes de que se presente el presupuesto siguiente. Y no podrán hacerse ambas cosas a la vez, siendo de tiempos distintos. Sin embargo, en realidad, no hay dos memorias; si se lee el texto, en la memoria se ha de indicar, a qué partidas ha decidido el Episcopado dedicar la dotación del año en curso. Ahora bien, esta decisión del Episcopado no exige, necesariamente, que se haya realizado el ejercicio, sino, solamente, que se haya decidido su distribución, cosa, que suele hacerse, también, a principios del ejercicio. Por otra parte, la memoria, a la vista de la marcha del mismo ejercicio económico, sin necesidad, de que éste se haya cerrado, indicará las correcciones, que se vean necesarias, de forma, que se llegue a una decisión, en cuanto a la actualización de las cantidades de cada grupo de necesidades. La memoria y la actualización, que ella pretende facilitar, no pueden convertirse nunca en una determinación del destino de partidas, ni en un control de uso de partidas, porque, de ser así, la dotación no sería global y única, e infringiría un principio básico del acuerdo. La memoria sólo ha de tener, como finalidad, el ayudar a la actualización de la cantidad de la dotación, que seguirá siendo global y única<sup>219</sup>. En dicha memoria -MARTÍN DE AGAR, se refiere a "una Memoria" se describirá la aplicación, proyectada y realizada, por la Iglesia, de las cantidades a incluir en el presupuesto. Aquí es posible, indirectamente, una vuelta a la dotación de objetivos concretos, pero en este caso, serían los que el Estado considere preferentes, con el peligro de que, a pesar de la proclamada aconfesionalidad e independencia de uno y otro poder, se lleguen a confundir sus fines a la hora de colaboración económica, hasta el punto de que no se sepa distinguir si el Estado hace suyo -dotándolos- determinados objetivos de la Iglesia, o, por el contrario, la Iglesia deba estimar preferente los objetivos, que inspiren los correspondientes presupuestos del Estado. Hubiera sido más sencillo, por ello, establecer, de común acuerdo, criterios objetivos de cuantificación y actualización de la aportación estatal, sin perjuicio del acuerdo sobre la realización de una memoria informativa -presupuesto y resultados-, por parte de la Iglesia<sup>220</sup>.

En este primer momento -fase- la cantidad de carácter global y única, que el Estado consignó en el presupuesto general del Estado, y remitió a la Conferencia Episcopal, se fijó en base a la memoria, que, también con carácter anual, debería remitirse. Sería, pues, dicha memoria o informe el instrumento clave para la determinación de la suma, que el Estado habrá de transferir, lo cual, ciertamente, no resultó un modelo de agilidad, ya que supuso innecesarios esfuerzos burocráticos, que podrían haber evitado con medios más sencillos y automáticos,

<sup>217</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 319-320.

<sup>218</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 320.

<sup>219</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 320.

<sup>220</sup>.- Vid. MARTÍN DE AGAR, J.-T., *Notas sobre la cooperación económica del Estado con la Iglesia Católica*, loc. cit., p. 790.

como el constituido por la variación del índice de precios al consumo -I.P.C.-, que ofrece, con carácter anual, el Instituto Nacional de Estadística -I.N.E.-<sup>221</sup>. Efectivamente, tal vez podrían haber buscado métodos más sencillos, neutros y automáticos de actualización –por ejemplo, indicando una subida en proporción a la subida oficial del nivel de vida, que ofrezca cada año el organismo competente del Estado, u otro similar-, máxime cuando la dotación del Estado, en este período, representaba sólo una décima parte, aproximadamente, de lo que la Iglesia gasta en su ministerio, con lo que poco iba a influir en el conjunto una precisión exacta de la actualización de la dotación estatal<sup>222</sup>.

ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, en 1977, considera las asignaciones -dotaciones- en los presupuestos del Estado, como la fórmula financiera más aconsejable, y, que, además, cuenta con más ejemplos en el Derecho comparado. Dentro de sus diversas modalidades, deben descartarse –según el autor- las subvenciones, porque no responden a la índole de los servicios sociales o públicos, que prestan las iglesias en cualquier país, pues no se trata de concederles una ayuda financiera de mayor o menor cuantía, sino de cubrir el coste de tales servicios, como si los prestara un órgano de la tradicional Administración Pública. Tampoco es recomendable que, como ha sucedido hasta 1978, figuren en el presupuesto múltiples créditos, para concretar atenciones, sino que debe asignarse una dotación global para cada Iglesia o confesión religiosa, mediante los oportunos módulos, correspondiendo a cada institución formar el oportuno presupuesto anual, como si se tratara de un "servicio público centralizado" de los que, al amparo de la ley de 26 de diciembre de 1958, han existido en España hasta el 1 de enero de 1978, en que comienza a regir la ley general presupuestaria. En el presupuesto de gastos del Estado, para 1978, figuraba la Iglesia católica entre las "Instituciones sin fines de lucro" con dos créditos, que se hacen efectivos por la Conferencia Episcopal española -transferencias corrientes y de capital-. Este parece -a juicio del citado autor- ser el sistema de financiación más adecuado. Y ello a pesar de que la independencia de la Iglesia, respecto del Estado, pueda sufrir limitación o menoscabo, si este último manipulase los créditos presupuestarios. Pero cabe esperar que se conciencie que estas asignaciones presupuestarias son como coste de los servicios sociales prestados a los particulares y a la comunidad<sup>223</sup>. A esta fórmula de financiación, en base a los presupuestos generales del Estado, como a cualquier otra a cargo del Estado, no se opone la *laicidad* del mismo, pues el Estado, cualquier Estado, sea o no confesional, ha de reconocer, como un verdadero derecho de la persona, el ejercicio "real" de un culto, determinado en todas sus manifestaciones externas, según la libertad religiosa, ya establecida en España<sup>224</sup>. E incluso -propone ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA- que, sin menoscabo de la dotación presupuestaria, podrían implantar las iglesias un impuesto de carácter personal, cuya liquidación y recaudación quedase a cargo de la Administración del Estado, por cuenta de las respectivas comunidades religiosas, con objeto de fortalecer los vínculos con sus miembros y preparar un sistema de financiación, que descansa, preponderantemente, en las aportaciones de los creyentes, a modo semejante al régimen de la República Federal de Alemania, que compagina la aconfesionalidad del Estado con la autonomía de las iglesias, y reconoce el derecho a percibir "impuestos eclesiásticos" de sus miembros<sup>225</sup>.

<sup>221</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 222. Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, loc. cit., p. 179.

<sup>222</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 320-321.

<sup>223</sup>.- Vid. ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, C., *La financiación de las iglesias*, loc. cit., p. 338.

<sup>224</sup>.- Vid. ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, C., *La financiación de las iglesias*, loc. cit., p. 338.

<sup>225</sup>.- Vid. ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, C., *La financiación de las iglesias*, loc. cit., p. 340.

**III.6.B. PERIODO 2. PLAZO DE APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE DOTACIÓN EN PRESUPUESTO Y PORCENTAJE SOBRE RENDIMIENTO DE LA IMPOSICIÓN<sup>226</sup> (artículos II.2; II.3; II.4,2 y apartado 2 del número 1 del protocolo adicional del acuerdo económico)<sup>227</sup> (desde 1988 a 1990).**

Como sistema provisional, que representa un paso intermedio dentro de un proceso evolutivo, la asignación tributaria tiene rasgos propios, pero, al mismo tiempo, participa de algunos caracteres del sistema del que parte, dotación global y única y de aquél hacia el que se encamina, suficiencia financiera de la Iglesia, particularmente si se tiene en cuenta la dosis notable de pragmatismo, que ha presidido la elaboración del acuerdo de 1979. Desde el ángulo de la intervención del ciudadano el sistema de asignación tributaria se asemeja más al sistema definitivo, ya que tiene en cuenta la voluntad del ciudadano, ya que "será preciso que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración respectiva su voluntad acerca del destino de la parte afectada", según establece el segundo inciso del artículo II.2 del acuerdo económico, de 1979. El papel del ciudadano ha cambiado de naturaleza, ya que su voluntad es presupuesto para que la asignación se lleve a cabo. Ya no está empujado obligatoriamente a contribuir al sostenimiento económico de la Iglesia católica. Sólo si así lo manifiesta se producirá. Este sistema se acerca más al sistema de autofinanciación, en el que tendrá que tener en cuenta las aportaciones libres de los creyentes<sup>228</sup>.

Este segundo período de aplicación simultánea tiene las siguientes características:

- a) no puede comenzar antes de 1983, por ser taxativo el texto, al indicar los tres ejercicios completos, después de la firma;
- b) sí puede comenzar después de 1983, ya que la palabra "podrá" indica, al menos, opción en cuanto a la fecha de comienzo;
- c) deberá producirse en el plazo de tres años: la sustitución o período de aplicación simultánea no puede durar más de tres años<sup>229</sup>.

<sup>226</sup>.- Seguimos la división, en fases, realizadas por PIÑERO CARRIÓN. Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 321 y ss.

<sup>227</sup>.- Los artículos interesantes para esta etapa son los siguientes:

- Artículo II.2 del acuerdo sobre asuntos económicos: "[...]el Estado podrá asignar a la Iglesia católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado. Para ello será preciso que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración respectiva su voluntad acerca del destino de la parte afectada. En ausencia de tal declaración, la cantidad correspondiente será destinada a otra finalidad".
- Artículo II.3 del acuerdo sobre asuntos económicos: "Este sistema sustituirá la dotación a que se refiere el apartado siguiente, de modo que proporcione a la Iglesia católica recursos de cuantía similar".
- Artículo II.4, 2 del acuerdo sobre asuntos económicos: "Durante el proceso de sustitución, que se llevará a cabo en el plazo de tres años, la dotación presupuestaria se minorará en la cuantía igual a la "asignación tributaria" recibida por la Iglesia católica".
- Protocolo adicional, en su número 1: Indica que, también valen para ese período de aplicación simultánea, las normas, en cuanto a la actualización de la cantidad global.

<sup>228</sup>.- Vid. CORRAL SALVADOR, C., (ed.), *La asignación tributaria para fines religiosos* (Madrid 1989), pp. 31-33.

<sup>229</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN. Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 321-322.

Por tanto, es un período, cuya duración se tasa en tres años -artículo II.4 del acuerdo económico-, en el que conviven estos dos sistemas, de modo que la Iglesia perciba, en total, una suma equivalente, a la que venía recibiendo presupuestariamente<sup>230</sup>. Pero, como es previsible, que, al dar comienzo este nuevo sistema, de entregar a la Iglesia ese tanto por ciento, procedente de los impuestos, de los que, voluntariamente, quieran destinarlo a esa finalidad, no equivalga a la "adecuada dotación", que el Estado viene aportando a la Iglesia durante el primer período, se establece en el artículo II.4 del acuerdo económico, de 1979, que la dotación presupuestaria continuará en esta segunda fase, pero se irá minorando "en cuantía igual a la asignación tributaria recibida". Este proceso de sustitución, según el artículo II.4.2 del acuerdo económico, de 1979, se llevará a cabo en el plazo de tres años. Es, sin embargo, lógico, que dure este tiempo en el período de aplicación simultánea de ambos sistemas, puesto que un cambio repentino a este nuevo sistema podría provocar la reducción de la aportación estatal, destinada a la Iglesia. En efecto, sin esta experiencia trienal, no podría calcularse el número de contribuyentes, que quieran destinar a la Iglesia católica una parte de la cuota de los citados impuestos, así como la cuantía de éstos, a fin de fijar el porcentaje de afectación a la Iglesia católica, de modo que ésta reciba, mediante tal sistema, los "recursos de cuantía similar" al a dotación anterior, tal y como se previene en el artículo II.3 del acuerdo económico, de 1979<sup>231</sup>. Por tanto, este período segundo, de aplicación simultánea, hubiera podido estar en vigor en 1983-1984-1985, ni antes ni después. Pasado 1985 -si se hubieran cumplido las previsiones- debería haberse dado paso al período tercero, de aplicación exclusiva del sistema de "asignación tributaria", o al cuarto período, si se han cumplido sus condiciones<sup>232</sup>.

El sistema de la segunda fase fue propuesto también a las confesiones no católicas, pero no lo aceptaron<sup>233</sup>.

Esta segunda fase podría haber tenido su comienzo el 1 de enero de 1983, momento, en el que se hubiera podido combinar el sistema de dotación estatal a la Iglesia, con la "asignación tributaria para fines religiosos". En este segundo período, la simultaneidad de ambos sistemas se articula como sigue: en principio, el Estado podrá asignar a la Iglesia un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o cualquier otro impuesto de carácter personal; y en la medida en que el importe global de la asignación así calculada, no alcance el valor de la dotación presupuestaria hasta entonces vigente, el Estado completaría la diferencia entre ambas sumas con la dotación precisa, hasta completar, lo que venía rigiendo en el año, en que se haya puesto en marcha este sistema simultáneo de "asignación tributaria" y de dotación presupuestaria estatal<sup>234</sup>.

Esta segunda fase, que hubiera podido entrar en vigor en el año 1983 -a partir del 1 de enero, de 1983-, fue regulada y puesta en funcionamiento, sin embargo, en la ley 33/1987, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, para 1988<sup>235</sup> -B.O.E., núm. 307, de 24 de

<sup>230</sup>.- Vid. MARTÍN DE AGAR, J.-T., *Notas sobre la cooperación económica del Estado con la Iglesia Católica*, loc. cit., p. 789.

<sup>231</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Sistema español de dotación estatal a la Iglesia*, en GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., *Régimen jurídico de sus relaciones*, loc. cit., p. 177.

<sup>232</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 322.

<sup>233</sup>.- Vid. MARTÍN SÁNCHEZ, I., *La financiación de las confesiones religiosas en el Derecho español*, loc. cit., p. 146.

<sup>234</sup>.- Vid. PÉREZ DE AYALA, J.L., *La asignación tributaria a la Iglesia católica y sus implicaciones constitucionales. Una reflexión*, loc. cit., p. 643.

<sup>235</sup>.- Esta ley 33/1987, de 23 de diciembre, en su disposición adicional quinta regula la "asignación tributaria a fines religiosos y otros". Se trata, por ello, de la ejecución de lo previsto en el artículo II del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979. Vid. AA.VV., *Legislación del Estado español. Régimen económico*, IV, A.D.E.E. (1988), p.

diciembre-, por lo que, al caracterizarse la fase de referencia por su transitoriedad, en tres años -1988, 1989, 1990- deberá finalizar<sup>236</sup>. Esta segunda fase comenzó con la ley de presupuestos para el ejercicio de 1988<sup>237</sup>, siendo también un sistema de dotación estatal, aunque con la manifestación, por parte de los creyentes y personas, que quieran colaborar con las confesiones, de su voluntad de cooperar con una confesión religiosa. Este segundo período se prolongó hasta 1990<sup>238</sup>. Algún autor ha llegado a gritar: "La dotation d'Etat est morte, vive l'allocation fiscale!"<sup>239</sup>. Para el Gobierno la facultad de uno a otro estadio era potestativa -"podrá asignar" nos dice el artículo II.2 del acuerdo económico, de 1979- y le pareció 1988 el momento de ejercitarla<sup>240</sup>.

Esta segunda fase se caracteriza por su transitoriedad, al estar destinada, a servir de puente entre el sistema de dotación y el período de "asignación tributaria exclusiva". Su duración mínima será de tres anualidades, y su comienzo es facultativo, dependiendo de la voluntad de la Administración, a la hora de hacer realidad las modificaciones oportunas, que permite el acuerdo económico<sup>241</sup>.

En base a la disposición adicional quinta de la ley 37/1988, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1989 -B.O.E., de 29 de diciembre-<sup>242</sup>, PÉREZ LUQUE ha definido la "asignación tributaria", en los siguientes términos: "una participación en los ingresos del Estado, recaudados por el Impuesto sobre la Renta"<sup>243</sup>.

Este período segundo consiste en la aplicación simultánea de los dos períodos, a saber:

- a) del de presupuestos y dotación presupuestaria;

641. La puesta en marcha del sistema de "asignación tributaria" causó sorpresa, en opinión de GARCÍA DÍAZ, en la Conferencia Episcopal española, pues no tuvo noticias hasta ese momento. Vid. GARCÍA DÍAZ, E., *La asignación tributaria a la Iglesia católica entrará en vigor en 1988*, 2337, *Ecclesia* (1987-II), p. 8. Sin embargo, en otra colaboración señala este mismo autor que no causó sorpresa, ya que en 1986 el P.S.O.E. incluyó pasar a la "asignación tributaria" en su programa electoral. Vid. GARCÍA DÍAZ, E., *La asignación tributaria de la Iglesia, ni anticonstitucional ni discriminatoria*, 2338, *Ecclesia* (1987-II), p. 8.

En 1988, el Gobierno decidió pasar de la etapa inicial a la intermedia. Para ello, comunicó, unilateralmente y sin intercambios previos, a la Conferencia Episcopal, su decisión de introducir, en 1988, la nueva sistemática fiscal de la "asignación tributaria". Así estaba pactado en el correspondiente acuerdo. También fue decisión unilateral del Gobierno no introducir el sistema en los cinco años de 1983-1987, en los que podía haberlo hecho, si hubiera querido. Quizá hubiera sido más correcto, informar y contrastar opiniones, aunque el Gobierno no haya faltado, en modo alguno, a ninguna forma. Ahora bien, el Gobierno, tomada su decisión, y, a pesar de tampoco estar obligado a ello, sí mantuvo contactos con la Conferencia Episcopal, cuya "comisión permanente", en 23 de septiembre, expresó su opinión favorable a la aceptación del texto, proponiendo algunas enmiendas. Según noticias, de seis fueron recogidas cinco, para que la puesta en marcha del sistema fuera lo más satisfactoria. Vid. HIGUERA, G., *La asignación tributaria a la Iglesia católica*, loc. cit., p. 104.

<sup>236</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 223.

<sup>237</sup>.- Año éste de 1988, que supuso, ciertamente, un hito histórico en las relaciones económico-financieras entre la Iglesia católica y el Estado español. Vid. HIGUERA, G., *La asignación tributaria a la Iglesia católica*, 2, 8, 1077-1078, R. y F. (1988), p. 103.

<sup>238</sup>.- Vid. GOTI ORDEÑANA, J., *Del sistema de dotación al de colaboración económica con las Confesiones religiosas*, loc. cit., pp. 170-171.

<sup>239</sup>.- Vid. P.M.L., *Espagne: Première étape vers l'autofinancement de l'Eglise*, 56, L'A.R. (1988), p. 12.

<sup>240</sup>.- Vid. HIGUERA, G., *La asignación tributaria a la Iglesia católica*, loc. cit., p. 104.

<sup>241</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, loc. cit., p. 180.

<sup>242</sup>.- Vid. reproducida en, 70, E.F. (1989), pp. 17-85.

<sup>243</sup>.- Vid. PÉREZ LUQUE, M., *Impuesto sobre la Renta y la asignación tributaria a la Iglesia*, 6, R.T.T. (1989), p. 119.

b) y del de "asignación tributaria"<sup>244</sup>.

El artículo II.2 del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, establece que:

"[...] el Estado podrá asignar a la Iglesia católica un porcentaje de rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado. Para ello será preciso que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración respectiva su voluntad acerca del destino de la parte afectada. En ausencia de tal declaración, la cantidad correspondiente será destinada a otra finalidad".

Este sistema de "asignación tributaria" supone un juego conjunto del sistema de consignación presupuestaria, junto al de "asignación tributaria", y consiste en asignar a la Iglesia católica un porcentaje determinado, sobre la masa de rendimiento de la imposición sobre la renta -siendo éste el criterio, que, definitivamente, se utilizaría-, o sobre el patrimonio neto, o sobre otra imposición de carácter personal, correspondiente a aquellos ciudadanos contribuyentes, que hayan manifestado, expresamente, en su declaración, su voluntad de que su parte correspondiente se destine a la Iglesia católica. A falta de tal declaración "la cantidad correspondiente será destinada a otra finalidad"; ello da a entender que el destino podrá ser otra Iglesia, otra confesión religiosa, o, simplemente otros fines del presupuesto del Estado<sup>245</sup> -aunque, finalmente, se destinaría a "otros fines", según la ley 33/1987, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1988, en su disposición adicional quinta<sup>246</sup>.

<sup>244</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 322. Sin embargo, como ha señalado PÉREZ LUQUE, en el libro titulado *Gasto Público en España 1988*, editado por la *Secretaría de Estado de Hacienda*, para justificar ante los ciudadanos el empleo de los fondos públicos durante dicho ejercicio, no figura, separadamente, el importe de esta asignación, desconociendo la causa de tal omisión. Por ello, es posible que esté engrosando otro concepto, a menos que los totales de gasto no cuadren con los ingresos -ingresos, que tampoco figuran en este libro, ni aun globalmente-, como sería lógico, para comparar ambos. Vid. PÉREZ LUQUE, M., *Impuesto sobre la Renta y la asignación tributaria a la Iglesia*, loc. cit., p. 120.

<sup>245</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 322.

<sup>246</sup>.- Esta ley 33/1987, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1988 -B.O.E., de 24 de diciembre-, en su disposición adicional quinta, nos dice:

"1. En ejecución de lo previsto en el artículo II del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, a partir de 1988 se destinará un porcentaje del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a fines religiosos y a otros fines de interés social.

2. Dicho porcentaje se fijará en la Ley de Presupuestos de cada año y se aplicará sobre la cuota íntegra del Impuesto resultante de las declaraciones anuales presentadas por los sujetos pasivos.

A estos efectos, se entenderá por cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la resultante de aplicar sobre la base imponible del tributo, definida conforme al artículo 13 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, la tarifa establecida en el artículo 28 de la misma Ley.

3. El porcentaje aplicable en las declaraciones correspondientes al período impositivo de 1988 será del 0,5239 por 100.

4. Los sujetos pasivos podrán indicar en la declaración su voluntad de que el porcentaje correspondiente a su cuota íntegra se destine:

- a) A colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia Católica.
- b) A los otros fines que establece el apartado 1 de esta disposición.

En base al apartado primero de la disposición adicional quinta de esta ley 33/1987, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, para 1988, a partir de 1988 se destina un porcentaje del rendimiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas -I.R.P.F.-, a fines religiosos, y otros fines de interés social.

El apartado segundo de la disposición adicional quinta de la ley 33/1987, de 23 de diciembre de presupuestos generales del Estado, para 1988, establece que dicho porcentaje se fijará en la ley de presupuestos de cada año y se aplicará sobre la cuota íntegra resultante de las declaraciones anuales presentadas por los sujetos pasivos. Se entenderá por cuota íntegra la resultante de aplicar sobre la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la tarifa establecida en la misma ley.

El Estado entregará a la Iglesia, lo que recaude en este impuesto, en el que los contribuyentes declaren que su porcentaje vaya a la Iglesia. Pero, como en una primera aplicación del sistema sería imposible acertar con la cantidad recaudada del impuesto con una partida del presupuesto, de manera que de las dos cantidades, lo recaudado del impuesto y de la partida del presupuesto, entregue el Estado a la Iglesia la cantidad que le corresponde<sup>247</sup>.

Sobre qué masa de rendimiento de imposición se aplicará, y qué porcentaje será el que se aplique, así como el procedimiento técnico, que se vaya a utilizar para la percepción y entrega, cuestiones, que las partes dejan sin determinar<sup>248</sup>. El porcentaje del 0'5239<sup>249</sup> -en ejecución de

En caso de que no manifiesten expresamente su voluntad en uno u otro sentido, se entenderá que optan por los fines de la letra b).

5. Durante el período de tres años a que se refiere el párrafo segundo del apartado 4 del artículo II del Acuerdo citado con la Santa Sede, la dotación presupuestaria a la Iglesia Católica se minorará en la cuantía de la asignación tributaria que aquella reciba en virtud de lo previsto en esta disposición. La minoración se efectuará con cargo al rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en cada ejercicio.

Los recursos percibidos en virtud de este sistema por la Iglesia Católica durante 1988, 1989 y 1990 no serán inferiores a la dotación presupuestaria recibida en 1987, actualizada anualmente.

6. A partir de 1991 y en tanto operan las previsiones del apartado 5 del artículo II del Acuerdo con la Santa Sede, el sistema de dotación presupuestaria a la Iglesia Católica quedará definitivamente sustituido por el de asignación tributaria. Cada año, la Iglesia Católica recibirá mensualmente, en concepto de entrega a cuenta, una dozava parte de la asignación tributaria correspondiente al penúltimo ejercicio presupuestario anterior. Esta cantidad se regularizará definitivamente cuando se disponga de los datos definitivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio correspondiente.

7. Lo establecido en la presente disposición se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 12/1981, de 13 de mayo, de Concertación Económica con el País Vasco, y en el Decreto-ley 16/1969, de 24 de julio, por el que se regula la aportación de Navarra al sostenimiento de las cargas de la nación y la armonización de su régimen fiscal con el del Estado.

8. Se autoriza al Gobierno para dictar, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, las normas de desarrollo y aplicación de cuanto se establece en la presente disposición". Vid. MOLINA, A., y OLMOS, M<sup>a</sup>.E., *Legislación eclesíastica*, loc. cit., pp. 311-312.

<sup>247</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *El nuevo sistema de dotación económica del Estado a la Iglesia*, loc. cit., pp. 82-83.

<sup>248</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.M<sup>a</sup>., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 322.

<sup>249</sup>.- Sobre el 0'5239 por ciento y el "impuesto religioso" recogemos la siguiente bibliografía: vid. OLMO, J., *Del 0'5239 por 100. El "impuesto religioso" que viene*, 1599, V.N. (1987-II), pp. 12-13. Vid. *Del "impuesto religioso" a "impuesto revolucionario"* (editorial), 1611, V.N. (1987-II), p. 5. Vid. BORDEJÉ, M., *¿Habrá "impuesto religioso"?*, 1871, Ecclesia (1978-I), p. 30. Vid. *Sobre el llamado "impuesto religioso"* (editorial), 1910, Ecclesia (1978-II), p. 3. Vid. *El "impuesto religioso" a punto*, 1907, Ecclesia (1978-II), p. 30.

lo previsto en el artículo II.2 del acuerdo económico, de 1979- por ciento de las cuotas íntegras del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que, finalmente, el Estado, de forma

Este porcentaje lo calculó, en su momento, el Estado en base al rendimiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas obtenido en 1986: unos 2'6 billones de pesetas. Pues bien, el 0'5239 por ciento de 2'6 billones da, redondeando, 13.600 millones de pesetas, que era, aproximadamente, la cantidad que el Estado pensaba dedicar a la dotación presupuestaria para 1988. No se escapa el detalle de que para que la asignación tributaria dé ese resultado es preciso que todos los contribuyentes hagan uso de su facultad de destinación a favor de la Iglesia, lo cual, como es obvio, no va a suceder. Y el Estado lo sabía perfectamente. El Estado ha procedido de esta manera para evitar que recibiera una cantidad superior a la presente como dotación presupuestaria. Recuérdese que, durante los años 1988, 89 y 90 la dotación presupuestaria debe minorarse en cuantía igual al a asignación tributaria recibida por la Iglesia. Si el porcentaje hubiera sido más alto, la asignación tributaria hubiera podido ser superior a la dotación presupuestaria, con lo cual el Estado debería haber entregado a la Iglesia católica una cantidad mayor que la prevista. Al mismo tiempo, actuando de esta manera, el Estado ponía la base para conseguir el mismo resultado en los años 1989 y 1990. Hoy se intenta evitar todo intento de cambiar este porcentaje, pues se crearían corrientes a favor y en contra. Vid. BASCOMPTE, A., *Asignación tributaria y autofinanciación*, 134-135, 2-3, I.V. (1988), pp. 296-297.

Ejemplos de este 0'5239% son los siguientes: un contribuyente, al que le resulte una cuota íntegra de 400.000 pesetas podrá destinar a la Iglesia o a otros fines sociales este año el 0'5239 por ciento, es decir, 2.095 pesetas. Otro, al que le resulte una cuota íntegra de 1.000.000 pesetas, podrá destinar a iguales fines, 5.239 pesetas. Y así sucesivamente. Vid. BASCOMPTE, A., *Asignación tributaria y autofinanciación*, 134-135, 2-3, I.V. (1988), p. 295. Veamos algunos ejemplos recogidos en *¿Cómo hacer la asignación tributaria?*. 2372, Ecclesia (1988-I), p. 18.

Pago a Hacienda (pesetas)	Porcentaje (%)	contribución a la Iglesia (pesetas)
100.000	0'5239	524
250.000		1.310
500.000		2.620
700.000		3.668
900.000		4.715
1.000.000		5.240
1.500.000		7.858
2.000.000		10.478
2.500.000		13.098
3.000.000		15.717
3.500.000		18.336
4.000.000		20.956
4.500.000		23.575
5.000.000		26.196

En el mes de noviembre de 1984, la Iglesia católica realizó una campaña, para recaudar fondos de sus fieles. Para ello quiso servirse de la televisión pública, mediante la compra de un espacio publicitario, pero su anuncio fue rechazado por el organismo competente -en base a la norma tercera de la resolución de 31 de enero, de 1984, de las normas de admisión de publicidad en la televisión y la radio pública, que establece que "no se admitirá publicidad en los medios dependientes de Radiotelevisión Española relativa a la difusión de ideas de contenido [...] religioso]. La reacción de la Conferencia Episcopal fue bastante moderada, pero se comenzó a plantear la cuestión del dinero de la Iglesia en España. Vid. IBAN, I.C., *Iglesia y Estado en España, hoy*, II, A.D.E.E. (1986), pp. 357-381.

El lema de la campaña de 1995 ha sido "Este es el momento de ayudar a la Iglesia. Hacer el bien no cuesta nada". Vid. sobre el mismo BUEY, L., De, La Iglesia juzga "confusa" la asignación tributaria. "Hacer el bien no cuesta nada lema de la campaña", 1992, V.N. (1995), p. 15. El de la campaña para 1998: "Porque todos somos Iglesia". Vid. GARCÍA DÍAZ, e., *Acuerdo Iglesia-Gobierno sobre la asignación tributaria*, 2495, Ecclesia (1990-II), p. 8.

unilateral<sup>250</sup>, establece en la ley 33/1987, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del

<sup>250</sup>.- El Estado ha realizado un desarrollo normativo unilateral del acuerdo, vulnerando elementales principios de Derecho internacional. La ley 33/1987, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, es la primera vez, que se aplica el sistema; en su disposición adicional quinta, y en ejecución del artículo II del acuerdo sobre asuntos económicos, se fija el porcentaje del 0'5239 por ciento, y, en segundo lugar, la alternativa de destino: o a fines religiosos o a otros fines de interés social. Vid. GARCÍA-HERVÁS, D., *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 843. Este coeficiente del 0'5239% se ha calculado en base a la hipótesis de que absolutamente todos los bautizados destinaran su ayuda a favor de la Iglesia. Vid. GARCÍA DÍAZ, E., *Acuerdo Iglesia-Gobierno sobre la asignación tributaria*, 2495, *Ecclesia* (1990-II), p. 8.

El artículo 134.7 de la Constitución española, de 1978, nos dice que "La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea". La nueva redacción, dada por el artículo 110 de la ley 33/1987, de presupuestos generales del Estado, al artículo 130 de la ley 230/1963, de 28 de diciembre, general tributaria, es declara inconstitucional, no en atención a sus contenidos -que en la sentencia ni siquiera analiza-, sino al hecho exclusivo, de haber sido modificado a través de una ley de presupuestos generales del Estado. Esta sentencia del Tribunal Constitucional es, por tanto, la primera en nuestra Historia constitucional más reciente, que pone freno a esa "vis expansiva" de las leyes de presupuestos generales del Estado. Vid. CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F., *Sobre la Ley de Presupuestos y sus límites constitucionales. Un comentario a la S.T.C. 78/1992, de 14 de mayo*, XLIII, 224, R.D.F.H.P. (1993), p. 348. Efectivamente, cualquier regulación no puede ser el contenido normativo, constitucionalmente admisible, de las leyes de presupuestos generales del Estado, pues aquélla ha de guardar una directa relación con las previsiones de ingresos y las habilitaciones de gastos de los presupuestos, o con los criterios de política general, en que se sustentan. Pronunciamiento reiterado por el Tribunal Constitucional a partir de su sentencia núm. 63/1986, de 21 de mayo. Vid. CANO MATA, A., *Contenido de las Leyes Generales del Estado (Sentencias del Tribunal Constitucional números 65, 66 y 67/1990, de 5 de abril)*, XL, 207, R.D.F.H.P. (1990), p. 697.

Sobre los límites de las leyes generales de presupuestos del Estado son interesantes las siguientes sentencias del Tribunal Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional 27/1981, primera en relación a esta materia, prohíbe la creación de tributos, mediante los presupuestos generales del Estado -fundamento jurídico 2-, o la 63/1986. Le siguen en el tiempo la 76/1992, la 237/1992, la 83/1993, la 116/1994, la 178/1994 y la 195/1994. Todas ellas del Tribunal Constitucional. Lo que sí pueden hacer las leyes de presupuestos generales del Estado, es modificar los porcentajes de deducción y la cuantía porcentual de los límites. Lo cierto es que, en la actualidad, no parece, que pueda afirmarse, como hacía el preámbulo de la ley de presupuestos del Estado, para 1988, la absoluta idoneidad de la ley de presupuestos, para contener cualquier materia. Contra las discutibles afirmaciones del preámbulo de la ley de presupuestos generales del Estado, para 1988, parece claro que el fundamento jurídico 3 de la sentencia del Tribunal Constitucional 65/1987 ha advertido acerca de la imposibilidad, de considerar ajustado a la Constitución cualquier contenido, y ha señalado la posibilidad, de considerarlo inconstitucional, por no ajustarse a lo propio del presupuesto. De hecho, el fundamento jurídico 5 de la sentencia del Tribunal Constitucional 65/1987 habla de "injustificada conclusión", refiriéndose a las materias, que no guardan la debida relación con la disciplina presupuestaria. La sentencia del Tribunal Constitucional 76/1992, de 14 de mayo, en su fundamento jurídico 4.a), nos recuerda cuáles son los límites materiales de las leyes de presupuestos generales del Estado:

"[...] la doctrina que este Tribunal Constitucional ha elaborado sobre los límites materiales de las Leyes de Presupuestos que, ciertamente y como seguidamente veremos, no son tan amplios como se señala en el preámbulo de la Ley 33/1987, de Presupuestos para 1988 [...]".

También es interesante, sobre los límites constitucionales de las leyes de presupuestos generales del Estado, la siguiente bibliografía: vid. MARTÍNEZ LAFUENTE, A., *Ley de Presupuestos e inconstitucionalidad*, 25, R.E.D.F. (1980), pp. 51-85. Vid. FALCÓN Y TELLA, R., *La habilitación a las Leyes de Presupuestos para modificar tributos*, 33, R.E.D.F. (1982), pp. 25-52. Vid. IANNITTO, G., *Limiti costituzionali alla legge di bilancio*, IX, A.Fin. (1960), pp. 142-173. Vid. *Tribunal Constitucional: Sentencia sobre inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley de Presupuestos del Estado para 1981*, 72, H.P.E. (1981), pp. 173-187 -reproduce la sentencia del Tribunal Constitucional, de 20 de julio, de 1981-. Sobre esta sentencia también puede consultarse GONZÁLEZ GARCÍA, E., *Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Presupuestos del Estado para 1981*, 72, H.P.E. (1981), pp. 188-196. Vid. DÍEZ MORENO, F., *Análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre preceptos tributarios de la Ley de Presupuestos del Estado para 1981*, 72, H.P.E. (1981), pp. 197-205. Vid. RODRIGO FERNÁNDEZ, J., *Comentario de la sentencia del Tribunal Constitucional*

Estado para 1988 –según el apartado tercero de su disposición adicional quinta- es el 0"5239 por ciento de las cuotas íntegras del impuesto sobre la renta de las personas físicas -invariable hasta hoy día-. Lo lógico hubiera sido acordar el porcentaje con la iglesia; incluso se ha mantenido, a pesar de lo irrisorio de la cuantía, invariable año tras año este porcentaje<sup>251</sup>. El porcentaje del impuesto, a destinar a fines religiosos, lo ha determinado el Estado, según la memoria, que la Iglesia le presente, de forma que la cantidad global, a entregar a la Iglesia sea equivalente, a la que el Estado entregaba, cuando aportaba una asignación del fondo presupuestario -artículo II.3 del acuerdo económico-. Esto exige que la determinación del porcentaje se haga año tras año; para adaptarlo a las circunstancias y porque cada año variarán las declaraciones de voluntad, y el número de declaraciones de la renta<sup>252</sup>.

Y ello a pesar de que este porcentaje, fijado unilateralmente por el Estado, en la ley 33/1987, de 23 de diciembre, había sido calculado en base a obtener unos rendimientos equivalentes<sup>253</sup>, a los que recibía la Iglesia por el sistema anterior de dotación presupuestaria desde 1988; por ello ha resultado, ciertamente, insuficiente, para garantizar una asignación, que respete lo dispuesto en el artículo II.3 del acuerdo sobre asuntos económicos. Hasta 1991 el problema no tenía demasiada trascendencia práctica, al hallarnos en el proceso de sustitución, previsto en el párrafo 2 del apartado 4 del artículo II<sup>254</sup>, durante el cual el Estado debe mantener la dotación presupuestaria, aunque minorada en la parte correspondiente a las cantidades producidas por el sistema de "asignación tributaria". Sin embargo, el paso, en 1991, a la etapa en la que la asignación presupuestaria debe producir, por sí sola, recursos de cuantía equivalente, sin la cobertura de la dotación presupuestaria, obliga, necesariamente, a que se actualice el porcentaje, de forma que asegure al a Iglesia recursos similares, a los que hubiera recibido por otros procedimientos<sup>255</sup>. Ciertamente esta etapa plantea serios problemas, que quedan sin resolver, entre los cuales destaca, de manera principal, la insuficiencia económica de las cantidades, que en base a él irán destinadas a la Iglesia católica, que verá mermados de manera sustancial los ingresos, que el antiguo sistema de consignación presupuestaria le proporcionó durante más de un siglo<sup>256</sup>.

La "asignación tributaria" repercute, de manera directa, en los ingresos fiscales del Estado, ya que la suma transferida a la Iglesia dejará de ser ingresada en el Tesoro público. Tal inconveniente habría podido ser eliminado con la implantación de un "impuesto religioso", al

---

*sobre disposición de carácter mutualista de la Ley de Presupuestos del Estado para 1981*, 72, H.P.E. (1981), pp. 206-214.

<sup>251</sup>.- Vid. GARCÍA-HERVÁS, D., *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, loc. cit., pp. 843-844.

<sup>252</sup>.- Vid. ARZA, A., *El sistema de aportación estatal*, en CORRAL SALVADOR C., y ECHEVARRRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., De, *Los acuerdos entre la Iglesia y España*, loc. cit., pp. 620-621.

<sup>253</sup>.- Al menos en el artículo II.3 del acuerdo económico se establece que la cantidad percibida por la Iglesia con este nuevo sistema será "de cuantía similar" a la obtenida con el sistema de dotación estatal:

"Este sistema sustituirá a la dotación a que se refiere el apartado siguiente, de modo que proporcione a la Iglesia católica recursos de cuantía similar".

<sup>254</sup>.- El párrafo 3 del artículo II.4 del acuerdo económico, recoge la minoración de la dotación presupuestaria en cuantía igual a la "asignación tributaria", recibida por la Iglesia católica:

"Durante el proceso de sustitución, que se llevará a cabo en el plazo de tres años, la dotación presupuestaria se minorará en cuantía igual a la asignación tributaria recibida por la Iglesia católica".

<sup>255</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, XXXII, 63, I.C. (1992), p. 129.

<sup>256</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., pp. 219-220.

igual que en la hoy República Alemana, posibilidad vetada en España por el artículo 16.2 de la Constitución, ya que ello implicaría en el supuesto obligación, a declarar sobre la religión, a que pertenece el sujeto pasivo<sup>257</sup>. En España no se pudo instaurar el sistema de "impuesto religioso" alemán, en la medida en que tal sistema está ligado al concepto de "corporación de derecho público", que poseen algunas confesiones y tiene un fundamento constitucional. Por el contrario, en España ninguna confesión tiene el carácter de "corporación de derecho público", sino que el fundamento de "asignación tributaria" es, exclusivamente, un acuerdo con la confesión religiosa, es decir, el fundamento del sistema no es constitucional, sino pacticio<sup>258</sup>. El impuesto, del que habla el acuerdo económico no es "impuesto religioso" ni "impuesto eclesiástico". Es un impuesto estatal ordinario, que todos los súbditos han de pagar. El Estado, sin embargo, destina un porcentaje determinado de este impuesto a la Iglesia. Por ello, es un impuesto, del que el Estado destina un tanto por ciento a fines religiosos, siempre que los imponentes declaren su voluntad, de que se destine a los fines de una confesión religiosa determinada. Este impuesto no es un "impuesto religioso", porque no es un impuesto establecido por motivos religiosos; sino un impuesto establecido para todos los súbditos, sea sobre la renta o sobre el patrimonio, sea otro impuesto de carácter personal. El impuesto religioso no sólo lo pagan, los que profesan una religión y por razón de la religión; sino que lo han de pagar todos. Si alguien no declara su voluntad de destino de este impuesto o declara que no quiere que se destine a un fin religioso, el Estado cobrará el impuesto, pero lo destinará a otros fines -artículo II.2 del acuerdo económico-. No es un impuesto nuevo, ni un impuesto, establecido para determinadas personas, sino que es un impuesto para todos los súbditos. Ningún español, por motivos religiosos, tendrá que pagar más impuestos por su carácter religioso. Todos los españoles pagarán los impuestos en proporción a sus posibilidades<sup>259</sup>.

La utilización del sistema de recaudación y gestión tributaria para la consecución de los recursos económicos de una confesión religiosa implica la identificación de los contribuyentes, y de su domicilio y cuantificación de sus ingresos, redundando, por consiguiente, en la posibilidad de utilizar procedimientos obligatorios y de carácter periódicos -anuales-, que, además, invaden el ámbito íntimo de los contribuyentes. Efectivamente, esta cooperación religiosa obligada se puede enmarcar en el ámbito del artículo 16.2, in fine de la Constitución<sup>260</sup>. De todos modos, las afectaciones impositivas de esta clase son fórmulas jurídicamente aceptadas y reguladas, con carácter genérico, en el artículo 27 de la ley 230/1963, de 28 de diciembre, general tributaria<sup>261</sup>. La disposición adicional quinta de la ley de presupuestos generales del Estado, para 1988, no altera ninguno de los elementos, ya sean estructurales o funcionales del tributo referido. De acuerdo con el artículo 27 de la ley de presupuestos generales del Estado, de 1963, la llamada "asignación tributaria" de la disposición adicional quinta de la ley de presupuestos generales del Estado, para 1988, constituye, bajo el

<sup>257</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, loc. cit., p. 186.

<sup>258</sup>.- Vid. GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M., *El Estado y la financiación de las confesiones*, loc. cit., p. 126.

<sup>259</sup>.- Vid. ARZA, A., *El sistema de aportación estatal*, en CORRAL SALVADOR C., y ECHEVARRRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., De, *Los acuerdos entre la Iglesia y España*, loc. cit., pp. 618-619.

<sup>260</sup>.- Vid. GARCÍA MORILLO, J., *Constitución, Estado e Iglesia católica. Teoría y realidad de la aconfesionalidad*, 55, Claves (1995), p. 27.

<sup>261</sup>.- Vid. FORNÉS, J., *Régimen jurídico-patrimonial y financiación de la Iglesia desde la perspectiva de la libertad religiosa*, loc. cit., p. 35. Vid. también en BLANCO, Mª., *La cooperación del Estado español...*, loc. cit., p. 540. Este artículo 28 de la ley general tributaria, de 1963, nos dice:

"El rendimiento de los tributos del Estado se destinará a cubrir sus gastos generales, a menos que a título excepcional y mediante una Ley, se establezca una afectación concreta".

enfoque jurídico, un claro supuesto de afectación parcial de rendimientos impositivos<sup>262</sup>. Por tanto, no estamos ni ante un impuesto nuevo, al estilo del llamado "impuesto religioso" alemán, ni tampoco ante una figura jurídicamente anómala ni nueva, sino ante una fórmula financiera, técnicamente correcta, y jurídicamente tipificada y regulada, que no es otra que la fórmula de una afectación impositiva, esto es, la afectación de una parte de la recaudación de un "impuesto estatal", a financiar un determinado gasto del Estado español. Se trata, por tanto, de una figura legal dentro de nuestro ordenamiento jurídico-positivo<sup>263</sup>. Pero si tal fórmula es técnica y jurídicamente correcta, es obligado, de inmediato, preguntarse por qué ha sido tildado de posible inconstitucionalidad. Sin embargo, la "asignación tributaria", que nos ocupa, no infringe ningún precepto de la Constitución española, de 1978. Primeramente, es conforme con el principio de legalidad tributaria, configurado en el artículo 31.3 de la Constitución española, de 1978<sup>264</sup>, ya que, de acuerdo con el artículo 27 de la ley 230/1963, de 28 de diciembre, general tributaria, la "asignación tributaria", en cuanto afectación de ingresos impositivos a un fin o gasto público concreto, ha sido establecido por la misma ley 33/1987, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, para 1988. Por otro lado, tampoco supone una infracción del artículo 134.7 de la Constitución española, de 1978<sup>265</sup>, según el cual las leyes de presupuestos no pueden crear tributos y sólo pueden modificarlos, cuando así lo haya prescrito, específicamente, una ley tributaria sustantiva. Pero la "asignación tributaria" no crea ningún tributo nuevo, y, por otra parte, tampoco constituye ninguna modificación de los elementos estructurales o funcionales del impuesto sobre la renta<sup>266</sup>. Efectivamente, IBÁN considera "extraordinariamente discutible", que en un moderno sistema fiscal quepa la posibilidad de que el contribuyente, de modo individual, designe el destino del producto de un impuesto concreto, y, menos aún, en nuestro sistema constitucional, ya que la aprobación de los presupuestos generales del Estado corresponde a las Cortes Generales, en virtud del artículo 134 de la Constitución española, de 1978, y, por esta vía del llamado "impuesto religioso" parte de la asignación de los gastos es hurtada a la competencia de las mismas; pero es que, además, no se explica por qué se concede esta facultad al contribuyente únicamente en esta materia y no en otras. Incluso es contrario al artículo 16.2 de la Constitución española, de 1978, el que "el contribuyente manifieste expresamente en la declaración respectiva su voluntad acerca del destino de la parte afectada" -artículo II.2 del acuerdo económico, de 1979-, lo cual es un modo indirecto de declarar la creencia religiosa, que se profesa<sup>267</sup>. La manifestación debe ser expresa. No se puede, pues, suponer la manifestación, ni basta una manifestación táctica ni interpretativa. Además, debe ser expresa. Si alguien no hace la declaración de destino de la parte afectada, no por eso pagará menos impuestos, sino que el porcentaje, que le correspondería dar a una confesión religiosa, el Estado la destinará a otros fines. De aquí se

<sup>262</sup>.- Vid. CORRAL SALVADOR, C., (ed.), *La asignación tributaria para fines religiosos*, loc. cit., pp. 37-38.

<sup>263</sup>.- Vid. PÉREZ DE AYALA, J.L., *La asignación tributaria a la Iglesia católica y sus implicaciones constitucionales. Una reflexión*, loc. cit., p. 641.

<sup>264</sup>.- Este artículo 31.3 de la Constitución española, de 1978, nos dice:

"Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley".

<sup>265</sup>.- Este artículo 1437 de la Constitución española, de 1978, nos dice:

"La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea".

<sup>266</sup>.- Vid. PÉREZ DE AYALA, J.L., *La asignación tributaria a la Iglesia católica y sus implicaciones constitucionales. Una reflexión*, loc. cit., p. 641.

<sup>267</sup>.- Vid. la Lección VIII, elaborada por IBÁN, titulada *Las formas de cooperar*, en IBÁN, I.C., y PRIETO SANCHÍS, L., *Lecciones de Derecho Eclesiástico*, loc. cit., p. 135.

deduce que este impuesto es un impuesto estatal ordinario y común, pero el Estado destina parte del impuesto a fines religiosos, según la declaración de los propios contribuyentes<sup>268</sup>.

Tampoco repugna la "asignación tributaria" el artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978, según el cual "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones". Tampoco se viola, a pesar de que a veces se ha defendido, con la "asignación tributaria" a la Iglesia católica, el artículo 14 de la Constitución española, de 1978. No infringe, pues, el principio de igualdad, en este caso de igualdad religiosa, ya que la "asignación tributaria" es compatible con el artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978, y no impide que el Estado puede concertar acuerdos económicos o financieros paralelos con otras confesiones religiosas, distintas de la católica, precisamente al amparo del propio artículo 16.3 de la misma Constitución española, como una manifestación del principio de igualdad religiosa, garantizado y regulado por la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980. También se ha dicho que la "asignación tributaria" incide, negativamente, en el artículo 16.2 de la Constitución española, de 1978, que establece que "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia". Pero ello no es cierto, ya que a nadie se le obliga a declarar sobre cuestiones religiosas personales, al ser tal declaración voluntaria; en realidad, la "asignación tributaria" para fines religiosos -tanto para la Iglesia católica, como si lo fuera para cualesquiera otras confesiones- parecen plenamente coherente con el esquema de democracia participativa, que inspira la Constitución española, de 1978. De todos modos, quizá haya que añadir que, aunque la "asignación tributaria" no infringe la Constitución española, de 1978, encajando en su espíritu, tal fórmula financiera es de carácter transitorio y a extinguir<sup>269</sup>. En realidad, en este nuevo estadio se da un reconocimiento y un respeto mayor a la voluntad del contribuyente, que no tenía la primera etapa. Lo cual supone un buen avance en justicia. Porque, antes, la parte alícuota de todo contribuyente engrosaba la dotación global, que se transfería a la Iglesia en las correspondientes partidas presupuestarias. Ahora se pregunta, de forma expresa, al mismo contribuyente, si desea, que se disponga, así de su parte; y sólo se asignará a la Iglesia católica, la de aquéllos, que lo consignan voluntariamente en su declaración tributaria. Bien desearían determinados sectores sociales, que también se les aplicara esta técnica tributaria de asignación en campos fiscales, como, por ejemplo, los de defensa y gastos militares, etcétera, por considerarla, como justa. La expresa consulta, que se hace en la declaración de renta no es anticonstitucional, como se ha pretendido, aisladamente, por algunos, ni tampoco viola la privacidad religiosa. Al declarante no se le pregunta, si es católico o no. Solamente, si desea, que se asigne a la Iglesia católica el porcentaje contributivo, legalmente establecido. Y muestran algunas encuestas, sin desarrollar las razones motivadoras de tales comportamientos -que determinadas minorías católicas y personas, políticamente encuadradas en el conservadurismo, optarán "por otros fines de interés social", mientras que no católicos o agnósticos van a preferir, destinar su porcentaje a la Iglesia católica por las obras sociales, que desarrolla con apretados presupuestos, pero muy eficientemente<sup>270</sup>.

La realidad es que sería conveniente una acción negociadora, a favor de un incremento del porcentaje del 0'5239 por ciento, fijado en la ley de presupuestos generales del Estado, para 1988. Algunos sectores de la jerarquía eclesiástica han manifestado ya su criterio, de que debería ser elevado al uno por ciento tal porcentaje, aumento que sólo podría tener lugar en la ley de presupuestos generales del Estado, o en otra norma de rango de ley, con el fin de cumplir

<sup>268</sup>.- Vid. ARZA, A., *El sistema de aportación estatal*, en CORRAL SALVADOR C., y ECHEVARRRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., De, *Los acuerdos entre la Iglesia y España*, loc. cit., p. 620.

<sup>269</sup>.- Vid. PÉREZ DE AYALA, J.L., *La asignación tributaria a la Iglesia católica y sus implicaciones constitucionales. Una reflexión*, loc. cit., pp. 641-643.

<sup>270</sup>.- Vid. HIGUERA, G., *La asignación tributaria a la Iglesia católica*, loc. cit., p. 105.

la exigencia del artículo 27 de la ley 230/1963, de 28 de diciembre, general tributaria, que requiere una norma de tal rango, para afectar total o parcialmente la recaudación de un impuesto a la financiación de un determinado gasto público. Sin embargo, aunque parte de la jerarquía eclesiástica apoyaría esta solución, encuentra ciertas reservas en determinados sectores de la vida política española más afectos a la Iglesia católica. Se piensa, en estos sectores, que sería un error político, el que la Iglesia católica solicitara, al entonces Gobierno socialista -hasta las elecciones de 3 de marzo de 1996- una elevación del actual coeficiente de la "asignación tributaria" -y que el Gobierno del Partido Popular, vencedor en las citadas elecciones de 3 de marzo de 1996, ha mantenido invariable en la ley de presupuestos generales del Estado para 1998-, porque ello implicaría una "deuda moral" de la Iglesia católica con un Gobierno, que, en varios puntos de su programa político y de su acción legislativa, se ha mostrado contrario a las enseñanzas del magisterio eclesiástico. Parece temerse, en los sectores políticos indicados, que la pretensión de la jerarquía eclesiástica, de que se eleve al uno por ciento la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas el porcentaje de la "asignación tributaria", haga perder independencia a la Iglesia católica frente al poder político. Se considera preferible, como alternativa, promover una reforma de la legislación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el sentido de desgravar los donativos, que se hagan a la Iglesia, a sus instituciones y a sus obras apostólicas y sociales, tal como se establecía en el texto original de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de 8 de septiembre, de 1978 -artículo 29-, posteriormente rectificado por ley 48/1985. Esta parece ser la solución adoptada con la reforma de la ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. Lo cierto es que son dos soluciones perfectamente compatibles, ya que, de hecho, tiene una génesis histórica independiente en el Derecho tributario español: mientras que la "asignación tributaria para fines religiosos y otros fines de interés social" se genera, como un sistema de sustitución progresiva de la dotación estatal a la Iglesia católica en el acuerdo económico, de 1979; por el contrario, la desgravación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de los donativos, hechos a determinadas instituciones de carácter benéfico y social, incluidos los de la Iglesia católica, está presente ya, con fecha anterior al acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, en la ley de 8 de septiembre de 1978, en su artículo 29, y estuvo vigente hasta la modificación de este precepto por la referida ley 48/1985. Se trata, pues, de dos normativas paralelas, que, a nuestro juicio, no deben mezclarse en sus distintas funciones. La "asignación tributaria" tiene, hoy, la función, de financiar la Iglesia en sí misma, y no tan sólo a sus instituciones de carácter benéfico y social, que es la función, que se asignaba a la deducción de la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas, correspondientes a los donativos, hechos a instituciones declaradas de interés social de carácter filantrópico, pertenecieran o no a la Iglesia católica<sup>271</sup>. Por ello, la Iglesia tiene derecho, a reivindicar un porcentaje digno en la "asignación tributaria para fines religiosos", que, en su actual 0'5239 por ciento -y a pesar del cambio de Gobierno del 3 de marzo de 1996- es manifiestamente ridículo y difícilmente compatible con el espíritu del acuerdo económico, de 1979; afirmación, que también es extensible a cualesquiera otras instituciones religiosas con suficiente arraigo sociológico en España, con el fin de no lesionar el principio constitucional de igualdad en el plano religioso y lo dispuesto en la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980<sup>272</sup>.

Aunque la Iglesia no cuenta con todos los datos necesarios, para poder estimar con suficiente fidelidad el porcentaje necesario, parece evidente que éste tiene que ser, como

<sup>271</sup>.- Vid. PÉREZ DE AYALA, J.L., *La asignación tributaria a la Iglesia católica y sus implicaciones constitucionales. Una reflexión*, loc. cit., pp. 644-645.

<sup>272</sup>.- Vid. PÉREZ DE AYALA, J.L., *La asignación tributaria a la Iglesia católica y sus implicaciones constitucionales. Una reflexión*, loc. cit., pp. 645-646.

mínimo, el uno por ciento<sup>273</sup>. Sin embargo, aunque el Gobierno ha hecho tal ofrecimiento, exige, como contrapartida, que la Iglesia católica fije un plazo para su autofinanciación<sup>274</sup>. Y este porcentaje deberá ser actualizado todos los años, para garantizar una adecuada evolución de su rendimiento. Sin embargo, actualmente, la Iglesia no cuenta con ninguna posibilidad de verificar si el cómputo y procedimiento de las opciones se ha realizado correctamente. En la medida en que afecta de forma directa a sus intereses económicos debería establecer algún sistema que le permitiese comprobar estas tareas. La inclusión de las casillas en el ejemplar del interesado supondrá, sin duda, una mayor garantía, de que ninguna de las personas, que intervienen en el tratamiento de las declaraciones, altera, posteriormente, las opciones ejercitadas<sup>275</sup>. También se hace necesario agilizar e incrementar la información, que, actualmente, se suministra a la Iglesia. Las autoridades eclesásticas carecen, hoy, de información sobre datos, que les son imprescindibles, para realizar una campaña sobre este tema, como puede ser, por ejemplo, el desglose entre los que han señalado la casilla y otros fines, y los que no han ejercitado la opción. En ambos casos, el porcentaje se asignará al Estado, pero es evidente que la actitud de unos y otros sujetos pasivos ante el tema tiene que ser muy distinta<sup>276</sup>.

La alternativa, que ofrece el Estado, unilateralmente<sup>277</sup>, de colaborar con la Iglesia o con otros fines de interés social<sup>278</sup> no se recoge en ningún momento, en el Acuerdo. El artículo II.2

<sup>273</sup>.- En 1991 el Gobierno español y la Conferencia Episcopal española parecieron dispuestos a desbloquear las relaciones Iglesia-Estado, que estaban en esta situación desde 1985. Tal voluntad de negociación la anunció Narciso Serra poco después de sustituir en la vicepresidencia del Gobierno a Alfonso Guerra, con el cual no era muy fácil el diálogo, ni sentía un especial interés por conversar con la Iglesia católica. Para resolver problemas mutuos se nombró una comisión mixta, en donde se trataron algunos de los temas más polémicos. Una de las principales cuestiones pendientes era la económica. El Gobierno ofreció a los obispos un aumento de la "asignación tributaria" hasta el uno por ciento. A cambio la Iglesia católica debería cargar con los gastos de la asistencia religiosa en hospitales, cárceles, escuelas pías y cuarteles. Esta proposición, sin embargo, no convenció a los obispos, ya que, según sus cálculos aproximados, los nuevos gastos superarían, con creces, los siete mil millones de pesetas de más que, en ese momento, recibía la Iglesia católica con el aumento de la asignación tributaria. Los obispos, por otra parte, pidieron al Gobierno, que la campaña publicitaria sobre la parte destinada a "otros fines" de la asignación tributaria -la que reparte el Ministerio de asuntos sociales-, se haga sin agresividad hacia la Iglesia católica, pues se presentaba a la Iglesia, más o menos, como la "rival" de los pobres. Sin embargo, las dificultades, que se plantearon en las negociaciones pusieron de manifiesto, que no era solución fácil. Vid. NAVAL POTRO, J.Mª., *Intentos por reanudar el diálogo entre el Gobierno y los Obispos. La asignación tributaria podría incrementarse al uno por ciento del Impuesto de la Renta*, 316-317, Palabra (1991), p. 18. De hecho, el Director General de Asuntos Religiosos, el socialista Dionisio Llamazares manifestaba, en 1991, que "el Gobierno está dispuesto a elevar el porcentaje hasta el uno por ciento, en vez del actual 0'5 por ciento". Vid. J.M.N., *En marcha la campaña de la asignación tributaria para la Iglesia*, 314, Palabra (1991), p. 29.

<sup>274</sup>.- Vid. GARCÍA DÍAZ, E., *La Comisión mixta Iglesia-Gobierno se reunirá en junio*, 2529, Ecclesia (1991-I), p. 8.

<sup>275</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., pp. 129-130.

<sup>276</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 130.

<sup>277</sup>.- El apartado cuarto de la disposición adicional quinta de la ley 33/1987, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1988 nos dice:

"Los sujetos pasivos podrán indicar en la declaración su voluntad de que el porcentaje correspondiente a su cuota íntegra se destine:

- a) A colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia Católica.
- b) A los otros fines que establece el apartado 1 de esta disposición

En caso de que no manifiesten expresamente su voluntad en uno u otro sentido, se entenderá que opta por los fines de la letra b) ".

<sup>278</sup>.- En real decreto 825/1988, de 15 de julio, por el que se regulan los fines de interés social de la "asignación tributaria" del impuesto sobre la renta de las personas físicas -B.O.E., núm. 180, de 28 de julio- nos dice:

del acuerdo sobre asuntos económicos, simplemente decía: "En ausencia de tal declaración -por

"1.1. El objeto de este Real Decreto es regular los fines de interés social a los que puede afectarse la asignación tributaria, constituida por un porcentaje, fijado en cada Ley de Presupuestos, de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. De conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 4 de la disposición adicional quinta de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán manifestar en la declaración del impuesto su voluntad de que el porcentaje correspondiente a ese ejercicio vaya destinado a colaborar en el sostenimiento económico de la Iglesia Católica o a otros fines de interés social.

3. Cuando el sujeto pasivo no haya hecho uso de la facultad mencionada en el número anterior, se entenderá que el porcentaje correspondiente va destinado a otros fines de interés social, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4, in fine, de la disposición adicional quinta de la Ley 33/1987.

2. A los efectos previstos en el Real Decreto se consideran "otros fines de interés social" los programas de cooperación y voluntariado sociales desarrollados por la Cruz Roja Española y otras organizaciones no gubernamentales y Entidades sociales, siempre que tengan ámbito estatal y carezcan de fin de lucro, dirigidos a ancianos, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, personas incapacitadas para el trabajo o incurso en toxicomanía o drogodependencia, marginados sociales y, en general, a actividades de solidaridad social ante situaciones de necesidad.

Asimismo, tendrán la consideración de fines de interés social los programas y proyectos que las mencionadas organizaciones realicen en el campo de la cooperación internacional al desarrollo a favor de las poblaciones más necesitadas de los países subdesarrollados.

3.1. Para el cumplimiento de los fines anteriores se consignará en un concepto específico de los presupuestos de los Ministerios de Asuntos Sociales y de Asuntos Exteriores (Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica) las cantidades que corresponden para su financiación.

2. Para la distribución de los correspondientes créditos, el Gobierno, mediante Real Decreto dictado a propuesta de los Ministros de Asuntos Sociales y de Asuntos Exteriores, establecerá los requisitos que deben cumplir las organizaciones o Entidades para poder solicitar las ayudas económicas destinadas a cumplir estos fines, así como el procedimiento para la obtención de las mismas.

En todo caso, el Real Decreto de regulación de requisitos y de procedimientos de ayuda se inspirará en el principio de publicidad de la convocatoria, en los criterios objetivos para la concesión de las ayudas y en la justificación del cumplimiento de los fines sociales que correspondan a cada caso. Igualmente deberá acreditarse hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad social, de conformidad con lo previsto en las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987.

4. El importe de los ingresos afectados a los fines de interés social, de conformidad con el artículo I, apartado 2 y 3 de este Real Decreto, se determinará cada año una vez conocido el importe resultante de la opción ejercida por los contribuyentes respecto al ejercicio que corresponda, debiendo realizarse por el Ministerio de Economía y Hacienda, en caso de insuficiencia, las actuaciones precisas en orden a la habilitación de los créditos en cuantía igual a dichos ingresos.

#### DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Lo regulado en este Real Decreto se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 12/1981, de 13 de mayo, de Concierto Económico con el País Vasco, y en el Decreto-ley 16/1969, de 24 de julio, por el que se regula la aportación de Navarra al sostenimiento de las cargas de la Nación y la Armonización de su Régimen Fiscal con el del Estado.

Segunda. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta, apartado 3, de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, el porcentaje aplicable en las declaraciones correspondiente al período impositivo de 1987 será el 0,5239 por 100.

Para años sucesivos el porcentaje señalado será el que se fije en las respectivas Leyes de Presupuestos de cada ejercicio.

#### DISPOSICIÓN FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

parte del contribuyente-, la cantidad correspondiente será destinada a otra finalidad"<sup>279</sup>. En los diversos apartados del artículo 1 del real decreto 825/1988, de 15 de julio, por el que se regulan los fines de interés social de la "asignación tributaria" del impuesto sobre la renta de las personas físicas<sup>280</sup> -B.O.E., de 28 de julio- nos explica el objeto del presente real decreto:

"1. El objeto de este Real Decreto es regular los fines de interés social a los que puede afectarse la asignación tributaria, constituida por un porcentaje, fijado en cada Ley de Presupuestos, de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. De conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 4 de la disposición adicional quinta de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán manifestar en la declaración del impuesto su voluntad de que el porcentaje correspondiente a ese ejercicio vaya destinado a colaborar en el sostenimiento económico de la Iglesia Católica o a otros fines de interés social.

3. Cuando el sujeto pasivo no haya hecho uso de la facultad mencionada en el número anterior, se entenderá que el porcentaje correspondiente va destinado a otros fines de interés social, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4, *in fine*, de la disposición adicional quinta de la Ley 33/1987".

El artículo 2 del real decreto 825/1988, de 15 de julio, por el que se regulan los fines de interés social de la "asignación tributaria" del impuesto sobre la renta de las personas físicas<sup>281</sup> nos define "otros fines de interés social":

<sup>279</sup>.- Vid. GARCÍA-HERVÁS, D., *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 844.

<sup>280</sup>.- Vid. el citado real decreto reproducido en MOLINA, A., y OLMOS, M<sup>a</sup>E., *Legislación eclesiástica*, loc. cit., pp. 320-322, y en 65-66, E.F. (1988), pp. 7-8. También en XLI, B.I.L.F. (1988), pp. 305-306.

<sup>281</sup>.- El real decreto 223/1991, de 22 de febrero -B.O.E., núm. 49, de 26 de febrero, de 1991-, modifica el artículo 2 del real decreto 825/1988, de 15 de julio, relativo a los fines de interés social de la "asignación tributaria" del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como los artículos 1 y 2.b) del real decreto 195/1989, de 17 de febrero, que establecían los requisitos y procedimientos, para solicitar ayudas para dicha exención. El artículo 2 del primero de los reales decretos modificados -real decreto 825/1988, de 15 de julio-, exigía que las organizaciones no gubernamentales y entidades sociales, que desarrollasen los programas de cooperación y voluntariado social contemplados en dicho artículo, como "otros fines de interés social", deberían reunir, en todo caso, el requisito de ser de ámbito estatal. Consiguientemente, con esta norma, el segundo real decreto, modificado en sus artículos 1 y 2.b -el mencionado real decreto 195/1989, de 17 de febrero- exigía a las organizaciones o entidades, solicitantes de las ayudas económicas o subvenciones para fines de interés social, el tener ámbito estatal de actuación, según su título constitutivo, cuando soliciten dichas ayudas para la realización de programas, a desarrollar dentro del territorio nacional. El real decreto 223/1991, de 22 de febrero, modificador de los anteriores, flexibiliza el mencionado requisito, de forma que, junto al criterio relativo al ámbito estatal de las organizaciones o entidades solicitantes, que sigue manteniendo su validez, como criterio más genearlizado, se posibilite la concurrencia a la convocatoria a otras entidades, que propongan proyectos, que convengan atender por su directa relación con programas, definidos, como de interés general, en la convocatoria anual del Ministerio de Asuntos Sociales. Vid. AA.VV., *Legislación del Estado español. Asignación tributaria*, VIII, A.D.E.E. (1992), pl 355.

El real decreto 195/1989, de 17 de febrero de 1989 -B.O.E., de 25 de febrero-, establece los requisitos y procedimientos de solicitud de ayudas para fines de interés social, derivadas de la "asignación tributaria" en sus primeros artículos, nos dice:

- "Artículo 1.º Los Ministerios de Asuntos Sociales y Asuntos Exteriores podrán conceder con cargo a los créditos específicos consignados en sus presupuestos de conformidad a lo establecido en los artículos tercero y cuarto del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, ayudas y subvenciones para promover y ejecutar programas de cooperación y voluntariado sociales a la Cruz Roja

Española y a otras Organizaciones no gubernamentales y Entidades sociales de ámbito estatal o que realicen sus actividades en países en vías de desarrollo que reúnan los requisitos previstos en el presente Real Decreto, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el mismo.

- Artículo 2.º Para poder solicitar las ayudas económicas y subvenciones a que refiere el artículo anterior, las Organizaciones o Entidades deberán cumplir los siguientes requisitos:

- a) Estar legalmente constituidas.
- b) Tener ámbito estatal de actuación según su título constitutivo, o realizar sus actividades en países en vías de desarrollo.
- c) Carecer de fines de lucro. A estos efectos, se considerarán también Entidades sin fines de lucro aquellas que desarrollen actividades de carácter comercial, siempre que los beneficios resultantes de las mismas se inviertan en su totalidad en los fines sociales previstos en el artículo 3.º del presente Real Decreto.
- d) Tener como fines institucionales primordiales la realización de las actividades enumeradas en el artículo 3.º del presente Real Decreto.
- e) Acreditar que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987.
- f) Haber justificado, en su caso, suficientemente, las inversiones de las ayudas económicas recibidas para el cumplimiento de fines sociales.
- g) Disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.

- Artículo 3.º Las ayudas económicas y subvenciones podrán concederse para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales de ámbito estatal dirigido a ancianos, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, personas incapacitadas para el trabajo o incurso en toxicomanías o drogodependencias, familias monoparentales, menores en situación de desamparo, mujeres maltratadas, minorías étnicas, presos, exreclusos, transeúntes y demás actividades de solidaridad social ante situaciones de necesidad.

Asimismo podrán concederse ayudas y subvenciones para la realización de programas y proyectos que las Organizaciones no gubernamentales lleven a cabo en países en vías de desarrollo, que favorezcan la justicia social y la mejora de las condiciones de vida de la población".

El real decreto 223/1991, de 22 de febrero, por el que se modifica el artículo 2.º del real decreto 825/1988, de 15 de julio, que regula los fines de interés social de la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y los artículos 1.º y 2.º b), del real decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar ayudas para dicha asignación -B.O.E., núm. 49, de 26 de febrero-, modifica el artículo 2 del real decreto 825/1988, de 15 de julio, en los siguientes términos:

"A los efectos previstos en este Real Decreto se considerarán "otros fines de interés social" los programas de cooperación y voluntariado sociales desarrollados por la Cruz Roja Española y otras Organizaciones no gubernamentales y Entidades sociales sin fines de lucro, dirigidos a ancianos, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, personas incapacitadas para el trabajo o incurso en toxicomanía o drogodependencia, marginados sociales y en general a actividades de solidaridad social, para cubrir necesidades sociales de interés general.

Asimismo, tendrán la consideración de fines de interés social los programas y proyectos que las mencionadas Organizaciones realicen en el campo de la cooperación internacional al desarrollo en favor de las poblaciones más necesitadas de los países subdesarrollados".

Este real decreto 223/1991, de 22 de febrero, modifica también los artículos 1 y 2.b) del real decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se establecen los requisitos y procedimientos, para solicitar ayudas para fines de interés social de la "asignación tributaria" sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas:

- "Artículo 1.º Los Ministerios de Asuntos Sociales y Asuntos Exteriores podrán conceder con cargo a los créditos específicos consignados en sus presupuestos de conformidad a lo establecido en los artículos 3.º y 4.º del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, ayudas y subvenciones, para promover y ejecutar programas de cooperación y voluntariado sociales, a la Cruz Roja Española y

"A los efectos previstos en este Real Decreto se considerarán "otros fines de interés social" los programas de cooperación y voluntariado sociales desarrollados por la Cruz Roja Española y otras organizaciones no gubernamentales y Entidades sociales, dirigidos a ancianos, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, personas incapacitadas para el trabajo o incurso en toxicomanía o drogodependencia, marginados sociales y, en general, a actividades de solidaridad social ante situaciones de necesidad.

Asimismo, tendrán la consideración de fines de interés social los programas y proyectos que las mencionadas organizaciones realicen en el campo de la cooperación internacional al desarrollo en favor de las poblaciones más necesitadas de los países subdesarrollados".

La equiparación entre fines religiosos y fines de interés social ha dado lugar a problemas distintos del de la legitimación, para efectuar propaganda. El ejemplo más evidente es el de *Caritas*. Esta institución, dependiente de la jerarquía eclesiástica, recibió una determinada cantidad, asignada no a la Iglesia católica, sino a "otros fines de interés social". Caritas presentó una protesta por haber recibido una cantidad, a su juicio, exigua, si se la comparaba con las cantidades recibidas por otras organizaciones no gubernamentales más afines -decía el portavoz- al partido en el Gobierno. También mostraba su desacuerdo con el criterio, según el cual la cantidad recibida debía ser menor, ya que se trataba de una institución católica, y a la Iglesia católica ya le había sido asignada una determinada cantidad<sup>282</sup>.

PÉREZ LUQUE ha mostrado su preocupación de qué pueda considerarse otros fines de interés social. En realidad, esta incertidumbre motivará a muchos ciudadanos, aun no católicos, a optar por la asignación a la Iglesia, cuyos fines son bien conocidos. Es más, podría ocurrir que la distribución de estos fondos, para fines sociales, se efectuase con criterios no sociales, sino políticos, económicos, etcétera, debido a la escasa posibilidad de acción, que queda a los ciudadanos, por lo que sería preciso controlarlos de algún modo. Pero lo cierto es que el ciudadano español está poco interesado, preparado y posibilitado para este tipo de controles, y el gasto público queda incontrolado, aunque el contribuyente es perseguido de cerca a la hora de pagar sus impuestos. Quizá haría falta en el impreso un código, que permita elegir entre los distintos fines posibles, sin perjuicio de una denominación final, dedicada a "otros no especificados"<sup>283</sup>.

La Conferencia Episcopal española ha mostrado, de forma reiterada, su disconformidad, entre otras razones, por parecer que la Iglesia está compitiendo con los destinatarios de la actividad social, que podría recibir la correspondiente financiación del Estado: ancianos, minusválidos, disminuidos psíquicos, incapacitados, etcétera<sup>284</sup>. La alternativa más razonable

---

otras Organizaciones no Gubernamentales y Entidades Sociales que realicen sus actividades en territorio nacional, o en países en vía de desarrollo, y que reúnan los requisitos previstos en el presente Real Decreto, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el mismo".

- "Artículo 2.ºb) Tener ámbito estatal de actuación según su título constitutivo, que les habilite para desarrollar programas de carácter estatal, o realizar sus actividades en países en vías de desarrollo. También podrán concurrir otras Organizaciones o Entidades que propongan proyectos, a ejecutar en sus respectivos ámbitos territoriales, relacionados directamente con programas definidos como de interés general en la convocatoria anual". Real Decreto, que está reproducido en 10, B.O.M.E.H. (1991), pp. 2145-2147.

<sup>282</sup>.- Vid. GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M., *El Estado y la financiación de las confesiones*, loc. cit., p. 130.

<sup>283</sup>.- Vid. PÉREZ LUQUE, M., *Impuesto sobre la Renta y la asignación tributaria a la Iglesia*, loc. cit., p. 124.

<sup>284</sup>.- Vid. GARCÍA-HERVÁS, D., *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, loc. cit. p. 844.

sería, que lo no asignado de modo expreso a la Iglesia católica, fuera designado a los restantes capítulos de los presupuestos generales del Estado, sin más especificaciones. Esta especificación permitiría interpretar el artículo II.2 del acuerdo económico de una forma más favorable para la Iglesia, pues se respetaría el tenor literal del precepto -que "cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración respectiva su voluntad acerca del destino de la parte afectada"-, suprimiendo la alternativa entre "fin de la Iglesia católica" y "fines de interés social". De esta manera, en el supuesto de que la correspondiente casilla quedara en blanco, ese 0'5239 por ciento engrosaría, sin más, las restantes partidas de los presupuestos generales del Estado. No podría, según el modelo propuesto, darse, en puridad, la abstención, por lo que quedaría, en la práctica, sin aplicación lo que prevé el último párrafo del artículo II.2 del acuerdo económico: 'En ausencia de tal declaración, la cantidad correspondiente será destinada a otra finalidad'. De este modo, cabrían dos posturas:

- a) o señalar la cuadrícula, que indica la voluntad, de destinar ese porcentaje a la Iglesia católica;
- b) o no señalarla, lo cual debe ser interpretado, no como ausencia de declaración, sino como voluntad, de que ese porcentaje pase, a engrosar las demás partidas de los presupuestos generales del Estado.

Esta exégesis del precepto es del todo respetuosa, tanto con la *literalidad* del acuerdo sobre asuntos económicos, como con el *espíritu* que lo informa. Se evitaría, así, el perjuicio, que se deriva para la Iglesia en el supuesto de abstención por parte del contribuyente, con la solución incluso más equitativa, que la propuesta por el sistema italiano, en el supuesto de que no se consigue ninguna opción, en cuyo caso se procederá, según la normativa italiana, a un reparto proporcional, según las opciones expresadas. La medida propuesta, además de resultar más justa, no exigiría modificación alguna del acuerdo, lo cual sí sería necesario en el caso de pretender trasladar a nuestro sistema la solución italiana, como propugnan algunos eclesiasticistas<sup>285</sup>.

Pero este porcentaje plantea problemas de constitucionalidad. Efectivamente, la cooperación del 0'5239 por ciento de la cuota líquida se destina, a elección del contribuyente, bien a la Iglesia católica o bien a otros fines de interés social. Aquí nos encontramos, según GARCÍA MORILLO, con la paradoja de que el importe total de la cuota líquida que el contribuyente debe satisfacer al Estado, para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de conformidad con lo ordenado por el artículo 31.1 de la Constitución española, una parte se destina, o puede destinarse a una confesión religiosa. Sin embargo, esa cuota se detrae legítimamente para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, y no para otros fines. Máxime, cuando la elusión del deber de satisfacer las cuotas, pueden dar lugar a una severa respuesta de los poderes públicos, manifestada en una sanción administrativa, o, incluso, en una condena penal. Ahora bien, la legitimidad de la exacción de la cuota, y de las respuestas jurídicas en caso de incumplimiento de la obligación tributaria, viene determinada, precisamente, por la preordenación de las cantidades, así obtenidas, al mantenimiento de los gastos públicos. Pero es manifiesto que la asignación de la Iglesia católica no lo es. Cabe, pues, preguntarse por la admisibilidad constitucional de ese mecanismo, toda vez que una cantidad detraída para un determinado fin, el único que, constitucionalmente, autoriza la exacción, se destina a otro fin diferente, cuyo carácter público es notorio. Más problemas puede plantear el sistema de cálculo que se utiliza: ¿es aquí aplicable el principio de progresividad también

<sup>285</sup>.- Vid. GARCÍA-HERVÁS, D., *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, loc. cit. pp. 845-846.

consagrado en el artículo 31.1 de la Constitución? ¿Debe cotizar progresivamente más, el que tiene grandes ingresos, que el que tiene en menor cantidad? ¿Es aceptable que, quien sobrepase un determinado límite de ingresos, destine más de la mitad de tales ingresos, a engrosar una cuota que, en definitiva, irá en parte a la Iglesia católica? Y, sobre todo, ¿es constitucionalmente, admisible que el Estado fije la cuota, que hay que satisfacer, a la jerarquía de la Iglesia, sea esta cuota la que sea? ¿Es que, los que no perciben suficientes ingresos, para declarar, por no alcanzar el mínimo, no tienen la posibilidad de destinar ese 0'5239 por ciento?<sup>286</sup> Lo cierto es que el sistema adolece de una excesiva rigidez, porque no permite, que el contribuyente, sobre todo los que hayan, de satisfacer cuotas líquidas elevadas, pueda asignar a la Iglesia católica *parte*, pero solo parte, de ese 0'5239 por ciento, y cabe dudar de la licitud, de obligarle a esa difícil elección entre el todo o la nada<sup>287</sup>. La desviación -legalmente prevista- para la satisfacción de fines religiosos de cantidades que, *ex* artículo 31.1 de la Constitución, sólo pueden detraerse para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, plantea algunos interrogantes. Porque debe descartarse que el mantenimiento de la Iglesia católica pueda considerarse como gasto público, en base al inciso inicial del artículo 16.2 de la Constitución respecto de la aconfesionalidad estatal. Incluso la aplicación al sostenimiento de la Iglesia católica de principios -capacidad contributiva, igualdad, progresividad, y, sobre todo, coercitividad, y responsabilidad- del derecho tributario, recogidos en la Constitución, para determinar los criterios de reparto de la necesidad, de sostener las cargas públicas, resulta aún de más dudosa pertinencia. El panorama se complica, todavía más, en caso de declaración conjunta, pues es posible que exista discrepancia sobre el destino, entre los cónyuges, que tributan conjuntamente<sup>288</sup>. Con el nuevo impreso de la declaración de la renta se facilita la declaración por separado de los cónyuges, de tal manera que éstos puedan expresar, individualmente, su opción por la Iglesia católica u otros fines, pero, por problemas técnicos, no es aconsejable que ésta se haga en hoja aparte, en palabras de Luis María de Zavala, Director General de Asuntos Religiosos<sup>289</sup>. Pero tras este planteamiento, quizá sea interesante conocer el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana, en su sentencia de 22 de abril de 1990, que resuelve sobre un recurso presentado por unos fieles de la Iglesia bautista evangélica, al efectuar la declaración de renta, correspondiente al ejercicio de 1988; en el mismo se expone su negativa, a cumplimentar la casilla, correspondiente al porcentaje, a entregar a la Iglesia católica, o a destinar a otros fines de interés social, y, por ello, presentan un recurso contencioso-administrativo por la vía de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, por entender que se infringen los derechos fundamentales de igualdad y de no necesidad de declarar la condición o creencia religiosa, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución, pues tal posibilidad no se le otorga, en los mismos términos, a la Iglesia bautista evangélica de Valencia. Además -y este es el aspecto que ahora analizaremos-, manifiestan que, al rellenar la casilla, obligatoriamente se les costra a declarar sobre sus creencias religiosas. La Administración demandada, por el contrario, sostiene que, en realiadd, lo que se plantea no es sino la aplicación del artículo 31.1 de la Constitución, en cuanto establece el deber e todos, de sostener las cargas públicas, de acuerdo con un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Los argumentos, defendidos por la Administración, se recogen en el fundamento jurídico segundo:

<sup>286</sup>.- Vid. GARCÍA MORILLO, J., *Constitución, Estado e Iglesia católica...*, loc. cit., pp. 27-28.

<sup>287</sup>.- Vid. GARCÍA MORILLO, J., *Constitución, Estado e Iglesia católica...*, loc. cit., p. 28.

<sup>288</sup>.- Vid. GARCÍA MORILLO, J., *Constitución, Estado e Iglesia católica...*, loc. cit., p. 28.

<sup>289</sup>.- Vid. GARCÍA DÍAZ, E., *Acuerdo Iglesia-Gobierno sobre la asignación tributaria*, 2495, *Ecclesia* (1990-II), p. 8.

"De un lado por la Administración demandada se sostiene que en realidad lo que se ventila en el presente recurso no es sino la aplicación del artículo 31.1 de la Constitución, en cuanto establece el deber de todos de sostener las cargas públicas de acuerdo con un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad.

No es esta la cuestión que plantea la actora, sino antes al contrario la violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución, si bien, como reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional vienen estableciendo es indudable la conexión entre el artículo 14 y el 31.1, puesto que en ambos se garantiza el principio de igualdad, siendo el último mera proyección del primero en materia fiscal.

Por otra parte el Ministerio Fiscal parece sostener que en realidad lo que se cuestiona es la Ley del Impuesto sobre la Renta y que por tanto no sería esta Sala competente para conocer del presente recurso. En realidad lo que se cuestiona es un acto de aplicación de dicha Ley, para el que sí tiene competencia esta Sala, sin perjuicio de que de obtener un juicio que pudiera ser en su caso positivo sobre la pretensión de la actora se viera obligada a plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley impugnada"<sup>290</sup>.

En el caso de que la declaración sea obligatoria, pero resulte negativa, el contribuyente deberá marcar también la casilla correspondiente, si desea apoyar económicamente a la Iglesia, pues Hacienda le ha retenido ya una cantidad que no va a devolverle, de la cual el 0'5239% se asignará a la Iglesia católica<sup>291</sup>.

El mayor problema que plantea el 0'5239 por ciento es que, cuando se destina a "otros fines de interés social", realmente se entrega al sostenimiento de los gastos públicos, en la medida en que los fines de interés social lo son, beneficiándose la totalidad -católicos, inclusive- de los ciudadanos; además, la distribución de los recursos, obtenidos para tales fines, la realiza el gobierno -democráticamente legitimado, y, como actuación administrativa que es, está sujeta a revisión jurisdiccional-. No acontece, sin embargo, lo mismo con el porcentaje destinado a la Iglesia católica, siendo la jerarquía católica, la que aplica los recursos, así obtenidos, a las finalidades, que estime convenientes. Puede, por tanto, distribuirlos, como desee, y sin control alguno. De entre esos fines, los habrá, no cabe dudarlo, que sean de interés social, pero otros serán destinados, específicamente, para los católicos, e, incluso para el reducido círculo de la jerarquía católica, dando lugar a una clara desigualdad, ya que los contribuyentes, que no asignan su porcentaje a la Iglesia católica, contribuyen al sostenimiento de los fines sociales -de "los gastos públicos"- en mayor medida que quienes destinan tal porcentaje a la Iglesia católica. Imaginemos dos contribuyentes con igual cuota; supongamos que uno asigna su 0'5239 por ciento a la Iglesia católica y otro no; este último destina la totalidad de su cuota, incluido el 0'5239 por ciento de ella, a fines de interés social, en tanto que el primero destina a la satisfacción de tales fines no todas su cuota, sino sólo el resultado de restar de ésta el 0'5239 por ciento. Éste contribuye, en definitiva, menos que aquél, aún estando en igualdad de condiciones. Hay, pues, una diferencia de trato tributario, o, en igualdad de condiciones, una diferente tributación al sostenimiento de gastos públicos. Además, la causa, que provoca la diferencia de trato, de religión, es una de las expresamente mencionadas en el

<sup>290</sup>.- Esta trascendental sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana, de 22 de abril de 1990, para el estudio del tema, que tratamos, está reproducida, íntegramente, en 89-90, E.F. (1990), pp. 35-36, y en el n.º 92, E.F. (1990), pp. 39-40; 113, R.A.T (1990), pp. 177-179.

<sup>291</sup>.- Vid. GARCÍA DÍAZ, E., *Acuerdo Iglesia-Gobierno sobre la asignación tributaria*, 2495, Ecclesia (1990-II), p. 9.

artículo 14 de la Constitución, como no susceptible de provocar discriminación. Cabe pensar, pues que nos hallamos ante un supuesto de discriminación por razones religiosas. Máxime cuando la sentencia del Tribunal Constitucional 340/1993, de 16 de noviembre -B.O.E., núm. 295, de 10 de diciembre de 1993-<sup>292</sup>, dictada en cuestión de inconstitucionalidad, señala, expresamente, que "las confesiones religiosas en ningún caso puede trascender los fines que les son propios y ser equiparadas al Estado, ocupando una igual posición jurídica" ¿No se está equiparando a una confesión religiosa con el Estado, cuando se previene que una parte de los impuestos, a pagar, irá destinada, o bien al Estado o a una confesión religiosa? ¿No confiere a ambos el sistema vigente una igual posición jurídica? ¿No supone ello lo que el Tribunal Constitucional ha calificado, como una confusión, vedada por el artículo 16.3 de la Constitución, entre funciones religiosas y funciones estatales? ¿Qué mayor confusión cabe, que tener que elegir entre unas y otras, que es lo que, en definitiva, se hace, cuando se decide, destinar nuestra aportación a la Iglesia católica, o a otros fines sociales?<sup>293</sup> Muy distinto sería, ciertamente, si el sistema seguido en España fuera el alemán, donde rige el sistema "quien pertenece a una confesión religiosa, paga". En Alemania también se aprovecha la declaración y tributación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, para canalizar hacia las distintas iglesias recursos económicos, procedentes de los fieles. La distinción entre el sistema alemán y español radica en que en España la disposición de un porcentaje, que es fijo, es obligatoria, y se detrae de la cuota a satisfacer; en Alemania, por el contrario, lo que se aporta es adicional, y, por tanto, sólo se requiere la cantidad adicional, a quienes pertenecen a una confesión religiosa. Las diferencias para el respeto del principio de igualdad son, pues, radicales; mientras en España la detracción de la cuota líquida en la cantidad destinada a la Iglesia católica implica una diferente aportación al sostenimiento de los gastos públicos, en Alemania la aportación es, en todo caso, igual, la que procede según el cálculo del impuesto; y los que quieran, y sólo ellos, aportan, además, una cantidad destinada a la confesión, a la que pertenecen. La aportación religiosa no tiene, pues, efecto alguno sobre el tributo a satisfacer, que permanece igual, y el Estado se limita a actuar de mero recolector, más que recaudador<sup>294</sup>.

El apartado quinto de la disposición adicional quinta de la ley 33/1987, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, para 1988, nos dice:

"Durante el período de tres años a que se refiere el párrafo segundo del apartado 4 del artículo II del Acuerdo citado con la Santa Sede, la dotación presupuestaria a la Iglesia Católica se minorará en la cuantía de la asignación tributaria que aquélla reciba en virtud de lo previsto en esta disposición. La minoración se efectuará con cargo al rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en cada ejercicio.

Los recursos percibidos en virtud de este sistema por la Iglesia Católica durante 1988, 1989 y 1990 no serán inferiores a la dotación presupuestaria recibida en 1987, actualizada anualmente".

Este sistema no se trata de un impuesto al ciudadano, sino que solamente es un criterio distinto, al asignar una dotación. al ciudadano no se le impone nada nuevo, simplemente, se le da una opción. Con ello lo que se pretende es crear una nueva mentalidad en el ciudadano<sup>295</sup>.

<sup>292</sup>.- Esta sentencia, de importancia trascendental, declara la inconstitucionalidad del artículo 76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de 1964, respecto a la mención expresa de la "Iglesia Católica".

<sup>293</sup>.- Vid. GARCÍA MORILLO, J., *Constitución, Estado e Iglesia católica...*, loc. cit., pp. 28-29.

<sup>294</sup>.- Vid. GARCÍA MORILLO, J., *Constitución, Estado e Iglesia católica...*, loc. cit., p. 29.

<sup>295</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 322-323.

Con el sistema de asignación, ningún español queda gravado, fiscalmente, en una peseta más. Lo que se hace, es entregar a la Iglesia católica determinado porcentaje de la tributación sobre la renta, si así lo pide el contribuyente singular en su declaración. Por eso es impropia la designación de "impuesto religioso", siendo más exacta la de "asignación tributaria" a la Iglesia católica<sup>296</sup>. Efectivamente, la "asignación tributaria" no grava en una peseta más al contribuyente español; por esta razón, no cabe hablar como "impuesto religioso", sino de "asignación tributaria". Bien desearían determinados sectores de contribuyentes, que se aplicara esta técnica tributaria de asignación en campos fiscales, como, por ejemplo, los de gastos militares y defensa, entre otros<sup>297</sup>. Ello conlleva que no se pueda, calificar a la "asignación tributaria" como "impuesto religioso", sino que no es más que la afectación de parte de la recaudación de un "impuesto estatal" a la financiación de un determinado gasto público<sup>298</sup>. En España la implantación del "impuesto religioso" no es posible por anticonstitucional. En efecto, el fundamento de la intervención del Estado en la financiación de la Iglesia no es estrictamente jurídico, no es constitucional, sino pacticio. Amén, de que se vulneraría el principio constitucional de igualdad contributiva<sup>299</sup>. PANIZO Y ROMO DE ARCE no le atribuye a la "asignación tributaria" a favor de la Iglesia el carácter de "impuesto religioso", porque carece de dos elementos sustanciales a todo impuesto: el hecho imponible y la cuota. El hecho imponible viene definido en el artículo 28 de la ley general presupuestaria como el "Presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria". En la asignación el hecho imponible no es la práctica o pertenencia a la religión católica, sino la adquisición de una renta, o la tenencia de un patrimonio, u otra circunstancia, de las que se fijen, como base en el supuesto, de que la asignación se refiriese a una figura impositiva de carácter personal, que no fuera la renta o el patrimonio, de tal forma que, al no haber hecho imponible, no se generará obligación tributaria alguna, que lleve implícita una cuota impositiva. Por el contrario, un verdadero "impuesto religioso" consiste en la obligación, a cargo de los miembros de una confesión religiosa, de satisfacer una cuota obligatoria, que, generalmente, es gestionada por la administración fiscal, y, cuya cuantía va destinada al a financiación de las iglesias, de que se trate. El "impuesto religioso" se articula en función de los siguientes elementos: el hecho imponible está integrado por la adscripción a una de las confesiones, que, según la legislación tributaria, llevan implícita la afectación al pago de la deuda fiscal. La base del tributo coincide con alguna de las bases propias de tributos estatales, normalmente, de naturaleza personal. Son sujetos pasivos aquéllos, que pertenecen a la religión, o religiones, financiadas en base al "impuesto eclesiástico". El tipo de gravamen se aplicará a la cuota, resultante de alguna categoría impositiva del Estado. La cuota será la suma, que ha de satisfacer el sujeto pasivo, para que la Administración destine su importe a la Iglesia respectiva<sup>300</sup>.

LLAMAZARES FERNÁNDEZ tampoco lo califica de "impuesto religioso", sino de un auténtico "impuesto estatal", que han de pagar, obligatoriamente, todos los ciudadanos

<sup>296</sup>.- Vid. HIGUERA, G., *La asignación tributaria a la Iglesia católica*, loc. cit., p. 104.

<sup>297</sup>.- Vid. HIGUERA, G., *¿Impuesto religioso o asignación tributaria? Pequeñas aclaraciones*, loc. cit., p. 564.

<sup>298</sup>.- Vid. PÉREZ DE AYALA, J.L., *La asignación tributaria a la Iglesia católica y sus implicaciones constitucionales. Una reflexión*, loc. cit., p. 639.

<sup>299</sup>.- Vid. GARCÍA-HERVÁS, D., *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, loc. cit. p. 852. COMÍN, al estudiar -en 1979- el sistema económico de la Iglesia, considera que se trataría de un "impuesto religioso", que cuestiona, a su vez, el principio de libertad religiosa, y, sobre todo, la declaración constitucional de que "nadie podrá ser obligado a declarar su ideología, religión o creencias". Vid. COMÍN, A., *¿Hacia una Iglesia protegida?*, 45, P.M. (1979), p. 322.

<sup>300</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, loc. cit., pp. 183-184.

-creyentes y no creyentes-, y el Estado garantiza el cumplimiento mediante la coactividad<sup>301</sup>. En este mismo sentido, PÉREZ LUQUE tampoco califica la "asignación tributaria" como "impuesto religioso", precisamente por tratarse de una simple participación en otro, que ya existía, cual es el impuesto sobre la renta de las personas físicas<sup>302</sup>. PÉREZ DE AYALA tampoco califica a la "asignación tributaria", como "impuesto religioso", por múltiples razones:

- a) No lo es por razón del ente impositor, que no es la Iglesia, sino el Estado. La "asignación tributaria" no entraña, como bien se ha dicho, ningún nuevo impuesto para los contribuyentes, que por ella opten. A consecuencia de la "asignación tributaria", no se establece entre el contribuyente, de una parte, y el Estado o la Iglesia de la otra, ninguna relación jurídica tributaria distinta, de la que ya existía por el "impuesto estatal" sobre la renta de las personas físicas. Ni tampoco implica la "asignación tributaria" a la Iglesia ningún pago adicional, para quien opta por ella, puesto que la asignación lo es de una parte de la cuota del impuesto sobre la renta, que, en todo caso, ha de pagarse al Estado, tanto si se opta, como si no se opta por la asignación.
- b) Tampoco es la "asignación tributaria" ningún "impuesto religioso", porque, para que exista este último, ha de tipificarse la pertenencia a una determinada Iglesia -en nuestro caso, la católica-, como hecho imponible, generador de la obligación de tributar. En el caso español, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el "impuesto religioso" alemán, el hecho imponible, que hace nacer la obligación, de pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas -del que la "asignación tributaria" a la Iglesia católica es una parte-, es la obtención de una renta. Más aún, la pertenencia a la Iglesia católica no es, ni siquiera, un presupuesto legal de la asignación. Éste se genera sólo por la manifestación de voluntad, tanto si se es católico, como si no se es. Y, desde luego, se puede renunciar a ella por simple silencio, aunque se sea católico. Ningún vínculo jurídico-tributario se establece, pues, entre el pago de la asignación y la pertenencia a la Iglesia católica del contribuyente, que la financia.
- c) En realidad, y como antes señalábamos, toda la doctrina tributaria está en el perfecto acuerdo, de que la naturaleza jurídico-fiscal de la "asignación tributaria a fines religiosos" no es más que la afectación de una pequeña parte de la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a financiar un determinado gasto público<sup>303</sup>.

HERRÁEZ RUBIO considera que contraponer el sostenimiento económico de la Iglesia con el destino para otros fines sociales, puede perjudicar la imagen de la Iglesia. De hecho, tal opción no se ajusta a los términos literales del artículo II.2 del acuerdo económico de 1979, que dispone sólo que, cuando el contribuyente no opte a favor de la Iglesia, la cantidad correspondiente se destine a otros fines. Por todo ello, deberían modificarse los rótulos de los recuadros de las declaraciones, consignando como alternativa a la colaboración al sostenimiento económico de la Iglesia, simplemente, otros fines estatales, con lo cual, además, se permitiría mayor flexibilidad en la utilización de los recursos correspondientes al Estado. Incluso la Iglesia

<sup>301</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas: fundamentos, alcances y límites*, loc. cit., p. 81.

<sup>302</sup>.- Vid. PÉREZ LUQUE, M., *Impuesto sobre la Renta y la asignación tributaria a la Iglesia*, loc. cit., p. 120.

<sup>303</sup>.- Vid. PÉREZ DE AYALA, J.L., *La asignación tributaria a la Iglesia católica y sus implicaciones constitucionales. Una reflexión*, loc. cit., pp. 639-640.

-en palabras de Mons. HERRÁEZ RUBIO- no tendría inconveniente en que, junto a estas casillas, figurase otra u otras, para que los sujetos pudiesen optar, por asignar el porcentaje correspondiente, a otras religiones. Además, las casillas destinadas, a recoger la opción de los sujetos pasivos, no figura en el ejemplar de la declaración para el interesado, con lo que a éste no le queda constancia de la opción, que ha ejecutado. Ello supone un factor grave de inseguridad respecto al control de las opciones y disminuye la conciencia del sujeto pasivo sobre la conducta, que ha seguido, con lo que será más difícil, que reaccione ante campañas de la Iglesia, destinadas a influir sobre los fieles en este tema. Parece que la razón para no incluir las casillas en este ejemplar, es la de preservar la confidencialidad de la opción ejercitada en el caso de que deba hacerse uso de las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas para otros usos. Este problema, sin embargo, desaparecería si se prohibiese la utilización de las declaraciones para cualquier fin distinto al puramente fiscal, que sería el único procedimiento, de que el secreto de las mismas, quedaría totalmente garantizado. Pero si no se adopta esta medida, la solución tendría que estar en la inclusión de las opciones en todos los ejemplares, pero en una hoja independiente o en otra de la que se pudiera prescindir, cuando se requiera la declaración para otra finalidad. Tendría, asimismo, que derogarse el real decreto de 15 de julio de 1988<sup>304</sup>.

Lo que parece ser un acierto es que no sea la Iglesia católica la que organice el sistema de gestión -más bien de recaudación- para el 0'5239 por ciento de la cuota líquida del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la medida en que el costo de tal sistema resultaría, por más que se atendiera a garantizar la eficacia y reducción del gasto, elevadísima; obteniendo, con el sistema vigente, mayores ingresos<sup>305</sup>.

Finalmente, hay autores que consideran la "asignación tributaria para fines religiosos", como un precedente de la objeción fiscal<sup>306</sup>. Cuestión ésta de la objeción fiscal, que tampoco

<sup>304</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., pp. 127-128.

<sup>305</sup>.- Vid. GARCÍA MORILLO, J., *Constitución, Estado e Iglesia Católica...*, loc. cit., p. 27.

<sup>306</sup>.- Efectivamente, para DALMAU LLISO, la objeción fiscal, entendida como "una modalidad de resistencia fiscal motivada por la disconformidad por parte de algunos ciudadanos ante determinadas pautas de distribución del gasto público estatal", porque "el contribuyente-usuario cuestiona la necesidad o el alcance de algunas actividades comprendidas por el Estado", -en el caso de la defensa nacional, por ejemplo-, aunque ésta no es la única función, en que se podría plasmar tal disconformidad ciudadana, sino que existen otros supuestos, en los cuales se pueden dar unas características similares a las aquí tratadas, como es el caso de la financiación de los gastos religiosos. Efectivamente -añade-, en ambos supuestos, la conciencia individual adquiere una gran importancia a la hora de la posible revelación de preferencias por parte de los ciudadanos-votantes-contribuyentes. Vid. DALMAU LLISO, J.C., *La objeción fiscal: una cuestión de preferencias*, 17, R.V.H.P. (1992), p. 166. Por ello, para DALMAU LLISO, "[...] si bien con connotaciones diferentes, la objeción fiscal aquí defendida tiene en España y otros países europeos, desde no hace muchos años, un precedente: el caso de la asignación tributaria para fines religiosos". Vid. DALMAU LLISO, J.C., *La objeción fiscal: una cuestión de preferencias*, loc. cit., p. 180. De este mismo autor, también es interesante DALMAU LLISO, J.C., *La legislación de la objeción fiscal: un asunto pendiente*, XLIV, 234, R.D.F.H.P. (1994), pp. 1197-1213. La objeción fiscal "carece de cualquier fundamentación jurídica y vulnera directamente nuestra Constitución". Vid. CARRERA RAYA, F.J., *A propósito de la "objeción fiscal"*, 5, T.F. (1991), p. 70.

Entre la jurisprudencia sobre la objeción fiscal cabe citar la siguiente: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana, de 25 de mayo, de 1989. Vid. comentada y reproducida en 110, R.A.T. (1989), pp. 608-610; y en 69, G.F. (1989), pp. 125-127. También se manifiesta en idénticos términos la sentencia de la Audiencia Territorial de Zaragoza, de 9 de enero de 1988, en 54, G.F. (1988), pp. 62-64. También la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 9 de junio, de 1994, en II, J.T. (1994), pp. 253-254.

Un estudio, bastante interesante, de la objeción fiscal en el auto del Tribunal Constitucional, de 1 de marzo, de 1993 -que, junto a la providencia de 28 de junio, de 1990, constituye doctrina reiterada-, puede consultarse en ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, J., *La objeción de conciencia fiscal: a propósito del auto del Tribunal Constitucional de 1 de marzo de 1993*, 68, Cr.T. (1993), pp. 95-195. En el auto del Tribunal Constitucional, de 1 de marzo, de 1993, se planteó el siguiente supuesto: un contribuyente, en la autoliquidación, que presentó por el impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio de 1986, se dedujo en la cuota la

tiene "soluciones" en el *Derecho comparado*<sup>307</sup>. Aunque tal afirmación no debe llevarnos, a

parte, que estimó, que correspondía a los gastos de armamento en los presupuestos generales del Estado, para el año 1986. Posteriormente, la Administración practicó una nueva liquidación, rectificando la autoliquidación presentada, en el sentido de no estimar la objeción de conciencia fiscal. El mencionado contribuyente interpuso recurso de reposición contra dicho acto, que fue desestimado por acuerdo de la Dependencia de Gestión Tributaria, de 12 de mayo, de 1988, y, posteriormente, reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Barcelona, que también fue desestimada por resolución de 7 de febrero, de 1989. Contra ésta se interpuso recurso contencioso-administrativo, alegando, nuevamente, en apoyo de su pretensión, la objeción de conciencia, en sentido de entender deducible la parte proporcional correspondiente a los gastos, que los presupuestos generales del Estado destinaban a armamento. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -sentencia de 29 de mayo, de 1992- desestimó el recurso fundamentándose en el artículo 31.1 de la Constitución española, de 1978, en el sentido de que "no cabe oponerse a contribuir a los gastos público, incluidos los de defensa, por cuanto corresponde a los partidos políticos con representación parlamentaria decidir en la aprobación anual del presupuesto las atenciones que deberán ser sufragadas con cargo al mismo y por consiguiente qué porcentaje corresponderá a defensa sin que el contribuyente pueda alegar objeción de conciencia en su declaración por cuanto no se halla prevista en la legislación tributaria" -fundamento jurídico 3-. El contribuyente estima vulnerados sus derechos, tanto en las resoluciones administrativas, como en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y recurre, en amparo, invocando en la demanda los derechos a la libertad ideológica y a la objeción de conciencia, reconocidos en los artículos 16.1 y 30.2 de la Constitución española, de 1978, respectivamente. El Ministerio Fiscal, finalmente, alega que la libertad ideológica no puede amparar el incumplimiento de unas obligaciones legales, que tiene su origen en la propia Constitución española, de 1978, como es la contribución de todos al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica y mediante un sistema tributario justo -artículo 31.1 de la Constitución española, de 1978-. El que se puede disenter -añade- por razones ideológicas de unas y otras partidas presupuestarias, en manera alguna puede suponer, que se exima de pagar los impuestos legalmente aprobados. No es la primera vez que el Tribunal Constitucional ni otros tribunales se han visto obligados a resolver cuestiones de esta índole -es el caso de la sentencia de la Audiencia Territorial de Zaragoza, de 9 de enero, de 1988 y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 29 de mayo, de 1989-. Según el auto de 1 de marzo de 1993 del Tribunal Constitucional no cabe ampararse en la libertad ideológica del artículo 16.1 de la Constitución española, de 1978, para pretender, con base a ese derecho, ni que se reconozca una excepción al cumplimiento del deber general, de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos -artículo 31.1 de la Constitución española, de 1978-, ni la adopción de formas alternativas de este deber, como parece haber sostenido el recurrente ante la Administración Tributaria. Estas últimas, es obvio, entrañarían el riesgo de una relativización de los mandatos jurídicos, atribuyendo a cada contribuyente la facultad, de autodisponer por razón de su ideología. Facultad individual, que no es compatible con el Estado social y democrático de Derecho, que configura la Constitución española, en el que la interacción entre Estado y sociedad se traduce, entre otros, en dos aspectos relevantes en esta materia: en primer lugar, en la atribución a las Cortes Generales, que representa al Pueblo español, de la competencia para el examen, enmienda y aprobación de los presupuestos generales del Estado -artículo 134.1 de la Constitución española, de 1978-. Y en segundo término, en el derecho de los ciudadanos, a participar en los asuntos públicos, eligiendo a sus representantes a través de elecciones periódicas, en las que podrán censurar o dar su aprobación, mediante su voto, a la actuación llevada a cabo en las Cortes Generales por los partidos políticos, en relación con la concreta determinación en los presupuestos generales del Estado de las previsiones de ingreso y las autorizaciones de gasto para cada ejercicio económico. Finalmente, el auto del Tribunal Constitucional, de 1 de marzo, de 1991 argumenta que los motivos ideológicos o de conciencia no sólo ya son insuficientes, para que se reconozcan excepciones al deber general de contribuir, sino que impiden que cada contribuyente disponga de parte de la deuda tributaria. Corresponde, por tanto, al ciudadano elegir a sus representantes, y a éstos elaborar y aprobar las normas -entre ellas los presupuestos generales del Estado-, sin que puedan desvincularse de los deberes contenidos de las mismas, por razón de su ideología. Vid. ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, J., *La objeción de conciencia fiscal: a propósito del auto del Tribunal Constitucional de 1 de marzo de 1993*, 68, Cr.T. (1993), pp. 97-103.

Bibliografía complementaria sobre la objeción de conciencia es la siguiente: vid. PRIETO SANCHÍS, L., *La objeción de conciencia como forma de desobediencia al derecho*, 59, Sistema (1984), pp. 41-62. Vid. MARTÍNEZ SOSPEDRA, M., *Constitución española y objeción de conciencia (Acerca de las sentencias del Tribunal Constitucional 160 y 161/87, de 27 de octubre)*, XLIV, 523, R.G.D. (1988), pp. 1751-1774.

<sup>307</sup>.- Efectivamente, en Estados Unidos, el fenómeno de la objeción de conciencia, por motivos pacifistas, como conducta defendida oficialmente por un buen grupo de confesiones religiosas, es relativamente nuevo. Con anterioridad a 1980, la objeción fiscal se reducía a pocas Iglesias; pero, a partir de 1983, tanto los grupos religiosos, históricamente pacifistas -los cuáqueros, a través de las tres principales organizaciones, que los cohesionan-, como

considerar el sistema de "asignación tributaria", como inconstitucional, por posibilitar que el contribuyente, de modo individual, decida el destino de sus impuestos. Por el contrario, ALONSO-VEGA ÁLVAREZ opina que no es así, pues hay que tener en cuenta, que son las propias Cortes, en la ley de presupuestos generales del Estado, las que conceden a los individuos la posibilidad, de elegir el destino de sus impuestos en un determinado campo. Así, pues, las Cortes Generales siguen aprobando los presupuestos del Estado, pero lo hacen dejando, parcialmente, indeterminada una partida. Además, la posibilidad de opción del individuo no es ilimitada, sino que será el Parlamento, quien sentará las bases de las mismas en la propia ley de presupuestos generales del Estado. Además, debe tenerse en cuenta, que las potestades, que la Constitución española de 1978, atribuye a los distintos organismos del Estado no son ilimitadas. Ello quiere decir, que la potestad, de aprobar los presupuestos, puede estar condicionada por otras normas constitucionales, y, concretamente, nos encontramos, que la "asignación tributaria" viene exigida por el artículo 16 de la Constitución española, de 1978, que, por una parte, afirma la libertad ideológica y de conciencia, y, de otra, constitucionaliza la cooperación con la Iglesia católica. Cualquier competencia de las Cortes Generales no puede atacar estos preceptos, por tratarse de derechos fundamentales, por lo que ni puede legislar en contra de los mismos, ni puede aprobar presupuestos, que los vulneren, estando obligada, a ceñirse, en todo momento, a su respeto en cualquier actuación suya<sup>308</sup>. Así, pues, se ha de afirmar, que los principios tributarios -concretamente, ahora el principio de no afectación de los impuestos a un determinado gasto- no se pueden alegar, como algo sagrado e inamovible o cuasi-divinos, capaces de paralizar cualquier innovación, que se les oponga. Concretamente, en el rechazo del principio de no afectación estamos hablando de materias, ligada, estrechamente, a la conciencia, y el principio de libertad ideológica y de conciencia es de naturaleza superior a toda la regulación tributaria. De modo que podríamos, afirmar, que dicho principio se ha visto roto por aquellas materias, que afectan a la conciencia, en las cuales, en vista del artículo 16 de la Constitución española, de 1978, se pasa, a sostener la posibilidad, de que el contribuyente decida los destinos de sus impuestos<sup>309</sup>.

El apartado 2 del número 1 del protocolo adicional del acuerdo económico recoge también la obligación de llevar una memoria, al igual que en la primera etapa:

---

otras confesiones han adoptado posiciones oficiales, en las que, o bien se recomienda, como moralmente recto, la objeción de conciencia, o bien se abandona al juicio de la conciencia individual pagar o no impuestos, en la medida en que con ellos se sufraga una política belicista. En Estados Unidos, la objeción de conciencia militar encuentra respaldo en una excepción "ad hoc"; por tanto, no aparece, como derecho reconocido de la *Bill of rights*, siendo revocable dicho privilegio, en cualquier momento, por el Congreso. En otras palabras, la objeción de conciencia militar es un privilegio aislado del Congreso Federal y no extensible a la objeción de conciencia fiscal, ya que se requiere la voluntad expresa del legislativo. Por ello, la jurisprudencia norteamericana espera que sea el legislativo, y no ella, quien determine, cómo tratar el problema. A este fin, en marzo de 1977, se presentó al *Committee of Finance* del Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley, dirigido a encauzar, legalmente, la posibilidad restringida de un pago social sustitutorio para objetores fiscales, por motivos pacifistas. El proyecto no prosperó, aunque se continúa desarrollando la idea en pro de dicho objetivo. Vid. ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, J., *La objeción de conciencia fiscal...*, loc. cit., p. 104. Sobre la objeción fiscal en Estados Unidos, vid. PALOMINO, R.P., *El tratamiento jurídico de la objeción fiscal en los Estados Unidos*, XLII, 222, R.D.F.H.P. (1992), pp. 1271-1304. En Italia, también se presentó un proyecto de normas, para el ejercicio de la "opción fiscal" en materia de defensa. Se presentó ante la Cámara de los Diputados de la República italiana, el 11 de mayo, de 1989. Con este proyecto se pretendía, que, para la declaración fiscal de la renta de 1991, los contribuyentes italianos pudieran optar, entre contribuir a la defensa armada clásica, o bien destinar parte de su débito fiscal a la defensa civil, no-violenta o sin armas. Aquel proyecto, finalmente, tampoco fue aprobado. Vid. ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, J., *La objeción de conciencia fiscal...*, loc. cit., p. 105.

<sup>308</sup>.- Vid. ALONSO-VEGA ÁLVAREZ, J.Mª., *La objeción de conciencia al servicio militar y la objeción de conciencia fiscal*, XLVI, 543, R.G.D. (1989), pp. 7866-7869.

<sup>309</sup>.- Vid. ALONSO-VEGA ÁLVAREZ, J.Mª., *La objeción de conciencia al servicio militar y la objeción de conciencia fiscal*, loc. cit., pp. 7868-7869.

"La aplicación de los fondos, proyectada y realizada por la Iglesia, dentro del conjunto de sus necesidades, de las cantidades a incluir en el Presupuesto o recibidas del Estado en el año anterior, se describirá en la Memoria que, a efectos de la aportación mencionada, se presentará anualmente".

### III.6.B.1. INCONVENIENTES, QUE HAN TENIDO QUE RESOLVERSE, PARA HACER APLICABLE LOS PRINCIPIOS DE "ASIGNACIÓN TRIBUTARIA". LA DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD DE LA "ASIGNACIÓN TRIBUTARIA".

En 1988 con la asignación tributaria sólo se culminó el treinta por ciento o cuarenta por ciento del total del presupuesto de las diócesis y la Conferencia Episcopal<sup>310</sup>. El acuerdo sobre asuntos económicos mantiene e, incluso, puede que aumente la dependencia económica de la Iglesia respecto del Estado. Por ello, DUATO considera que esta dependencia económica "es el mayor precio objetivo que la Iglesia ha tenido que pagar por la firma de estos acuerdos", pues es el mejor modo de manipularla<sup>311</sup>.

El sistema de "asignación tributaria" ha sido considerado, como deficiente, por la Conferencia Episcopal española<sup>312</sup>. De hecho, la LV asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal española de noviembre, de 1987, creó una "comisión para el seguimiento de la asignación tributaria". Comisión que realizó diferentes acciones y que mantuvo diferentes reuniones con los responsables diocesanos de la campaña "pro asignación tributaria". La LV asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal española, celebrada los días 18 a 23 de noviembre, de 1991, creó un "secretariado para la ayuda económica de la Iglesia", dependiente del "consejo de economía" de la Conferencia Episcopal española<sup>313</sup>. En el sistema español existen algunas lagunas:

- a) La parte del contribuyente, que deje en blanco las dos casillas opcionales, no se integrará, sin más, a la opción segunda sino que estaría mejor, en justicia, distribuirlas, a partes iguales, entre las dos posibilidades previstas;
- b) Que la segunda opción debería atribuirse en amplio abanico de posibilidades expresas, sin dejar el destino de la recaudación a la discrecionalidad del ejecutivo: Cruz Roja, Cáritas, drogadictos, ecología, tercera edad...; si bien es cierto que tal despliegue de destinos expresos tiene también una vertiente desaconsejable, como raíz de vacilación o desobjetivos elecciones del contribuyente<sup>314</sup>.

PANIZO Y ROMO DE ARCE, refiriéndose -antes de su reforma, en 1991- a la ley 44/1978, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, señala la necesidad de reformar la "asignación tributaria" en este impuesto, en especial lo relativo a la "unidad familiar". En efecto, el artículo 4 de dicha ley 44/1978, dispone que: "Cuando las personas a que se refieren los dos

<sup>310</sup>.- Vid. YANES, E., *Un sistema democrático, justo y moderado*, 2449, Ecclesia (1959-II), p. 9.

<sup>311</sup>.- Vid. DUATO, A., *El acuerdo sobre asuntos económicos*, loc. cit., pp. 61-62. En realidad, aunque es un "adecuado instrumento para la cooperación del Estado con la Iglesia", se ha convertido en un instrumento político de presión. Vid. BLANCO, Mª., *La cooperación del Estado español...*, loc. cit., p. 543.

<sup>312</sup>.- Vid. MARTÍN SÁNCHEZ, I., *La financiación de las confesiones religiosas en el Derecho español*, loc. cit., p. 146.

<sup>313</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, 51, 136, R.E.D.C. (1994), p. 93.

<sup>314</sup>.- Vid. HIGUERA, G., *La asignación tributaria a la Iglesia católica*, loc. cit., p. 106.

epígrafes del apartado anterior estén integradas en una unidad familiar, todos los componentes de esta última quedarán conjunta y solidariamente sometidos al impuesto como sujetos pasivos, con arreglo al régimen que para tal supuesto establecen los artículos 5 y 7 de esta ley". Igualmente, el artículo 5 de dicha ley 44/1978 considera unidad familiar a la integrada por "los cónyuges e hijos". Relacionando estos conceptos con el sistema de "asignación tributaria", el problema se plantea en el supuesto de que tributen conjuntamente, en base a una cuota única, personas que tengan intenciones distintas respecto al fin que haya de darse a la parte proporcional, que, en su caso, pueda ser destinada a la Iglesia católica, lo que, necesariamente, implica un cambio en la legislación tributaria sobre la renta, para individualizar, dentro de la unidad familiar, las opciones personales, en base al principio de libertad religiosa de la "asignación tributaria"<sup>315</sup>.

No parece que el que la "asignación tributaria" sólo se contemple para la Iglesia católica viole lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución, porque la "asignación tributaria" se encuentra constitucionalmente, dentro de la cooperación del Estado con la iglesia católica, recogida en el artículo 16.3 de la Constitución. La igualdad sería conculcada si, en el acuerdo económico, se hubiera excluido la posibilidad, de que el Estado concertase en un futuro acuerdos de carácter económico con otras confesiones, distintas a la católica, cuyo ámbito, en nuestro país, constituye, un factor a tener en cuenta -artículo 16.3 de la Constitución- por la Administración en sus relaciones con las entidades religiosas. Igualmente, la ley orgánica de la libertad religiosa, de 1980, que desarrolla el precepto constitucional aludido, deja abierta la posibilidad, de que el Estado pueda establecer acuerdos de cooperación con las comunidades religiosas, siempre que, por su ámbito y número de creyentes, hayan alcanzado notorio arraigo en España, y estén inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia<sup>316</sup>. Tampoco se infringe el artículo 16.2 de la Constitución, dado que a nadie se le obliga a declarar sobre cuestiones religiosas personales, al ser tal declaración voluntaria y no estar referido a aspectos propios del estatuto confesional del declarante, sino a una afectación de parte de la cuota, que, forzosamente, se ha de satisfacer al fisco<sup>317</sup>. El obispo de San Sebastián, en 1993, manifiesta, efectivamente, que, en este sistema, "a nadie se le pregunta sus creencias religiosas. Únicamente se le plantea si, como contribuyente, quiere o no ayudar a la Iglesia"<sup>318</sup>. De hecho, así lo ha manifestado, expresamente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad valenciana, de 22 de abril de 1990 -en su fundamento jurídico sexto- al manifestar que:

"En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a no declarar la propia creencia religiosa, es evidente que no se ha producido en el presente caso, puesto que no se ha declarado en el acto impugnado, pero además, la imposición de que se asigna a la Religión Católica, que en su caso afectaría exclusivamente a los católicos, tampoco vulnera este derecho, pues es evidente que como todo derecho fundamental tiene sus límites, y en este caso la declaración de predeterminación del gasto está justificada y es razonable, debiendo utilizarse exclusivamente para dicha finalidad. De otro lado, tampoco el hecho de que se opte por dicho destino implica necesariamente que se

<sup>315</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., pp. 228-229.

<sup>316</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, loc. cit., pp. 182-183.

<sup>317</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, loc. cit., p. 183.

<sup>318</sup>.- Vid. *Nota sobre la asignación tributaria en favor de la Iglesia Católica*, 44, B.O.O. de San Sebastián (1993), p. 452; reproducido en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 106.

profese la citada religión, pues no puede descartarse que se opte por dicha finalidad por otros motivos, por ejemplo, pese a no pertenecer a ninguna religión, entender que ejercen una actividad social relevante<sup>319</sup>.

HIGUERA, a pesar de reconocer que esta etapa no tiene los defectos sustanciales, que algunos quieren achacarle -siempre que no se prolongue su provisionalidad intermedia-, tampoco disfruta de las ventajas, que se esperan del estadio definitivo, pues se hubiera podido soslayar y rellenar algunas pequeñas lagunas. Sin embargo, lo cierto es que no se puede pretender la anticonstitucionalidad, que han querido ver. De hecho, el acuerdo económico, de 1979, tiene el carácter de tratado internacional, y, por tanto, hay que considerarlo a la luz del artículo 96 de la Constitución española, de 1978. Además, hubo un momento, en que se pudo recurrir, conforme al derecho, y ni Gobierno ni oposición utilizaron sus facultades<sup>320</sup>. La pregunta ni es anticonstitucional, ni viola la privacidad religiosa, porque al declarante no se le pregunta si es católico o no, simplemente, si desea, que se asigne a la Iglesia católica el porcentaje contributivo legalmente establecido<sup>321</sup>.

Con la firma del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, se polemizó sobre la supuesta inconstitucionalidad en tres aspectos:

- a) La Constitución española, de 1978, prohíbe, que nadie sea obligado a declarar sobre su confesión y sobre su ideología. Aunque lo cierto es que, ni la "asignación tributaria" obliga, a declarar sobre la confesión, que se profesa -sólo solicita del contribuyente, si entrega o no a la Iglesia católica una pequeña porción de un impuesto, que, de todas formas, debe pagar-, ni la Constitución española, de 1978, prohíbe, que nadie, voluntariamente, declare sobre su confesión o sobre su ideología;
- b) Los contribuyentes, que hagan uso de la facultad, que les reconoce el sistema de "asignación tributaria" pagarán al Estado menos que los otros contribuyentes, contradiciéndose la Constitución, de 1978. Esta acusación sólo se puede salvar, concediendo a todos los contribuyentes, que lo deseen, el derecho de disponer del mismo porcentaje a favor de sus Iglesias, o confesiones, o a favor de instituciones de reconocido interés social;
- c) A pesar de que el porcentaje es el mismo para todos, al ser los católicos mayoría, se van a favorecer más, ya que también se van a beneficiar de los servicios de las instituciones de reconocido interés social, lo cual es discriminatorio. Lo cierto es que éste es un argumento retorcido<sup>322</sup>.

Pero una cosa es que las ayudas públicas a la Iglesia, tal como se da en España, sean irreprochables, desde un punto de vista democrático -puesto que cada español, puede decidir en contribuir o no con sus impuestos al mantenimiento de la Iglesia-, y otra cosa es que sería, pastoralmente, oportuno, renunciar, cuanto antes, a las mismas. En los primeros tiempos eran,

<sup>319</sup>.- Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana, de 22 de abril de 1990, está reproducida, íntegramente, en 89-90, E.F. (1990), pp. 35-36, y en el n.º 92, E.F. (1990), pp. 39-40; 113, R.A.T. (1990), pp. 177-179.

<sup>320</sup>.- Vid. HIGUERA, G., *La asignación tributaria a la Iglesia católica*, loc. cit., p. 104. Vid. idea reiterada por este mismo autor en *¿Impuesto religioso o asignación tributaria? Pequeñas aclaraciones*, loc. cit., p. 564.

<sup>321</sup>.- Vid. HIGUERA, G., *¿Impuesto religioso o asignación tributaria? Pequeñas aclaraciones*, loc. cit., p. 565.

<sup>322</sup>.- Vid. Esquema de trabajo para la ponencia sobre la autofinanciación de la Iglesia española. (Ponencia), en *Iglesia y situación socioeconómica en la España de los 80 (material)* (Madrid 1981), pp. 178-179.

única y exclusivamente, los fieles, quienes mantenían, económicamente, a la Iglesia, y a eso debemos volver<sup>323</sup>.

En 1990 el tema principal ha sido la cuestión de "finés de interés social". El acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, señala que, en ausencia de la declaración a favor de la Iglesia católica, la cantidad correspondiente se destinará a otros fines, sin especificar cuáles son éstos. El real decreto de 15 de julio, de 1988, regulaba los "finés de interés social" y concretaba dichos fines en la protección de las personas más desfavorecidas, los ancianos, los niños desprotegidos, los que sufran algún tipo de marginación o minusvalía, etcétera. Esta interpretación unilateral del Gobierno, que parecía enfrentar a la Iglesia católica con los "finés de interés social", provocó fuertes y duras críticas episcopales: "Hemos de suponer -decía el arzobispo de Burgos- que la aplicación de todo el impuesto del IRPF va dirigido a fines de interés social [...]. Por eso la Iglesia se siente molesta y aun en cierto modo agredida presentándola ante los contribuyentes como opción alternativa a sus necesidades, al conjunto de grupos marginados que debieran ser atendidos con carácter prioritario por los Presupuestos del Estado, como si la Iglesia fuera indiferente o no diera prioridad a dichos grupos en todo lo que es su acción caritativa y social. Es sorprendente y hasta humillante para la Iglesia verse contrapuesta a tales fines señalados como de interés social"<sup>324</sup>.

En 1991, el arzobispo de Madrid se queja de la falta de información, por parte del Gobierno, sobre los resultados de la "asignación tributaria", señalando que "la Administración Pública ha presentado los resultados tarde e incompletos"<sup>325</sup>.

El obispo de Ávila analizaba, también en 1991, las posibles causas de la alta abstención, incluso entre católicos de buena voluntad, señalando varias -falta la debida información; creer que es mejor destinar ese porcentaje del impuesto a "otros fines de interés social"; disenso con el sistema establecido; falta de una clara obligación moral para el católico...- e indicando que eran necesarias más información y coherencia -colaborador al sostenimiento de la Iglesia en la declaración de la renta-<sup>326</sup>.

Y en este mismo año 1991, el obispo de Tenerife recuerda que "el católico que no pone la cruz en favor de la Iglesia difícilmente puede excusarse de grave pecado de omisión, ya que pudiendo ayudar a la Iglesia, tan necesitada, la abandona y la deja sin recursos"<sup>327</sup>.

En 1993 los obispos españoles han vuelto a recordarnos que la "asignación tributaria" del impuesto sobre la renta de las personas físicas es un porcentaje mínimo, que "el Gobierno no ha querido subir [...] Ellos hacen el cálculo para entregarle a la Iglesia una cantidad similar a la que daban anteriormente, como si todos los españoles fueran católicos que ponen la señal"<sup>328</sup>.

<sup>323</sup>.- Vid. GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA, L., *Los dineros de la Iglesia ante el Evangelio*, loc. cit., p. 85.

<sup>324</sup>.- Vid. 133, B.O.A. Burgos (1990), p. 330. En el mismo sentido el obispo de Almería, *La asignación tributaria*, 4, Boletín Interdiocesano de Andalucía Oriental (1990), pp. 8-9. O en Ávila: *Colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia*, 81, B.O.O. de Ávila (1990), pp. 217-218. E, incluso, el obispo de Málaga: *Coherencia pequeña, pero importante*, 4, Boletín Interdiocesano de Andalucía Oriental (1990), pp. 3-4. También reproducidas en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 103 y nota 62.

<sup>325</sup>.- Vid. *Libre asignación tributaria*, 105, B.O.A. de Madrid (1991), p. 547, y en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 104.

<sup>326</sup>.- Vid. en 82, B.O.O. de Ávila (1991), pp. 151-153. Comentado en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., pp. 104 y nota 65.

<sup>327</sup>.- Vid. Ante la asignación tributaria. Exhortación pastoral, 5-7, B.O.O. de Tenerife (1991), pp. 172-173. Reproducida en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 104.

<sup>328</sup>.- Vid. *Colabora y ponga la cruz*, 113, B.O.O. de Jaca (1993), pp. 147-148. También reproducido en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 106, en su nota 74.

Para la campaña de 1995, el obispo de Teruel considera el sistema como "confuso y complejo". Además de considerar incómodo el poner a los cristianos en la disyuntiva de elegir entre la Iglesia y los otros fines de interés social. Considerando "arbitrario", que la asignación se destine a estos otros fines, si no se pone la "X" en ninguna casilla. Este obispo de Teruel también rechaza que en los acuerdos se contemple un plazo, para abandonar la "asignación tributaria". Además, si se elevase el actual 0'5 por ciento, se ahorraría la dotación presupuestaria, con la que el Estado completa la "asignación tributaria", hasta alcanzar la cifra fijada en los acuerdos, y actualizada cada año en relación al índice de precios al consumo -I.P.C.-. Sin embargo, también reconoce, que tiene bondades: permite una clara independencia y separación entre Iglesia y Estado y son los propios ciudadanos, los que deciden, lo que se debe dar a la Iglesia. Además, desde su implantación en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas física, de 1988, el porcentaje de declarantes a favor de la Iglesia católica se ha incrementado del 35'11% en aquel año, al 42'29% en la de 1993, sin incluir los datos del País Vasco y Navarra. De forma que los 4.202 millones, asignados en 1988, han crecido hasta los 12.986 de 1993<sup>329</sup>.

Las Comunidades Cristianas Populares -C.C.P.- eran contrarias, a lo que se parecía al impuesto religioso, porque utilizaba el aparato fiscal y financiero estatal, creando una dependencia del Estado -punto 1-. Además, porque la misión evangelizadora de la Iglesia debe ser un servicio gratuito, que no se debe confundir con un servicio cultural, del cual es responsable el Estado -punto 2-. Además, porque lo que los creyentes dan como impuesto religioso se resta a otras necesidades urgentes, que afectan a toda la sociedad, principalmente, a las clases más necesitadas: paro laboral, marginados, servicios culturales y sanitarios, etcétera -punto 4-. Asimismo, el impuesto religioso contradice el artículo 14 -discriminación por razón de la religión- y no respeta el 16.2 -no ser obligado a declarar la religión- -punto 5-. El impuesto religioso contribuye a ver al sacerdote como un funcionario del Estado, dificultando su misión evangelizadora -punto 6-. Por ello, propone:

- a) que la Iglesia establezca un plazo fijo para la autofinanciación. Que se haga el esfuerzo necesario para que los fieles asuman sus responsabilidades y que se haga posible a la Iglesia realizar su misión con plena libertad;
- b) que se creen mecanismos para comunicar los bienes dentro de la Iglesia, para alcanzar la solidaridad, la igualdad y la fraternidad, y solucionar los problemas económicos del clero rural, de los sacerdotes ancianos y jubilados y a otros problemas urgentes de las comunidades;
- c) que se diferencie, de forma clara, las tareas propiamente eclesiales y los servicios sociales, que la Iglesia o las instituciones eclesiales puedan desarrollar; enseñanza, sanidad, asistencia social, etcétera. Cada uno de estos campos exige un estudio y una solución concreta, para determinar la responsabilidad financiera que corresponde al Estado<sup>330</sup>.

### III.6.B.2. VENTAJAS DEL SISTEMA DE "ASIGNACIÓN TRIBUTARIA".

<sup>329</sup>.- Vid. BUEY, L., De, *La Iglesia juzga "confusa" la asignación tributaria. "Hacer el bien no cuesta nada" lema de la campaña*, loc. cit., p. 15.

<sup>330</sup>.- Vid. *Rotundo rechazo del "impuesto religioso". Comunicado de las Comunidades Cristianas Populares*, 1159, V.N (1978-II), p. 17.

La asignación tributaria pone en relación más directa y libre al contribuyente con la institución o actividades a cuyo sostenimiento económico va a contribuir el 0'5239 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es, sin duda, un sistema más democrático, más justo, más moderno y más respetuoso con la libertad religiosa de los ciudadanos<sup>331</sup>.

Los obispos españoles, en 1988, se hacen eco, unánimemente, en sus diversos documentos de la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal española sobre ayuda económica a la Iglesia de 22 de abril, de 1988. Además, explican, detalladamente, las características técnicas del sistema de "asignación tributaria". Justifican este nuevo procedimiento, afirmando que "La Iglesia es cosa de todos" y "somos todos sus fieles", de donde se deduce la necesidad de la colaboración económica de los fieles<sup>332</sup>.

A pesar de los problemas, a que puede dar lugar el sistema de "asignación tributaria", también se derivan ciertas ventajas. Entre ellas, se potencia el derecho de libertad religiosa, que comporta la asignación, al darle al contribuyente la opción para el destino de su propia cuota impositiva, en lo que concierne a la financiación de su Iglesia, lo que, sin embargo, aparece un tanto desdibujado ante la inexistencia de confesiones, distintas de la católica, que, de "*iure conditio*", puedan ser beneficiarias de la asignación<sup>333</sup>.

En 1988, monseñor Teodoro Úbeda afirma que, aquellos que no tengan la obligación de declarar, porque sus ingresos sean bajos o le sea negativa, podrán apoyar a la Iglesia mediante donaciones y ofrendas directas a su propia parroquia, al igual que los que están obligados a declarar; aconsejándose dar el uno por ciento de los ingresos para el sostenimiento de la Iglesia -1.000 pesetas por cada 100.000 de ingresos-, porcentaje calculado en base al número de católicos practicantes<sup>334</sup>.

La "asignación tributaria" ofrece la ventaja, respecto de la dotación presupuestaria, de que mediante este sistema, la voluntad del ciudadano es tenida en cuenta respecto del destino de su contribución. Y, además, también se tiene en cuenta la capacidad contributiva, ya que la cantidad afectada variará según la capacidad económica del sujeto<sup>335</sup>. En realidad, es beneficiosa esta etapa para la educación y concienciación de los creyentes; tratándose de un verdadero referéndum sobre la práctica de la fe, desde un ángulo bien distinto al acostumbrado en las habituales encuestas de asistencia o no a la misa dominical<sup>336</sup>. Efectivamente, si la Iglesia ha permitido la "asignación tributaria" ha sido, porque los fieles no están habituados, a contribuir, y la "asignación tributaria" les puede sensibilizar en el cumplimiento de sus obligaciones económicas. Además, la Iglesia no puede, sin un plazo amplio de preparación autofinanciarse. En realidad, la "asignación tributaria" es la autofinanciación de la Iglesia a través de la acción recaudadora del Estado. Para lograr la autofinanciación, no se trata sólo de hallar unos dineros de más, que permita prescindir de la ayuda directa del Estado; sino de reestructurar toda la economía de la Iglesia -de las parroquias, de las entidades e instituciones, de las diócesis, de las Conferencias regionales y de la Conferencia Episcopal española-, de manera que sea suficiente, solidaria y basada en la aportación de los fieles. Es un problema de

<sup>331</sup>.- Vid. YANES, E., *Un sistema democrático, justo y moderado*, 2449, Ecclesia (1959-II), pp. 8-9.

<sup>332</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 96.

<sup>333</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, loc. cit., p. 187.

<sup>334</sup>.- Vid. *Declaraciones de monseñor Teodoro Úbeda, miembro de la Comisión especial para la Asignación tributaria*, 2372, Ecclesia (1988-I), p. 17.

<sup>335</sup>.- Vid. MARTÍN SÁNCHEZ, I., *La financiación de las confesiones religiosas en el Derecho español*, loc. cit., p. 146.

<sup>336</sup>.- Vid. HIGUERA, G., *La asignación tributaria a la Iglesia católica*, loc. cit., p. 105.

sinceridad, de voluntad, de tenacidad, de imaginación, de pedagogía, y, obviamente, de tiempo<sup>337</sup>.

Podría decirse que qué más da que la Iglesia reciba su dotación directamente del presupuesto, o que la reciba parte directamente del presupuesto y parte de un porcentaje, que el Estado aplica sobre la masa de rendimiento de imposición de los ciudadanos, que hayan declarado su voluntad, de que esa parte suya vaya a la Iglesia, si esas dos partes sumadas van a dar igual suma, que aquel total. Todo lo da el Estado, o, si se quiere, todo lo da el contribuyente. Pero late una cuestión ideológica y una necesaria mentalización: durante tres años, el Estado irá disminuyendo su dotación presupuestaria, en la medida, en que respondan los ciudadanos católicos, a declarar su voluntad de participación. Todo ello indica que el segundo período es de pura transición<sup>338</sup>.

En los últimos años, la Iglesia en España ha avanzado mucho en la información de todas sus fuentes de financiación y del destino que se va a dar a sus ingresos. De este modo, se realiza una dación de cuentas y la transparencia de sus cuentas y la transparencia en su administración económica. A todos los niveles: la Conferencia Episcopal española publica presupuestos y balance anual. La práctica totalidad de las diócesis también. Y muchísimas parroquias y otras entidades eclesiales<sup>339</sup>.

Es cierto que la estructura administrativa del Estado se va a emplear, como parcialmente recaudadora. Pero hay que tener en cuenta el carácter intermedio y provisional del sistema. Además, esta práctica no es desconocida en el mundo fiscal, aunque a la inversa. Así, por ejemplo, las empresas privadas no son Hacienda Pública, y, sin embargo, cumplen con el papel de recaudadores fiscales, cuando, por ministerio de ley, detraen las correspondientes cantidades impositivas a sus empleados y trabajadores en el momento de hacer efectivas las habituales nóminas de haberes. Si a la Hacienda Pública se le hace, en ocasiones, ese "favor recaudatorio", no es muy incoherente, que, alguna vez, Hacienda haga algún "favor" semejante, guardando todas las distancias en la comparación<sup>340</sup>.

Los obispos españoles, en 1988, han justificado la ayuda, que el Estado concede a la Iglesia, a través de la "asignación tributaria", acudiendo a argumentos, utilizados por la Conferencia Episcopal española o similares:

- a) La religión entendida casi como un servicio público, subvencionado por el Estado-intermediario: "Porque cada ciudadano -decía el Obispo de Barbastro, en 1988" debe pagar los servicios que recibe. Lo lógico es que el servicio religioso esté sostenido con el dinero de los beneficiarios; en este caso, de los católicos. El Estado recauda impuestos para luego ofrecer servicios al ciudadano. Al hacer la declaración de la renta el Estado consulta al declarante sobre su voluntad sobre si desea que parte de su cuota pase a la Iglesia para que ésta le preste los servicios religiosos que él necesita. En este caso, el Estado hace de intermediario y de recaudador"<sup>341</sup>.

<sup>337</sup>.- Vid. Esquema de trabajo para la ponencia sobre la autofinanciación de la Iglesia española. (Ponencia), en *Iglesia y situación socioeconómica en la España de los 80 (material)*, loc. cit., p. 181.

<sup>338</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 323.

<sup>339</sup>.- Vid. *Declaraciones de monseñor Teodoro Úbeda, miembro de la Comisión especial para la Asignación tributaria*, 2372, *Ecclesia* (1988-I), p. 17.

<sup>340</sup>.- Vid. HIGUERA, G., *La asignación tributaria a la Iglesia católica*, loc. cit., p. 105. Idea, que nos vuelve a recordar en su colaboración, bajo el título: *¿Impuesto religioso o asignación tributaria? Pequeñas aclaraciones*, loc. cit., p. 565.

<sup>341</sup>.- Vid. reproducida en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., pp. 97-98

- b) La religión es un valor o una actividad, integrante del bien común de la sociedad y por ello se justifica la ayuda económica del Estado: "Esta aportación parcial del Estado a las necesidades de la Iglesia católica, según la voluntad de los contribuyentes no es ningún disparate, al menos, así nos parece a muchos, ya que la vida religiosa y moral de muchos ciudadanos y un sinnúmero de actividades educativas y de servicio de la Iglesia, contribuyen notablemente al bien común de la sociedad"<sup>342</sup>. Otra declaración es la del obispo auxiliar de Oviedo, en 1988, que nos dice: "Que el Estado aconfesional colabore en esta operación es lo más normal en un Estado democrático moderno. El Estado recauda enormes cantidades a través de los diversos impuestos de los ciudadanos. Su obligación es administrar esos impuestos de modo que reviertan en beneficio y en servicios a los propios ciudadanos que lo han aportado [...] si el Estado con los fondos del pueblo está obligado a subvencionar a personas e instituciones que fomenten la educación, la cultura, el deporte, el arte, la política, etc., es también legítimo que ayude a quienes desde su condición de ciudadanos creyentes se ejercitan en su religión como una noble actividad y colaboran al bienestar y a la paz de un pueblo con sus múltiples servicios"<sup>343</sup>.
- c) Este sistema es más respetuoso con la libertad y la conciencia de todos los ciudadanos, ya que éstos tienen opción, para indicar dónde quieren que vayan parte de sus impuestos. El arzobispo de Valencia señala que el sistema anterior de dotación global "despertaba el recelo de que obligaba de manera indirecta a todos los contribuyentes españoles a ayudar a la Iglesia católica [...] En esa nueva forma de aportación económica del Estado a la Iglesia, los dineros con los que se forma esa aportación económica del Estado a la Iglesia provendrán sólo de aquellos que hayan manifestado en su declaración de renta su voluntad de que se asigne un porcentaje de sus impuestos a la Iglesia lo declaren expresamente"<sup>344</sup>.

En 1989, al realizarse más tardíamente, que en otros años la declaración sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, muchos obispos españoles publicaron un único documento sobre el día de la Iglesia diocesana y sobre la "asignación tributaria", destinada a la Iglesia católica. En él se recordaba la necesidad, que tiene la Iglesia católica, de poseer medios económicos, para cumplir su misión, y el resultado "razonablemente satisfactorio" de la "asignación tributaria", a pesar del alto grado de abstención<sup>345</sup>.

En 1990, los obispos españoles siguieron recordando las mismas ideas: necesidad de que los fieles católicos tomen conciencia; información y descripción del sistema, ya que con este

<sup>342</sup>.- Vid. *La Iglesia y los dineros*, 137, B.O.O. Huesca (1988), pp. 143-144. También en *Subvenir a las necesidades de la Iglesia*, 95, B.O.O. Lleida (1988), p. 144. Vid. reproducida esta declaración en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 98, y nota 45.

<sup>343</sup>.- Vid. la declaración del obispo auxiliar de Oviedo *La asignación tributaria*, 122, B.O.A. Oviedo (1988), pp. 291-293, reproducida en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 98, y nota 46.

<sup>344</sup>.- Vid. la *Carta abierta sobre la asignación tributaria*, 3085, B.O.A. Valencia (1988), pp. 245-247. Vid. reproducida en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 99, y nota 47.

<sup>345</sup>.- Vid. reproducida en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 99.

sistema se cubre sólo el treinta y cinco por ciento de lo que la Iglesia necesita; "este medio no es decoroso [...] no es injusto ni ilegal"; además, el sistema respeta la libertad religiosa<sup>346</sup>.

En 1993, los obispos españoles, de forma mayoritaria, han recordado, como los impuestos son una colaboración obligatoria de todos los ciudadanos al bien común, y cómo la "asignación tributaria" a favor de la Iglesia es un cauce válido y adecuado, para contribuir al mantenimiento de la Iglesia; es una cantidad mínima, que no se suma, sino que se detrae del impuesto; no significa, necesariamente, una confesión de fe, por lo que pueden usarla tanto los católicos, como los no católicos, que estimen la labor caritativa, cultural y social, que desarrolla la Iglesia en nuestra sociedad; etcétera<sup>347</sup>.

La legislación comparada muestra, que la "asignación tributaria" a la Iglesia católica, en esta segunda etapa, supone un avance hacia la independencia y la separación económica de la Iglesia, y, de ninguna forma, una involución. Quedan, en el primer estudio de la dotación presupuestaria, nada menos que países como Gran Bretaña y los tres socialistas bálticos -Suecia, Noruega y Dinamarca-, que, por ser confesionales, sufragan, presupuestariamente, la respectiva confesión oficial: anglicana, luterana y evangélica. El Benelux -Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo- dota a la Iglesia con cargo a los presupuestos del Estado, como se ha venido realizando en España durante largo tiempo. Alemania y Austria tienen establecido un verdadero "impuesto religioso" -no una "asignación tributaria"-, que recaudan, y, después distribuyen, entre las diferentes Iglesias o en servicios sociales. Francia -con la excepción, por razones históricas de Alsacia y Lorena- y los Estados Unidos de América no dotan a ninguna confesión religiosa, siendo los propios fieles, quienes, directamente, contribuyen con los gastos de las respectivas Iglesias. Italia, desde 1984, sigue los mismos derroteros que España, prevé etapas sucesivas y provisionales hasta desembocar en la autofinanciación<sup>348</sup>.

No es un privilegio para la Iglesia católica, puesto que también se podrá aplicar a otras confesiones religiosas. Ni se opone a los principios constitucionales de no confesionalidad del Estado o plena libertad religiosa de los ciudadanos, porque:

- a) A nadie se le pregunta por sus creencias religiosas; únicamente si, como contribuyente, quiere o no ayudar a la Iglesia católica. Puede haber no católicos, que también quieran hacerlo;
- b) El Estado ni se implica a favor ni en contra de ninguna confesión religiosa, con lo cual se respeta la no confesionalidad del Estado;
- c) Es posible, constitucionalmente hablando, pues consiste en una colaboración con la Iglesia católica y, en su caso, con otras confesiones religiosas, tal y como permite la misma Constitución y los acuerdos de 1979<sup>349</sup>.

### III.6.C. PERÍODO 3. FASE DE APLICACIÓN EXCLUSIVA DE "ASIGNACIÓN TRIBUTARIA"<sup>350</sup> (desde 1991 hasta hoy).

<sup>346</sup>.- Vid. *La asignación tributaria*, B.O.O. Albacete (1990), pp. 165-167. Vid. reproducida en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., pp. 101-102 y nota 58.

<sup>347</sup>.- Vid. la declaración de la renta y asignación tributaria a favor de la Iglesia, 47, B.O.O. de Teruel y Albarracín (1993), pp. 107-109. Comentada en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 99.

<sup>348</sup>.- Vid. HIGUERA, G., *La asignación tributaria a la Iglesia católica*, loc. cit., pp. 105-106. De este mismo autor, vid. *¿Impuesto religioso o asignación tributaria? Pequeñas aclaraciones*, loc. cit., p. 565.

<sup>349</sup>.- Vid. *¿Cómo hacer la asignación tributaria?*, 2372, *Ecclesia* (1988-I), p. 18.

<sup>350</sup>.- Seguimos la división en etapas, realizadas por PIÑERO CARRIÓN, siendo ésta la tercera. Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 324 y ss.

El Gobierno prometió en la Comisión Técnica Iglesia-Estado, celebrada el día 27 de abril, de 1990, en el Ministerio de Justicia, variar el tanto por ciento para que la Iglesia recibiese una cuantía mayor, una vez que para 1991 se aplicase la asignación tributaria. El incumplimiento de este compromiso es suficiente, a juicio de HERRÁEZ RUBIO, para declarar roto el pacto, que garantiza las correctas relaciones entre la Iglesia y el Estado<sup>351</sup>.

Al terminar el período de transición o sustitución, o sea el ejercicio de 1991, el Estado asignará a la Iglesia solamente lo que se recaude por medio del impuesto y no recibirá ninguna partida del presupuesto. Para ello, el Estado habrá hecho ya sus cálculos de contribuyentes, que declaran a favor de la Iglesia y determinará según el número y clase de contribuyentes el porcentaje, por el que se consigue obtener la cantidad apropiada, que haya de liquidar a la Iglesia. Esto no empece que algún año la aportación de los contribuyentes supere la cantidad prevista por el Estado o, la inversa, no llegue a esa cantidad. Creemos que en el acuerdo no está prevista la solución del caso. Pero cuando tuviese lugar una situación de este estilo el Estado en la ley de presupuestos dará una solución adecuada<sup>352</sup>.

Si hasta 1991<sup>353</sup> el Estado mantenía la dotación presupuestaria, aunque minorada en cuantía igual a la "asignación tributaria" recibida, a partir de ese año desaparece la cobertura de la dotación presupuestaria. En efecto, el Consejo de Ministros, celebrado el día 27 de septiembre de 1990, toma, entre otras, la decisión de poner fin al llamado *período intermedio*, en el que coexistían los sistemas de dotación presupuestaria y "asignación tributaria" y determina que se inicie la segunda etapa de "asignación tributaria" plena, o, lo que es lo mismo, sin complemento presupuestario de ningún tipo. En este sentido, elabora un proyecto de disposición adicional tercera sobre "Asignación tributaria a fines religiosos y otros", que presenta a la Iglesia el día 15 de octubre de 1990, en una reunión celebrada entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el secretario de la Conferencia Episcopal. Como era previsible, la Conferencia Episcopal española no podía aceptar la solución que, de manera unilateral e inminente, proponía el Gobierno para la financiación de la Iglesia. En la misma línea se manifestó también la Junta de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal, en su reunión del día 25 de octubre de 1990. A pesar de la oposición de la Iglesia, el Gobierno mantuvo su propuesta en todos sus términos, y el proyecto de disposición adicional tercera quedó, definitivamente, incorporado a la ley de presupuestos generales para el año 1991<sup>354</sup>. La ley de

<sup>351</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, B., *Compromisos Iglesia-Estado en materia económica*, 2479, Ecclesia (1990-I), p. 7.

<sup>352</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *El nuevo sistema de dotación económica del Estado a la Iglesia*, loc. cit., p. 85.

<sup>353</sup>.- Aunque el plazo de comienzo de esta tercera fase era indeterminado, estando en función de que el Estado pusiese o no en marcha la segunda fase, de consignación y "asignación tributaria" simultáneas. Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, loc. cit., p. 181.

<sup>354</sup>.- Vid. GARCÍA-HERVÁS, D., *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, loc. cit., pp. 846-847. La ley 31/1990, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1991 -B.O.E., de 28 de diciembre-, puede consultarse en, 94, E.F. (1991), pp. 112-181. Esta disposición adicional tercera de la ley 31/1991, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1992, nos dice:

"Uno. En ejecución de lo previsto en el artículo II, apartado 2, del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y en el apartado 6 de la disposición adicional quinta de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, el porcentaje del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable en las declaraciones correspondientes al período impositivo de 1991, será el 0,5239 por ciento.

presupuestos generales del Estado para 1991 recogió en su disposición adicional tercera lo siguiente: "En ejecución de lo previsto en el artículo II, apartado 2 del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y en el apartado 5 de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, el porcentaje del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable en las declaraciones correspondientes al período impositivo de 1990, será el 0'5239 por 100.

La Iglesia Católica recibirá, mensualmente, durante 1991, en concepto de entrega a cuenta de la asignación tributaria, una dozava parte de la dotación presupuestaria de la Iglesia Católica en 1990. Cuando se disponga de los datos definitivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a 1990, se procederá a la regularización definitiva abonándose la diferencia a la Iglesia Católica o, en caso de que las entregas a cuenta hubieran superado el importe de la asignación tributaria, compensando el exceso con el importe de las entregas a cuenta posteriores".

Este texto suscita una serie de dudas o perplejidades:

- a) Es indudable que la naturaleza jurídica de tratado internacional de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede -a los que resulta de aplicación el artículo 96 de la Constitución española, de 1978- hace que el acuerdo sobre asuntos económicos prevalezca sobre cualquier norma legal o disposición contraria a él, ya sea por aplicación del criterio de jerarquía normativa, ya sea por aplicación del criterio del principio de competencia;
- b) En virtud del artículo VI del citado acuerdo las normas de ejecución deben dictarse de común acuerdo y no de forma unilateral;
- c) La disposición adicional dice de la asignación tributaria que ésta aparece regulada en el artículo II.2 del acuerdo, lo cual es una limitación de su contenido: la asignación tributaria se regula a lo largo de todo el artículo II, en cuyo apartado 3 -y refiriéndose a los recursos- se establece que han de ser de cuantía similar.
- d) ¿Cómo es posible que la disposición adicional tercera de la ley de presupuestos generales del Estado para 1991 se presente como norma de ejecución del acuerdo sobre asuntos económicos y en la misma medida de la disposición adicional quinta de la ley de presupuestos generales del Estado, para 1988, cuando esta última, a su vez, había sido dada ya como norma de ejecución del acuerdo?
- e) La disposición adicional afirma que "cuando se disponga de los datos definitivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a 1990, se procederá a la regularización definitiva abonándose la diferencia a la Iglesia católica o, en caso de que las entregas a

---

Dos. La Iglesia Católica recibirá, mensualmente, durante 1992, en concepto de entrega a cuenta de la asignación tributaria, una dozava parte de la dotación presupuestaria a la Iglesia Católica en 1990. Cuando se disponga de los datos definitivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a 1991, se procederá a la regularización definitiva, abonándose la diferencia a la Iglesia Católica o, en caso de que las entregas a cuenta hubieran superado el importe de la asignación tributaria, compensando el exceso con el importe de las entregas a cuentas posteriores.

Las entregas a cuenta, así como la liquidación definitiva que, en su caso, haya de abonarse a la Iglesia Católica, se harán efectivas minorando la cuantía total de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio correspondiente".

cuenta hubieran superado el importe de la asignación tributaria, compensando el exceso con el importe de las entregas a cuenta posteriores". Esta afirmación carece de sentido, pues era imposible que el importe de la asignación tributaria a recibir por la Iglesia en 1991 fuera superior -si además no se modificó el porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas- a lo recibido por medio de la dotación presupuestaria de 1990; por tanto, ¿para qué se dice "abonándose la diferencia a la Iglesia Católica"? En definitiva, parece que con el texto de la citada disposición adicional se pretendía endeudar a la Iglesia con el Estado, lo cual no tiene nada que ver con lo establecido en el Acuerdo. Máxime si se tiene en cuenta que la ley de presupuestos generales del Estado del año siguiente recogió expresamente esta disposición, añadiendo el párrafo que sigue: "Las entregas a cuenta así como la liquidación definitiva que, en su caso, haya de abonarse a la Iglesia Católica, se harán efectivas minorando la cuantía total de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio correspondiente". Sin embargo, y aun cuando ésta ha sido la tónica general de estos últimos años, la ley 21/1993, de 29 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, para 1994, en su disposición adicional tercera ha establecido algunas modificaciones:

- a) El apartado uno es idéntico al de la disposición adicional tercera de la ley de presupuestos generales del Estado para 1991;
- b) El Estado fija una cantidad que la Iglesia irá recibiendo mensualmente en concepto de entrega a cuenta; y una vez obtenidos los datos definitivos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, correspondiente al año 1993, se procederá, en su caso, al abono a favor de la Iglesia de la diferencia existente. Este sistema parece, en principio, más acorde con la normativa contenida en el acuerdo; lo que no parece tan claro es cuál ha sido el motivo por el cual el legislador ha llevado a cabo esta reforma;
- c) El contenido del párrafo segundo del segundo apartado no deja de ser confuso, y no parece añadir nada al contenido de lo que ya se había establecido;
- d) Más sorprendente es el apartado tercero, pues, aunque resulta del todo claro su tenor literal, lo que de ahí se desprende es que el Estado viene a condonar una deuda, que hasta el momento mantenía con él la Iglesia<sup>355</sup>.

La deficiente puesta en práctica del sistema fue criticada, en un clima de tensión y malestar, por parte de la Iglesia, que, una vez más, debió someterse a la decisión unilateral del Gobierno. El establecimiento de las "entregas a cuenta" de una cifra, que nunca llegaría a alcanzarse con un porcentaje del 0'5239 por ciento, no era más que una forma de mantener endeudada a la Iglesia, con la consiguiente amenaza de su libertad. Esta regulación tan falta de

<sup>355</sup>.- Vid. BLANCO, M<sup>a</sup>., *Cooperación del Estado con las confesiones religiosas en materia económica*, en AA.VV., *Tratado de Derecho Eclesiástico*, loc. cit., pp. 649-651. En 1998 vuelve a reiterar estas ideas y recuerda que se ha realizado una interpretación sesgada y política del acuerdo sobre asuntos económicos, en *La cooperación del Estado español...*, loc. cit., pp. 550-552.

realismo se ha mantenido invariable hasta la fecha. Efectivamente, la disposición adicional tercera se repitió, sin modificación alguna, en las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado. Se han seguido realizando los adelantos a cuenta, aunque manteniendo congeladas, y sin actualizar, las cantidades anuales. Sin embargo, en la ley de presupuestos generales de 1994, se ha incluido en la disposición adicional tercera un último apartado -que figura como "Tres", en el que se dice algo importante y sorprendente, desde la perspectiva internacionalista: "Se elevan a definitivas las cantidades entregadas a cuenta en los ejercicios 1991, 1992 y 1993". Esto significa, que se ha procedido a una prórroga del llamado sistema mixto -de coexistencia entre la "asignación tributaria" y dotación presupuestaria-, siendo así que, de los distintos plazos, que se prevén en el acuerdo económico, el único taxativamente establecido -de tres años de duración- era éste<sup>356</sup>. No deja de sorprender el alcance de esta disposición, pues significa una modificación de lo dispuesto en el acuerdo sobre asuntos económicos. Es de suponer que, previamente, ha sido convenido entre ambas Partes, pero sin que haya mediado, siquiera, canje de instrumentos, entre la Conferencia Episcopal -debidamente autorizada por la Santa Sede- y el Gobierno, lo cual es una buena muestra de falta de sensibilidad concordataria, cuando no de rigor formal<sup>357</sup>.

En la tercera fase la financiación de la Iglesia católica se llevará a cabo, exclusivamente, mediante el sistema de "asignación tributaria" -artículo II.2 del acuerdo económico, de 1979-<sup>358</sup>.

Esta etapa tiene las siguientes características:

- a) No procede, como la dotación estatal, del fondo general del presupuesto estatal, sino de una determinada clase de impuestos, los procedentes de la renta de las personas físicas, del patrimonio neto o de otro de carácter personal;
- b) El Estado señalará el porcentaje de las cuotas de aquellos contribuyentes, que, expresamente, manifiesten en la declaración respectiva su deseo de que la parte afectada sea entregada a la Iglesia católica. Ello no supone para estos contribuyentes un recargo de su presión tributaria, ya que la parte destinada a la Iglesia católica, es un porcentaje de lo que les correspondía pagar al Estado; como tampoco pagarán menos impuestos, los que en dicha declaración no manifiesten su voluntad sobre el destino de la parte afectada, pues en esta hipótesis "la cantidad correspondiente será destinada a otra finalidad" -artículo II.2 del acuerdo económico, de 1979-;
- c) El nuevo sistema no es, por consiguiente, un impuesto religioso estatal ni eclesiástico, ya que ni el Estado lo impone a sus súbditos por motivos religiosos, ni siquiera a los católicos, ni la Iglesia lo impone a éstos, como en los países germánicos, encargándose el Estado de su recaudación;
- d) Con el nuevo sistema se consigue que ningún ciudadano contribuya, forzosamente, al sostenimiento de la Iglesia, ni siquiera los católicos, sino sólo aquéllos que así lo deseen expresamente, ya que la cantidad entregada a la Iglesia no se toma del presupuesto general del Estado, sino del porcentaje de ciertos impuestos, que tienen que satisfacer al fisco aquellas personas, que

<sup>356</sup>.- Vid. GARCÍA-HERVÁS, D., *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, loc. cit., pp. 847-848.

<sup>357</sup>.- Vid. GARCÍA-HERVÁS, D., *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, loc. cit., pp. 847-848.

<sup>358</sup>.- Vid. MARTÍN SÁNCHEZ, I., *La financiación de las confesiones religiosas en el Derecho español*, loc. cit., p. 147.

- hayan manifestado su deseo de que la cantidad afectada sea destinada a ese fin;
- e) La referida declaración no se opone al precepto constitucional, según el cual "nadie podrá ser obligado a declarar su ideología, religión o creencias", ya que a nadie se le obliga, ni siquiera a los católicos, a hacer tal declaración, ya que ésta es absolutamente voluntaria para todos. Puede hacerlo o no, pero dicha declaración no implica siquiera la pertenencia a la religión católica, del que la hace, puesto que pueden hacerla también los no católicos y omitirla los que lo son;
  - f) La Iglesia deberá presentar también en esta fase su memoria anual, pues sólo así podrá el Estado fijar el porcentaje del impuesto, de los que declaren su voluntad de entregar dicha cuota a la Iglesia, con el fin de que ésta reciba una cantidad actualizada y similar a la dotación que antes le entregaba el Estado;
  - g) La duración de este sistema es indeterminada, por ser indeterminado también el momento en que la Iglesia alcance su "propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades", según declara el artículo II.5 del acuerdo económico, de 1979. Pero no sólo es indeterminado el fin de este sistema, sino también su inicio, ya que éste depende de que el Estado pusiera o no en marcha el segundo período de dotación, y asignación simultánea y de cuándo lo hiciera<sup>359</sup>.

Nos encontramos, *en teoría*, actualmente, en la fase llamada "asignación tributaria exclusiva o plena" del artículo II.2 del acuerdo sobre asuntos económicos, en que el contribuyente destina un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, siempre que manifieste, de forma expresa, su voluntad en la declaración respectiva<sup>360</sup>. Para GOTI ORDEÑANA esta tercera fase se trata, en realidad, de una participación en los "impuestos estatales", aunque alcance únicamente a aquella parte, que los ciudadanos, voluntariamente, entreguen para ayudar a la Iglesia católica. De forma que, aunque hay una tendencia a repercutir, de alguna forma, el sostenimiento del culto sobre los mismos usuarios, sin embargo, se trata de un acto de liberalidad del Estado, pues se desprende de parte de sus impuestos<sup>361</sup>.

Esta tercera fase no tiene un tiempo de duración determinado, puesto que deberá mantenerse hasta el momento, en que la Iglesia católica logre su autofinanciación<sup>362</sup>. No se establece, por tanto, plazo alguno para dar por terminada ese período; la única limitación en la duración es, la que establece el artículo II.5 del acuerdo sobre asuntos económicos, por el que la Iglesia "declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes". Añade que, "cuando fuera conseguido este propósito", se irá a otro acuerdo, que sustituirá el contenido del presente<sup>363</sup>.

<sup>359</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Sistema español de dotación estatal a la Iglesia*, en GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., *Régimen jurídico de sus relaciones*, loc. cit., pp. 179-180.

<sup>360</sup>.- Vid. GARCÍA-HERVÁS, D., *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 842.

<sup>361</sup>.- Vid. GOTI ORDEÑANA, J., *Del sistema de dotación al de colaboración económica con las Confesiones religiosas*, loc. cit., p. 172.

<sup>362</sup>.- Vid. MARTÍN SÁNCHEZ, I., *La financiación de las confesiones religiosas en el Derecho español*, loc. cit., p. 147.

<sup>363</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., pp. 324-325. En este mismo sentido vid. MARTÍN DE AGAR, J.-T., *Notas sobre la cooperación económica del Estado con la Iglesia Católica*, loc. cit., p. 794; igualmente GOTI

En este tercer período, se suprime la dotación estatal presupuestaria, recibiendo la Iglesia del Estado un porcentaje de rendimiento de la imposición. Una vez pasados los tres años del período de aplicación simultánea -artículo II.4 del acuerdo económico-, el Estado debe suprimir -aunque, finalmente, se ampliaría el plazo- la dotación del presupuesto y se limita a ser un vehículo de transmisión de la parte correspondiente al porcentaje, que se señala<sup>364</sup>. Efectivamente, una vez transcurridos los tres años de la fase anterior, concluirá la misma, para dar inicio a esta tercera etapa, y la Iglesia, en esta tercera fase, únicamente percibirá el resultado de la "asignación tributaria", cualquiera que sea su importe, hasta el momento, en que pueda, en base a sus recursos o bien con los donativos de los fieles, sostenerse a sí misma. Por ello, una vez transcurrido el período transitorio 1988-1990, la Iglesia católica queda únicamente a merced, de lo que se recaude por la "asignación tributaria para fines religiosos", quedando el Estado liberado de dotar a la misma a partir del 1 de enero, de 1991 de la diferencia, puesto que su única obligación, en este tercer período, es el de transferir a la Iglesia lo recaudado por la "asignación tributaria"; de ahí la necesidad de que los católicos se conciencien, con el fin de garantizar a la Iglesia católica una financiación suficiente, sobre todo a partir de 1 de enero, de 1991, fecha, en que la dotación estatal habrá quedado, totalmente, sustituida por la "asignación tributaria", siendo esta última la única fuente de ingresos, que la Iglesia obtendrá del presupuesto del Estado<sup>365</sup>.

El apartado sexto de la disposición adicional quinta de la ley 33/1987, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, para 1988, nos dice:

"A partir de 1991 y en tanto operan las previsiones del apartado 5 del artículo II del Acuerdo con la Santa Sede, el sistema de dotación presupuestaria a la Iglesia Católica quedará definitivamente sustituido por el de asignación tributaria. Cada año, la Iglesia Católica recibirá mensualmente, en concepto de entrega a cuenta, una dozava parte de la asignación tributaria correspondiente al penúltimo ejercicio presupuestario anterior. Esta cantidad se regularizará definitivamente cuando se disponga de los datos definitivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio correspondiente".

La disposición adicional sexta de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, para 1993 -B.O.E., de 30 de diciembre y 6 de enero-<sup>366</sup>, bajo la rúbrica de "*Asignación tributaria a fines religiosos y otros*" nos dice:

"Uno. En ejecución de lo previsto en el artículo II, apartado 2, del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y en el apartado 6 de la disposición adicional quinta de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, el porcentaje del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable en las declaraciones correspondientes al período impositivo de 1992 será 0'5239 por 100.

Dos. La Iglesia Católica recibirá, mensualmente, durante 1993, en concepto de entrega a cuenta de la "asignación tributaria", una dozava parte de la dotación que

---

ORDENANA, J., *Del sistema de dotación al de colaboración económica con las Confesiones religiosas*, loc. cit., p. 172.

<sup>364</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 325.

<sup>365</sup>.- Vid. PÉREZ DE AYALA, J.L., *La asignación tributaria a la Iglesia católica y sus implicaciones constitucionales. Una reflexión*, loc. cit., p. 644.

<sup>366</sup>.- Vid. reproducida en 118, R.C.T.E.F. (1993), pp. 276-344; 118, E.F. (1993), pp. 276-344.

hubiera recibido en 1991. Cuando se disponga de los datos definitivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a 1992, se procederá a regularización definitiva abonándose la diferencia a la Iglesia Católica o, en caso de que las entregas a cuenta hubieran superado el importe de la "asignación tributaria", compensando el exceso con el importe de las entregas a cuenta posteriores.

Las entregas a cuenta así como la liquidación definitiva que, en su caso, haya de abonarse a la Iglesia Católica, se harán efectivas minorando la cuantía total de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio correspondiente".

La disposición adicional tercera de la ley 21/1993, de 29 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, para 1994<sup>367</sup> -B.O.E., de 30 de diciembre-, bajo la rúbrica "Asignación tributaria a fines religiosos y otros" nos dice:

"Uno. En ejecución de lo previsto en el artículo II, apartado 2, del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y en el apartado 6 de la disposición adicional quinta de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, el porcentaje del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable en las declaraciones correspondientes al período impositivo de 1993 será 0'5239 por 100.

Dos. La Iglesia Católica recibirá, mensualmente, durante 1994, en concepto de entrega a cuenta de la "asignación tributaria", 1.525.000.000 de pesetas. Cuando se disponga de los datos definitivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a 1993, se procederá, en su caso, a la regularización definitiva, abonándose la diferencia, si existiera, a la Iglesia Católica.

Las entregas a cuenta, así como la liquidación definitiva que, en su caso, haya de abonarse a la Iglesia Católica, se harán efectivas minorando la cuantía total de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio correspondiente.

Tres. Se elevan a definitivas las cantidades entregadas a cuenta en los ejercicios 1991, 1992 u 1993"<sup>368</sup>.

La disposición adicional decimotercera del real decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera<sup>369</sup> -B.O.E., 30 de

<sup>367</sup>.- Vid. el comentario a esta disposición adicional tercera en AA.VV., *Legislación del Estado español. Régimen económico*, X, A.D.E.E. (1994), p. 496.

<sup>368</sup>.- La ley 21/1993, en su disposición adicional tercera, estableció una modificación importante: la de elevar a definitiva las cantidades entregadas a cuenta en 1991, 1992 y 1993. El sistema se reitera en la ley de presupuestos generales del Estado del año siguiente, de manera que se mantiene el porcentaje y se elevan a definitivas las cantidades entregadas en el ejercicio anterior. Sin embargo, la cantidad entregada a cuenta fue incrementada. Este sistema se ha ido prorrogando año tras año hasta la última ley de presupuestos del Estado, para 1999. Esta disposición adicional tercera supone "un endeudamiento" de la Iglesia con el Estado. Máxime cuando las leyes de presupuestos de los años siguientes han añadido el párrafo que sigue: "Las entregas a cuenta así como la liquidación definitiva que, en su caso, hay que abonarse a la Iglesia Católica, se harán efectivas minorando la cuantía total de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio correspondiente". Vid. BLANCO, M<sup>a</sup>, *La cooperación del Estado español...*, loc. cit., pp. 549-551.

<sup>369</sup>.- Vid. reproducida, íntegramente, en 176, R.A.T. (1995), pp. 587-597; 2, L.F. (1996), pp. 230-244; 1, Q.F. (1996), pp. 5-16. La citada disposición adicional decimotercera del real decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, nos dice:

diciembre-, en lo referente a la entrega a cuenta de la "asignación tributaria a fines religiosos", establece que la cuantía asignada en este apartado se incrementará para 1996 en un 3'5 por ciento, elevándose a definitivas las cantidades, entregadas a cuenta en 1995.

La ley 12/1996, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, para 1997 -B.O.E., de 31 de diciembre-<sup>370</sup>, en su disposición adicional tercera, y bajo la rúbrica "asignación tributaria a fines religiosos y otros" nos vuelve a recordar que:

"Uno. En ejecución de lo previsto en el artículo II, apartado 2, del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y en el apartado 6 de la disposición adicional quinta de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, el porcentaje del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable en las declaraciones correspondientes al período impositivo de 1996 será 0,5239 por 100.

Dos. La Iglesia Católica recibirá, mensualmente, durante 1997, en concepto de entrega a cuenta de la asignación tributaria, 1.676.000.000 de pesetas. Cuando se disponga de los datos definitivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a 1997, se procederá, en su caso, a la regularización definitiva, abonándose la diferencia, si existiera, a la Iglesia Católica.

Las entregas a cuenta, así como la liquidación definitiva que, en su caso, haya de abonarse a la Iglesia Católica, se harán efectivas minorando la cuantía total de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio correspondiente.

Tres. Se elevan a definitivas las cantidades entregadas a cuenta en 1996".

Finalmente, en la ley 65/1997, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, para 1998 -B.O.E., de 31 de diciembre-, en su disposición adicional segunda, y bajo la rúbrica "*asignación tributaria a fines religiosos y otros*", se reproduce en la actual ley de presupuestos para 1999.

La ley 49/1998, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, para 1999 -B.O.E., de 31 de diciembre-, en su disposición adicional decimoséptima, y bajo la rúbrica "*asignación tributaria a fines religiosos y otros*", establece que:

"Uno. En ejecución de lo previsto en el artículo II, apartado 2, del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y en el apartado 6 de la disposición adicional quinta de la ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, el porcentaje del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicable en las declaraciones correspondientes al período impositivo de 1998 será 0,5239 por 100.

Dos. La Iglesia Católica recibirá, mensualmente, durante 1999, en concepto de entrega a cuenta de la asignación tributaria, 1.741.798.000 de pesetas. Cuando se disponga de los datos definitivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a 1998, se procederá, en su caso, a la regularización definitiva, abonándose la diferencia, si existiera, a la Iglesia Católica.

---

"La cuantía establecida en el apartado dos de la disposición adicional tercera de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, se incrementará para 1996 en un 3'5 por 100. Se elevan a definitivas las cantidades entregadas a cuenta en 1995".

<sup>370</sup>.- Vid. reproducida en 4, B.O.M.E.H. (1997), pp. 699-819.

Las entregas a cuenta, así como la liquidación definitiva que, en su caso, haya de abonarse a la Iglesia Católica, se harán efectivas minorando la cuantía total de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio correspondiente.

Tres. Se elevan a definitivas las cantidades entregadas a cuenta en 1998".

Como puede apreciarse, la redacción es idéntica a las últimas leyes presupuestarias, salvo la cantidad a percibir, por lo que podemos reiterar las afirmaciones hechas en la ley 21/1993, de 29 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, para 1994, en su disposición adicional tercera. Por todo ello, puede afirmarse que las leyes de presupuestos generales del Estado están hipotecando año tras año la libertad religiosa, que representa uno de los pilares básicos del Estado español, además de violarse reiteradamente el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, que es uno de los vértices, en los que se apoya el Derecho eclesiástico del Estado. El porcentaje del 0'5239 por ciento sigue manteniéndose tras una década, sin alteración alguna, y sin vislumbrarse la pretensión, ya sea por parte del Estado, ya sea por parte de la Iglesia española de cumplir con sus obligaciones pacticias de autofinanciarse, cuestión que será estudiada en otro momento.

Esta tercera fase no tiene estipulado plazo alguno, pudiendo, en palabras de PANIZO Y ROMO DE ARCE, tener un "ámbito temporal ilimitado", salvo que la Iglesia, a tenor del artículo II.5 del acuerdo económico, lograra -cosa que es utópica- los medios suficientes para su autofinanciación<sup>371</sup>.

Este sistema de "asignación tributaria", tiene ventajas de personalizar, en cierto modo, la ayuda a la Iglesia, y de evitar las críticas de que era objeto la dotación presupuestaria, críticas, que se apoyaban, en que el presupuesto estatal está formado por las contribuciones de todos los ciudadanos, católicos o no, por lo que la partida, destinada a la Iglesia, venía a ser, como una imposición contraria a la libertad religiosa. Pero, en realidad, la "asignación tributaria" tiene, realmente, carácter estatal, en cuanto el Estado asigna a la Iglesia un porcentaje de las cuotas recaudadas, al único objeto de proporcionar a la Iglesia "recursos de cuantía similar" a la dotación, que viene a sustituir a la Iglesia -artículos II.2 y II.3 del acuerdo económico-<sup>372</sup>.

El artículo II.3 del acuerdo económico, al decir "este sistema -el de porcentaje- sustituirá a la dotación [...], de modo que proporcione a la Iglesia católica recursos de cuantía similar", podría hacer pensar que, una vez desaparecida la dotación, el Estado tendrá que señalar el porcentaje, de forma que su pronto resultante, sea similar a los recursos, que ahora recibe la Iglesia. Según PIÑERO CARRIÓN, con ello el acuerdo deja abierta y generalizado este punto. Simplemente, dice: el sistema debe adecuar la cantidad del actual. Pero la necesidad de actualizar se restringe, ciertamente, a los dos períodos primeros, el de presupuesto, en tres ejercicios, y el de aplicación simultánea, en otros tres<sup>373</sup>. Aunque el Estado se compromete, a colaborar con la Iglesia católica, en la consecución de un adecuado sostenimiento económico -artículo II.1 del acuerdo sobre asuntos económicos-, la realidad es que ni el modo de

<sup>371</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 224. Vid. también PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, loc. cit., p. 181.

<sup>372</sup>.- Vid. MARTÍN DE AGAR, J.-T., *Notas sobre la cooperación económica del Estado con la Iglesia Católica*, loc. cit., p. 792.

<sup>373</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 325.

sustitución de un sistema por otro ha proporcionado a la Iglesia recursos similares, ni ha puesto los medios necesarios, para que la financiación de la Iglesia sea "*adecuado*"<sup>374</sup>.

MARTÍN DE AGAR señala que, a diferencia de lo que suele manifestar numerosos autores, es el artículo II.3 del acuerdo económico -y no el II.2-, el que impide la aparición del "impuesto religioso". Efectivamente -añade-, el párrafo 3 de este artículo II del acuerdo económico nos dice "sustituirá a la dotación [...], de modo que proporcione a la Iglesia católica recurso de cuantía similar". En realidad, es este artículo II.3 el que limita, de tal modo, la eficacia del artículo II.2, que lo convierte en algo distinto: una dotación extraída de un impuesto. Lo que varía no es el sistema en sí mismo, que sigue siendo una dotación global, sino el fondo del que se extrae, y el modo de determinar ese fondo: por la declaración voluntaria y expresa de los contribuyentes. En definitiva, el cambio va de una dotación presupuestaria a una dotación tributaria personalizada. Pero esa misma personalización se minimiza por la necesidad de proporcionar a la Iglesia "recursos de cuantía similar" a la dotación presupuestaria, haciéndose, prácticamente, inoperante el requisito de la declaración de voluntad de los contribuyentes<sup>375</sup>.

La única solución, compatible con nuestra Constitución española, de 1978, sería aquella, en la que el Estado se limite a servir de intermediario entre sus ciudadanos y la confesión, de la que son miembros, prestando sus mecanismos e instrumentos recaudatorios, dejando a salvo la voluntariedad de las aportaciones. A pesar de que el modelo ideal sería la *autofinanciación* de las confesiones<sup>376</sup>.

Antes de finalizar este período de "asignación tributaria", recogeremos algunas declaraciones, que, por su interés, pueden aportar alguna solución a los problemas existentes en este sistema de "asignación tributaria". Efectivamente, a veces, se publican en la prensa declaraciones, que propugnan la sustitución del sistema de "asignación tributaria" por otros mecanismos, como el de deducciones en la cuota u otras técnicas de desgravación. La Iglesia -nos indica Mons. HERRÁEZ RUBIO- está abierta a estudiar la adopción de medidas de este tipo, que pudieran venir a sustituir, parcial o totalmente, al sistema de "asignación tributaria". Por ello, valora positivamente, sobre todo, la agilidad y simplificación administrativa, que supondría cualquier mecanismo fiscal, que favoreciere los donativos directos de los sujetos pasivos de la Iglesia. Pero tendría que basarse en un planteamiento realista del sistema, que garantizase su eficacia, lo que, sin duda, no sucede con la deducción del diez por ciento de la cuota establecido en el artículo 78.6, c) de la ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas -aunque la última redacción dada a este artículo 78.6 por la ley 41/1994, de presupuestos generales del Estado para 1995 ha suprimido este párrafo c), tanto en la letra como en el contenido-<sup>377</sup>, porcentaje insuficiente para estimular una corriente importante

<sup>374</sup>.- Vid. GARCÍA HERVÁS, D., *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 842.

<sup>375</sup>.- Vid. MARTÍN DE AGAR, J.-T., *Notas sobre la cooperación económica del Estado con la Iglesia Católica*, loc. cit., pp. 793-794.

<sup>376</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas: fundamentos, alcances y límites*, loc. cit., p. 101, en la Conclusión novena.

<sup>377</sup>.- Vid. reproducida la misma en 142, 2, E.F. (1995), pp. 283-354; 165 bis, R.A.T. (1994), pp. 352-366. El artículo 78.6 de la ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y bajo la rúbrica "Deducciones por donativos", quedaba redactado por el artículo 62 -"Deducciones"- de esta ley 41/1994, de presupuestos generales del Estado, para 1995 -con efectos a partir del 1 de enero, de 1995, y únicamente para esa ejercicio- en otros términos. La ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias -B.O.E., de 10 de diciembre, de 1998-, en su artículo 55.3, suprime también la mención de la Iglesia católica y otras confesiones en "deducciones por donativos". También hay que tener en cuenta que el real decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el reglamento del impuesto de la renta de las personas físicas -B.O.E., de 9 de febrero- está en vigor desde el 10 de febrero.

de donativos por esta vía<sup>378</sup>. En realidad, HERRÁEZ RUBIO, tras analizar las dificultades que plantea la posible autofinanciación de la Iglesia católica, defiende la vigencia del sistema mixto, en el que se combinan, como fuentes de financiación de la Iglesia: las aportaciones más o menos voluntarias de los fieles, incrementándose, a su vez, las aportaciones fijas de los mismos, y, mientras la jerarquía no fije tributos obligatorios, que se mantenga la colaboración del Estado, perfeccionando el sistema vigente de "asignación tributaria", o, dotando a las instituciones eclesíásticas de un patrimonio, con capacidad de generar rentas, que redunden en beneficio de la Iglesia. Por ello, un fuerte incentivo para la Iglesia católica sería una desgravación fiscal del cien por cien<sup>379</sup>. Pero, además -añade Mons. HERRÁEZ RUBIO- el sistema más idóneo es el sistema mixto, que hoy día está vigente, en la potenciación de la cuotas fijas voluntarias, aceptadas por las familias católicas, que muchas parroquias han implantado con éxito evidente<sup>380</sup>.

El problema del sistema de "asignación tributaria" es la escasa información, que tiene el sujeto pasivo respecto al sistema actual, siendo un porcentaje elevado, el que dejan en blanco la casilla; siendo culpables de un altísimo tanto por ciento, el que gran parte de declaraciones son realizadas por asesorías fiscales, que dejan, muchas veces, la pregunta en blanco, por no preguntar al contribuyente su opción.

Urge, por consiguiente, una reforma sustancial del encuadre de la pregunta, que invite al sujeto pasivo en cuestión a contestar en uno u otro sentido, pudiendo, incluso, exigirse que la respuesta en sentido positivo, negativo, o en blanco, vaya firmada por el propio contribuyente en cuestión, unido todo ello a un sistema de información fiscal, que haga que los ciudadanos tengan una correcta información de la conveniencia, de contestar a tales cuestiones, y de que, en modo alguno, el sostenimiento de la Iglesia católica por esta vía implica sobrecarga alguna en la cuota, a satisfacer al Fisco, por no tratarse de un "impuesto religioso"<sup>381</sup>.

La Conferencia Episcopal española propone una serie de medidas para mejorar el sistema actual:

- a) Elevación del porcentaje, al menos, al uno por ciento, insistiendo, en que la eventual elevación del porcentaje, no debe llevar, aparejada -como ha propuesto el Gobierno- la medida, de que, por esta vía, se financien actividades, cuyo coste, debe ser soportado por otras instituciones, y que nunca han estado comprendidas en el ámbito específico de la ayuda económica del Estado a la Iglesia;
- b) La posibilidad de verificar las opciones en su favor, pues, hoy por hoy, la Iglesia no tiene posibilidad alguna, de comprobar, si el cómputo y el procesamiento de las opciones se ha realizado de modo correcto, situación, que se agrava, si se tiene en cuenta, que en el ejemplar, que conserva el contribuyente, no consta su decisión respecto al destino del porcentaje;
- c) Que se incremente la información, suministrada a la Iglesia, para que ésta pueda enfocar, adecuadamente, su campaña. De hecho, es fundamental conocer el porcentaje de contribuyentes, que han señalado la casilla de "otros fines", y de los que han ejercitado su opción, pues resulta claro, que refleja una actitud muy distinta por parte de los contribuyentes;

<sup>378</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 130.

<sup>379</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., pp. 134-135.

<sup>380</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 135.

<sup>381</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 227.

- d) Posibilidad de reformar las normas, que se refieren a la unidad familiar, como sujeto impositivo, de tal manera que puedan individualizar las opciones respecto del destino 0'5239 por ciento;
- e) Mejorar la cultura fiscal de los contribuyentes, y paliar los inconvenientes, que presenta el que, en no pocas ocasiones, sea la propia Asesoría Fiscal, la que elabora la declaración de la renta, como mandataria del sujeto pasivo, la cual, por pura negligencia o desinterés, no contesta a la pregunta, favoreciendo que se incremente el número de respuestas en blanco, o, lo que es lo mismo en la práctica, a favor de otros fines sociales<sup>382</sup>.

La disposición adicional tercera, bajo la rúbrica de "*Asignación tributaria a fines religiosos y otros*", nos dice:

"Uno. En ejecución de lo previsto en el artículo 2.º, apartado 2, del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y en el apartado 6 de la disposición adicional quinta de la ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, el porcentaje del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable en las declaraciones correspondientes al período impositivo de 1994 será 0'5239 por 100.

Dos. La Iglesia Católica recibirá, mensualmente, durante 1995, en concepto de entrega a cuenta de la asignación tributaria, 1.578 millones de pesetas. Cuando se disponga de los datos definitivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a 1994, se procederá, en su caso, a la regularización definitiva, abonándose la diferencia, si existiera a la Iglesia Católica.

Las entregas a cuenta, así como la liquidación definitiva que, en su caso, haya de abonarse a la Iglesia Católica, se harán efectivas minorando la cuantía total de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio correspondiente.

Tres. Se elevan a definitivas las cantidades entregadas a cuenta en 1994".

### **III.6.C.1. INFLUENCIAS Y ALTERNATIVAS APLICABLES AL DERECHO ESPAÑOL, DE LA "ASIGNACIÓN TRIBUTARIA" EN EL DERECHO COMPARADO ITALIANO.**

Aunque la fórmula española de "asignación tributaria" fue, sustancialmente, acogida en la ley italiana núm. 222, de 20 de mayo de 1985, en sus artículos 47 y 48, mediante la que se otorga vigencia a las normas paritariamente elaboradas por mandato concordatario para la revisión, entre otros puntos, de los compromisos financieros del Estado italiano con la Iglesia católica. Deben reseñarse, sin embargo, algunas significativas variantes sobre el modelo español:

- a) La ley 222 precisa que el destino de la parte correspondiente al Estado se aplicará a finalidades de interés social o de carácter humanitario -artículo 47-, entendiendo por tales -artículo 48- intervenciones extraordinarias para combatir el hambre en el mundo o calamidades naturales; para prestar

<sup>382</sup>.- Vid. GARCÍA-HERVÁS, D., *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, loc. cit., pp. 848-849.

asistencia a refugiados; o para contribuir a la conservación de bienes culturales. El destino de la parte, correspondiente a la Iglesia, se aplicará a finalidades de carácter religioso bajo su gestión directa. Se enumeran, más concretamente -artículo 48-, las exigencias del culto, la sustentación del clero y las intervenciones caritativas en favor de la colectividad nacional o de los países del tercer mundo;

- b) En segundo término, el modelo italiano establece que el destino de la cantidad, resultante de los contribuyentes, que no realizan ninguna opción, se establecerá en proporción a las opciones deseadas<sup>383</sup>

La primera diferencia se ha eliminado, no la segunda. La segunda debe orientarse, a mostrar si esa posibilidad contradice, de alguna manera, los principios de libertad e igualdad religiosa y de laicidad del Estado. No parece que la puntual cuestión, relativa al reparto proporcional de la cantidad resultante, de quienes no efectúen la opción, pueda juzgarse contraria a esos principios. La presunción, de que quienes no señalan, expresamente, el destino de la cuota de libre asignación, se muestran favorables a la contribución, a favor del Estado, resulta tan carente de fundamento, como contraria. Máxime si se tiene en cuenta la falta de "cultura fiscal" entre la ciudadanía, que dificulta, considerablemente, la comprensión misma del sistema. Efectivamente, quizá el problema hallaría una solución más equitativa, si se procediera de acuerdo con la técnica italiana del reparto proporcional, es decir, no dividiendo el *quantum* total de exactas mitades, sino valorando el número de electores de cada una de las opciones. El segundo estadio de la argumentación debe conducir, a comprobar el encaje, o no, de tal propuesta en la legislación vigente. Pero la posibilidad del reparto proporcional no se contempla en España de forma expresa, sino que, más bien sucede lo contrario, por lo que el problema se desplaza a la esfera de la interpretación de las normas<sup>384</sup>. Pero la nítida declaración del artículo II.2, *in fine*, del acuerdo económico de que "en ausencia de tal declaración, la cantidad correspondiente será destinada a otra finalidad", no parece que pueda llevar a una interpretación extensiva, que permita el reparto proporcional. El desarrollo reglamentario, en tal dirección, incurriría en la violación del principio de la jerarquía de normas. El cambio de criterio podría producirse mediante la revisión del acuerdo económico<sup>385</sup>. El protocolo de aprobación de normas formuladas por la comisión paritaria para los entes eclesiásticos en Italia, en el apartado 3 del artículo 47<sup>386</sup>, dispone que los destinos, a los que hace referencia el párrafo precedente, vendrán establecidos sobre la base de la opción, expresada por los contribuyentes en las declaraciones anuales de renta. En el caso de que el contribuyente no exprese ninguna opción, el destino se establecerá en proporción a las opciones expresadas. Tal solución, en el caso español no podría ser factible, ya que conculcaría lo dispuesto en el acuerdo económico, que establece,

<sup>383</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., pp. 224-225.

<sup>384</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 225.

<sup>385</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 225.

<sup>386</sup>.- Debe tenerse en cuenta que la ley de 20 de mayo de 1985, n. 222 son las elaboradas por la "comisión paritética", con las modificaciones introducidas por ambas Partes, y aprobadas en el protocolo de 15 de noviembre de 1984, hecho ejecutivo por ley de 20 de mayo de 1985, n. 206. Este párrafo 3 del artículo 47 del citado protocolo, nos dice:

"Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazioni si stabilisce in proporzione alle scelte espresse".

en su artículo II, que la declaración del contribuyente deberá ser de forma expresa, en lo que concierne a su deseo, de que tal porcentaje sea asignado a la Iglesia, de tal forma que, de no existir tal declaración, el Estado se ve obligado a destinarla a otros fines. Cualquier manipulación en la pregunta conculcaría no sólo el acuerdo económico, sino también ciertos principios constitucionales, como los de igualdad y libertad religiosa<sup>387</sup>.

Por todo ello, y a pesar de las diferencias, el modelo italiano, instaurado en 1984, es muy similar al español, susceptible, por tanto, de la misma crítica, aunque con dos defectos añadidos:

- a) Se crea un fondo estatal para templos -construcción y conservación-, dependiente de la organización estatal y administrado por ella, con la presencia, en su órgano colegiado, de tres representantes de la Conferencia Episcopal italiana. Con ello se está lesionando el principio de igualdad, y, en cierta manera, al configurarse a las actividades religiosas, como una especie de servicio público, el principio de laicidad;
- b) En las declaraciones de la renta, tanto en Italia, como en España, se le ofrecen al contribuyente dos alternativas, para que se indique, a cuál de ellas quiere destinar el ocho por mil: a la Iglesia católica o a otros fines sociales. Mientras que en España, los que no opten por ninguna alternativa, se entiende, que se destina para fines sociales, de acuerdo con las exigencias del principio de laicidad y habida cuenta, de que es lo más probable en caso de silencio; en el modelo italiano se reparte, proporcionalmente, a las opciones, expresamente hechas, entre esas dos alternativas, con lo que se pone en peligro el principio de laicidad del Estado<sup>388</sup>.

Sin duda, la solución más directa en España consistiría, en que el Estado español aumentase el porcentaje, a asignar en las declaraciones sobre la renta; posibilidad permitida tanto en el acuerdo económico, de 1979, como en el resto de la legislación interna española, para lo cual sería conveniente, que la Administración prevea con la suficiente antelación, y a través de las comisiones paritarias Iglesia-Estado la cantidad suficiente para los fines objeto de estudio, y que a través de una cooperación estrecha entre la Administración tributaria y la Dirección General de Asuntos Religiosos se puede llegar, a determinar la elevación de porcentajes; sistema que tendría su *modus operandi* en la modificación, en lo sucesivo, de las leyes de presupuestos, que fijan los datos del porcentaje, una vez dispuestos los datos definitivos y de recaudación de los ejercicios en cuestión, debiendo la Administración española hacer los cálculos oportunos de la recaudación, a prever para los ejercicios futuros<sup>389</sup>. El sistema italiano es acorde con este método de predicción, al disponer en el protocolo de 15 de noviembre de 1984, hecho ejecutivo por ley de 20 de mayo de 1985, n. 206 -y que fueron recogidas en la ley de 20 de mayo de 1985, n. 222-, que a partir del año fiscal de 1990, una cuota igual al ocho por mil -ya se observa que el porcentaje italiano, expresamente recogido en este protocolo, es muy superior al establecido por el Estado español, rondando el 0'8 por 100 -ocho por mil- y no el 0'5239 -algo más del cinco por mil- del caso español- del impuesto sobre la renta de las personas físicas, liquidada por la Administración en base a las

<sup>387</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 226.

<sup>388</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas: fundamentos, alcances y límites*, loc. cit., p. 83.

<sup>389</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 228.

declaraciones anuales, se destinará, en parte, a las finalidades apuntadas<sup>390</sup>. El mismo protocolo de 15 de noviembre de 1984, a continuación recoge, expresamente, el mecanismo a través del cual se entregará las cantidades: a partir del año fiscal 1993, el Estado entregará, anualmente, antes del mes de junio, a la Conferencia Episcopal italiana -C.E.I.-, a título de anticipo<sup>391</sup>. Como puede observarse, el sistema italiano hace que exista una previsión futura sobre la cuantía, que, determinará el porcentaje, para así obtener cantidades acordes con los fines de la Iglesia, solución que, unida al aumento de porcentajes, hará que, lo más acuciante del problema, quede resuelto en España<sup>392</sup>.

### III.6.C.2. CAUSAS QUE IMPOSIBILITAN EL PASO A LA ÚLTIMA ETAPA DE LA AUTOFINANCIACIÓN.

PÉREZ LUQUE afirma que "la deficiente educación tributaria del ciudadano español, tanto en el campo cívico como en el religioso", probablemente, alargará, durante décadas, la actual situación de "asignación tributaria", antes de alcanzar la última fase de autofinanciación<sup>393</sup>.

Comentario [Guill2]:

### III.6.C.3. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ETAPA DE LA "ASIGNACIÓN TRIBUTARIA".

PÉREZ LUQUE, sin salirse del ámbito del acuerdo sobre asuntos económicos, realiza dos propuestas:

- a) Elevar, convenientemente, el porcentaje de la "asignación tributaria", toda vez que si, probablemente, fue calculado en función de la proporción, que existía entre la subvención a la Iglesia en el año 1987 y la recaudación en dicho año por el impuesto sobre la renta, la mencionada proporción ha descendido muy notablemente en términos reales, al no ejercer la opción, en

<sup>390</sup>.- El apartado 2 del artículo 47 de la ley de 20 de mayo de 1985, n. 222, que recoge las normas elaboradas por la "comisión paritética", con las modificaciones introducidas por ambas Partes, y aprobadas por el protocolo de 15 de noviembre de 1984, hecho ejecutivo por ley de 20 de mayo de 1985, n. 206 nos dice:

"A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica".

<sup>391</sup>.- El apartado 5 del artículo 47 de la ley de 20 de mayo de 1985, n. 222, nos dice:

"A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relativi al terzo periodo d'imposto precedente con destinazione alla Chiesa cattolica".

<sup>392</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 228.

<sup>393</sup>.- Vid. PÉREZ LUQUE, M., *Impuesto sobre la Renta y la asignación tributaria a la Iglesia*, loc. cit., pp. 123 y 125.

favor de la "asignación tributaria", la totalidad de los contribuyentes por el referido impuesto, sino un cuarenta por ciento escaso, por lo que el 0'5239 por ciento queda reducido, realmente, a un 0'20. Esta elevación debería ser obligada, cuando pasasen los tres años, que determina el acuerdo económico, de 1979, en su artículo II.2, es decir, a partir de 1990.

- b) Introducir, en el referido impuesto de la renta -o, mejor dicho, volver a introducir, porque ya estuvo vigente en la legislación anterior- la deducción de los donativos, entregados a la Iglesia o instituciones religiosas, oficialmente aprobadas por ésta, a fin de facilitar la aspiración de aquélla de una futura independencia económica, tal como expresa el artículo II.5 del acuerdo económico, de 1979, haciendo menos gravosa la doble imposición, que sufren los ciudadanos en la actualidad, al tener que contribuir a un tiempo para los fines de la Iglesia y del Estado<sup>394</sup>.

#### **III.6.D. PERÍODO 4. LA AUTOFINANCIACIÓN<sup>395</sup>, COMO VÍA POSIBLE, A LA QUE TIENDE LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA ESPAÑOLA (artículo II.5 del acuerdo sobre asuntos económicos).**

La Iglesia católica y las demás confesiones religiosas cristianas no han tenido nunca un programa económico concreto. Se diferencia en esto del judaísmo y del mahometismo, pues tanto la "ley mosaica", como el Corán, contienen normas, que aspiran, a regular la vida económica, de los que aceptan sus principios religiosos; aunque el cumplimiento de estas normas no ha sido nunca perfecto y en los últimos siglos lo ha sido cada vez menos<sup>396</sup>. Si el sistema vigente para la Iglesia católica, aunque adaptado a los nuevos principios constitucionales, es fruto de una evolución histórica, en el caso de las "confesiones no católicas", la regulación vigente ha sido creada casi *ex novo*. Históricamente, sin embargo, el Estado español no se ha ocupado de financiar a otra confesión, que no fuera la Iglesia católica<sup>397</sup>.

Concebido el programa de colaboración económica estatal directa como un proceso por fases, su punto de llegada es la autofinanciación de la Iglesia católica española. Así se reflejó en el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, y se ha ratificado en la ley de presupuestos para 1988. En consecuencia, parece claro que la autofinanciación eclesial resulta clave hermenéutica del programa acordado y su meta. Por ello, los presupuestos y esfuerzos para alcanzarla son acreedores de singular dedicación doctrinal<sup>398</sup>.

<sup>394</sup>.- Vid. PÉREZ LUQUE, M., *Impuesto sobre la Renta y la asignación tributaria a la Iglesia*, loc. cit., p. 125.

<sup>395</sup>.- Según las distintas etapas, en las que divide PIÑERO CARRIÓN, la dotación a la Iglesia en el acuerdo sobre asuntos económicos, la cuarta fase es la autofinanciación. Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.M.<sup>a</sup>, *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 326. Algunos autores califican la autofinanciación como tercer período. Vid. HIGUERA, G., *La asignación tributaria a la Iglesia católica*, loc. cit., pp. 103-104.

Sobre la autofinanciación también citaremos la siguiente bibliografía: vid. OLMO, J., Del, *La Iglesia quiere cambiar hacia la fórmula de mayor autofinanciación*, 1601, V.N. (1987-II), pp. 12-14.

<sup>396</sup>.- Vid. BELTRÁN, L., *Estudio introductorio*, en el número monográfico titulado *Religión y economía*, loc. cit., pp. XIII-XV.

<sup>397</sup>.- Vid. COMBALÍA, Z., *Financiación de las confesiones no católicas en el Derecho español*, X, A.D.E.E. (1994), pp. 431-432.

<sup>398</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, 45, 125, R.E.D.C. (1988), p. 581.

Si esta meta de la autofinanciación se llega a alcanzar, carecerá de sentido que el Estado español siga coadyuvando al "adecuado" sostenimiento económico de esta confesión, al menos en la financiación o cooperación directa. Competerá a la Iglesia lograr por sí misma los recursos suficientes, con los que atender a sus necesidades, aunque éste posibilite cauces como el pactado en el artículo I del acuerdo sobre asuntos económicos. Aunque para llegar a este objetivo no se ocultan las dificultades, la declaración eclesial del artículo II.5 del convenio debe considerarse como una verdadera y decisiva declaración de principios vinculantes<sup>399</sup>. Que la Iglesia la sostengan sus fieles, más que una tesis defendida, nace en la Iglesia, como un hecho de deducción inmediata del ser mismo de la Iglesia: la familia de los creyentes forman una comunidad libre, donde los que tienen aportan a los gastos de todos<sup>400</sup>.

En este sentido, la tarea y proceso, para que la Iglesia logre en España los recursos suficientes, con que atender a sus necesidades es algo que, en primer término, compete a la propia confesión, organizando debidamente sus estructuras económico-administrativas, y estableciendo los medios o sistemas financieros adecuados, para conseguir ingresos con completa independencia del Estado. Éste, el Estado, lo que hace a través del artículo I del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, es reconocer y garantizar la libertad de la Iglesia, para recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosnas y oblações, fórmula lo suficientemente amplia, como para englobar muy diversas fuentes de obtención de recursos económicos, con los que ir logrando la autonomía financiera eclesial. No obstante, no puede ocultarse que siendo la meta de la autofinanciación una labor fundamentalmente eclesiástica su logro, o, al menos, su puesta en marcha, es cuestión que debe interesar muy mucho al propio Estado, por cuanto que alcanzada el ahorro para los caudales públicos será considerable<sup>401</sup>.

Este artículo II.5 del acuerdo sobre asuntos económicos, tiene un gran interés en nuestro estudio:

"La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado".

La meta de la autofinanciación es una labor fundamentalmente eclesiástica, pero su logro, o, al menos, su puesta en marcha, es cuestión que interesa muy mucho al propio Estado, por cuanto que alcanzado el ahorro para los caudales públicos será considerable<sup>402</sup>. El artículo II.5 del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, tendría viabilidad si la ley admitiera que las donaciones a la Iglesia estuvieran exentas de gravamen, esto es, se establecieran sin reparos incentivos fiscales para dichas donaciones<sup>403</sup>.

La aportación de los fieles a la Iglesia es una obligación que dimana de la inmediata pertenencia a la Iglesia. Es una obligación jurídica, pero no es jurídicamente exigible de hecho

<sup>399</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *Sistemas históricos de dotación del Estado español a la Iglesia española (siglos XIX-XX)* (Salamanca 1990), pp. 192-193.

<sup>400</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *Consecuencias internas en la Iglesia del nuevo sistema económico*, en AA.VV., *El hecho religioso en la nueva Constitución española*, loc. cit., p. 383.

<sup>401</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 581-582.

<sup>402</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 582.

<sup>403</sup>.- Vid. BLANCO, Mª., *Cooperación del Estado con las confesiones religiosas en materia económica*, en AA.VV., *Tratado de Derecho Eclesiástico*, loc. cit., p. 652.

ni la cantidad ni el método de aportación. Razones prácticas de carácter pastoral piden a la Iglesia en España no ir a un sistema de tributos, ni puramente eclesiales, ni con la colaboración del Estado, sino sólo a una intensa catequesis de ayuda a la Iglesia, que sea signo de una fe viva. Los procedimientos preferibles serían la oblación espontánea, las colectas y las suscripciones o tarjetas permanentes<sup>404</sup>.

Tal propósito de autofinanciación implica un compromiso, por parte de la Iglesia católica, de renunciar a la dotación del Estado o a la "asignación tributaria", tan pronto logre dicho objetivo. No se establece un plazo fijo en el acuerdo económico, de 1979, para llegar a la autofinanciación, ni hubiera sido prudente, por amplios, que fuesen los límites, señalados al mismo<sup>405</sup>. Sin embargo, para otros autores en este artículo II.5 la Iglesia católica española ha optado, oficialmente, por la autofinanciación, como ideal. No parece posible entender aquella declaración en otro sentido. Por ello, puede afirmarse que a la Iglesia católica le ha faltado el valor necesario, para declarar que prescindirá, totalmente, de la ayuda del Estado en un plazo fijo<sup>406</sup>.

El acuerdo sobre asuntos económicos reconoce a la Iglesia católica la libertad de obtención de recursos económicos por sí misma, a través de diversos medios, y desde una posición tanto activa como pasiva. Activa en el sentido de que se le posibilita que pueda emprender y organizar muy variados medios de allegarse recursos económico-patrimoniales, tanto con base en su propio ordenamiento jurídico como al ordenamiento civil. Pasiva, ya que, a la vez, puede legítimamente percibir, o ser sujeto pasivo beneficiario, de entregas económico-patrimoniales de diverso género. El único límite establecido a su facultad de financiarse por recursos y sistemas propios, sin colaboración de los poderes públicos, vendrá impuesto como para cualquier otro sujeto, por la legalidad, por el propio ordenamiento jurídico general<sup>407</sup>.

En el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, una vez que se establece la hipótesis de haber alcanzado la autofinanciación, se añade que continuará prestándose de común acuerdo a través de "otros campos y formas de colaboración". Lo que cesa no es la cooperación económica, que, expresamente, se dice que continuará prestándose por otros caminos, sino "los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores". Es decir, los sistemas de dotación presupuestaria global y de asignación de un porcentaje de la imposición sobre la renta o sobre el patrimonio neto. Es como si de lo que se pretendiera huir no fuera tanto de la cooperación económica del Estado a la Iglesia, cuando de unas formas concretas -la dotación y la inmediatamente prevista- de prestar esa cooperación<sup>408</sup>.

El sistema de "asignación tributaria" no está en contradicción con la autofinanciación. Entendida la asignación tributaria, como una contribución gestionada por el Estado, serían los propios ciudadanos, quienes -aparte de sus donaciones voluntarias- financiarían la Iglesia, cooperando al Estado con sus órganos de gestión para el ingreso de dichos tributos<sup>409</sup>.

<sup>404</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *Consecuencias internas en la Iglesia del nuevo sistema económico*, en AA.VV., *El hecho religioso en la nueva Constitución española*, loc. cit., p. 384.

<sup>405</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Sistema español de dotación estatal a la Iglesia*, en GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., *Régimen jurídico de sus relaciones*, loc. cit., p. 180.

<sup>406</sup>.- Vid. BASCOMPTE, A., *Acuerdo sobre Asuntos Económicos*, XXVIII, 335, *El Ciervo* (1979), p. 10.

<sup>407</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *Sistemas históricos de dotación del Estado español a la Iglesia española (siglos XIX-XX)*, loc. cit., pp. 195-196.

<sup>408</sup>.- Vid. GONZÁLEZ, E., *Régimen fiscal y subvenciones a las instituciones de la Iglesia Católica*, 63, E.E. (1988), p. 461.

<sup>409</sup>.- Vid. BLANCO, Mª., *Cooperación del Estado con las confesiones religiosas en materia económica*, en AA.VV., *Tratado de Derecho Eclesiástico*, loc. cit., p. 653.

Si el Estado financia la Iglesia católica la somete. Por ello, deben ser los fieles, quienes la sufraguen<sup>410</sup>. En realidad, son los fieles los que tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades -canon 222.1-<sup>411</sup>, y a cooperar a la edificación del Cuerpo de Cristo -canon 208-<sup>412</sup>, e, incluso, tienen el deber de manifestar a los Pastores sagrados su opinión sobre aquello, que pertenece al bien de la Iglesia -canon 212-<sup>413 414</sup>. DE ANGELIS, ha afirmado que:

"La partecipazione dei fedeli nella gestione economica è di rilievo pastorale per due motivi: a) perché, trattandosi di scelte concrete, è più sentita dai fedeli, b) perchè è condizione per lo sviluppo dell'attività pastorale: mentre in passato la fonte principale di finanziamento della Chiesa era costituita da redditi patrimoniale, oggi è data dalle offerte dei fedeli; e appare evidente la correlazione che c'è tra la partecipazione attiva di questi alla vita della Chiesa e la misura delle offerte. Sia chiaro in ogni caso che la crescita dello spirito di comunione è fine prevalente rispetto a quello di un più oculata gestione economica"<sup>415</sup>.

Al quedar plasmado en el artículo II.5 del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, que la Iglesia católica "declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades", parece evidente, que la Iglesia asume dos compromisos:

<sup>410</sup>.- Vid. CIERCO, E., *Concordato, sf. Concordato, no*, 679, V.N. (1969-I), p. 23.

<sup>411</sup>.- El artículo 222.1 del Código de Derecho Canónico, de 1983, nos dice:

"1. Los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras de apostolado y de caridad y el conveniente sustento de los ministros.

2. Tienen también el deber de promover la justicia social, así como, recordando el precepto del Señor, ayudar a los pobres con sus propios bienes".

<sup>412</sup>.- El artículo 209 del Código de Derecho Canónico, de 1983, nos dice:

"1. Los fieles están obligados a observar siempre la comunión con la Iglesia, incluso en su modo de obrar.

2. Cumplan con gran diferencia los deberes que tienen tanto respecto a la Iglesia universal como en relación con la Iglesia particular a la que pertenecen, según las prescripciones del derecho".

<sup>413</sup>.- El artículo 212 del Código de Derecho Canónico, de 1983, nos dice:

"1. Los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, están obligados a seguir, por obediencia cristiana, todo aquello que los Pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la Iglesia.

2. Los fieles tienen derecho a manifestar a los Pastores de la Iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales, y sus deseos.

3. Tienen el derecho, y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los Pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia hacia los Pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas".

<sup>414</sup>.- Vid. ANGELIS, A., De, *I consigli per gli Affari economici: statuti e indicazioni applicative*, CXI, M.E. (1986-I-II), p. 57.

<sup>415</sup>.- Vid. ANGELIS, A., De, *I consigli per gli Affari economici: statuti e indicazioni applicative*, loc. cit., p. 57.

- Una, de carácter moral, pues con ello, se pone de relieve, que la mejor forma de financiación de la Iglesia en España es, precisamente, la plena autofinanciación -autofinanciación, en este caso, sin la intervención del Estado-;
- Otra, de carácter jurídico, en la que se compromete, a actuar de buena fe, con la "diligencia de un buen padre de familia", para conseguir ese objetivo con ayuda de los fieles y su patrimonio<sup>416</sup>.

Para DUATO, la falta de un calendario fijo para la autofinanciación pone de manifiesto que hay una falta de voluntad decidida de llegar a ella, y, además, su imposibilidad, pues los fieles no se sentirán obligados a colaborar, si consideran que la aportación del Estado es suficiente e indefinido. A pesar de ello, el ideal de autofinanciación no es utópico, sino realizable. Lo que hace falta es quererlo de verdad<sup>417</sup>.

El sistema de autofinanciación de la Iglesia es como mejor respeta el derecho de libertad religiosa de los ciudadanos en este terreno económico: la Iglesia deberá recabar a través de uno u otro sistema prestaciones económicas de sus fieles-miembros exclusivamente. Esto queda posibilitado en el artículo I del pacto económico y queda, asimismo, facultado desde el propio orden jurídico-canónico<sup>418</sup>. Parece evidente que no se podrá llegar a la autofinanciación sólo con las aportaciones de los fieles. En definitiva, podría conseguirse el propósito de la autofinanciación de la Iglesia mediante los siguientes cauces conjuntos:

- a) Una contribución eclesiástica, gestionada por el Estado; para lo cual se podría aprovechar la actual técnica, empleada para la asignación tributaria;
- b) Las aportaciones de los fieles, siempre que gozaran de incentivos fiscales en atención al fin -entidad religiosa- al que se destinan;
- c) "Otras formas de cooperación" -artículo II.5 in fine- tanto directa como indirecta<sup>419</sup>.

La ayuda directa del Estado a la Iglesia católica es transitoria, y será sustituida, de común acuerdo entre el Estado y la Iglesia católica, una vez que la Iglesia católica logre, por sí misma, estos recursos, "por otros campos y formas de colaboración económica", que no podrá ser, por tanto, ni una dotación presupuestaria, ni una "asignación tributaria". Pero si la Iglesia ya tiene estos recursos, ¿para qué esta nueva colaboración económica? Aquí caben toda una serie de hipótesis, para financiar nuevas necesidades, de naturaleza igual o distinta a las actuales, pero desconocidas en el momento de la renuncia a la "asignación tributaria". Es una especie de "seguro de vida", que no parece congruente con el espíritu del acuerdo económico, de 1979, y que, incluso, es muy probable que ni el Estado ni la sociedad española puedan aceptar; o bien para financiarse directamente un tipo de necesidades hoy no protegidas en el acuerdo económico, de 1979 -enseñanza de disciplinas no eclesiásticas, acción sanitaria, acción cultural, etcétera-; o, incluso, para financiar prestaciones de la Iglesia católica a la sociedad no directamente pastorales, etcétera. Pero lo más razonable es que la futura colaboración

<sup>416</sup>.- Vid. *Esquema de trabajo para la ponencia sobre la autofinanciación de la Iglesia española (Ponencia)*, en *Iglesia y situación socioeconómica en la España de los 80 (material)*, loc. cit., p. 173.

<sup>417</sup>.- Vid. DUATO, A., *El acuerdo sobre asuntos económicos*, 79, I.V. (1979), pp. 68-69.

<sup>418</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *Sistemas históricos de dotación del Estado español a la Iglesia española (siglos XIX-XX)*, loc. cit., pp. 192-193.

<sup>419</sup>.- Vid. BLANCO, Mª., *Cooperación del Estado con las confesiones religiosas en materia económica*, en AA.VV., *Tratado de Derecho Eclesiástico*, loc. cit., p. 654. Vid. también, a fecha de 1998, en *La cooperación del Estado español...*, loc. cit., p. 555.

económica contemplará los supuestos contemplados en la segunda y en la tercera hipótesis, o sobre otros supuestos semejantes -financiación del patrimonio artístico de la Iglesia, etcétera-. En todo caso, lo que es claro es que la acción pastoral o propia "*strictu sensu*" de la Iglesia católica deberá ser financiada, en todo caso, por ésta<sup>420</sup>. Efectivamente, una vez que se alcance la autofinanciación de las aportaciones del Estado a la Iglesia ha de inspirarse en las obras docentes, asistenciales, de formación o de promoción humanas, que reviertan en beneficio común de la sociedad española. No son los principios religiosos, sino las obras sociales de la Iglesia católica, las que justifican la colaboración del Estado con la Iglesia<sup>421</sup>.

Para GOTI ORDEÑANA es, precisamente, en esta cuarta fase, cuando la Iglesia tenga su propio sistema de recursos suficientes, para la atención de sus servicios -artículo II.5 del acuerdo económico-, y se acuerden formas de colaboración para otros fines, cuando se pueda hablar propiamente de cooperación<sup>422</sup>. En esta fase no es que el Estado deje de subvencionar los aspectos y las labores sociales de la Iglesia católica -enseñanza, sanidad o cualquier otra labor social-, sino que lo hará en igualdad de circunstancias con otras entidades -religiosas o no, católica o no-, por los respectivos intereses sociales, que también desarrolla la Iglesia católica, sesgadamente reconocidos por la propia Constitución, de 1978, en el artículo 16.3. Por ello, no se aportarán cantidades, ni globales, ni por "asignación tributaria", por parte de la Hacienda Pública con el destino estrictamente religioso. La separación económica será, entonces, completa, sin diferenciación con el resto de personas jurídicas de mayor o menor interés social, a no ser por el grado, intensidad y servicios sociales, que se presten<sup>423</sup>.

El propósito de la Iglesia católica de autofinanciarse, es uno de los aspectos más ambiguos del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, por tratarse de algo que en la actualidad no deja de ser una mera utopía, sin que ello implique novedad en el terreno legislativo, pues el concordato de 1953, ya preveía la creación de un patrimonio eclesiástico para la dotación del clero -artículo XIX.1-, aunque sin, finalmente, realizarse hasta hoy día. Sin duda, y en el terreno de los ideales, sería el sistema más correcto de financiación, aunque el mismo no es acorde con una masa patrimonial de bienes, cuyo mantenimiento, ya de por sí, da origen a grandes gastos<sup>424</sup>. Sin embargo, tampoco debe aparecer la autofinanciación como algo irrealizable, pues se ha conseguido en Francia, donde no desapareció la Iglesia por falta de recursos económicos tras la aprobación de la ley de separación de 1905, que prohíbe toda ayuda directa o indirecta<sup>425</sup>.

Este artículo II.5 del acuerdo económico recoge una declaración de propósito, no -a juicio de PIÑERO CARRIÓN- un compromiso contractual. Al decir "lograr por sí misma", indica que será sin intervención del Estado, no ya en el presupuesto, sino ni siquiera como intermediario, en relación con el sistema de porcentaje de los contribuyentes católicos, que lo declaren así a este efecto. Además, no marca plazos -"cuando fuera conseguido este propósito"-<sup>426</sup>. Mons. HERRÁEZ RUBIO, al comentar este artículo II.5 del acuerdo sobre asuntos

<sup>420</sup>.- Vid. *Esquema de trabajo para la ponencia sobre la autofinanciación de la Iglesia española (Ponencia)*, en *Iglesia y situación socioeconómica en la España de los 80 (material)*, loc. cit., pp. 174-175.

<sup>421</sup>.- Vid. SÁENZ DE SANTA MARÍA, M., *Las actuales relaciones económicas de la Iglesia católica con el Estado español: aportación económica del Estado y tributación de la Iglesia*, 93, H.P.E. (1985), pp. 123-124.

<sup>422</sup>.- Vid. GOTI ORDEÑANA, J., *Del sistema de dotación al de colaboración económica con las Confesiones religiosas*, loc. cit., p. 172.

<sup>423</sup>.- Vid. HIGUERA, G., *La asignación tributaria a la Iglesia católica*, loc. cit., p. 107.

<sup>424</sup>.- Vid. PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, loc. cit., pp. 185-186.

<sup>425</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *El impuesto religioso. Cooperación económica estatal con las confesiones religiosas*, loc. cit., p. 124.

<sup>426</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 326.

económicos, matiza que, aunque en este artículo II.5 la Iglesia declara su propósito de llegar, en algún momento, al sistema de autofinanciación, se trata sólo de una declaración de intenciones, que no puede dar lugar a un salto en el vacío. La Iglesia -añade- sigue en esta línea, pero éste es un proceso en el que debe avanzarse con realismo y sin improvisaciones, e, inevitablemente, llevará tiempo<sup>427</sup>. GARCÍA-HERVÁS matiza que, el que se alcance la cuarta fase -autofinanciación- no significa, que el sistema de "asignación tributaria" deba ser sustituido *en todo caso*, por otro; ello no tiene que ser, necesariamente, así, porque el artículo II.5 del acuerdo económico afirma, que las Partes se pondrán de acuerdo, para sustituir los anteriores sistemas de cooperación por otros, lo cual puede entenderse de la siguiente manera: la Iglesia y el Estado se pondrán de acuerdo para sustituir "o no" los sistemas de cooperación vigentes por otros. Porque una excesiva literalidad en la lectura de este precepto, llevaría al absurdo, de considerar, necesariamente, derogada e impracticable, en el futuro, cualquier forma de cooperación, vigente hasta entonces. Por ello, GARCÍA-HERVÁS entiende, como excluidas, únicamente aquellas formas de cooperación, que no se ajusten al "espíritu que informa las relaciones entre Iglesia y Estado" -preámbulo del acuerdo sobre asuntos económicos-<sup>428</sup>.

En caso de que se alcance el propósito de lograr los recursos suficientes, las partes se comprometen, a establecer un nuevo acuerdo, sustituyéndose los sistemas anteriores "por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado"; no se cierran las puertas a colaboraciones de otro orden, como puedan ser: subvenciones a obras determinadas, ayudas extraordinarias, etcétera. Lo que sí parece excluirse es la perpetuidad de alguno de los sistemas, que, expresamente, deberán entenderse caducados<sup>429</sup>.

De lo que no cabe duda, es que, si la transitoriedad, que se le otorga a la "asignación tributaria", se alarga, excesivamente, es posible, que aparezcan problemas, promovidos o por el Estado, o por algunos partidos políticos<sup>430</sup>.

Los sistemas, para alcanzar la autofinanciación, son, básicamente, los siguientes:

- a) El primero lo podríamos llamar sistema mixto de recaudación de ingresos y que implicaría mantener la asignación tributaria, concebida como una contribución eclesiástica, gestionada por los órganos de la Administración Pública, y, además, las donaciones de los fieles con los correspondientes incentivos fiscales;
- b) El segundo es el que parte de la erradicación de la "asignación tributaria", en cuyo caso el procedimiento de sustitución podría ser el que sigue -partiendo del hecho de que a medida que aumentan las donaciones disminuye la asignación-: ya que la asignación tributaria es completada por una cantidad adicional hasta completar los 1.525 millones de pesetas, la disminución afectará primero a este complemento y sólo una vez superado por los ingresos por donaciones se iniciará la disminución de los ingresos por asignación tributaria, hasta completar la cifra fijada por el Gobierno, de modo que proporcione a la Iglesia católica recursos de cuantía similar, a los que venía concediendo en el momento que fueran firmados los acuerdos. Entonces la disminución no se hará en la cantidad global, sino en el porcentaje; y en el

<sup>427</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 131.

<sup>428</sup>.- Vid. GARCÍA-HERVÁS, D., *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, loc. cit., p. 853.

<sup>429</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, loc. cit., p. 326.

<sup>430</sup>.- Vid. *Esquema de trabajo para la ponencia sobre la autofinanciación de la Iglesia española (Ponencia)*, en *Iglesia y situación socioeconómica en la España de los 80 (material)*, loc. cit., p. 175.

caso de que en el ejercicio siguiente disminuyera la cantidad obtenida por donaciones, se abonaría a cuenta del ejercicio o los ejercicios siguientes, el suplemento correspondiente. Y cuando los ingresos por donaciones superen a la asignación tributaria en tres períodos consecutivos, se entenderá que esta última desaparece<sup>431</sup>.

### III.6.D.1. LA POSTURA OFICIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA ESPAÑOLA, CON RESPECTO A LA "AUTOFINANCIACIÓN" DE LA MISMA.

El sínodo de Tortosa afirma que "se ha de mentalizar a los fieles acerca de la necesidad de la autofinanciación de la Iglesia Diocesana y se han de dar pasos en este sentido"<sup>432</sup>. Igualmente, el arzobispado de Pamplona<sup>433</sup>. En este mismo sentido, la diócesis de Canarias<sup>434</sup>. E, igualmente, el arzobispado de Granada<sup>435</sup>. El sínodo de Toledo recordará que "la autofinanciación no libera, sin embargo, al Estado de su responsabilidad económica frente a la Iglesia. Sus fieles, que son al mismo tiempo ciudadanos del Estado y contribuyen como los demás con el pago de sus impuestos, tienen derecho a que el Estado atienda también la dimensión trascendente del hombre y sus necesidades religiosas. Y del mismo modo que otorga subvenciones a distintos organismos y personas para los más diversos objetivos, debe hacerlo también con la Iglesia, como institución pública, a fin de que ésta pueda dar respuesta satisfactoria a otras necesidades de carácter social, cultural y religioso"<sup>436</sup>. En mayo de 1990 el consejo presbiteral de Mallorca y el consejo pastoral diocesano estudiaron una ponencia sobre "autofinanciación de la Iglesia de Mallorca" en donde se exponían diecisiete conclusiones. De entre ellas, destacan tres como más urgentes:

- "1. [...]
    - No vemos posible la *autofinanciación* de la Iglesia si no se camina hacia la autofinanciación de cada uno de sus elementos.
    - No vemos posible la *autofinanciación* de la diócesis si previamente no se intenta la autofinanciación de cada una de sus parroquias.
    - No vemos posible concienciar a los fieles si no se da una *transparencia administrativa* en toda la Iglesia: en lo que tiene, en lo que necesita y en qué y cómo lo administra.
- El sistema de suscripciones parece positivo y eficaz [...]

<sup>431</sup>.- Vid. BLANCO, M<sup>a</sup>., *Cooperación del Estado con las confesiones religiosas en materia económica*, en AA.VV., *Tratado de Derecho Eclesiástico*, loc. cit., pp. 654-655.

<sup>432</sup>.- Vid. la diócesis de Tortosa, en el *sínodo diocesano Convocados por el espíritu... Sínodo de la Iglesia de Tortosa 1984-1988*, Tortosa 1989, núm. 218, citado en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 94 y nota 37.

<sup>433</sup>.- Vid. el arzobispo de Pamplona, en el *sínodo pastoral diocesano de la Iglesia en Navarra -1987 a 1989-*, Pamplona 1990, núm. 17, citado en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 94 y nota 37.

<sup>434</sup>.- Vid. la diócesis de Canarias, en el *sínodo diocesano Constituciones sinodales, Las Palmas de Gran Canaria 1992*, núms. 165-166, citado en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 94 y nota 37.

<sup>435</sup>.- Vid. el arzobispado de Granada, en el *III sínodo diocesano Constituciones sinodales, Granada 1990*, núm. 1141, citado en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 94 y nota 37. Sobre Granada es interesante el esfuerzo hacia la autofinanciación, que está realizando: vid. BLANZO ZULOAGA, J., *Granada. Hacia la autofinanciación*, 1689, V.N. (1989-I), p. 17.

<sup>436</sup>.- Vid. el arzobispado de Toledo, *Constituciones sinodales. XXV sínodo diocesano, Toledo, 1991*, núms. 30-31, citado en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 94.

Conviene que ante el pueblo haya unos *seglares* que sean los responsables de la economía de las parroquias. Que actúen como tales y den cuenta a la gente. Pero no por eso debe abandonar el párroco su propia responsabilidad"<sup>437</sup>.

A las donaciones y colectas se le deberían sumar las suscripciones fijas mensuales o anuales, formulación más moderna y, si es posible, domiciliadas en los bancos o cajas de ahorro<sup>438</sup>.

En una campaña a favor de la autofinanciación de la archidiócesis de Madrid, se aconseja entregar el uno y el cinco por ciento del salario neto a la Iglesia, preferentemente a través de suscripciones bancarias periódicas, que daban derecho a una desgravación del diez por ciento en la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas desde el 1 de enero de 1992<sup>439</sup>. En la diócesis de Murcia también se ha iniciado una campaña de autofinanciación, que aconseja una cuota fija mensual de 1.000 pesetas, que podrán domiciliar en su banco o caja de ahorros<sup>440</sup>. Pero lo cierto es que la autofinanciación está todavía lejana. Las aportaciones de los fieles son aún insignificantes. Las diócesis más próximas a conseguir esa meta son las catalanas, donde se ha alcanzado un porcentaje de autofinanciación del 79'29%, aunque Barcelona, individualmente, ha conseguido llegar al 85'75%. Bilbao apenas el 72% y Madrid rondaba el 62% antes de su fragmentación<sup>441</sup>.

Pero cuando los obispos españoles proclaman más la necesidad de ayudar a la Iglesia católica, es con ocasión de cumplimentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas -I.R.P.F.-<sup>442</sup>.

En 1992, los obispos españoles insisten en la "autofinanciación" directa de la Iglesia y señala los cauces más efectivos para realizar esa ayuda: a) "asignación tributaria" a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas; b) donativos a la Iglesia católica, que están sometidos a un régimen fiscal especial; c) ofrecimientos directos de colaboraciones parroquiales -mensuales o anuales-<sup>443</sup>. En este mismo año de 1992 se recordarán los esfuerzos, realizados por la Iglesia, para organizar más adecuadamente su economía, la necesidad de una más directa y regular "autofinanciación" de la Iglesia por parte de sus fieles, etcétera, pero también "el derecho de la Iglesia a ser ayudada por el Estado con fondos públicos, incluso en sus actividades religiosas, como una sociedad de interés social, por lo menos con los mismos títulos que otras muchas. Y todo ello sin merma alguna de la libertad religiosa ni alteración de la aconfesionalidad del Estado apoyada en su justa significación por todos nosotros"<sup>444</sup>.

El documento elaborado sobre este tema por los secretariados sociales diocesanos de Pamplona y Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria -"¿Aportación económica del Estado a la

<sup>437</sup>.- Vid. DÁRDER, J., *Campaña para la autofinanciación de la Iglesia de Mallorca*, 2574, Ecclesia (1992-I), p. 10.

<sup>438</sup>.- Vid. GARCÍA DÍAZ, E., *Sed responsables: poned la cruz*, 2580, Ecclesia (1992-I), p. 8.

<sup>439</sup>.- Vid. TORRE, Á., De La, *Archidiócesis de Madrid. Campaña a favor de la autofinanciación*, 2609, Ecclesia (1992-II), p. 6.

<sup>440</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ MARÍN, J., *La diócesis de Murcia inicia una campaña de autofinanciación*, 2663, Ecclesia (1993-II), p. 11.

<sup>441</sup>.- Vid. GARCÍA DÍAZ, E., *Sed responsables: poned la cruz*, 2580, Ecclesia (1992-I), p. 8.

<sup>442</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 94.

<sup>443</sup>.- Vid. *Para una diócesis más libre participa*, 259, B.O.O. de Orihuela-Alicante (1992), p. 144. Reproducida en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 105 y nota 70.

<sup>444</sup>.- Vid. la declaración del administrador apostólico de Málaga, *Ajustar las cuentas con la Iglesia*, 3, Boletín Interdiocesano de Andalucía Oriental (1992), p. 27; también reproducida en AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 105 y nota 71.

*Iglesia?*", en San Sebastián, en septiembre, de 1989- también parte de que "la autofinanciación de la Iglesia es una meta que goza del consenso de la mayoría", para alcanzar la "autonomía"<sup>445</sup>.

También han surgido críticas intraeclesiales. Es el caso de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, que manifiesta una postura totalmente contraria a la "asignación tributaria": un Estado laico y una Iglesia autónoma deben ser absolutamente independientes económicamente. La Iglesia debe ser sostenida "a todos los efectos por los miembros que la constituyen como pueblo. Una Iglesia que no recibe adecuadas aportaciones económicas de sus fieles, o no tiene fieles o no es Iglesia. Todo lo demás, es decir, las aportaciones estatales, ciertos manejos eclesásticos turbios de las finanzas y algunas donaciones a la Iglesia poco esclarecidas, no se justifican evangélicamente", afirmando que les gustaría que se llegase "lo antes posible a la sola donación voluntaria de los fieles". Postura análoga es la mantenida por las Comunidades Cristianas Populares<sup>446</sup>.

### III.6.D.2. PRIMEROS INTENTOS DEL VATICANO, PARA REORGANIZAR LA ECONOMÍA DE LA SANTA SEDE, COMO GERMEN DE LOS SURGIDOS EN LAS IGLESIAS NACIONALES, ENTRE ELLAS ESPAÑA<sup>447</sup>.

Tras el escándalo del I.O.R. se hizo necesario reformar la financiación de la Iglesia católica<sup>448</sup>. Las finanzas del Vaticano, es cierto que han sido fuente de múltiples sospechas y de leyendas, que han deteriorado la imagen de la Iglesia<sup>449</sup>. Esta desconfianza es fruto del secreto, con que se rodea los balances y los ingresos del Vaticano, que favorece la aparición de rumores de todo tipo sobre las finanzas vaticanas<sup>450</sup>. CERETI ha llegado a afirmar que "hasta no hace muchos años, los ingresos y las actividades financieras del Vaticano constituían una intrincada maraña"<sup>451</sup>.

El deseo de Juan Pablo II es de conseguir una transparencia en los asuntos económicos del Vaticano, para conseguir una mayor eficacia y rentabilidad, que, a su vez, se traduce en un mejor reparto entre diócesis de países ricos y de países pobres. En 1979 se hizo público, por primera vez en la Historia, el déficit del presupuesto general de la Santa Sede: veinte millones

<sup>445</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 108.

<sup>446</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, loc. cit., p. 108.

<sup>447</sup>.- La bibliografía sobre la falta de claridad en las finanzas del Vaticano es la siguiente: vid. PARTNER, P.D., *Camera Papae: problems of Papal finance in the later middle ages*, 4, J.E.H. (1953), pp. 55-68. Vid. *Les finances du Saint-Siège: réunion à Rome des présidents des Conférences épiscopales (8-9 avril), 2029, D.C. (2 juin 1991)*, pp. 553-554. Vid. *Les finances du Pape. Communication de la Conférence épiscopale d'Allemagne*, 1919, D.C. (1 juin 1986), pp. 574-576. Vid. PELAYO, A., *Finanzas del Vaticano*, 742-743, V.N. (1970), pp. 19-26. Vid. FERNÁNDEZ ARDANAZ, S., *El Vaticano paga las deudas del IOR y se llega a la firma del nuevo Concordato*, 1414, V.N. (1984-I), p. 34. Vid. *Les problèmes économiques du Saint-Siège et de la Cité du Vatican. Communiqué de la Salle de presse du Saint-Siège*, 1895, D.C. (5 mai 1985), p. 492. Vid. *Comptes d'exploitation du Saint-Siège: Année financière 1986 (5 mars)*, 1959, D.C. (3 avril 1988), pp. 351-352. Vid. *Communiqué du Conseil des cardinaux pour l'étude des problèmes économiques du Saint-Siège (5 mars)*, 1959, D.C. (3 avril 1988), p. 353. Vid. *Les finances du Saint-Siège: le déficit s'accroît. Communiqué du Conseil de cardinaux*, 1982, D.C. (16 avril 1989), p. 386.

<sup>448</sup>.- Vid. sobre esta cuestión en ZIZOLA, G., *Finances du Vatican: le scandale n'a pas été vain*, 582, I.C.I. (1983), pp. 5.-9.

<sup>449</sup>.- Vid. BARRIALES, A., *Finanzas vaticanas: cuentas claras*, 2039, *Ecclesia* (1981-II), p. 39.

<sup>450</sup>.- Vid. CERETI, G., *Recursos y actividades financieras del Vaticano*, 137, II, *Concilium* (1978), p. 468 -tr. de R. Velasco Beteta-.

<sup>451</sup>.- Vid. CERETI, G., *Recursos y actividades financieras del Vaticano*, loc. cit., p. 470.

de dolares, cantidad que, en 1980, superó los treinta millones<sup>452</sup>. El déficit Vaticano ascendió a 58.418 millones de liras en el año 1984, tal y como queda de manifiesto en el comunicado del mismo Vaticano. A partir de este año, y con este significativo gesto, se inicia la apertura de la imagen de las finanzas del Vaticano<sup>453</sup>. Efectivamente, la idea riqueza del Vaticano contrasta con el ejercicio de 1985, que terminó con un déficit de seis mil quinientos millones de pesetas<sup>454</sup>. En el año 1989, la Santa Sede tuvo el siguiente balance: déficit de 54'7 millones de dolares -87'8 de ingresos y 142'5 de gastos-, cubierto con los 48'4 de las ofrendas de los fieles -óbolo de San Pedro-, y el resto con parte del superávit del Estado de la Ciudad del Vaticano. El déficit subió en un veinticinco por ciento respecto al año anterior -de 43'5 en 1988 a 54'6 en 1989-, pero esto se debe, a que, por primera vez en ese año, se incluyeron los costes de gestión de las ciento dieciocho representaciones pontificias en todo el mundo<sup>455</sup>.

La decisión de la Santa sede, de mantenerse con los réditos de su propiedad, le ha permitido una independencia económica, que quizá, tuvo su función en el pasado, pero hoy la sitúa en cierta contradicción con las posiciones que el Papado ha tomado oficialmente ante el liberalismo económico y el capitalismo -por ejemplo, en la *Populorum Progressio*-. El Vaticano depende, económicamente, del sistema capitalista, depende de los beneficios, que las grandes multinacionales, obtienen, incluso, de paíse en vías de desarrollo y se encuentra jutno al capital en ciertos conflictos sociales. Por ello, CERETI propone que se dé a conocer las necesidades reales del Vaticano, para concienciar a los cristianos de su colaboración<sup>456</sup>.

### III.6.D.3. LOS BENEFICIOS ECLESIASTICOS, COMO SISTEMA ABANDONADO, PARA ALCANZAR LA AUTOFINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA.

#### A) LA NECESIDAD DE UN PATRIMONIO PARA LA IGLESIA CATÓLICA.

Queriendo la Iglesia que sus ministros estuviesen con el decoro correspondiente a su clase, exigió en todo tiempo par ala ordenación "in sacris" una congrua o título canónico, y, ante la escasez de beneficios, que asegurasen este fin, se admitió por el Papa Inocencio III la forma subsidiaria del patrimonio eclesiástico. Constituyese éste mediante la adscripción o afección de ciertos bienes o rentas para el cumplimiento de aquella finalidad, y entre los distintos medios que a ella conducen está cuando el ordenado constituye el patrimonio con bienes propios, imponiéndose a sí mismo la prohibición de enajenar ciertos inmuebles<sup>457</sup>.

La Iglesia justifica su derecho a poseer bienes temporales en tanto en cuanto éstos le son necesarios para el cumplimiento de su misión salvífica -*Gaudium et Spes*, 76; canon 1254.1-<sup>458</sup>.

Las más importantes reformas estructurales, realizadas por el ordenamiento canónico actual, en la organización económica de la Iglesia están en torno a la remuneración de los clérigos: la reforma del sistema benefical -canon 1272 del Código de Derecho Canónico, de 1983-, la instauración de una masa común de bienes -parroquial, canon 531; diocesanos, canon

<sup>452</sup>.- Vid. BARRIALES, A., *Finanzas vaticanas: cuentas claras*, loc. cit., p. 38.

<sup>453</sup>.- Vid. Vaticano. *Los problemas económicos*, 1470, V.N. (1985-II), p. 38.

<sup>454</sup>.- Vid. CASSATA, G., *El mito de las riquezas del Vaticano*, 258, Palabra (1987), p. 12.

<sup>455</sup>.- Vid. F.M., *Crece el déficit de la Santa Sede*, 308, Palabra (1990), p. 19.

<sup>456</sup>.- Vid. CERETI, G., *Recursos y actividades financieras del Vaticano*, loc. cit., p. 487.

<sup>457</sup>.- Vid. TUR, V., *La ordenación "in sacris" a título de patrimonio eclesiástico*, III, 27, R.C.D.I. (1927), pp. 161-165.

<sup>458</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La "conveniente remuneración" de los clérigos en el Código de Derecho Canónico (c. 281, §1), CXIII, 371, 3, C.T. (1986), p. 527.*

1274.1; interioceanos, canon 1274.5...- son nuevas instituciones económicas, que tienen su origen, en última instancia, en la búsqueda de una adecuada solución a esta materia<sup>459</sup>.

## **B) LOS BENEFICIOS ECLESIAÍSTICOS, COMO SISTEMA DESCENTRALIZADO ¿UNA INSTITUCIÓN FEUDAL, AÚN VIGENTE, EN EL NUEVO CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, DE 1983?<sup>460</sup>**

El sistema histórico de la cuatripartición o división de las rentas, provenientes de los bienes eclesiásticos, en cuatro partes: obispo, clero, pobres y "fábricas ecclesiae" -clasificación, que, en España, fue tripartita-, estimándose que era a los clérigos, a quienes correspondía dar lo superfluo a los pobres, como parece lo más probable; hoy, por suerte, se ha producido un cambio radical. Así fue como, desde el momento que la partición suponía una individualización jurídicamente estable, de los distintos afines, a que debían servir los réditos, el patrimonio diocesano continuaba siendo, jurídicamente, uno, hasta que se verificó el tránsito del régimen centralizado al descentralizado o benefical. Pero la cuatripartición produjo unos efectos distintos a los deseados, que eran la equitativa atención al culto, clero y pobres, sin que alguno de esos fines pudiera sufrir menoscabo, por la invasión o prepotencia de otro, dando una capacidad económica y de poder a cada obispo y clérigo<sup>461</sup>.

FERNÁNDEZ REGATILLO, en 1967, señalaba que "esta institución del beneficio eclesiástico se halla hoy en crisis, se halla, podríamos decirlo, en sus postrimerías", por ser una institución originaria del feudalismo. En el Concilio Vaticano II, en el Decreto conciliar sobre el ministerio y vida de los presbíteros, n. 20, llamaba a su supresión, o, al menos, a reformarlo<sup>462</sup>. La institución de los beneficios eclesiásticos, de tan venerada antigüedad, como medio para asegurar el honesto sustento de los ministros de la Iglesia, fue, durante siglos, necesaria o muy conveniente; pero dio lugar a numerosos abusos. Pero hoy día ya es una institución anticuada<sup>463</sup>. SOUTO ha afirmado que "pocas veces dos instituciones canónicas aparecen tan entremezcladas y confundidas como el oficio y el beneficio"<sup>464</sup>.

El Concilio Vaticano II rechaza el sistema benefical, ya que rompe la unidad del patrimonio, la administración se descentraliza y las rentas de unos bienes concretos se destinan a una labor precisa, que debe ser desarrollada por un sacerdote determinado: el beneficiado. Con anterioridad a este sistema había una unidad patrimonial de la diócesis y una administración centralizada. De este modo, se atendía en la retribución a las necesidades del clérigo y no a los trabajos y tareas concretos, que realizaba. De modo, que es aconsejable volver a este primitivo sistema, para garantizar que los sacerdotes tengan lo suficiente siempre y se puedan dedicar de lleno a sus funciones espirituales<sup>465</sup>. El espíritu del Concilio Vaticano II fue muy crítico

<sup>459</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La "conveniente remuneración" de los clérigos en el Código de Derecho Canónico* (c. 281, §1), loc. cit., p. 528.

<sup>460</sup>.- Sobre los beneficios eclesiásticos, vid. REINA, V., De, *En torno a los orígenes y fijación del beneficio eclesiástico*, XXII, 1-4, E.I.C. (1966), pp. 275-355. Vid. MASTAI FERRETTI, G., *L'amministrazione dei benefici ecclesiastici -autonomia della Chiesa e intervento dello Stato-*, Milano, 1974. Vid. REINA, V., DE, *El sistema benefical*, Pamplona, 1965.

<sup>461</sup>.- Vid. CECILIO, L., *El patrimonio eclesiástico en España*, loc. cit., p. 294. Este concepto de "officium" o "provisio" ha ido evolucionando. En los primeros siglos de la Edad Media, el beneficio constituía una masa patrimonial para asegurar la subsistencia del titular de la Iglesia. Vid. BASDEVANT-GAUDEMET, B., *Office ecclésiastique points de repères pour une histoire d'un concept*, 39, L'A.C. (1997), pp. 7 y ss.

<sup>462</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ REGATILLO, E., *¿El beneficio eclesiástico?* 47-48, M.C. (1967), p. 706.

<sup>463</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ REGATILLO, E., *¿El beneficio eclesiástico?*, loc. cit., p. 724.

<sup>464</sup>.- Vid. SOUTO PAZ, J.A., *La noción canónica de oficio* (Pamplona 1971), p. 222.

<sup>465</sup>.- Vid. GARCÍA CERRADA, A., *El problema económico del cura*, XLV, 385, H.D. (1968), pp. 371-378.

respecto a la institución benefical: ya en la etapa preparatoria del Concilio se pidió su supresión en diversos proyectos de documentos, porque se creía que el sistema benefical era obsoleto y no contribuía ya a cumplir sus fines principales. Tónica, que se mantuvo durante la celebración del Concilio: únicamente por la imposibilidad de su realización de forma global o por la existencia de graves dificultades -pactos con algunos Estados civiles, que atribuyen a los beneficios efectos civiles; etcétera- se prefirió su reforma, que debía ser realizado, de tal manera, que se atribuyera el lugar principal a la llamada parte espiritual -oficio- y se considerara como secundaria la parte benefical. Por ello se pospuso la reforma concreta del sistema benefical para la entrada en vigor del nuevo Código de Derecho Canónico, dadas las dificultades prácticas para su realización<sup>466</sup>. El Decreto *Presbyterorum Ordinis* del Vaticano II dispuso, en su n. 20, que "ha de abandonarse el sistema que llaman benefical o, al menos hay que reformarlo de tal modo que la parte benefical o de derecho a los réditos dotales anejos al beneficio se considere como secundaria y se atribuya, en Derecho, el primer rango al propio oficio eclesiástico". Por su parte, la norma ejecutiva contenida en el *motu proprio Ecclesiae Sanctae* I.8 añadía "la Comisión para la revisión del Código de Derecho Canónico tiene encomendada la reforma del sistema benefical. Entre tanto, procuren los Obispos, oídos sus Consejos de presbíteros, proveer a la equitativa distribución de los bienes, incluso de las rentas procedentes de los beneficios"<sup>467</sup>. En la asamblea conjunta obispos-sacerdotes, de 1971, en su ponencia III, bajo la rúbrica "*Criterios y cauce de la acción pastoral de la Iglesia*", se especificaba que:

"Heredado de la estructura social del pasado, el sistema benefical no se adapta ya a las exigencias pastorales de la Iglesia de hoy. La diferencia oficio-beneficio necesita rápidamente ser superada por otra: exigencias del Pueblo de Dios-servicio pastoral. El problema económico de la sustentación de quiénes se dedican a servicios pastorales será tratado en otra ponencia. Basta decir aquí que es necesaria una libertad apostólica suficiente para asegurar la movilidad de los recursos humanos de la Iglesia y su aplicación a las tareas estrictamente pastorales. Un obstáculo es en estos momentos el sistema benefical, que hay que revisar"<sup>468</sup>.

En la ponencia V, bajo la rúbrica de "*Los recursos materiales al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia*", de la asamblea conjunta obispos-sacerdotes, de 1971, se nos dice:

"Una lectura atenta de los números que el decreto conciliar *Presbyterorum ordinis* dedica al aspecto económico de la vida del presbítero nos revela los siguientes principio:

- a) *Que los beneficios eclesiásticos no se deben tener como una fuente de enriquecimiento personal.*

"Los bienes que recaban con ocasión del ejercicio de algún oficio eclesiástico, salvo el derecho particular, los presbíteros, lo mismo que los obispos, aplíquenlo, en primer lugar, a su honesto sustento y a la satisfacción de las exigencias de su propio estado, y lo que sobre

<sup>466</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia* (Salamanca 1993), p. 293.

<sup>467</sup>.- Vid. FORNÉS, J., *Régimen jurídico-patrimonial y financiación de la Iglesia desde la perspectiva de la libertad religiosa*, loc. cit., pp. 13-61.

<sup>468</sup>.- Vid. *Asamblea conjunta obispos-sacerdotes. Historia de la Asamblea. Discursos. Texto íntegro de todas las ponencias. Proposiciones. Conclusiones. Apéndices*, loc. cit., pp. 298-299.

sírvanse destinarlo para el bien de la Iglesia y para obras de caridad. No tengan, por consiguiente, el beneficio como ganancia ni empleen sus emolumentos para engrosar su propio caudal" (PO n. 17).

b) *Que el actual sistema benefical debe ser reformado.*

"Es preciso atribuir la máxima importancia a la función que desempeñan los sagrados ministros. Por lo cual hay que dejar el sistema que llaman benefical, o al menos reformarlo, de suerte que la parte benefical, o el derecho a los réditos dotales anejos al beneficio se considere como secundaria y se atribuya, en derecho, el primer lugar al propio oficio eclesiástico" (PO n. 20).

c) *Que la remuneración de los presbíteros ha de ser fundamentalmente la misma, dentro de ciertas condiciones.*

"La remuneración que cada uno ha de recibir, habida consideración de la naturaleza del mismo cargo y de las condiciones de lugares y tiempo, sea fundamentalmente la misma para todos los que se hallen en la misma circunstancia, sea adecuada su condición y les permita, además, no sólo proveer a la paga de las personas dedicadas al servicio de los presbíteros sino ayudar personalmente de algún modo a los necesitados" (PO n. 26).

d) *Se recomienda el que en cada diócesis o región se constituya un fondo común de bienes.*

"En cuanto sea posible, en cada diócesis o región se constituya un fondo común de bienes con que puedan los obispos satisfacer otras obligaciones y con que también las diócesis más ricas puedan ayudar a las más pobres" (PO n. 21).

Es prácticamente total el acuerdo que se da entre las proposiciones aprobadas en las diócesis y el contenido de los anteriores textos del concilio<sup>469</sup>.

En España, ya desde el año 1977, se ha venido procediendo a una reforma gradual del sistema benefical vigente, establecido básicamente por el concordato de 1851 -artículos 13-25, 31-34 y 38-, el Concordato de 1953 -artículos X y XIX- y el acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español para la provisión de beneficios no consistoriales de 16 de julio de 1946. Reforma que se ha hecho con una cierta resistencia por parte de algunos beneficiados. Reforma, que, a partir del 1 de enero de 1978, se hizo más urgente: el Estado español desde esa fecha substituyó el sistema de dotación estatal a la Iglesia católica de las denominadas piezas eclesiásticas por el de dotación global, entregada a la Conferencia Episcopal española<sup>470</sup>.

La Conferencia Episcopal española tenía que afrontar la reforma del sistema benefical imperante en nuestro país por otra razón importante: para intentar conseguir una retribución fundamentalmente igual para todos los clérigos. La asamblea conjunta obispos-sacerdotes de 1971, había manifestado que las diferencias existentes en la retribución del mismo clero diocesano se debían no precisamente a las tareas desempeñadas o a la capacidad individual, sino a la falta de intercomunicación de los bienes entre las diversas instituciones eclesiales<sup>471</sup>.

La XXVII asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal española -21 a 26 de noviembre, de 1977- acordó el siguiente criterio orientador para la retribución de los sacerdotes

<sup>469</sup>.- Vid. *Asamblea conjunta obispos-sacerdotes. Historia de la Asamblea. Discursos. Texto íntegro de todas las ponencias. Propositiones. Conclusiones. Apéndices*, loc. cit., pp. 432-433.

<sup>470</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 299.

<sup>471</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 300.

beneficiados: a los sacerdotes titulares de un beneficio, cuya dote no alcance la dotación base establecida para todos los sacerdotes diocesanos y que, a juicio del ordinario, no se les puede encomendar un oficio eclesiástico. Se les garantizaría esta dotación base en el complemento necesario de la dote benefical hasta alcanzar la cuantía establecida en la diócesis como dotación base. La XXVIII asamblea diócesis, celebrada los días 27 febrero a 4 de marzo de 1978, al analizar los criterios, según los cuales se debía distribuir la dotación estatal globalizada entre las diócesis españolas, ya señalaba que el Episcopado, en conexión con la Santa Sede, debía establecer criterios claros y precisos sobre el tema benefical, porque, de lo contrario, se temía fundamentalmente que pudiera ser fuente de permanentes disgustos y tensiones por la misma dinámica del nuevo sistema económico, que se quería establecer en la Iglesia española<sup>472</sup>.

PETRONCELLI, al analizar el concepto de oficio eclesiástico -íntimamente ligado con el de beneficio- escribe que "il Concilio Vaticano II non ha dato elementi per una dottrina generale dell'ufficio ecclesiastico. E non poteva darli perché il Concilio, dopo avere affrontato il delicato problema dei poteri dei Vescovi, non si può dire sia sceso al particolare a proposito del concetto di ufficio ecclesiastico. Le norme di cui oggi la dottrina, oltre quelle del codice vigente, dispone sono solo quelle del decreto conciliare *Presbyterorum ordinis*, noto sotto il nome di decreto sul ministero e la vita dei presbiteri; ma il passo che tanto ha richiamato, e, giustamente, l'attenzione della dottrina, quello del n. 20, non può assolutamente dirsi che costituisca un testo completo sulla disciplina legislativa della nozione di un istituto tanto fondamentale nelle strutture della Chiesa"<sup>473</sup>.

El canon 1409 del Código de Derecho Canónico, de 1917, bajo la rúbrica -en la parte V de su libro III- "*De los beneficios y otros institutos eclesiásticos no colegiados*" nos dice:

"El beneficio eclesiástico es una entidad jurídica constituida o erigida a perpetuidad por la competente autoridad eclesiástica, que consta de un oficio sagrado y del derecho a percibir las rentas anejas por la dote al oficio".

PETRONCELLI, al estudiar el beneficio eclesiástico en el canon 1409 del Código de Derecho Canónico, de 1917, señala que:

"nel can. 1409, più sopra ricordato, attribuendo, la personalità al beneficio considera l'ufficio solo come uno degli elementi dello stesso beneficio e quasi un elemento secondario, oggi si è tenuto anzitutto a riaffermare la prevalenza dell'ufficio sul beneficio, e, del resto, se la formulazione del can. 1409 poteva lasciare adito a qualche perplessità, già la dottrina, e noi stessi, in passato avevamo messo in guardia da una troppo letteraria interpretazione del canone, come più sopra si è ricordato"<sup>474</sup>,

En el canon 1410 del Código de Derecho Canónico, de 1917, se establecen los bienes, que constituyen el beneficio eclesiástico:

"Constituyen la dote del beneficio, ora los bienes que pertenezcan a la misma entidad jurídica, ora prestaciones ciertas y debidas de alguna familia o persona moral, ya ofrendas ciertas y voluntarias de los fieles, que pertenecen al

<sup>472</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., pp. 300-301.

<sup>473</sup>.- Vid. PETRONCELLI, M., *Polemiche sulla nozione di ufficio ecclesiastico e gli insegnamenti del Concilio Vaticano II*, III, Jus (1976-1977), p. 228.

<sup>474</sup>.- Vid. PETRONCELLI, M., *Polemiche sulla nozione di ufficio ecclesiastico e gli insegnamenti del Concilio Vaticano II*, loc. cit., p. 229.

rector del beneficio; ya los llamados derechos de estola, dentro de los límites fijados por el arancel diocesano o por la costumbre legítima, o bien las distribuciones corales, excluida la tercera parte de las mismas si todas las rentas del beneficio consisten en distribuciones corales".

El nuevo Código de Derecho Canónico, de 1983, en su Libro V, dedicado a los bienes temporales de la Iglesia, en su Título I y II, declara su voluntad de abandonar, al menos como principio, el tradicional sistema benefical, al cual reserva sólo un canon -el 1272-, frente a los ochenta del código precedente -cánones 1409 a 1488-<sup>475</sup>.

Hoy lo poco del sistema benefical, que logró sobrevivir a las desamortizaciones del siglo XIX, está llamado a extinguirse. Según el Código de Derecho Canónico, de 1983, no se podrán erigir nuevos beneficios, y los existentes serán regulados por las normas transitorias de las Conferencias Episcopales, acordadas y aprobadas por la Sede Apostólica -canon 1272 del Código de Derecho Canónico, de 1983-<sup>476</sup>. La desaparición del sistema benefical favorece la eficacia y agilidad de la organización y rentabilidad del patrimonio eclesiástico, permitiendo la concentración del mismo para una ordenada inversión en las necesidades propias de la Iglesia, así como la justa equiparación de los titulares de los oficios, al suprimir desigualdades innecesarias e injustificadas<sup>477</sup>.

Accediendo a los deseos del Vaticano II, de que el sistema benefical fuera abandonado o, al menos, reformado, el núm. 20 del decreto *Presbyterorum ordinis*, establecía que el sistema benefical fuera abandonado, o, al menos, reformado, el canon 1272 del Código de Derecho Canónico, de 1983, lleva a cabo tal reforma. Su supresión es porque el sistema benefical se opone a una verdadera solidaridad económica entre las distintas personas jurídicas eclesiásticas, así como a una equitativa igualdad en la remuneración de los titulares de los diversos oficios eclesiásticos, recomendada por el Vaticano II, en el decreto *Presbyterorum ordinis* núm. 20. En efecto, si en vez de tener en cada diócesis una masa común de bienes, para atender a las necesidades de las distintas personas jurídicas eclesiásticas y cada uno de los titulares de los oficios sagrados, continúan existiendo en ellas muchas y diferentes masas de bienes, vinculadas cada una de ellas a los distintos oficios es difícil, por no decir imposible, el logro de dicho objetivo, ya que cada beneficiado tiene derecho a disponer libremente de las rentas del beneficio para su decoroso sustento<sup>478</sup>.

El canon 1272 del Código de Derecho Canónico, de 1983, nos dice:

"En las regiones donde aún existen beneficios propiamente dichos, corresponde determinar su régimen a la Conferencia Episcopal, según normas establecidas de acuerdo con la Sede Apostólica y aprobadas por ésta, de manera que las rentas e incluso, en la medida de lo posible, la misma dote de los beneficios, pasen gradualmente a la institución de que se trata en el can. 1274, §1".

<sup>475</sup>.- Vid. COLOMBO, M., *L'Istituto per il sostentamento del clero e problemi connessi*, CXI, M.E. (1986-I-II), p. 89. Este Código dedica en su Libro I "De las normas generales" un título entero titulado "*De los oficios eclesiásticos*" (cánones 145-203).

<sup>476</sup>.- Vid. GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA, L., *Los dineros de la Iglesia ante el evangelio*, loc. cit., p. 184.

<sup>477</sup>.- Vid. SOUTO DE PAZ, J.A., *La noción canónica de oficio*, loc. cit., p. 225-226.

<sup>478</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Derecho patrimonial*, en AA.VV., *Nuevo Derecho Canónico. Manual universitario*, loc. cit., p. 442.

El Código de Derecho Canónico, de 1983, en su canon 1272, fundamentalmente, sustituye el sistema beneficcional, que era regulado en los cánones 1409 a 1488 del Código de Derecho Canónico, de 1917, por el régimen de conveniente retribución a los clérigos, destinados al ministerio eclesiástico -canon 281-. Para atender esta retribución se constituye, a tenor del canon 1274, el instituto diocesano, que recoge bienes y oblaciones para proveer a la sustentación de los clérigos<sup>479</sup>.

De modo que, según el canon 1272, la situación actual de los beneficios propiamente dichos es la siguiente: a) no pueden constituirse nuevos beneficios eclesiásticos; b) en cuanto a los que todavía subsisten, "corresponde determinar su régimen a la Conferencia Episcopal, según normas establecidas de acuerdo con la Sede Apostólica y aprobadas por ésta, de manera que las rentas e incluso, en la medida de lo posible, la misma dote de los beneficios pasen gradualmente a la institución de que se trata en el c. 1274 §1", es decir, al instituto diocesano para la sustentación de los clérigos<sup>480</sup>. El Código de 1983 no impone a los obispos -"a no ser que se haya establecido otro modo de cumplir esta exigencia"; "en la medida de lo necesario", según expresiones empleadas en el canon 1274- la obligación estricta de establecer el régimen jurídico-económico diseñado en el canon 1274 para satisfacer las necesidades allí descritas. Lo que sí es claro es que no puede consistir en la perpetuación del sistema beneficcional<sup>481</sup>.

Hasta el momento presente, la gran mayoría de las Conferencias Episcopales o no han legislado nada sobre el canon 1272 o se han limitado a afirmar que en su territorio no hay beneficios propiamente dichos<sup>482</sup>.

El canon 1272 del Código de Derecho Canónico remite a cada Conferencia Episcopal el "determinar su régimen [...] según normas establecidas de acuerdo con la Sede Apostólica y aprobadas por ésta", indicando claramente cuál debe ser el espíritu de esta reforma: "de manera que las rentas e incluso, en la medida de lo posible, la misma dote de los beneficios, pasen gradualmente a la institución de que se trata en el can. 1274, §1". La Conferencia Episcopal española determinó en su segundo decreto general, que el fondo para la sustentación de los clérigos de cada diócesis se nutre "[...] 3.º De las rentas e incluso de la misma dote de los beneficios propiamente dichos que existan todavía en nuestro territorio (c. 1272)", declarando además que "son bienes benefaccionales todos aquellos, muebles e inmuebles, que constituyen la dote total o parcial de un beneficio episcopal, canonical, parroquial o de las capellanías; y todos aquellos cuyas rentas se han venido aplicando a la sustentación de los clérigos que prestan un servicio en la diócesis". Queda descartado, por consiguiente, el sistema beneficcional como la base de la organización económica parroquial<sup>483</sup>.

#### III.6.D.4. INTENTOS PARA REORGANIZAR LA ECONOMÍA DE LAS DIÓCESIS.

La economía de las diócesis españolas sigue sometida a un proceso de reorganización técnica, con la intención de actualizar los mecanismos administrativos y de poder planificar,

<sup>479</sup>.- Vid. FORNÉS, J., *Régimen jurídico-patrimonial y financiación de la Iglesia desde la perspectiva de la libertad religiosa*, loc. cit., p. 34.

<sup>480</sup>.- Vid. FORNÉS, J., *Régimen jurídico-patrimonial y financiación de la Iglesia desde la perspectiva de la libertad religiosa*, loc. cit., p. 34.

<sup>481</sup>.- Vid. FORNÉS, J., *Régimen jurídico-patrimonial y financiación de la Iglesia desde la perspectiva de la libertad religiosa*, loc. cit., p. 35.

<sup>482</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 208.

<sup>483</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.); *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico. Aportaciones de derecho común y particular. X Jornadas de la Asociación española de canonistas Madrid 18-20 abril 1990*, p. 166.

mirando a un futuro próximo, los métodos de obtención de recursos, que garanticen la acción de la Iglesia con eficacia y según las exigencias de los tiempos actuales<sup>484</sup>.

El momento histórico, en que se intenta ese cambio, dentro de la organización de la Iglesia está caracterizado por:

- a) La constitución de la Conferencia Episcopal española, es decir, por la nueva conciencia de una corresponsabilidad supradiocesana, y, en algunos aspectos, colegial, que respeta la legítima autonomía de cada uno de los ordinarios locales, pero coordina sus actividades por cauces uniformes, y, cuando la Santa Sede lo determina, por normas vinculantes de rango nacional;
- b) Por una profunda transformación, tanto de los supuestos de Derecho canónico en general, que llevaría consigo la revisión de todo el sistema benefical y patrimonial, como de la situación sociológica de España;
- c) Por notables cambios cuantitativos y cualitativos en la composición y distribución del clero y por una inserción gradual de las órdenes y congregaciones religiosas en la pastoral general y diocesana;
- d) Por una revisión teológica de la pobreza testimonial de la Iglesia, que debe ser coherente con la posesión y escrupulosa administración de los bienes, que requiere una acción pastoral eficaz<sup>485</sup>.

El cometido fundamental, que deben las diócesis proponerse, para reorganizar su economía, es el de la educación de los fieles, en el sentido de hacerles partícipes y cooperar en los diversos aspectos de la recta administración de los bienes eclesiásticos. La justificación de esta prioridad viene determinada, porque son los fieles, los que tienen verdadera obligación, de procurar los recursos necesarios, para que la Iglesia pueda cumplir su misión pastoral. Este proceso de mentalización de los fieles se ha iniciado, aunque de forma tímida, en ciertos lugares. A este respecto, baste recordar, lo que el Directorio del Ministerio pastoral de los obispos, dice el núm. 133: "Procure el Obispo, por todos los medios aptos, que los fieles sean educados en el sentido de participar y cooperar también en lo que se refiere a los bienes temporales, de los que necesita la Iglesia para la consecución de su fin, de tal manera, que todos y cada uno, según sus fuerzas, se sientan corresponsables tanto de la sustentación económica de la comunidad eclesial, como de sus obras apostólicas y de caridad y de la conservación, incremento y recta administración de los bienes de la misma comunidad"<sup>486</sup>.

Con el nuevo ordenamiento de la economía de la Iglesia católica se intenta:

- a) Convertir los recursos económicos en instrumentos de pastoral;
- b) Procurar que los sacerdotes y las instituciones de la Iglesia católica puedan dar un claro testimonio de legitimidad evangélica en la posesión y uso de los recursos económicos;
- c) Que las diócesis más ricas ayuden a las más pobres;

<sup>484</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, B., *Organización diocesana de la economía*, en AA.VV., *La Curia Episcopal. Reforma y actualización* (Salamanca 1979), p. 251.

<sup>485</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, B., *Organización diocesana de la economía*, en AA.VV., *La Curia Episcopal. Reforma y actualización*, loc. cit., pp. 251-252.

<sup>486</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, B., *Organización diocesana de la economía*, en AA.VV., *La Curia Episcopal. Reforma y actualización*, loc. cit., pp. 252-253.

- d) Ofrecer la garantía de una retribución equitativa a todos los presbíteros españoles, cualquiera que sea la diócesis donde trabajan, procurando que sea la misma para todos los que se encuentran en las mismas circunstancias<sup>487</sup>.

Una recta administración de los recursos disponibles en la diócesis exige el conocimiento previo del programa pastoral; y, en función de este programa, vendrá dado el desarrollo presupuestario de la economía diocesana, que atienda de una forma adecuada, en la medida de lo posible, a todos los capítulos de las distintas necesidades de la pastoral diocesana<sup>488</sup>.

La cantidad o cuota varía, según el sistema establecido. Las cantidades asignadas son las siguientes:

- a) Un tanto por ciento de los ingresos parroquiales. El sistema más ampliamente extendido es el de una contribución parroquial basada en un tanto por ciento de los ingresos de la parroquia. Cantidad porcentual, que ofrece las siguientes variaciones:
- Cada parroquia, de acuerdo con las circunstancias de la misma decide el tanto por ciento a ingresar en el fondo común diocesano -Canarias-;
  - Hay una tabla de cooperación, dependiendo, fundamentalmente, de los ingresos de cada parroquia -Bilbao, Segorbe-Castellón-;
  - El 5% de los ingresos brutos, excepto lo recaudado en las colectas, que se destinan a fines extraordinarios -Osma, Soria, Salamanca-;
  - El 7% de todos los ingresos parroquiales -Cádiz-Ceuta-;
  - El 10% de los ingresos ordinarios/brutos -Albacete, Ávila, Badajoz, Cartagena, Córdoba, Coria-Cáceres -servicios-, Madrid-Alcalá, Málaga, Plasencia, San Sebastián, Sigüenza-Guadalajara, Teruel-Albarracín, Urgell -más el 50% de los aranceles parroquiales-.
  - El 15% de los ingresos brutos -León, Tortosa-;
  - El 20% de los ingresos brutos y el 15% de las ventas y enajenaciones -Oviedo, Santander-;
  - El 25% de los ingresos -Vic-;
  - Las diócesis de Zaragoza y Mallorca han establecido una escala progresiva de aportaciones de la parroquia. Así, por ejemplo, la escala de la diócesis de Mallorca -año 1985- es la siguiente:
    - Si la diferencia entre el total de entradas en la caja parroquial y el total de gastos por concepto de personal es:
      - inferior a 200.000 pesetas no cotizará;

<sup>487</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, B., *Organización diocesana de la economía*, en AA.VV., *La Curia Episcopal. Reforma y actualización*, loc. cit., p. 254.

<sup>488</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, B., *Organización diocesana de la economía*, en AA.VV., *La Curia Episcopal. Reforma y actualización*, loc. cit., p. 255.

- si está entre las 200.000 pesetas y las 400.000 pesetas, el 5% de esta diferencia;
- si está entre las 400.000 pesetas y las 600.000 pesetas, el 10%;
- si está entre las 600.000 pesetas y las 800.000 pesetas, el 15%;
- si está entre las 800.000 pesetas y el 1.000.000 pesetas, el 20%;
- si es superior al millón, el 25%<sup>489</sup>.

b) Otras diócesis determinan la cantidad que cada parroquia debe aportar a la diócesis aplicando una teórica cantidad por habitante:

- Una determinada cuota por habitante/año -Segovia-;
- 5 pesetas por habitantes/mes -Salamanca- en las parroquias de los pueblos, y Sigüenza-Guadalajara;
- La diócesis de Lérida tiene establecida esta distinción: parroquias hasta 1.000 habitantes, 4 pesetas por habitante/mes y parroquias desde 1.001 habitantes en adelante, 5'50 pesetas por habitante/mes;
- 7 pesetas por habitantes/año -Tortosa-;
- 16 pesetas por habitante/año -Tui-Vigo-;
- 34 pesetas por habitante/año -Ciudad Real-;
- 36 pesetas por habitante/año -Valladolid-<sup>490</sup>.

c) Canon fijo. Otras diócesis han determinado la cantidad, que cada parroquia debe aportar a la diócesis, teniendo en cuenta los diferentes criterios, que ya anteriormente hemos enumerado. Su aplicación práctica es diversa de una diócesis a otra. Así, por ejemplo, la diócesis de Cartagena ha establecido una escala económica de siete categorías de parroquias, que determina su aportación económica a la diócesis:

Categoría parroquial	Canon anual
Primera	150.000
Segunda	105.000
Tercera	60.000
Cuarta	37.500
Quinta	22.500
Sexta	7.500
Séptima	1.500

La diócesis de Ciudad Real determina la cantidad que cada parroquia debe aportar a la diócesis con el siguiente procedimiento: la cuota de aportación de las parroquias se establece en 34 pesetas habitante

<sup>489</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.); *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc. cit., pp. 197-198.

<sup>490</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.); *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc. cit., pp. 198-199.

-según el último censo oficial/-año corregido por los índices de renta familiar disponible, asistencia a la misa dominical y piedad tradicional de cada parroquia. También la diócesis de Sevilla ha adoptado este sistema de cuota parroquial.

- d) Otras diócesis establecen colectas. Es el caso de las colecta anual del día de la Iglesia diocesana -Cuenca, Plasencia, Tarazona, Tenerife –colectas trimestrales y la anual-, o bien una aportación mensual a una caja diocesana de compensación institucional -Huelva<sup>491</sup>.

### **III.6.D.5. EL "FONDO COMÚN INTERDIOCESANO" Y EL "CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y DEL ECONÓMO", COMO INSTITUCIONES, PARA ALCANZAR LA AUTOFINANCIACIÓN A NIVEL DIOCESANO. EL "CONSEJO PARROQUIAL DE ADMINISTRACIÓN" A NIVEL PARROQUIAL.**

#### **A) EL "FONDO COMÚN INTERDIOCESANO" -F.C.I.-, COMO INSTITUCIÓN, PARA ALCANZAR LA AUTOFINANCIACIÓN, QUE TIENE SU FUNDAMENTO EN EL CANON 1274 DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, DE 1983.**

El sistema económico de la Iglesia católica, incluso tras la promulgación del Código de Derecho Canónico, de 1917, se ha venido fundamentando en el denominado sistema benefical. Sin embargo, desde dentro de la propia Iglesia, se era consciente, desde hacía tiempo, de la necesidad de reformar profundamente ese sistema, que descansa, en gran medida, en principios feudales y en el que, históricamente, fue desmembrándose, en innumerables masas patrimoniales autónomas, la primitiva unidad patrimonial episcopal. Fue el Concilio Vaticano II, el que abordó, abiertamente, la necesidad de terminar con el dicho sistema o, cuando menos, proceder a su reforma en profundidad. Tras una etapa de reformas provisionales, no apoyadas en una normativa general, las previsiones y deseos del Concilio han venido a concertarse, finalmente, en el nuevo Código de Derecho Canónico, de 1983, principalmente en sus cánones 1272 y 1274. Este canon 1274 prevé la constitución de una serie de nuevas instituciones patrimoniales para la atención de determinados fines, a los que ha de atender la economía eclesial, de suerte que se prevé: primero, que en cada diócesis haya un instituto especial, que recoja los bienes y oblaciones, para proveer a la sustentación de los clérigos, que prestan un servicio en la diócesis, salvo que se haya establecido en ella otro modo de cumplir esa exigencia; segundo, prevé que, allí donde aún no esté convenientemente organizada la previsión social a favor del clero, la Conferencia Episcopal correspondiente habrá de cuidar de que exista una institución, que provea suficientemente a la seguridad social de los clérigos; tercero, se previene que habrá de ser constituida en cada diócesis, en la medida de lo necesario, "una masa común", con la que puedan los obispos cumplir las obligaciones respecto a otras personas, que sirvan a la Iglesia y subvenir a las distintas necesidades de la diócesis y por la que, asimismo, las diócesis más ricas puedan ayudar a las más pobres. Además, el precepto permite constituir con carácter supradiocesano las instituciones previstas, para hacer frente a la cuestión de la seguridad social del clero y las masas comunes de bienes, con que pueda hacer frente a determinadas necesidades, si, según las circunstancias de cada lugar, esos fines pueden lograrse

<sup>491</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.); *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc. cit., pp. 199-200.

mejor mediante instituciones diocesanas federadas entre sí, o por medio de una cooperación e, incluso, por una asociación convenida entre varias diócesis o constituida para todo el territorio de la misma Conferencia Episcopal, que es lo que se ha realizado por la Iglesia española a través del "fondo común interdiocesano", superpuesto a los fondos comunes diocesanos<sup>492</sup>.

Aunque no se disciplina, el canon 1274.1 del Código de Derecho Canónico, de 1983<sup>493</sup>, prevé que en las diócesis debe haber un "instituto especial", que recoja los bienes y obligaciones con la finalidad de sustentar a los sacerdotes, que prestan servicio a favor de la diócesis, a no ser que se haya establecido otro modo de cumplir esa exigencia<sup>494</sup>.

Esta idea de una mayor igualdad en la distribución de los bienes eclesiásticos fueron recogidas en el *Schema Decreti de clericis* de 22 de abril de 1963, que contemplaba la constitución de una "masa diocesana de bienes", para conseguir una más equitativa remuneración de los clérigos: se debía constituir en cada diócesis una masa común de bienes para subvenir a las necesidades de los clérigos y las restantes de la diócesis, se indicaban a título de ejemplo, las siguientes posibles fuentes para su financiación: las oblaciones de los fieles, parte de las rentas obtenidas por los clérigos en el ejercicio de su ministerio siempre que excediese de la honesta sustentación establecida por el derecho particular, los bienes diocesanos, que no tuvieran un destino determinado, las rentas de los antiguos bienes beneficiales, etcétera. Estos textos, alabados por muchos padres conciliares, se mantuvieron en revisiones posteriores, hasta que se limitó drásticamente todo lo referente a la masa común de bienes diocesanos al texto presentado en el aula conciliar el 27 de abril de 1964. El esquema del 12 de noviembre, de 1964, situó el texto conciliar fundacional de la masa común de bienes diocesanos en el lugar, que, a la larga, sería definitivo: en el contexto de la remuneración y previsión social de los clérigos. Texto que atemperaba la obligatoriedad de la constitución de la masa o fondo común, según la situación de cada diócesis<sup>495</sup>.

El actual canon 1274, completamente nuevo en relación con el anterior Código de Derecho Canónico, tiene sus fuentes constitutivas en el texto conciliar de *Presbyterorum ordinis* 21 y en el postconciliar de *Ecclesiae Sanctae* I.8. Con él se intenta, principalmente, cumplir la norma contenida en el canon 281.1, así como las restantes necesidades diocesanas<sup>496</sup>.

Pues bien, estas nuevas instituciones son las que han de ir absorbiendo el anterior sistema beneficcional, de suerte que, como previene el canon 1272, en aquellas regiones donde aún existan beneficios propiamente dichos, corresponde determinar su régimen a la Conferencia Episcopal, según normas establecidas de acuerdo con la Santa Sede y aprobadas por ésta, de manera que las rentas, e, incluso, en la medida de lo posible, la misma dote de los beneficios, pasen gradualmente a la institución prevista en el canon 1274.1, esto es, al señalado instituto especial, que ha de existir en cada diócesis, para atender a la sustentación de los clérigos que presten su servicio en ella. Por tanto, habrá de ser el derecho particular, con la aprobación de la Sede Apostólica, el que deberá ir regulando y estructurando la nueva ordenación económica de la Iglesia con base, principalmente, en las instituciones previstas en el canon 1274, lo que se ha

<sup>492</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 583.

<sup>493</sup>.- Los orígenes más próximos del actual canon 1274 hay que buscarlos en el Concilio Vaticano II. Ya durante la etapa antepreparatoria del Concilio, en la búsqueda de una solución para conseguir una mayor igualdad en la distribución de los bienes eclesiásticos entre los sacerdotes, varios obispos hicieron propuestas tendentes a la constitución de instituciones semejantes a las previstas en el canon 1274. Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 309.

<sup>494</sup>.- Vid. COLOMBO, M., *L'Istituto per il sostentamento del clero e problemi connessi*, loc. cit., p. 89.

<sup>495</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 310.

<sup>496</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., pp. 311-312.

venido realizando en el seno de la Iglesia española a través de la normativa de la Conferencia Episcopal<sup>497</sup>.

La actual organización diocesana española de la economía se caracteriza por:

- a) La creación de una "masa común de los bienes diocesanos" - "*massa communi diocesana*" ha sido una de las más importantes aportaciones del Concilio Vaticano II. El Código de Derecho Canónico, de 1983, recoge esta doctrina y establece una doble "masa común de bienes":

- a.1) Una supradiocesana, que se forma de los fondos provenientes de cada diócesis, se administra según las normas, acordadas por los obispos, a quienes interesa y tiene, como finalidad, satisfacer las necesidades conjuntas supradiocesanas;

- a.2) Otra diocesana, en la que se distinguen, por su finalidad, dos "masas comunes diocesanas":

- la primera tiene, como finalidad específica, el atender a la sustentación y previsión social de los clérigos, que prestan su servicio a favor de la diócesis;
- la segunda pretende satisfacer el resto de las necesidades, que tiene la Iglesia diocesana<sup>498</sup>.

La creación de esta "masa común" es una de las novedades más positivas de la nueva codificación en materia de bienes temporales: se establece una única masa de bienes eclesiales, desarticulando el sistema benefical, y constituyéndose una administración unificada diocesana, aunque no de un único patrimonio eclesiástico en común<sup>499</sup>. Efectivamente, el sistema económico de la Iglesia católica, incluso tras la promulgación del Código de Derecho Canónico, de 1917, se ha venido fundamentando en el denominado sistema benefical. Sistema, que descansa en principios feudales. El Concilio Vaticano II abordó la necesidad de terminar con dicho sistema, o, al menos, reformarlo profundamente. Su resultado sería el nuevo Código de Derecho Canónico, de 1983, principalmente en sus cánones 1272 y 1274<sup>500</sup>. La Iglesia española ha venido mostrando una verdadera y real preocupación en la reorganización de su sistema económico-administrativo desde que el Vaticano II emitiera sus directrices. No obstante, ha sido, y aún es, una etapa de tránsito, no finalizada, pues aún queda la labor de ir terminando con el sistema benefical hasta adecuar sus estructuras económico-administrativas a las actuales circunstancias, necesidades y demandas, que aquél no podía asumir<sup>501</sup>.

El artículo 1274 del Código de Derecho Canónico, de 1983<sup>502</sup>, posibilita que las diócesis constituyan unas "masas o fondos comunes de bienes", para que así puedan cumplir,

<sup>497</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 583-584.

<sup>498</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y Comentario)*, loc. cit., pp. 331-332.

<sup>499</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y Comentario)*, loc. cit., p. 332.

<sup>500</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 582-583.

<sup>501</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 584.

<sup>502</sup>.- El canon 1274 del Código de Derecho Canónico, de 1983, nos dice:

adecuadamente, sus distintas obligaciones económicas, surgidas de las propias necesidades de la Iglesia local. Más concretamente, la citada norma contempla la constitución de las siguientes "masas o fondos comunes":

- a) El instituto para la sustentación de los clérigos -párrafo 1 del canon 1274-;
- b) El instituto para la previsión social de los clérigos -párrafo 2-;
- c) Y la "masa o fondo común diocesano" -párrafo 3-.

Las instituciones previstas en los párrafos 2 y 3 pueden ser diocesanas o interdiocesanas -párrafo 4 del canon 1274-<sup>503</sup>.

"1. En toda diócesis debe haber un instituto especial que recoja los bienes y oblaciones para proveer conforme al can. 281 a la sustentación de los clérigos que prestan un servicio en la diócesis, a no ser que se haya establecido otro modo de cumplir esta exigencia.

2. Donde aún no está convenientemente organizada la previsión social a favor del clero, cuide la Conferencia Episcopal de que haya una institución que provea suficientemente a la seguridad social de los clérigos.

3. Constitúyase en cada diócesis, en la medida en que sea necesario, una masa común, con la cual puedan los Obispos cumplir las obligaciones respecto a otras personas que sirven a la Iglesia y subvenir a las distintas necesidades de la diócesis, y por la que también las diócesis más ricas puedan ayudar a las más pobres.

4. Según las circunstancias de cada lugar, los fines de que se trata en los §§ 2 y 3 pueden lograrse mejor mediante instituciones diocesanas federadas entre sí, o por medio de una cooperación, e incluso por una asociación convenida entre varias diócesis o constituida para todo el territorio de la misma Conferencia Episcopal.

5. Si es posible, estas instituciones deben constituirse de manera que obtengan eficacia ante el ordenamiento civil".

Los orígenes más próximos del canon 1274 del Código de Derecho Canónico, de 1983, hay que buscarlos en el Concilio Vaticano II, puesto que en el Código de Derecho Canónico, de 1917, no había ninguna norma al respecto; con ello se pretende una mayor equidad en la distribución de los bienes eclesiásticos entre los clérigos, y para conseguir una honesta sustentación de los mismos. Incluso ya estaba presente en la etapa *antepreparatoria* del Concilio. De este modo, se recoge en el *Schema Decreti de clericis* de 22 de abril, de 1963, elaborado durante la etapa preparatoria del Concilio, contemplándose la constitución de una "masa diocesana de bienes", para conseguir una más equitativa remuneración de los clérigos. Fue en el esquema del 12 de noviembre, de 1964, cuando el texto conciliar fundacional de la "masa común de bienes diocesanos" se va a situar sistemáticamente en el lugar, que, a la postre, sería el definitivo: en el contexto de la remuneración y previsión social del clero. Este texto proyectado atemperaba la obligatoriedad de la constitución de la "masa o fondo común", para subvenir a la remuneración del clero y a las otras necesidades diocesanas, según la situación de cada diócesis. Sus fuentes de financiación, además, se dejaban a la libre determinación del derecho particular. En realidad, esta imprecisa y vaga formulación se debía a la distinta situación existente en cada país. El esquema del 28 de mayo, de 1965, siguió por idénticos derroteros. El siguiente esquema de 9 de noviembre, de 1965, incorporó algunas modificaciones importantes, aunque sin alteraciones sustanciales. El último esquema, el del 30 de noviembre, de 1965, mantuvo inalterado el texto anterior. El decreto *Presbyterorum Ordinis* recoge estas ideas. Vid. AZNAR GIL, F.R., *El Fondo Diocesano para la sustentación del clero* (c. 1274 § 1), loc. cit., pp. 620-623. Algunos documentos postconciliares, que trataron sobre esta materia, siguieron, básicamente, esta misma línea. Es el caso del *motu proprio Ecclesiae Sanctae*, de 6 de agosto, de 1966 -58, A.A.S., (1966), pp. 757-787, al establecer normas de aplicación del decreto *presbyterorum ordinis*. El *motu proprio Ecclesiae Sanctae*, de 6 de agosto, de 1966, urge a las confesiones episcopales, a que "en las regiones en las que el sostenimiento del clero depende totalmente o en parte de las ofrendas de los fieles, exista en cada diócesis una institución especial (*speciale institutum*) que reúna los bienes ofrecidos con este fin, de la que será administrador el propio Obispo diocesano, asistido por sacerdotes delegados y, en donde las circunstancias lo aconsejen, por seglares especialistas en economía" -núm. 1.8-. Otros documentos postconciliares son el sínodo de los obispos, de 1971. Vid. AZNAR GIL, F.R., *El Fondo Diocesano de la sustentación del clero* (c. 1274.1 § 1), loc. cit., p. 624.

<sup>503</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *El Fondo Diocesano de la sustentación del clero* (c. 1274.1 § 1), loc. cit., p. 619.

La ordenación de la economía de la Iglesia española ha sido una preocupación constante de la Conferencia Episcopal española, desde que ésta fue constituida. Ya en 1976 se acordó por la VI asamblea plenaria que la comisión episcopal de asunto económicos llevara a cabo gestiones: con el Ministerio de Justicia en orden a que la dotación del Estado a la Iglesia se hiciera de forma globalizada, y la misma comisión se encargó de recoger los datos necesarios para la elaboración de presupuestos diocesanos. Esa dotación estatal globalizada fue un logro a partir del ejercicio 1978. Sin embargo, la participación de las diócesis en la dotación del culto y clero no era equitativa ni respondía a criterios enteramente objetivos, tal como reconocía la XXVI asamblea plenaria, celebrada del 20 al 25 de junio, de 1977. Esto había de ser corregido por la Iglesia española. Así simultáneamente a la decisión del Estado de otorgar la dotación en forma globalizada, la XXVIII asamblea plenaria, celebrada del 21 al 26 de diciembre, de 1977, aprobó unas proposiciones con los criterios conforme a los cuales se distribuiría la dotación estatal globalizada, que, a partir de ese momento, se llamó ya "fondo común interdiocesano", criterios que están inspirados en el decreto conciliar *Presbiterorum Ordinis* -núm. 20- y en el *motu proprio Ecclesiae Sanctae*, pretendiéndose, fundamentalmente, los siguientes objetivos:

- a) Evitar las desigualdades poco equitativas a la retribución de los sacerdotes;
- b) Incluirlos a todos en el régimen general de la seguridad social del Estado,
- c) Integrar las distintas fuentes de recursos existentes en la iglesia -por ejemplo, aportaciones de los fieles, ingresos de patrimonio histórico-artístico, etcétra- en una ordenación general homologable en cada una de las diócesis;
- d) Uniformar modelos presupuestarios y los sistemas contables en las diócesis y de las instituciones diocesanas;
- e) Procurar una comunicación de bienes de unas diócesis con otras<sup>504</sup>.

Estos criterios fueron perfeccionándose y concretándose en normas prácticas aprobadas por la Conferencia en sucesivas asambleas plenarias, reconociéndose intraeclesialmente que la experiencia había venido siendo positiva y fructuosa, según parecer unánime de los obispos y de los administradores diocesanos. Por ello se estimulaba a seguir en la línea de perfeccionar la ordenación económica con el fin de conseguir mejor los objetivos anteriormente señalados. Sin embargo, por otra parte, la experiencia había puesto de manifiesto unas dificultades prácticas que, de no solucionarse, iban a impedir el logro de los objetivos, que la Conferencia Episcopal se había propuesto en la ordenación económica. Estas dificultades estaban relacionadas principalmente con las dotaciones beneficiales, con los ingresos por el patrimonio artístico y las rentas de las fundaciones<sup>505</sup>.

El instituto especial para la sustentación de los clérigos -canon 1274.1- tiene como finalidad proveer a la sustentación de los clérigos, que prestan un servicio en la diócesis, conforme a las características, señaladas en el canon 281. Los beneficiarios de este instituto son, por tanto, todos los clérigos, sacerdotes o diáconos, seculares o religiosos, que prestan su servicio pastoral en la misma. El instituto para la previsión social de los clérigos -canon 1274.2- es la segunda masa o fondo común prevista. Su finalidad es proveer a la asistencia sanitaria y a la sustentación debida de los presbíteros, que padecen enfermedad, invalidez o están ancianos, para ser sacerdotes<sup>506</sup>.

<sup>504</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 582-583.

<sup>505</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 586.

<sup>506</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de Iglesia*, loc. cit., p. 317.

Este canon 1274 del Código de Derecho Canónico, de 1983, tiene la ingente tarea, por tanto, de sustituir el obsoleto y periclitado sistema organizativo benefical por otro más acorde con las actuales circunstancias sociales y eclesiales<sup>507</sup>.

El canon 1274.1 del Código de Derecho Canónico, de 1983, es completamente nuevo, en relación con el anterior Código de 1917, y sus fuentes constitutivas son el texto conciliar del decreto *Presbyterorum Ordinis* -en su núm. 21-, y el postconciliar de *Ecclesiae Sanctae*, de 1966 -núm. I.8-. Con él se intenta cumplir la norma contenida en el canon 281.1 del Código de Derecho Canónico, de 1983<sup>508</sup>: establecer una organización jurídica más adecuada para su efectiva realización, garantizando una equitativa remuneración de los sacerdotes diocesanos, dedicados a su ministerio eclesiástico<sup>509</sup>.

La legislación canónica particular española ha desarrollado el canon 1274 en su integridad, salvo lo relativo a la seguridad social de los clérigos diocesanos -cánones 281.2 y 1274.2-, ya que ésta les viene garantizada desde el año 1977 por estar los clérigos incluidos en el régimen general de la seguridad social de nuestro país con unas condiciones especiales<sup>510</sup>.

Las diócesis españolas, anticipándose a lo previsto en el canon 1274 del futuro Código de Derecho Canónico, de 1983, duraron estableciendo, progresivamente, unas "masas o fondos de bienes comunes diocesanos", con los que atender a las necesidades diocesanas. En un primer momento, se adoptó, generalizadamente, la terminología de "caja diocesana de compensación del clero" para la denominación de estos "fondos o masas comunes", y su finalidad fundamental -y casi exclusiva- era la de atender a las necesidades concretas de los sacerdotes diocesanos: lograr una remuneración fundamentalmente equitativa entre ellos. Posteriormente, sin embargo, se fue imponiendo otra institución y denominación mucho más acertada: el "fondo común diocesano". En este último caso, se constituía una única masa con todos los bienes diocesanos, para atender a todas las necesidades económicas diocesanas, y no sólo a la retribución de los sacerdotes, aunque esta partida de gastos fuera la mayor de todas las previstas<sup>511</sup>. Efectivamente, la sustitución del sistema benefical se consiguió en estos dos momentos:

- a) Primeramente, como hemos visto, se creó, de forma generalizada, la "caja diocesana de compensación del clero", cuyo objetivo fundamental era atender a las necesidades concretas de los sacerdotes y compensar, en lo posible, las desigualdades económicas, que pudieran haber entre ellos. Pero pronto fue sustituyéndose, por no abordar el problema principal, capacitar a cada diócesis, para atenderse asimismo, ni hoy es comprensible una solución al problema de la sustentación del clero diocesano aislada del resto de la economía diocesana<sup>512</sup>;
- b) Por ello, se ha ido sustituyendo en todas las diócesis por el "fondo común diocesano", cuyo objetivo fundamental es capacitar a la Iglesia diocesana

<sup>507</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *El Fondo Diocesano de la sustentación del clero (c. 1274.1 § 1)*, loc. cit., p. 619.

<sup>508</sup>.- Este canon 281.1 del Código de Derecho Canónico, de 1983, nos dice:

"Los clérigos dedicados al ministerio eclesiástico merecen una retribución conveniente a su condición, teniendo en cuenta tanto la naturaleza del oficio que desempeñan como las circunstancias de lugar y tiempo, e manera que puedan proveer a sus propias necesidades y a la justa remuneración de aquellas personas cuyo servicio necesitan".

<sup>509</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *El Fondo Diocesano de la sustentación del clero (c. 1274.1 § 1)*, loc. cit., p. 625.

<sup>510</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 321.

<sup>511</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *El Fondo Diocesano de la sustentación del clero (c. 1274.1 § 1)*, loc. cit., p. 631.

<sup>512</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y Comentario)*, loc. cit., p. 333.

para su autosustentación, poniendo a todos los recursos diocesanos al servicio de su misión evangelizadora.<sup>513</sup>

La legislación particular española está desarrollando este canon 1274 del Código de Derecho Canónico, de 1983, y, para ello, ha configurado canónicamente dos instituciones: el "fondo común diocesano" y el "fondo diocesano para la sustentación del clero". El primero se sustituye, para atender a todas las necesidades económicas de las diócesis, mientras que el segundo tiene, como finalidad exclusiva, proveer a la conveniente remuneración de los clérigos diocesanos<sup>514</sup>.

Los fondos, que integran esta "masa común de los bienes diocesanos" no vienen determinados, taxativamente, por la legislación general de la Iglesia, sino que se remite a la legislación particular diocesana o de la Conferencia Episcopal nacional. En nuestro país, la Conferencia Episcopal ha señalado el destino de ciertos bienes a este "fondo común diocesano". Pero han sido las diócesis quienes han ido concretando el origen de los bienes, que integran este "fondo común diocesano":

- a) Aportaciones de las personas físicas eclesiásticas. Los miembros del presbiterio diocesano, que sobrepasen la cantidad establecida, como dotación-base en la diócesis, deben colaborar a la formación de los fondos del "fondo común diocesano".
- b) Aportaciones de personas jurídicas eclesiásticas. En algunas diócesis está establecido, que todas las personas jurídicas eclesiásticas, que realizan su actividad en la diócesis, sean o no diocesanas, deben contribuir al "fondo común diocesano" con una cuota anual determinada por el "consejo diocesano de administración" y proporcional a su volumen económico y al número de miembros, que las integran. La mayor parte de las diócesis limitan este apartado, como aportación obligatoria, a las parroquias. En este caso, la aportación parroquial viene determinada por un doble sistema: aportación de una cantidad determinada en relación proporcional con los ingresos brutos de cada parroquia o establecimiento de la denominada cuota parroquial, que viene fijada en función de diversos criterios.
- c) Rentas de patrimonio diocesano, tanto de los de libre disposición, que pasan íntegros al "fondo común diocesano", como de los de no libre disposición, es decir que tienen finalidad propia: en este caso, pasan al "fondo común diocesano" sus rentas, plusvalías, los posibles superávits, etcétera, una vez atendidos sus fines.
- d) Aportaciones extradiocesanas, que suelen ser del siguiente tipo:
  - Suma globalizada, que recibe cada diócesis a través de la gerencia del episcopado, de la cantidad asignada por el Estado a la Iglesia;
  - Cantidad, que procede, en algunos casos, del "fondo común interdiocesano provincial";
  - Aportaciones de instituciones u organismos civiles.

<sup>513</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y Comentario)*, loc. cit., p. 333.

<sup>514</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *El Fondo Diocesano de la sustentación del clero (c. 1274.1 § 1)*, loc. cit., p. 619.

e) Y varios, como:

- Los ingresos de la curia diocesana;
- Las ofertas voluntarias de los fieles;
- Una o varias colectas o cuestaciones anuales "pro Iglesia diocesana";
- El tanto por ciento de todas las colectas con destino nacional<sup>515</sup>.

La administración de la "masa común de los bienes diocesanos" del "fondo común diocesano" se realiza a través de dos clases de organismos:

- a) Los diversos consejos u organismos consultivos existentes, que dirigen las grandes líneas de la economía diocesana y controlar los diversos órganos ejecutivos. Suelen denominarse "consejo diocesano de la administración" o "consejo diocesano de economía" y de él suelen depender diversas comisiones técnicas.
- b) Existen, también, los órganos ejecutivos. Su principal misión es llevar a la práctica lo decidido por los organismos consultivos, y en estrecha dependencia de ellos, llevar la marcha de la administración económica ordinaria de la diócesis. También su denominación suele variar de diócesis a diócesis y suele estar dividido en diferentes secciones o departamentos, según la complejidad de la diócesis<sup>516</sup>.

El "fondo diocesano para la sustentación del clero" previsto en el canon 1274.1 del Código de Derecho Canónico, de 1983, está contemplado en el artículo 10 del segundo decreto general de la Conferencia Episcopal española sobre las normas complementarias al nuevo Código de Derecho Canónico, de 1 de diciembre, de 1984:

"El Fondo para sustentación de los clérigos que prestan un servicio en la diócesis, que debe crearse a tenor del c. 1274 §1, puede configurarse, a juicio del Obispado diocesano, bien como fundación pía autónoma conforme al c. 115 §3, bien como ente cuyos bienes estarán a nombre de la diócesis misma, aunque con plena autonomía contable"<sup>517</sup>.

A continuación el artículo 11 del segundo decreto general de la Conferencia Episcopal española sobre las normas complementarias al nuevo Código de Derecho Canónico, de 1 de diciembre, de 1984:

"El fondo se nutre:

- 1.º De los bienes y oblaciones entregados con destino al mismo.
- 2.º De los bienes de las fundaciones pías no autónomas, una vez vencido el plazo establecido por el Obispado diocesano, conforme al c. 1303 §2.

<sup>515</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y Comentario)*, loc. cit., p. 334.

<sup>516</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y Comentario)*, loc. cit., pp. 334-335.

<sup>517</sup>.- Vid. reproducido, íntegramente, en XXV, 50, I.C. (1985), pp. 635-637.

- 3.º De las rentas e incluso de la misma dote de los beneficios propiamente dichos que existan todavía en nuestro territorio (cfr. c. 1272)<sup>518</sup>.

Entre las instituciones existentes, que pueden hacer posible la misma *autofinanciación*, está el "fondo común interdiocesano". El "fondo común interdiocesano"<sup>519</sup> está constituido por aquellos bienes, valores, derechos y cualesquiera aportaciones, entregadas a la Iglesia en España, o a la Conferencia Episcopal española para el sostenimiento y actividades de las diócesis, de otras entidades, dependientes de la Iglesia, o de la misma Conferencia Episcopal, o para atender a las necesidades generales de la Iglesia en España, cuya distribución debe ser determinada por la propia Conferencia Episcopal española. Básicamente, el "fondo común interdiocesano" está integrado por:

- a) La dotación económica recibida por el Estado español;
- b) Las aportaciones de las diócesis, fieles, etcétera, para una intercomunicación de bienes entre todas las diócesis españolas<sup>520</sup>.

Las normas decretadas por la Conferencia Episcopal, en el Segundo Decreto General sobre las normas complementarias al nuevo Código de Derecho Canónico, aprobado el 1 de diciembre, de 1984, conforme al cual, y en materia económica, se establece:

- a) Que el "fondo común interdiocesano", establecido por la Conferencia Episcopal española, se ordena perfectamente al cumplimiento de las finalidades, marcadas en el canon 1274, y se rige por las disposiciones, contenidas en el reglamento de ordenación económica de la Conferencia - artículo 9-.
- b) Que el fondo para la sustentación de los clérigos, que prestan un servicio en la diócesis, que debe crearse a tenor del mismo canon 1274.1, puede configurarse, a juicio del obispo diocesano, ya como fundación pía autónoma conforme al canon 115.3, ya como ente, cuyos bienes estarán a nombre de la diócesis misma, aunque con plena autonomía contable -artículo 10-.

El fondo se nutre: a) de los bienes y oblaciones entregados con destino al mismo; b) De los bienes de las fundaciones pías no autónomas, una vez vencido el plazo, establecido por el obispo diocesano, conforme al canon 1303.2; c) De las rentas e, incluso, de la misma dote de los beneficios propiamente dichos, que existan todavía en nuestro territorio -canon 1272- -artículo 11-.

En cuanto a la administración de "fondo común interdiocesano" se establece que, caso de haber optado por la mera autonomía contable, corresponde a las mismas personas y organismos, que administran los bienes de la diócesis y se rige por las mismas normas. Sin embargo, si el "fondo

<sup>518</sup>.- Vid. reproducido, íntegramente, en XXV, 50, I.C. (1985), pp. 635-637.

<sup>519</sup>.- El segundo decreto general de la Conferencia Episcopal española sobre las normas complementarias al nuevo Código de Derecho Canónico, de 1 de diciembre, de 1984, en su artículo 9 nos dice:

"El Fondo Común Interdiocesano establecido por la Conferencia Episcopal Española se ordena preferentemente al cumplimiento de las finalidades marcadas en el c. 1274, y se rige por las disposiciones contenidas en el Reglamento de ordenación económica de la Conferencia". Puede consultarse en XXV, 50, I.C. (1985), pp. 635 y ss.

<sup>520</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 591-592.

común interdiocesano" se ha constituido como fundación pía autónoma, el obispo diocesano habrá de dar un decreto fijando los estatutos de la función pública titular de dicho "fondo común interdiocesano", en los que se detallen sus órganos de gobierno, régimen administrativo, etcétera -artículo 13-<sup>521</sup>.

- c) En cuanto a las retribuciones de los clérigos, que prestan servicio en la diócesis, y que se abonan con cargo al "fondo común interdiocesano", se determina que el obispo diocesano, después de oír al "consejo presbitalar" y al "consejo de asuntos económicos", establecerá un reglamento, por el que han de regirse las mismas. Será el ecónomo, quien propondrá al obispo diocesano la aplicación concreta de ese reglamento, sometiéndolo a su aprobación las nóminas correspondientes y sus ulteriores variaciones -artículo 14.1-2-<sup>522</sup>.

De esta forma, la Conferencia Episcopal española ha ido acomodando la normativa precedente a la general del nuevo Código de Derecho Canónico, a la vez que desarrolla ésta, de manera que pueda examinarse actualmente la reestructuración económico-administrativa de la Iglesia española en tres niveles -el nacional, dependiente de la propia Conferencia episcopal; el de la diócesis; el de las parroquias- partiendo de la normativa general del Código de Derecho Canónico, esto es, que la titularidad de los bienes eclesiásticos corresponde a la persona jurídica, que la haya legítimamente adquirido -canon 1256-, que su administración a quien de manera inmediata rija la persona titular de esos bienes -canon 1279.1-, y que los administradores se encuentren asistidos por ciertos órganos consultivos y ejecutivos, principalmente concretados, unos y otros en los "consejos de asuntos económicos" y en los ecónomos -cánones 492 y 494-<sup>523</sup>.

Al estudiar el "fondo común interdiocesano" debe tenerse muy presente el reglamento de ordenación económica de la Conferencia, de 1985<sup>524</sup>, aprobado en la XLI asamblea plenaria, de 26 de noviembre a 1 de diciembre, de 1984, que regula la ordenación económica nacional<sup>525</sup>. Este reglamento de ordenación económica, de 1985 -hoy vigente- enumera los distintos bienes de la Conferencia Episcopal española:

"Artículo 3. A los efectos, principalmente, de su aplicación, los bienes pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española se clasificará en tres grupos:

- A. Patrimonio de la Conferencia.
- B. Fondo Común Interdiocesano.
- C. Fondo con los fines propios"<sup>526</sup>.

En dicho reglamento de ordenación económica se dice que, en tanto en cuanto la Conferencia goza de personalidad jurídica eclesiástica -canon 449.2- y civil -artículo I del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979- tiene capacidad para adquirir, retener, administrar

<sup>521</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 589-590.

<sup>522</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 590.

<sup>523</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 590.

<sup>524</sup>.- Vid. el B.O.C.E.E., 5 (1985), pp. 19-25.

<sup>525</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 591 y ss.

<sup>526</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 126.

y enajenar los bienes temporales, de los que es titular. Sus bienes, como todos los de la Iglesia, tienen como fines propios el ejercicio del culto, la sustentación del clero, el sagrado apostolado y el ejercicio de la caridad, y se clasifican, a los efectos de su aplicación en tres grupos: patrimonio de la Conferencia, "fondo común interdiocesano" y fondo con fines propios. Entre los bienes de la Conferencia Episcopal cabe distinguir:

- a) Patrimonio de la Conferencia. El patrimonio de la Conferencia está constituido por todos los bienes muebles e inmuebles, valores y derechos con repercusión económica, escriturados a nombre de ella, más los que vaya recibiendo para su funcionamiento y desarrollo de sus actividades, de suerte que todos los bienes que sean entregados a una comisión, organismo o servicio para el desarrollo de sus actividades, pertenecen a la Conferencia Episcopal, pero han de ser aplicados a dichas actividades. Así corresponde a los organismos destinatarios proponer la aplicación concreta de sus bienes dentro del conjunto del presupuesto de la Conferencia, teniendo derecho a conocer el resultado de su gestión y administración.
- b) Fondo común interdiocesano. Esta institución está ordenada al cumplimiento de las finalidades, establecidas en el canon 1274 del Código de Derecho Canónico y en base al canon 1275.

Está constituido por aquellos bienes, valores, derechos y cualesquiera aportaciones entregadas a la Iglesia en España o a la Conferencia Episcopal española para el sostenimiento y actividades de las diócesis, de otras entidades dependientes de la Iglesia, o de la misma Conferencia Episcopal o para atender a las necesidades generales de la Iglesia en España, cuya distribución debe ser determinada por la propia Conferencia Episcopal. Básicamente, el "fondo común interdiocesano" está integrado por: 1) La dotación económica, recibida del Estado español; 2) Las aportaciones de las diócesis, fieles, etcétera, para una intercomunicación de los bienes entre todas las diócesis españolas;

- c) Fondo con fines propios. Por otra parte, los bienes recibidos para el adecuado sostenimiento económico de la Iglesia en España, conforme al acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, o para alguno de sus fines concretos, son también eclesiásticos conforme al canon 1257 del Código de Derecho Canónico, de 1983. La determinación de fines concretos es competencia de los obispos, que constituyen la Conferencia Episcopal, de forma que pueden crearse fondos para fines concretos. Además, la Conferencia puede ser administradora de los bienes de otras entidades eclesiásticas o civiles, destinados a fines propios de la Iglesia, como actividades misioneras, emigración, formación profesional, etcétera, sin que por ello se altere la propiedad o el carácter de tales bienes<sup>527</sup>.

"Artículo 4. Constituyen el patrimonio de la Conferencia Episcopal todos los bienes, muebles e inmuebles, así como los valores y derechos con repercusión económica escriturados a

<sup>527</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 591-592.

nombre de la Conferencia, y los que reciba en lo sucesivo para su funcionamiento y el desarrollo de sus actividades"<sup>528</sup>.

La administración de todos estos bienes, pertenecientes a la Conferencia Episcopal, se efectúa conforme a las prescripciones generales del Código de Derecho Canónico y por las normas complementarias del reglamento de ordenación económica de la propia Conferencia, además de por aquellas otras que vayan siendo dictadas por ella en aplicación de la posibilidad, establecida en el canon 1275, al establecer que, la masa de bienes, provenientes de distintas diócesis, se administra conforme a las normas, que, oportunamente, acuerden los obispos interesados. Conforme a estas posibilidades, la Conferencia Episcopal española ha regulado la administración de los bienes, de los que es titular, en el propio reglamento de ordenación económica, de 1984, encomendando las funciones de gestión y representatividad a órganos colectivos y personales. Los primeros son: la asamblea plenaria; la comisión permanente; el comité ejecutivo; el consejo de economía y, finalmente, el comité de gestión. Entre los segundos se encuentran: el presidente de la Conferencia; el secretario general de la Conferencia, el vicesecretario para asuntos económicos y los administradores. Además, existe un organismo denominado servicio central de economía, vinculado al vicesecretario para asuntos económicos. Veamos, sucintamente, las competencias de cada uno de estos órganos de gestión y representatividad:

a) Órganos colectivos:

a') Asamblea plenaria. Es el órgano supremo al que corresponden, a tenor del artículo 8 de los Estatutos de la Conferencia, todos los poderes y facultades de la misma. Es el órgano supremo de decisión en las cuestiones económicas, tanto se refieran al patrimonio de la Conferencia, al "fondo común interdiocesano" o al fondo con fines propios. Además, le corresponde dictar las normas para la administración de los bienes, incluso para la de aquéllos que sin ser propios, le hubieran sido encomendados.

b') Comisión permanente. Ésta debe atender a la administración ordinaria y extraordinaria de la Conferencia Episcopal por delegación de la asamblea plenaria, conforme al propio reglamento de ordenación económica de la Conferencia, o que le fueren otorgadas en el futuro previo dictamen del "consejo de economía".

c') Comité ejecutivo. El comité ejecutivo ha de tomar las decisiones concretas que, por su carácter de urgencia, no permitan esperar la siguiente reunión de la comisión permanente, previo dictamen del consejo de economía. Además, ha de declarar la urgencia de algunos problemas, referentes a enajenaciones de bienes y debe ejercer, finalmente, las facultades que le hayan sido delegadas por la asamblea plenaria o por la comisión permanente;

d') Consejo de economía. Es el organismo de la Conferencia Episcopal, constituido para la información y asesoramiento de asuntos económicos, y para la ejecución de los acuerdos de este orden, que le hubieran sido confiados. Tiene carácter consultivo, excepto para los casos concretos en que le hubiere sido concedido poder decisorio por la comisión permanente, o se le atribuya el propio reglamento de ordenación económica de la Conferencia. En realidad, este organismo viene a llenar la previsión del Código de Derecho Canónico, de 1983,

<sup>528</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 126.

de que toda persona jurídica pública administradora de bienes eclesiásticos debe constituir un consejo de asuntos económicos -canon 492-, y observa importantes competencias de administración y gestión, sobre todo de naturaleza consultiva, aunque el consejo de economía de la Conferencia también puede tener atribuidas facultades ejecutivas.

e') Comité de gestión. Es un organismo constituido por la Conferencia Episcopal española, representativo de cada una de las provincias eclesiásticas, para informar, estudiar y colaborar con el consejo de economía en orden a la mejor gestión del fondo común interdiocesano, y para el asesoramiento de las consultas, que se eleven de índole económica. Tiene, como el consejo, carácter eminentemente consultivo, y ha de regirse tanto en su constitución, como en sus actuaciones, por las normas aprobadas por el consejo de economía<sup>529</sup>.

b) Órganos personales:

a') Presidente de la Conferencia. En general, corresponde al presidente de la Conferencia Episcopal, por delegación de la comisión permanente, la representación de la Conferencia misma en todo aquello referente a materias económicas;

b') Secretario general de Conferencia. Además de las competencias, que le pudieran ser atribuidas, el secretario general de la Conferencia, conforme a su reglamento de ordenación económica, tiene conferidas funciones de suplencia en presidencias, de estudios preparatorios y de ejecución y autorizaciones de gastos.

c') Vicesecretario para asuntos económicos. Es este el encargado de las funciones económicas y administrativas de la Conferencia y el responsable inmediato de la administración y gestión de todos los bienes administrados por la Conferencia y de la organización económica de la misma. El vicesecretario para asuntos económicos, a la vista de las competencias, que le son atribuidas, es el órgano permanente de gestión y representación más importante en materias económicas.

Si decíamos que el consejo de economía era el órgano correspondiente al consejo para asuntos económicos, previsto en el Código de Derecho Canónico, puede decirse que el vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal española se corresponde con la institución del ecónomo, asimismo prevista en la nueva codificación canónica -cánones 494 y 1278-.

d') Administradores. Para ayudar al vicesecretario para asuntos económicos o gerente de la Conferencia se prevé que ésta pueda designar uno o más administradores, que ejerzan sus funciones bajo su dependencia para determinados sectores o áreas de la Conferencia. La regulación concreta de las atribuciones y funcionamiento de este administrador o administradores se remite a unas normas, que deberán ser aprobadas por el consejo de economía.

e') Finalmente, además de todos estos órganos colectivos y personales de gestión y representatividad de la Conferencia en materias económicas se cuenta con un servicio central de economía, organismo de la secretaría general del episcopado y vinculado al gerente, que está encargado de facilitar la gestión económico-administrativa de la Conferencia episcopal, tanto en lo que se refiere a su

<sup>529</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 593-595.

patrimonio, como al fondo común interdiocesano, y que se rige por las directrices que marque el consejo de economía<sup>530</sup>.

La Conferencia Episcopal española, es decir, la Iglesia a nivel nacional, apenas tiene capital líquido. El caso de España, por ello, es totalmente diferente al de Italia, pues en Italia, cuando se perdieron los Estados Pontificios, y se hicieron los nuevos acuerdos de Letrán, de 1929, el Estado italiano entregó a la Iglesia, en compensación económica, una masa dineraria, que la Santa Sede y la Iglesia italiana invirtieron, y, de la que obtienen una rentabilidad. En España, aunque el concordato de 1953 preveía la entrega de una masa dineraria a la Iglesia en compensación de la desamortización, nunca se llegó a realizar. Donde sí hay algunas masas de bienes de capital líquido es en las diócesis. Se trata de los capitales, que administran las diócesis, a título de fundaciones pías, de capellanías, de testamentos... Casi todos ellos tienen unos fines específicos: para ayudar a un asilo, para facilitar unas becas, para celebrar unas misas con determinada intención, etcétera. Con lo cual no se puede disponer de ello para otras necesidades. Esta masa de bienes, cuya cuantía se nos escapa, está, normalmente, invertida en valores de la bolsa<sup>531</sup>. Las posesiones de la Conferencia Episcopal española de fincas rústicas y urbanas son mínimas: la casa central de Alfonso XI, 4, en Madrid, y dos o tres casas más de distintas Comisiones Episcopales, dedicadas a oficinas de las mismas. A nivel diocesano, aunque algunos obispados tienen algunas pequeñas fincas, que son propiedad del obispado, apenas existe un patrimonio eclesial propiamente dicho. Donde ha existido un patrimonio benefical, mientras ha estado vigente, es en las parroquias. En torno a las parroquias, especialmente, las más antiguas, están los bienes, que se constituyen la masa benefical de las mismas o los bienes propios de lo que se llama "fábrica". Sin embargo, muchas veces pertenecen a una Conferencia, a una obra pía determinada, o a alguna asociación concreta, lo que dificulta su disponibilidad para usos diferentes. La rentabilidad de este patrimonio existente es bastante escasa. Las rentas de fincas rústicas y urbanas, tan antiguas como las que forman el patrimonio eclesial, son muy poco productivas por las leyes de arrendamientos rústicos y urbanos, que ven limitado siempre las cantidades perceptibles por tales arrendamientos. En ocasiones, se obtiene una importante plusvalía de los solares, de ciertos lugares urbanos, que han mejorado, y que producen, al enajenarse o venderse, beneficios notables. Con todo, son casos aislados<sup>532</sup>. En ocasiones, incluso se ha planteado la venta en pública subasta internacional, del patrimonio histórico-artístico. Aunque alcanzaría un valor incalculable, tal patrimonio, sin embargo, no es enajenable, porque es un patrimonio histórico-artístico del pueblo español, cuya custodia y mantenimiento se ha confiado, por razones históricas, a la Iglesia<sup>533</sup>.

"Artículo 6.1. El Fondo Común Interdiocesano estará constituido por aquellos bienes, valores, derechos y cualesquiera aportaciones entregadas a la Iglesia en España o a la Conferencia Episcopal para el

<sup>530</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 595-597.

<sup>531</sup>.- Vid. ALBARRÁN, A., *Cómo funciona la economía en la Iglesia de España*, loc. cit., p. 273.

<sup>532</sup>.- Vid. ALBARRÁN, A., *Cómo funciona la economía en la Iglesia de España*, loc. cit., pp. 273-274.

<sup>533</sup>.- Vid. ALBARRÁN, A., *Cómo funciona la economía en la Iglesia de España*, loc. cit., p. 274.

sostenimiento y actividades de la diócesis, de otras Entidades dependientes de la Iglesia, de la misma Conferencia Episcopal, o para las necesidades generales de la Iglesia en España, cuya distribución deba ser determinada por la misma Conferencia Episcopal.

2. Básicamente dicho fondo está integrado por: a) La ayuda económica percibida a través del Estado. b) Las aportaciones de las diócesis, fieles, etc., para la intercomunicación de los bienes entre otras"<sup>534</sup>.

De conformidad con estas normas, la Conferencia Episcopal española publica todos los años, junto a su propio presupuesto, lo que podríamos llamar presupuesto del "fondo común interdiocesano"<sup>535</sup>. La constitución y distribución del "fondo común interdiocesano" se realiza según los siguientes criterios:

- a) La dotación proveniente de la "asignación tributaria";
- b) Los rendimientos del propio fondo;
- c) Las aportaciones de las diócesis<sup>536</sup>.

Los presupuestos de la Conferencia Episcopal española pueden ser ordinarios o extraordinarios:

- a) Ordinarios. Los presupuestos y balances de la Conferencia y de las entidades dependientes de ella, se confeccionan por el servicio central de contabilidad de la Iglesia española. Esta preparación de los presupuestos y balances ha de hacerse con la suficiente antelación para que los miembros de la asamblea plenaria puedan estudiarlos y dictaminarlos con conocimientos de todos sus capítulos.

Todos sus órganos de la Conferencia y demás entidades han de ajustar su gestión económica al presupuesto aprobado, de suerte que, cualquier gasto fuera del presupuesto, debe constar con la aprobación de la comisión permanente, previo informe del consejo de economía<sup>537</sup>.

- b) Extraordinarios. Los presupuestos extraordinarios sólo pueden ser presentados para atender a tareas, obras y servicios, que surgiesen eventualmente de un organismo o entidad de la Conferencia Episcopal, y que, por ello, no pudieran ser incluidos en las actividades previsibles y permanentes, que constituyen el presupuesto ordinario.

Expresamente no pueden ser incluidos en los presupuestos extraordinarios las reuniones, viajes, jornadas, conferencias, etcétera, para la utilidad inmediata de las diócesis o de otras instituciones, que habrán de ser financiadas por éstas.

En cualquier caso, las comisiones episcopales y los demás organismos y entidades de la Conferencia, han de presentar a la vicesecretaría para asuntos económicos, con la debida antelación, los datos necesarios para la

<sup>534</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 126.

<sup>535</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 127.

<sup>536</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 127.

<sup>537</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 597.

tramitación, tanto de los presupuestos ordinarios como de los extraordinarios<sup>538</sup>.

En cuanto a la dotación proveniente de la "asignación tributaria", ya ha sido, ampliamente, estudiado en las fases segunda y tercera. El segundo capítulo, de poca importancia, se refiere a los rendimientos del propio "fondo común interdiocesano" en los días, que permanecen bajo el control de la Conferencia los dineros, que se distribuyen entre las diócesis o se aplican al pago de la seguridad social del clero<sup>539</sup>. El tercer capítulo del "fondo común interdiocesano" -las aportaciones de las diócesis- no está suficientemente desarrollado. Tendrá, por ello, que ser potenciado en el futuro. Mientras solamente seis o siete diócesis acaparen el cincuenta por ciento de los fieles y en las sesenta restantes se distribuya el otro ciento por ciento; mientras haya diócesis de dos, tres o cuatro millones de habitantes, y diez diócesis con menos de doscientos mil habitantes, habrá que desarrollarse la intercomunicación de bienes, el estudio de las fuentes posibles para la autofinanciación, la organización técnica, para que todas las diócesis tengan acceso a las fuentes supradiocesanas o de tipo nacional, etcétera<sup>540</sup>. Lo más urgente es establecer un sistema de comunicación y compensación de bienes. Esta comunicación y compensación consiste en que los fieles, aporten donde aporten, sepan siempre que su oblación va a servir para las necesidades de aquella institución o templo, en los que la realizan, pero si esa institución o templo recibe más de lo que en verdad necesita, en un plan presupuestado general, funcionará automáticamente un régimen de comunicación y compensación a favor de obras deficitarias, a través de la unidad equilibrada, que es la diócesis<sup>541</sup>. Al menos se ha dado un paso de gigante al establecer los mecanismos legales para alcanzar esta autofinanciación, aunque, por supuesto, serán necesario varias décadas para que las bases establecidas hagan posible establecer una auténtica intercomunicación de bienes entre parroquias y diócesis.

Los "fondos comunes" son instrumentos de recaudación, de circulación y de retribución de recursos. Pero, al mismo tiempo, son, también, el cauce más importante, para preparar la autofinanciación, a través de la creación de "superávits programados", que permitan disminuir, progresivamente, la dependencia, respecto del Estado, de la propia diócesis y de las demás<sup>542</sup>.

La creación de "fondos comunes interdiocesanos regionales" aproximan psicológicamente, a los fieles la idea de solidaridad. Probablemente, el mejor proceso de aportación debiera ser, en términos generales, el siguiente: de fiel a parroquia; de parroquia a "fondo común diocesano"; de "fondo común diocesano" a "fondo común interdiocesano regional", y de "fondo común interdiocesano regional" al "fondo común interdiocesano general". Por supuesto, si no se consiguen crear "superávits programados", que permitan disminuir la dependencia respecto al Estado, no va a lograrse nunca la autofinanciación de la Iglesia católica<sup>543</sup>.

La Conferencia Episcopal española tiene constituido un "fondo común interdiocesano", a tenor del artículo 1274.4. Y las diócesis españolas han venido promoviendo desde los años setenta la constitución de fondos diocesanos comunes, para subvenir a las necesidades

<sup>538</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 597-598.

<sup>539</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 131.

<sup>540</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 131.

<sup>541</sup>.- Vid. PIÑERO CARRIÓN, J.Mª., *Consecuencias internas en la Iglesia del nuevo sistema económico*, en AA.VV., *El hecho religioso en la nueva Constitución española*, loc. cit., p. 385.

<sup>542</sup>.- Vid. Esquema de trabajo para la ponencia sobre la autofinanciación de la Iglesia española. (Ponencia), en *Iglesia y situación socioeconómica en la España de los 80 (material)*, loc. cit., p. 185.

<sup>543</sup>.- Vid. Esquema de trabajo para la ponencia sobre la autofinanciación de la Iglesia española. (Ponencia), en *Iglesia y situación socioeconómica en la España de los 80 (material)*, loc. cit., p. 185.

económicas diocesanas; primeramente, se constituyeron, de forma generalizada, las denominadas "cajas diocesanas de compensación", cuya finalidad principal y casi exclusiva era atender a las necesidades económicas de los sacerdotes. Posteriormente, se fue evolucionando hacia los llamados "fondos comunes diocesanos": en este caso se constituía una única masa o fondo común con todos los bienes diocesanos, para atender a todas las necesidades económicas diocesanas. Esta organización económica se impuso, de forma generalizada, en muchas diócesis españolas. Instituciones, que anticiparon la aplicación en nuestro país del canon 1274<sup>544</sup>.

Precisamente han sido estos "fondos comunes interdiocesanos" los que posibilitan una mayor "igualdad material" entre todas las diócesis, pues conciencian al fiel que debe colaborar con la Iglesia católica y hace realidad el ideal de una autofinanciación a nivel nacional, cuestión que, ciertamente, no resolvían los beneficios eclesiásticos, pues únicamente pretendían una financiación propia, sin atender a la realidad de otras parroquias, que, en la mayoría de los casos, imposibilitaban una buena administración religiosa de las distintas parroquias. Quizás éstos sean uno de los pilares básicos de nuestro Derecho eclesiástico.

## **B) INSTITUCIONES, DE CARÁCTER DIOCESANO, PARA ALCANZAR LA AUTOFINANCIACIÓN<sup>545</sup>.**

En la Iglesia española, la reordenación económica de las diócesis, su organización y regulación ha sido uno de los sectores eclesiales que más profundamente ha evolucionado en sus planteamientos y estructuras durante el período postconciliar. Dentro de esta reordenación conviene resaltar la creación del "fondo común diocesano" en cada diócesis, la regulación de los consejos diocesanos de asuntos económicos y de los ecónomos de la diócesis, si bien todavía no se ha procedido a promulgar una reglamentación general, un reglamento de la ordenación económica diocesana general, como el aprobado para la ordenación económica de la Conferencia Episcopal española, que hiciese más unitaria y uniforme esta reestructuración a nivel de las diócesis, aunque existan voces que así lo reclaman. A la vista de semejante carencia, se hace preciso abordar la temática desde la normativa general del Código de Derecho Canónico y su posterior acogimiento y desarrollo en el derecho particular de las distintas diócesis españolas<sup>546</sup>.

### **B.1. EL "FONDO COMÚN INTERDIOCESANO", COMO INSTITUCIÓN PARA ALCANZAR LA AUTOFINANCIACIÓN A NIVEL DIOCESANO.**

El "fondo común diocesano" ha venido a sustituir a la anterior organización benefical, en utilización de los cauces abiertos y posibilitados por las directrices del Concilio Vaticano II y, posteriormente, por el canon 1274 del Código de Derecho Canónico, de 1983, de forma que, en definitiva, ha venido a constituirse en institución capital de la organización económica de la Iglesia católica española. Su regulación, aún siguiendo las directrices de la Conferencia

<sup>544</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 322.

<sup>545</sup>.- GREEN ha afirmado que: "Precisely because of such diversity and because the code is very generic in regulating numerous financial issues, particular diocesan law has developed in various ways in order to deal responsibly with differing financial-legal variables, e.g. different rules on parish reporting procedures, fund-raising, taxation, banking systems". Vid. GREEN, Th.J., *Shepherding the patrimony of the poor: diocesan and parish structures of financial administration*, 56, *The Jurist* (1992/2), p. 709.

<sup>546</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 599.

Episcopal, es competencia del derecho particular diocesano, por lo que es preciso acudir a la normativa de cada una de las diócesis españolas, si se quiere saber concretamente cómo ha quedado regulado el fondo en cada una de ellas.

Anteriormente, la institución venía denominándose "caja diocesana de compensación", y aún algunas diócesis arrastran esta denominación, si bien la mayor parte ha ido impiniendo la de "fondo común diocesano"<sup>547</sup>.

El "fondo común diocesano" viene a estructurarse, como persona jurídico-pública en su modalidad de "universitas rerum", en utilización de las previsiones del canon 1274.1-3 del Código de Derecho Canónico, de 1983, cuya finalidad es la constitución de una masa común de bienes diocesanos, con que atender a las necesidades generales de la diócesis y a la honesta sustentación del clero en cumplimiento del canon 281. Aunque los objetivos y finalidades a que debe atender el fondo pueden variar más o menos de una diócesis a otra, en general, todos los constituidos, en cualquier caso, se dirigen a la satisfacción de las necesidades generales de la respectiva diócesis. Cada vez más se tiende a uniformar la normativa y objetivos perseguidos. Buena muestra de ello es la normativa contenida en el segundo decreto general de la Conferencia Episcopal española sobre las normas complementarias al nuevo Código de Derecho Canónico, de 1 de diciembre, de 1984. En estas normas se prescribe que el fondo para sustentación de los clérigos, que prestan su servicio en la diócesis puede configurarse, a juicio del obispo, bien como fundación pía autónoma conforme al canon 115.3, bien como ente, cuyos bienes estarán a nombre de la diócesis misma, aunque con plena autonomía contable. Es decir, en este segundo caso, el fondo para la sustentación del clero va a estar integrado dentro del "fondo común diocesano", de manera que, como establecen las mismas normas complementarias de la Conferencia, su administración corresponde a las mismas personas y organismos, que administran los bienes de la diócesis, rigiéndose por las mismas normas. El obispo diocesano, después de oír al consejo presbiteral y al "consejo de asuntos económicos", deben establecer el reglamento, por el que han de regirse las retribuciones de los clérigos que prestan servicio en la diócesis y que se abonen con cargo al fondo común diocesano. Por su parte, el economo diocesano debe proponer al obispo la aplicación concreta de ese reglamento, sometiendo a su aprobación las nóminas correspondientes y sus ulteriores variaciones. Si se utilizase la otra posibilidad, esto es, la de constituir el fondo como fundación pía autónoma, entonces el obispo diocesano debe dar un decreto fijando los estatutos de la fundación pública titular del fondo, en el que queden detallados sus órganos de gobierno, régimen administrativo, etcétera. La práctica más corriente es utilizar la primera de las posibilidades, es decir, que la sustentación del clero, que presta sus servicios en la diócesis, se lleve a efecto a través del "fondo común diocesano", si bien con autonomía contable<sup>548</sup>.

La financiación de los "fondos comunes diocesanos" procede de diversas aportaciones. Éstas suelen ser de los bienes diocesanos, de las instituciones eclesíásticas, dependientes de la diócesis -fundamentalmente de las aportaciones obligatorias parroquiales-; de otras entidades eclesíásticas directamente sujetas a la jurisdicción del obispo -catedrales, colegiadas, curia diocesana, seminarios, cofradías, asociaciones, colegios de enseñanza, etcétera-; de entidades eclesíásticas no sujetas directamente a la jurisdicción episcopal, pero que ejercen su actividad pastoral en la diócesis -así las comunidades de religiosos y religiosas-; y, finalmente, las aportaciones de los propios clérigos, que prestan su servicio en la diócesis. En cualquier caso, un recurso financiero cuantitativamente muy importante de los fondos comunes diocesanos es el

<sup>547</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 599.

<sup>548</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 600.

de la participación, que tiene cada diócesis en el "fondo común interdiocesano", y, por tanto, procedente de la dotación estatal a la Iglesia española<sup>549</sup>.

La administración del "fondo común diocesano", como en general, la de todos los bienes, cuya titularidad corresponde a la diócesis y sus personas jurídicas, es función primordial del obispo diocesano, ya de forma inmediata, ya mediata. Sin embargo, teniendo en cuenta la normativa general del Código de Derecho Canónico, de 1983, el obispo debe apoyarse en su función administradora en una serie de órganos, bien consultivos, bien ejecutivos, de los que los principales son el "consejo diocesano para asuntos económicos" y el economo diocesano, respectivamente<sup>550</sup>.

## **B.2. EL "CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y DEL ECONÓMO", COMO INSTITUCIÓN PARA ALCANZAR LA AUTOFINACIACIÓN, A NIVEL DIOCESANO.**

Los "consejos de asuntos económicos" son órganos de participación de los fieles en la gestión económica de la diócesis y de la parroquia<sup>551</sup>. El "consejos de asuntos económicos" es un organismo con funciones, principalmente, económicas y jurídicas, lo que precisa, en no pocas decisiones, del conocimiento y de la experiencia de los laicos en el campo civil, pues, en muchos de los negocios, que aquí se ventilan se ha canonizado la ley civil y para llevarlos a cabo hay que ajustarse a las reglas del juego de la sociedad secular. Ha sido en este terreno donde, salvo raras excepciones, después del Concilio Vaticano II, se les ha dado mayor entrada, confiándoles tareas de índole más económico o jurídico, que de decisión administrativa, donde se ejerce la potestad de régimen<sup>552</sup>.

Los cánones relevantes del libro V son:

- a) Canon 1263: el derecho del obispo, a imponer tributos, para adquirir bienes;
- b) Canon 1277: el procedimiento, que debe seguir el obispo, al realizar los actos de administración de mayor importancia y actos de administración extraordinarios;
- c) Canon 1281.2: actos de administración extraordinaria para personas, sujetas al obispo diocesano;
- d) Canon 1287.1: el requerimiento de cuentas anuales, para administradores clérigos y laicos de bienes eclesiásticos;
- e) Canon 1292.1: el procedimiento para actos de enajenación.
- f) Canon 1295: el procedimiento para actos, que pongan en peligro el patrimonio de las personas jurídicas;
- g) Canon 1305: la inversión de dinero y bienes muebles, como dote;
- h) Canon 1310.2: el procedimiento, que debe seguir el ordinario, cuando disminuyan las rentas;
- i) Canon 423.2: en caso de que el economo sea designado administrador, se nombrará provisionalmente otro economo;

<sup>549</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 601.

<sup>550</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 601.

<sup>551</sup>.- Vid. ANGELIS, A., De, *I consigli per gli Affari economici: statuti e indicazioni applicative*, loc. cit., p. 57.

<sup>552</sup>.- Vid. MORRÁS ETAYO, J.L., *El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos en las diócesis españolas*, 53, 140, R.E.D.C. (1996), pp. 236-237.

- j) Canon 494.1: el nombramiento del titular de asuntos diocesanos de sede plena;
- k) Canon 494.2: la renovación del titular de asuntos económicos de la sede plena<sup>553</sup>.

En todos estos casos, al obispo diocesano se le requiere recurrir al "consejo de asuntos económicos", ya sea para escuchar las opiniones de los consejeros o para obtener su consentimiento en orden a realizar los actos descritos en los cánones. En otros casos también deben participar en algunas de las decisiones otras personas: el "consejo presbiteral" -canon 1263-; el colegio de consultores -canon 494.1 y 2; 1277; 1292 y 1295- y las partes interesadas -cánones 1292.1; 1295; 1305 y 1310.2-<sup>554</sup>.

DE ANGELIS lo ha calificado como "gli organi di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della Diocesi e della Parrocchia"<sup>555</sup>.

La actual legislación de la Iglesia, de una forma mucho más decidida que el Código de Derecho Canónico, de 1917, establece la obligatoriedad de que cada persona jurídica tenga un "consejo de asuntos económicos", o, al menos, dos consejeros, que ayude en la administración de los bienes temporales -canon 1280-. Esta norma se concreta en la diócesis con lo establecido en el canon 492.1: la obligatoriedad de constituir un "consejo diocesano de asuntos económicos". La importancia de este organismo en el desarrollo de la economía es obvia<sup>556</sup>.

El Código de Derecho Canónico contiene las siguientes normas sobre el "consejo de asuntos económicos":

- a) el canon 492 determina la composición del "consejo de asuntos económicos";
- b) en otros cánones se determina la competencia del "consejo de asuntos económicos" -cánones 493, 494.1, 1263, 1277, 1281, 1287.1, 1292, 1305 y 1310-;
- c) el canon 537 prescribe la constitución del "consejo parroquial de asuntos económicos" y reenvía a las normas dadas por el obispo diocesano<sup>557</sup>.

A tenor del canon 492.1 del Código de Derecho Canónico, en cada diócesis se ha de constituir un "consejo de asuntos económicos", presidido por el obispo diocesano -o su delegado-, y que se compone, al menos, de tres fieles, designados por éste, y que han de ser expertos en materia económica y en Derecho civil. Es decir, que sus miembros no tienen que ser, necesariamente, clérigos, sino que también pueden formar parte del mismo laicos, como así sucede en la práctica diocesana de la Iglesia española<sup>558</sup>. Los miembros del consejo deben ser de fe cristiana, hombres y mujeres, clérigos, religiosos o laicos, que sean expertos en materias financieras y legales. Como consejo, estos hombres y mujeres deben asistir al obispo diocesano en la administración de los bienes de la diócesis. El obispo es libre para hacer uso de estos

<sup>553</sup>.- Vid. FARRELLY, A., *The Diocesan finance council: functions and duties according to the Code of Canon Law*, 23/1, S.C. (1989), pp. 150-151.

<sup>554</sup>.- Vid. FARRELLY, A., *The Diocesan finance council: functions and duties according to the Code of Canon Law*, 23/1, S.C. (1989), p. 151.

<sup>555</sup>.- Vid. ANGELIS, A., De, *I consigli per gli Affari economici: statuti e indicazioni applicative*, loc. cit., p. 57.

<sup>556</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc., cit., p. 324.

<sup>557</sup>.- Vid. ANGELIS, A., De, *I consigli per gli Affari economici: statuti e indicazioni applicative*, loc. cit., p. 57.

<sup>558</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 601.

expertos en las pautas, que siga, pero en algunas instancias el derecho exige al obispo consultar al consejo antes de actuar<sup>559</sup>.

El "consejo de asuntos económicos" es un órgano eminentemente consultivo o de asesoramiento del obispo diocesano, de singular relevancia, porque, en ocasiones, su dictamen es preceptivo<sup>560</sup>.

Su función no es llevar, gestionar la economía diocesana, tarea que corresponde al ecónomo diocesano, sino la de orientarle en su administración. Funciones que el Código de Derecho Canónico, de 1983, le asigna:

- a) Preparar cada año el presupuesto de ingresos y gastos, previsto para todo el régimen de la diócesis -canon 493-;
- b) Aprobar las cuentas de ingresos y gastos a fin de año de la diócesis -canon 493-;
- c) Ha de emitir su parecer respecto al nombramiento del ecónomo diocesano y su eventual remoción en el cargo -canon 494.2-;
- d) Determinar el modo, según el cual el ecónomo diocesano debe administrar los bienes de la diócesis, bajo la autoridad del obispo -canon 494.3-;
- e) Cada año el ecónomo diocesano debe rendir cuentas de los ingresos y gastos al consejo -canon 494.4-;
- f) Revisar, por encargo, del ordinario del lugar, las cuentas, que deben rendir anualmente los administradores de bienes eclesiásticos, que no estén legítimamente exentos de la potestad de régimen del obispo diocesano -canon 1287.1-<sup>561</sup>.

El consejo debe ser oído o consultado -cánones 127.1 y 2, 166 y siguientes- en los siguientes cánones:

- a) Para el nombramiento del ecónomo diocesano -canon 494.1- y para la remoción durante el plazo de tiempo para el que fue nombrado -canon 494.2-;
- b) Para el establecimiento de un tributo moderado a las personas jurídicas públicas, sujetas a la jurisdicción del obispo diocesano y para la imposición de una contribución extraordinaria, en caso de grave necesidad, a las demás personas físicas y jurídicas -canon 1263-;
- c) Igualmente, debe dársele audiencia para los actos de administración extraordinaria y para los especialmente determinados en el derecho universal -canon 1277-;
- d) Para la realización de los actos de administración de mayor importancia, atendida la situación económica de la diócesis -canon 1277-;
- e) Para la determinación de cuáles son los actos que sobrepasan el límite y el modo de la administración ordinaria de las personas jurídicas, sometidas al obispo diocesano, si los correspondientes estatutos nada dicen -canon 1281.2-;
- f) Para la colocación cauta y útil de los bienes muebles y del dinero, asignados como dote de una fundación pía -canon 1305-;

<sup>559</sup>.- Vid. FARRELLY, A., *The Diocesan finance council: functions and duties according to the Code of Canon Law*, loc. cit., pp. 149-150.

<sup>560</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 602.

<sup>561</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc., cit., p. 326.

- g) Para la reducción de las cargas de las causas pías -canon 1310.2-<sup>562</sup>.

El consejo debe dar su consentimiento -cánones 127.1 y 3 y 166 y siguientes- en los siguientes casos:

- a) Para la realización por el obispo diocesano de los actos de administración extraordinario, que deben ser determinados por la Conferencia Episcopal -canon 1277-;
- b) Para la enajenación de bienes de la diócesis y de las personas jurídicas públicas, sujetas al obispo diocesano, cuando: a) el valor de dichos bienes se encuentra dentro de los límites mínimos y máximos, fijados por la Conferencia Episcopal española -canon 1292.1-; b) cuando se trata de bienes, cuyo valor es superior al límite máximo fijado -canon 1292.2-; cuando se trata de exvotos donados a la Iglesia o de bienes preciosos por razones artísticas o históricas -cánones 1292.2 y 1190-;
- c) Para la realización de cualquier operación, de la que pueda resultar perjudicada la situación patrimonial de una persona jurídica -canon 1295-<sup>563</sup>.

La legislación particular puede encomendarle otras tareas. Sus competencias, en suma, pertenecen más bien al área de asesoramiento y control de la actividad económica, desarrollada por el ecónomo diocesano. No tiene competencias ejecutivas o de gestión de la administración<sup>564</sup>. En la *legislación particular* de la diócesis, los "consejos diocesanos de asuntos económicos" se encargan de distribuir ayudas a las parroquias, bien a la conservación de sus inmuebles o para la construcción o compra de otros nuevos, decidir sobre la retribución a sacerdotes, así como su asesoramiento en el campo jurídico y económico, siempre que lo necesiten, gestionar todos los asuntos relacionados con la Seguridad Social, tanto de sacerdotes, como del personal, que depende de la diócesis, mantener al día el inventario de los bienes de la diócesis, preparar la campaña del "día de la diócesis", así como concienciar a los fieles en la "asignación tributaria" para la Iglesia, dar a los fieles diocesanos información sobre la marcha de la economía en la diócesis, decidir sobre la compraventa de inmuebles, así como sobre las inversiones de los fondos diocesanos, para sacarles el máximo fruto, dar su parecer, cuando se van a reformar instituciones diocesanas, sobre todo si de aquí se van a derivar repercusiones económicas para la diócesis. Todo este abanico de responsabilidades y algunas de menor importancia vienen a unirse a las que de por sí tiene atribuidas este organismo por la legislación general<sup>565</sup>.

Los "consejos diocesanos de asuntos económicos" de las diócesis españolas, constituidos entre la promulgación del Código de Derecho Canónico de 1917, y que vienen a sustituir al antiguo "consejo diocesano de administración" del Código de Derecho Canónico de 1917 -canon 1520- han asumido, como competencias, aquellas señaladas por el nuevo ordenamiento canónico. Para evitar equívocos hay que indicar que no todos ellos adoptan la denominación del Código de Derecho Canónico, sino que también suelen utilizarse otras denominaciones, para designar a este importante órgano consultivo de la administración de la diócesis -consejo asesor económico; consejo diocesano de administración; consejo pastoral de economía diocesana; consejo de planificación económica, etcétera-. En realidad, el órgano viene a desempeñar en el

<sup>562</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc., cit., p. 327.

<sup>563</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc., cit., p. 327.

<sup>564</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc., cit., p. 327.

<sup>565</sup>.- Vid. MORRÁS ETAYO, J.L., *El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos en las diócesis españolas*, loc. cit., pp. 235-236.

ámbito diocesano las funciones, que tiene atribuidas el consejo de economía en el de la Conferencia Episcopal española. Además, el "consejo diocesano de asuntos económicos" es el principal órgano consultivo en la administración de los bienes diocesanos, y a su lado existen otros órganos de la misma naturaleza, que tienen ciertas competencias en esta materia<sup>566</sup>.

El Código de Derecho Canónico, de 1983, contiene las siguientes normas sobre los "consejos de asuntos económicos":

- a) El canon 492 determina la composición del "consejo diocesano de asuntos económicos";
- b) Algunos cánones, que determina la competencia del "consejo diocesano de asuntos económicos": cánones 493, 494.1, 1263, 1277, 1281, 1287.1, 1292, 1305 y 1310 del Código de Derecho Canónico, de 1983.
- c) El canon 537 del Código de Derecho Canónico, de 1983, que prescribe la constitución del "consejo parroquial de asuntos económicos", reenviando a las normas, dadas por el obispo diocesano.
- d) El canon 1280 del Código de Derecho Canónico, de 1983, que prescribe el "consejo de asuntos económicos", o, al menos, dos consejeros por cada persona económica<sup>567</sup>.

El canon 492 del Código de Derecho Canónico, de 1983, instituye la institución del "consejo de asuntos económicos":

- "1. En cada diócesis ha de constituirse un consejo de asuntos económicos, presidido por el Obispo diocesano o su delegado, que consta al menos de tres fieles designados por el Obispo, que sean verdaderamente expertos en materia económica y en derecho civil, y de probada integridad.
- 2. Los miembros del consejo de asuntos económicos se nombran para un determinado período de cinco años, pero, transcurrido ese tiempo, puede renovarse el nombramiento para otros quinquenios.
- 4. Quedan excluidos del consejo de asuntos económicos los parientes del Obispo, hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad".

El canon 492 del Código de Derecho Canónico, de 1983, prescribe que en cada diócesis debe constituirse el "consejo diocesano de asuntos económicos"<sup>568</sup>. El libro V, donde se regulan los bienes temporales de la Iglesia, en varias ocasiones remite a este organismo, bien para reclamar su consulta, bien para solicitar su autorización, antes de realizar determinados negocios jurídicos<sup>569</sup>. El "consejo diocesano de asuntos económicos" tiene, entre otras funciones:

- a) Distribuir ayudas a las parroquias, bien para la conservación de sus inmuebles o para la construcción o compra de otros nuevos;

<sup>566</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 602-603.

<sup>567</sup>.- Vid. ANGELIS, A., De, *I consigli per gli Affari economici: statuti e indicazioni applicative*, loc. cit., pp. 57-58.

<sup>568</sup>.- Sobre el "consejo diocesano de asuntos económicos", vid. VIZZARRI, A., *Il Consiglio diocesano per gli affari economici: Costituzione, Struttura, Nomine*, CXIX, M.E. (1994-III), pp. 385-432.

<sup>569</sup>.- Vid. MORRÁS ETAYO, J.L., *El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos en las diócesis españolas*, loc. cit., pp. 235-236.

- b) Decidir sobre la retribución a sacerdotes, así como su asesoramiento en el campo jurídico;
- c) Gestionar todos los asuntos económicos con la seguridad social, tanto de sacerdotes, como del personal, que depende de las diócesis;
- d) Mantener al día el inventario de los bienes de la diócesis;
- e) Preparar la campaña del "día de la diócesis", así como concienciar a los fieles en la "asignación tributaria" para la Iglesia católica;
- f) Dar a los fieles diocesanos información sobre la marcha de la economía en la diócesis;
- g) Decidir sobre la compraventa de inmuebles, así como sobre las inversiones de los "fondos diocesanos", para sacarles el máximo fruto;
- h) Dar su parecer, cuando se van a reformar instituciones diocesanas, sobre todo si de aquí se van a derivar repercusiones económicas para la diócesis;
- i) Todo este abanico de responsabilidades, y algunas más de menor importancia, vienen a unirse a las que de por sí tiene atribuidas este organismo por la legislación general<sup>570</sup>.

Se ha avanzado en la cualificación del personal, pues, salvo rarísimas excepciones, todos los "consejos diocesanos de asuntos económicos" cuentan con expertos en economía y Derecho civil, tal y como prescribe el canon 492 del Código de Derecho Canónico, de 1983, además de en Derecho canónico<sup>571</sup>.

El canon 493 del Código de Derecho Canónico, de 1983, establece que le compete al "consejo de asuntos económicos", de acuerdo con las indicaciones del obispo, hacer cada año el presupuesto de ingresos y gastos de la diócesis para todo el año entrante, así como aprobar las cuentas de ingresos y gastos a fin de año. Efectivamente, éste nos dice:

"Además de las funciones que se le encomiendan en el Libro V, *De los bienes temporales de la Iglesia*, compete al consejo de asuntos económicos, de acuerdo con las indicaciones recibidas del Obispo, hacer cada año el presupuesto de ingresos y gastos para todo el régimen de la diócesis en el año entrante, así como aprobar las cuentas de ingresos y gastos a fin de año".

El canon 493 exige que "consejo de asuntos económico" prepare cada año, conforme a la dirección del obispo diocesano, un presupuesto de los ingresos y gastos, previstos para el gobierno de la diócesis en el año venidero<sup>572</sup>.

El canon 494 del Código de Derecho Canónico, de 1983, establece los requisitos que debe reunir el ecónomo, que debe estar presente en cada diócesis:

- "1. En cada diócesis, el Obispo oído el colegio de consultores y el consejo de asuntos económicos, debe nombrar un ecónomo, que sea verdaderamente experto en materia económica y de reconocida honradez.
2. Se ha de nombrar al ecónomo para cinco años, pero el nombramiento puede renovarse por otros quinquenios, incluso más de una vez, al vencer el

<sup>570</sup>.- Vid. MORRÁS ETAYO, J.L., *El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos en las diócesis españolas*, loc. cit., p. 231.

<sup>571</sup>.- Vid. MORRÁS ETAYO, J.L., *El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos en las diócesis españolas*, loc. cit., p. 238.

<sup>572</sup>.- Vid. FARRELLY, A., *The Diocesan finance council: functions and duties according to the Code of Canon Law*, loc. cit., pp. 153-154.

plazo; durante el tiempo de su cargo, no debe ser removido si no es por causa grave, que el Obispo ha de ponderar habiendo oído al colegio de consultores y al consejo de asuntos económicos.

3. Corresponde al ecónomo, de acuerdo con el modo determinado por el consejo de asuntos económicos, administrar los bienes de las diócesis bajo la autoridad del Obispo y, con los ingresos propios de la diócesis, hacer los gastos que ordene legítimamente el Obispo o quienes hayan sido encargados por él.

4. Al final del año, el ecónomo debe rendir cuentas de ingresos y gastos al consejo de asuntos económicos".

Todas las diócesis españolas valoran, muy positivamente, la creación del "consejo diocesano de asuntos económicos" y muy eficaz su ayuda. Las razones alegadas son las siguientes:

- a) Gran ayuda al obispo y a la diócesis en general en lo referente a materia económica y a todo lo relacionado con ella;
- b) Medio de participación de los laicos dentro de los órganos de administración de la Iglesia;
- c) Da sensación de claridad y transparencia en algo tan delicado, como en el dinero;
- d) Contribuye a la autofinanciación con sus campañas informativas y, sobre todo, estimulando a los fieles, a que colaboren, pues a él se le encomienda la organización del "Día de ayuda a la Iglesia diocesana" y otras campañas semejantes;
- e) Es un elemento fundamental en la coordinación económica de los diferentes organismos de la diócesis;
- f) Impulsa a las personas jurídicas públicas inferiores -es el caso de las parroquias-, a crear un "consejo de economía", compuesto por los miembros de la misma y presidiendo por la persona, que está a su cargo<sup>573</sup>.

Con el "consejo diocesano de asuntos económicos" se ha hecho posible la participación de los laicos en el gobierno de la diócesis, tal y como prevé el canon 129 del Código de Derecho Canónico, de 1983<sup>574</sup>, si bien aun falta la presencia de las mujeres en dicho organismo. Con ello se consigue un efecto positivo: que, aquellas personas, que contribuyen a la financiación de la Iglesia católica, tengan participación y conocimiento de cómo se administran los bienes, que ellos aportan. También ha contribuido a la publicidad y claridad a la hora de dar a conocer la situación de la economía diocesana, tanto en el momento de preparar los presupuestos, como en el de publicar los resultados. Igualmente, en el tema de la autofinanciación ha jugado un papel muy importante -a veces se le ha encargado, de forma específica, las campañas de autofinanciación-<sup>575</sup>.

<sup>573</sup>.- Vid. MORRÁS ETAYO, J.L., *El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos en las diócesis españolas*, loc. cit., p. 247.

<sup>574</sup>.- Este canon 129 del Código de Derecho Canónico, de 1983, nos dice:

"En el ejercicio de dicha potestad -de régimen, que existe en la Iglesia por institución divina-, los fieles laicos pueden cooperar a tenor de derecho".

<sup>575</sup>.- Vid. MORRÁS ETAYO, J.L., *El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos en las diócesis españolas*, loc. cit., p. 249.

El "consejo diocesano de asuntos económicos" es un órgano que ha contribuido a la publicidad y claridad a la hora de dar a conocer la situación de la economía diocesana, tanto en el momento de preparar los presupuestos, como en el de publicar los resultados. Igualmente, en el tema de la autofinanciación ha jugado un papel muy importante -a veces se le ha encargado de forma específica las campañas de autofinanciación-. En algunas diócesis, se han constituido organismos paralelos, que, a nuestro parecer, lo único que hacen es realizar las tareas propias del "consejo diocesano de asuntos económicos", algo que se podría haber evitado, si se hubiera dotado al mismo de unos buenos estatutos<sup>576</sup>.

El Código de Derecho Canónico, de 1917, determinaba que, para la dirección de la economía diocesana el ordinario del lugar debía constituir un "consejo diocesano de administración" -canon 1520 del Código de Derecho Canónico, de 1917-, que estaba compuesto por el propio ordinario, que lo presidía y por dos o más miembros que eran elegidos por el mismo ordinario, habiendo oído el cabildo -canon 1520.1 del citado Código de 1917-. El actual canon 1280 establece la obligatoriedad de que toda persona jurídica tenga su "consejo de asuntos económicos" o, al menos, dos consejeros, que ayuden al administrador en el cumplimiento de su función. La aplicación de esta norma en la diócesis es el "consejo diocesano de asuntos económicos" -canon 492 del Código de 1983-, cuya constitución es obligatoria en cada diócesis y consta de los siguientes miembros: el obispo diocesano, que es su presidente nato, o su delegado, y de, al menos, tres fieles designados por el obispo, que deben ser expertos en materia económica, en Derecho civil y de probada integridad. Sus miembros son nombrados para un quinquenio, pudiendo ser renovados para otros quinquenios sucesivos sin limitación alguna<sup>577</sup>.

El "consejo parroquial de asuntos económicos" está previsto en el canon 537 del Código de 1983. El canon 537 es, canónicamente, muy escueto; se limita a establecer la obligatoriedad de la constitución del "consejo parroquial de asuntos económicos", aplicando a las parroquias la norma general, contemplada en el canon 1280, y debe estar compuesto por fieles. El "consejo parroquial de asuntos económicos" es concebido, generalmente, en la legislación diocesana española, como un organismo, que ayuda y asesora al párroco en la administración de los bienes temporales, tal como lo describe el canon 537. Se recalca en todos los casos, que el párroco o el moderador del grupo sacerdotal es el administrador nato y responsable del patrimonio parroquial<sup>578</sup>.

Funciones consultivas o asesoras:

- a) La elaboración, preparación, confección o aprobación de los presupuestos -constituidos por el inventario, previsión de cuentas de pérdidas y ganancias- y balances anuales de la parroquia;
- b) La promoción o estimulación de la colaboración de los feligreses en la financiación de la parroquia, de acuerdo con las orientaciones diocesanas y con la aprobación del consejo pastoral parroquial en algunos casos;
- c) La publicación de las cuentas de ingresos y gastos parroquiales, para que los fieles tengan conocimiento de la marcha económica de la parroquia, al menos una vez al año;

<sup>576</sup>.- Vid. MORRÁS ETAYO, J.L., *El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos en las diócesis españolas*, loc. cit., p. 249.

<sup>577</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc., cit., pp. 324-325.

<sup>578</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., pp. 177-178.

- d) Una serie de diócesis encomiendan al "consejo parroquial de asuntos diocesanos" la planificación de las necesidades económicas parroquiales a corto y largo plazo;
- e) La programación de las obras parroquiales;
- f) El asesoramiento al párroco de todo cuanto se refiere a la adquisición de bienes y recursos, a las enajenaciones, a la administración del patrimonio parroquial, a la elaboración cada año del presupuesto de ingresos y gastos de la parroquia y a efectuar su balance;
- g) El cuidado de que todas las asociaciones piadosas de la parroquia lleven debidamente la administración de sus bienes, según sus propios estatutos, que deberán acomodar al actual Código de Derecho Canónico y someterlos a la aprobación del ordinario;
- h) El facilitar un conocimiento más exacto y técnico de la situación económica tanto al párroco como a la comunidad parroquial;
- i) El recabar fondo para el buen funcionamiento de la economía parroquial;
- j) El velar para que los bienes materiales estén al servicio de la acción pastoral en todas sus dimensiones;
- k) El preocuparse particularmente sobre las retribuciones a los sacerdotes y a las personas dedicadas al servicio parroquial y sobre la seguridad social;
- l) La educación de la comunidad parroquial en orden a la necesaria apertura a la comunicación cristiana de bienes a todos los niveles -interparroquial, diocesano, interdiocesano, universal-<sup>579</sup>.

#### Funciones de control sobre el administrador:

- a) La intervención en la administración extraordinaria -enajenar, alquilar o gravar bienes de la parroquia...-;
- b) La supervisión de las actividades económicas, de los balances de situación y cuentas de resultados;
- c) El dictaminar en la ejecución -que corresponde al párroco- de partidas aprobadas en el presupuesto ordinario actual y que superen las 20.000 pesetas.
- d) El asesoramiento al párroco en los casos, que precisen reducción de las cargas fundacionales;
- e) La firma, conjuntamente con el párroco, de las cuentas ordinarias de la administración parroquial, que se deben presentar a la aprobación de la curia diocesana;
- f) Para el cese de uno de los miembros del "consejo parroquial de asuntos económicos" es preceptivo oír al propio consejo<sup>580</sup>.

#### Funciones ejecutivas o de administración ordinaria:

- a) La confección y puesta al día del inventario de los bienes muebles, inmuebles, objetos de culto, etcétera, y el cuidado del buen estado de

<sup>579</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., pp. 181-182.

<sup>580</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., p. 182.

conservación de los mismos, incluyendo las reparaciones ordinarias, previstas dentro del presupuesto anual;

- b) La tarea de atender los ingresos y gastos de la respectiva institución y el cuidado de que los libros parroquiales de contabilidad sean llevados al día, siguiendo el modelo y las orientaciones diocesanas;
- c) La administración y conservación de los bienes muebles e inmuebles de la parroquia, así como la custodia de los objetos valiosos, de las obras de arte, de patrimonio cultural, etcétera;
- d) El velar por la adecuada ejecución del presupuesto debidamente aprobado;
- e) La observación cuidadosa del cumplimiento de las leyes civiles en materia fiscal y laboral, especialmente en la contratación ocasional de terceras personas;
- f) La distribución de los ingresos parroquiales, según lo establecido por la legislación diocesana;
- g) La conservación y puesta al día de la completa documentación referente a las propiedades y los derechos de la Iglesia;
- h) La conservación y procura del mejor rendimiento de los bienes parroquiales;
- i) La presentación antes del día 30 del mes de mayo de cada año de la declaración de la renta de la parroquia y entidades parroquiales en la curia diocesana;
- j) La realización de los actos de administración ordinaria de los fondos de la parroquia, recibiendo los ingresos y procediendo a efectuar los pagos presupuestados;
- k) El cobro en el momento oportuno de las rentas y productos de los bienes y el pago de las obligaciones que pesan sobre la parroquia,
- l) La apertura de cuentas en establecimientos de crédito y la disposición de los fondos, depositados en las condiciones, que determine el "consejo parroquial de asuntos económicos";
- m) Disponer la aplicación a los fines de la parroquia del dinero, que sobre del pago de los gastos;
- n) El párroco, con el "consejo parroquial de asuntos económicos", podrá gestionar todo lo que se considere como actos de administración ordinaria de la parroquia;
- o) Informarse de todas las instrucciones, que el obispo establezca en las diócesis sobre materias económicas, para aplicarlas en la parroquia<sup>581</sup>.

Una de las normas más implantadas en las diócesis españolas es la imposición a las parroquias del pago de un tributo o impuesto para las necesidades diocesanas, a tenor del canon 1263 del Código de Derecho Canónico, de 1983. Su justificación se hace por la necesidad de la autofinanciación de la Iglesia diocesana, la comunicación de bienes entre las diferentes instituciones diocesanas, la unión pastoral de la diócesis, el cumplimiento solidario de las necesidades económicas diocesanas, etcétera. Las características de este tributo -en algún caso denominado "cuota institucional" o "canon parroquial"- son las siguientes:

- a) Tiene un verdadero carácter obligatorio y vinculante;

<sup>581</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., pp. 182-184.

- b) Suele consistir generalmente en la entrega a la diócesis por la parroquia de una determinada cantidad de dinero, basada en un porcentaje sobre los ingresos ordinarios, obtenidos por la parroquia, exceptuándose aquéllos que tienen un carácter extraordinario, tales como las colectas extraordinarias o supraparroquiales, los préstamos o subvenciones recibidas de las diferentes entidades, etcétera, o en un canon parroquial, basado en un cálculo de pesetas/habitante de la parroquia;
- c) El porcentaje a ingresar se calcula, normalmente, sobre los ingresos ordinarios del año anterior, de acuerdo con el balance parroquial correspondiente, aprobado por los organismos diocesanos;
- d) Algunas diócesis han establecido, además, unos "índices correctores" sobre este porcentaje o sobre la relación pesetas/habitante, que tienden a hacer más equitativo este impuesto diocesano: número total de habitantes, nivel de práctica religiosa, según diferentes indicadores sociológicos -por ejemplo, asistencia a misa, servicios religiosos prestados a la parroquia, etcétera,-, *renta per capita* del lugar, ubicación geográfica, renta familiar disponible, asistencia a la misa dominical, etcétera.
- e) Los porcentajes y las cantidades a aportar por cada parroquia son revisados periódicamente<sup>582</sup>.

El canon 1263 del Código de Derecho Canónico, de 1983, otorga al obispo diocesano la facultad de imponer tributos, para subvenir las necesidades de la diócesis. Este canon representa un patético desarrollo de las facultades para subvenir las necesidades concedidas al obispo en el Código de Derecho Canónico, de 1917<sup>583</sup>. El canon 1263 nos dice:

"Para subvenir a las necesidades de la diócesis, el Obispo diocesano tiene derecho a imponer un tributo moderado a las personas jurídicas públicas sujetas a su jurisdicción, que sea proporcionado a sus ingresos, oído el consejo de asuntos económicos y el consejo presbiteral; respecto a las demás personas físicas y jurídicas sólo se le permite imponer una contribución extraordinaria y moderada, en caso de grave necesidad y en las mismas condiciones, quedando a salvo las leyes y costumbres particulares que le reconozcan más amplios derechos".

La medida de la consulta previa al "consejo presbiteral" fue hecha en el primer proyecto al canon, pero no fue hasta el proyecto de 1980, cuando se hizo una similar regulación para el "consejo de asuntos económicos". El canon contiene algunos elementos, cuya determinación, exige el dictamen pericial del "consejo de asuntos económicos". Por ejemplo, ¿qué constituye un "moderado" tributo? ¿qué significa la expresión de "proporcionado a sus ingresos"? Como las parroquias serían, principalmente, las personas jurídicas públicas, sujetas a este impuesto, debería ser el "consejo de asuntos económicos", el que, según el informe enviado anualmente por los administradores de las parroquias, de acuerdo con el canon 1287.1, debería conocer los ingresos de tales personas jurídicas<sup>584</sup>.

<sup>582</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., pp. 196-197.

<sup>583</sup>.- Vid. FARRELLY, A., *The Diocesan finance council: functions and duties according to the Code of Canon Law*, loc. cit., p. 154.

<sup>584</sup>.- Vid. FARRELLY, A., *The Diocesan finance council: functions and duties according to the Code of Canon Law*, loc. cit., p. 155.

El canon 264.2 del Código de Derecho Canónico, de 1983, que otorga al obispo la facultad de imponer un tributo a favor del seminario a "todas las personas jurídicas eclesíásticas, también las privadas, que tengan sede en la diócesis", confirma que la interpretación más razonable del canon 1263 es la que restringe el impuesto a estas personas, sujetas al obispo<sup>585</sup>.

Las características comunes a todos los "consejos diocesanos de asuntos económicos" son:

- a) Salvo raras excepciones en todos los "consejos diocesanos de asuntos económicos", hay un porcentaje de laicos: en algunos puramente testimonial; en otros, con gran representatividad y en unos pocos mayoría;
- b) Las mujeres apenas han sido llamadas a participar en este organismo y donde ha hecho se les ha concedido un margen muy pequeño;
- c) Todos han incorporado expertos en economía, Derecho civil, Derecho canónico y otras actividades, relacionadas todas ellas con este organismo, así como expertos en gestión de empresa, bancos, arquitectos, entendidos en arte y, en algún caso, expertos en agricultura, dado que la Iglesia posee no pocas fincas rústicas en terrenos municipales<sup>586</sup>.

Todas las diócesis valoran muy positiva la creación del "consejos diocesanos de asuntos económicos" y muy eficaz su ayuda. Las razones alegadas son, en breve resumen, las siguientes.

- a) Gran ayuda al obispo y a la diócesis en general en lo referente a materia económica y a todo lo relacionado con ella;
- b) Medio de participación de los laicos dentro de los órganos de administración de la Iglesia;
- c) Da sensación de claridad y transparencia en algo tan delicado como en el dinero;
- d) Contribuye a la autofinanciación con sus campañas informativas y sobre todo estimulando a los fieles, a que colaboren, pues a él se le encomienda la organización del "Día de ayuda a la Iglesia diocesana" y otras campañas semejantes;
- e) Es un elemento fundamental en la coordinación económica de los diferentes organismos de la diócesis;
- f) Impulsa a las personas jurídicas inferiores, por ejemplo, la parroquia, a crear un "consejo de economía" compuesto por los miembros de la misma y presidido por la persona que está a su cargo<sup>587</sup>.

El nuevo Código ha clarificado y presidido las relaciones entre los superiores, en el sentido amplio, y sus consejeros. El canon 127 resuelve la duda, que había surgido en el cano 105 del Código de 1917, si pedía consejo, cuando estipulaba en los cánones, que, para su validez, requería también el consentimiento. La respuesta ha sido afirmativa. Tanto la consulta como el consentimiento son elementos centrales en el funcionamiento del "consejo de asuntos

<sup>585</sup>.- Vid. FARRELLY, A., *The Diocesan finance council: functions and duties according to the Code of Canon Law*, loc. cit., p. 155.

<sup>586</sup>.- Vid. MORRÁS ETAYO, J.L., *El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos en las diócesis españolas*, loc. cit., p. 239.

<sup>587</sup>.- Vid. MORRÁS ETAYO, J.L., *El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos en las diócesis españolas*, loc. cit., p. 247.

económicos"<sup>588</sup>. El canon 127 del Código de Derecho Canónico, de 1983, establece cómo se debe realizar:

- "1. Cuando el derecho establece que, para realizar ciertos actos, el Superior necesita el consentimiento o consejo de algún colegio o grupo de personas, el colegio o grupo debe convocarse a tenor del can. 166, a no ser que, tratándose tan sólo de pedir el consejo, dispongan de otra cosa el derecho particular o propio; para la validez de los actos, se requiere obtener el consentimiento de la mayoría absoluta de los presentes, o bien pedir el consejo de todos.
2. Cuando el derecho establece que, para realizar ciertos actos, el Superior necesita el consentimiento o consejo de algunas personas individuales.
  - 1.º si se exige el consentimiento, es inválido el acto del Superior en caso de que no pida el consentimiento de esas personas o actúe contra el parecer de las mismas o de alguna de ellas;
  - 2.º si se exige el consejo, es inválido el acto del Superior en caso de que no escuche a esas personas; el Superior, aunque no tenga ninguna obligación de seguir ese parecer, aun unánime, no debe sin embargo, apartarse del dictamen, sobre todo si es concorde, sin una razón que, a su juicio, sea más poderosa.
3. Todos aquellos cuyo consentimiento o consejo se requiere están obligados a manifestar sinceramente su opinión, y también, si lo pide la gravedad de la materia, a guardar cuidadosamente secreto, obligación que el Superior puede urgir"

El canon 127 del Código de Derecho Canónico, de 1983, pone de manifiesto la importancia sobre el legislador de la consulta, como parte del gobierno eclesial<sup>589</sup>.

El "consejo diocesano de asuntos económicos" tiene un particular mandato: examinar las cuentas anuales enviadas al obispo -canon 1287.1 del Código de 1983- y también examinar las cuentas preparadas por el ecónomo, de los ingresos y gastos de la diócesis cada año -cánones 493 y 494.4 del Código de Derecho Canónico, de 1983-<sup>590</sup>.

El obispo diocesano está obligado a rendir cuentas a los fieles acerca de los bienes, que éstos entreguen a la Iglesia -canon 1287.2-. El informe es obligatorio; la forma de realizarlo y presentarlo es dejado a la regulación del diocesano. El cumplimiento por los fieles de tal exigencia evita escándalos, que dañan la credibilidad de la Iglesia y de su misión. Con toda posibilidad, el obispo asignará la tarea de preparación de estas cuentas al ecónomo del "consejo de asuntos económicos", que lo enviará al "consejo de asuntos económicos" para su consideración<sup>591</sup>.

### B.3. EL ECÓNOMO DIOCESANO.

<sup>588</sup>.- Vid. FARRELLY, A., *The Diocesan finance council: functions and duties according to the Code of Canon Law*, loc. cit., p. 151.

<sup>589</sup>.- Vid. FARRELLY, A., *The Diocesan finance council: functions and duties according to the Code of Canon Law*, loc. cit., p. 152.

<sup>590</sup>.- Vid. FARRELLY, A., *The Diocesan finance council: functions and duties according to the Code of Canon Law*, loc. cit., p. 158.

<sup>591</sup>.- Vid. FARRELLY, A., *The Diocesan finance council: functions and duties according to the Code of Canon Law*, loc. cit., p. 158.

Otros colaboradores del obispo diocesano en la gestión de los bienes temporales tienen carácter ejecutivo, y, al frente de ellos, se encuentra el ecónomo diocesano –canon 494-. Oficio que, aunque en el Código de Derecho Canónico, de 1917, no estaba explícitamente establecido, existía de forma generalizada en las diócesis. Su nombramiento es obligatorio en cada diócesis y lo realiza el obispo, oído el colegio de consultores y el "consejo diocesano para asuntos económicos" y debe recaer en una persona, que sea experta en materia económica y de conocida honradez -canon 494.1-. El tiempo de duración de su cargo es de un quinquenio renovable sin límite -canon 494.2-. El ecónomo diocesano es un colaborador nato del obispo diocesano<sup>592</sup>.

El canon 494.1 del Código de Derecho Canónico, de 1983, establece que el obispo debe nombrar un ecónomo en la diócesis. Antes debe consultar al colegio de consultores y al "consejo de asuntos económicos". El ecónomo tiene numerosas responsabilidades y, consecuentemente, el obispo debe tener extremo cuidado, para elegir la persona más cualificada. El dictamen de los miembros del consejo jugará un papel vital, al elegir a los candidatos<sup>593</sup>.

Si el consejo es el principal órgano consultivo, que coadyuva con el obispo diocesano a la recta administración de los bienes de la diócesis, el ecónomo es el fundamental órgano de naturaleza ejecutiva. Según el Código de Derecho Canónico, en cada diócesis, el obispo oído el consejo de consultores y el "consejo de asuntos económicos", debe nombrar un ecónomo, que sea verdaderamente experto en materia económica y de conocida honradez -canon 494.1-<sup>594</sup>.

En el ecónomo diocesano recaen, en cuanto órgano ejecutivo, las funciones de ejecución y administración directa de los bienes diocesanos, debiendo seguir en sus actuaciones las directrices, que le sean señaladas por el "consejo diocesano de asuntos económicos". Incluso, el obispo diocesano puede encomendarle la administración de patrimonios eclesiásticos, que no tengan administrador propio -cánones 1287; 1276.1 y 1279.2-. Además, debe hacer los gastos con los ingresos propios de la diócesis, que sean ordenados por el obispo diocesano o por quienes por él hayan sido encargados. Al final de cada ejercicio, el ecónomo debe rendir cuentas de ingresos y gastos al "consejo diocesano de asuntos económicos" -canon 494.3-4-. En la práctica, el ecónomo está, habitualmente, al frente de un órgano técnico, que, según las diócesis, reviste diversas denominaciones, y que, a su vez, se subdivide las funciones en diversas secciones<sup>595</sup>.

El ecónomo diocesano y el organismo técnico, al que dirige, ha tenido y tiene una importancia decisiva para la renovación de la economía diocesana, adquiriendo una gran preponderancia sobre el conjunto de la vida de la diócesis, de forma que se hace necesario ir delimitando claramente en el futuro sus funciones, a fin de que no invadan terrenos, que no les compete y promulgar un "estatuto de los administradores" y del ecónomo diocesano en particular<sup>596</sup>.

Para remover al ecónomo -canon 494.2- se requiere una causa grave para ello, y haber consultado al colegio de consultores y al "consejo de asuntos económicos", los mismos a los que hay que consultar para nombrar al ecónomo<sup>597</sup>.

<sup>592</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., pp. 329-330. ,

<sup>593</sup>.- Vid. FARRELLY, A., *The Diocesan finance council: functions and duties according to the Code of Canon Law*, loc. cit., pp. 164-165.

<sup>594</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 603.

<sup>595</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 603.

<sup>596</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 604.

<sup>597</sup>.- Vid. FARRELLY, A., *The Diocesan finance council: functions and duties according to the Code of Canon Law*, loc. cit., p. 165.

### C. INSTITUCIONES, A NIVEL PARROQUIAL, PARA ALCANZAR LA AUTOFINANCIACIÓN.

Como toda persona jurídico-pública eclesiástica también la parroquia ha de seguir el mismo esquema organizativo económico-administrativo, esto es, un patrimonio propio, con el que alcanzar sus fines propios, un administrador y un consejo de administración, que colabore con aquél. Así, tenemos que, conforme a la normativa general del Código de Derecho Canónico, de 1983, la organización económico-administrativa parroquial, básicamente, consta de un "fondo común parroquial", del párroco y del consejo parroquial de asuntos económicos, es decir, el mismo esquema organizativo fundamental, que hemos visto tanto para la Conferencia Episcopal como para la diócesis<sup>598</sup>.

#### C.1. EL FONDO COMÚN PARROQUIAL.

En toda parroquia debe formarse una masa común con los bienes, pertenecientes a la misma -canon 531-, esto es, con las ofrendas, que hagan los fieles con ocasión de las funciones parroquiales, colectas, que no tengan finalidad propia, limosnas de los cepillos, rentas de los bienes patrimoniales, cantidades recibidas del "fondo común diocesano", estipendios de misas, etcétera, de forma que con cargo al "fondo común parroquial" se afronten los gastos parroquiales del culto, apostolado, caridad, etcétera<sup>599</sup>.

No se debe desvincular la aportación económica del fiel de la comunidad donde vive y celebra su fe: es decir, que, normalmente, la colaboración económica debería realizarse a través de las parroquias y desde aquí lograr que la Iglesia se financiase directamente por sus fieles, al menos para sus específicas obras religiosas, con todo lo que ello comporta. De aquí, la importancia de una adecuada organización y regulación de la economía parroquial<sup>600</sup>.

La parroquia tiene personalidad jurídica, teniendo capacidad para poseer bienes, siendo, a su vez, titular de ellos y le corresponde la administración inmediata de los mismos. A diferencia de la legislación canónica anterior, que basaba el soporte de la parroquia en la fábrica de la Iglesia y en la renta benefical parroquial, el actual Código de Derecho Canónico nada dice explícitamente sobre la estructura y organización económica de la misma, si bien hay en él algunos elementos significativos: el canon 1272 ha hecho que la Conferencia Episcopal española haya descartado en nuestro país el sistema benefical como la base de la organización económica parroquial. Por otra parte, el canon 531 habla de la masa parroquial, a la que, normalmente, deben ir destinadas las ofrendas, entregadas por los fieles con ocasión de haberse realizado determinadas funciones parroquiales, correspondiendo al obispo diocesano, oído el consejo presbiteral, establecer normas, mediante las que se provea al destino de esas ofrendas<sup>601</sup>.

El canon 531 habla de la masa parroquial a la que, normalmente, deben ir destinadas las ofrendas entregadas por los fieles con ocasión de haberse realizado determinadas funciones parroquiales: "corresponde -sigue diciendo el citado canon- al Obispo diocesano, oído el consejo

<sup>598</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 604.

<sup>599</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 604.

<sup>600</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc. cit., pp. 162-163.

<sup>601</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 336.

presbiteral, establecer normas mediante las que se provea al destino de esas ofrendas [...]". Aunque el Código de Derecho Canónico nada dice ya sobre esta institución, por analogía con lo establecido en el canon 1274 para los bienes temporales de la diócesis está proponiendo este mismo modelo organizativo económico para las parroquias<sup>602</sup>.

El fondo común parroquial es el conjunto de los bienes temporales, muebles e inmuebles, que constituyen la base patrimonial de la parroquia para que ésta pueda cumplir la misión que tiene encomendada -canon 515.1-. La parroquia, como persona jurídica pública -canon 515-3-, tiene que disponer de los medios que se consideren suficientes para alcanzar sus fines -canon 114.3-. A este conjunto de medios temporales o patrimonio, que el Código de Derecho Canónico anterior se repartía jurídicamente entre la fábrica de la Iglesia y el beneficio parroquial, es a lo que nosotros denominamos fondo común parroquial<sup>603</sup>.

Teniendo en cuenta esos datos y los establecidos en el canon 1274, en nuestro país puede hablarse de un "fondo común parroquial", en el que estarían integrados todos los bienes temporales, que posee la parroquia, asumiendo ésta la titularidad de todos los bienes eclesiásticos, destinados directa e indirectamente al cumplimiento de las funciones parroquiales y que no tengan personalidad jurídica eclesiástica propia. A través de este fondo se deberán atender los distintos gastos originados por la actividad pastoral parroquial. Se trata, en suma, de evitar divisiones innecesarias del patrimonio parroquial y de unificar el mismo bajo la titularidad jurídica de la parroquia, siempre que no existan razones, para mantener otro esquema organizativo<sup>604</sup>.

El "consejo diocesano para asuntos económicos" de Cartagena especifica que "la autofinanciación de la Iglesia diocesana sólo será viable y efectiva si se basa en la autofinanciación de las parroquias. Es imprescindible progresar en este camino, llevando a la conciencia de los fieles el convencimiento de que cada parroquia debe mantener a sus presbíteros, el culto, el apostolado y demás necesidades. Como algunas parroquias, por su realidad sociológica, difícilmente o nunca podrá llegar a la autofinanciación, las demás parroquias deberán acentuar entre sus fieles el sentido de la comunidad diocesana y la corresponsabilidad en el mantenimiento de otras comunidades pobres o de evidente debilidad económica" -Vicaría general, "Reflexiones y criterios orientativos a propósito de los consejos parroquiales de asuntos económicos", abril 1984, BOO Cartagena (1984), p. 136-. Principio de autofinanciación económica parroquial, que se repite en los diferentes documentos diocesanos que tratan de esta cuestión<sup>605</sup>.

Sin embargo, son muy pocas las diócesis españolas que han constituido expresamente el fondo común parroquial en el canon 531 del Código de Derecho Canónico, de 1983<sup>606</sup>.

La denominación es diversa: fondo parroquial, fondo común parroquial, masa de bienes parroquiales, patrimonio parroquial... Las fuentes o constitución del necesario patrimonio temporal de las parroquias son muy diversas, no existiendo, generalmente, ni una unidad de criterios, ni una regulación diocesana de los diferentes cauces a través de los cuales se financia la parroquia: las colectas específicas para las necesidades parroquiales, las cuotas fijas, las aportaciones libres de los fieles, la financiación ordinaria desde la curia diocesana -y no sólo

<sup>602</sup>- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., p. 166.

<sup>603</sup>- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., p. 336.

<sup>604</sup>- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 336.

<sup>605</sup>- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., pp. 161-162.

<sup>606</sup>- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., pp. 162-163.

para obras o gastos extraordinarios-, los aranceles/donativos entregados con ocasión de la administración de los sacramentos, las ofrendas o donativos... parecen ser los principales cauces de la financiación parroquial. Todo ello, como venimos diciendo, sin una regulación canónica<sup>607</sup>.

Algunas diócesis, que han constituido y regulado el "fondo común parroquial" distinguen entre "bienes parroquiales" y "fondo parroquial". Están constituidos los mismos:

- a) Bienes parroquiales. Son los bienes muebles e inmuebles, que pertenecen a la parroquia, como sujeto titular o poseedor de los mismos para el cumplimiento de sus fines. Entre estos bienes se enumeran los siguientes: el templo parroquial, la casa rectoral con sus dependencias o edificios y locales anejos, destinados a la actividad pastoral y a oficinas parroquiales; las ermitas y demás lugares de culto, situados en la demarcación parroquial, mientras no se demuestre que pertenecen a otra persona distinta de la parroquia; los cementerios parroquiales y las demás fincas rústicas o urbanas, que hayan adquirido legítimamente la parroquia o cualquier otra institución eclesiástica, dependiente de la misma, que no tenga personalidad jurídica eclesiástica propia, el patrimonio estable de las parroquias, que lo constituyen, los bienes inmuebles y los objetos destinados al culto y a la actividad pastoral -incluidos los retablos, imágenes, etcétera, pertenecientes a los templos-;
- b) Fondo común parroquial. Estaría constituido por los restantes bienes temporales de la parroquia. La mayor parte de las diócesis, sin embargo, rechazan esta absurda división patrimonial -que parece basarse en la división obsoleta entre el patrimonio inmueble -patrimonio estable- y patrimonio mueble -restante patrimonio- y han establecido que "todos los ingresos de la parroquia forman el Fondo Parroquial único con la sola exclusión de un estipendio de... pesetas por misa celebrada, o que "en él -"fondo común parroquial"- se integrarán todos los ingresos estrictamente parroquiales y diversificando dentro del mismo las distintas contabilidades que sea preciso distinguir en cada caso" -obispo, "decreto para la aprobación de los estatutos del consejo parroquial de asuntos económicos en la diócesis", 12 de julio 1989, BOO Osma-Soria 130 (1989), artículo 8.1-. Su financiación vendría dada por las siguientes fuentes de ingresos: las ofrendas que los fieles hacen con ocasión de cualquier función parroquial, sea cualquiera el sacerdote que las realice, a no ser que, respecto a las limosnas voluntarias, conste la intención contraria de quien las ofrece -canon 531-; los aranceles parroquiales propiamente dichos -canon 1264.2-, así como las cuotas parroquiales; las colectas que no tengan otra finalidad preceptuada; las limosnas depositadas en cepillos, lampadarios, etcétera; las rentas de los bienes productivos, los derechos y acciones que constituyen el patrimonio de la parroquia; las subvenciones que la parroquia reciba del "fondo común diocesano", incluida la asignación al clero parroquial, y de cualquier organismo público o privado; los legados o donaciones entre vivos o "mortis causa"; los resultados de otras actividades económicas, que desarrolle la parroquia. Algunas diócesis señalan como cómputo de ingresos propios de la parroquia un coeficiente mínimo de pesetas por habitante de hecho al año -Ávila o Plasencia-. Y otras, por

<sup>607</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., pp. 167-168.

ejemplo, Tui Vigo, indican algunos ingresos peculiares de la zona: "las limosnas entregadas por los fieles con ocasión de la celebración de cualesquiera celebraciones religiosas, ya sea en el templo, ya durante las procesiones, tienen el carácter de bienes eclesiásticos, y, por tanto, se ingresarían en el fondo parroquial... Las tasas correspondientes a las parroquias por la concesión de parcelas, en los cementerios, construcción de panteones o nichos, etcétera". A ello se añade el patrimonio anteriormente enumerado bajo el epígrafe de "bienes parroquiales", es decir, todos los bienes temporales de la Iglesia<sup>608</sup>.

El "fondo común parroquial", normalmente, es distinto en cada parroquia. Pero alguna diócesis prevé la posibilidad de crear "fondos interparroquiales": cuando, por ejemplo, una o más parroquias a la vez estén encomendadas solidariamente a varios sacerdotes, o un párroco unipersonal tiene encomendadas varias parroquias, se puede constituir un fondo común interparroquial -Plasencia-<sup>609</sup>.

Con cargo al "fondo común interparroquial" se abonan todos los gastos que ocasionan las actividades parroquiales de culto, apostolado, caridad, etcétera. Más en concreto: las asignaciones o retribuciones de personal, que presta su servicio en la parroquia, tema en el que existen algunas diferencias según el sistema establecido en la diócesis para la remuneración del clero -así, por ejemplo, las diócesis que centralizan esta retribución en la curia diocesana, expresamente, exceptúan de este capítulo "al párroco y vicarios parroquiales", mientras que las que parten de la propia institución parroquial para su remuneración incluyen en este apartado al "clero parroquial y demás personas que prestan servicio en las parroquias"-; las compras para culto -vino, formas, velas- y para el consumo -carbón, gas-; los gastos financieros; los tributos; la conservación y reparaciones de templos, casa rectoral y demás dependencias; los suministros de agua, gas, electricidad, etcétera; de los edificios de la parroquia; los gastos de funcionamiento -material, teléfono, correos- de las actividades pastorales; las obras de caridad; las suplencias del párroco y vicarios parroquiales por enfermedad o vacaciones; el porcentaje asignado a las parroquias para el fondo común diocesano y para el fondo de sustentación del clero<sup>610</sup>.

Algunas diócesis llegan a determinar en sus normas la distribución de los gastos de administración ordinaria parroquial: "los gastos -se dice en la diócesis de Ávila y Cartagena- deberán tender a consolidar los siguientes porcentajes:

- 50% en la retribución de los agentes de pastoral;
- 25% en el sostenimiento de los edificios del culto y en el mismo culto;
- 15% en obras de apostolado y de caridad de la propia parroquia;
- 10% en colaboración a las necesidades generales de la diócesis".

Estos son los escasos datos legislativos, que las diócesis españolas presentan sobre el "fondo común parroquial". Este organismo patrimonial debe absorber jurídica y económicamente todos los patrimonios parroquiales, que no pertezcan a otra persona jurídica distinta de la parroquia, lo cual no quiere decir que no se puedan llevar administraciones

<sup>608</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., pp. 169-170.

<sup>609</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., p. 170.

<sup>610</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., pp. 170-171.

distintas, y con él se deben atender a los distintos gastos parroquiales. El titular jurídica del "fondo común parroquial" es la misma parroquia<sup>611</sup>

## C.2. ADMINISTRADOR PROPIO.

Es el párroco el administrador ordinario de todos los bienes temporales de su parroquia y quien la representa en todos sus negocios jurídicos -canon 537 en relación con los cánones 1281 a 1288-. Es decir, realiza respecto a su parroquia las funciones administradoras que el obispo realiza respecto de la diócesis y, como éste, ha de ser ayudado por los previstos órganos consultivos, fundamentalmente el preceptivo "consejo parroquial de asuntos económicos"<sup>612</sup>.

## C.3. EL ECÓNOMO PARROQUIAL.

Comentario [Guill3]:

El canon 1279.1 del Código de Derecho Canónico establece que la administración de los bienes eclesiásticos corresponde a quien de manera inmediata rige la persona, a quien pertenece esos bienes; siendo el párroco el que le corresponde la administración económica parroquial -canon 532-<sup>613</sup>.

Equivalentes al párroco son otras figuras canónicas: el cuasi párroco -canon 516.1-, el administrador parroquial -canon 540-, el vicario parroquial, que asume interinamente el régimen de la parroquia -canon 541.1-, el sacerdote, que sustituye al párroco durante sus ausencias -canon 533.3-, el sacerdote más antiguo del grupo nombrado "in solidum". Cuando cesa el moderador y mientras el obispo no haya constituido a otro como tal moderador -canon 544-<sup>614</sup>. Todas estas figuras canónicas -párroco, moderador y equivalentes- son los responsables jurídicos de la administración económica parroquial. La cuestión que se plantea es si el párroco también debe ser el propio administrador o gerente de los bienes económicos parroquiales. Aunque el canon 537 del Código de Derecho Canónico de 1983 parece que implícitamente concede al párroco las dos funciones -"representante jurídico" y "administrador"-, puesto que habla de "prestar su ayuda al párroco en la administración de los bienes de la parroquia"; entiendo que el texto legal no prohíbe tal distinción. La única condición que se establece es que, sea cual sea la solución adoptada, debe quedar a salvo la condición del párroco, como único representante jurídico válido de la parroquia. Cabe, por tanto, distinguir una doble función, que, a su vez, pueda ser desempeñada por una sola persona o por dos personas distintas: el representante jurídico de la parroquia, que es siempre el párroco o el moderador, y el economo parroquial, cuya tarea principal sería llevar la gestión de la administración, bajo la dirección del párroco y del "consejo parroquial de asuntos económicos", y que podría ser otra persona distinta<sup>615</sup>. Pero

<sup>611</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., pp. 171-172.

<sup>612</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 604-605.

<sup>613</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., p. 172. El Código de Derecho Canónico, de 1983, no hace mención explícita al economo parroquial, aunque existe en algunos lugares, especialmente en las parroquias con mayores cargas económicas. Vid. GREEN, Th.J., *Shepherding the patrimony of the poor...*, loc. cit., p. 732.

<sup>614</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., p. 172.

<sup>615</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc., cit., pp. 173-174. Las normas

muy pocas son las diócesis españolas que se plantean esta posibilidad. La mayor parte de las mismas se limitan a afirmar que "el párroco, como representante legal de la parroquia en todos los asuntos jurídicos de la misma, es también el administrador de los bienes parroquiales" Algunas diócesis, sin embargo, aún reafirmando el principio anteriormente citado, posibilitan explícitamente que otra persona, distinta del párroco, lleve la administración de los bienes parroquiales: "Se aconseja -se dice en la diócesis de Canarias- que la economía parroquial sea gestionada por un laico, evitando así la inmediatez del sacerdote en los asuntos económicos parroquiales. En cualquier caso dicha gestión actuará de acuerdo con el párroco y con el Consejo Parroquial de Asuntos Económicos"<sup>616</sup>. Las normas diocesanas españolas sobre el administrador parroquial son escasas y deslabazadas. Algunas diócesis se limitan a recordar los cánones generales sobre los administradores de bienes eclesiásticos, para aplicarlos al párroco<sup>617</sup>.

#### C.4. EL "CONSEJO PARROQUIAL DE ADMINISTRACIÓN".

El Código de Derecho Canónico, de 1983, otorga, a nivel parroquial, una gran importancia al "consejo parroquial de administración", como órgano, que debe dirigir la marcha económica de la parroquia<sup>618</sup>.

#### C.5. EL "CONSEJO PARROQUIAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS".

El canon 537 del Código de Derecho Canónico, de 1983, se limita a establecer la obligatoriedad de constituir un "consejo parroquial de asuntos económicos" en cada parroquia, aplicando a las parroquias la norma general, establecida en el canon 1280 y que debe estar compuesto por fieles<sup>619</sup>.

Conforme al canon 537, en toda parroquia debe existir este "consejo parroquial de asuntos económicos", que se rige, además de por el derecho universal por las normas establecidas por el correspondiente obispo diocesano, y en el que los fieles, elegidos conforme a estas normas, prestan su ayuda al párroco en la administración de los bienes parroquiales. Sus concretas competencias suelen ser coincidentes en las parroquias de todas las diócesis españolas, salvo escasos detalles: 1º) Ayudar al párroco en la administración de los bienes y rentas de la parroquia; 2º) ofrecer un conocimiento más exacto y técnico de la situación económica de la parroquia, tanto al párroco como a la comunidad parroquial; 3º) el inventario, previsión de cuentas de pérdidas y ganancias y resultados, de la parroquia; 4º) emitir su voto consultivo sobre los asuntos económicos parroquiales, que se le presenten; 5º) cuidar de que los libros parroquiales de contabilidad sean llevados al día; 6º) preparar el balance y presentarlo anualmente al "consejo diocesano de economía", para hacer su declaración a la Hacienda; 7º) recabar fondos para el buen funcionamiento de la economía parroquial. En realidad, el consejo

---

del ecónomo diocesano se aplican por analogía. Vid. GREEN, Th.J., *Shepherding the patrimony of the poor...*, loc. cit., p. 733.

<sup>616</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc. cit., pp. 174-175.

<sup>617</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc. cit., p. 175.

<sup>618</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y comentario)*, loc. cit., p. 335.

<sup>619</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 338.

parroquial de asuntos económicos viene a sustituir las funciones fundamentalmente consultivas, realizadas anteriormente por el consejo de fábrica de la Iglesia, previsto en el canon 532 del Código de Derecho Canónico, de 1917<sup>620</sup>.

No obstante, abordada por la nueva codificación la regulación general de la ordenación económico-administrativa parroquial, pone de manifiesto la doctrina que todavía se da un notable vacío legal en torno a la regulación de su economía, que tal vez se explica por la atención preferente que ha sido necesario prestar a la ordenación y regulación de la economía diocesana, por lo que se propugna que se proceda al establecimiento de una regulación global determinando, al menos, las principales normas, que interesan a la parroquia, ya que las instituciones aisladas no tienen mucho sentido separadas del conjunto de la economía parroquial<sup>621</sup>.

## **C.6. LA CAJA DE COMPENSACIÓN A NIVEL PARROQUIAL, COMO CAMINO PARA ALCANZAR LA AUTOFINANCIACIÓN.**

La Conferencia Episcopal española constató las desigualdades económicas dentro de la Iglesia y en su declaración sobre la pobreza, en julio de 1971, decía: "estaremos dispuestos a ir superando desigualdades económicas entre sacerdotes, entre parroquias, entre diócesis y familias religiosas". Hay parroquias que disfrutan de una economía más o menos próspera, teniendo capacidad para atender desahogadamente, pero con un criterio individualista y local, a diferentes inversiones, de orden personal y material, en ocasiones puramente caprichosas, e, incluso, a veces, con lesión de los principios de la justicia distributiva. Como contraste, las de economía débil o deficitaria no disponen de los recursos mínimos indispensables, para cubrir sus necesidades más perentorias. Y cuando se ven forzadas a realizar inversiones de cierta envergadura, han de recurrir a proveerse, de medios económicos mediante las formas más extrañas y comprometidas. Estas diferencias implican, ciertamente, un antitestimonio, porque se opera, contrariamente, a las exigencias de un verdadero espíritu comunitario<sup>622</sup>. Las cajas de compensación pueden ser un primer paso importante para que las comunidades se sientan más como una unidad eclesial y su testimonio aparezca más claro ante todos:

- a) por la unidad de todas las aportaciones de sus miembros;
- b) por la administración común de los dones de Dios;
- c) por la capacidad de poder tener una visión global de las necesidades y posibilidades en orden a un reparto equitativo;
- d) por observar en este reparto un orden de prioridad;
- e) por poder caminar hacia la búsqueda de necesidades olvidadas;
- f) por la seguridad de continuar en un esfuerzo progresivo y convenientemente programado<sup>623</sup>.

<sup>620</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 604. Vid. GREEN, Th.J., *Shepherding the patrimony of the poor...*, loc. cit., pp. 729 y ss.

<sup>621</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 605.

<sup>622</sup>.- Vid. IRAIZOZ UNZUE, M., *Comunicación de bienes temporales y caja de compensación*, en AA.VV., *La Curia Episcopal. Reforma y actualización*, loc. cit., pp. 276-277.

<sup>623</sup>.- Vid. IRAIZOZ UNZUE, M., *Comunicación de bienes temporales y caja de compensación*, en AA.VV., *La Curia Episcopal. Reforma y actualización*, loc. cit., p. 283.

Las cajas de compensación pretenden superar criterios y procedimientos individualistas, en un intento de alcanzar metas y objetivos muy concretos, que permitan clarificar, potenciar y encauzar, racionalmente, el uso y la disponibilidad de los medios temporales, mediante el esfuerzo y la colaboración comunitarios, puestos al servicio inmediato de la acción evangelizadora de la Iglesia<sup>624</sup>. La caja de compensación pretende ofrecer los recursos comunes y ponerlos a disposición de la misión evangelizadora y al servicio de las actividades pastorales diocesanas, potenciando estos recursos a través de la mutua y coordinada acción comunitaria. La finalidad de la caja de compensación es comunicación de bienes, para fomentar y realizar los siguientes fines:

- a) potenciar los medios temporales diocesanos en su conjunto, así como el sistema de aportación a los fieles. Con ello se pretendía cubrir la desaparición de dotaciones extraeclesiales;
- b) conseguir la autofinanciación eclesial;
- c) la unidad de esfuerzo colectivo personal e institucional;
- d) el equilibrio de recursos entre las distintas comunidades eclesiales;
- e) la superación de desigualdades en el orden económico-temporal;
- f) la aplicación de criterios de "necesidad" en las inversiones;
- g) un más eficaz y coordinado servicio a las actividades pastorales, así como su promoción;
- h) la colaboración a las necesidades sociales a favor de las clases humildes;
- i) la cobertura o mejora, según circunstancias de las retribuciones de los sacerdotes y seglares al servicio de nuestra diócesis;
- j) la construcción y mantenimiento de templos y de otros edificios de la Iglesia;
- k) la creación y sostenimiento de instituciones de proyección asistencial<sup>625</sup>.

Dificultades para la reestructuración económica de la Iglesia:

- a) la desconfianza y la suspicacia, provocadas por la falta de planificación, de inseguridad o de circunstancias histórico-concretas;
- b) el temor al centralismo, ya que regular convenientemente la economía supone un determinado centralismo, que no debe confundirse con "centralismo" paralizante. La centralización, en este caso, supone todo lo contrario: impulsar la actividad pastoral y controlar racionalmente la vida económica eclesial, construyendo una imagen comunitaria a través de un mínimo de organización central, que permita promover y estabilizar un eficaz sistema de compensación.
- c) la burocracia. Es necesario reformar los mecanismos administrativos de la Iglesia, pero evitando toda burocracia;
- d) pérdida de autonomía. En ningún momento se limita la libertad y autonomía de los entes jurídicos, que se acogen al sistema<sup>626</sup>.

<sup>624</sup>.- Vid. IRAIZOZ UNZUE, M., *Comunicación de bienes temporales y caja de compensación*, en AA.VV., *La Curia Episcopal. Reforma y actualización*, loc. cit., p. 283.

<sup>625</sup>.- Vid. IRAIZOZ UNZUE, M., *Comunicación de bienes temporales y caja de compensación*, en AA.VV., *La Curia Episcopal. Reforma y actualización*, loc. cit., p. 286.

<sup>626</sup>.- Vid. IRAIZOZ UNZUE, M., *Comunicación de bienes temporales y caja de compensación*, en AA.VV., *La Curia Episcopal. Reforma y actualización*, loc. cit., pp. 289-290.

### **C.7. VALORACIÓN DE ESTE PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA.**

En líneas generales, cabe decir que la valoración de todo este proceso de reestructuración de la organización económico-administrativa, que ha ido operándose dentro de la Iglesia española, ha de ser positiva tanto a nivel de la Conferencia Episcopal española como de las diversas diócesis. Así, hay que decir que uno de los objetivos fundamentales, planteados ya en el Concilio Vaticano II, cual es el de la progresiva supresión del sistema benefical, ha ido cumpliéndose, sobre todo tras la constitución del "fondo común interdiocesano" y de los respectivos "fondos comunes diocesanos", bajo el amparo jurídico de las nuevas instituciones previstas en el nuevo Código de Derecho Canónico. Asimismo, hay que valorar positivamente la adecuación progresiva del derecho particular al derecho universal en cuanto a los diversos órganos de administración previstos, tales como los "consejos de asuntos económicos", dentro de los que se da participación a los fieles y no solamente a los clérigos. En cualquier caso, hay que ser conscientes de que todavía la reestructuración no se halla finalizada, ni mucho menos. Aún es un proceso abierto, dentro del que faltan por regular y depurar múltiples aspectos importantes. Así se echa de menos la existencia de un reglamento general de ordenación económico-administrativa diocesana, semejante al que ya está aprobado y en vigencia por la ordenación económico-administrativa de la Conferencia Episcopal española, lo que unificaría criterios y daría consistencia a la reorganización, todavía bastante diversificada, de las diócesis españolas<sup>627</sup>.

Otra cuestión pendiente es la de la conveniencia de la creación y regulación de una especie de Tribunal económico-administrativo eclesiástico, bien diocesano, bien nacional -o en ambas instancias- que tuviera como competencia la vista de las reclamaciones, que se fuesen planteando en materia económico-patrimonial, sin necesidad de recurrir a los cauces procesales ordinarios del obispo, Sagrada Congregación y Signatura Apostólica -sección segunda-. En cierto modo, algo similar a lo que se ha previsto en el nuevo concordato italiano -artículo 34-, lo que facilitaría grandemente la tramitación de todos estos asuntos. Por lo demás, es laudable la inclusión dentro de los órganos consultivos de la administración económica eclesiástica, fundamentalmente dentro de la composición de los consejos diocesanos y parroquiales para asuntos económicos, de fieles laicos expertos en estas materias, si bien aún puede parecer escasa, si se tiene en cuenta que la tendencia progresiva es la de dar mayores responsabilidades a los fieles en la economía eclesial, cuando el Código de Derecho Canónico les impone el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que ésta disponga de lo necesario para el culto, las obras apostólicas y de caridad y el conveniente sustento de los ministros -canon 222-, y cuando, además, pueden ser sujetos pasivos de tributos eclesiásticos -canon 1260-. En este orden de cosas, también parece encomiable que todo cuanto se refiera a la economía de la Iglesia -organización, fuentes de recursos, necesidades a cubrir, presupuestos de ingresos y gastos, etcétera- vaya siendo cada vez más transparente, confiriéndose a estas importantes cuestiones la máxima publicidad posible a todos los niveles -parroquial, diocesano, nacional-, para conocimiento general de los fieles. Todo ello es de suma trascendencia si, entre otras cosas, se tiene presente que establecido por el Estado el sistema de asignación tributaria personalizada -como cauce de la colaboración económica estatal- la cooperación o aportación de los ciudadanos va a ser, en todo caso, voluntaria y, por ello, los asignantes querrán,

<sup>627</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 605-606.

legítimamente, saber cual es la objetiva situación económica de la Iglesia y en qué se van a aplicar sus aportaciones<sup>628</sup>.

En definitiva, siendo la meta perseguida la de obtener por sí misma los recursos suficientes, con que atender sus necesidades, parece claro que cuanto mejor y más simplificada sea su organización económico-administrativa, a todos los niveles, mejor podrán ser utilizados los rendimientos económicos propios, de forma más equitativa y racionalizada y menor habrá de ser la colaboración económica estatal, bien por la vía presupuestaria, bien por la de la asignación tributaria personalizada. Por tanto, es obvio que, buena organización económico-administrativa y buena utilización de los recursos propios, se encuentran en relación directa necesaria<sup>629</sup>.

#### **D. MEDIOS PARA ALCANZAR ESTOS OBJETIVOS.**

Para conseguir todos estos cambios, era necesario superar la cuestión de los beneficios eclesiásticos, el destino de los posibles ingresos, provenientes del patrimonio artístico, y las rentas de las fundaciones. Las normas establecidas por la XXXI asamblea plenaria del episcopado español, celebrada del 2 al 7 de julio, de 1979, y para las que se solicitó la correspondiente aprobación de la Sede Apostólica, se entienden y comprenden dentro de este proceso actualizador de la organización económica de la Iglesia católica española. En realidad, eran necesarias, si se quería seguir con esta renovación<sup>630</sup>.

#### **III.6.D.6. OTROS MECANISMOS PARA ALCANZAR LA AUTOFINANCIACIÓN: LA REORDENACIÓN DE LA VIDA ECONÓMICA ECLESIASTICA A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO, LA CONTABILIDAD Y LA GESTIÓN, LA PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS EN LA VIDA ECONÓMICA.**

Al ser la meta perseguida, la de obtener por sí misma los recursos suficientes, para atender a sus necesidades, cuanto mejor y más simplificada sea su organización económico-administrativa, mejor podrán ser utilizados los rendimientos económicos propios, de forma más equitativa y racionalizada y menor habrá de ser la colaboración económica estatal, bien por la vía presupuestaria, bien por la de asignación tributaria personalizada<sup>631</sup>.

La reordenación económica de las diócesis españolas estuvo impulsada por varios factores intra o extraeclesiales:

- a) el profundo cambio socioeconómico, que se produjo en la sociedad española;
- b) la profundización y aplicación de las enseñanzas, contenidas en el Concilio Vaticano II, tales como: la asunción efectiva de las responsabilidades reales por parte de la Iglesia diocesana; la mayor concienciación de la comunión o unidad eclesial, y su efectiva traducción económica; la resolución de la

<sup>628</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 606-607.

<sup>629</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 607.

<sup>630</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Texto y comentario)*, loc. cit., p. 335.

<sup>631</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 607.

honesta sustentación de los clérigos y de las excesivas desigualdades económicas existentes entre los mismos clérigos, pertenecientes a una diócesis; superación del sistema benefical...;

- c) la nueva situación política española, con especial incidencia del principio de aconfesionalidad del Estado, lo que hizo que se pensara en la autofinanciación y que se acentuase la corresponsabilidad, activa y pasiva, de los fieles cristianos, también en el campo de la administración de los bienes temporales;
- d) la aplicación de las modernas técnicas de la administración económica y la necesidad de contar con expertos en estas materias.

Todo esto se ha visto facilitado con la publicación del nuevo Código de Derecho Canónico, de 1983, en el que se ha dado respuesta a la nueva situación social y se han recogido los planteamientos del Vaticano II<sup>632</sup>.

Con frecuencia se publican en la prensa cifras de los dineros de la Iglesia; en realidad, al indicar el monto total de ese hipotético presupuesto nacional de la Iglesia española, se está dañando la imagen de la Iglesia ante sus fieles. Por el contrario, la verdad es bien diferente; si se estudian los presupuestos sencillos de la parroquia rural o de la pobre comunidad de unas monjas de clausura, se podrá elaborar un plan serio de financiación de la Iglesia. Este plan de financiación solamente será eficaz:

- a) si consigue clarificar las fuentes de financiación;
- b) si consigue plasmar, en una contabilidad seria, los ingresos y gastos; y,
- c) si se constituye en cada parroquia el órgano de gestión, que pueda exigir las características propias de la unidad parroquial, según el número de fieles y el patrimonio, que hubiera que administrar<sup>633</sup>.

El consejo presbiteral de Sevilla, en una sesión, dedicada en 1985, a examinar la organización económica parroquial, decía que "la organización presente de la economía parroquial reviste las siguientes características fundamentales:

- 1.º No obligatoriedad del presupuesto anual;
- 2.º No obligatoriedad de la rendición de cuentas a los fieles;
- 3.º Contabilidad deficiente;
- 4.º Recursos:
  - a) Las parroquias están descapitalizadas;
  - b) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles no están al día. Se da un total descontrol en cuanto al uso y rentabilidad de los bienes muebles -arrendamientos, etcétera-.
  - c) Tampoco existe un inventario completo de las posibles fundaciones y legados ni se conoce el grado de cumplimiento de las cargas y la rentabilidad de los mismos;
  - d) Además de las colectas, donativos, cuotas y ofrendas voluntarias de los fieles no se ha conseguido la supresión del arancel o tasa fija en la administración de los sacramentos... Con variadas formas, que van

<sup>632</sup>.- Vid. MORRÁS ETAYO, J.L., *El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos en las diócesis españolas*, loc. cit., p. 233.

<sup>633</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 131.

desde pedir "la voluntad" hasta establecer una cantidad fija, pasando por "la voluntad por encima de las mil pesetas", no se ha conseguido que la administración de los sacramentos sea incluso en la apariencia, totalmente gratuita.

- 5.º Desconocimiento del o que el clero parroquial percibe para la propia sustentación de los ingresos de la parroquia;
- 6.º El empleo y administración de "los dineros" de la parroquia está exclusivamente en manos del clero;
- 7.º Falta de conciencia en los fieles de su deber de sostener la parroquia y a la Iglesia en general" -B.O.A. de Sevilla 126 (1985), pp. 545-546-.

No se puede, ciertamente, generalizar y extrapolar los juicios en una realidad tan amplia y variopinta, cual es la parroquial. Pero lo cierto es que tal juicio negativo se puede aplicar a muchas de nuestras parroquias. Además, hay escasez de normas diocesanas generales, que regulan los diferentes aspectos de la administración económica de las parroquias. La encuesta preparatoria, enviada por la ACE a las diferentes curias diocesanas, señala que únicamente 21 diócesis tiene promulgada una normativa, que regule, de forma general, y más o menos completa, los diferentes aspectos, que comprende la administración económica parroquial. Atonía general que parece ser fiel reflejo de la realidad económica parroquial<sup>634</sup>.

Las fuentes de financiación de la Iglesia están constituidas por la aportación del Estado, la aportación de los fieles y los rendimientos de su patrimonio. Sin embargo, el peso específico de cada una de estas fuentes es distinto en cada diócesis; sus recursos son, en términos generales, insuficientes, no alcanzando a cubrir, eficazmente, el coste de sus necesidades. También se encuentra con otros problemas:

- no conoce, con exactitud, su patrimonio, ni los rendimientos del mismo;
- ha incorporado, escasamente, las modernas técnicas de gestión económica;
- tampoco ha incorporado, suficientemente, a lo laicos a la gestión de su economía;
- aunque existe un conjunto de economías autónomas -hecho positivo-, están, insuficientemente, coordinadas y comunicadas -hecho negativo-;
- especialmente, porque el pueblo fiel desconoce la situación económica de la Iglesia -de la que no ha sido, tradicionalmente, informado-, creyendo, por lo general, que se trata de una institución muy rica, a la que le basta la ayuda del Estado, para cubrir sus necesidades, no teniendo conciencia, de que son los propios fieles, quienes deben, mediante sus aportaciones, solucionar el problema<sup>635</sup>.

<sup>634</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc. cit., pp. 161-162.

<sup>635</sup>.- Vid. Esquema de trabajo para la ponencia sobre la autofinanciación de la Iglesia española. (Ponencia), en *Iglesia y situación socioeconómica en la España de los 80 (material)*, loc. cit., p. 171.

Actualmente, los recursos patrimoniales ceden progresivamente frente a los tributarios, igual que sucede con los ingresos estatales<sup>636</sup>.

Aunque no sólo ha de buscarse la verdad, sino que debe ser comprensible. Para ello, es conveniente que se trabaje con un presupuesto económico, que corresponda a la planificación pastoral, y que tenga en cuenta las prioridades señaladas en ella. El tema del presupuesto está, íntimamente, ligado con el de la contabilidad. No puede haber presupuesto, si antes no hay contabilidad, que unifique todos los conceptos de la vida económica de la Iglesia. Por esta razón la Conferencia Episcopal estableció, hace años, un modelo de contabilidad económica valedero para todas las diócesis y organismos eclesiásticos de la Nación<sup>637</sup>.

El decreto *Presbyterorum Ordinis*, refiriéndose a la justa retribución de los presbíteros, dice que "los fieles mismos, como quiera que por su bien trabajan los presbíteros, tienen verdadera obligación de procurar de que se les proporcionen los medios necesarios para llevar una vida honesta y digna". Sin embargo, la realidad es que los fieles no sienten como suya esta obligación de subvenir las necesidades económicas de la Iglesia y de los servidores del altar; prueba de ello es que parte de los católicos se resisten a optar a favor de la Iglesia católica en la "asignación tributaria", o, incluso, los que se niegan a ello, porque el patrimonio de la Iglesia no se presenta bien ordenado, ni se hace rentable, por culpa, según ellos, de una administración imperfecta. Mucho habrá que trabajar para lograr una financiación de la Iglesia, suficiente y ordenada, basada en las aportaciones de los fieles. Teóricamente, es posible, prácticamente, presenta grandes dificultades<sup>638</sup>.

La cuestión técnica<sup>639</sup> no será plenamente correcta, si no aúna los esfuerzos y se articula a escala nacional, diocesana y parroquial. En realidad, existen dificultades, para que ciertos sectores del patrimonio actual de la Iglesia, puedan ofrecer una gestión técnicamente correcta:

<sup>636</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 607.

<sup>637</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 138.

<sup>638</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 134.

<sup>639</sup>.- En la ponencia V de la asamblea conjunta obispos-sacerdotes, de 1971 se hace referencia a una gestión técnicamente correcta:

"2.1. Finalidad de una gestión técnicamente correcta.

Surge, en cambio, la pregunta: ¿qué sentido tiene el pedir en la Iglesia una gestión técnicamente correcta?

En las empresas económicas modernas, la gestión correcta es una pieza clave de su éxito y de sus ganancias. En las carreras de ciencias empresariales, la gestión de empresas es una asignatura fundamental.

Cuando de estos campos damos el salto a la Iglesia como institución hemos de cambiar necesariamente la óptica: no se trata pura y simplemente de mejorar las técnicas de gestión de nuestros bienes para hacerlos producir más y así asesorar o gastar más.

Nuestro objetivo es necesariamente distinto. En una época de valoración de las realidades temporales y del sentido social del trabajo y de la propiedad, el aspecto que ofrecen ciertas posesiones agrícolas, urbanas e industriales de la Iglesia, en su actual forma de gestión, resulta escandaloso y, a veces, en contraste con posesiones ajenas de tipo similar.

No puede haber buen cumplimiento de la función social de los bienes -que éticamente hablando, es absolutamente necesario por pertenecer a la esencia de la propiedad- sin una gestión correcta de aquello que se posee.

Cuidemos mucho no le vayamos a estar exigiendo al Estado y a los laicos más de lo que nosotros, como institución, testimoniamos.

2.2. Dificultades técnicas para dicha gestión

No se oculten las dificultades que ciertos sectores del patrimonio actual de la Iglesia ofrecen para una gestión técnicamente correcta:

- a) por tratarse de capitales de fundaciones benéficas, cuya gestión ha de controlar el Ministerio del Interior, creándose cierta lentitud..., y una de las cualidades de la buena gestión es la agilidad;
- b) o por tratarse de posesiones multiseculares, en cuya gestión han venido interviniendo multitud de personas, que ya tienen unos derechos adquiridos, que se han de respetar..., lo cual va en contra de la necesaria unidad de gestión;
- c) o por el minifundismo jurídico, que existe dentro de los bienes de la Iglesia, ya que el patrimonio actual se ha llegado por fundaciones jurídicamente independientes y de finalidades distintas..., lo cual obstaculiza la necesaria planificación de la gestión;
- d) o por el miedo, que se tiene a someterse al riesgo y aleatoriedad de la economía actual, que ciertas finalidades han de cumplir a lo largo de un tiempo indefinido..., con la consecuente tendencia a la inmovilidad, que obstaculiza una gestión, que quiere ser moderna<sup>640</sup>.

Esta tendencia del patrimonio de la Iglesia ha de tener ciertas notas o características<sup>641</sup>:

- 
- a) O por tratarse de capitales de fundaciones benéficas, cuya gestión ha de controlar el Ministerio de Gobernación, creándose cierta lentitud..., y una de las cualidades de la buena gestión es la agilidad.
  - b) O por tratarse de posesiones multiseculares en cuya gestión han venido interviniendo multitud de personas que ya tienen unos derechos adquiridos que se han de respetar..., lo cual va en contra de la necesaria unidad de gestión.
  - c) O por el minifundismo jurídico que existe dentro de los bienes de la Iglesia, ya que al patrimonio actual se ha llegado por fundaciones jurídicamente independientes y de finalidades distintas..., lo cual obstaculiza la necesaria planificación de la gestión.
  - d) O por el miedo que se tiene a someter al riesgo y aleatoriedad de la economía actual capitales que han de cumplir ciertas finalidades a lo largo de un tiempo indefinido..., con la consecuente tendencia a la inmovilidad que obstaculiza una gestión que quiere ser moderna". Vid. *Asamblea conjunta obispos-sacerdotes. Historia de la Asamblea. Discursos. Texto íntegro de todas las ponencias. Propositiones. Conclusiones. Apéndices* (Madrid 1971), pp. 428-439.

<sup>640</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., pp. 136-137.

<sup>641</sup>.- En la ponencia V de la asamblea conjunta obispos-sacerdotes, de 1971, se nos especifica las características de la gestión de los bienes de la Iglesia:

"2.3. Características de la gestión de los bienes de la Iglesia.

En las proposiciones aprobadas por el clero de la nación esta gestión ha de tener ciertas notas o características.

2.3.1. Ha de ser comunitaria, ya que se pide se le encomiende a una comisión formada por presbíteros y laicos que no sólo sean técnicos, sino que tengan un verdadero sentido pastoral. Otros afirman el mismo concepto, pero con distintas palabras, al pedir que la comisión de economía esté en coordinación con los organismos de la pastoral.

No es el momento de bajar a dar fórmulas concretas, pero sí se debe justipreciar en su verdadero valor esta observación general del clero de la nación.

Se tiene miedo, y con razón, a que la economía se independice y traicione a la pastoral. En el fondo late la experiencia de que en ocasiones la pastoral ha ido y va -el caso de los nombramientos según la existencia o no existencia de piezas eclesíásticas sería la prueba más evidente- condicionada por la economía, cuando lo lógico debe ser justamente lo contrario.

Mientras no tengamos una pastoral de conjunto, realista, que no sólo establezca metas, sino que señale también prioridades, no nos curaremos de esta enfermedad.

- a) Ha de ser comunitaria, ya que se pide se le encomiende a una comisión, formada por presbíteros y laicos, que no sólo sean técnicos, sino que tengan un verdadero sentido pastoral;
- b) Ha de ser diáfana. Ha de lucharse contra todo recelo a publicar las gestiones económicas y contabilidades de la Iglesia, tanto por razones de tipo fiscal, como por miedo a los comentarios. Ella ha dado lugar al secreto y al misterio de la gestión, que tiene como contrapartida el susurro y la exageración entre el clero y el pueblo<sup>642</sup>.

En efecto, la existencia de patrimonios desmembrados, afectados a un solo fin impiden una gestión económica unitaria y da lugar a la congelación de bienes. Por otra parte, el beneficio, como sistema de retribución de los titulares de oficios eclesiásticos, es fuente de desigualdades injustificadas en los momentos actuales. Dentro de una concepción moderna, la retribución de las personas, que dedican sus servicios a la organización eclesiástica, debe responder a criterios equitativos y estar encuadrado como un derecho derivado de la relación de servicio<sup>643</sup>.

Efectivamente, uno de los avances más importantes en el Derecho canónico ha sido, sin duda, el tránsito, al menos parcial, a manos de seglares de la administración de los bienes eclesiásticos en todos los niveles. Si es cierto, como lo es en realidad, que el síntoma más

2.3.2. La segunda característica pedida por el clero para la gestión de la economía es la diafinidad. También aquí la insistencia debe ser signo de malestar.

En todos los organismos existe una marcada repugnancia a la publicación de sus gestiones económicas y de sus contabilidades. Hay de por medio razones de tipo fiscal, miedo a los comentarios, etc.

En la vida civil este fenómeno ha dado lugar, en muchas ocasiones, a la contabilidad múltiples con secuelas de fraudes, etc. En los organismos de la Iglesia, salvo excepciones, al secreto y al misterio de la gestión que siempre tiene como contrapartida el susurro y la exageración entre el clero y el pueblo.

También aquí el ejemplo de la Iglesia debería ser una catequesis y un testimonio y, de rechazo, nos purificaría de ciertos abusos, desigualdades, favoritismos, privilegios... que al amparo del secreto es posible que se den, aunque sólo sea en pequeñas proporciones.

A la hora de pensar en la diafinidad es necesario buscar no sólo el decir la verdad, sino el que se nos comprenda. Es frecuente que el hombre medio, si lee el balance de una entidad económica, no llegue a enterarse. Con un balance de este tipo no habríamos conseguido la finalidad pastoral que ha de comportar la diafinidad que pide el clero.

Para ello -sobre la base anterior de que la Iglesia no debe tener más patrimonio que el estrictamente necesario- es conveniente que se trabaje con un presupuesto económico que corresponda a la planificación pastoral y que se tenga en cuenta las prioridades señaladas en ella.

Este tema del presupuesto se da la mano con el de la contabilidad. No puede haber presupuesto si antes no hay contabilidad en la que se unifiquen todos los conceptos de la vida económica de la Iglesia. Aquí sería necesario dar un voto de confianza a la Comisión Episcopal de Asuntos Económicos y Jurídicos y que ella, oídas las diócesis, estableciese un modelo de contabilidad económica valedero para todas las diócesis y organismos eclesiásticos de la nación. Las contabilidades son en la gestión económica lo que el lenguaje en la conversación de los hombres: no puede haber integración, coordinación, entendimiento... si hablamos lenguas distintas y no nos entendemos.

[...]" Vid. *Asamblea conjunta obispos-sacerdotes. Historia de la Asamblea. Discursos. Texto íntegro de todas las ponencias. Propositiones. Conclusiones. Apéndices* (Madrid 1971), pp. 429-431.

<sup>642</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., pp. 137-138.

<sup>643</sup>.- Vid. SOUTO PAZ, J.A., *La noción canónica de oficio* (Pamplona 1971), p. 226.

evidente de la renovación de la Iglesia emana de la renuncia a toda forma de temporalismo político y económico, y de la reiteración luminosa del tema de la pobreza, el ceder a los "laici" las unidades patrimoniales obtendrá resultados de gran servicio, liberando al clero de preocupaciones, generalmente supletorias, respecto a su trabajo espiritual, propiamente dicho; manifestando, claramente, que la Iglesia es fiel, en la parte eclesiástica, al consejo evangélico de la pobreza, y se considera las riquezas de su propiedad no como una posesión, sino como un servicio; haciendo que dichas riquezas produzcan frutos más copiosos, abandonando unidades administrativas, que hoy se han convertido en económicamente absurdas, cosa que es posible a los seglares, más hábiles, en realidad, y más expertos, al menos, estadísticamente, que los eclesiásticos<sup>644</sup>.

Sólo se podrá lograr la financiación de la Iglesia católica, si cada una de las entidades, que integran ésta, es capaz de autofinanciarse; sólo cuando sea, verdaderamente, imposible, se deberá acudir a la ayuda de los instrumentos de colaboración económica intraeclesiales. Además, debe cambiarse la mentalidad y acogerse a una gestión moderna, que incorpore los conocimientos y la ilusión de los laicos preparados. Además, se debe cambiar también la mentalidad de los fieles, dándoles a conocer la situación económica de la Iglesia, y hacerles saber, que el sistema histórico normal de financiación de la Iglesia ha sido la autofinanciación, y que, en el caso de España, el sistema de ayuda por el Estado representa sólo un breve paréntesis en la Historia de España<sup>645</sup>.

Además, se debe reestructurar la economía de la Iglesia católica. Para ello se deberá hacer un inventario de las necesidades pastorales -determinar, si es, realmente, necesario construir nuevas Facultades o Institutos de Teología; montar nuevas Escuelas de Catequistas, mantener ermitas en lugares, prácticamente abandonados, etcétera-. Además, deberá realizarse un inventario de los recursos humanos y de los recursos económicos -¿qué poseemos?, ¿con qué periodicidad?, etcétera-. También es necesario, elaborar los presupuestos de las entidades, de las parroquias, de las diócesis, de las Conferencias regionales, y, en general, de la Iglesia española. También es imprescindible programar la gestión económica -¿qué se debe hacer, para administrar mejor nuestro patrimonio?, ¿qué hacer para lograr recursos económicos?, ¿qué vamos a necesitar?, etcétera-. Además, será necesario montar un sistema propio de recaudación -para saber qué se necesita, dónde darlo y llevarlo a otros lugares donde sea más necesario-. El creyente debe saber qué dar, cómo darlo -por colectas, por suscripción, mediante "cepillos..."-, dónde darlo y qué parte pasará a otras entidades y también para qué da<sup>646</sup>.

No menos importante es crear un servicio informático acerca del sistema de recaudación. El creyente debe acostumbrarse a dar más para las necesidades generales de la Iglesia, que para fines concretos -en contra de sus hábitos actuales-, y se deberá ir dando "índices" sobre qué cantidad debe aportar -un porcentaje sobre los ingresos totales, o sobre el gasto total, o sobre lo que se gasta en fiestas...-. Naturalmente, para dar índices razonables, es preciso, que, quien los dé, conozca el costo total de la entidad o comunidad, que los produce, el número de fieles, sus posibilidades económicas, etcétera<sup>647</sup>.

Es necesario crear instrumentos de solidaridad -mediante los presupuestos y los "fondos comunes"-. Los presupuestos, porque los de todas las entidades diocesanas -parroquias, instituciones, entidades, etcétera- deberán, siempre que sea posible, incluir una partida de ayuda

<sup>644</sup>.- Vid. CECILIO, L., *El patrimonio eclesiástico en España*, loc. cit., p. 295.

<sup>645</sup>.- Vid. Esquema de trabajo para la ponencia sobre la autofinanciación de la Iglesia española. (Ponencia), en *Iglesia y situación socioeconómica en la España de los 80 (material)*, loc. cit., pp. 181-182.

<sup>646</sup>.- Vid. Esquema de trabajo para la ponencia sobre la autofinanciación de la Iglesia española. (Ponencia), en *Iglesia y situación socioeconómica en la España de los 80 (material)*, loc. cit., pp. 183-184.

<sup>647</sup>.- Vid. Esquema de trabajo para la ponencia sobre la autofinanciación de la Iglesia española. (Ponencia), en *Iglesia y situación socioeconómica en la España de los 80 (material)*, loc. cit., p. 184.

a otras entidades -normalmente, a través del "fondo común diocesano", partida que deberá ser fijaa por el equipo responsable de la economía diocesana. Y los "fondos comunes diocesanos", porque deberán siempre integrar una partida de ayuda a otras diócesis o entidades de carácter general de la Iglesia española<sup>648</sup>. La Iglesia española es consciente, de que no es una unidad económica, y que cada diócesis, en su aspecto económico, goza de autonomía. Por esta razón, en los años 1978-1981, intentó lograr información económica completa y fomentar la colaboración solidaria entre las diócesis. Primero, se aprobaron modelos presupuestarios, según tipo de entidades e instituciones, con el objeto de recoger información, en orden a la constitución y reparto del "fondo común interdiocesano", y, luego, se estableció el Plan General de Contabilidad -P.G.C.I.E. '81-, como instrumento, adecuado e imprescindible, para conseguir tratamientos contables comunes, consiguiendo, con ello, una homologación. Este Plan se puso al día con el Nuevo Plan General de Contabilidad de la Iglesia española, para 1991. Sin embargo, se observa que, en cada una de las diócesis, hay un grado de desarrollo muy diferente entre sí; y que la aplicación del Plan Contable no se ha aplicado a todas las realidades y actividades económicas<sup>649</sup>.

Junto a estas instituciones, deberán realizarse campañas con todos los medios modernos de comunicación, dosificando el esfuerzo y la intensidad, para lograr concienciar a los fieles de sus responsabilidades económicas, pero sin dar la imagen de una Iglesia "poderosa" o que se preocupa de su economía por "simples razones de economía". Habrá que dejar claro que la Iglesia sólo quiere los recursos que precisa para ser una Iglesia dinámica y operativa que cumple, con la mayor eficacia posible, su misión. El mejor sistema, para alcanzar la autofinanciación, es el de las renunciias sucesivas -de unas diócesis después de otras- y progresivas -de unas cantidades después de otras- a la ayuda, que, vía Conferencia Episcopal española, o, en el caso de las diócesis de las Comunidades autónomas, vía Conferencia Episcopal regional, reciban del Estado o de la Comunidad autónoma; renuncia a favor de otras diócesis de menor capacidad económica. Será necesario, eso sí, tiempo, pero fomenta la solidaridad. No debería tratarse de renunciias irreversibles en el momento de hacerlas, sino tra un período de prueba. Éste es el mejor sistema, porque la renuncia global de la Iglesia española presenta el doble riesgo, de que puede desanimar a los fieles y, hecha esta renuncia, ya es irreversible. Para determinar, que la Iglesia ya ha conseguido recursos suficientes, para cuantificar, lo que la Iglesia recibe por la "asignación tributaria" y la aportación de los fieles, y, pedir a los fieles, que, a partir de un momento dado, hagan sus aportaciones, únicamente, por vía directa, y dar el salto a la renuncia; o bien, esperar un tiempo, antes de renunciar, para cuantificar los resultados<sup>650</sup>.

### III.6.D.7. LOS BIENES TEMPORALES DE LA IGLESIA CATÓLICA.

El canon 1254 del Código de Derecho Canónico, de 1983, nos dice:

"1. Por derecho nativo, e independientemente de la potestad civil, la Iglesia católica puede adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines.

<sup>648</sup>.- Vid. Esquema de trabajo para la ponencia sobre la autofinanciación de la Iglesia española. (Ponencia), en *Iglesia y situación socioeconómica en la España de los 80 (material)*, loc. cit., p. 184.

<sup>649</sup>.- Vid. GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA, L., *Los dineros de la Iglesia ante el Evangelio*, loc. cit., pp. 189-190.

<sup>650</sup>.- Vid. Esquema de trabajo para la ponencia sobre la autofinanciación de la Iglesia española. (Ponencia), en *Iglesia y situación socioeconómica en la España de los 80 (material)*, loc. cit., pp. 186-188.

2. Fines propios son principalmente los siguientes: sostener el culto divino, sustentar honestamente el clero y demás ministros, y hacer las obras de apostolado sagrado y de caridad, sobre todo con los necesitados".

El canon 1255 del Código de Derecho Canónico, de 1983, nos dice:

"La Iglesia universal y la Sede Apostólica, y también las Iglesias particulares y cualquier otra persona jurídica, tanto pública como privada, son sujetos capaces de adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales, según la forma jurídica".

### **III.6.D.8. OTRAS FUENTES DE AUTOFINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA: LOS ESTIPENDIOS, LOS ARANCELES, LAS COLECTAS Y LAS RENTAS PATRIMONIALES.**

La aportación económica del Estado en la actualidad no es, como durante la vigencia del concordato de 1953, una dotación "total" del culto y clero católico en España, sino solamente una "colaboración" al adecuado sostenimiento económico de la Iglesia -artículo II.1 del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979-. En realidad, la aportación estatal no es sino un complemento de los recursos, que la Iglesia católica obtiene por sus propios medios y que se realiza y realizará hasta que ella alcance su "total autofinanciación", superando la "financiación parcial", que, de momento y transitoriamente, se produce. Por consiguiente, el principio cardinal sigue siendo, como en todo momento, el que la cobertura económica de las múltiples necesidades eclesíásticas se hace por las propias fuentes eclesíásticas y, sólo subsidiariamente mediante la colaboración estatal. Por ello, como también hizo el concordato de 1953 -artículo XVIII-, el artículo I del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, dispone que la Iglesia católica puede libremente recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosnas y oblaciones, precepto que hay que poner en obligada relación con el principio, proclamado por la Iglesia en el artículo II.5 de que su propósito es lograr, por sí misma, los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. A tenor de este artículo I del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, puede decirse que, lo que la norma acordada realiza es garantizar a la Iglesia el que pueda continuar obteniendo ingresos a través de sus propios conductos, esto es, por aquellas fuentes de recursos, que, genéricamente, vienen reguladas en el Código de Derecho Canónico, de 1983, y que el derecho particular puede ir adecuando a las propias necesidades y circunstancias. Esto es de todo punto lógico, porque no se comprende que el proceso tenga que culminar en la "autofinanciación eclesíástica" si, por otra parte, se le cierran a la Iglesia las vías de financiación propias que a esa meta conducen. Así, es que el reconocimiento de esta libertad de la Iglesia, para recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas, recibir limosnas, oblaciones, etcétera, aparece en el acuerdo sobre asuntos económicos en primer término, antes que la colaboración estatal: lo primero es que la Iglesia se vaya financiando por sus propios medios; lo segundo, mientras no se alcance la total autosuficiencia, la colaboración estatal en la forma progresiva pactada<sup>651</sup>.

Tradicionalmente, la Iglesia ha venido utilizando y regulando una serie de fuentes de ingresos propias, de entre las que pueden señalarse, como más importantes, las oblaciones de los fieles, los tributos, tasas, etcétera, además de los recursos patrimoniales, que, durante siglos

<sup>651</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 607-608.

y junto al diezmo, constituyeron sus principales fuentes de financiación. Sin embargo, actualmente, los recursos patrimoniales ceden progresivamente frente a los tributarios, igual que sucede con los ingresos estatales. Su inviabilidad, sin entrar en mayores profundidades, resulta evidente, si tenemos en cuenta que, el propio concordato de 1953 previó -utópicamente- como fuente principal para la congrua dotación del culto y clero la creación de un "adecuado patrimonio eclesiástico", de forma que la dotación presupuestaria a favor de la Iglesia sólo se configuraba "mientras tanto" no se crease el mismo. Tal previsión, como ya se sabía de antemano, no fue alcanzada, ni es conveniente que se alcance, ni económica ni políticamente. Así, puede decirse que las fuentes de ingresos, propiamente canónicas, que más viabilidad pueden tener en orden a la consecución de la autofinanciación eclesiástica, han de ser las oblaciones de los fieles y las "prestaciones", que sobre ellos pudieran imponerse por parte de la correspondiente autoridad eclesiástica<sup>652</sup>.

- a) Los estipendios<sup>653</sup>. Las oblaciones de administración de sacramentos y sacramentales son conocidas vulgarmente con el nombre de estipendios. A pesar de ser un tema polémico y cuestionado desde diferentes sectores eclesiales, la Iglesia ha defendido la legitimidad de la percepción de limosnas y oblaciones con ocasión de la administración de los sacramentos y sacramentales. La limosna del estipendio de la misa claramente tiene un carácter religioso, ya que se destina a ayudar a la Iglesia en sus necesidades: nada tiene que ver ni con una paga del valor espiritual de la misa, ni siquiera con una compensación por las acciones que realiza el sacerdote<sup>654</sup>. Se ha intentado quitar, por consiguiente, el carácter de tasa o tributo, que tenían anteriormente las aportaciones económicas, ofrecidas con ocasión de la administración de los sacramentos y sacramentales, y se ha insistido en el carácter de aportación de los fieles, siguiendo, en parte, la recomendación establecida en el Directorio sobre el ministerio pastoral de los obispos. Siendo, por lo tanto, muy problemática su supresión por las razones citadas, la actual legislación canónica mantiene su legalidad de forma general en el canon 848 y en especial la de los estipendios de las misas, cánones 945-948, calificando el canon 1264.2 ambiguamente el carácter técnico de estas aportaciones como de "oblaciones definidas", que parece ser un término medio entre la libre oblación y la tasa o tributo. Y presupuesta su legitimidad, el canon 1264.2 se limita a indicar la autoridad competente para su establecimiento: la reunión de los obispos de cada provincia eclesiástica, no necesitando que sea aprobadas por la Sede Apostólica. Al mismo tiempo esta norma está reforzada con determinadas medidas disciplinarias y penales: el canon 848 prohíbe pedir más de las oblaciones determinadas por la autoridad competente; está penalizado celebrar o recibir los sacramentos de simonía -canon 1380-, y obtener de forma ilegítima un lucro con los estipendios de la misa -canon 1385-<sup>655</sup>. Existen varios tipos de estipendios: los ofrecidos para la celebración de la Santísima Eucaristía -canon 945-958-. Ya no se hace mención en el Sacramento de matrimonio ni de las tasas de la curia diocesana con ocasión de las dispensas matrimoniales -canon 1056 del Código de 1917-, ni de los derechos de estola, que

<sup>652</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 609.

<sup>653</sup>.- La bibliografía sobre los estipendios es la siguiente: vid. FUMAGALLI CARULLI, O., *Sobre el destino de los estipendios de misas binadas o trinadas*, XXVIII, 55, I.C. (1988), pp. 201-211.

<sup>654</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia* (Salamanca 1993), p. 170.

<sup>655</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., pp. 170-171.

correspondían al párroco propio en la celebración del matrimonio -canon 1097.3 del Código de 1917-. Las tasas funerarias, que en el Código de Derecho Canónico, de 1917, se regulaban prolijamente en los cánones 1234-1235 y daban lugar a la denominada "porción parroquial" -canon 1236-1237-, las simplifica enormemente en el actual canon 1181: establece una remisión al 1264, con la única salvedad de que se evite cualquier acepción de personas por razón de las tasas percibidas o de que los pobres no queden privados de las exequias debidas por esta misma razón<sup>656</sup>.

Otras fuentes de financiación -según la ponencia V de la asamblea conjunta obispos-sacerdotes de 1971- son los aranceles, las colectas y las rentas patrimoniales:

- a) Los aranceles<sup>657</sup>. Se trata de una aportación no voluntaria, y, a veces, discriminatoria, que se da con motivo de un servicio religioso. Por esta doble característica de no voluntariedad y de posible discriminación, se les ponen muchos reparos en las diócesis. Casi todas las asambleas, que se han planteado este problema, abogan por su supresión y algunas precisan el contrasentido pastoral, que están prestando. Por ello, deberían ser sustituidas por aportaciones libres de los fieles, con independencia del servicio religioso, para que no aparezcan como una "limosna" o "pago" del servicio religioso. Estamos, por tanto, ante una fuente de ingresos en vía de desaparición en un tiempo más o menos lejano<sup>658</sup>.
- b) Los tributos o impuestos. Se entiende por tributo o impuesto la prestación -en dinero- exigida de forma obligatoria y predeterminada a los fieles o a las personas jurídicas eclesiales por la autoridad competente, independientemente de cualquier servicio prestado a las mismas. Las tasas, en cambio, son determinadas cantidades, que se cobran a los fieles con ocasión de un determinado servicio eclesial -administración de sacramentos, etcétera, hecho a los mismos-. El obispo diocesano, oído el consejo para asuntos económicos y el consejo presbiteral, tiene derecho de imponer, para las necesidades de las diócesis un moderado tributo a las personas jurídicas públicas, sometidas a su jurisdicción, proporcionado a los ingresos de las mismas -canon 1263-<sup>659</sup>.

<sup>656</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 171.

<sup>657</sup>.- Sobre los estipendios es interesante la siguiente bibliografía: vid. RINCÓN-PÉREZ, T., *El Decreto de la Congregación para el Clero sobre acumulación de estipendios (22-II-1991)*, XXXI, 62, I, I.C. (1991), pp. 627-656.

<sup>658</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 129.

<sup>659</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Derecho patrimonial*, en AA.VV., *Nuevo Derecho Canónico. Manual universitario*, loc. cit., p. 435.

- c) Las oblaciones<sup>660</sup>. Aunque no faltaban en el Código de Derecho Canónico de 1917 disposiciones legales, que señalaban la obligación que tenían los fieles de contribuir económicamente a las cargas de la Iglesia, la actual legislación canónica, insiste de una forma especial en esta obligación en los cánones 1260 y 1261, que, en realidad, son un desarrollo de lo establecido en el canon 222.1. La razón de esta obligación radica en la comunión y solidaridad de todos los fieles y en que la Iglesia goza de la potestad, para prescribir las suficientes exacciones a sus fieles para cumplir sus propios fines<sup>661</sup>. Las colectas o cuestaciones son oblaciones o donativos, que son entregadas por los fieles a petición del clérigo, religiosos o laicos. Los cánones 1261.2 y 1262 establecen la autoridad competente para las colectas o cuestaciones<sup>662</sup>. Normalmente, las colectas, bien organizadas y motivadas con sentido pastoral, son dignas de mantener, dándoles siempre un destino para necesidades de ámbito universal y alejadas de aquellas motivaciones más cercanas o de ámbito local. Habría, sin embargo, que corregir su

<sup>660</sup>.- En la misma ponencia V de la asamblea conjunta nos define las colectas y las aportaciones voluntarias de los fieles:

"1.2.2. Colectas

Una preocupación que aparece en varias asambleas diocesanas es la multiplicidad de colectas nacionales que existe, indicando que deben reducirse en lo posible y mantener sólo aquellas que hayan alcanzado un claro sentido pastoral.

Aunque estas colectas no tengan un destino inmediato referido a las necesidades de la diócesis, es claro que entran de lleno en el destino más universal que creemos debe tener todo recurso económico en la Iglesia. Es necesario que este criterio no sea descuidado por todos los responsables de su realización.

Enunciados estos principios generales y a sabiendas de que la Conferencia Episcopal tiene el tema en estudio, es de esperar una mejor estructuración de dichas colectas.

1.2.3. Aportaciones voluntarias de los fieles.

Es éste uno de los puntos más atendidos desde varios ángulos de visión, por todas las asambleas.

En primer lugar se le considera como el medio sustitutivo principal de la actual dotación del Estado. Muchos apuntan hacia él como el único medio de recursos para la Iglesia del futuro.

Todo este planteamiento que se les da a las aportaciones voluntarias de los fieles va muy unido a los fines de evangelización que subyacen y deben ser la base de toda preocupación económica en la Iglesia. No se trata sin más de obtener unos recursos a través de una propaganda. Han de ser fruto y consecuencia de una evangelización de los fieles. La situación ideal no ha de ser medida tanto por la cuantía de los recursos que se obtengan cuanto por el grado de concienciación conseguido entre los fieles en torno a un sentido nuevo de la caridad y de la comunicación de bienes que las haga llegar a todas las necesidades de la Iglesia, incluidos sus ministros, y que sean la manifestación de una comunidad vivida a plazo mucho más amplio.

Esto, dicen algunas diócesis, debe ser conseguido a través de un plan que, naturalmente, no debe ser distinto ni al margen del plan general de pastoral. Algunos insinúan que debería ser un plan nacional.

Posiblemente, este proceso educativo va a resultar más largo, dadas las dificultades ya aludidas, de lo que sería de desear. Es más, se deben prever los peligros de que lleve consigo una servidumbre hacia los más ricos, de los que cabría esperar una mayor aportación. Esta dificultad se obviará siempre que el plan de formación responda de verdad a un plan pastoral.

No se puede descartar aquí la posibilidad de que todo este proceso encuentre resistencia en ciertos sectores del clero. Puede aparecer, por un lado, la postura inmovilista de los partidarios de la tradición, y, por otro, el nuevo gesto del clero joven al que repugna la posible sensación del parasitismo y de vivir a costa de los demás que parece entrañar este nuevo sistema". Vid. *Asamblea conjunta obispos-sacerdotes. Historia de la Asamblea. Discursos. Texto íntegro de todas las ponencias. Propositiones. Conclusiones. Apéndices*, loc. cit., pp. 425-426.

<sup>661</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 113.

<sup>662</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 144.

excesiva multiplicidad y entrar de lleno en una mejor estructuración de las mismas<sup>663</sup>. Las colectas constituyen el medio ordinario de adquirir la Iglesia bienes temporales para sus necesidades. De ahí que se prescriba en el canon 1262 del Código de Derecho Canónico, de 1983, que "presten ayuda a la Iglesia los fieles mediante las subvenciones que se les pidan y según las normas establecidas por la Conferencia Episcopal"<sup>664</sup>. Máxime cuando las limosnas son un elemento perturbador en el proceso circulatorio de una economía industrial, al desviar gran parte de las rentas de beneficios hacia el consumo, con lo que se frenaría el dinamismo del sistema -la plusvalía debe invertirse para que en la fase siguiente haya un aumento de producción-<sup>665</sup>. Las aportaciones económicas voluntarias se pueden reducir a: oblaciones manuales o colectas y donaciones de bienes. Las primeras fueron la fuente originaria. Hasta el punto de que durante los tres primeros siglos de su existencia, la Iglesia tuvo que vivir casi exclusivamente con el dinero, bienes en especie y objetos muebles recibidos por los fieles, aunque el siglo III registra ya los primeros bienes raíces. Sólo después de la paz constantiana y el reconocimiento legal de la capacidad jurídica de la Iglesia para poseer y adquirir cualquier clase de bienes, comienza a formarse una masa de bienes raíces<sup>666</sup>. Durante los primeros siglos, la Iglesia, sin existencia legal, vivió casi exclusivamente de las oblaciones de los fieles en dinero o en especie, oblaciones de las que nos habla San Lucas en el Libro de los Hechos de los Apóstoles (4, 34-35) y San Pablo en sus Epístolas (1 Cor 16-13; Gal 2, 10). Carentes de capacidad patrimonial civil, las comunidades cristianas se veían obligadas en un principio a poseer los bienes raíces por medio de persona interpuesta<sup>667</sup>. Las primeras medidas restrictivas a la capacidad de enajenar bienes eclesiásticos se remonta hasta el concilio de Ancira (año 314), que prohíbe a los presbíteros enajenar nada perteneciente a la Iglesia, en ausencia del obispo. El Concilio de Agde (año 506) establece la inalienabilidad de las propiedades eclesiásticas, salvo excepciones<sup>668</sup>. El Papa Simplicio, en el año 475 dispuso que el patrimonio eclesiástico se dividiese en cuatro partes iguales, asignando cada una de ellas al obispo, al clero, a los pobres y a la Iglesia -culto y conservación del templo-. La misma norma es confirmada por el Papa Gelasio en el año 494 y por otros Papas posteriores. Esta disposición no tuvo vigencia en España. En vez de la anterior división, la Iglesia española optó por la distribución tripartita de las rentas eclesiásticas, decretadas por vez primera en el canon 11 del Concilio de Orleáns (año 511)<sup>669</sup>. El canon 1266 se refiere a las colectas especiales:

"En todas las iglesias y oratorios que de hecho estén habitualmente abiertos a los fieles, aunque pertenezcan a institutos religiosos, el Ordinario del lugar puede mandar que se haga una colecta especial a favor de determinadas

<sup>663</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 135.

<sup>664</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Derecho patrimonial*, en AA.VV., *Nuevo Derecho Canónico Manual universitario*, loc. cit., p. 437.

<sup>665</sup>.- Vid. RECIO, E., *Iglesia y economía en España*, 404, H.D. (1970), p. 155.

<sup>666</sup>.- Vid. GONZALO MARTÍNEZ, P., *El patrimonio eclesiástico en la España visigoda. Estudio histórico-jurídico*, loc. cit., pp. 19-20.

<sup>667</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Derecho patrimonial*, en AA.VV., *Nuevo Derecho Canónico. Manual universitario* (Madrid 1983), p. 428.

<sup>668</sup>.- Vid. GONZALO MARTÍNEZ, P., *El patrimonio eclesiástico en la España visigoda. Estudio histórico-jurídico*, loc. cit., pp. 125-126.

<sup>669</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Derecho patrimonial*, en AA.VV., *Nuevo Derecho Canónico. Manual universitario* (Madrid 1983), p. 429.

obras parroquiales, diocesanas, nacionales o universales, y que debe enviarse diligentemente a la curia diocesana".

El artículo I del acuerdo económico, de 1979, se refiere a las mismas:

"La Iglesia católica puede libremente recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosnas y oblaciones".

Este artículo I del acuerdo económico, de 1979, recoge la potestad de la Iglesia para recabar, libremente, de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosnas y oblaciones. Es evidente que la Iglesia se halla autolegitimada, para la obtención de estos medios económicos necesarios para su sostenimiento, por su propio ordenamiento canónico -canon 1260 del Código de Derecho Canónico, de 1983-<sup>670</sup>. La importancia de consignarlo en el acuerdo radica en el reconocimiento explícito de esta facultad, por parte del Estado, garantizando su libre ejercicio en el ámbito de la Nación<sup>671</sup>. Este artículo I del acuerdo económico, de 1979, se caracteriza por su provisionalidad en tanto la Iglesia realice su propósito de autofinanciación por sí misma. Cuando esta autofinanciación llegue, habrá llegado el momento de hacer efectivo los principios invocados en la introducción del acuerdo económico, de 1979, de imprimir nuevo sentido, tanto a los títulos de la aportación económica estatal, como al sistema, según el cual dicha aportación debe llevarse a cabo. Se trata, pues, y como hemos visto, de cambiar la fundamentación de las aportaciones, borrando el carácter, que el concordato de 1953, les atribuía de "indemnización por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos", aunque también agregaba el de "contribución a la obra de la Iglesia a favor de la Nación" -artículo XIX.2 del Concordato, de 1953-<sup>672</sup>. Otra diferencia entre el concordato de 1953 y el acuerdo económico, de 1979, respecto al as colectas, es que, mientras aquél habla, simplemente, de colectas, éste se refiere a colectas públicas, sin distinguir entre las celebradas en las iglesias o locales eclesiásticos y aquellas otras, que se organizan fuera de los mismos. Parece, con todo, que el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, se refiere a éstas últimas, lo mismo que el concordato de 1953, ya que es obvio que la Iglesia no necesita reconocimiento alguno del Estado para las primeras. A este respecto, el Estado español se muestra más generoso, que el alemán, pues éste exige su previa autorización a las Iglesias, para que puedan organizar dichas colectas extramuros de los templos o lugares eclesiásticos<sup>673</sup>.

La orden ministerial de 29 de julio, de 1983, se refiere también a la tributación en el caso de las donaciones. Es sabido, que resulta perfectamente compatible, declarar válidas las donaciones, que se hagan a la Iglesia o entidades religiosas y, simultáneamente, hacerlas imposible, si se las somete a una tributación muy alta, que, en

<sup>670</sup>.- Este canon 1260 del Código de Derecho Canónico, de 1983, nos dice:

"La Iglesia tiene el derecho nativo de exigir de los fieles los bienes que necesita para sus propios fines".

<sup>671</sup>.- Vid. SÁENZ DE SANTA MARÍA, M., Las actuales relaciones económicas de la Iglesia católica con el Estado español..., loc. cit., pp. 121-122.

<sup>672</sup>.- Vid. SÁENZ DE SANTA MARÍA, M., Las actuales relaciones económicas de la Iglesia católica con el Estado español..., loc. cit., p. 123.

<sup>673</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Sistema español de dotación estatal a la Iglesia*, en GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., *Régimen jurídico de sus relaciones*, loc. cit., p. 175.

algunos casos, puede resultar confiscatoria. Pues bien, la orden ministerial de 29 de julio, de 1983 -en su norma segunda-, refiriéndose a "los sujetos pasivos que donen cantidades en dinero a las entidades comprendidas en el artículo IV del Acuerdo, considerarán su importe como partida deducible hasta el límite del 10 por 100 de la base imponible", siempre que se cumplan los requisitos del artículo "y no se realicen entre sujetos pasivos integrantes de una persona jurídica de ámbito superior". Todo esto se facilita, porque, de una parte, los beneficios "se aplicarán directamente por el sujeto pasivo al presentar sus declaraciones o autoliquidaciones o por la Administración"; en los demás casos, "los donativos podrán hacerse en obras de arte o bienes de interés cultural cuando el donatario realice actividades artísticas o culturales"<sup>674</sup>. Al revés de lo que ocurre con el Estado, la economía de la Iglesia se nutre, muy principalmente, de la generosidad de los fieles. Por eso, tienen tanta importancia estas disposiciones, que hacen más asequibles, simplificando trámites y aclarando los beneficios aplicables, las donaciones, que ellos quieran hacer. Porque la solemne declaración, del artículo I del acuerdo económico, de 1979, de que la Iglesia católica puede, libremente, recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosnas y oblaciones, correría el peligro de quedarse en nada, si el tratamiento fiscal fuese prohibitivo, cosa que, afortunadamente, no ocurre en España, en la que la liberalidad a favor de la Iglesia ha sido, incluso, facilitada por disposiciones de humilde rango, como la orden ministerial de 29 de julio, de 1983, o la circular de 29 de diciembre, de 1983<sup>675</sup>.

Según el concordato de 1953, entre las sumas, que puede recibir la Iglesia católica, ya en colectas, previa petición de la misma, ya en las oblaciones espontáneas, figuran también los bienes inmuebles, de los que no se habla, expresamente, en el acuerdo económico, de 1979, aunque tampoco se les excluya. Estas sumas o bienes, procedentes de las colectas y oblaciones, pueden provenir de cualquier clase de personas -católicos o no católicos-, a diferencia de las prestaciones o impuestos, que la Iglesia puede exigir tan sólo de sus fieles<sup>676</sup>.

Aunque la actual ley de libertad religiosa no contempla expresamente el derecho de efectuar colectas públicas y recibir limosnas, entendemos que el derecho a efectuar colectas y que éstas no queden sujetas a tributación es un derecho propio de cualquier confesión religiosa, a tenor del artículo 6.g) de la resolución 36/55, de 25 de noviembre, de 1981, de la Asamblea General de las Naciones Unidas<sup>677</sup>.

Esta fuente de ingresos, tradicional en la Iglesia católica, es una de las que se reconocen a la Iglesia española en el artículo I del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, y en algunas de sus variantes -colectas, limosnas...-<sup>678</sup>. Las oblaciones son la entrega de bienes -generalmente en forma de dinero-, que se ofrece libremente a la Iglesia, ya por propia iniciativa -oblaciones espontáneas-, ya a petición de la

<sup>674</sup>.- Vid. ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., De, *Régimen fiscal de la Iglesia Católica en España*, 2, La Ley (1984), p. 1211.

<sup>675</sup>.- Vid. ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., De, *Régimen fiscal de la Iglesia Católica en España*, 2, La Ley (1984), pp. 1211-1212.

<sup>676</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Sistema español de dotación estatal a la Iglesia*, en GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., *Régimen jurídico de sus relaciones*, loc. cit., p. 174.

<sup>677</sup>.- Vid. GONZÁLEZ DEL VALLE, J.Mª., *Régimen patrimonial y económico*, en NAVARRO VALLS, R., (coord.), *Derecho Eclesiástico del Estado español* (Navarra 1993), p. 331.

<sup>678</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 609.

competente autoridad -colectas o cuestaciones<sup>679</sup>. Cada vez más se está tomando conciencia de que es el modo normal y ordinario por el que la Iglesia debe adquirir sus bienes temporales necesarios es, o, al menos, debería serlo, a través de las oblaciones de sus propios fieles. Las oblaciones se diferencian de los tributos en que no existe una verdadera obligación jurídica de entregar los propios bienes en este determinado caso, permaneciendo, por supuesto, la obligación general de contribuir a las necesidades de la Iglesia. Este sistema de oblaciones es el sistema ordinario para que la Iglesia adquiera los bienes temporales, que necesita para cumplir su misión, mientras que el sistema de tributación obligatorio es un medio considerado como extraordinario en sus líneas generales<sup>680</sup>. De entre las variantes de oblaciones de los fieles, siempre voluntarias, hay que señalar, en primer lugar, las espontáneas, es decir, aquéllas dadas por las personas físicas y jurídicas sin requerimiento o ruego antecedente del beneficio de la dación -dinero, bienes de toda clase, especies, etcétera-, partiendo de la obligación general que tienen los fieles, conforme al canon 222.1 del Código de Derecho Canónico, de 1983, de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga lo necesario para el culto divino, las obras de apostolado y de caridad y para el sustento del clero. Es, propiamente, la fuente de recursos más tradicional de la Iglesia, pues se remonta a sus primeros tiempos de existencia. En la actual codificación vienen reguladas en el canon 1261, en donde se dice que los fieles tienen libertad para aportar bienes temporales a favor de la Iglesia, recordándose al obispo diocesano la obligación que tiene de advertirle y urgirles sobre la obligación antedicha del canon 222.1<sup>681</sup>. Acerca de su rendimiento económico para la Iglesia en España, aún siendo importante, parece que, hoy por hoy, no es todo lo relevante que fuera de desear, careciendo de significación, al menos en la actualidad, de forma que las solas aportaciones voluntarias de los fieles no pueden ser tomadas en cuenta en orden a la "autofinanciación eclesiástica"<sup>682</sup>.

Las oblaciones espontáneas son las que se ofrecen libremente a la Iglesia. El canon 1261 consagra el derecho de los fieles a realizar esta serie de actos y el canon 1267 determina su destino<sup>683</sup>. Las oblaciones de los fieles espontáneas -voluntarias- parten de la obligación general de los fieles, conforme al canon 222.1 del Código de Derecho Canónico, de 1983, de modo, que disponga lo necesario para el culto divino, las obras de apostolado y de caridad y para el sustento del clero. Es, propiamente, la fuente de recursos más tradicional de la Iglesia, pues se remonta a sus primeros tiempos de existencia. Se regula en el actual canon 1261 del Código de Derecho Canónico, de 1983: los fieles tienen libertad, para aportar bienes temporales en favor de la Iglesia, recordándose al obispo diocesano la obligación, que tiene de advertirla y urgirla sobre la obligación antedicha del canon 222.1. Hoy por hoy no son muy relevantes, siendo necesario una mayor concienciación de los fieles respecto al mantenimiento económico de la Iglesia, de la que forman parte. En España, lo cierto es que los fieles consideran, que participan en el sostenimiento con los presupuestos públicos. Mientras que en Estados Unidos y Francia, al no existir tal dotación, los fieles están más

<sup>679</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Derecho patrimonial*, en AA.VV., *Nuevo Derecho Canónico. Manual universitario*, loc. cit., p. 437.

<sup>680</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., pp. 140-141.

<sup>681</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 610.

<sup>682</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 610.

<sup>683</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., pp. 142-143.

concienciados<sup>684</sup>. Ya el Concilio Vaticano II, al hablar de la remuneración de los presbíteros en *Presbyterorum Ordinis* 20 decía que los fieles tenían la obligación de proporcionarles los medios necesarios, para llevar una vida honesta y digna. Los cánones 222.1 del que deriva esta formulación, y 282, éste específicamente para los clérigos, establecen y recomiendan que todo fiel tiene la obligación de ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, de modo que ésta disponga de los medios necesarios para desarrollar sus tareas evangélicas, ya que las aportaciones de los fieles deben constituir la fuente normal y de mayor cuantía de ingresos en la Iglesia<sup>685</sup>. Sin embargo, el que las oblaciones espontáneas rindan, económicamente, mucho más de lo que actualmente rinden, lo que sería deseable tanto para el Estado como para la Iglesia, pasa por una más eficaz labor de concienciación de los fieles respecto al mantenimiento económico de la Iglesia, de la que forman parte. En el Estado español esta labor y esa mentalización encuentran importantes obstáculos, arrastrados durante muchos lustros, puesto que mientras la Iglesia católica siga siendo dotada en parte por el Estado, los fieles pueden tener el convencimiento de que no es necesario que ellos participen más en su sostenimiento económico, cuando ya los presupuestos públicos, nutridos en gran medida con sus propios ingresos tributarios, se vienen haciendo cargo de la necesidad. Estos inconvenientes, por el contrario, no se producen en aquellos Estados en los que la Iglesia, bien desde el principio, como en el caso de Estados Unidos, bien desde que el Estado tomó la decisión de dejar de dotarla, como en el supuesto francés, hubo de orientar su financiación hacia la generosidad de los fieles -de lo que ya hubo intentos también en España durante la coyuntura, en que se colocó a la Iglesia durante la II República-. No obstante, las perspectivas, que se abren a través del programa, acordado en el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, son diferentes, si consideramos que el sistema de asignación tributaria personalizada previsto es voluntario, y, por tanto, puede ser puesto en conexión con las aportaciones voluntarias de los fieles<sup>686</sup>.

Las rogadas, a diferencia de las espontáneas, son otorgadas voluntariamente por los fieles o personas jurídicas, a ruego o petición eclesiástica, pudiendo ser distinguida entre ellas las tradicionales colectas y las limosnas. En las colectas el canon 1262 del Código de Derecho Canónico, de 1983, señala que los fieles han de prestar ayuda a la Iglesia, mediante las "subvenciones que se les pidan" -subvenciones rogadas-. Las colectas rogadas suelen ser para sufragar fines concretos y no necesidades generales de la Iglesia española<sup>687</sup>. En cuanto a la autoridad competente, para establecerlas y a tenor del propio canon 1262 del Código de Derecho Canónico, de 1983, parece ha de ser la Conferencia Episcopal española, la que las regule. Sin embargo, el canon 1266 también posibilita las colectas mandadas por el ordinario del lugar en favor de determinadas obras parroquiales, diocesanas, nacionales, universales, a realizar en todas las iglesias, oratorios<sup>688</sup>. Al respecto de estas colectas rogadas, cabe decir lo mismo que lo dicho para las espontáneas respecto a su rendimiento económico, teniendo además en cuenta que, normalmente, están encaminadas a sufragar a fines concretos y no necesidades generales

<sup>684</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 610.

<sup>685</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., pp. 113-114.

<sup>686</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 610-611.

<sup>687</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 611.

<sup>688</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 611.

de la Iglesia española. En todo caso, será necesario que la concienciación de los fieles sea cada vez mayor<sup>689</sup>.

El canon 1267 del Código de Derecho Canónico, de 1983, establece que:

"1. Si no consta lo contrario, se presumen hechas a la persona jurídica las oblaciones entregadas a los Superiores o administradores de cualquier persona jurídica eclesiástica, aunque sea privada.

2. No pueden rechazarse sin causa justa las ofrendas de que trata el §1 ni las cosas de mayor importancia, sin licencia del Ordinario cuando se trata de una persona jurídica pública; se requiere la misma licencia para aceptar las que estén gravadas por una carga modal o una condición, quedando firme lo prescrito en el can. 1295.

3. Las oblaciones hechas por los fieles para un fin determinado sólo pueden destinarse a ese fin".

La oblación de recursos por sí misma no debe aparecer como algo "irrealizable", ya que en Francia la Iglesia no desapareció por falta de recursos económicos después de la aprobación de la ley de separación de 1905, con su prohibición absoluta para los poderes públicos de otorgar ayudas a las confesiones religiosas, tanto directas como indirectas<sup>690</sup>. Respecto a las limosnas, el Código de Derecho Canónico, de 1983, establece, como principio básico, el de prohibición de petición a toda persona privada, tanto física como jurídica. Ciertamente, el canon 1265.1 del Código de Derecho Canónico, de 1983<sup>691</sup>, determina que, sin perjuicio de los derechos de los mendicantes, está prohibido a toda persona privada, tanto física como jurídica, hacer cuestaciones para cualquier institución o finalidad piadosa o eclesiástica, a no ser que se tenga licencia escrita del ordinario propio y del ordinario del lugar. No obstante, la Conferencia Episcopal, sobre la cuestión de limosnas puede dictar normas, que han de ser observadas por todos -incluso por aquéllos que por institución se llaman y son mendicantes- -canon 1285.2 del Código de Derecho Canónico, de 1983-. Así, el régimen de cuestión personal, en el ámbito diocesano, queda regulado en los siguientes términos: 1º) Se necesita licencia del ordinario propio y del ordinario del lugar para la cuestión por persona privada, física o jurídica, ya se destine la limosna a beneficio de cualquier instituto piadoso o eclesiástico, ya a cualquier fin de la misma naturaleza. Consecuentemente, las personas jurídicas públicas, como una parroquia, no necesitan de dicha licencia para relizar cuestaciones en el ámbito de su competencia; 2º) Queda a salvo el derecho de pedir limosna, que corresponde a los religiosos mendicantes, conforme al derecho particular de la Conferencia Episcopal; 3º) Se faculta a la Conferencia Episcopal, para que dicte las normas reguladoras de la petición de limosnas,

<sup>689</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 611.

<sup>690</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *Sistemas históricos de dotación del Estado español a la Iglesia española (siglos XIX-XX)*, loc. cit., p. 194.

<sup>691</sup>.- Este canon 1265 nos dice:

"1. Sin perjuicio del derecho de los religiosos mendicantes, está prohibido a toda persona privada, tanto física como jurídica, hacer cuestaciones para cualquier institución o finalidad piadosa o eclesiástica, sin licencia escrita del Ordinario propio y del Ordinario del lugar.

2. Sobre la cuestión de limosnas, la Conferencia Episcopal puede dictar normas, que han de observar todos, incluso aquellos que, por institución, se llaman y son mendicantes".

que habrán de observarse por todos, sin excluir los que, por el instituto al que pertenecen, se llaman y son mendicantes<sup>692</sup>. Las razones de estas limitaciones parecen evidentes, ya que se trata de evitar que las cuestaciones sean indiscretas, fomentando abusos o ilegítimos provechos, que redunden en detrimento o desdoro de la religión o de las obras piadosas, situadas en el lugar de la cuestación<sup>693</sup>. También respecto a estas cuestaciones o recogida de limosnas, cabe decir lo mismo que para todas las oblaciones voluntarias en general, esto es, que su rendimiento económico pasa por la mentalización de los fieles, si bien no parece, en ninguna forma, que para recaudar fondos, siendo que, por otro lado, tampoco conocemos datos acerca de su verdadero rendimiento, cuestión por lo demás bastante dificultosa, toda vez que si las colectas tienen un carácter de recaudación pública, éstas, por el contrario, tienen una naturaleza más bien privada<sup>694</sup>.

Los tributos eclesiásticos han sido otra de las fuentes de ingresos tradicionales de la Iglesia católica. Los tributos eclesiásticos han sido otra de las fuentes tradicionales de la Iglesia católica -los diezmos fueron suprimidos en España por la autorización civil en 1837-. En el actual Código de Derecho Canónico de 1983 han desaparecido los diezmos y primicias -antiguo canon 1502-<sup>695</sup>, el catedrático -antiguo canon 1504-<sup>696</sup>; la pensión benefical -antiguo canon 1429-<sup>697</sup>; el subsidio o tributo caritativo -antiguo canon 1505-<sup>698</sup>; el impuesto en beneficio de la diócesis o del patrono -antiguo canon 1506-<sup>699</sup>; y las

<sup>692</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 612.

<sup>693</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 612.

<sup>694</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 612.

<sup>695</sup>.- El canon 1502 del Código de Derecho Canónico, de 1917, nos dice:

"En cuanto al pago de los diezmos y primicias, se observarán los estatutos peculiares y las costumbres laudales de cada región".

<sup>696</sup>.- El Código de Derecho Canónico, de 1917, indica en su canon 1504:

"Todas las iglesias o beneficios sujetos a la jurisdicción del Obispo, e, igualmente las cofradías de seglares, deben pagar cada año al mismo, en señal de sumisión, el catedrático, o sea una tasa moderada, que se ha de fijar a tenor del canon 1507, §1, a menos que ya lo estuviera por una costumbre antigua".

<sup>697</sup>.- El canon 1429 del Código de Derecho Canónico, de 1917, nos dice:

1. A ningún beneficio pueden los Ordinarios del lugar imponerle pensiones perpetuas o temporales durante toda la vida del pensionado; pero pueden al conferir el beneficio, por justa causa, que deben manifestar en el acto mismo de la colación, imponerle pensiones temporales, duraderas mientras viva el beneficiado, dejándole a éste la conveniente porción.
2. Pero a los beneficios parroquiales únicamente pueden imponerles pensiones a favor del párroco o del vicario de la misma parroquia que cesan en el cargo, las cuales no deben exceder la tercera parte de las rentas de la parroquia, deducidos todos los gastos y las rentas inciertas.
3. Las pensiones impuestas a los beneficios, ya fuesen éstos conferidos por el Romano Pontífice, ya por otros, cesan al morir el pensionado, sin que pueda éste enajenarlas, a no ser que expresamente se le hubiere concedido".

<sup>698</sup>.- El canon 1505 del Código de Derecho Canónico, de 1917, nos dice:

"Aparte del tributo para el Seminario, de que hablan los cánones 1355 a 1356, o la pensión benefical a que se refiere el canon 1429, puede el Ordinario local, cuando lo reclame una necesidad especial de la diócesis, imponer un tributo extraordinario y moderado a todos los beneficiados, tanto seculares como religiosos".

medias annatas -antiguo canon 1482-<sup>700 701</sup>. Los tributos se regulan en los cánones 1263 y 1264. Bajo esta denominación se entienden las diversas prestaciones de bienes - generalmente en forma de dinero- que la legítima autoridad eclesiástica reclama a las personas jurídicas o físicas de forma obligatoria, pudiendo o no llevar aneja la contraprestación de un servicio público eclesial<sup>702</sup>. El actual Código de Derecho Canónico, de 1983, viene a distinguir entre "tributos" y "tasas", regulando unos y otras por separado, aunque en la terminología tributaria civil, las tasas sean también tributos<sup>703</sup>.

En cuanto a los tributos eclesiásticos, el canon 1263 del Código de Derecho Canónico, de 1983<sup>704</sup>, regula la posibilidad de establecer tributos por el obispo diocesano. Dentro de tal posibilidad, no obstante, distingue un tributo moderado y una contribución extraordinaria, sólo para las personas jurídicas, y moderada -en caso de grave necesidad, sobre personas físicas y jurídicas-<sup>705</sup>. El tributo moderado es para subvenir las necesidades de la diócesis, establecido sobre las personas jurídicas públicas, sujetas a la jurisdicción episcopal, proporcionado a sus ingresos, previa audiencia del "consejo de asuntos económicos" y del consejo presbiteral. Sin embargo, la contribución extraordinaria y moderada es en caso de grave necesidad, sobre las demás personas físicas y jurídicas, oídos también esos órganos consultivos de la organización económico-administrativa diocesana, también proporcionado a los ingresos de los sujetos pasivos, quedando a salvo las leyes y costumbres particulares, que le reconozcan más amplios derechos. Por tanto, podemos clasificar ambas posibilidades en tributos ordinarios y extraordinarios, respectivamente<sup>706</sup>.

<sup>699</sup>.- El canon 1506 del Código de Derecho Canónico, de 1917, nos dice:

"No puede el Ordinario imponer ningún otro tributo en favor de la diócesis o para el patrono a las iglesias, beneficios y demás institutos eclesiásticos, aunque le estén sujetos, como no sea en el acto de la fundación o de la consagración; pero no puede imponerse ningún tributo sobre los estipendios de las Misas, sean manuales o fundadas".

<sup>700</sup>.- El canon 1482 del Código de 1917, afirma que:

"En cuanto a la denominada *media annata*, se conservará donde se halle en vigor, y han de observarse los estatutos particulares y las costumbres laudables que acerca de ella existen en cada región".

<sup>701</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 612.

<sup>702</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 155.

<sup>703</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 613.

<sup>704</sup>.- El canon 1263 del Código de Derecho Canónico, de 1983, nos dice:

"Para subvenir a las necesidades de la diócesis, el Obispo diocesano tiene derecho a imponer un tributo moderado a las personas jurídicas públicas sujetas a su jurisdicción, que sea proporcionado a sus ingresos, oído el consejo de asuntos económicos, y el consejo presbiteral; respecto a las demás personas físicas y jurídicas sólo se permite imponer una contribución extraordinaria y moderada, en caso de grave necesidad y en las mismas condiciones, quedando a salvo las leyes y costumbres particulares que le reconozcan más amplios derechos".

<sup>705</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 613.

<sup>706</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 613.

Los tributos se suelen dividir en tres clases: las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Los impuestos se regulan en el canon 1263 y se contempla la potestad que tienen los obispos diocesanos para establecer tributos o impuestos. El impuesto o tributo es un método extraordinario de la Iglesia, en donde la forma normal es la aportación voluntaria de los fieles. Sin embargo, se tuvo que reconocer como adecuado para subvenir correctamente a las necesidades económicas de la Iglesia. Es por ello que se decidió reconocer expresamente a los obispos diocesanos la facultad de imponer tributos o establecer impuestos<sup>707</sup>. El canon 1263 distingue un doble tributo: el ordinario y el extraordinario, que el obispo puede imponer para subvenir a las necesidades económicas de la diócesis. Por tributo ordinario entendemos aquel que se impone de forma periódica -permanente o temporal-. Por tributo extraordinario, el que sólo se establece cuando ocurre alguna circunstancia extraordinaria imprevista -fuera de lo previsto normalmente-<sup>708</sup>. Las características del tributo ordinario son las siguientes: 1º) La autoridad competente para imponerlo es el obispo diocesano; 2º) Es preceptiva la previa audiencia del "consejo diocesano para asuntos económicos" y del consejo presbiteral; 3º) Serán sujetos pasivos del tributo solamente las personas jurídicas sujetas a la jurisdicción episcopal; 4º) El tributo ha de ser "moderado" y "proporcionado" a los ingresos de los sujetos pasivos; 5º) Su finalidad es la de subvenir a las necesidades diocesanas. Las características del "tributo extraordinario" son: 1º) Se dan los mismos requisitos, que para el "ordinario" con relación a la autoridad competente para establecerlo, a la preceptiva audiencia del "consejo para asuntos económicos" y del consejo presbiteral; 2º) Igualmente, respecto a la "moderación" del tributo; 3º) Ahora bien, como sujetos pasivos, pueden establecerse no sólo a las personas jurídicas eclesiásticas, sujetas a la jurisdicción episcopal, sino también a las personas físicas; 4º) Sólo puede establecerse para el caso de grave necesidad en la diócesis, que viene a ser el requisito fundamental, por el que el tributo se califica como "extraordinario"<sup>709</sup>. En la práctica de las diócesis españolas se dan, de hecho, contribuciones obligatorias, tanto para las instituciones eclesiásticas, como para las personas físicas eclesiásticas. Pero en la práctica de las diócesis españolas, no sólo existen establecidas contribuciones obligatorias para las personas jurídicas eclesiásticas, sino también para las personas físicas eclesiásticas, esto es, para los clérigos. Sin embargo, aún cuando en muchas diócesis ha sido establecida la obligatoriedad de la aportación de los clérigos, partiendo de la cantidad mínima, que ha de percibir cada sacerdote, y aplicando después una escala que pudiera llamarse de "gravamen progresivo" -a imitación de la existente para el impuesto estatal sobre la renta de las personas físicas, teniendo en cuenta todos los ingresos, que tenga el sacerdote, proveniente de cualquier fuente, tanto eclesiástica como civil-, por el contrario en otras diócesis, si los ingresos del sacerdote superan la cantidad mínima de ingresos, establecida para su honesta sustentación, la aportación, aún cuando también puede existir una "escala" indicativa, no es obligatoria, sino sólo recomendada y voluntaria. Por tanto, si bien gran número de diócesis tienen establecida la obligatoriedad de tales prestaciones, no puede hablarse, todavía, de un sistema tributario eclesiástico diocesano sobre los clérigos, unitario y conforme para toda la organización diocesana española<sup>710</sup>. Sin embargo, esta potestad tributaria del obispo, conferida por el

<sup>707</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 158.

<sup>708</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., p. 164.

<sup>709</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 613-614.

<sup>710</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 614-615.

canon 1263 del Código de Derecho Canónico, de 1983, vemos que observa, en todo momento, como posibles sujetos pasivos de los eventuales tributos a establecer -ordinario y extraordinario- a personas eclesíásticas -ya físicas, ya jurídicas-, pero no a fieles. Por ello, cabe preguntarse si la Iglesia puede también establecer tributos sobre los fieles conforme al nuevo ordenamiento canónico. La cuestión debe encontrar respuesta afirmativa, si se tiene en cuenta lo dispuesto en el canon 1260 del Código de Derecho Canónico, de 1983. Este precepto proclama que la Iglesia tiene derecho relativo a exigir de los fieles los bienes, que necesita para sus propios fines, sustituyendo al antiguo canon 1496 del Código de Derecho Canónico, de 1917. Por tanto, se encuentra revestida de un "ius exigendi", en virtud del cual puede establecer tributos que tengan como sujetos pasivos, a los fieles. Sin embargo, parece existir una preferencia de la fuente ordinaria de ingresos, constituida por las "subvenciones rogatas" u oblaciones rogadas sobre la forma más extraordinaria de los tributos<sup>711</sup>. Aún siendo preferente la utilización de las oblaciones voluntarias de los fieles para la financiación de las necesidades eclesíásticas, hay que tener en cuenta esta posibilidad del establecimiento de tributos eclesíásticos sobre los fieles, sobre todo si con aquéllas no se alcanza suficientemente a cubrir las necesidades y pudieran faltar otros recursos importantes tales como los otorgados por el Estado de una u otra forma. Por ello, la posibilidad hay que tenerla presente y ponderarla frente a determinadas coyunturas económicas adversas<sup>712</sup>.

El Código de Derecho Canónico, de 1983, distingue los tributos de las tasas eclesíásticas, aunque en el derecho tributario estatal las tasas son también tributos junto a los impuestos y las contribuciones especiales. En realidad, las tasas eclesíásticas, aunque se recojan también en el nuevo ordenamiento canónico -canon 1264.1- tienen en la actualidad poca significación, pues siendo que se pagan como contraprestación de algún servicio eclesíástico a los sacerdotes, desde hace tiempo, a éstos les ha venido repugnando recibir cantidades de los fieles "con ocasión" de los servicios sagrados, que les prestan. Al respecto, ya hace tiempo se constataba su progresiva desaparición en la práctica de las diócesis y parroquias españolas<sup>713</sup>.

Es por este rechazo generalizado a la percepción de tasas con ocasión de la prestación de servicios sagrados a los fieles -tasas sacramentales- que la nueva codificación canónica sólo reserva el nombre de "tasas" para aquellas prestaciones, que se han de pagar por los actos de potestad ejecutiva graciosa o por la ejecución de los rescriptos de la Sede Apostólica -canon 1264.1-, mientras que para aquellas daciones, que han de hacerse con ocasión de la administración de los sacramentos y sacramentales el Código de Derecho Canónico utiliza la denominación de "aportaciones" -canon 1264.2-. En ambos casos, si otra cosa no hubiese previsto el derecho, la autoridad competente para determinar tanto las tasas como las aportaciones de que se trata es la conferencia de obispos de cada provincia eclesíastica<sup>714</sup>.

Las tasas eclesíásticas, hoy día, tienden a desaparecer carecen de relevancia económica, puesto que los ingresos por tasas administrativas y judiciales son

<sup>711</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 616.

<sup>712</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 617.

<sup>713</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 617.

<sup>714</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 617-618.

esporádicos u ocasionales<sup>715</sup>. Lo que no es posible es establecer en España un sistema de "impuestos eclesiásticos", como en otros países, pues habría que otorgarles a la Iglesia un *status* parecido al de "corporación de derecho público", y tampoco un sistema de "impuesto religioso"<sup>716</sup>. Las tasas son un tributo específico, motivado por el hecho de beneficiarse el que lo paga de una determinada contraprestación. Son los emolumentos establecidos por la legislación canónica y que son pedidos por la autoridad eclesiástica competente a los fieles por la prestación de una actividad administrativa, actos de voluntad ejecutiva graciosos o ejecución de los rescriptos de la Sede Apostólica, o por una actividad judicial. El canon 1264 repite, sustancialmente, el canon 1507 del Código de Derecho Canónico de 1917. El Código de Derecho Canónico de 1983 mantiene las tasas a pesar de las quejas surgidas por ser contrarias al Sínodo de los obispos de 1971; pero, por ser en muchas regiones la única remuneración de los sacerdotes, se mantuvo. Hoy, bajo la expresión de tasas el canon 472 distingue las tasas administrativas y las judiciales. Bajo la expresión de tasas administrativas comprendemos los actos de la potestad ejecutiva graciosos y la ejecución de los rescriptos de la Sede Apostólica, que enumera el 1264.1<sup>717</sup>.

Con el fin de evitar peticiones indiscretas, el canon 1265 del Código de Derecho Canónico, de 1983, prohíbe a todas las personas privadas, tanto físicas como jurídicas, recoger limosnas para cualquier instituto o fin eclesiástico o piadoso sin la licencia, dada por escrito, del propio ordinario y del ordinario del lugar, quedando a salvo el derecho de los religiosos mendicantes<sup>718</sup>. En conclusión, puede decirse que, hoy día, las tasas eclesiásticas carecen de la significación que anteriormente pudieron tener, tienden a desaparecer, y, en todo caso, carecen de relevancia económica, puesto que los ingresos por tasas administrativas y judiciales son esporádicos u ocasionales<sup>719</sup>.

<sup>715</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 618.

<sup>716</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 620.

<sup>717</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., pp. 167-168.

<sup>718</sup>.- Vid. MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *Derecho patrimonial*, en AA.VV., *Nuevo Derecho Canónico. Manual universitario*, loc. cit., p. 437.

<sup>719</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 618.

- d) Las rentas patrimoniales<sup>720</sup>. La actual legislación canónica recoge básicamente en el canon 1254 las mismas ideas contenidas en el anterior canon 1495.1, estableciéndose, de forma general, el derecho nativo de la Iglesia a poseer bienes temporales, para conseguir sus propios fines. El canon 1254.2 en estrecha dependencia con el Concilio Vaticano II se limita a establecer que los fines propios de los bienes son: el sostenimiento del culto divino, la honesta sustentación del clero y demás ministros y la realización de obras de apostolado sagrado y de caridad. Los cánones 1259 y 1266, asumiendo la formulación y el contenido de los anteriores cánones 1496 y 1499.1 del Código de 1917 establecen el derecho de la Iglesia a adquirir los bienes temporales precios, para cumplir su función y el derecho de la Iglesia a exigir de sus fieles los bienes temporales que necesite para alcanzar sus propios fines. Todo ello en consecuencia de los principios establecidos en el canon 1255, donde previamente se ha afirmado la capacidad patrimonial de la Iglesia<sup>721</sup>.

<sup>720</sup>.- Sobre los bienes patrimoniales de la Iglesia católica hemos seleccionado la siguiente bibliografía: vid. CONSOLI, A., *Possibilità e limiti di una riforma della proprietà ecclesiastica*, III-IV, Jus (1962), pp. 389-409. Vid. HERVDA, J., *La relación de propiedad en el patrimonio eclesiástico*, II, I.C. (1962), pp. 425-467. Vid. LOMBARDÍA, P., *La propiedad en el ordenamiento canónico*, II, I.C. (1962), pp. 404-424. Vid. MUNIER, Ch. *El concepto de "dominium" y "propietas" en los canonistas y moralistas desde el s. XVI al XIX*, II, I.C. (1962), pp. 469-479. Vid. REINA, V., *De, Propiedad eclesiástica, bienes dotales y réditos eclesiales*, II, I.C. (1962), pp. 499-520. En la ponencia V de la asamblea conjunta obispos-sacerdotes, de 1971, nos dice:

"1.3. Rentas patrimoniales.

Un tercer capítulo de ingresos le viene a la Iglesia de las rentas de sus bienes patrimoniales. En todas las asambleas en que ha sido tratado este tema subyace el convencimiento de que la Iglesia tiene un cierto capital que no es rentable en la medida y forma en que debiera.

"Nuestra Iglesia, en el curso de los siglos, ha venido enriqueciéndose por el trabajo inteligente de sus gestadores, tal como lo hacían todos los hombres de su tiempo, sin sentir por ello mayor escándalo y sin que por ello se la pueda tildar de buenas a primeras, de *injusta* o *usurera*. Los pretextos parecían legítimos; esplendor del culto, para Dios siempre lo mejor, sostenimiento de las obras evangelizan de las iglesias, conventos, escuelas, misiones, etc."

"A esto se añade la devoción de los fieles que, desprendiéndose de terrenos u objetos de valor, los entregaban a conventos o a imágenes de los santos de su devoción... Así se han acumulado en el curso de los siglos verdaderas e innegables fortunas y riquezas que, hoy por hoy, digámoslo con sinceridad, no prestan ninguna utilidad colectiva, ni a la misma Iglesia ni al pueblo fiel; más bien suscita duras críticas".

Nadie puede negar que estas recientes afirmaciones del Card. Maurer, "mutatis mutandis", se nos pueden aplicar también a nosotros. De algún modo expresan lo dicho en la diócesis.

Tratando de hacer compatible la posesión de un patrimonio por parte de la Iglesia con el principio de pobreza personal e institucional, del que hemos hablado, creemos necesario afirmar resueltamente que la Iglesia no debe tener más patrimonio que el mínimo indispensable para garantizar la continuidad de su misión y que de ningún modo puede haber cualquier asomo de atesoramiento en quienes deben tener puesta su esperanza en Dios.

Justificado así un mínimo de patrimonio, hemos de resaltar la obligación grave de hacerlo rentable y de que esta rentabilidad, como indican algunas de las diócesis citadas, no pase simplemente a engrosar el patrimonio, sino a la atención de las necesidades pastorales de la diócesis.

El tema de la necesaria rentabilidad nos introduce en el de la gestión técnica del patrimonio. Creemos que esta gestión no será plenamente correcta si no se aúnan los esfuerzos y se articula a escala nacional, como después indicaremos.

[...]"

<sup>721</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, loc. cit., pp. 66, 77 y 110.

Para hacer compatible la posesión de un patrimonio, por parte de la Iglesia, con el principio de pobreza personal e institucional, es necesario que la Iglesia no tenga más patrimonio, que el indispensable, para garantizar la continuidad de su misión, y que, de ningún modo, puede haber cualquier asomo de atesoramiento, en quienes, deben tener puesta su esperanza en Dios<sup>722</sup>. Durante muchos siglos, la base de todo el sistema económico de la Iglesia católica fueron los bienes inmuebles de los beneficios eclesiásticos. El patrimonio inmueble de la Iglesia católica llegó a ser muy grande en los países cristianos, pero, a partir de la Revolución francesa, aún en los países de mayor tradición católica, la Iglesia sufrió el despojo de la mayor parte de ese patrimonio rentable; por ello, en las diversas Naciones, los gobiernos de épocas posteriores trataron de pactar con la Iglesia católica, para normalizar la situación llegando a distintas fórmulas compensatorias, que, en realidad, en pequeña parte, repararon los daños en algunos casos<sup>723</sup>.

La Iglesia católica también participa de todas las posibilidades brindadas por una economía de libre mercado. Pueden ser titulares de valores mobiliarios -acciones, obligaciones, bonos-, como cualquier otro sujeto con capacidad jurídico-civil, ejercer el comercio y la industria, y, en definitiva, ejercer toda actividad del tráfico jurídico-mercantil ordinario. No obstante, estas actividades lucrativas no parece sean consideradas, como las más aceptadas, para la obtención de recursos, con los que la Iglesia haga frente a sus necesidades. Parece que, partiendo de la constatación de la utilización de los medios, que oferta la economía de mercado libre, o, si se prefiere, el sistema capitalista, su uso debiera ponderarse con fuertes limitaciones y reservas, para evitar pudieran producirse situaciones sumamente conflictivas y delicadas para la imagen pública de la Iglesia<sup>724</sup>.

El Código de Derecho Canónico, de 1917, admitía la inversión en valores de los bienes del patrimonio eclesiástico, sin limitación alguna, puesto que, al definir los bienes eclesiásticos en el canon 1497.1 incluía en ellos los "bienes corporales", entre los que se encontraban los títulos-valores, y en el canon 1539.2 del mismo Código de Derecho Canónico, de 1917, se refería, expresamente, a los "títulos al portador"<sup>725</sup>. El arzobispo de Valencia ha acudido recientemente -en 1992- al mercado de valores con una emisión de mil millones de pesetas en obligaciones amortizables de diez mil pesetas, con un interés anual del nueve por ciento. El objetivo del empréstito era la construcción de nuevos templos en la diócesis. Esta es la primera vez que se realiza una operación de este tipo en España, desde la existencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores<sup>726</sup>. Algunas diócesis determinan que "toda parroquia deberá tener abierta, al menos, una cuenta bancaria en una institución bancaria de la localidad...". También se determina que la cuenta deberá figurar a nombre de la parroquia y que cuando se trate de documentos que afecten a movimientos de cuentas, especialmente las bancarias, se requiere la firma mancomunada del Presidente y del Tesorero o Secretario del "consejo parroquial de asuntos económicos". Hay una norma bastante dudosa en su legalidad y consiste en que las parroquias deben depositar en el fondo común diocesano su capital en una cuenta

<sup>722</sup>.- Vid. HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Financiación de la Iglesia en España*, loc. cit., p. 136.

<sup>723</sup>.- Vid. MONTAÑÉS, J., *La inversión en valores del patrimonio eclesiástico rentable*, I, I.C. (1965), pp. 154-155.

<sup>724</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 619.

<sup>725</sup>.- Vid. MONTAÑÉS, J., *La inversión en valores del patrimonio eclesiástico rentable*, I, I.C. (1965), p. 160.

<sup>726</sup>.- Vid. NAVARO PAREJA, J.R., *La diócesis de Valencia emite un empréstito de mil millones*, 2574, Ecclesia (1992-I), p. 11.

diocesana a favor de la parroquia titular, a la que la diócesis le abonará los intereses correspondientes. La parroquia no pierde la titularidad de estos depósitos bancarios, pero ve limitada su libertad patrimonial, ya que se les "reembolsará cuando lo necesiten para gastos de inversión o extraordinarios"<sup>727</sup>.

La autofinanciación deberá basarse en la aportación de los fieles, ya que el patrimonio de la Iglesia no será nunca la gran fuente de recursos. Por ello, se hace urgente planear y realizar -con ayuda de técnicos- campañas a niveles parroquiales, diocesanos, regionales y generales, cuyo objeto sea informar a los fieles de la actual situación económica de la Iglesia, de su compromiso de autofinanciación, del camino, que se propone seguir, del término razonable en andarlo, y de la responsabilidad de los creyentes, en mantener su propia Iglesia<sup>728</sup>. De las visitas a los museos catedralicios<sup>729</sup>, apenas llega a cubrir la conservación y mantenimiento. Ni siquiera llega a permitir establecer los oportunos y costosos sistemas de seguridad, hoy ineludibles<sup>730</sup>. Para MONTAÑÉS -a mediados de los años sesenta- es necesario que la Iglesia católica consiga fuentes de ingresos económicos, entre ellos, los bienes inmuebles y los títulos-valores, para conseguir una mayor rentabilidad<sup>731</sup>. Cada obispo debe crear, a juicio de CECILIO, un banco, de modo que, federados todos ellos, constituyan un patrimonio eclesiástico nacional, con capacidad económica suficiente, para atender los fines de la Iglesia en cada nación. Ésta ha sido, en realidad, la praxis de la *Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz* y *Opus Dei*, dando inmejorables resultados económicos. Ciertamente, escapa al control del Romano Pontífice el movimiento de tal masa de bienes patrimoniales, en constante crecimiento -*grossa modo* un diez por ciento anual-, que, de ser posible, le harían más poderoso, económicamente, que la primera potencia mundial, pero, el vicio de sustraer al control de los superiores las riquezas patrimoniales de los entes eclesiásticos inferiores, ha anulado la eficacia económica y de poder, que compete a la Santa Sede, y, en particular, al Romano Pontífice. Por el contrario, la Iglesia luterana, que se apoderó de todas las iglesias y templos católicos, hoy convertidos en museos o universidades, ha sabido, en base de este patrimonio, crear bancos secretos, que financian sociedades mercantiles de la máxima eficacia. Por ello, a juicio de CECILIO, si el patrimonio eclesiástico, en España, se contabiliza sobre la base coyuntural de las riquezas, cuyo origen ha sido el amor de Dios, su incremento experimentaría un índice de crecimiento del noventa por ciento del valor actual en efectivo. Por otra parte, si no se escondiese a la Santa Sede el valor de ese efectivo actual, la potencia económica de la Iglesia católica crecería en un diez mil por ciento, de lo que hoy se contabiliza<sup>732</sup>.

Aunque la Iglesia quisiera autofinanciarse no parece que lo pueda hacer por la mera aportación del Estado; por eso ARZA ARTEAGA propone que -con vistas a largo plazo- la Iglesia intente hacer productivos todos sus bienes y tesoros artísticos, que, de momento, están improductivos. Para ello se necesita que el Estado no imponga impuestos a estos bienes que haga imposible su conservación. Para ello es necesario que

<sup>727</sup>.- Vid. AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la parroquia*, en MANZANARES, J., (ed.); *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico...*, loc. cit., p. 211.

<sup>728</sup>.- Vid. *Esquema de trabajo para la ponencia sobre la autofinanciación de la Iglesia española. (Ponencia), en Iglesia y situación socioeconómica en la España de los 80 (material)*, loc. cit., pp. 185-186.

<sup>729</sup>.- Sobre esta cuestión vid. GARCÍA BARBERENA, T., *Propiedad y destino de los ingresos procedentes de visitas de los turistas (Dictamen)*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 259-267.

<sup>730</sup>.- Vid. ALBARRÁN, A., *Cómo funciona la economía en la Iglesia de España*, loc. cit., p. 274.

<sup>731</sup>.- Vid. MONTAÑÉS, J., *La inversión en valores del patrimonio eclesiástico rentable*, loc. cit., pp. 153-177.

<sup>732</sup>.- Vid. CECILIO, L., *El patrimonio eclesiástico en España*, loc. cit., pp. 295-296.

la Conferencia Episcopal realice un inventario de estos bienes, lo más detallado posible, y después asesorarse de los técnicos necesarios para estudiar su utilización con el máximo rendimiento posible. Este aprovechamiento, unido a las aportaciones de los fieles, puede llegar a cubrir plenamente las necesidades de la Iglesia. Aunque el ideal sería que la Iglesia tuviese su propio patrimonio o que los fieles sufragasen todos los gastos de la Iglesia, mientras esto no sea viable, no parece que sea totalmente negativo la prestación de la ayuda del Estado ni peligrosa para la libertad de la Iglesia. Además, la ayuda del Estado es debido a la Iglesia, como contraprestación que la Iglesia hace a la Nación<sup>733</sup>.

### III.6.D.9. POSIBILIDADES Y PERSPECTIVAS DE LA AUTOFINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA.

Hoy por hoy, hay que descartar la posibilidad del establecimiento de un sistema de "impuestos eclesiásticos". Para ello sería necesario atribuir a la Iglesia católica y, eventualmente, a otras confesiones con notorio arraigo en el territorio español, un *status* parecido al de "corporación de derecho público", que ciertas confesiones observan en el Derecho federal alemán y que opera, como *conditio sine qua non* del derecho a establecer por ellas "impuestos eclesiásticos". Y tal posibilidad no parece de fácil encaje dentro del sistema jurídico español. Además, si ésta hubiese sido la solución mejor y más viable, para el caso español, no se hubiese acordado el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, con los contenidos, que observa, y, en cualquier caso, tampoco el sistema de "impuesto eclesiástico" parece tenga encaje en el modelo constitucional vigente, a diferencia del modelo alemán, en donde el sistema se halla constitucionalizado, tanto en la Constitución federal como en las diversas Constituciones de los *Länder*<sup>734</sup>.

Igualmente, es obvio que hay que desechar la posibilidad de que el Estado establezca un sistema de "impuesto religioso", esto es, un impuesto estatal, que tenga, como sujetos pasivos, a los miembros de una confesión -en este caso, los católicos- por el mero hecho de serlo, idea que no requiere mayor comentario a la luz de la Constitución española -artículo 16.2-. Además, mientras no se agote el programa diseñado y acordado en el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, el Estado español no debe, ni puede, abrir nuevas soluciones, porque su compromiso de colaboración económica para con la Iglesia católica, ya tiene establecidos sus límites. Por tanto, en la actualidad, la colaboración estatal en la materia ha de seguir los cauces acordados<sup>735</sup>.

Por tanto, habiendo el Estado español acordado su sistema de colaboración, la Iglesia española es la que ha de establecer la estructura organizativa y financiera adecuada, para lograr la autofinanciación de sus necesidades, debiendo el Estado, permitir el desarrollo de este proceso sin obstaculizarlo, siempre que las actuaciones de la Iglesia en este sentido, no colisionen con el ordenamiento jurídico civil. Así, las posibles fuentes financieras de la Iglesia, generales y básicas, parece que tendrían que orientarse bien hacia el sistema de oblatones voluntarias de los fieles, bien hacia el de "prestaciones" obligatorias o tributos eclesiásticos, ambas posibles conforme al Código de Derecho Canónico. Y dentro de estas dos posibilidades, parece que la Iglesia deberá inclinarse más hacia las aportaciones voluntarias, que hacia las prestaciones obligatorias, partiendo de la base de que la ordenación canónica viene a

<sup>733</sup>.- Vid. ARZA ARTEAGA, A., *El impuesto religioso*, 1159, V.N. (1978-II), pp. 29-30.

<sup>734</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 620.

<sup>735</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 620.

establecerlas, como la fuente ordinaria de recursos, frente al carácter más excepcional o extraordinario de los tributos, y que la exigencia de éstos a los fieles difícilmente es ejecutiva sin la colaboración estatal, por lo que, en última instancia, el tributo eclesiástico deviene, de hecho, mera aportación voluntaria, ante la imposibilidad eclesiástica de cobrarlo en vía de apremio, con la coercitividad propia de los tributos civiles<sup>736</sup>. Lo que la Iglesia española debiera realizar es una campaña de reorganización del sistema de aportaciones voluntarias<sup>737</sup>.

### III.7. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACUERDOS CON LAS "CONFESIONES NO CATÓLICAS"<sup>738</sup>.

En general, no existen noticias de negociaciones con otras confesiones, ni se dan las especiales condiciones, que reúnen las signatarias en los acuerdos ya vigentes<sup>739</sup>.

Los acuerdos con las confesiones no católicas no parecen haber entusiasmado ni siquiera a sus signatarios; más bien fueron solicitados por las respectivas confesiones con el propósito de ver regulada su situación y reconocidos una serie de derechos; pero también con el propósito de encontrar una posición ante el ordenamiento jurídico español similar a la poseída por la Iglesia católica. Prueba de ello es que sorprende la aceptación por cada confesión religiosa de un modelo de relaciones con el Estado tan común para todas ellas<sup>740</sup>. La naturaleza jurídica de los acuerdos con las confesiones no católicas ha sido muy discutida. LOMBARDÍA es el primero, que asimila la naturaleza jurídica de los acuerdos con las confesiones no católicas como "ley

<sup>736</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., pp. 620-621.

<sup>737</sup>.- Vid. GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, loc. cit., p. 621.

<sup>738</sup>.- El término "confesiones religiosas", utilizado en el artículo 16 de la Constitución española, de 1978, sigue siendo un concepto sin estar determinado aún en el Derecho español o italiano. Vid. MOTILLA DE LA CALLE, A., *Aproximación a la categoría de confesión religiosa en el Derecho español*, loc. cit., pp. 19-20. Existen, aproximadamente, catorce comunidades judías, que engloban a quince mil personas, y las trece iglesias distintas, que componen la federación evangélica reúnen a sesenta mil personas. Tal cantidad de fieles, justifica que judíos y protestantes, ya interviniesen en la redacción de algunas normas del Estado sobre el factor religioso, ya de ámbito general, como la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, ya particular, como la aprobación de planes de estudio y materias para la enseñanza de sus contenidos religiosos respectivos en Preescolar, Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional. Vid. MOTILLA DE LA CALLE, A., *Proyectos de Acuerdo entre el Estado y las Federaciones evangélica y judía: primeras valoraciones*, III-IV, 120-121, R.D.Púb. (1990), p. 568. El número de fieles musulmanes varía mucho según las fuentes. Para la F.E.E.R.I. los fieles musulmanes pueden oscilar entre los doscientos y doscientas cincuenta mil. Vid. MANTECÓN SANCHO, J., *Los acuerdos del Estado con las confesiones acatólicas. Textos, comentario y bibliografía* (Jaén, 1995), p. 18.

Sobre los acuerdos del Estado español con las "confesiones no católicas", puede consultarse, además, de la citada, la siguiente bibliografía: vid. *Gli accordi dello Stato spagnolo con le minoranze confessionali tradizionali*, 3, D.E. (1993), pp. 532-547. Vid. SERRANO, C., *Los Acuerdos del Estado español con las confesiones no católicas*, IV, A.D.E.E. (1988), pp. 89-105. Vid. BUENO SALINAS, S., *Confesiones y entes confesionales en el Derecho español*, IV, A.D.E.E. (1988), pp. 107-133. Un estudio bibliográfico en ÁLVAREZ CORTINA, A.-C., *Los Acuerdos con las Confesiones religiosas distintas a la Iglesia católica en la doctrina española*, VIII, A.D.E.E. (1992), pp. 567-578. Vid. LILLO, P., *Il regime delle confessioni di minoranza nell'ordinamento spagnolo. Annotazioni a margine di una recente monografia*, 4, D.E. (1995), pp. 1032-1047. Vid. MOTILLA DE LA CALLE, A., *Minorías religiosas en el Derecho español*, 76, R.F.D.U.C. (1989-90), pp. 171-189. Vid. CAMARERO SUÁREZ, M., *Análisis de los acuerdos del Estado español con las confesiones religiosas no católicas desde la perspectiva de los sujetos*, XIV, 84, Tapia (1995), pp. 72-81.

<sup>739</sup>.- Vid. HERA PÉREZ-CUESTA, A., *De La, Acuerdos con las confesiones religiosas minoritarias*, XXXV, 69, I.C. (1995), pp. 214-215.

<sup>740</sup>.- Vid. HERA PÉREZ-CUESTA, A., *De La, Acuerdos con las confesiones religiosas minoritarias*, loc. cit., p. 215.

paccionada" del derecho Navarro. Tales leyes, que se dictan en atención a los derechos históricos de Navarra, previo pacto con órganos no dotados de personalidad jurídica internacional, tiene dos características:

"a') En primer lugar, que el pacto normativo que está en la base de tales leyes, se presente entre el Estado y otra parte, que, sin tener personalidad jurídica internacional, es depositaria de unas competencias en posición de autonomía con respecto del Estado. Al darse este presupuesto, la figura técnica es aplicable al caso que nos interesa, con independencia de que tal autonomía se funde en unos derechos históricos -caso de Navarra-, o en la naturaleza constitucional de las Confesiones religiosas (como sujetos colectivos del derecho de libertad religiosa) y en la incompetencia del Estado para la regulación de la vida religiosa de sus súbditos, deducida de una correcta comprensión del principio constitucional de laicidad.

b') En segundo lugar, que las disposiciones contenidas en el acuerdo normativo están vinculadas en su vigencia al principio *pacta sunt servanda*. Por tanto el Estado no puede modificarlas sin el consentimiento de la otra parte contratante. Concebidas como "paccionadas" las leyes que se dicten en aplicación del n. 1 del artículo 7 de la ley orgánica de libertad religiosa, el ordenamiento jurídico español habría aportado cuanto de él depende a la igualdad formal entre las Confesiones, en el establecimiento de normas, basadas en el principio de cooperación. En todos los casos el Estado pacta con los interlocutores válidos de las Confesiones y la eficacia del pacto opera en las vicisitudes ulteriores de la vigencia de la ley estatal"<sup>741</sup>.

MARTÍNEZ-TORRÓN entiende, que dichos acuerdos no son las "leyes paccionadas de Navarra", ya que éstas hacen referencia a una realidad institucional, que forma parte de la organización política del Estado español, mientras que los acuerdos se integran en el contexto de una relación entre el poder estatal y una serie de instituciones, a las que, aun siendo ajenas a la estructura política nacional, se les reconoce una influencia efectiva en la configuración de nuestro ordenamiento jurídico. Más bien tienen, a pesar de su origen pacticio, una naturaleza unilateral, pues ese el compromiso, adquirido por el Estado, con una de las instituciones, que operan en su territorio, para proporcionarles un estatuto jurídico específico, además, nuestro sistema constitucional de fuentes, no hace posible la existencia de normas bilaterales, distintas de los tratados<sup>742</sup>. Tampoco BRETAL VÁZQUEZ entiende que las leyes con las confesiones no católica se puedan asimilar al Estatuto de autonomía navarro, pues ninguna puede ostentar, ni lo ha alegado, derecho histórico formal alguno, previo a la Constitución, similar al mantenido por los foralistas navarros<sup>743</sup>. MOTILLA DE LA CALLE, por el contrario, califica a estos acuerdos con las confesiones no católicas, como "ley de naturaleza paccionada"; siendo sólo asimiladas a la "ley paccionada" del Derecho navarro. Tal equiparación tiene, además, la virtud de aproximar el régimen del tratado internacional, propio de los acuerdos con la Iglesia católica, al de las

<sup>741</sup>.- Vid. LOMBARDÍA, P., *Fuentes del Derecho Eclesiástico español*, en AA.VV., *Derecho Eclesiástico del Estado español* (Pamplona, 1983), pp. 159-160.

<sup>742</sup>.- Vid. MARTÍNEZ-TORRÓN, J., *Jerarquía y antinomias de las Fuentes del nuevo Derecho eclesiástico español*, loc. cit., p. 146.

<sup>743</sup>.- Vid. BRETAL VÁZQUEZ, J.M., *Acuerdos con las confesiones no católicas (Ley paccionada, Ley Orgánica, sistema normativo religioso)*, 130, R.A.P. (1993), p. 368.

demás confesiones<sup>744</sup>. VIANA TOMÉ califica a los convenios de cooperación del artículo 7.1 de la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, como "pactos de Derecho público interno", ya que son grupos sin personalidad internacional<sup>745</sup>. BRETAL VÁZQUEZ, al analizar la posibilidad de ubicar estos acuerdos con las confesiones no católicas en su categoría residual de otros pactos, distintos a la "ley paccionada" del Estatuto de autonomía de navarra al que tampoco, según éste, pueden asimilarse-, rechaza tal posibilidad, por la misma imposibilidad de modificar o abrogar el régimen jurídico, así establecido, que pone de manifiesto la inconsistencia de esta naturaleza pacticia. Por ello, según este mismo autor, se puede mantener que, mientras siga en vigor e inalterada la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, de la que traen causa estos acuerdos, toda modificación de los mismos deberá hacerse por vía negociada con las entidades o personas jurídicas, con las que se concluyeron, pero nada impide, en el marco constitucional, la modificación o abrogación de la antedicha ley orgánica, de 1980, con lo que podría el Estado, sin traba formal alguna, tener la potestad de regular, unilateralmente, esta materia<sup>746</sup>.

Esta regulación, existente en nuestro ordenamiento jurídico, ha llevado a VIANA TOMÉ, a considerar, que "el sistema de fuentes bilaterales del Derecho Eclesiástico español ha venido a equipararse *a posteriori*, con el instaurado en los artículos 7 y 8 de la Constitución italiana (Concordato para la Iglesia católica, *intese* para las demás confesiones)"<sup>747</sup>.

Pero no podemos olvidar, por la trascendencia que tiene, el dictamen de 31 de enero de 1991, remitido al Ministerio de Justicia el 5 de febrero de 1991, siendo considerados "*convenios de derecho público*", si bien sometidos a la decisión final de las Cortes Generales.

### III.7.1. ¿TRATO "ESPECÍFICO" PARA CADA CONFESIÓN RELIGIOSA O "IDÉNTICO"?

Cuando se trata de sujetos colectivos, la igualdad religiosa debe entenderse en términos de proporcionalidad. La razón de la diferencia es clara. Los sujetos individuales son, en cuanto a su condición de ciudadanos españoles, absolutamente iguales. En cambio, en los sujetos colectivos, no es posible, ni siquiera considerándolos en cuanto confesiones, iglesias, comunidades o grupos, encontrar esa igualdad. A pesar de la realidad, bien constatable, de la diversidad entre las distintas confesiones. Sin embargo, en algunos desarrollos doctrinales se puede detectar cierto recelo ante el recurso de la igualdad proporcional, quizá por entender que por esa vía se puede desembocar en la consolidación de determinados tratamientos privilegiarios<sup>748</sup>.

La cuestión de la igualdad entre las confesiones se plantea con especial agudeza en Italia y en España, por razones obvias de un pasado histórico de situación y de privilegio y también por motivos de clara preponderación numérica. No obstante, asumir el principio de igualdad proporcional no quiere decir que se dé por buena la perpetuación de privilegios. Pero, a la vez,

<sup>744</sup>.- Vid. MOTILLA DE LA CALLE, A., *Fuentes pacticias del Derecho Eclesiástico español*, III, A.D.E.E. (1987), p. 197, y en otra colaboración de este mismo autor titulada *Los acuerdos o convenios de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas en el Derecho español*, loc. cit., p. 430.

<sup>745</sup>.- Vid. VIANA TOMÉ, A., *La igualdad constitucional en el régimen jurídico español sobre confesiones religiosas*, loc. cit., p. 400.

<sup>746</sup>.- Vid. BRETAL VÁZQUEZ, J.M., *Acuerdos con las confesiones no católicas (Ley paccionada, Ley Orgánica, sistema normativo religioso)*, loc. cit., p. 369.

<sup>747</sup>.- Vid. VIANA TOMÉ, A., *La igualdad constitucional en el régimen jurídico español sobre confesiones religiosas*, loc. cit., p. 400.

<sup>748</sup>.- Vid. VÁZQUEZ GARCÍA-PENUELA, J.Mª., *El objeto del Derecho Eclesiástico y las confesiones religiosas*, XXXIV, 67, I.C. (1994), pp. 286-287.

el dato histórico y sociológico o cuantitativo debe ser tenido en cuenta. Por ello, no obstante la supremacía de la Iglesia católica desde el punto de vista cuantitativo, en la práctica, el trato que reciben en el ordenamiento jurídico español las demás confesiones no resulta discriminatorio. A ello ha contribuido una generosa interpretación por parte de la Administración del concepto jurídico indeterminado de notorio arraigo y la relativamente rápida conclusión de los acuerdos de cooperación, suscritos con tres minoritarios grupos o federaciones religiosas, y que, conforme a lo previsto en el artículo 7 de la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, fueron publicados como leyes en 1992<sup>749</sup>.

La sustitución del Estado liberal, no intervencionista, por un Estado social y democrático de Derecho, en el que los poderes públicos no se pueden contentar con la mera abstención, sino que deben actuar efectivamente, para impulsar las libertades y su ejercicio, tiene evidentes ventajas, pero no menores peligros. Probablemente, el mayor de estos últimos sea, el olvidar, que el eje del ordenamiento debe ser el individuo y construir todos sus mecanismos de promoción en torno al grupo. Tal planteamiento, sin embargo, conlleva un resultado material injusto, al olvidar el individuo. Ejemplificativo es el siguiente supuesto: el Estado español, al decidir promocionar el deporte -a pesar de no tratarse de una libertad, para muchos parece más importante-; debe dedicar una parte de su presupuesto, a apoyar la actividad deportiva; no es el único modo, pero es uno de ellos. Al Estado le resulta materialmente imposible, el individualizar a todos y cada uno de los españoles practicantes de deportes, así que no tiene otra opción, que la de buscar a todos los deportistas de élite y a las agrupaciones de deportistas, es decir, a las federaciones deportivas. Pero es evidente que la mayor parte de los españoles, que practican deporte, ni son deportistas de élite, ni forman parte de una federación deportiva, de tal manera que, inevitablemente, quedan condenados, a no recibir una ayuda económica directa, que facilite su práctica deportiva. De este modo, el Estado debe sentar unos criterios, para distribuir el dinero, que entre las mismas quiera repartir; de este modo, la federación de fútbol recibirá una subvención superior a la de baloncesto; en otras palabras, las organizaciones, numéricamente más importantes, reciben mayor ayuda, lo cual las hará cada vez más importantes. En el mundo de la religión este esquema se reproduce de modo prácticamente idéntico -a excepción de que en este campo no existen "creyentes de élite"- . No puede sorprendernos, ya que así ocurre en todos los ámbitos: sindical, político, etcétera. Es, por ello, perfectamente evidente, que la ayuda económica, que el Estado facilita, para promocionar la libertad religiosa, tiene por destinatarias a las grandes religiones, y, en el caso español, de modo casi exclusivo, a la principal confesión religiosa: la religión católica<sup>750</sup>.

Es un hecho incuestionable que el Estado ha hecho distinciones entre las confesiones. Lo que interesa es en base a qué las ha diferenciado, en virtud de qué razón o razones objetivas el Estado ha considerado que las diferencias y necesidades de una confesión exigen un trato distinto del común. El dato, que el Estado español ha tenido en cuenta, para establecer un trato específico para una confesión, es el *notorio arraigo*<sup>751</sup>, tal y como establece el artículo 7.1 de la Ley orgánica de libertad religiosa, de 1980. Concretándose ese trato específico en el establecimiento de relaciones de cooperación con las confesiones a través de acuerdos<sup>752</sup>.

<sup>749</sup>.- Vid. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, J.Mª., *El objeto del Derecho Eclesiástico y las confesiones religiosas*, loc. cit., pp. 288-289.

<sup>750</sup>.- Vid. IBÁN, I.C., *Libertad religiosa: ¿Libertad de las religiones o libertad en las religiones?*, loc. cit., pp. 595-596. Vid. también esta misma colaboración de este autor en una publicación periódica italiana en 2, Q.D.P.E. (1989), pp. 199 y ss.

<sup>751</sup>.- Sobre el concepto de "notorio arraigo", vid. LEGUINA VILLA, J., *Dos cuestiones en torno a la libertad religiosa: control administrativo y concepto de notorio arraigo*, 44, R.E.D.A. (1984), pp. 683-692.

<sup>752</sup>.- Vid. AA.VV., *La igualdad jurídica de las confesiones religiosas*, loc. cit., p. 314.

Efectivamente, la Constitución española, ha recogido en el artículo 16 el principio de libertad religiosa, matizado por el principio de cooperación entre las iglesias y el Estado; con ello, España no se separa, en gran medida, del Derecho eclesiástico del occidente europeo, aunque mantiene peculiaridades propias. A nivel constitucional, España se sitúa en un punto intermedio entre el separacionismo eclesiástico-estatal de Francia y Portugal, y el estrecho colaboracionismo de Alemania e Italia, en el marco de una ostensible desigualdad religiosa. Digo a nivel constitucional, porque en la legislación, España se aproxima a estos dos últimos países. También Francia ha convergido hacia un menor radicalismo en su separacionismo<sup>753</sup>. En efecto, España se parece a los países de la -hoy- Unión Europea por el sustantivo reconocimiento de la libertad religiosa -principio omnicompreensivo bajo diversas formas en todas las Constituciones- en el contexto de una expresa o velada desigualdad en el tratamiento, dispensado a las distintas confesiones religiosas. A veces la desigualdad está en el propio texto de la Constitución -Alemania o Italia-; otras, en el desarrollo legal de unos escuetos preceptos constitucionales; y otras, como en el caso español, de una manera presumible en la Constitución y claramente expresada en las leyes o convenios con las iglesias. En Alemania, la propia Ley Fundamental de Bonn, de 1949, jerarquiza el tratamiento constitucional a las confesiones religiosas a tres niveles: las corporaciones de derecho público eclesiásticas, existentes en el momento de la promulgación de la Constitución -la Iglesia católica y la protestantes-, aquellas otras, que se constituyan con posterioridad, siempre que sus estatutos y número de miembros ofrezcan garantías de duración, y las simples asociaciones religiosas de derecho privado -artículo 137 de la Constitución de Weimar, recogido en el artículo 140 de la *Grundgesetz*-. En Italia la Iglesia católica disfruta de un “status” de verdadero privilegio, ya que sus relaciones con el Estado italiano se regulan, conforme a los Pactos de Letrán, de los que derivan sustanciosos derechos, no concedidos al resto de las confesiones italianas: tutela penal especial, prescripción de la enseñanza religiosa católica, estatuto privilegiado del clero, etcétera; algunos de estos derechos y concesiones especiales admitirán cierta justificación, desde el punto de vista de una igualdad proporcional, y en virtud de la mayoría católica de Italia, pero otras no tienen una misma fundamentación racional, es el caso de la agravación de los delitos contra la Iglesia católica, en comparación con otros credos religiosos. En Alemania e Italia, el tratamiento diferenciado, dado a las iglesias es justificado por el criterio de la igualdad proporcional: hay una mayoría católica y protestante en Alemania, y una mayoría católica en Italia. Nada hay que objetar al criterio de la igualdad proporcional; sin embargo, una breve lectura de los textos jurídicos conducen a la convicción, de que esta igualdad proporcional no respeta unos mínimos fundamentales e insoslayables, y que, por esta razón, la igualdad proporcional se hace desproporcionada y discriminatoria<sup>754</sup>.

Si se compara el texto constitucional con la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, el parecido con la Constitución alemana es sorprendente, pues también en España hay tres bloques religiosos, desigualmente tratados por el Derecho: la Iglesia católica, las confesiones, que, por su ámbito y número de creyentes, hayan alcanzado notorio arraigo en España, y, consiguientemente susceptibles de acuerdo o convenios de cooperación con el Estado, y el resto de las confesiones -artículo 7.1 de la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980-<sup>755</sup>. El sistema

<sup>753</sup>.- Vid. SORIANO, R., *Del pluralismo confesional al pluralismo religioso íntegro: los límites al principio de igualdad religiosa*, 7, R.C.G. (1986), p. 116.

<sup>754</sup>.- Vid. SORIANO, R., *Del pluralismo confesional al pluralismo religioso íntegro: los límites al principio de igualdad religiosa*, loc. Cit., pp. 117-119.

<sup>755</sup>.- Vid. SORIANO, R., *Del pluralismo confesional al pluralismo religioso íntegro: los límites al principio de igualdad religiosa*, loc. Cit., p. 119.

estipulado en el artículo 7.1 de la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, encaja, perfectamente, en los principios, que exige el Tribunal Constitucional, ya que, cada vez que se da un trato especial, se hace en función de una razón objetiva, claramente establecida en la ley orgánica de libertad religiosa, e igual para todos, que supone la existencia de características y necesidades específicas, que exigen ese trato especial. Adecuándose, así, a la *igualdad en la ley*, a la prohibición y al principio de proporcionalidad<sup>756</sup>.

Para VILLA la igualdad de las confesiones, en el ordenamiento jurídico español, no se consigue sólo con normas de general aplicación, porque las diferencias de los grupos religiosos reclaman un tratamiento específico, que tenga en cuenta sus propias particularidades<sup>757</sup>. Efectivamente, si bien cabe un trato específico de las diferentes confesiones, no deberá tener, como resultado, el limitar el derecho de todas las demás a la libertad religiosa. De modo que habría discriminación, si, habiéndose adoptado determinadas medidas en beneficio de una confesión, las demás vieran desatendidos sus requerimientos en tal sentido, o, sencillamente, no pudieran desarrollar estas actividades, por haberse reservado su monopolio a la confesión mayoritaria<sup>758</sup>. SORIANO ha expresado algunos temores respecto al criterio de la proporcionalidad:

"El reto tendido a los legisladores españoles consiste en saber compaginar el tratamiento normativo de las peculiaridades religiosas con el respeto al principio de igualdad religiosa: el criterio de la proporcionalidad deja de tener justificación cuando en algunos casos ni siquiera existe proporción"<sup>759</sup>.

El tratamiento jurídico desigual a las comunidades religiosas se produce desde el mismo momento de la promulgación de la Constitución, pues, primero, se celebran unos acuerdos entre la Iglesia católica y el Estado, en 1979, y, después, en 1980, se elabora una ley orgánica de libertad religiosa, en la que están contempladas las confesiones religiosas en unos términos restrictivos, y en las que ya no se menciona a la Iglesia católica, sencillamente, porque ya se había recibido un trato privilegiado en los citados acuerdos de 1979 y holgaba cualquier referencia<sup>760</sup>. Efectivamente, el sistema que se ha seguido, hace dudar de su real adecuación al principio de igualdad. Son varios los problemas que se presentan: aunque es indudable, que la Iglesia católica cumple con los requisitos, exigidos para su inscripción en el Registro de entidades religiosas; siendo, incluso, el paradigma de lo que el Estado considera que es una confesión. También es evidente que la Iglesia católica cumple el requisito, exigido para el establecimiento de acuerdos de cooperación: "el notorio arraigo". Pero, aún así, la situación de la Iglesia católica respecto de la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, es anómala, y, difícilmente, puede entenderse que ésta sea plenamente aplicable a aquélla, sobre todo por el

<sup>756</sup>.- Vid. AA.VV., *La igualdad jurídica de las confesiones religiosas*, loc. cit., p. 314.

<sup>757</sup>.- Vid. VILLA, M<sup>a</sup>. J., *La legislación española relativa a las confesiones religiosas no católicas*, IV, A.D.E.E. (1988), p. 825.

<sup>758</sup>.- Vid. SORIANO, R., *Del pluralismo confesional al pluralismo religioso íntegro: los límites al principio de igualdad religiosa*, loc. cit., p. 119.

<sup>759</sup>.- Vid. SORIANO, R., *Del pluralismo confesional al pluralismo religioso íntegro: los límites al principio de igualdad religiosa*, loc. cit., p. 120.

<sup>760</sup>.- <sup>760</sup>.- Vid. SORIANO, R., *Del pluralismo confesional al pluralismo religioso íntegro: los límites al principio de igualdad religiosa*, loc. cit., p. 131.

silencio normativo, que sobre esto existe. Si bien no se critica el especial trato, que se da a la Iglesia católica, sino la falta de norma, de la que deriva ese trato especial, porque no es suficiente suponer que existan justificaciones políticas e históricas, ya que el Estado, los poderes públicos, no pueden actuar discrecionalmente, sin apoyo normativo, o sin establecer el fin, que debe perseguirse<sup>761</sup>.

### **III.7.2. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS DONATIVOS, QUE SE REALIZAN A LAS "CONFESIONES RELIGIOSAS NO CATÓLICAS" CON ACUERDOS, EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, COMO MODELO PARA ALCANZAR LA AUTOFINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA.**

Las diferencias de tratamiento de la Iglesia católica con respecto a las demás confesiones no católicas con acuerdos en materia de "asignación tributaria" y de sostenimiento de la asistencia y enseñanza con cargo a fondos públicos -aunque no en cuanto a los beneficios fiscales- subyacen, por una parte, en el reconocimiento de la realidad social -reconocimiento, que es, además, un imperativo constitucional, al establecer el artículo 16.3 de la Constitución española de 1978, que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española [...]". Pero, en el fondo, y sobre todo, lo que está latente es el peso de siglos de Historia, que acompaña el régimen jurídico de la Iglesia católica en España y del que carecen las otras confesiones. En este sentido se ha manifestado, expresamente, el Tribunal Constitucional en el auto 480/1989, de 2 de octubre, del Tribunal Constitucional, que se ocupó del siguiente asunto: la comunidad evangélica de habla alemana de Baleares había interpuesto recurso de amparo contra la liquidación del impuesto de sucesiones, que se había practicado por la aceptación de un legado. Argumentaba -entre otras razones- violación del principio de igualdad religiosa, pues se estimaba discriminada respecto a la Iglesia católica, la cual, en idénticas circunstancias, sí quedaba exenta del impuesto. El Tribunal Constitucional acordó la inadmisión del recurso de amparo, alegando que era manifiesta la falta de equiparación o identidad sustancial de los términos en comparación -Iglesia católica/comunidad evangélica de habla alemana de Baleares-. Así, llegó a decir: "En materia económica, concurren una serie de circunstancias -no sólo fácticas, sino jurídicas- en las relaciones históricas entre el Estado y la Iglesia católica que, sin perjuicio de su progresiva adecuación al nuevo ordenamiento constitucional, no concurren evidentemente en el caso de la Comunidad Evangélica de Habla Alemana de Baleares"<sup>762</sup>.

La Administración, en un intento de equipararlas a la Iglesia católica, les ofrece, durante bastante tiempo, la posibilidad de utilizar, como vía de financiación, la "asignación tributaria", a lo que se negaron, tanto los judíos como los evangélicos, al considerar que sus miembros habían contribuido, hasta ese momento, a la financiación de la Iglesia con aportaciones voluntarias -en el caso de los evangélicos lo normal es que se aporte un diez por ciento de sus ingresos- y que la intervención del Estado introducía un elemento distorsionador. Los musulmanes manifiestan, desde el principio, su pretensión de utilizar la vía de la asignación tributaria, pero lo hacen en un momento en que la política seguida por el Director General de Asuntos Religiosos, Dionisio

<sup>761</sup>.- Vid. AA.VV., *La igualdad jurídica de las confesiones* Financiación de las confesiones no católicas en el Derecho español, loc. cit., pp. 441-442. *religiosas*, loc. cit., p. 315.

<sup>762</sup>.- Vid. COMBALÍA, Z., *Financiación de las confesiones no católicas en el Derecho español*, loc. cit., pp. 441-442.

Llamazares, va en la dirección de que la Iglesia católica se autofinancie, como las demás confesiones; como consecuencia les es denegada esta posibilidad<sup>763</sup>.

Pero no hay ninguna mención a la posible financiación directa, total o parcial de las confesiones respectivas en ninguno de los tres acuerdos. Protestantes y judíos renunciaron expresamente, aunque en su momento se les hizo esa oferta por el Gobierno a tal tipo de financiación, o si se prefiere, de cooperación económica del Estado a su financiación. Las conversaciones con los musulmanes se iniciaron algún tiempo después. Tanto en el proyecto de acuerdo, presentado por la federación española de entidades religiosas islámicas -F.E.E.R.I.- como por la unión de comunidades islámicas -U.C.I.D.E.- se proponía el compromiso estatal de contribuir a esa financiación mediante una dotación presupuestaria durante un primer período, dejando para un momento posterior la elección del sistema definitivo, de común acuerdo con el Estado. Pero el Gobierno había cambiado de posición<sup>764</sup>.

En los proyectos de la federación de entidades religiosas evangélicas de España y la federación de comunidades israelitas de España, presentados en 1989, la posibilidad de asignación tributaria aparecía regulada en el artículo 13 de ambos acuerdos, habiendo tomado como modelo el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979. La representación estatal se opuso a esta cuestión, en base al carácter transitorio del régimen establecido para la Iglesia católica, lo que motivó la renuncia de las dos federaciones a su regulación, ante la postura inamovible del Estado<sup>765</sup>.

El título X -artículos 50 a 57 del proyecto de la unión de comunidades islámicas de España y los artículos 38 a 45 del proyecto de federación española de entidades religiosas islámicas-<sup>766</sup> titulado "régimen financiero" era donde se contenían las mayores diferencias de fondo. Concretamente en el tema relativo a la financiación de las confesiones. Mientras la federación de entidades religiosas evangélicas de España y la federación de comunidades israelitas de España optan por la autofinanciación, los proyectos de la federación española de entidades religiosas islámicas y la unión de comunidades islámicas de España, presentados el 24 de enero y el 13 de junio de 1991, respectivamente pretenden un régimen similar al de la Iglesia católica, mediante una consignación presupuestaria global y única, actualizable anualmente y en el tono de lo recogido en el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, con la Santa Sede, con una duración, que el artículo 51 del proyecto de la unión de comunidades islámicas de España deja a convenir con el Estado y el artículo 35 del proyecto de la federación española de entidades religiosas islámicas concreta en cinco ejercicios presupuestarios. Viene así a establecerse un sistema de fases progresivas, cuya segunda fase sería el paso a otro tipo de financiación, adecuado a sus necesidades, a elegir entre los acordados hasta el momento con las

<sup>763</sup>.- Vid. CA STRO JOVER, A., *El desarrollo de la libertad religiosa a partir de la Constitución de 1978. Breves consideraciones acerca de la firma de los acuerdos con las minorías religiosas*, en REINA, V., De, y FÉLIX BALLESTA, M.Á., (coord.), *Acuerdos del Estado español con confesiones religiosas minoritarias. Actas del VII Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado*, loc. cit., p. 531.

<sup>764</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *Los acuerdos y el principio de igualdad: comparación con los acuerdos con la Iglesia Católica y situación jurídica de las confesiones sin acuerdo*, en REINA, V., De, y FÉLIX BALLESTA, M.Á., (coord.), *Acuerdos del Estado español con confesiones religiosas minoritarias. Actas del VII Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado*, loc. cit., p. 201.

<sup>765</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A., *Estado y confesiones religiosas: un nuevo modelo de relación. (Los pactos con las confesiones: Leyes 24, 25 y 26 de 1992)* (Madrid 1995), p. 56.

<sup>766</sup>.- El proceso negociador del acuerdo de cooperación con los musulmanes fue más arduo que el llevado a cabo con evangélicos e israelitas, debido a que no había interlocutor válido, siendo difícil el consenso entre los propios musulmanes, agrupados, finalmente, en dos federaciones: la UCIDE -unión de comunidades islámicas de España- y la FEERI -federación española de entidades religiosas islámicas-, que no compartían los mismos criterios ni los mismos objetivos. Vid. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A., *Estado y confesiones religiosas: un nuevo modelo de relación. (Los pactos con las confesiones: Leyes 24, 25 y 26 de 1992)*, loc. cit., pp. 93-94.

demás convesiones -artículo 52 del proyecto de la unión de comunidades islámicas de España y 40 del proyecto de la federación española de entidades religiosas islámicas- comprometiéndose a una autofinanciación como fase final -artículo 53 del proyecto de la unión de comunidades islámicas de España y 41 del proyecto de la federación de entidades religiosas islámicas-<sup>767</sup>.

Por lo demás, el contenido coincide, salvo matices menores, con el artículo 11 de los acuerdos con la federación de entidades religiosas de España y la federación de comunidades israelitas de España, salvo en el caso de deducciones fiscales para las donaciones, respecto a las cuales los acuerdos se remiten a la normativa del impuesto sobre la renta, mientras el proyecto de la unión de comunidades islámicas de España guarda silencio y el de la federación española de entidades religiosas islámicas exige un beneficio fiscal del cien por cien<sup>768</sup>. El anteproyecto de acuerdo del Ministerio de Justicia tomó como modelo los acuerdos con la federación de entidades religiosas de España y la federación de comunidades israelitas de España. Dos temas, que aparecían regulados en el proyecto de la unión de comunidades islámicas de España y la federación española de entidades religiosas islámicas quedaron excluidos del anteproyecto del Ministerio de Justicia: a) la contribución directa del Estado mediante consignación anual presupuestaria, al sostenimiento económico de las federaciones islámicas y la pertenencia de los profesores de religión islámica en centros docentes públicos al claustro de profesores, así como su retribución por el Ministerio de Educación y Ciencia. La representación estatal entendió que admitir estos supuestos conculcaría la igualdad respecto a los acuerdos con la federación de entidades religiosas evangélicas de España y la federación de comunidades israelitas de España, que no los recogían. La exclusión de estas cuestiones, en especial la primera, parece que fue el motivo de la retirada temporal de la federación española de entidades religiosas islámicas del proceso negociador, mientras que la unión de comunidades islámicas de España aceptó las propuestas, si de ello dependía la continuación de las negociaciones. No cabe duda, de que la federación española de entidades religiosas islámicas había tomado como modelo para su régimen financiero al acuerdo económico, de 1979, de la Iglesia católica y pretendió un régimen semejante<sup>769</sup>. El rechazo por parte de la Administración fue acertado. El régimen financiero establecido en el artículo II del acuerdo económico, de 1979, es compatible con la Constitución vigente solo desde la óptica de su transitoriedad. De ahí el establecimiento de unas fases de aplicación progresiva hasta llegar a la autofinanciación, como meta. Otra interpretación chocaría con el principio de aconfesionalidad del Estado. Por ello, parece lógico que la administración, dadas las dificultades, que estaban entrañando, sobre todo por su dilación en el tiempo, la conclusión de la financiación prevista en el acuerdo sobre asuntos económicos, no quisiera embarcarse en un problema similar con la comunidad islámica. En opinión de FERNÁNDEZ-CORONADO no es posible aducir por parte de la federación española de entidades religiosas islámicas discriminación respecto a la Iglesia católica, por dos razones. En primer lugar, el acuerdo con los islámicos se estaba elaborando trece años después de promulgada la Constitución, cosa que no ocurrió con el acuerdo económico, de 1979, que ya estaba concluido, aunque no promulgado, antes del texto constitucional. En segundo lugar, los acuerdos con la Iglesia católica, a tenor de la doctrina del Tribunal Constitucional, han de

<sup>767</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A., *Estado y confesiones religiosas: un nuevo modelo de relación*. (Los pactos con las confesiones: Leyes 24, 25 y 26 de 1992), loc. cit., pp. 88-89.

<sup>768</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A., *Estado y confesiones religiosas: un nuevo modelo de relación*. (Los pactos con las confesiones: Leyes 24, 25 y 26 de 1992), loc. cit., p. 89. El artículo 11 ha sido creado *cuasi ex novo*. Vid. BUENO GALLARDO, E., DOMÍNGUEZ POYATO, Y., GALLARDO CAMACHO, J.J., y MUÑOZ TORRES, M.P., *Los acuerdos con las minorías religiosas*, en AA.VV., *Laicidad, cooperación y sistema de acuerdos...*, loc. cit., (Madrid, 1997), p. 206.

<sup>769</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A., *Estado y confesiones religiosas: un nuevo modelo de relación*. (Los pactos con las confesiones: Leyes 24, 25 y 26 de 1992), loc. cit., pp. 91-93.

interpretarse con la Constitución, con lo que, si la financiación a la Iglesia católica dejase de ser considerada como algo transitorio, habría que denunciar el acuerdo<sup>770</sup>. Pero en este anteproyecto del Ministerio de Justicia era necesario establecer un interlocutor religioso único, que agrupase a las dos federaciones. Finalmente, los dos proyectos se fusionarían en uno sólo en la última reunión de las Comisiones negociadoras estatal y religiosa que tuvo lugar el 18 de febrero de 1992, constituyéndose la comisión islámica de España en esa misma fecha, como único interlocutor del Estado<sup>771</sup>. La financiación, inexistente como tal en los acuerdos de 1992 y establecido para la Iglesia católica en el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, es otro de los contenidos que puedan dar lugar a pensar en una posible violación del principio de igualdad. Es cierto que en algún momento de las negociaciones alguna confesión, especialmente la federación española de entidades religiosas islámicas, pretendió un régimen financiero similar al de la Iglesia católica. Sin embargo, la postura del Estado siempre fue tajante a este respecto a favor de la autofinanciación. Esta tesis no es en absoluto contradictoria con el artículo II del acuerdo económico de 1979, ya que del mismo se desprende, claramente, que la financiación a la Iglesia católica es algo transitorio, y que la meta de dicho artículo es la autofinanciación. Otra cosa es que las fases progresivas, previstas para llegar a la misma, se estén desarrollando mucho más lentamente de lo previsto. Por ello, no pareció adecuado establecer este mismo régimen para otras confesiones. Partiendo de la premisa de transitoriedad de la financiación católica, no hay violación de la igualdad constitucional, otra cosa sería que el mencionado régimen transitorio se convirtiese "de facto" en definitivo, en cuyo caso, por presión del principio de igualdad habría que denunciar el acuerdo económico<sup>772</sup>. Aunque el beneficio afecta directamente a la persona física al suponerle una deducción del impuesto, implica también una ventaja indirecta para las confesiones, que se beneficiarían de estos donativos<sup>773</sup>. En el tema de las deducciones hay que hacer notar que se ha invertido el orden paradigmático usual. Es decir, habitualmente el régimen jurídico articulado para la Iglesia católica sirve de modelo para el desarrollo del régimen jurídico de las otras confesiones. Sin embargo, en este punto de las desgravaciones han sido, principalmente, las confesiones no católicas, las que han ido por delante y han abierto una brecha, que puede ser de gran utilidad, también a la Iglesia católica, para alcanzar la autofinanciación<sup>774</sup>.

La ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas establecía la posibilidad de deducir un diez por ciento de las cantidades donadas a la Iglesia católica y a las confesiones no católicas, que hayan firmado acuerdo. El artículo 78.6, c) del impuesto sobre la renta de las personas físicas de 1991, se refiere a "la Iglesia católica y las Asociaciones confesiones no católicas, legalmente reconocidas, que hayan firmado con el Estado español los acuerdos a que se refiere el artículo 16 de la Constitución española"; sin embargo, llama la atención que el legislador mencione el artículo 16 de la Constitución española de 1978, cuando en éste no se refiere a los acuerdos de cooperación<sup>775</sup>. Para FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ este artículo 78.6, c) de la ley del impuesto de la

<sup>770</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A., *Estado y confesiones religiosas: un nuevo modelo de relación*. (Los pactos con las confesiones: Leyes 24, 25 y 26 de 1992), loc. cit., pp. 93-94.

<sup>771</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A., *Estado y confesiones religiosas: un nuevo modelo de relación*. (Los pactos con las confesiones: Leyes 24, 25 y 26 de 1992), loc. cit., p. 99.

<sup>772</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A., *Estado y confesiones religiosas: un nuevo modelo de relación*. (Los pactos con las confesiones: Leyes 24, 25 y 26 de 1992), loc. cit., pp. 119-120.

<sup>773</sup>.- Vid. COMBALÍA, Z., *Financiación de las confesiones no católicas en el Derecho español*, loc. cit., p. 440.

<sup>774</sup>.- Vid. COMBALÍA, Z., *Financiación de las confesiones no católicas en el Derecho español*, loc. cit., p. 440.

<sup>775</sup>.- Vid. COMBALÍA, Z., *Financiación de las confesiones no católicas en el Derecho español*, loc. cit., p. 440.

renta de las personas físicas de 1991, abrirá la vía hacia la autofinanciación de la Iglesia católica, en la que la confesión se encuentra comprometida, según el artículo II.5 del acuerdo sobre asuntos económicos de 1979<sup>776</sup>.

En los tres acuerdos con estas confesiones religiosas no católicas, puede encontrarse una remisión a la regulación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de los donativos, que se hagan a estas entidades con respecto a las deducciones, que sean aplicables<sup>777</sup>.

En los acuerdos de 1992 con las confesiones no católicas sólo se ha acogido el sistema de beneficios fiscales, no la asignación tributaria<sup>778</sup>.

La problemática, que se plantea, es por qué no se ha acogido en los acuerdos con las confesiones no católicas el sistema de asignación tributaria, previsto para la Iglesia. En los

<sup>776</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A., *Los Acuerdos del Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (F.E.R.E.D.E.) y la Federación de Comunidades Israelitas (F.C.I.). Consideraciones sobre los textos definitivos*, VII, A.D.E.E. (1991), p. 568.

<sup>777</sup>.- Vid. *Confesiones religiosas: Beneficios fiscales*, 27, T.F. (1993), p. 10. La Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la federación de entidades religiosas evangélicas de España se refiere a los donativos, inicialmente, en su apartado 1 del artículo 11:

"Las Iglesias pertenecientes a la FEREDE pueden recabar libremente de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir ofrendas y liberalidades de uso".

Apartado que es complementado con el apartado 6 del mismo artículo 11 de la misma ley:

"La normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas regulará el tratamiento tributario aplicable a los donativos que se realicen a las Iglesias pertenecientes a la FEREDE, con las deducciones que, en su caso, pudieran establecerse".

Igualmente, la ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la federación de comunidades israelitas de España, hace idéntico planteamiento. De este modo, el apartado 1 del igualmente artículo 11 avanza que:

"Las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades israelitas pueden recabar libremente de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir ofrendas y liberalidades de uso".

Para añadir, a continuación, el apartado 6 del citado artículo que:

"La normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas regulará el tratamiento tributario aplicable a los donativos que se realicen a las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades israelitas, con las deducciones que, en su caso, pudieran establecerse".

La ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la comisión islámica de España, en su apartado 1 del artículo 11 vuelve a contemplar esta cuestión para la citada confesión religiosa:

"La Comisión Islámica de España y las Comunidades que la integran pueden recabar libremente de sus miembros prestaciones, organizar colectas públicas y recibir ofrendas y liberalidades de uso".

Nuevamente, aunque esta vez en apartado 5 del mismo artículo 11, se regula la cuestión de los donativos para esta confesión:

"La legislación fiscal regulará el tratamiento tributario aplicable a los donativos que se realicen a las Comunidades pertenecientes a la "Comisión Islámica de España", con las deducciones que, en su caso, pudieran establecerse".

<sup>778</sup>.- Vid. COMBALÍA, Z., *Financiación de las confesiones no católicas en el Derecho español*, loc. cit., p. 433.

debates parlamentarios, en los que se aprobaron los acuerdos de 1992 con protestantes, judíos o musulmanes<sup>779</sup>, el señor Cuesta Martínez -del Grupo Parlamentario Socialista- hizo referencia, a que las diferencias entre los nuevos acuerdos y los ya existentes con la Santa Sede surgían, entre otras razones, por "la existencia de lo que podríamos denominar respecto a un régimen transitorio residual en la normativa especial relativa a la Iglesia católica" -D.S.C. núm. 210, de 17 de septiembre de 1992-. Según COMBALÍA, en ese régimen transitorio residual estaría la asignación tributaria, que, en buena medida, es un paso conveniente entre el anterior sistema de dotación presupuestaria y la deseada autofinanciación de la Iglesia católica<sup>780</sup>.

En la federación de comunidades israelitas de España -F.C.I.- fueron las autoridades religiosas, quienes, desde el comienzo, rechazaron el sistema de asignación tributaria. Los judíos ya tenían una experiencia trágica en un supuesto similar: el sistema de "impuesto religioso" alemán. Las listas, de quienes tributaban a favor de la comunidad judía, fueron un instrumento para la "política nazi" de exterminio. Por ello, no es de extrañar que los judíos españoles hayan mostrado recelo hacia un sistema de asignación tributaria, en el que quede constancia al Estado, de quienes contribuyen con la federación de comunidades israelitas de España<sup>781</sup>.

En el caso de la federación de entidades religiosas evangélicas de España, concluyeron dos sectores, uno favorable y otro reacto a la asignación. De este modo, existe una redacción de un anteproyecto de acuerdo, elaborado por la federación, en el que sí que se preveía un sistema de asignación tributaria similar al que tiene la Iglesia católica. El sistema se articulaba con carácter temporal, en tanto en cuanto la federación de entidades religiosas evangélicas de España no lograra los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Posiblemente, la falta de unanimidad entre las distintas iglesias evangélicas, integradas en la federación, hizo que, por fin, se abandonara el proyecto de asignación tributaria, sin tan siquiera llegar a negociarlo en serio con el Gobierno<sup>782</sup>. La pretensión del sector de la federación de entidades religiosas evangélicas de España, que defendía la asignación tributaria fue, posteriormente, abandonada, volviéndose a los planteamientos de los primeros proyectos<sup>783</sup>.

Los islámicos, sobre todo uno de los dos sectores, que forman la comisión islámica de España -C.I.E.- se inclinaron por un sistema puro de dotación presupuestaria, como el ya abandonado por la Iglesia católica. Así se recogía en el anteproyecto de enero de 1991, en los siguientes términos: "Durante los cinco ejercicios siguientes a la firma de este Acuerdo, la colaboración a que se refiere el artículo anterior se materializará consignando el Estado en sus Presupuestos Generales la adecuada dotación a la Federación con carácter global y único, que se

<sup>779</sup>.- La confesión protestante y judía obtuvieron, en 1985, mediante la agrupación de sus Iglesias y comunidades en dos federaciones: federación de entidades religiosas evangélicas -F.E.R.E.D.E.- y federación de comunidades israelitas -F.C.I.-, el reconocimiento del notorio arraigo; la musulmana en 1989. Vid. DIEGO-LORA, C., De, *Los Acuerdos del Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (F.E.R.E.D.E.) y la Federación de Comunidades Israelitas (F.C.I.). Consideraciones sobre los textos definitivos*, loc. cit., p. 545. España ha sido el primer Estado democrático en firmar un acuerdo con los musulmanes, dadas las características peculiares del Islam. Vid. INFUESTA, J., *Firmados los acuerdos con protestantes, musulmanes y judíos*, 2579, *Ecclesia* (1992-I), p. 6.

<sup>780</sup>.- Vid. COMBALÍA, Z., *Financiación de las confesiones no católicas en el Derecho español*, loc. cit., p. 434.

<sup>781</sup>.- Vid. COMBALÍA, Z., *Financiación de las confesiones no católicas en el Derecho español*, loc. cit., p. 434.

<sup>782</sup>.- Vid. COMBALÍA, Z., *Financiación de las confesiones no católicas en el Derecho español*, loc. cit., p. 434.

<sup>783</sup>.- Vid. DIEGO-LORA, C., De, *Los Acuerdos del Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (F.E.R.E.D.E.) y la Federación de Comunidades Israelitas (F.C.I.). Consideraciones sobre los textos definitivos*, loc. cit., p. 566.

actualizará anualmente" -artículo 39-. Este sistema se preveía con carácter provisional. De este modo, se disponía que "transcurridos los cinco ejercicios a que se refiere el artículo anterior, la Federación, de común acuerdo con el Estado, elegirá el sistema más adecuado a sus necesidades" -artículo 40-, y se establecía también que "la Federación declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando este propósito fuera conseguido, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir el sistema de colaboración financiera aplicado en este momento por otros campos y formas de colaboración económica entre el Estado y la Federación" -artículo 41-<sup>784</sup>. Sin embargo, el Gobierno no sólo rehusó a la dotación presupuestaria, solicitada por los musulmanes, sino también a la asignación para la comisión islámica de España. Entre las posibles razones del Gobierno para ese rechazo, es que existe una voluntad, de que el régimen acordado con las tres confesiones no católicas sea muy similar -casi idéntico-, lo cual ha sido muy criticado. De hecho, el Sr. Castellano Cardalliaquet en los debates parlamentarios, por los que se aprobaron los acuerdos, señalaba que:

"Lo que nos parece absolutamente desacertado es que, si comparamos los tres Acuerdos, parecen más bien el *relleno de una plantilla* en el que se ha ido colocando el nombre de cada una de las confesiones. Sinceramente, podría haber habido un poquitín más de delicadeza cuando llega el momento de regularlo, para que nadie pueda pensar que contemplamos el hecho religioso o la cooperación con otras iglesias como una cuestión de mero trámite en que se obliga a todos a pasar por una determinada medida" -D.S.C., núm. 210, de 17 de noviembre de 1992-<sup>785</sup>.

COMBALÍA entiende que la falta de unanimidad de las confesiones en la aceptación de la asignación tributaria "posiblemente influyó en que esta vía de financiación no fuera admitida por el Gobierno". Aunque la razón decisiva para dejar al margen la asignación tributaria fue otra, dice. En realidad, el Gobierno ve la asignación tributaria como un sistema provisional, que para la Iglesia católica acepta como una necesidad. La Dirección General de Asuntos Religiosos y de Objeción de Conciencia ha señalado, en repetidas ocasiones, que parecía necesario un período durante el cual los católicos españoles se fueran mentalizando, de que es a ellos y no al Estado, a quienes compete el protagonismo en la financiación de la Iglesia católica. Esta mentalización no la necesitan, por ejemplo, los musulmanes, quienes nunca han recibido sustento económico del Estado<sup>786</sup>.

Los motivos de las confesiones, para rechazar, o, al menos, para no batallar por la asignación tributaria, tal vez haya que buscarlos, en que no les debe compensar la exigua cantidad, que recaudarían -teniendo en cuenta el número de miembros, que esas confesiones tienen en España- a cambio del control estatal, que, como contrapartida, se venían obligadas a soportar -presentación de una memoria anual, etcétera-, y, sobre todo, de brindarle al Gobierno un arma, para esgrimir en sus negociaciones con las confesiones e hipotecar, de este modo, su libertad<sup>787</sup>.

<sup>784</sup>.- Vid. COMBALÍA, Z., *Financiación de las confesiones no católicas en el Derecho español*, loc. cit., pp. 434-435 y nota 11.

<sup>785</sup>.- Vid. COMBALÍA, Z., *Financiación de las confesiones no católicas en el Derecho español*, loc. cit., p. 435.

<sup>786</sup>.- Vid. COMBALÍA, Z., *Financiación de las confesiones no católicas en el Derecho español*, loc. cit., p. 436.

<sup>787</sup>.- Vid. COMBALÍA, Z., *Financiación de las confesiones no católicas en el Derecho español*, loc. cit., p. 436.

Los acuerdos del 92 recogen la posibilidad de un tratamiento tributario favorable a los donativos, como estímulo para que sean los fieles de cada confesión, los que contribuyan a su sostenimiento económico -artículo 11.5 de los acuerdos de 1992-; posibilidad que se había considerado un compromiso del Estado respecto a la Iglesia católica mediante la equiparación de estos donativos a los hechos a entidades clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad pública, dando dercho a las mismas deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pero la posibilidad abierta en los acuerdos con protestantes, judíos y musulamantes no se limita el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ya que su expresión es más general. De hecho, ya ha tenido traducción en la ley sobre fundaciones e incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, de 1994, en donde se equiparan a estos efectos las confesiones con acuerdo de cooperación con el Estado en la disposición adicional cuarta, respecto de las deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en la adicional novena, por lo que se modifica el artículo 5 de la ley del impuesto sobre sociedades, de 1978, en el número 2 de ese artículo, respecto de las deducciones en el impuesto sobre sociedades<sup>788</sup>.

El artículo 11.6 de la ley 24/1992, de 10 de noviembre, de 1992, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la federación de entidades religiosas evangélicas de España<sup>789</sup>; el artículo 11.6 de la ley 25/1992, de 10 d enoviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la federación de comunidades israelitas de España<sup>790</sup>, y el artículo 11.5 d ela ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la comisión islámica de España<sup>791</sup>. Estos párrafos quinto y sextos de los acuerdos recogen un mandato a la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para que regule el tratamiento tributario de los donativos, que se realicen a las iglesias y comunidades, pertenecientes a las citadas federaciones y la comisión islámica, con las deducciones, que, en su caso, puedan establecerse. Un mandato similar lo encontramos en el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, suscrito con la Iglesia católica -artículo IV.2 del citado acuerdo-. Los sujetos, afectados por este supuesto serán las personas físicas y la razón del beneficio fiscal se encuentra en las donaciones, realizadas a iglesias y comunidades, pertenecientes a ambas federaciones y destinadas, en consonancia con el acuerdo económico, de 1979, a fines de sustentación del culto, clero, apostolado y caridad -artículo IV.2 del acuerdo económico, de 1979-<sup>792</sup>. El beneficio fiscal afecta directamente a la persona física contribuyente, al suponerle una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero, a la vez, constituye un beneficio indirecto para las iglesias y comunidades, que se

<sup>788</sup>.- Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *Los acuerdos y el principio de igualdad; comparación con los acuerdos con la Iglesia Católica y situación jurídica de las confesiones sin acuerdo*, en REINA, V., De, y FÉLIX BALLESTA, M<sup>a</sup>.A., (coord.), *Acuerdos del Estado español con confesiones religiosas minoritarias. Actas del VII Congreso Internacional del Derecho Eclesiástico del Estado*, loc. cit., p. 200.

<sup>789</sup>.- Este artículo 11.6 nos dice: "La normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas regulará el tratamiento tributario aplicable a los donativos que se realicen a las Iglesias pertenecientes a la FEREDE, con las deducciones que, en su caso, pudieran establecerse".

<sup>790</sup>.- Este artículo 11.6 nos dice: "La normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas regulará el tratamiento tributario aplicable a los donativos que se realicen a las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas, con las deducciones que, en su caso, pudieran establecerse".

<sup>791</sup>.- Este artículo 11.5 nos dice: "La legislación fiscal regulará el tratamiento tributario aplicable a los donativos que se realicen a las Comunidades pertenecientes a la "Comisión Islámica de España", con las deducciones, que en su caso, pudieran establecerse".

<sup>792</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A., *Los Acuerdos del Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (F.E.R.E.D.E.) y la Federación de Comunidades Israelitas (F.C.I.). Consideraciones sobre los textos definitivos*, VII, A.D.E.E. (1991), p. 568.

beneficiarán de estos donativos<sup>793</sup>. En las redacciones anteriores al texto definitivo, aparece un artículo 13, en el que se determinaba, que todas las contraprestaciones por las iglesias o comunidades, pertenecientes a la federación de entidades religiosas evangélicas o federación de comunidades israelitas de España a los ministros de culto, como consecuencia directa o indirecta del ejercicio de funciones de culto o de asistencia religiosa, tendrían consideración a efectos fiscales de rendimientos de trabajo personal. En un segundo párrafo, el artículo recogía la obligación de las iglesias o comunidades federadas de realizar las retenciones fiscales e ingresos en el Tesoro, que, sobre tales prestaciones, estableciere el ordenamiento español. Esta redacción fue, posteriormente, sustituida por otra más clara y concisa, que se limitaba a señalar que las contraprestaciones satisfechas a los ministros de culto por las iglesias y comunidades se calificarían, a efectos tributarios, como rendimientos de trabajo o de actividades profesionales, de acuerdo con las disposiciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este artículo desapareció en el texto definitivo por superfluo, pues las cantidades, obtenidas por el desempeño de la función de ministro de una confesión religiosa, se consideran rendimientos del trabajo y no hace falta señalarla<sup>794</sup>.

A pesar de que las tres confesiones no católicas querían disfrutar de la posibilidad de que a su favor se pudiera otorgar el 0'5239% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, los acuerdos con las confesiones no católicas no mencionan tal extremo. No parece que por parte del Estado exista hoy voluntad de extender el sistema fuera de la Iglesia católica; incluso tal voluntad propende más bien a suprimir el beneficio<sup>795</sup>.

<sup>793</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A., *Los Acuerdos del Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (F.E.R.E.D.E.) y la Federación de Comunidades Israelitas (F.C.I.). Consideraciones sobre los textos definitivos*, VII, A.D.E.E. (1991), p. 568.

<sup>794</sup>.- Vid. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A., *Los Acuerdos del Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (F.E.R.E.D.E.) y la Federación de Comunidades Israelitas (F.C.I.). Consideraciones sobre los textos definitivos*, VII, A.D.E.E. (1991), p. 569

<sup>795</sup>.- Vid. HERA PÉREZ-CUESTA, A., *De La, Acuerdos con las confesiones religiosas minoritarias*, loc. cit., p. 226.

## CONCLUSIONES

Primera.- Al estudiar la desamortización, un tema relacionado con el mismo, es la cuestión de los diezmos. Impuesto ya en el Antiguo Testamento, aunque voluntario, empieza a convertirse en obligatorio a partir del siglo XII. Ya en la Biblia se contemplaba la obligación de pagar impuestos. De ahí el pasaje evangélico de "Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". El decreto de 29 de junio de 1821 reduce el diezmo eclesiástico a la mitad.

Segunda.- Y aunque la primera desamortización se sitúa en 1798, con bastante anterioridad a esta etapa -concretamente en el siglo XVI- nos encontramos con ensayos desamortizadores. Es el caso de las llevadas a cabo por los monarcas españoles, en virtud de la bula de Adriano VI, de 4 de mayo de 1523. La segunda fase comienza con la crisis de 1575. Sin embargo, no pueden calificarse jurídicamente de desamortización, ya que fueron autorizadas por bulas pontificias.

Tercera.- La desamortización, en su forma contemporánea, comenzó con los decretos de 19 de septiembre de 1798, con decretos de Carlos IV. La causa, una vez más, hay que buscarla en la deuda pública, que se remonta al siglo XVI, pero será a partir de 1780 cuando crezca espectacularmente, como consecuencia de la guerra con Inglaterra y Francia. Pero el dinero obtenido con la venta de los bienes no sería nunca destinado a sufragar la deuda pública, sino a costear los gastos bélicos, lo cual conllevó un aumento de la misma. Pero será en la etapa desamortizadora de Mendizábal cuando se lleve a cabo el gran proceso desamortizador. En la etapa de Espartero destaca la ley de 2 de septiembre, de 1841. A continuación la ley de 1 de mayo de 1855: la ley Madoz, que se caracteriza por su carácter general. Esta ley se suspendió el 14 de octubre del año siguiente; suspensión que duraría dos años, reanudándose el 2 de octubre de 1858. A excepción de esta breve interrupción, se prolongaría, prácticamente, hasta comienzos del siglo actual. La desamortización, aunque no resolvió ningún problema de los que venían arrastrándose de siglos anteriores, terminó con la aristocracia, aunque formó una oligarquía plutocrática, empobreciendo, aún más, a los menos adinerados. Por ello, la desamortización, únicamente enriqueció a la alta burguesía, capaz de adquirir títulos de deuda pública.

Cuarta.- Mientras el primer concordato español de 1418 reconoce las reservas pontificias en la provisión de beneficios, en el concordato de 1753 se hace justamente lo contrario. Se ha discutido sobre la existencia de los concordatos de 1714 y 1717. El artículo 23 del concordato de 1737 era el de más trascendencia. Todo el concordato giraba en torno a la institución del patronato, que era, precisamente, lo que se remitía a ulterior regulación.

Quinta.- Concordato de 1753 hace, precisamente, lo contrario que el concordato de 1418 -primer concordato español-, en el que se reconocen las reservas pontificias en la provisión de beneficios, pues aquél las suprime. En realidad, el único concordato que puede decirse celebrado es el de 1753, ya que tanto el de 1717, como el de 1737 no fueron más que una preparación del mismo. El concordato de 1753 es, ante todo, un concordato benefical, en la medida en que deroga las reservas pontificias de España. Por todo ello, el concordato de 1753 puede decirse que es de un contenido monocolor, pues trata, exclusivamente, de cuestiones de patronato, olvidándose de otras relaciones entre la Iglesia y el Estado. El concordato de 1753 tenía como objetivo regular la provisión de beneficios eclesiásticos, resolviendo de un modo definitivo las graves controversias sobre el patronato universal. Así lo establece su artículo 6. Pero se quería llegar a esta solución eliminando las reservas pontificias y los gravámenes económicos sobre las rentas beneficales. En resumen, puede decirse que el concordato de 1753 fue un concordato derogatorio de las reservas pontificias en España. En los veintitrés artículos de este concordato se pretenden solucionar los problemas planteados entre las regalías y las reservas. El concordato de 1753 es ante todo un concordato benefical, en el que se derogan las reservas.

Sexta.- El concordato de 1851 fue violado en sus aspectos esenciales durante la Segunda República, aunque no hay documento alguno que avale la denuncia unilateral del concordato de 1851 por la Santa Sede ni su aceptación por el Estado español. Sea como fuera el concordato de 1851 difícilmente podía considerarse plenamente válido en 1939.

Séptima.- El concordato de 1851 puede calificarse como concordato económico, lo cual no quiere decir que no traten otras cuestiones. El convenio-ley de 4 de abril de 1860 no hizo sino poner en vigor el concordato entre el Estado español y la Santa Sede de 1851, que hasta entonces no había sido respetado.

Octava.- La desamortización no es una cuestión pasada y que no afecte a nuestra sociedad hoy día. Por el contrario, las leyes desamortizadoras no están derogadas; debiendo hacerse una distinción entre los bienes adquiridos por la Iglesia después del convenio-ley, de 1860 y los adquiridos con anterioridad. Lo que sí es cierto es que las vicisitudes, por las que pasó la legislación desamortizadora en España, concluyeron con el convenio-ley, de 4 de abril, de 1860. La desamortización parecía llegar a buen término con la real orden de 11 de enero de 1862, que disponía la entrega a los diocesanos de las inscripciones intransferibles de la deuda consolidada al tres por ciento, a la que se refería el convenio-ley de 4 de abril de 1860. Pero cuando se cobraban los primeros vencimientos de intereses, otra orden del Ministerio de Hacienda suspendió, hasta nuevo aviso, el pago de los mismos. Con el paso del tiempo, muchas de aquellas láminas desaparecieron por múltiples circunstancias. Posteriormente, se buscaron las láminas que quedaban y se trató de reconstruir, con la mayor aproximación posible, el importe del patrimonio eclesiástico, calculándose en unos 1.200 millones de reales de vellón -equivalentes a unos 400 millones de pesetas antiguas, aproximadamente-. Durante algún tiempo, estuvo en tramitación el expediente de devolución, hasta que el artículo 16 de la ley de presupuestos generales del Estado, correspondiente al bienio 1960-1961, se concretó la transformación de las antiguas láminas en otras de deuda interior, al cuatro por ciento, descontando el veinticinco por ciento de su valor nominal, y con intereses a partir del 1 de enero de 1959 -B.O.E., de 26 de diciembre, de 1959-. En base a tal base legal se hará entrega a la Iglesia de una suma, aproximadamente, de 300 millones de pesetas en bonos de deuda pública; lo cual naturalmente suponía una gran pérdida para la Iglesia, como consecuencia de la

devaluación de la moneda. La Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de febrero, de 1974, contempla la vigencia de las normas desamortizadoras.

Novena.- Si hacemos una valoración de la legislación desamortizadora, podemos concluir que, aunque necesaria, el método escogido para llevarla a cabo, en nada puede alabarse, pues se sacaron de golpe una ingente cantidad de bienes al mercado, y eso los desvalorizó enormemente, y únicamente se beneficiaron los que ya tenían buenos capitales.

Décima.- El primer reconocimiento constitucional de la dotación estatal a la Iglesia tras la desamortización eclesiástica es la Constitución española de 1837. Efectivamente, el artículo 11 de la Constitución de 1837 impone la obligación a la Nación de mantener su culto y los ministros. En realidad, el artículo 11 de la Constitución de 1837 es una consecuencia de la desamortización. Las subvenciones en sentido moderno aparecen, históricamente, como consecuencia de las leyes desamortizadoras, siendo el primer texto legal, que obliga al Estado, a amparar económicamente a la Iglesia, el artículo 11 de la Constitución española de 1837. El artículo 11 de la Constitución de 23 de mayo de 1845, se refiere a la obligación de mantener el culto y sus ministros. E, igualmente, el artículo 14.1 del proyecto de Constitución de 1856. El artículo 21 de la Constitución de 1869 también establece la dotación al culto y al clero. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 11.1 de la Constitución de 1876.

Undécima.- La Constitución de la Segunda República de 1931 se caracteriza por su anticlericalismo. De hecho, la nueva Constitución republicana violaba en sus artículos 2, 14, 26, 27, 43, 44 y 48 el concordato de 1851. Por ello, tanto la Santa Sede como la República, consideraron que el concordato ya no estaba en vigor. El artículo 26 de la Constitución de 9 de diciembre de 1931, establece que una ley especial regulará la total extinción en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero.

Décimo segunda.- El concordato de 1953 tiene las siguientes características: es un concordato completo, porque abarca las cuestiones, que afectan a la Iglesia y al Estado; es un concordato de tesis, ya que recoge en su articulado numerosas preceptos de Derecho eclesiástico y los desarrolla; además, es un concordato de amistad, en cuanto que no viene a poner término a un período de lucha. El concordato de 1953 en los años sesenta ya era acusado de viejo. Sin embargo, en ese momento estaba vigente el concordato portugués de 1940, el alemán de 1933, el austríaco de esa misma fecha, el italiano de 1929 y, para Alsacia y Lorena, el napoleónico de 1801. Máxime, cuando el concordato alemán de 1933, se celebró en tiempos de Hitler, el italiano en tiempos de Mussolini y en Alsacia con Napoleón. Por todo ello, cabe manifestar que el envejecimiento tan prematuro se debe, en realidad, a su propia imperfección. Lo que, realmente, propiciaría la caída del concordato de 1953 sería la celebración del Concilio Vaticano II.

Décimo tercera.- La declaración sobre "*La Iglesia y la comunidad política*", de 1973, afirma que la ayuda económica de la Iglesia es propia para engendrar equívocos, sobre todo porque falta en muchos el conocimiento de la razón de esa ayuda y porque no se tiene un concepto exacto de la misión, que cumple la Iglesia en la sociedad. Para los obispos españoles esta colaboración económica del Estado a favor de la Iglesia se justifica por dos motivos hoy día. En primer lugar, como un servicio a los ciudadanos para el desarrollo de su misión religiosa. En segundo lugar, como una ayuda al esfuerzo constante de la Iglesia a favor de los necesitados y de la promoción humana. Por estos servicios sabe la Iglesia que no puede reclamar nada y que cualquier ayuda, que reciba, va siempre destinada al servicio de Dios y a la salvación de los hombres -párrafo 60-.

Décimo cuarta.- El artículo XIX del concordato de 1953 no habla de bienes muebles o inmuebles, sino, simplemente, de un "patrimonio eclesiástico", constituido por un conjunto de bienes. Pero todo lo referente al patrimonio aludido en el artículo XIX ha quedado en letra muerta. Este artículo XIX.1 del concordato de 1953 nos dice: "La Iglesia y el Estado estudiarán, de común acuerdo, la creación de un adecuado patrimonio eclesiástico que asegure una congrua dotación del culto y del clero". Ese patrimonio, una vez constituido, se convertiría en un patrimonio eclesiástico. Pero lo cierto es que dicho patrimonio nunca se ha creado. Si se hubiese logrado se hubiera proporcionado a la iglesia su independencia económica. Pero al Estado, ciertamente, no le interesaba la creación de este patrimonio, ni desde el punto de vista económico, ni político, porque una independencia económica para la Iglesia, el cumplimiento de su misión hubiera sido mayor. Por ello, una de las dos cuestiones que el concordato de 1953 deja pendiente es la creación de un adecuado patrimonio eclesiástico, que asegure la dotación del culto y del clero -artículo XIX.1 del concordato de 1953-. Hubo tentativas para iniciar la creación de este patrimonio, por parte del Gobierno en el artículo 16 de la ley de 23 de diciembre de 1959, de presupuestos, con la conmutación de ciertos títulos, pertenecientes a diversas diócesis. Pero pronto se desistió de la idea; y hubo que seguir con el presupuesto del culto y clero, que se consiguió con el concordato de 1851, que se suprimió por la Segunda República, siendo restablecido por Franco por ley de 9 de diciembre de 1939; y ratificado en el artículo XIX del concordato de 1953, en tanto no se realizase la creación del mencionado patrimonio. La ley de 20 de julio, de 1957, asigna a los curas párrocos un sueldo idéntico al de la categoría de entrada de los maestros de primera enseñanza.

Décimo quinta.- El artículo XIX.2 del Concordato de 1953, a diferencia del vigente acuerdo sobre asuntos económicos de 1979, menciona la desamortización como título legitimador de tales indemnizaciones.

Décimo sexta.- En 1969 cuarenta y tres sacerdotes de la archidiócesis de Barcelona renunciaron al sueldo, que percibían del Estado. Con ello querían testimoniar la libertad de la Iglesia frente a los poderes públicos, y demostrar que el sacerdote no es un funcionario del culto. Estos sacerdotes, para su sostenimiento, trabajaban en diversos menesteres.

Décimo séptima.- El concordato de 1953 menciona diversas subvenciones, que el Estado se compromete a prestar a la Iglesia, con motivo de determinados actos o de determinadas situaciones concretas. Tales obligaciones son, realmente, una obligación a una promesa por parte del Estado.

Décimo octava.- Además del concordato de 1953 hay varios anteproyectos de concordato. Se habla de la existencia de incluso tres anteproyectos. Aunque oficialmente sólo se hablara de uno. El anteproyecto de 1970 sustituye el artículo XIX del concordato de 1953 por el XVII. En un segundo anteproyecto se manifiesta que el Estado contribuirá de una manera concreta, en un plazo determinado, a ayudar a la Iglesia a su autofinanciación, formando un patrimonio que le permita la independencia económica. El Estado, en reconocimiento a la labor a favor del bien común, que realiza la Iglesia, y siempre bajo la perspectiva de una independencia económica de ésta, entregará a la Conferencia Episcopal, durante cada uno de los años, comprendidos en un determinado período de tiempo, una cantidad global. Ni el plazo ni su cantidad vienen especificados en el texto. El tercer anteproyecto es el del departamento del Ministerio de Asuntos Exteriores o/y de Justicia. El artículo XIX de este anteproyecto Casaroli-

Garrigues regula la contribución económica del Estado a la Iglesia, aduciendo como título y fundamento de la misma "la consideración del hecho de que la religión católica es la de la nación española y como contribución a la obra de la Iglesia a favor del bien común". Desaparece cualquier referencia a la indemnización por la desamortización y se hace global la asignación anual, entregándola la Conferencia Episcopal española. En realidad, este anteproyecto, conocido como Casaroli-Garrigues, trataba de hacer una revisión, en su conjunto, del concordato de 1953, introduciendo sólo aquellas modificaciones imprescindibles o muy convenientes. Pero dicho texto se divulgaría, lo cual provocó una reacción negativa por parte de la Conferencia Episcopal y por parte de las autoridades estatales; lo que hizo que se abandonase definitivamente el intento de seguir negociándolo.

Décimo novena.- El primer acuerdo, que se celebraría, sería el acuerdo de 28 de julio, de 1976, firmado entre las partes con el compromiso, en una cláusula adicional secreta, de llegar a la total revisión dentro de un plazo fijo de dos años, expirado el cual, el concordato de 1953 perdería, completamente, su eficacia. Plazo, que se incumpliría, ya que pasarían casi dos años y medio antes de celebrar nuevos acuerdos.

Vigésima.- Los acuerdos de 1976 y 1979 forman un único cuerpo normativo, o, lo que es igual, un concordato. Efectivamente, el sistema de acuerdos parciales, que se inicia con el acuerdo de 1976, ya había sido utilizado entre 1940 y 1953, por el propio Estado español y la Santa Sede, si bien en un contexto diferente; en lugar de ir revisando, de forma paulatina, el concordato anterior de 1851, se firmaron sucesivos acuerdos sobre materias determinadas, mientras se llegaba a la redacción definitiva de un concordato nuevo; finalmente, tales acuerdos se subsumieron en el concordato de 1953. Este acuerdo de 1976 sólo trata dos temas concretos: el del nombramiento de obispos y el de la igualdad de todos los ciudadanos frente a la Administración de Justicia.

Vigésimo primera.- En el acuerdo de 1976 se renuncia al privilegio de presentación. Este derecho, que aparecía recogido en el concordato de 1953, lo habían poseído los Reyes de España desde muchos siglos antes.

Vigésimo segunda.- El artículo 16.3 de la Constitución de 1978 establece el deber de los poderes públicos de mantener relaciones de cooperación con las confesiones religiosas, sin imponer ni excluir que tales relaciones se concreten en acuerdos normativos. A su vez, el artículo 7 de la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, determina que tales relaciones de cooperación se podrán concretar en la estipulación de acuerdos o convenios del Estado con las confesiones. Por tanto, el engarce de los acuerdos con cualquier confesión –incluida la Iglesia católica– con el artículo 16.3 de la Constitución de 1978, pasa por el artículo 7 de la ley orgánica de libertad religiosa. Sin embargo, el artículo 16.3 de la Constitución, a diferencia de los artículos 7 y 8 de la Constitución italiana, no constitucionaliza el establecimiento de acuerdos.

Vigésimo tercera.- Para que pueda hablarse de discriminación es necesario que, habiéndose adoptado aquellas medidas en beneficio de una confesión determinada, las demás no pudieran acceder a esa misma posición o vieran desatendidos sus requerimientos a esos efectos. Se violaría así el derecho a la igualdad de trato en materias concernientes a la libertad religiosa.

Vigésimo cuarta.- La igualdad del artículo 14 de la Constitución española es una igualdad formal o relativa, en contraposición con la igualdad material y absoluta. La igualdad a

que el artículo 14 se refiere es la igualdad jurídica o igualdad ante la ley, y no comporta, necesariamente, una igualdad material o igualdad económica real y efectiva. La sentencia del Tribunal Constitucional 58/1986, de 14 de mayo, en su fundamento jurídico segundo, matiza que:

"El principio de igualdad ante la ley no excluye la posibilidad de un tratamiento desigual de supuestos análogos; es posible la diferenciación de trato, y esta posibilidad viene impuesta por la necesidad de coordinar las exigencias del principio de igualdad con las de otros principios también constitucionalmente protegidos, señaladamente, la independencia que debe presidir la función judicial, y la no existencia en nuestro ordenamiento de un rígido sistema de sujeción al precedente".

Por tanto, lo que se prohíbe es la discriminación, es decir, que la desigualdad de tratamiento legal sea injustificada por no ser razonable, según establece la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de noviembre de 1981. Sólo podrá decirse que se quiebra el principio de igualdad jurídica, cuando, dándose los requisitos previos de una igualdad de situaciones entre los sujetos afectados por la norma, se produzca un tratamiento diferenciado de los mismos en razón a su conducta arbitrario o no justificada, basada en razones ideológicas o de creencia, según la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de julio, de 1981 y 30 de marzo, de 1981.

Vigésimo quinta.- La mención expresa de la Iglesia católica fue el punto más discutido a lo largo de los debates parlamentarios, sobre el artículo 16 de la Constitución española de 1978. Hubo dos posturas enfrentadas: la favorable a la mención constitucional de la Iglesia católica y los contrarios a tal mención.

Vigésimo sexta.- Cuando se trata de sujetos colectivos, la igualdad religiosa debe entenderse en términos de proporcionalidad. La razón es que mientras los sujetos individuales son, en cuanto a su condición de ciudadanos españoles, absolutamente iguales. En cambio, en los sujetos colectivos, no es posible, ni siquiera considerándolos en igualdad. A pesar de que las distintas confesiones son diferentes, algún sector doctrinal se manifiesta receloso a acudir a la igualdad proporcional, quizá por entender que por esa vía se pueda desembocar en la consolidación de determinados tratamientos privilegiados. Para poder hablar de discriminación es necesario que, habiéndose adoptado determinadas medidas en beneficio de una confesión, las demás vieran desatendidos sus requerimientos en tal sentido, o, sencillamente, no pudieran desarrollar esas actividades, por haberse reservado su monopolio a la confesión mayoritaria.

Vigésimo séptima.- Aunque el derecho de la Iglesia a tener y administrar su patrimonio no está reconocido expresamente en la Constitución, sí está implícitamente reconocido en el artículo 16.1 de la misma, pues la actividad patrimonial es una manifestación necesaria de la libertad.

Vigésimo octava.- El artículo 16.3 de la Constitución española no recoge ninguna definición del concepto de cooperación pero no faltan los elementos necesarios en la Constitución española y en otras normas legales para perfilar su contenido. El principio de cooperación tiene su fundamento en el principio de libertad religiosa y en el de laicidad su límite. En realidad, cualquier discriminación en materia religiosa lesiona la laicidad. Efectivamente, el principio constitucional de cooperación con las iglesias es un principio subordinado a los de igualdad y libertad religiosa, de un lado, y al de laicidad de otro. También

debe buscarse la relación del artículo 16.3 de la Constitución con el 9.2 de la misma, para proteger el derecho fundamental de los ciudadanos a la libertad religiosa. Aunque se constitucionaliza el principio de cooperación no se constitucionaliza ninguna forma concreta de cooperación; aunque los acuerdos son formas posibles, pero no son formas establecidas por la Constitución española, de 1978; por ello el artículo 7 del proyecto de ley orgánica de libertad religiosa en vez de decir que el Estado "deberá establecer Acuerdos o Convenios [...]", emplea un tenor facultativo "establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios [...]", pues la Constitución establece el principio de cooperación, pero no las formas o modalidades de plasmación del mismo.

Vigésimo novena.- La Constitución española ni prohíbe ni constitucionaliza la aportación financiera del Estado a las confesiones; tan sólo se constitucionaliza la obligación de cooperar con las confesiones, sin que se explique en qué deba consistir esa cooperación que, por tanto, necesariamente, tiene que ser financiera. Ciertamente, la Constitución impone un deber de cooperación genérico a los poderes públicos para con las confesiones, sin que, expresamente, se les imponga la obligación de colaborar económicamente a su sostenimiento. Ni siquiera de la ley orgánica de libertad religiosa, de 1980, cabe deducir que la cooperación tenga que ser, necesariamente, económica, ni que tenga que ser llevada a cabo mediante un acuerdo con las mismas, ni que quede, por tanto, reservado sólo a las confesiones, que hayan alcanzado "notorio arraigo" en España. Las aportaciones indirectas del Estado en forma de beneficios fiscales, en principio, no chocan con el principio de laicidad; por el contrario, pueden considerarse como exigencias obligadas del principio de cooperación. Sin ñembargo, el sistema de dotación económica directa del Estado a las confesiones es radicalmente incompatible con el principio de laicidad del Estado. Es congruente con un Estado confesional o pluriconfesional, pero no con uno laico.

Trigésima.- La exposición de motivos del acuerdo sobre asuntos económicos establece que "el Estado no puede [...] prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado". La misma jerarquía de la Iglesia católica no alude a las desamortizaciones, como fundamento de la ayuda económica estatal en el documento de la Conferencia Episcopal española, sobre "La Iglesia y la Comunidad política", de 23 de enero, de 1973. El fundamento de la financiación estatal a las confesiones se encuentra en el artículo 9.2 de la Constitución española de 1978, que establece un principio genérico, que luego el artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978, especifica respecto de la materia religiosa. Efectivamente, una interpretación conjunta del artículo 16.3 de la Constitución española, de 1978, y los artículos 1.1 y 9.2 de la misma, nos lleva a la conclusión de que la cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas perseguirá, como objetivo fundamental, la promoción por parte de los poderes públicos de la libertad e igualdad de los individuos y de los grupos sociales -confesiones religiosas-, en que se integran, y la participación en las decisiones políticas, que les afecten. El preámbulo del acuerdo sobre asuntos económicos de 1979, al señalar que "el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado", se refiere a las obligaciones económicas contraídas con la Iglesia a raíz de la desamortización de Mendizábal, a las que hacen referencia nuestras Constituciones desde la de 1837 y nuestros concordatos de 1851 y 1953 -artículo 11 de la Constitución de 1837; artículo 11 de la de 1845; artículo 14 de la no promulgada de 1856; artículo 21 de la Constitución de 1869; artículo 11 de la Constitución de 1876; y artículos 31 y 41 del concordato de 1851 y el concordato de 1953-. La introducción al acuerdo económico guarda silencio sobre cuáles sean los títulos, que fundamentan la aportación económica a la Iglesia. El concordato de 1953, en su

artículo XIX.2, expresamente indicaba dos títulos o motivos, que justificaban la dotación del Estado a la Iglesia: "a título de indemnización por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos y como contribución a la obra de la Iglesia a favor de la Nación". El acuerdo sobre asuntos económicos no se refiere a cuáles han sido los títulos de dotación hasta ahora; pero sí los decía, taxativamente, el concordato de 1953 en su artículo XIX.2: la indemnización por las pasadas desamortizaciones y la contribución de la Iglesia a favor de la Nación.

Trigésima primera.- Hay que distinguir cuatro períodos en el acuerdo sobre asuntos económicos. Aunque algunos autores lo han dividido en tres, e incluso en dos, por la propia confusión del texto: el período primero es el de dotación de presupuestos generales y abarca 1980-1981 y 1982. El segundo período es el de aplicación simultánea de dotación presupuestaria y porcentaje sobre rendimiento de la imposición y debería haber abarcado 1983-1984 y 1985. El tercer período es sólo de porcentaje sobre rendimiento de la imposición, y debería haber abarcado desde 1986 en adelante *sine die*. El cuarto período es en el que la Iglesia busca los recursos por sí misma.

- a) Primera fase. Sistema de dotación estatal. Tradicionalmente la Iglesia no ha seguido ningún sistema de contabilidad. Cada Iglesia llevaba la suya, sin rendirle cuentas a nadie. Hoy día este sistema de reino de taifas ha desaparecido y la gestión económica es a nivel nacional, para evitar dispersión y garantizar que las parroquias más pobres sean ayudadas por las más ricas. La financiación estatal de la Iglesia católica en España tiene su origen en la Constitución progresista, de 18 de junio de 1837, que en su artículo 11 establecía: "La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles". El Código de Derecho Canónico de 1917, se basaba, por supuesto, en el sistema benefical. Y ello a pesar de que con la desamortización y la supresión de los diezmos la economía de la Iglesia quedó aminorada, aunque ya no disponía de bienes. Pero con la confesionalidad se va a perpetuar el sistema benefical, ya que la dotación del Estado viene a ser como la renta de los beneficios. Esta primera fase será una continuación del sistema hasta entonces vigente, aunque con el matiz de que el Estado, a petición de la XXVII asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal española, celebrada en noviembre de 1977, en vez de entregar a cada diócesis la cantidad que le correspondía, según el número de piezas eclesiásticas, la cantidad se va a hacer de una forma global y única, para ser distribuidas equitativamente entre todas las diócesis, de manera que "las diócesis más ricas puedan ayudar a las más pobres". El real decreto de 27 de agosto de 1977 establece que a partir del 1 de enero de 1978 se sustituía el sistema de dotación estatal de "piezas eclesiásticas" por el de dotación global a la Conferencia Episcopal Española. Este primer período tendrá una duración mínima de "tres ejercicios completos" -artículo II.2 del acuerdo sobre asuntos económicos-. La cantidad global y única deberá actualizarse cada año, a fin de que no deje de ser adecuada, según el artículo II.4 del convenio sobre asuntos económicos, de 1979. El artículo II.4 del acuerdo económico dice que la dotación "será actualizada anualmente".
- b) Segunda fase. Aplicación simultánea de dotación en presupuesto y porcentaje sobre rendimiento de la imposición. Participa tanto de caracteres de la dotación global y única como del sistema de autofinanciación. Esta segunda fase comenzará en 1988, con la ley 33/1987, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, para 1988, aunque podría haber tenido su comienzo a partir del 1 de enero de 1983. Por su

carácter de transitoriedad de tres años debería finalizar en 1990. El apartado primero de la disposición adicional quinta de la ley 33/1987 destina, a partir de 1988, un porcentaje del rendimiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas a fines religiosos y otros fines de interés social. Este porcentaje es el 0'5239 por ciento. Porcentaje que ha sido establecido de forma unilateral por el Estado en la ley 33/1987, y que había sido calculado en base a obtener unos rendimientos equivalentes, a los que recibía la Iglesia por el sistema anterior de dotación presupuestaria para 1988. Esta segunda etapa se prolongará hasta 1991, etapa en la que la asignación presupuestaria debe producir, por sí sola, recursos de cuantía equivalente, sin la cobertura de la dotación presupuestaria, lo que obliga a actualizar el porcentaje, para asegurar a la Iglesia recursos similares, a los que hubiera recibido por otros procedimientos. Este impuesto no es un "impuesto religioso" ni un "impuesto eclesiástico". Es un impuesto estatal ordinario, que todos los súbditos han de pagar. No es un impuesto religioso, porque no es un impuesto establecido por motivos religiosos; sino un impuesto establecido para todos los súbditos, y en concreto el impuesto sobre la renta de las personas físicas. No es un impuesto religioso porque éste lo pagan no sólo los que profesan una religión y por razón de la religión, sino que lo pagan todos. En cambio, en el sistema de asignación tributaria, si alguien no declara su voluntad de destino de este impuesto o declara que no quiere que se destine a un fin religioso, el Estado cobrará el impuesto, pero lo destinará a otros fines -artículo II.2 del acuerdo económico-. La asignación tributaria no es un impuesto nuevo ni un impuesto establecido para determinadas personas, sino que es un impuesto para todos los súbditos. También hay que tener presente que la disposición adicional quinta de la ley de presupuestos generales del Estado, para 1988, no altera ninguno de los elementos, ya sean estructurales o funcionales del tributo referido. Ni crea una figura nueva, sino que es un supuesto de los previstos en el artículo 27 de la ley general tributaria, de 1963, que permite la afectación de una parte de la recaudación del "impuesto estatal", a financiar un determinado gasto del Estado español, por lo que no puede ser tildado de inconstitucional, ya que ha sido establecido por la ley de presupuestos generales del Estado. No es contrario al principio de igualdad religiosa la "asignación tributaria", ya que es compatible con el artículo 16.3 de la Constitución española de 1978, en la medida en que no impide que el Estado pueda concertar acuerdos económicos o financieros posibles con otras confesiones religiosas, distintas de la católica. También se ha considerado que la asignación tributaria es contraria al artículo 16.2 de la Constitución española de 1978, que establece que "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia". Pero ello no es cierto, ya que a nadie se le obliga, a declarar sobre cuestiones religiosas personales, al ser tal declaración voluntaria.

La jerarquía eclesiástica ha manifestado su deseo de que el tanto por ciento sea elevado del 0'5239 a uno por ciento. El artículo 1 del real decreto 825/1988, de 15 de julio, por el que se regulan los fines de interés social de la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas nos da un concepto de fines de interés social. En el supuesto de que la casilla quedara en blanco ese 0'5239 por ciento engrosaría, sin más, las restantes partidas de los presupuestos generales del Estado. Por ello, no cabe la abstención, ya que: "En ausencia de tal declaración, la cantidad correspondiente será destinada a otra finalidad", según establece el último párrafo del artículo II.2.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana, en su sentencia de 22 de abril de 1990 resuelve un recurso, presentado por unos fieles de la Iglesia bautista evangélica, al efectuar la declaración de renta del ejercicio de 1988. En el mismo se niegan a cumplimentar la casilla, correspondiente al porcentaje, a entregar a la Iglesia católica, o a destinar a otros fines de interés social, y, por ello, presentan un recurso contencioso-administrativo por la vía de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, por entender que se infringen los derechos fundamentales de igualdad y de no necesidad de declarar la condición o creencia religiosa, previstos en el artículo 14 y 16 de la Constitución, pues tal posibilidad no se otorga, en los mismos términos a la Iglesia bautista evangélica de Valencia. Además, manifiestan que, al rellenar la casilla, obligatoriamente se les costra a declarar sobre sus creencias religiosas. La Administración demandada, por el contrario, sostiene que, en realidad, lo que se plantea no es sino la aplicación del artículo 31.1 de la Constitución, en cuanto establece el deber de todos, de sostener las cargas públicas, de acuerdo con un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad.

Si la declaración es obligatoria, pero resulta negativa, el contribuyente deberá marcar también la casilla correspondiente, si lo desea, pues Hacienda le ha retenido ya una cantidad que no le va a devolver, de la cual el 0'5239% se asignará a la Iglesia católica.

No parece que el que la asignación tributaria sólo se contemple para la Iglesia católica viole lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución, porque la asignación tributaria se encuentra dentro de la cooperación del Estado con la Iglesia católica, recogida en el artículo 16.3 de la Constitución. La igualdad sería conculcada si, en el acuerdo económico, se hubiera excluido la posibilidad, de que el Estado concertase en un futuro acuerdos de carácter económico con otras confesiones, distintas de la católica.

La asignación tributaria no obliga a declarar sobre la confesión, que se profesa, sino que sólo solicita del contribuyente, si entrega o no a la Iglesia católica una parte de un impuesto, que, de todas formas, debe pagar. Tampoco prohíbe la misma Constitución que nadie voluntariamente declare sobre su confesión o sobre su ideología.

Entre las ventajas de la asignación tributaria está que la misma pone en relación más directa y libre al contribuyente con las actividades a las que se va a destinar el 0'5239 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es, sin duda, un sistema más democrático, más justo, más moderno y más respetuoso con la libertad religiosa de los ciudadanos. Además de potenciar el derecho de libertad religiosa, al darle al contribuyente la opción de destinar su propia cuota impositiva. Esta etapa de la asignación tributaria tiene la ventaja de educar y concienciar a los creyentes. En realidad, la asignación tributaria es la autofinanciación de la Iglesia a través de la acción recaudadora del Estado.

- c) Tercera fase. Asignación tributaria exclusivamente. Esta tercera fase comienza en 1991 y es introducida de forma unilateral por el Estado en la ley de presupuestos generales del Estado para 1991. Manteniéndose invariable hasta hoy día. Si bien en la ley de presupuestos generales de 1994 se ha incluido en la disposición adicional tercera un último apartado en el que se dice algo sorprendente: "Se elevan a definitivas las cantidades entregadas a cuenta en los ejercicios 1991, 1992 y 1993". Esto no quiere decir nada más que se ha prorrogado el sistema mixto de coexistencia

entre la asignación tributaria y dotación presupuestaria, cuando el acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, preveía de forma expresa la duración de tres años para ese período. Esta tercera fase no tiene plazo alguno para su conclusión. Aunque una vez que se alcance la autofinanciación se dará por concluida. Por ello su única limitación es la que establece el artículo II.5 del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, por el que la Iglesia "declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes". Añade que, "cuando fuera conseguido este propósito", se irá a otro acuerdo, que sustituirá el contenido del presente. En la ley 49/1998, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado, para 1999, se mantiene la misma regulación que en años anteriores, por lo que el avance en este aspecto es nimio y, posiblemente, tarde décadas en lograrse la tan deseada autofinanciación.

- d) Cuarta fase. La autofinanciación. El artículo II.5 del acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, nos dice:

"La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado".

La autofinanciación conlleva el compromiso de la Iglesia católica de renunciar a la asignación tributaria y a la dotación estatal. Si bien no se establece un plazo fijo en el acuerdo sobre asuntos económicos para llegar a la autofinanciación, se ha marcado la meta de la autofinanciación como ideal a conseguir. Este artículo II.5 del acuerdo económico, de 1979, permite que se sustituya la asignación tributaria por "otros campos y formas de colaboración". Para algunos autores esta autofinanciación es una utopía y por eso no se establece ninguna fecha fija para la misma. Pero lo cierto es que es un objetivo realizable. De hecho los objetivos alcanzados son un paso hacia delante. Una vez que se alcance la autofinanciación las aportaciones del Estado a la Iglesia ha de inspirarse en las obras docentes, asistenciales, de formación o promoción humanas, que reviertan en beneficio de la sociedad española. No son los principios religiosos, sino las obras sociales de la Iglesia católica, las que justificarán la colaboración del Estado con la Iglesia. Este ideal de la autofinanciación ya aparecía recogido en el artículo XIX.1 del concordato de 1953, que preveía la creación de un patrimonio eclesiástico para la dotación del clero; aunque, finalmente, no llegaría a realizarse.

En la Iglesia católica también han surgido voces a favor de la autofinanciación. Es el caso del sínodo de Tortosa. Igualmente en el arzobispado de Pamplona, o en la diócesis de Canarias o en el arzobispado de Granada y en el sínodo de Toledo. En la archidiócesis de Madrid se aconseja entregar entre el uno y el cinco por ciento del salario neto a la Iglesia, preferentemente a través de suscripciones bancarias periódicas. En la diócesis de Murcia y en las catalanas también se han adoptado medidas similares.

El principal aspecto para reorganizar la economía de las diócesis es el de la educación de los fieles, en el sentido de hacerles partícipes y cooperar en la administración de los bienes eclesiásticos.

El canon 1274.1 del Código de Derecho Canónico, de 1983, prevé que en las diócesis se cree un "instituto especial", que recoja los bienes y obligaciones con la finalidad de sustentar a los sacerdotes, que prestan servicio a favor de la diócesis, a no ser que se haya establecido otro modo de cumplir esta exigencia. La creación de una "masa común" es una de los avances más importantes, en la medida en que se desarticula el sistema benefical, constituyéndose una administración unificada diocesana, aunque no de un único patrimonio eclesiástico en común. Efectivamente, el sistema económico de la Iglesia católica, incluso tras la promulgación del Código de Derecho Canónico, de 1917, se ha venido fundamentando en el sistema benefical. Sistema, que descansa en principios feudales. Sería con el Concilio Vaticano II cuando se abordó la necesidad de terminar con dicho sistema, o, al menos reformarlo profundamente. Su resultado sería el nuevo Código de Derecho Canónico, de 1983, principalmente en sus cánones 1272 y 1274. El canon 1274 del Código de Derecho Canónico, de 1983, posibilita que las diócesis constituyan unas "masas o fondos comunes de bienes", para cumplir con sus obligaciones económicas. Las "masas o fondos comunes" son los siguientes: el instituto para la sustentación de los clérigos -párrafo 1 del canon 1274-; el instituto para la previsión social de los clérigos -párrafo 2- y la "masa o fondo común diocesano" -párrafo 3-.

Este canon 1274 del Código de Derecho Canónico, de 1983, tiene la ingente tarea de sustituir el obsoleto y periclitado sistema benefical por otro más acorde con las actuales circunstancias sociales y eclesiales. En un primer momento se creó la "caja diocesana de compensación del clero" para la denominación de estos fondos o masas comunes, pretendiendo lograr una remuneración equitativa entre los sacerdotes. Posteriormente, sin embargo, se creó el "fondo común diocesano": se crea una única masa con todos los bienes diocesanos para atender todas las necesidades económicas diocesanas, y no sólo la retribución de los sacerdotes.

Entre las instituciones existentes, que pueden hacer posible la autofinanciación está el "fondo común interdiocesano", que está constituido por aquellos bienes, valores, derechos y cualesquiera aportaciones, entregadas a la Iglesia en España, o a la Conferencia Episcopal Española para el sostenimiento y actividades de las diócesis, de otras entidades, dependientes de la Iglesia, o de la misma Conferencia Episcopal, o para atender a las necesidades generales de la Iglesia en España, cuya distribución debe ser determinada por la propia Conferencia Episcopal Española. La constitución y distribución del "fondo común interdiocesano" se realiza en base a los siguientes criterios: la dotación proveniente de la asignación tributaria, los rendimientos del propio fondo y las aportaciones de las diócesis.

Los fondos comunes son el cauce más importante para alcanzar la autofinanciación, permitiendo disminuir progresivamente, la dependencia respecto del Estado, de la propia diócesis.

Los "consejos de asuntos económicos" son órganos de participación de los fieles en la gestión económica de la diócesis y de la parroquia. Se regulan en el canon 492 del Código de Derecho Canónico de 1983. Entre sus funciones están distribuir ayudas a las parroquias; decidir sobre la retribución de los sacerdotes; hacer inventario de los bienes de la diócesis; informar a los fieles de la economía en la diócesis. Con el "consejo diocesano de asuntos económicos" se ha hecho posible la participación de los laicos en la diócesis, tal y como prevé el canon 129 del Código de Derecho Canónico, de 1983.

Otra institución, a nivel parroquial, es el "consejo parroquial de administración".

Las cajas de compensación son un intento de hacer un análisis comunitario de los bienes que posee la Iglesia, potenciando la acción comunitaria. La finalidad de la caja de compensación es la comunicación de bienes, para alcanzar la autofinanciación de la Iglesia católica.

Esta gestión del patrimonio de la Iglesia ha de ser comunitaria y diáfana. En realidad, lo que impide una gestión económica unitaria es la existencia de patrimonios desmembrados. Uno de los avances más importantes ha sido la administración por los seglares de los bienes eclesiásticos en todos los niveles. Sólo se podrá lograr la financiación de la Iglesia si cada una de las entidades es capaz de autofinanciarse. Además, debe dárseles a conocer a los fieles la situación económica de la Iglesia y hacerles saber que el sistema histórico normal de financiación de la Iglesia ha sido la autofinanciación, y que, en España, el sistema de dotación estatal representa sólo un breve paréntesis en la Historia de la Iglesia. Además, se debe reestructurar la economía de la Iglesia católica, y para ello deberá hacerse un inventario de las necesidades pastorales.

Los aranceles son una aportación no voluntaria, y, a veces, discriminatoria, que se da con motivo de un servicio religioso. Por ello, ha sido muy criticada.

Los tributos o impuestos consisten en la prestación obligatoria y predeterminada a los fieles independientemente de cualquier servicio prestado a las mismas. Las tasas, en cambio, se cobran a los fieles por un determinado servicio eclesiástico - administración de sacramentos, etcétera-.

Las colectas se regulan en el canon 1262 del Código de Derecho Canónico, de 1983, y establece que "presten ayuda a la Iglesia los fieles mediante las subvenciones que se les pidan y según las normas establecidas por la Conferencia Episcopal". El artículo I del acuerdo económico, de 1970, se refiere a las mismas: "La Iglesia católica puede libremente recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosnas y oblaciones".

Las oblaciones son la entrega de bienes -generalmente en forma de dinero-, que se ofrece a la Iglesia, ya por propia iniciativa -oblaciones espontáneas-, ya a petición de la competente autoridad -colectas o cuestaciones-.

Por todo ello, debe concluirse, rotundamente, que la Iglesia católica "y las demás confesiones religiosas" deben autofinanciarse, y ello a pesar de que la legislación española en este sentido es muy ambigua y deja bastante que desear; pero únicamente, de este modo, podrá vivirse en una libertad en igualdad y en un Estado laico, que haga posible la convivencia entre todos.

## BIBLIOGRAFÍA

### I. MONOGRAFÍAS.

#### SIN AUTOR

- *Colección de los concordatos y demás convenios celebrados después del Concilio Tridentino entre los Reyes de España y la Santa Sede, ilustrada con notas y observaciones y precedida de una introducción histórico-canónica sobre la materia ordenada para servir de texto en las aulas de Derecho eclesiástico, especialmente en las de 5.º año de jurisprudencia: por un catedrático que ha sido de esta asignatura* (Madrid 1848).
- *Colección legislativa de la deamortización civil y eclesiástica, formada por la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado, y publicada en virtud de la autorización concedida por el Regente del Reino en 1.º de enero de 1870. Comprende las leyes, decretos, órdenes é instrucciones dadas sobre esta materia desde 1.º de mayo de 1855 hasta fin de marzo de 1870 con un apéndice que contiene varias disposiciones de fechas anteriores* (Madrid 1870).
- *Concordato celebrado entre S.S. Pío IX y S.M. la Reina Doña Isabel II en 16 de marzo de 1851. Añadido con todas las reales órdenes, decretos, circulares y aclaraciones que se han espedido concernientes al mismo* (Tarazona 1858).
- *Exposición dirigida á S.M. el 25 de febrero de 1836 por la Real Junta Eclesiástica encargada de preparar el arreglo del clero; y trabajos hechos por la misma Junta con este objeto* (Madrid 1836).
- *Iglesias y situación socioeconómica en la España de los 80 (material)* (Madrid 1981).

#### AA.VV.

- AA.VV., *Actas del III Symposium Historia de la Administración* (Madrid 1974).
- AA.VV., *Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada a las Ciencias Históricas*, 5 vols. (Santiago, 1975).
- AA.VV., *Centenario de la Ley del Notariado. Sección Tercera. Estudios jurídicos varios*. Vol. IV (Madrid 1963).

- AA.VV., *Comentario a la Constitución. La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional* (Madrid 1993).
- AA.VV., *Constitución y relaciones Iglesia-Estado en la actualidad* (Salamanca 1978).
- AA.VV., *Derecho Eclesiástico del Estado español* (Pamplona 1983).
- AA.VV., *Desamortización y Hacienda Pública*, 2 vols. (Madrid 1986).
- AA.VV., *Dimensiones jurídicas del factor religioso. Estudio en homenaje al Profesor López Alarcón* (Murcia 1987).
- AA.VV., *El desarrollo de la Constitución española de 1978* (Zaragoza 1982).
- AA.VV., *El Estado y la Iglesia en España* (Madrid 1972).
- AA.VV., *El fenómeno religioso en España. Aspectos jurídico políticos* (Madrid 1972).
- AA.VV., *El hecho religioso en la nueva Constitución española* (Salamanca 1979).
- AA.VV., *El principio de igualdad en la Constitución española*, 2 vols. (Madrid 1991).
- AA.VV., *El régimen tributario de la Iglesia Católica en España* (Madrid 1985).
- AA.VV., *Estadísticas de la Iglesia católica en España 1995* (Madrid 1995).
- AA.VV., *Estudios de Ciencia Política y Sociología. Homenaje al Profesor Carlos Ollero* (Madrid 1972).
- AA.VV., *Études d'histoire du Droit Canonique (dédiées a Gabriel Le Bas)*, Tome I (Sirey 1995).
- AA.VV., *Homenaje al Dr. D. Juan Reglà Campistol* (Valencia 1975).
- AA.VV., *Homenaje al Profesor Giménez Fernández. I* (Sevilla 1967).
- AA.VV., *Iglesia, sociedad y política en la España contemporánea* (Zamora 1983).
- AA.VV., *Iglesia y comunidad política* (Salamanca 1974).
- AA.VV., *Iglesia y sociedad en España: 1939/1975* (Madrid 1977).
- AA.VV., *Il Congreso español de Historia del Arte. Valladolid, 11 al 14 de octubre de 1978. Valladolid, 1978. El arte del siglo XIX. Vol. I* (Valladolid 1978).
- AA.VV., *La Costituzione spagnola nel trentennale della Costituzione italiana, 26-27 maggio 1978 Bologna Archiginnasio Aula "Stabat Mater"* (Bologna 1978).

- AA.VV., *La Chiesa e la Comunità Politica. Dai concordata alle nuove forme di intesa* (Roma 1979).
- AA.VV., *La Curia Episcopal. Reforma y actualización* (Salamanca 1979).
- AA.VV., *Laicidad, cooperación y sistema de acuerdos. Actas del VI Congreso interuniversitario de Derecho eclesiástico para estudiantes* (Madrid 1997).
- AA.VV., *La institución concordataria en la actualidad. Trabajos de la XIII Semana de Derecho Canónico* (Salamanca 1971).
- AA.VV., *La restauración monárquica de 1875 y la España de la restauración* (Madrid 1978).
- AA.VV., *Ley Orgánica. Libertad Religiosa. Trabajos parlamentarios* (Madrid 1981).
- AA.VV., *Leyes constitucionales*, 2 vols. (Madrid 1963).
- AA.VV., *Miscellanea W.J. Ganshof van der Meersch. Studia ab discipulis amicisque in honores egregii professoris edita*. Tome Troisième (Paris 1972).
- AA.VV., *Nuevo Derecho Canónico. Manual universitario* (Madrid 1983).
- AA.VV., *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica. Atti del II Convegno nazionale di Diritto eclesiástico, Siena, 27-29 novembre 1980* (Milano 1981).
- AA.VV., *Repertorio bibliográfico de Derecho Eclesiástico español (1953-1993)* (Almería 1995).
- AA.VV., *Sintesi di Diritto Eclesiástico per concorsi ed esami* (Milano 1989).
- AA.VV., *Situación actual de la Iglesia en España. Instituto Nacional de Enseñanza Media "Ntra. Sra. de la Victoria", Málaga, 14 de mayo de 1971* (Málaga 1971).
- AA.VV., *Textos constitucionales*, 2 vols. (Barcelona, 1983).
- AA.VV., *Textos, jurisprudencia y formularios de Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho matrimonial canónico* (Madrid 1991).
- AA.VV., *Tratado de Derecho Eclesiástico* (Pamplona, 1994).

## A

- AGUIAR DE LUQUE, L., y BLANCO CANALES, R., *Constitución española 1978-1988*, 3 vols. (Madrid 1988).
- ALBISETTI, A., *Giurisprudenza costituzionale e diritto eclesiástico* (Milano 1983).
- ALDEA VAQUERO, Q., MARÍN MARTÍNEZ, T., y VIVES GATEELL, J., (dirs.), *Diccionario de Historia Eclesiástica de España* (Madrid 1972-1975).

- ALONSO, S., *El pensamiento regalista de Francisco Salgado de Somoza (1595-1665). Contribución a la Historia del Regalismo español* (Salamanca 1973).
- ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, J.A., *Derecho patrimonial de los religiosos. Cuestiones civiles* (Pamplona 1974).
- ÁLVAREZ CONDE, E., (ed.), *Diez años de régimen constitucional* (Madrid 1989).
- ÁLVAREZ CORTINA, A.C., *El Derecho Eclesiástico español en la jurisprudencia postconstitucional (1978-1990)* (Madrid 1991).
- ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, L., *La revolución de 1868 ante la opinión pública alemana. Tomo I. De la crisis de julio a la disolución de las Juntas revolucionarias* (Madrid 1976).
- ÁLVAREZ VÁZQUEZ, J.A., *Los diezmos en Zamora (1500-1840)* (Zamora 1984).
- ÁLVAREZ Y GÓMEZ, M., *Manual de capellanías y pías memorias* (Vitoria 1903).
- ALZAGA VILLAAMIL, O., *Comentario sistemático a la Constitución española de 1978* (Madrid 1978).
- AMORÓS AZPILICUETA, J.J., *La libertad religiosa en la Constitución española de 1978* (Madrid 1984).
- ANÉS, G., *Las crisis agrarias en la España moderna* (Madrid 1970).
- ANGUITA GONZÁLEZ, J., *La desamortización eclesiástica en la ciudad de Córdoba (1836-1845)* (Córdoba 1984).
- APARICI Y SORIANO, R., *Manual novísimo de la desamortización civil y eclesiástica establecida por las Leyes de 1.º de mayo de 1855, 11 de julio de 1856 y disposiciones posteriores hasta el día, ó sea prontuario ordenado de cuantas disposiciones legales existen vigentes sobre la indicada materia; organización y atribuciones de los centros directivos; facultades y responsabilidad de los funcionarios que intervienen en este ramo de la Administración Pública* (Madrid 1868).
- ARENAL, C., *La igualdad social y política y sus relaciones con la libertad* (Madrid 1868).
- ARGÜELLES, A., *La reforma constitucional de Cádiz* (Madrid 1970).
- ARTOLA, M., *Antiguo régimen y revolución liberal* (Barcelona 1979).
- (dir.) *Enciclopedia de Historia de España. III* (Barcelona 1988).
- *La burguesía revolucionaria (1808-1874)* (Madrid 1978).
- *La España del Antiguo Régimen. Estudios históricos editados por Miguel Artola* (Salamanca 1986).

- *La Hacienda del Antiguo Régimen* (Madrid 1982).
- *La Hacienda del siglo XIX. Progresistas y moderados* (Madrid 1986).
- (y otros) *El latifundio. Propiedad y explotación, ss. XVIII-XX* (Madrid 1978).
- *La burguesía revolucionaria (1808-1974)* (Madrid 1981).
- *La España del Antiguo Régimen* (Salamanca 1971).
- *La Hacienda del Antiguo Régimen* (Madrid 1982).
- *La Hacienda del siglo XIX* (Madrid 1986).
- *Los orígenes de la España contemporánea. I* (Madrid 1975).
- ARZA ARTEAGA, A., *El nuevo sistema de dotación económica del Estado a la Iglesia* (Salamanca 1988).
- *Privilegios económicos de la Iglesia española. Los bienes eclesiásticos en el Concordato español de 1953* (Bilbao 1973).
- ATTARD, E., *El Constitucionalismo español: 1808-1978. Ensayo histórico-jurídico* (Valencia 1988).
- AUGUSTO, Cl., *De la paz entre la Iglesia y los Estados* (Madrid 1844) -tr. por el Conde de Horrer-.
- AZNAR GIL, F.R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia* (Salamanca 1993).

## B

- BAJO ÁLVAREZ, M<sup>a</sup>.F., *La formación del poder económico y social de la Iglesia durante los ss. IV-V en el occidente del Imperio* (Universidad de Oviedo 1984).
- BALDASSI, A., y VERITTI, L., *Il beneficio parrocchiale e la sua amministrazione. Nozioni ad uso dei parroci italiani* (Torino-Roma 1930).
- BARBASTRO GIL, L., *El clero valenciano en el Trienio liberal (1820-1823). Esplendor y ocaso del estamento eclesiástico* (Alicante 1985).
- BARBERINI, G., *Raccolta di fonti normative di Diritto ecclesiastico* (Torino 1995).
- BARILLARO, D., *Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica* (Milano 1968).

- *Società civile e società religiosa. Dalla riforma alla restaurazione* (Milano 1978).
- BARRUEL, A., *Historia del clero en tiempo de la Revolución francesa* (Vich 1871) -tr. por R. Strauch y Vidal-.
- BASTERRA MONTSERRAT, D., *La libertad religiosa en España y su tutela jurídica* (Madrid 1983).
- BILBAO DÍEZ, J.C., *La desamortización de Pascual Madoz en la ciudad de Logroño y su partido judicial (1855-1856). Aportación al estudio de la propiedad en la zona a mediados del siglo XIX* (Logroño 1983).
- BLANCO RUIZ, J.F., *El protectorado de fundaciones en el Real Decreto e Instrucción de 14 de marzo de 1899* (Madrid 1987).
- BLASCO IBÁÑEZ, V., *Cantaclaro. Comentarios al Concordato con la semblanza del autor* (Valencia 1909).
- BLET, P., *Histoire de la Représentation diplomatique du Saint Siège des origines à l'aube du XIXe siècles* (Città del Vaticano 1982).
- BOLOGNINI, F., *I rapporti tra Stato e confessioni religiose nell'art. 8 della Costituzione* (Milano 1981).
- *Lineamenti di Diritto Canonico* (Torino 1992).
- BRAVO TUDELA, A., *El Derecho vigente sobre capellanías colativas de sangre, beneficios y legados píos, patronatos laicales y fundaciones de la propia índole comentados, concordato y formulado por D. Antonio Bravo y Tudela* (Madrid 1879).
- BRENAN, G., *El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil* (Barcelona 1985).
- BRINES BLASCO, J., *La desamortización eclesiástica en el País Valenciano durante el trienio constitucional* (Valencia 1978).
- BUENO MONREAL, J.M<sup>a</sup>., *Principios fundamentales de Derecho Público de la Iglesia católica* (Madrid 1945).

## C

- CABRILLANA CIÉZAR, N., *La desamortización de Madoz en la provincia de Málaga: ventas judiciales* (Madrid 1990).
- CALVO, J., *Concordato y acuerdos parciales: política y derecho* (Pamplona 1977).
- CALLAHAN, W.J., *Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874* (Madrid 1989).

- CAMARASA CARRILLO, J., *La personalidad jurídica de las Entidades religiosas en España* (Madrid 1995).
- CAMPOMAR FORNIELES, M.M., *La cuestión religiosa en la Restauración. Historia de los Heterodoxos españoles* (Santander 1984).
- CANGA ARGÜELLES, J., *El Gobierno español en sus relaciones con la Santa Sede. Colección de los documentos oficiales que se han publicado antes y después del rompimiento de las relaciones entre España y Roma, precedida del texto literal del último Concordato y de varios artículos escritos sobre estas materias en la Regeneración* por D. José Canga Argüelles (Madrid 1856).
  - *La Segunda Base. Reseña histórica y documentos relativos a la base religiosa aprobada por las Cortes Constituyentes de 1854* (Madrid 1855).
- CANO BUESO, J., (ed.), *Materiales para el estudio de la Constitución de 1812* (Madrid 1989).
- CANO MATA, A., *El principio de igualdad en la doctrina del Tribunal Constitucional* (Madrid 1983).
- CÁNOVAS SÁNCHEZ, F., *El moderantismo y la Constitución española de 1845* (Madrid 1985).
- CAPELLO GARCÍA, M<sup>a</sup>.L., *Contribución a la problemática de la desamortización eclesiástica en la provincia de Huelva (1836-1844)* (Madrid 1980).
- CAPUTO, G., *Il problema Della qualificazione giuridica dello Statu in materia religiosa* (Milano 1967).
- CÁRCEL ORTÍ, V., *La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939)* (Madrid 1990).
  - *Política eclesial de los gobiernos liberales españoles (1830-1840)* (Pamplona, 1975).
- CARR, R., (ed.), *España 1808-1939* (Barcelona 1979).
  - *Estudios sobre la República y la Guerra civil española* (Barcelona 1974).
- CARRIÓN, P., *La reforma agraria de la Segunda República y la situación actual de la agricultura española* (Barcelona, 1973).
- CASANOVA AGUILAR, I., *Aproximación a la Constitución nonata de 1856. Presentación general y primera publicación del texto íntegro* (Madrid 1985).
- CASORIA, G., *Concordati e ordinamento giuridico internazionale* (Roma 1953).

- CASTRILLEJO IBÁÑEZ, F.Mª., *La desamortización de Madoz en la provincia de Burgos (1855-1869)* (Valladolid 1987).
- CATALANO, G., *Lezioni di Diritto ecclesiastico. Parte prima* (Milano 1989).
  - *Problemática giuridica dei concordata* (Milano 1963).
- CATALINAS, J.L., y ECHENAGUSÍA, J., *La Primera República. Reformismo y Revolución Social* (Madrid 1973).
- CIÁURRIZ LABIANO, Mª.J., *La libertad religiosa en el Derecho español. (La Ley Orgánica de Libertad Religiosa)* (Madrid 1984).
- CIPROTTI, P., *Diritto Ecclesiastico* (Padova 1964).
- CIPROTTI, P., y TALAMANCA, A., *I Concordati di Pio XII (1939-1958) (Belgio, Germania, Portogallo, Spagna, Argentina, Bolivia, Colombia, Rep. Dominicana, Haiti)* (Milano 1976).
- CIPROTTI, P., y ZAMPETTI, E., *I concordati di Giovanni XXIII e dei primi anni di Paola VI (1958-1974). (Austria, Germania, Jugoslavia, Spagna, Svizzera, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, El Salvador, Tunisia, Venezuela)* (Milano 1976).
- CLAVERO, B., *Evolución histórica del constitucionalismo español* (Madrid 1984).
  - *Manual de Historia constitucional de España* (Madrid 1989).
- CLÉMESSY, N., *L'Espagne de la Restauration 1874-1902* (Paris 1973).
- COGNET, *Le jansénisme* (Vendôme 1975).
- COLMENAR VALDÉS, S., y STAMPA SÁNCHEZ, L., *Tributación eclesiástica (Congregaciones, Fundaciones, Fieles)* (Madrid 1980).
- COLORNI, V., *Gli ebrei nel sistema del Diritto comune fino alla prima emancipazione* (Milano 1956).
- CONDORELLI, M., *I fondamenti giuridici della tolleranza religiosa nell'elaborazione canonistica dei secoli XII-XIV. Contributo storico-dogmatico* (Milano 1960).
- CONEJERO LÓPEZ, Mª.L., *La Iglesia de Málaga en el Trienio liberal (1820-1823)* (Málaga 1979).
- CONNELLY ULLMAN, J., *La Semana Trágica. Estudio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España (1898-1912)* (Barcelona 1972) -tr. de González Pontón-.
- CONTRERAS MAZARIO, J.Mª., *Leyes eclesiásticas del Estado* (Pamplona 1994).
- COPPOLA, R., *Gli strumenti costituzionali per l'esercizio della libertà religiosa* (Milano 1982).

- CORONATA, M.A., *Ius publicum ecclesiasticum* (Torino 1934).
- CORRAL SALVADOR, C., (ed.), *La asignación tributaria para fines religiosos* (Madrid 1989).
  - *La libertad religiosa en la Comunidad europea. Estudio comparado* (Madrid 1973).
- CORRAL SALVADOR, C., y ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., *De, Los acuerdos entre la Iglesia y España* (Madrid 1980).
- CORRAL SALVADOR, C., y GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., (dirs.), *Concordatos vigentes*, 2 vols. (Madrid 1981).
- CORRAL SALVADOR, C., y LISTI, J., *Constitución y acuerdos Iglesia-Estado. Actas del II Simposio hispano-alemán* (Madrid 1988).
- CORRAL SALVADOR, C., y URTEAGA, J.M<sup>a</sup>., *La Iglesia española y la integración de España en la Comunidad europea. Cuestiones selectas de Derecho comparado. V Jornadas de Estudio 15-17 de abril de 1986 de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. (Conmemoración académica del 25 aniversario del traslado de la Facultad de Madrid y de su fundación)* (Madrid 1986).
- CORTÉS PEÑA, A.L., *La política religiosa de Carlos III y las órdenes mendicantes* (Granada 1989).
- CUENCA TORIBIO, J.M., *Apertura e integrismo en la Iglesia española decimonónica. En torno a una polémica de los inicios del Reinado de Isabel II* (Sevilla 1970).
  - *Aproximación a la Historia de la Iglesia contemporánea en España* (Madrid 1978).
  - *Del Antiguo al Nuevo Testamento* (Sevilla 1976).
  - *Estudios sobre la Iglesia andaluza moderna y contemporánea* (Córdoba 1980).
  - *Iglesia y burguesía en la España liberal* (Jaén 1979).
  - *La Iglesia española ante la revolución liberal* (Madrid 1971).
  - *Sociedad y clero en la España del siglo XIX* (Córdoba 1980).
- CUENCA TORIBIO, J.M. y LONGARES ALONSO, J., *Bibliografía de Historia de la Iglesia. 1940-1974. Artículos de revista* (Valencia 1976).

## CH

- CHAO, P., *La Iglesia que Franco quiso* (Madrid 1976).

## D

- DALLA TORRE, G., *L'attività assistenziale della Chiesa nell'ordinamento italiano. Aspetti dogmatica e spunti ricostruttivi* (Milano 1979).
- D'AVACK, P.A., *La natura giuridica dei concordata nel jus publicum ecclesiasticum. Estratto dalla raccolta di studi in onore di Francesco Scaduto* (Firenze 1936).
- *Trattato di Diritto Ecclesiastico italiano. Parte generale* (Milano 1978).
- DELLA ROCCA, F., *Appunti di storia concordataria* (Milano 1977).
- *Diritto Canonico* (Padova 1961).
- DOMIANELLO, S., *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1957-1986)* (Milano 1987).
- DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, J.M<sup>a</sup>., *La Constitución de 1869 y la Revolución burguesa* (Madrid 1985).
- *La desamortización de Mendizábal en Navarra 1836-1851* (Madrid 1975).
- DUBROWSKY, S., *Los diezmos de Indias en la legislación (ss. XVI y XVII)* (Pamplona 1989).

## E

- ELÍAS DE MOLINS, *El Concordato de 1851 anotado con las leyes, decretos y disposiciones que se han publicado en su aclaración* (Madrid 1882).
- ESTAPÉ Y RODRÍGUEZ, F., *La reforma tributaria de 1845. Estudio preliminar y consideración de sus precedentes inmediatos* (Madrid 1971).
- ESTEBAN, J., De, *Constituciones españolas y extranjeras*, 2 vols. (Madrid 1979).
- *Esquemas del constitucionalismo español (1808-1976)* (Madrid 1976).
- EUGUI HERMOSO DE MENDOZA, J., *La participación de la comunidad cristiana en la elección de los obispos siglos I-V* (Pamplona 1977).

## F

- FARIAS, P., *Breve historia constitucional de España (seguido de los textos constitucionales desde la Carta de Bayona a la Ley Orgánica)* (Madrid 1976).
- FEDELE, P., *La libertà religiosa* (Milano 1963).
- FEIJOO GÓMEZ, A., *La desamortización del siglo XIX en Castilla La Mancha* (Toledo 1990).
- FERNÁNDEZ, J., *Las colectas impuestas por los señores Obispos en las Iglesias de los religiosos. Separata de Actas del II Congreso Nacional de los Religiosos, Madrid 3-8 de abril de 1961* (Madrid 1961).
- FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, A., *Estado y confesiones religiosas: un nuevo modelo de relación. (Los pactos con las confesiones: Leyes 24, 25 y 26 de 1992)* (Madrid 1995).
- FERNÁNDEZ REGATILLO, E., *Cuestiones canónicas de Sal Térrea ordenadas y acomodadas al nuevo Código Canónico*, 2 vols. (Santander 1927-1928).
- FERNÁNDEZ-RÚA, J.L., 1873. *La Primera República* (Madrid 1975).
- FERNÁNDEZ SEGADO, F., *El sistema constitucional español* (Madrid 1992).
  - *Las Constituciones históricas españolas. (Un análisis histórico-jurídico)* (Madrid 1982).
- FERRANDO BADÍA, F., *Historia político-parlamentaria de la Primera República española* (Madrid 1973).
  - *La Primera República española* (Madrid 1973).
- FERRER, M., *Historia del Derecho de la Iglesia en España en orden á su libertad é independencia del poder temporal, y de las relaciones de este con el de la Iglesia para el arreglo de las materias eclesiásticas*, 2 vols. (Barcelona 1846).
- FERRER ORTIZ, J., (coord.), *Derecho Eclesiástico del Estado español* (Pamplona 1996).
- FILIPPONE, G., *Le relazione tra lo Stato Pontificio e la Francia rivoluzionaria. Storia diplomatica del Trattato di Tolentino*, 2 vols. (Milano 1961 y 1967).
- FINOCCHIARO, F., *Diritto ecclesiastico* (Bologna 1991).
- FINOCCHIARIO, M., *I beni d'interesse religioso nell'ordinamento italiano* (Padova 1969).
- FONTANA I LÁZARO, J., *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX* (Barcelona 1975).

- Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen español: 1823-1833 (Madrid 1973).
- *La crisis del Antiguo Régimen 1808-1833* (Barcelona 1979).
- *La Hacienda en la Historia de España 1700-1931 y suplemento al Diccionario de Hacienda por D. José Canga Argüelles* (Madrid 1980).
- *La quiebra de la monarquía absoluta 1814-1820* (Barcelona 1983).
- *La revolución liberal. Política y Hacienda en 1833-1845* (Madrid 1975).
- FORNÉS, J., *El nuevo sistema concordatario español. (Los Acuerdos de 1976 y 1979)* (Pamplona 1980).
- FRÍAS GARCÍA, M<sup>a</sup>., Del C. De, *La jerarquía eclesiástica española ante la legislación secularizadora del primer bienio de la Segunda República*, 3 vols. (Madrid 1992).
- FUENMAYOR, A., De, *La libertad religiosa* (Pamplona 1974).

## G

- GARCÍA DELGADO, J.L., (ed.), *La cuestión agraria en la España contemporánea* (Madrid 1976).
- GARCÍA-VILLOSLADA, R., *Historia de la Iglesia en España*, 5 vols. (Madrid 1979-1980 y 1987).
- GARCÍA Y GARCÍA, A., (ed.) *Estudios jurídico-canónicos. Conmemorativos del Primer Cincuentenario de la restauración de la Facultad de Derecho Canónico en Salamanca (1940-1989)* (Salamanca 1991).
- GARÓFANO SÁNCHEZ, R., / DE PÁRAMO ARGÜELLES, J.R., *La Constitución gaditana de 1812* (San Fernando 1983).
- GIACCHI, O., *Libertà della Chiesa e autorità dello Stato. Studi* (Milano 1963).
- GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., y CORRAL SALVADOR, C., (dir.), *Iglesia y Estado en España. Régimen jurídico de sus relaciones* (Madrid 1980).
- GISMONDI, P., *Il diritto della Chiesa dopo il Concilio* (Milano 1973).
- GIUDICE, V., Del, *Manuale di Diritto ecclesiastico* (Milano 1970).
- GÓMEZ CHAPARRO, R., *La desamortización civil en Navarra* (Pamplona 1967).
- GÓMEZ OLIVER, M., *La desamortización de Madoz en la provincia de Granada* (Granada 1985).

- *La desamortización de Mendizábal de Granada* (Granada 1983).
- GÓMEZ PÉREZ, R., *Política y religión en el régimen de Franco* (Barcelona 1976).
- GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *El impuesto religioso. Cooperación económica estatal con las confesiones religiosas* (Vizcaya 1990).
- *Sistemas históricos de dotación del Estado español a la Iglesia española (siglos XIX-XX)* (Salamanca 1990).
- GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M<sup>a</sup>., (coord.), *Compilación de Derecho Eclesiástico español (1816-1986)* (Madrid 1986).
- GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO, M., *Desamortización, Deuda Pública y Crecimiento Económico. Andalucía, 1820/1823* (Granada 1985).
- GONZÁLEZ ZUMARRAGA, A.J., *Problemas del Patronato indiano a través del "Gobierno Eclesiástico Pacífico" de Fr. Gaspar de Villarroel* (Vitoria 1961).
- GOTI ORDEÑANA, J., *Sistema de Derecho Eclesiástico del Estado*, 2 vols. (Donosita 1992).
- GUADALUPE BERAZA, M<sup>a</sup>.L., *Diezmos de la sede toledana y rentas de la mesa arzobispal (siglo XV)* (Salamanca 1972).

## H

- HERA PÉREZ-CUESTA, A., De La, *El regalismo borbónico en su proyección indiana* (Madrid 1963).
- HERMANN, Ch., *L'Eglise d'Espagne sous le patronage royal (1476-1834). Essai d'ecclésiologie politique* (Madrid 1988).
- HEVADA, J., y ZUMAQUERO, J.M., *Textos constitucionales españoles (1808-1978)* (Pamplona 1980).

## I

- IBÁN, I.C., *Factor religioso y sociedad civil en España. (El camino hacia la libertad religiosa)* (Jerez 1985).
- (coord.), *Iglesia católica y regímenes autoritarios y democráticos. (Experiencia española e italiana)* (Jerez, 4 al 8 de octubre de 1985) (Madrid 1987).
- *Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa* (Arcos de la Frontera, 1 y 2 de febrero de 1989) (Madrid 1989).

- IBÁN, I.C., y FERRARI, S., *Derecho y religión en Europa Occidental* (Madrid 1998).
- IBÁN, I.C., y PRIETO SANCHÍS, L., *Lecciones de Derecho Eclesiástico* (Madrid 1985).
  - *Curso de Derecho Eclesiástico* (Madrid 1991).
- IRIBARREN, J., *Documentos de la Conferencia Episcopal española 1965-1983* (Madrid 1984).
- IZQUIERDO BENITO, R., *El patrimonio del cabildo de la catedral de Toledo en la segunda mitad del siglo XIV* (Toledo 1980).

## J

- JANKE, P., *Mendizábal y la instauración de la monarquía constitucional de España (1790-1853)* (Madrid 1974).
- JIMENA, J.M., *La Iglesia y el Estado. Tomo I* (Madrid 1843).
- JIMÉNEZ URRESTI, T.I., *Estado e Iglesia. Laicidad y confesionalidad del Estado y del Derecho* (Vitoria 1958).
- JOVELLANOS, G.M., *De, Informe sobre la Ley agraria* (Barcelona 1968).

## L

- LABOA, J.M<sup>a</sup>., *Iglesia y religión en las Constituciones españolas* (Madrid 1981).
- LADERO QUESADA, M.Á., y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., *Diezmo eclesiástico y producción de cereales en el Reino de Sevilla (1408-1503)* (Sevilla 1979).
- LA PARRA LÓPEZ, E., y PRADELLS NADAL, J., *Iglesia, sociedad y Estado en España, Francia e Italia (ss. XVIII al XX)* (Alicante 1991).
- LARICCIA, S., *Diritto eclesiástico* (Padova 1982).
  - *Diritto eclesiástico italiano e comparato. Bibliografia 1973-1979* (Perugia 1981).
  - *La rappresentanza degli interessi religiosi* (Milano 1967).
- LA ROSA, S., *Eguaglianza tributaria ed esenzioni fiscali* (Milano 1968).

- LÁZARO TORRES, R.M<sup>a</sup>., *La desamortización de Espartero en la provincia de Logroño 1840-1843* (Logroño, 1973).

- LAZO DÍAZ, A., *La desamortización de las tierras de la Iglesia en la provincia de Sevilla (1835-1845)* (Sevilla 1970).

- LE BRAS, G., *Études d'Histoire du Droit canonique. Tome I* (París 1965).

- LEZIROLI, G., *Aspetti della libertà religiosa nel quadro dell'attuale sistema di relazione fra Stato e confesión religiosa* (Milano 1977).

- *Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico. Cenni storico sulla religione come limite del potere* (Torino 1992).

- LOMBARDÍA, P., *Escritos de Derecho Canónico. III* (Pamplona 1974).

- LONGARES ALONSO, J., *Política y religión en Barcelona (1833.1843)* (Madrid 1976).

- LÓPEZ CORDÓN, M<sup>a</sup>.V., *La Revolución de 1868 y la I República* (Madrid 1976).

- LÓPEZ MARTÍNEZ, A., *La economía de las órdenes religiosas en el Antiguo Régimen. Sus propiedades y rentas en el Reino de Sevilla* (Sevilla 1992).

- *La Iglesia, desde el Estado* (León 1971).

## LL

- LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *Derecho Eclesiástico del Estado. Derecho de la libertad de conciencia* (Madrid 1991).

## M

- MADOZ, P., *Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar* (Madrid 1846-1850).

- MAIRENA VALDAYO, J., *Estado y religión "El valor religioso en el ordenamiento jurídico del Estado"* (Salamanca 1968).

- MANJÓN Y MANJÓN, A., *Derecho eclesiástico general y español*, 2 vols. (Granada 1900).

- *Instituciones de Derecho Público Eclesiástico* (Granada 1890).

- MANTECÓN SANCHE, J., *Los acuerdos del Estado con las confesiones acatólicas. Textos, comentario y bibliografía* (Jaén 1995).

- MANZANARES, J., (ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico. Aportaciones del derecho común y particular. X Jornadas de la Asociación española de Canonistas* (Madrid 18-20 abril 1990).
- MARQUINA BARRIO, A., *La diplomacia vaticana y la España de Franco (1936-1945)* (Madrid 1983).
- MARTÍN GILABERT, F., *La Iglesia en España durante la revolución francesa* (Pamplona 1971).
- MARTÍN, T., *La desamortización. Textos político-jurídicos* (Madrid 1973).
- MARTÍN MARTÍNEZ, I., *La Iglesia y la comunidad política. Documentos colectivos de los Episcopados católicos de todo el mundo 1965-1975* (Madrid 1975).
  - *La revisión del Concordato de 1953 en la perspectiva del episcopado español* (Madrid 1974).
  - *Sobre la Iglesia y el Estado* (Madrid 1989).
- MARTÍN NIÑO, J., *La Hacienda española y la Revolución de 1868* (Madrid 1972).
- MARTÍN RETORTILLO, C., *La desamortización y los municipios rurales* (Madrid 1954).
- MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., *Diccionario de la Administración española. Compilación de la Novísima legislación de España peninsular y ultramarina en todos los ramos de la Administración Pública* (Madrid 1892).
- MARTÍNEZ BLANCO, *Derecho Eclesiástico del Estado. Vol. II* (Madrid 1993).
- MARTÍNEZ CUADRADO, M., (ed.), *La Constitución de 1978 en la historia del constitucionalismo español* (Madrid 1982).
- MARTÍNEZ Y SAND, M., *Defensa del Convenio estipulado en Roma el 27 de abril entre el representante del Gobierno español y el del Gobierno pontificio* (Madrid 1845).
- MASTAI FERRETTI, G., *L'amministrazione dei benefici ecclesiastici -autonomia della Chiesa e intervento dello Statu-* (Milano 1974).
- MAYANS Y SISCAR, G., *Obras completas. IV. Regalismo y jurisprudencia* (Valencia 1985).
- MENÉNDEZ PELAYO, M., *Historia de los Heterodoxos españoles*, 2 vols. (Madrid 1978 y 1986).
- MERCADER RIBA, J., *José Bonaparte, Rey de España (1808-1813)*, 2 vols., (Madrid 1971 y 1983).
- MERINO NAVARRO, J.P., *Notas sobre la desamortización en Extremadura* (Madrid 1976).

- MESSNER, F., *Le financement des Églises. Le système des cultes reconnus (1801-1983)* (Strasbourg 1984).
- MIER, E., De, *La Iglesia y el Estado. Motivos histórico-jurídico-canónicos sobre la propiedad de la Iglesia ante el Derecho escrito* (Madrid 1931).
- MIRABELLI, C., *L'appartenenza confessionale. Contributo allo Studio delle persone fisiche nel diritto ecclesiástico italiano* (Padova 1975).
  - *Le intese tra Stato e confessioni religiose. Problemi e prospettive* (Milano 1978).
- MOLINA MELIÁ, A., *Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado. Fuentes. Textos. Casos prácticos* (Valencia 1983).
- MOLINA, A., y OLMOS, M<sup>a</sup>. E., *Legislación eclesiástica* (Madrid 1994).
  - *Legislación eclesiástica* (Madrid 1996)
- MOLTENI MASTAI FERRETTI, G., *L'amministrazione dei benefici ecclesiastici.- Autonomia della Chiesa e intervento dello Stato-* (Milano 1974).
- MONTERO MORENO, A., *Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939* (Madrid 1961).
- MORAL RUIZ, J., Del, *Hacienda y sociedad en el Trienio Constitucional (1820-1823)* (Madrid 1975).
- MORENO ANTÓN, M<sup>a</sup>.G., *La enajenación de bienes eclesiásticos en el ordenamiento jurídico español* (Salamanca 1987).
- MORO, J.M<sup>a</sup>., *La desamortización en Asturias en el siglo XIX* (Asturias 1981).
- MOTILLA DE LA CALLE, A., *Los acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas en el Derecho español* (Barcelona 1985).
  - *Sectas y Derecho en España. Un estudio en torno a la posición de los nuevos movimientos en el ordenamiento jurídico* (Madrid 1990).
- MUSSELLI, L., *Considerazioni sugli istituti delle confessioni acattoliche* (Padova 1979).
- MUTILOA POZA, J.M<sup>a</sup>., *Desamortización, fueros y pronunciamientos en Álava en el siglo XIX* (Vitoria 1975).
  - *Guipúzcoa en el siglo XIX. (Guerras-Desamortización-Fueros)* (San Sebastián 1982).

## N

- NADAL, J., y TORTELLA, G., (ed.), *Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea. Actas del Primer Coloquio de Historia Económica de España (Barcelona, 11-12 de mayo de 1972)* (Barcelona 1974).
- NAVARRO GODOY, M.J., *La desamortización de Mendizábal en la provincia de Almería (1838-1849)* (Almería 1987).
- NAVARRO VALLS., R., (coord.), *Derecho Eclesiástico del Estado español* (Navarra 1983).
- NAZ, R., (dir.), *Dictionnaire de Droit Canonique* (Paris 1935...).
- NÚÑEZ MUÑOZ, M<sup>a</sup>.F., *La Iglesia y la restauración 1875-1881* (Santa Cruz de Tenerife 1986).

## O

- OJEDA QUINTANA, J.J., *La desamortización en Canarias (1836-1855)* (Canarias 1977).
- OLMOS ORTEGA, M<sup>a</sup>.E., *La regulación del factor religioso en las Comunidades Autónomas españolas* (Salamanca 1991).
- OLTRA, J., *La influencia norteamericana en la Constitución española de 1869* (Madrid 1972).
- OLLERO TASSARA, A., *Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial* (Madrid 1989).
- ORTIZ URRUELA, J.A., *La Iglesia católica y la revolución de setiembre en España* (Madrid 1869).
- OTADUY, J., De, *Régimen jurídico español del trabajo de eclesiásticos y de religiosos* (Madrid 1993).
- OTTAVIANI, A., *Institutiones iuris publici ecclesiastici. Vol. II. Ius publicum externum (Ecclesia et status)* (Civitate Vaticana 1936).

## P

- PAREDES ALONSO, F.J., *Pascual Madoz 1805-1870. Libertad y progreso en la monarquía isabelina* (Pamplona 1982).
- PEÑA GONZÁLEZ, J., *Historia política del constitucionalismo español* (Madrid 1995).
- PÉREZ ALHAMA, J., *La Iglesia y el Estado español. Estudio histórico-jurídico a través del Concordato de 1851* (Madrid 1967).

- PÉREZ-LLANTADA Y GUTIÉRREZ, J., *La libertad religiosa en España y el Vaticano II* (Madrid 1974).
- PERLADO, P.A., *La libertad religiosa en las constituyentes del 69* (Pamplona 1970).
- *Los obispos españoles ante la amnistía de 1817* (Pamplona 1971).
- PETSCHEN, S., *Iglesia-Estado. Un cambio político. Las constituyentes de 1869* (Madrid 1975).
- PICOZZA, P., *L'ente ecclesiástico civilmente riconosciuto* (Milano 1992).
- PIÑUELA, E., *El Concordato de 1851 y las disposiciones complementarias vigentes* (Madrid 1921).
- PORRES MARTÍN-CLETO, J., *La desamortización del siglo XIX en Toledo* (Toledo 1965).
- PORTERO SÁNCHEZ, L., *Jurisprudencia estatal en materia eclesiástica* (Madrid 1968).
- PREDIERI, A., y GARCÍA DE ENTERRÍA, E., *La Constitución española de 1978* (Madrid 1980).

## R

- RAMÍREZ JIMÉNEZ, M., (dir.), *Estudios sobre la II República española* (Madrid 1975).
- RAMOS SANTANA, A., *La desamortización civil en Cádiz en el bienio progresista* (Cádiz, 1982).
- REINA, V., De, *El sistema benefical* (Pamplona 1965).
- REINA, V., De, y FÉLIX BALLESTA, M<sup>a</sup>.Á., (coord.), *Acuerdos del Estado español con confesiones religiosas minoritarias. Actas del VII Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado* (Barcelona 1994).
- REINA, V., y REINA, A., *Lecciones de Derecho Eclesiástico español* (Barcelona 1983).
- REVUELTA GONZÁLEZ, M., *La exclaustación (1833-1840)* (Madrid 1976).
- *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. Trienio constitucional* (Madrid 1973).
- RIERA, J., *Rentas eclesiásticas, moriscos y penitenciados. (Los obispados de Cartagena y Orihuela a mediados del siglo XVI)* (Valladolid 1984).

- ROCA, M<sup>a</sup>J., *La declaración de la propia religión o creencias en el Derecho español* (Santiago de Compostela 1992).

- *Naturaleza jurídica de los convenios eclesiásticos menores* (Pamplona 1993).

- RODRÍGUEZ CAMPOMAMES, P., *Escritos regalistas. Tomo I. Tratado de la Regalía de España* (Oviedo 1993).

- *Escritos regalistas. Tomo II. Juicio imparcial sobre el Monitorio de Roma* (Oviedo 1993).

- *Escritos regalistas. Tomo II. Juicio imparcial sobre el Monitorio de Roma* (Oviedo 1993).

- *Tratado de la regalía de amortización* (Madrid 1975).

- RODRÍGUEZ CHACÓN, R., *El factor religioso ante el Tribunal Constitucional* (Madrid 1992).

- RODRÍGUEZ DEL CORO, F., *Política eclesiástica de los gobiernos liberales en Euskadi (1868-1876)* (Vitoria-Gasteiz 1988).

- RODRÍGUEZ VALENCIA, V., *El Patronato regio de Indias y la Santa Sede en Santo Toribio de Mogrovejo (1581-1606)* (Roma 1957).

- ROGGENENDORF, J., *El sistema del impuesto eclesiástico en la República Federal de Alemania* (Pamplona 1983).

- ROMERO BLANCO, B., *José del Castillo y Ayensa, humanista y diplomático (1795-1861)* (Pamplona 1977).

- ROVIRA I GÓMEZ, S., *La desamortización dels béns de l'Esglesia a la província de Tarragona (1835-1845)* (Tarragona 1979).

- RUEDA HERNANZ, G., *La desamortización de Mendizábal en Valladolid (1836-1853). Transformaciones y constantes en el mundo rural y urbano de Castilla La Vieja* (Valladolid 1980).

- *La desamortización de Mendizábal y Espartero en España* (Madrid 1986).

- RUIZ RICO, J.J., *El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971)* (Madrid 1977).

## S

- SÁINZ DE VARANDA, R., (ed.), *Colección de leyes fundamentales* (Zaragoza 1957).

- SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *El Concordato español de 1753 según los documentos originales de su negociación* (Jerez de la Frontera 1937).

- *El Derecho público de la Iglesia católica* (Granada 1940).

- SÁNCHEZ FÉRRIZ, R., *La Restauración y su Constitución política* (Valencia 1984).

- SEGARRA, F., *La libertad religiosa a la luz del Vaticano* (Barcelona 1966).

- SIMÓN SEGURA, F., *Contribución al estudio de la desamortización en España. La desamortización de Mendizábal en la provincia de Gerona* (Madrid 1969).

- *Contribución al estudio de la desamortización en España. La desamortización de Mendizábal en la provincia de Madrid* (Madrid 1969).

- *La desamortización española en el siglo XIX* (Madrid 1973).

- SOLER, C., *Iglesia y Estado. La incidencia del Concilio Vaticano II sobre el Derecho público externo* (Pamplona 1993).

- SOLÉ TURA, J., y AJÁ, E., *Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936)* (Madrid 1980).

- SOTILLO, L.R., *Compendium iuris publici ecclesiastici* (Santander 1947).

- SOUTO PAZ, J.A., *La noción canónica de oficio* (Pamplona 1971).

- SPINELLI, L., *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Problemi e prospettive* (Milano 1982).

- *Libertas ecclesiae. Lezioni di Diritto Canonico* (Milano 1979).

- STEFANO, A. De, *Rivoluzione e religione nelle prime esperienze costituzionali italiane (1796-1797)* (Milano 1954).

- SUÁREZ, F., *La Real Caja de Amortización bajo el ministerio de López Ballesteros (1824-1832)* (Madrid 1961).

- SUBERBIOLA MARTÍNEZ, J., *Real Patronato de Granada. El arzobispo Talavera, la Iglesia y el Estado Moderno (1486-1516). Estudio y documentos* (Granada 1985).

## T

- TIERNO GALVÁN, E., *Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1978)* (Madrid 1984).

- TOMÁS VILLARROYA, J., *Breve historia del constitucionalismo español* (Madrid 1994).

- *El Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837* (Madrid 1985).
- TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España* (Barcelona 1989).
- TORRES DEL MORAL, A., *Constitucionalismo histórico español* (Madrid 1990).
- TRONCOSO, J., *El Concordato ó sean breves reflexiones político-religiosas sobre este importante documento* (Madrid 1851).
- TUÑÓN DE LARA, M., *La II República*, 2 vols. (Madrid 1976).

## V

- VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, J.M., *Las capellanías colativo-familiares (Régimen legal vigente)* (Pamplona 1972).
- VELASCO, C., y MONTERO Y DAZA, J., *Manual completo de desamortización è investigación. Venta de fincas de bienes nacionales, excepciones civiles y eclesiásticas, propios, montes, parte práctica y administradores de bienes del Estado* (Madrid 1897).
- VERA URBANO, F. de P., *Derecho Eclesiástico I. Cuestiones fundamentales de Derecho Canónico. Relaciones Estado-Iglesias y Derecho Eclesiástico del Estado* (Madrid 1990):
  - *La libertad religiosa como derecho de la persona. Estudio filosófico-jurídico* (Madrid 1971).
- VERDERA ALBIÑANA, F., *Conflictos entre la Iglesia y el Estado en España. La revista Ecclesia entre 1941 y 1945* (Pamplona 1945).
- VIANA TOMÉ, A., *Los acuerdos con las confesiones religiosas y el principio de igualdad. (Sistema español)* (Pamplona 1985).
- VICENTE CANTÍN, L., *Naturaleza, contenido y extensión del derecho de libertad religiosa* (Madrid 1990).
- VIÑAS, N.Mª., *El tesoro canónico parroquial* (Madrid 1913).
- VITALE, A., *Il Diritto Eclesiástico* (Milano 1978).
  - *L'ufficio ecclesiástico* (Napoli 1965).

**W**

- WALF, K., *Derecho eclesiástico* (Barcelona 1988).

## II. REVISTAS.

### ABREVIATURAS DE REVISTAS<sup>1</sup>.

- A.A.	Anthologica Annua.
- A.A.S.	Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale. Boletín Oficial Canonico.
- A.Adm.	Actualidad Administrativa.
- A.C.	Actualidad Civil.
- A.D.C.	Anuario de Derecho Civil.
- A.D.E.E.	Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado.
- A.D.H.	Anuario de Derechos Humanos.
- A.E.A.	Anuario de Estudios Americanos.
- A.E.M.	Anuario de Estudios Medievales.
- A.È.S.C.	Annales-Économies, Sociétés, Civilisations.
- A.F.	Aranzadi Fiscal.
- A.F.D.	Anuario de Filosofía del Derecho.
- A.F.D.I.	Annuaire Français de Droit International.
- A.F.G.	Annali della Facoltà di Giurisprudenza in onore di Attilio Moroni.
- A.F.G..G.	Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova/Annali della Facoltà di Giurisprudenza.

---

<sup>1</sup>.- En algunas revistas el título se ha recogido completo; en otras, por su extensión, se han utilizado abreviaturas.

- A.Fin.	Archivio Finanziario.
- A.Fin.	Actualidad financiera.
- A.G.	Archivio Giuridico.
- A.H.	Archivio Hispalense. Revista Histórica, Literaria y Artística.
- A.H..C	Anuario de Historia Contemporánea.
- A.H.D.E.	Anuario de Historia del Derecho Español.
- A.H.M.C.	Anuario de Historia Moderna y Contemporánea.
- Angelicum	Angelicum.
- An.H.C.	Anales de Historia Contemporánea.
- Apollinaris	Apollinaris. Commentarius Instituti Litriusque Iuris.
- Arbor	Arbor. Revista General de Investigación y Cultura.
- A.S.T.	Analecta Sacra Tarraconensia. Revista de Ciencias Histórico-ecclesiásticas.
- A.T.	Actualidad Tributaria.
- A.T.L.	Actualidad Tributaria. Legislación. Revista semestral técnico-jurídica de legislación tributaria.
- A.U.A.	Anales de la Universidad de Alicante. Facultad de Derecho.
- A.U.M.	Annali della Università di Macerata per a cura della Facoltà Giuridica.
- A.V.	Anales Valentinus.
- Baética	Baética.
- B.A.T.	Boletín Siete de Actualidad Tributaria.
- B.I.E.A.	Boletín del Instituto de Estudios Asturianos.
- B.I.L.F.	Boletín Informativo de Legislación Fiscal.
- B.J.C.	Boletín de Jurisprudencia Constitucional.
- B.O.C.	Boletín Oficial de las Cortes/ Boletín Oficial de las Cortes Generales.
- B.O.C.E.E.	Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal española.

- B.O.C.G. Boletín Oficial de las Cortes Generales.
- B.O.E. Boletín Oficial del Estado.
- B.O.M.E.H. Boletín Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda / continuación del Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda -B.O.M.H.-.
- B.O.M.H. Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda / hoy Boletín Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda -B.O.M.E.H.-.
- Carthag. Carthaginensia. Revista de Estudios e Investigación. Instituto teológico de Murcia.
- C.C.F.F.C. Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol.
- C.D. La Ciudad de Dios. Revista Agustiniana.
- C.F.D.U.P.M. Cuadernos de la Facultad de Derecho. Universidad de Palma de Mallorca/ Universitat de les Illes Balears.
- C.H.R.H. Cuadernos de Historia. Anexo de la Revista Hispania.
- C.I.H. Cuadernos de Investigación Histórica.
- C.R. Cuenta y Razón del Pensamiento actual.
- Claves Claves de razón práctica.
- Colligite Colligite.
- Concilium Concilium. Revista Internacional de Teología.
- C.P.C.C.I.C.R. Communicationes Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo.
- Cr.T. Crónica Tributaria.
- C.S. Comunicazioni e Studi.
- C.T. Carta Tributaria. Documentación.
- D.C. La Documentation Catholique.
- DD. Y LL. Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas.
- D.E. Il Diritto Ecclesiástico e Rassegna di Diritto Matrimoniale.
- D.J. Documentación Jurídica.

- D.P.T.                      Diritto e Pratica Tributaria.
- D. y O.                    Derecho y Opinión. Revista del Departamento de Disciplinas Histórico-Jurídica y Económico-Sociales. Universidad de Córdoba.
- Ecclesia                    Ecclesia.
- E.C.H.R./C.E.D.H.      Council of Europe / Conseil del'Europe. European Commission of Human Rights / Commission Européenne des Droits de l'Homme. Decisions and reports / Décisions et rapports.
- E.E.                        Estudios Eclesiásticos.
- E.F.                        Estudios Financieros. Revista de contabilidad y tributación.
- E.F.E.                    Economía Financiera Española.
- E.G.                        Estudios Geográficos.
- E.H.S.                    Estudios de Historia Social.
- E.I.C.                    Ephemerides Iuris Canonici.
- El Ciervo                El Ciervo.
- E.R.                      Études Rurales. Revue Trimestielle D'Histoire, Géographie, Sociologie et Économie des Campagnes.
- Estudis                Estudis. Revista de Historia Moderna.
- G.C.                      Giurisprudenza Costituzionale.
- G.F.                      Gaceta Fiscal. Revista mensual de orientación jurídico-tributaria.
- Gibralfaro            Gibralfaro. Revista del Instituto de Estudios Malagueños.
- G.U.                      Gazzetta Ufficiale.
- H.C.L.Q.                Hastings Constitutional Law Quarterly.
- H.C.R.                    Harvard Civil Rights. Civil Liberties Law Review.
- H.D.                      Hechos y Dichos.
- Hispania                Hispania. Revista Española de Historia.
- Historia 16            Historia 16

- H.P.E.	Hacienda Pública Española. Instituto de Estudios Fiscales.
- H.S.	Hispania Sacra.
- I.C.	Ius Canonicum.
- I.C.I.	Information Catholiques Internationales.
- I.E.	Ius Ecclesiae. Revista Internazionale di Diritto Canonico.
- I.F.	Información Fiscal. Editorial Lex Nova.
- I.J.	Información Jurídica.
- Il Mulino	Il Mulino.
- Il Politico	Il Politico. Rivista Italiana di Scienze Politiche.
- Impuestos	Impuestos.
- I.V.	Iglesia Viva.
- Jábega	Jábega.
- J.C.L.I.L.	Journal of Comparative Legislation and Internacional Law.
- J.Ch.S.	Journal of Church and State.
- J.E.H.	The Journal of Ecclesiastical History.
- J.T.	Jurisprudencia Tributaria. Aranzadi.
- J.T.C.	Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Secretaría General. Boletín Oficial del Estado.
- Jus	Jus. Rivista di Scienze Giuridiche.
- L'A.C.	L'Année Canonique.
- La Ley	La Ley.
- L'A.R.	L'Actualité Religieuse dans le Monde.
- L'C.C.	La Civiltà Cattolica.
- L.C.I.	La Comunità Internazionale.
- L.C.T.	La Ciencia Tomista.

- L.F.	Legislación Fiscal.
- Lumen	Lumen. Revista de síntesis y orientación de Ciencias Eclesiásticas.
- M.C.	Miscelanea Comillas. Revista de Teología y Ciencias Humanas.
- M.E.	Monitor Ecclesiasticus. Commentarius Internationalis Juris Canonici.
- M. y C.	Moneda y Crédito.
- N.O.	Noticias Obreras.
- N.R.T.	Nuova Rivista Tributaria. Periodico Mensile D'Informazione.
- N.R.Th.	Nouvelle Revue Théologique.
- Palabra	Palabra.
- P.D.	Politica del Diritto.
- P.E.	Pastoral Ecuménica.
- Periodica	Periodica de la Re Morali Canonica Liturgica.
- P.F.	Praxis Fiscal. Apéndice de Textos Legales.
- P.J.	Poder Judicial.
- P.J.R.	Praxis Juridique et Religion.
- P.M.	Pastoral Misionera.
- Pouvoirs	Pouvoirs. Revue Française D'Études Constitutionnelles et Politiques.
- Proyección	Proyección. Teología y Mundo Actual.
- P.V.	Príncipe de Viana.
- Q.C.	Quaderni Costituzionali.
- Q.D.P.E.	Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica.
- Q.F.	Quincena Fiscal. Revista de Actualidad Fiscal.
- R.A.	La Revue Administrative. Revue Bimestrielle de l'Administration Moderne.
- R.A.A.P.	Administración de Andalucía. Revista Andaluza de Administración Pública.

- R.A.P.                      Revista de Administración Pública.
- R.A.T.                      Revista Siete de Actualidad Tributaria.
- R.C.A.D.I.                Académie de Droit International. Recueil des Cours.
- R.C.C.                      Repertorio delle decisioni della Corte Costituzionale.
- R.C.D.I.                    Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.
- R.C.E.C.                    Revista del Centro de Estudios Constitucionales.
- R.C.G.                      Revista de las Cortes Generales.
- R.C.I.V.S.S.                Revista de Cultura e Investigación Vasca Sancho el Sabio.
- R.C.T.E.F.                Revista de Contabilidad y Tributación. Estudios Financieros.
- R.D.C.                      Revue de Droit Canonique.
- R.D.F.H.P.                Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública.
- R.D.F.S.F.                Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze.
- R.D.I.L.C.                Revue de Droit International et de Législation Comparée.
- R.D.I.S.D.P.                Revue de Droit International de Sciences Diplomatiques et Politique  
(The International Law Review).
- R.D.N.                      Revista de Derecho Notarial.
- R.D.Pol.                    Revista de Derecho Político / Revista del Departamento de Derecho Político.
- R.D.P.S.P.F.É.            Revue de Droit Public et de la Science Politique en France et a l'Étranger.
- R.D.Pr.                    Revista de Derecho Privado.
- R.D.Púb.                    Revista de Derecho Público.
- R.E.                        Revista Eclesiástica.
- R.E.D.A.                    Civitas. Revista Española de Derecho Administrativo.
- R.E.D.C.                    Revista Española de Derecho Canónico.
- R.E.D.Const.                Revista Española de Derecho Constitucional.

- R.E.D.F. Civitas. Revista Española de Derecho Financiero.
- R.E.E. Revista de Estudios Extremeños.
- R.E.H.L. Revista de Economía y Hacienda Local / Posteriormente *Revista de Hacienda Autonómica y Local* -R.H.A.L.- / Hoy *Revista de Hacienda Local* -R.H.L.-.
- R.E.P. Revista de Estudios Políticos / Hoy *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)* -R.E.P.N.E.-.
- R.E.P.N.E. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) / continuación de *Revista de Estudios Políticos* -R.E.P.-.
- Resurrexit Resurrexit.
- Rev.D.I. Revue de Droit International.
- R.E.V.L. Revista de Estudios de la Vida Local.
- R.F.D.A. Revue Française de Droit Administratif.
- R.F.D.C. Revue Française de Droit Constitutionnel.
- R.F.D.U.C. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense / antes *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid* -R.F.D.U.M.-.
- R.F.D.U.C.N.E. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Nueva Época -nueva edición de la R.F.D.U.C.- / antes *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid* -R.F.D.U.M.-.
- R.F.D.U.M. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid / hoy *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense* -R.F.D.U.C.-.
- R.F.S.P. Revue Française de Science Politique.
- R.G.D. Revista General de Derecho.
- R.G.L.J. Revista General de Legislación y Jurisprudencia.
- R.H.A.L. Revista de Hacienda Autonómica y Local / continuación de *Revista de Economía y Hacienda Local* -R.E.H.L.- / hoy *Revista de Hacienda Local* -R.H.L.-.
- R.H.D.F.É. Revue Historique de Droit Français et Étranger.

- R.H.L.                      Revista de Hacienda Local / antes *Revista de Hacienda Autonómica y Local* -R.H.A.L.- / primero *Revista de Economía y Hacienda Local* -R.E-H.L.-.
- R.I.E.E.                      Revista del Instituto de Estudios Económicos.
- R.I.S.G.                      Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche.
- R.J.A.                        Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi.
- R.J.C.                        Revista Jurídica de Catalunya.
- R.J.C.M.                    Revista Jurídica de Castilla-La Mancha.
- R.J.N.                        Revista Jurídica de Navarra.
- R.L.A.                        Repertorio Cronológico de Legislación. Aranzadi.
- R.R.J.D.P.                  Revue de la Recherche Juridique Droit Prospetif.
- R.T.D.H.                    Revista Trimestrale di Diritto Pubblico.
- R.T.T.                        Revista Técnica Tributaria. Asociación Española de Asesores Fiscales.
- R.V.A.P.                    Revista Vasca de Administración Pública.
- R.V.H.P.                    Revista Valenciana de Hacienda Pública. Palau 14.
- R. y F.                        Razón y Fe.
- S.C.                         Studia Canonica. Revue Canadiense de Droit Canonique / A Canadian Canon Law Review.
- S.D.H.I.                    Studia et Documenta Historiae et Iuris.
- Seminarios                Seminarios.
- Sistema.                    Sistema. Revista de Ciencias Sociales.
- S.S.                         Studi Senesi.
- S.T.                         Sal Térrea.
- Tapia                        Tapia. Publicaciones para el mundo del Derecho.
- The Jurist                  The Jurist.
- Ú.H.F.                      Última Hora Fiscal. Servicio Periódico de Información Puntual.

- V.N. Vida Nueva.
- V. y V. Verdad y Vida.
- W.P.Q. The Western Political Quarterly.
- XX Siglos XX Siglos.
- 2000 años 2000 años de cristianismo. La aventura cristiana, entre el pasado y el presente.

## SIN AUTOR

- *Acuerdos y "acuerdos" (editorial)*, 1159, II, V.N. (1978), p. 11.
- *Algo nuevo sobre el Concordato*, 905, V.N. (1973-II), p. 5.
- *¿Algo nuevo sobre el Concordato? (editorial)*, 835, V.N. (1972-I), p. 5.
- *Algunos problemas y ciertos tópicos (editorial)*, 1775, Ecclesia (1976-I), pp. 3-4.
- *Asignación tributaria (editorial)*, 2339, Ecclesia (1987-II), p. 5.
- *Asignación tributaria: mirando al futuro (editorial)*, 1680, V.N. (1989-I), p. 5.
- *Asignación tributaria: preocupación (editorial)*, 1707, V.N. (1989-II), p. 5.
- *Asignación tributaria. ¿Y ahora? (editorial)*, 222, R. y F. (1990), pp. 274-276.
- *Asignación tributaria y financiación de la Iglesia*, 975, N.O. (1988), pp. 19-22.
- *Aumento de los haberes del clero*, XV, 60, Colligite (1969), pp. 49-53.
- *Autofinanciación, cuanto antes mejor (editorial)*, 221, R. y F. (1990), pp. 18-20.
- *Ayuda económica al Clero (editorial)*, 16, Ecclesia (1941), p. 3.
- *Bernardo Herráez: "El 0'52% de asignación tributaria, insuficiente"*, 2548, Ecclesia (1991-II), p. 17.
- *Coetus studiorum "De bonis Ecclesiae temporalibus"*, XII, 2, C.P.C.C.I.C.R. (1980), pp. 388-435.
- *Colombia. "La Iglesia necesita tener unas finanzas y unas finanzas cuantiosas". Respuesta del diario del arzobispado al escándalo de las inversiones eclesíásticas en Burger King y el Citibank"*, 1472-1473, V.N. (1985-I), pp. 49-50.
- *Comentarios a los acuerdos tomados en las Asambleas sobre la organización económica de la Iglesia*, 1864, Ecclesia (1977-II), pp. 23-28.
- *Comisión Episcopal de Asuntos Económicos-jurídicos. Previsión social del clero*, 55, 6, S.T. (1967), pp. 444-445.

- *Comisión Episcopal de Asuntos Económicos-Jurídicos sobre previsión del clero*, XV, 60, Colligite (1969), pp. 45-48.
- *Communiqué du Conseil des cardinaux pour l'étude des problèmes économiques du Saint-Siège* (5 mars), 1959, D.C. (3 avril 1988), p. 353.
- *¿Cómo hacer la asignación tributaria?*, 2372, Ecclesia (1988-I), p. 18.
- *Comptes d'exploitation du Saint-Siège: Année financière 1986* (5 mars), 1959, D.C. (3 avril 1988), pp. 351-352.
- *Concordato español: ¿cambio o apariencia de cambio?* (editorial), XIX, 75, Colligite (1973), pp. 207-210.
- *Concordato: "revisión" y "revisiones"* (editorial), 850, V.N. (1972-II), p. 5.
- *Concordato: un nuevo y difícil atasco* (editorial), 1859, Ecclesia (1977-II), p. 3.
- *Confesiones religiosas: Beneficios fiscales*, 27, T.F. (1993), pp. 9-10.
- *Contributo corrisposti alle comunità israelitiche dai cittadini italiani di stirpe ebraica - Deduzione dal reddito complessivo- Ammissibilità*, LIII, 4, D.P.T. (1982), pp. 1168-1169.
- *Cuarenta y tres sacerdotes de Barcelona renuncian al sueldo del Estado*, 1424, Ecclesia (1969-I), p. 31.
- *Declaraciones del señor López Bravo sobre el Concordato con la Santa Sede*, 1511, Ecclesia (1970-II), p. 36.
- *Declaraciones de monseñor Morcillo: "La libertad de la Conferencia Episcopal Española es y será absoluta". Tanto la Santa Sede como el Estado español se preparan para iniciar las negociaciones sobre el Concordato*, 673, V.N. (1969-I), p. 27.
- *Declaraciones de Monseñor Piovane sobre el nuevo Concordato entre España y la Santa Sede*, 1506, Ecclesia (1970-II), p. 27.
- *Declaraciones de monseñor Teodoro Úbeda, miembro de la Comisión especial para la Asignación tributaria*, 2372, Ecclesia (1988-I), pp. 15.-17.
- *Del Concordato del 53 a los Acuerdos del 79*, 1917, Ecclesia (1979-I), pp. 20-21.
- *Del "impuesto religioso" a "impuesto revolucionario"* (editorial), 1611, V.N. (1987-II), p. 5.
- *¿Desbandada en el impuesto eclesiástico?* (editorial), 218, R. y F. (1988), pp. 147-148.
- *Después del aumento* (editorial), 1823, Ecclesia (1977-I), p. 3.
- *Diga usted lo que piensa sobre el Concordato* (editorial), V.N. (1971-II), p. 5.

- *Ecclesia pregunta a Bernardo Herráez, vicesecretario económico de la Conferencia Episcopal española*, 2119, *Ecclesia* (1983-I), p. 23.
- *El acuerdo con la Santa Sede ha sido firmado por el Ministro de Asuntos Exteriores y el Nuncio de Su Santidad. Actos oficiales de congratulación. Declaraciones del señor Serrano Suñer*, 12, *Ecclesia* (1941), pp. 16-17.
- *El acuerdo con Roma (editorial)*, 13, *Ecclesia* (1941), p. 2.
- *El acuerdo firmado con la Santa Sede*, 12, *Ecclesia* (1941), pp. 16-17.
- *El anteproyecto del Concordato preparado conjuntamente por la Santa Sede y la Embajada de España*, 1523, *Ecclesia* (1971-I), p. 27.
- *El anteproyecto del Concordato será remitido a Roma*, 1533, *Ecclesia* (1971-I), p. 25.
- *El camino de los acuerdos específicos (editorial)*, 1801, *Ecclesia* (1976-II), pp. 3-4.
- *El Concordato entre España y la Santa Sede fue firmado por el prosecretario de Estado, monseñor Tardini y los señores Martín Artajo y Castiella*, 633, *Ecclesia* (1953-II), p. 10.
- *El Concordato sigue vigente*, 702, V.N. (1969), p. 5.
- *El Convenio con la Santa Sede (editorial)*, 262, *Ecclesia* (1946-II), p. 3.
- *El “discurso eclesial” sobre la financiación de la Iglesia y la asignación tributaria*, 80-3, 944, S.T. (1992-I), pp. 209-222 -redacción de Sal Terrae-.
- *El espíritu del Concordato (editorial)*, 853, V.N. (1972-II), p. 5.
- *El Estado firma acuerdos con judíos y protestantes*, 2465, *Ecclesia* (1990-I), p. 16.
- *El Fondo Común Interdiocesano supera los 17.000 millones de pesetas*, 2506, *Ecclesia* (1990-II), p. 11.
- *El “impuesto religioso” a punto*, 1907, *Ecclesia* (1978-II), p. 30.
- *El Ministro de Justicia habla sobre las relaciones Iglesia-Estado*, 682, V.N. (1969-I), p. 7.
- *El Parlamento Europeo ante las sectas*, 3, P.E. (1984), pp. 381-383.
- *El Patrimonio de la Iglesia (editorial)*, 17, *Ecclesia* (1941), pp. 3-4.
- *El problema de la paga de los sacerdotes*, 668, V.N. (1969-I), pp. 3-4.
- *El rey de España visitará al Papa el próximo mes de febrero. Intercambios eclesiales España-Alemania*, 1822, *Ecclesia* (1977-I), pp. 33-34.

- *El 0'5239 por ciento (editorial)*, 2372, *Ecclesia* (1988-I), p. 5.
- *Encuesta sobre los Concordatos en Europa*, 776, V.N. (1970), pp. 11-13.
- *Experiencia del arzobispado de París sobre dotación del clero (recogido en Ecclesia, 1391 del 25 de mayo 68, p. 37)*, XV, 60, *Colligite* (1969), p. 67.
- *Firmados los Acuerdos entre la Santa Sede y España*, 1916, *Ecclesia* (1979-I), p. 27.
- *Fondo Común Interdiocesano. Año 1992*, 2556, *Ecclesia* (1991-II), p. 7.
- *Fondo Común Interdiocesano para el año 1988*, 2348, *Ecclesia* (1987-II), p. 10.
- *Futura Constitución y Concordato. Varios puntos en conflicto*, 1883, *Ecclesia* (1978-I), p. 29.
- *Graves dificultades económicas (editorial)*, 1701, *Ecclesia* (1974-II), pp. 3-4.
- *Hacia un nuevo Concordato (editorial)*, 1512, *Ecclesia* (1970-II), p. 3.
- *¿Hay Concordato? (editorial)*, 447, *Ecclesia* (1950-I), pp. 3-4.
- *Iglesia-Estado: nueva situación. (Comentario técnico a los acuerdos parciales)*, 1163, V.N. (1979-I), pp. 23-30.
- *Iglesia y Estado inician una etapa de contactos para revisar la aplicación de los Acuerdos*, 2538, *Ecclesia* (1991-II), p. 13.
- *Imposta decennale -Benefici ecclesiastici- Esenzione*, L, I, D.P.T. (1979), pp. 1121-1122.
- *Instrucción pastoral de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española sobre la ayuda económica a la Iglesia*, 2369, *Ecclesia* (1988-I), pp. 22-26 y 2372, *Ecclesia* (1988-I), pp. 5-13.
- *La asignación tributaria, una forma de contribuir al sostenimiento económico de la Iglesia*, 2533, *Ecclesia* (1991-I), p. 9.
- *La dotación estatal a la Iglesia española*, 1575, *Ecclesia* (1972-I), pp. 25-27.
- *La economía de la Iglesia, problema urgente (editorial)*, 1776, *Ecclesia* (1976-I), pp. 3-4.
- *La firma del Concordato (editorial)*, 633, *Ecclesia* (1953-II), pp. 3-4.
- *La Iglesia necesita el apoyo económico de sus fieles*, 2451, *Ecclesia* (1989-II), p. 11.
- *La Iglesia pide dinero (editorial)*, 227, 1131, R. y F. (1993), pp. 16-20.
- *La revisión del Concordato definitivamente sobre el tapete*, 926, V.N. (1974-I), pp. 6-7.

- “Las CCP no quieren acuerdos”. Carta de las “Comunidades Cristianas Populares de Madrid” al Nuncio Apostólico de Su Santidad, 1161, V.N. (1979-I), p. 18.
- *Las conversaciones Iglesia-Estado. Progresan los trabajos de las Comisiones de Estudio. No hay aún fecha para la firma de nuevos acuerdos*, 1813, Ecclesia (1976-II), p. 4.
- *Las finanzas de nuestra Iglesia (editorial)*, 1863, Ecclesia (1977-II), p. 3.
- *Las finanzas eclesíásticas (entrevista a Mons. Ramón Malla Call)*, 175, Palabra (1980), pp. 21-23.
- *La situation financière du Saint-Siège. Communiqué du Conseil des cardinaux, 1952, D.C. (20 décembre 1987)*, p. 1161.
- *Le confessioni religiose “note” in Italia. Un elenco*, 4, Q.D.P.E. (1987), pp. 83-93.
- *Les finances du Pape. Communication de la Conférence épiscopale d’Allemagne, 1919, D.C. (1 juin 1986)*, pp. 574-476.
- *Les finances du Saint-Siège: le déficit s’accroît. Communiqué du Conseil de cardinaux, 1982, D.C. (16 avril 1989)*, p. 386.
- *Les finances du Saint-Siège: réunion à Rome des présidents des Conférences épiscopales (8-9 avril), 2029, D.C. (2 juin 1991)*, pp. 553-554.
- *Les problèmes économiques du Saint-Siège et de la Cité du Vatican. Communiqué de la Salle de presse du Saint-Siège, 1895, D.C. (5 mai 1985)*, p. 492.
- *Los acuerdos en la prensa española*, 1917, Ecclesia (1979-I), pp. 21-22.
- *Los acuerdos, un paso más (editorial)*, 1945, Ecclesia (1979-III), p. 3.
- *Los aumentos para Obligaciones Eclesiásticas en el nuevo Presupuesto*, 16, Ecclesia (1941), p. 6.
- *Los haberes del clero (editorial)*, 1813, Ecclesia (1976-II), p. 3.
- *Los nuevos acuedos España-Santa Sede: una larga y complicada Historia*, 1917, Ecclesia (1979-I), pp. 16-17.
- *Los recientes Acuerdos Iglesia-Estado español camino abierto a concordia*, 1803, Ecclesia (1976-II), pp. 34-35.
- *Más despejado el camino hacia la actualización del Concordato*, 937, V.N. (1974-I), pp. 6-9.
- *Más libertad económica (editorial)*, 1599, V.N. (1987-II), p. 5.
- *¿No somos capaces de ayudar directamente a la Iglesia?*, 1159, II, V.N. (1978), p. 7.

- *Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores en torno al concordato entre la Santa Sede y España*, 1529, *Ecclesia* (1971-I), p. 23.
- Notorio arraigo (editorial), 2759, *Ecclesia* (1992-I), p. 5.
- ¿Novedades sobre el Concordato?, 797, V.N. (1971-II), pp. 29-31.
- Nuestros Obispos ante la revisión del Concordato (editorial), 1530, *Ecclesia* (1971-I), pp. 3-4.
- Nueva etapa de cooperación e independencia entre la Iglesia y el Estado, 1962, *Ecclesia* (1979-II), p. 28.
- Nueva ordenación económica de la Iglesia española, 2042, *Ecclesia* (1981-II), pp. 21-24.
- *Nuevas relaciones Iglesia-Estado*, 182, 875, 6, R. y F. (1970), pp. 427-434.
- *Por fin, acuerdos parciales* (editorial), 1917, *Ecclesia* (1979-I), p. 3.
- *Por una Iglesia autofinanciada* (editorial), 216, R. y F. (1987), pp. 941-944.
- *Puntualizaciones sobre un Anteproyecto de Concordato*, 763, V.N. (1971-II), p. 7.
- *Relaciones Iglesia-Estado* (editorial), 1574, *Ecclesia* (1976-I), pp. 3-4.
- *Relaciones Iglesia y Estado*, XLVI, 397, H.D. (1969), pp. 503-508.
- *Religión y economía*, 1, R.I.E.E. (1986) -número monográfico-.
- *Remuneración del clero* (editorial *Ecclesia*), XV, 60, *Colligite* (1969), pp. 43-44.
- *Resultado de la asignación tributaria* (editorial), 2416-2417, *Ecclesia* (1989-I), p. 5.
- *Sectas y "nuevas religiones" en España*, 3, P.E. (1984), pp. 384-385.
- *Sobre el llamado "impuesto religioso"* (editorial), 1910, *Ecclesia* (1978-II), p. 3.
- *Sobre los nombramientos de obispos*, XLIII, 364, H.D. (1966), pp. 436-438.
- *Sondeo de opinión sobre el Concordato*, 766, V.N. (1971-II), pp. 32-35.
- *Texto íntegro del Acuerdo firmado en Roma entre la Santa Sede y el Gobierno español*, 1801, *Ecclesia* (1976-II), p. 46.
- *Texto íntegro del Convenio entre la Santa Sede y el Gobierno español para la provisión de beneficios no consistoriales*, 262, *Ecclesia* (1946-II), pp. 7-8.
- *Todavía el 0'5*, 2532, *Ecclesia* (1991-I), p. 5.
- *Toledo: el Ayuntamiento cobra impuestos a la Iglesia*, 248, *Palabra* (1986), p. 139.

- *Tras la vista de Areilza a Roma. Se busca: voluntad, unanimidad y concordia*, 1786, Ecclesia (1976-I), pp. 31-33.
- *Tras los acuerdos empieza el camino (editorial)*, 1950, Ecclesia (1979-I), p. 3.
- *Tribunal constitucional: Sentencia sobre inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley de Presupuestos del Estado para 1981*, 72, H.P.E. (1981), pp. 173-187.
- *Una semana de negociación y todavía silencio oficial*, 942, V.N. (1974-I), p. 6.
- *Unos siete mil millones (editorial)*, 2481, Ecclesia (1990-I), p. 5.
- *Vaticano. Los problemas económicos*, 1479, V.N. (1985-I), p. 38.
- *Veinte años de Concordato (editorial)*, 1656, Ecclesia (1973-II), pp. 3-4.
- *4 Acuerdos Iglesia-Estado. Fin de una etapa*, 1162, V.N. (1979-I), pp. 19-30.

#### AA.VV.

- AA.VV., *Concepto jurídico de secta*, 2, D. y O. (1994), pp. 25-36.
- AA.VV., *La igualdad jurídica de las confesiones religiosas*, 17, R.J.C.M. (1993), pp. 311-320.
- AA.VV., (por orden cronológico), *Legislación del Estado español, Sistema fiscal*, I, A.D.E.E. (1985), p. 462.
  - *Legislación del Estado español. Régimen económico*, IV, A.D.E.E. (1988), pp. 641-642.
  - *Legislación del Estado español. Régimen económico*, V, A.D.E.E. (1989), pp. 355-356.
  - *Legislación del Estado español. Régimen económico*, VI, A.D.E.E. (1990), p. 441.
  - *Legislación del Estado español. Asignación Tributaria*, VIII, A.D.E.E. (1992), p. 355.
  - *Legislación del Estado español. Asignación Tributaria*, IX, A.D.E.E. (1993), pp. 350-351.
  - *Legislación del Estado. Regimen Económico*, X, A.D.E.E. (1994), p. 496.
- AA.VV., *Nuovi movimenti religiosi: problematichi nazionali*, 4, Q.D.P.E. (1987), pp. 35-70.
- AA.VV., *Osservatorio regionale 1986*, 3, Q.D.P.E. (1986), pp. 297-316.
- AA.VV., *Religione e politica*, 2, Q.D.P.E. (1985), pp. 3-19.
- AA.VV., *Sectas religiosas atípicas en el Derecho español*, 17, R.J.C.M. (1993), pp. 337-363.

- AA.VV., *Transformazioni del sacro, secolarizzazione, nuovi movimenti religiosi*, 4, Q.D.P.E. (1987), pp. 9-33.

## A

- A.B., *Entrevista Pablo VI. Conversación privada a la sombra del Concordato*, 1852, Ecclesia (1977-II), p. 25.

- ACCIAL, R., *La Direzione generale degli Affari dei Culti presso il Ministero dell'interno*, CI, 4, D.E. (1990), pp. 497-508.

- ACÉBAL LUJÁN, L., *La exención de los religiosos y su cooperación al apostolado*, XCI, L.C.T. (1964), pp. 259-310.

- ADAMI, F.E., *I controlli canonici e civili sull'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici*, CXI, M.E. (1986, I-II), pp. 69-85.

- A.G., *Los Concordatos. Su origen é historia. Su carácter*, I, R.E. (1907), pp. 14-17; 114-118; 270-273; 316-319; 549-553.

- AGUADO SANTOS, J., *Desamortización eclesiástica de fincas urbanas en Ronda y Antequera*, XXV, 28, Gibralfaro (1976), pp. 57-70.

- AIMONE BRAIDA, P.V., *Partecipazione del potere civile nella nomina dei Vescovi in accordi conclusi dalla Santa Sede con i Governi civili tra il 1965 e il 1976*, L, 3-4, Apollinaris (1977), pp. 572-586.

- AINIS, M., *Azioni positive e principio d'eguaglianza*, XXXVII, 1, G.C. (1992), pp. 582-608.

- AIZPÚN, L., *El sostenimiento del Culto y clero en diversas regiones*, 5, 29, R.E. (1934), pp. 573-581.

- ALBARRÁN, A., *Cómo funciona la economía en la Iglesia de España*, 4-5, P.M. (1979), pp. 265-280.

- ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, C., *La financiación de las iglesias*, 14, R.E.D.F. (1977), pp. 325-341.

- ALDANONDO, I., *El registro de entidades religiosas*, VII, A.D.E.E. (1991), pp. 13-47.

- ALDEA VAQUERO, Q., *Iglesia y Estado en la España del siglo XVII. (Ideario político-ecclesiástico)*, XXXVI, M.C. (1961), pp. 143-544.

- *La economía de las iglesias locales en la Edad Media y Moderna*, XXVI, H.S. (1973), pp. 27-68.

- *La libertad religiosa en las Constituciones españolas del siglo XIX*, XL, 77, M.C. (1982), pp. 327-338.

- ALEGRÍA, J., *¿Cómo se deshará la Iglesia de sus riquezas? Pregunta del Cardenal Maurer en una Carta Pastoral*, 796, V.N. (1971-II), pp. 16-17.
- ALENDA SALINAS, M., Los acuerdos de cooperación del Estado español con judíos, protestantes y musulmanes, como garantía y regulación de objeciones de conciencia, LI, 608, R.G.D. (1995), pp. 4787-4817.
- ALIANA GIRBÉS, J., *Moralidad de las exacciones tributarias del Reino de Valencia en el siglo XVI según Miguel Bartolomé Saló*n, O.S.A. (1539?-1621), 16, A.A. (1968), pp. 103-173.
- ALONSO, S., *La exención de los religiosos*, 57, 2-3, 171-172, L.C.T. (1938), pp. 224-252.
- ALONSO BÁRCENA, F., *La compañía de Jesús, restablecida*, 115, R. y F. (1938), pp. 97-121.
  - *Los haberes del Clero y la cultura española*, 75, R. y F. (1926), pp. 519-526.
  - *Los haberes del Clero y la cultura española*, 76, R. y F. (1926), pp. 5-16.
- ALONSO DE ANTONIO, J.A., *El derecho a la libertad religiosa en la Constitución española de 1978: artículo 16*, 2 (monográfico), R.F.D.U.C.N.E. (1979), pp. 223-256.
- ALONSO GARCÍA, E., *El principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española*, I, 100-102, R.A.P. (1983), pp. 21-92.
- ALONSO GIRBÉS, J., *Moralidad de las exacciones tributarias del Reino de Valencia en el siglo XVI según Miguel Bartolomé Saló*n, O.S.A (1539?-1621), 16, A.A. (1968), pp. 103-173.
- ALONSO LOBO, A., *Las actividades de la Acción Católica según el Concordato español*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 91-115.
- ALONSO MORÁN, S., *Derechos y obligaciones de los beneficiados*, XVII, 49, R.E.D.C. (1962), pp. 89-112.
  - *El derecho de patronato*, XV, 45, R.ED.C. (1960), pp. 541-578.
  - *La porción parroquial*, III, R.E.D.C. (1950), pp. 833-858.
  - *Los clérigos y los cargos públicos en el Concordato español*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 79-89.
  - *Problemas sobre bienes eclesiásticos que presenta el derecho de los religiosos*, I, R.E.D.C. (1950), PP. 249-263.
- ALONSO-VEGA ÁLVAREZ, J.M<sup>a</sup>., *La objeción de conciencia al servicio militar y la objeción a la conciencia fiscal*, XLVI, 543, R.G.D. (1989), pp. 7855-7878.
- ÁLVAREZ CONDE, E., *La Constitución española de 30 de junio de 1876: cuestiones previas*, 3, R.E.P.N.E. (1978), pp. 79-99.

- ÁLVAREZ CORTINA, A.-C., *Los Acuerdos con las Confesiones religiosas distintas a la Iglesia católica en la doctrina española*, VIII, A.D.E.E. (1992), pp. 567-578.
- ÁLVAREZ DE TOLEDO, J., *La Iglesia católica en la Constitución*, II, 19-20, R.D.Púb. (1933), pp. 193-206.
- ÁLVAREZ-SALA DE WALTHER, J., *Varios autores: "Los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español"*. *Ius Canonicum*. Vol. XIX, núm. 37, enero-junio 1979, 441 págs., XXXIV, II, A.D.C. (1981), pp. 475-484.
- AMBROSETTI, G., *Ateismo y diritto*, 5, 6, CCIV, A.G. (1984), pp. 659-685.
- AMORÓS RICA, N., *Reseña de la Jurisprudencia*, XL, 205, R.D.F.H.P. (1990), p. 210.
- ANCARANI, G., *A propósito del movimiento riformatore settecentesco nello Stato Pontificio*, III-IV, Jus (1962), pp. 470-478.
- ANDRÉS GALLEGÓ, J., *El convenio concordatario de 1904 entre la Santa Sede y el Estado español*, XXVI, H.S. (1973), pp. 165-208.
  - *El Estado de la Restauración (I)*, 7, R.D.Pol. (1980), pp. 133-159.
  - *El Estado de la Restauración (II)*, 8, R.D.Pol. (1981), pp. 137-168.
  - *La crítica falangista del catolicismo político: 1937*, 42, H.S. (1991), pp. 105-120.
  - *La legislación religiosa de la revolución española de 1868 (período constituyente)*, XVII, 33, I.C. (1977), pp. 275-301.
  - *Planteamiento de la cuestión religiosa en España, 1899-1902*, XII, 24, I.C. (1972), pp. 173-221.
  - *Transformación política y actitud religiosa del Gobierno largo de Maura (1907-1909)*, 189-190, R.E.P. (1973), pp. 131-164.
- ANGELIS, A., De, *I consigli per gli Affari economici: statuti e indicazioni applicative*, CXI, M.E. (1986-I-II), pp. 57-68.
- ANTOLÍ GUARCH, M., *Algunas observaciones sobre la economía en la Iglesia*, 6, A.V. (1977), pp. 299-322.
- APARICI MIRALLES, Á., *Discriminación y derecho a la igualdad. Las vías para el acceso al reconocimiento de la igualdad*, XII, A.F.D. (1995), pp. 269-300).
- ARAGÓN MATEOS, S., *Notas sobre el clero secular en el Antiguo Régimen. Los presbíteros del Obispado de Coria en el siglo XVIII*, 44, H.S. (1992), pp. 291-334.
- ARAQUE ALMENDROS, A.M.Á., (por orden cronológico), *Reseña de Jurisprudencia*, XL, 206, R.D.F.H.P. (1990), p. 455.
  - *Reseña de Jurisprudencia*, XL, 206, R.D.F.H.P. (1990), p. 468.
  - *Reseña de Jursisprudencia*, XLII, 218, R.D.F.H.P. (1992), p. 440.

- ARBELOA MURU, V.M., *Apuntes históricos en torno a la Ley de libertad religiosa*, XXIII, 66, R.E.D.C. (1967), pp. 711-721.

- *Cien años por la libertad religiosa. (La Libertad Religiosa y las Juntas Revolucionarias de 1868)*, XXIV, 68, R.E.D.C. (1968), pp. 419-424.
- *El nombramiento de Obispos durante la Dictadura y la II República*, XXXI, 88, R.E.D.C. (1975), pp. 143-175.
- *El proyecto de Concordato del Padre Postúus en 1934*, XXIX, 82, R.E.D.C. (1973), pp. 205-226.
- *El proyecto de Constitución de 1931 y la Iglesia*, XXXII, 91, R.E.D.C. (1976), pp. 87-109.
- *En torno al "modus vivendi" de España con el Vaticano en 1934*, 33, 95-96, R.E.D.C. (1976), pp. 87-109.
- *Iglesia y Estado en el anteproyecto de Constitución de 1931*, XXVII, 77, R.E.D.C. (1977), pp. 313-347.
- *Iglesia y República: diálogo imposible*, 60, Historia 16, pp. 70-77.
- *La separación de la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1931*, 34, 98, R.E.D.C. (1978), pp. 347-374.
- *Los esfuerzos de la Jerarquía española por un acuerdo con el Estado en materia religiosa, en 1931*, XXVI, 75, R.E.D.C. (1970), pp. 661-673.
- *Los obispos ante la ley de unificación de fueros (notas históricas al Decreto de 6 de diciembre de 1868)*, XXIX, 83, R.E.D.C. (1973), pp. 431-460.
- *Religión e Iglesia en las Constituciones españolas (1808-1931)*, 8, P.M. (1977), pp. 646-660.
- *1931. Cuando los curas no recibían sueldo del Estado*, 900, V.N. (1973-II), pp. 23-33.

- ARECES PIÑOL, M<sup>a</sup>. T., *Las fronteras entre la libertad religiosa y la libertad ideológica*, X, A.D.E.E. (1994), pp. 13-68.

- ARIMON, G., *La sustentación del clero*, 140, Palabra (1977), pp. 20-24.

- ARMESTO MACÍAS, D., *Comentarios en torno al régimen de las entidades sin ánimo de lucro*, 19, Q.F. (1993), pp. 105-115.

- ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, J., *La objeción de conciencia fiscal: a propósito del auto del Tribunal Constitucional de 1 de marzo de 1993*, 68, Cr. T. (1993), pp. 97-115.

- ARRIVI, Á., *Cáritas, gran beneficiaria en el reparto de las ayudas con cargo al 0'5 del IRPF*, 2698-99, Ecclesia (1994-II), p. 6.

- ARZA ARTEAGA, A., *Derecho patrimonial y Concordato*, XXXV, 66, M.C. (1977), pp. 77-151.

- *El impuesto religioso*, 1159, V.N. (1978-II), pp. 23-30.
- *Influencia de la ley de las confesiones y congregaciones religiosas de 1933 en la ley de libertad religiosa de 1967*, 194, R.E.P. (1974), pp. 171-207.

- *La ayuda estatal a la Iglesia en los diversos países del mundo*, 4-5, P.M. (1979), pp. 281-284.
- *Reflexiones sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado*, XXXIX, 336, H.D. (1963), pp. 761-767.
- ARZAGA, A., *El impuesto religioso*, 1159, II, V.N. (1978), pp. 23-30.
- ASTARLOA VILLENA, F., *Los derechos y libertades en las constituciones históricas españolas*, 92, R.E.P.N.E. (1996), pp. 207-250.
- ATTARD, E., (por orden cronológico), *Constitucionalismo español: 1808-1978. Ensayo histórico-jurídico*, XLIII, 508-509, R.G.D. (1987), pp. 49-76.
  - *Constitucionalismo español: 1808-1978. Ensayo histórico-jurídico*, XLIII, 510, R.G.D. (1987), pp. 759-774.
  - *Constitucionalismo español: 1808-1978. Ensayo histórico-jurídico*, XLIII, 511, R.G.D. (1987), pp. 5491-5528.
  - *Constitucionalismo español: 1808-1978. Ensayo histórico-jurídico*, XLIII, 516, R.G.D. (1988), pp. 4749-4789.
  - *Constitucionalismo español: 1808-1978. Ensayo histórico-jurídico*, XLIV, 517-518, R.G.D. (1987), pp. 5513-5531.
  - *Constitucionalismo español: 1808-1978. Ensayo histórico-jurídico*, XLIV, 519, R.G.D. (1987), pp. 6323-6338.
  - *Constitucionalismo español: 1808-1978. Ensayo histórico-jurídico*, XLIV, 520-521, R.G.D. (1987), pp. 95-111.
  - *Constitucionalismo español: 1808-1978. Ensayo histórico-jurídico*, XLIV, 522, R.G.D. (1988), pp. 879-892.
  - *Constitucionalismo español: 1808-1978. Ensayo histórico-jurídico*, XLIV, 524, R.G.D. (1988), pp. 2557-2572.
  - *Constitucionalismo español: 1808-1978. Ensayo histórico-jurídico*, XLIV, 525, R.G.D. (1988), pp. 3397-3420.
  - *Constitucionalismo español: 1808-1978. Ensayo histórico-jurídico*, XLIV, 526-527, R.G.D. (1988), pp. 4241-4261.
  - *Constitucionalismo español: 1808-1978. Ensayo histórico-jurídico*, XLIV, 528, R.G.D. (1988), pp. 5031-5049.
- AVILÉS GARCÍA, J., *Desarrollo jurisprudencial del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española de 1978*, 3, La Ley (1990), pp. 828-837.
- AZAGRA ROS, J., *Notas acerca de la desamortización de propios y comunes en la provincia de Valencia y su contexto histórico (1854-1855)*, III, 6, A.V. (1977), pp. 377-408.
- AZNAR GIL, F.R., *El Fondo Diocesano de la sustentación del clero* (c. 1274 § 1), 48, 131, R.E.D.C. (1991), pp. 619-647.
  - *La “conveniente remuneración” de los clérigos en el Código de Derecho Canónico* (c. 281, § 1), CXIII, 371, 3, C.T. (1986), pp. 527-581).

- *La Nueva Ordenación Económica de la Iglesia española. (Textos y comentarios)*, 38, 110, R.E.D.C. (1982), pp. 313-365.
- *La retribución económica de los sacerdotes en el ordenamiento canónico español*, 43, 121, R.E.D.C. (1986), pp. 411-479.
- *Los Obispos españoles ante la asignación tributaria (1988-1993)*, 51, 136, R.E.D.C. (1994), pp. 83-113.

## B

- BAENA DEL ALCÁZAR, M., *Iglesia y comunidades eclesiales frente a la administración del Estado*, XXXV, 66, M.C. (1977-I), pp. 209-225.
- *Los acuerdos entre las comunidades autónomas y las diócesis o provincias eclesiásticas españolas*, 62, 242-243, E.E. (1987), pp. 283-300.
- BAJET, E., *Acuerdos entre la Generalitat de Cataluña y la Iglesia Católica. Presupuestos doctrinales*, XXIII, 46, I.C. (1983), pp. 825-878.
- BALDI, S., *Le conferenze episcopali e le relazioni di diritto concordatario*, 2-3, CCX, A.G. (1990), pp. 319-349.
- BAÑO LEÓN, J.M<sup>a</sup>., *La igualdad como derecho público subjetivo*, 114, R.A.P. (1987), pp. 179-195.
- BARBERINI, G., *El artículo 11 de la Constitución de 1876. La controversia diplomática entre España y la Santa Sede*, 9, A.A. (1961), pp. 279-409.
- *La rilevanza del fattore religioso nella politica internazionale. Riflessione su recenti avvenimenti*, 2, Q.D.P.E. (1989), pp. 275-287.
- *L'attenzione delle Nazioni Unite per la libertà religiosa*, 4, Q.D.P.E. (1987), pp. 201-228.
- BARBIERI, L., *I beni temporali della Chiesa in Italia: nuova normativa canonica e concordataria*, 4, D.E. (1985), pp. 679-684.
- *Sul principio di ragionevolezza. Eguaglianza e libertà delle confessioni religiose*, 3-4, D.E. (1994), pp. 747-767.
- BARBUTO, V., *Ancora qualche considerazione in margine alla vicenda I.O.R.- Banco Ambrosiano*, 1, Q.D.P.E. (1989), pp. 533-558.
- BARILE, P., *Eguaglianza e tutela delle diversità in Costituzione*, XIV, 1, Q.C. (1994), pp. 53-61.
- BARRIALES, A., *Finanzas vaticanas: cuentas claras*, 2039, Ecclesia (1981-II), pp. 38-39.

- BARRIO GOZALO, M., *Los diezmos y primicias en la Diócesis de Segovia en el siglo XVIII*, 7, C.I.H. (1983), pp. 133-145.
- *Sociedad, Iglesia y vida religiosa en la España del siglo XVIII. Notas para un estudio monográfico económico y socioreligioso*, 36, A.A. (1989), pp. 273-316.
- BARLETT, C.J., *La question of religious toleration in Spain in the nineteenth century*, 8, J.E.H. (1957), pp. 205-216.
- BARTOLOMÉ, J.J., *Jesús ante el dinero. "Nadie puede servir a dos señores"*, 78-6, S.T. (1990), pp. 449-459.
- BASCOMPTE, A., *Acuerdo sobre Asuntos Económicos*, XXVIII, 335, El Ciervo (1979), pp. 10-11.
- *Asignación tributaria y autofinanciación*, 134-135, 2-3, Iglesia Viva (1988), pp. 293-302.
- BASDEVANT-GAUDEMET, B., *Office ecclésiastique points de repères pour une histoire d'un concept*, 39, L'A.C. (1997), pp. 7-20.
- BASSET, W., *Mantenimiento de la Iglesia por los fieles*, 137, II, Concilium (1978), pp. 499-512 -tr. por A. Sanz-.
- BASTERRA MONTSERRAT, D., *Acuerdo Estado Español-Federación Evangélica*, VII, A.D.E.E (1991), pp. 579-588.
- BAYERLEIN, W., *La función de los seglares*, 137, Concilium (1978-II), pp. 567-577 -tr. de J. Larriba-.
- BAYLE, C., *El mundo católico y la Carta colectiva del Episcopado español*, 114, R. y F. (1938), pp. 241-261.
- BEITIA, Mons. E., *Política concordataria*, 634, Ecclesia (1953-II), pp. 8-10.
- BELGIORNO DE STEFANO, M<sup>a</sup>. G., *La libertà religiosa, nelle sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, 1, Q.D.P.E. (1989), pp. 285-290.
- BELLINI, P., *Delimitazione del principio di "libertà religiosa" nella Chiesa*, XXX, 1-4, E.I.C. (1974), pp. 116-133.
- *El pluralismo de opciones sobre el hecho religioso y el objeto del Derecho de libertad religiosa*, I, 90, R.D.Púb. (1983), pp. 23-43 -tr. de M<sup>a</sup>. E. Buqueras Segura-.
- *L'ateismo nel sistema delle libertà fondamentali*, 2, Q.D.P.E. (1985), pp. 85-100.
- *Los países concordatarios de Europa meridional*, II, 177, Concilium (1982), pp. 68-74 -tr. de A. De La Fuente-.

- BELTRÁN FUSTEROS, L., *Rasgos más destacados del régimen jurídico de las propiedades de la Iglesia católica*, 408-409, R.C.D.I. (1962), pp. 306-351.
- BENAVENT, E., *La libertad religiosa*, 15-16, C.R. (1984), pp. 49-54.
- BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R., *El diezmo de los moriscos en el Obispado de Málaga*, 4, *Estudis* (1975), pp. 163-177.
- BENVENUTI, F., *Sopravvivenza e autonomia delle Opere pie avventi finalità religiose*, III, *Jus* (1978), pp. 293-302.
- BERGER, V., LABAYLE, H., y SUDRE, F., *Droit administratif et Convention européenne des droits de l'homme*, 5, R.F.D.A. (1991), pp. 834-854.
- BERLINGÒ, S., *Gli enti e il patrimonio della Chiesa*, III, D.E. (1984), pp. 277-320.
  - *I "principio pattizio": una garanzia costituzionale "forte" per i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose*, XXVII, 1, P.D. (1996), pp. 49-65.
  - *Per una politica del diritto in materia ecclesiastica*, LXXXVIII, I, D.E. (1977), pp. 72-88.
- BERMEJO, R., y RAMÓN, C., *Reflexiones sobre la libertad de religión en el ámbito europeo*, 65, XXXIII, I.C. (1993), pp. 31-46.
- BERMEJO CABRERO, J.L., *Dos aproximaciones a la Hacienda del Antiguo Régimen*, LXII, A.H.D.E. (1992), pp. 159-227.
- BERNABÉ, J.A., *Hacia un nuevo estatuto económico de la Iglesia española*, 59, 3, S.T. (1971), pp. 208-222.
- BERNÁRDEZ CANTÓN, A., *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*, II, R.E.D.C. (1957), pp. 382-397.
  - *Sobre los Acuerdos con la Santa Sede*, 37, 106-107, R.E.D.C. (1981), pp. 239-243.
- BERNARDIS, L.M<sup>a</sup>., *De, Può un ente ecclesiastico essere considerato commerciante?*, XXXIX, II, D.P.T. (1968), pp. 506-509.
- BERNHARD, J., *El Concilio de Trento y la elección de obispos*, 157, III, *Concilium* (1980), pp. 41-52 -tr. de J. Valiente Malla-.
- BERTOLA, A., *Attività concordataria e codificazione del diritto della Chiesa*, CXI, II, A.G. (1934), pp. 137-177.
- BERTOLINO, R., *La libertad de conciencia: el hombre ante los ordenamientos estatales y confesionales*, III, A.D.E.E. (1987), pp. 39-68.

- BIDAGOR, R., *La Iglesia propia durante la reconquista española*, 95, R. y F. (1931), pp. 224-241.
  - *Los sujetos de patrimonio eclesiástico y el “ius eminens” de la Santa Sede*, I, R.E.D.C. (1950), pp. 25-40.
- BIGORDA, J., *Acuerdos entre la Santa Sede y el Gobierno español*, XXVIII, 335, El Ciervo (1979), pp. 7-8.
  - *La nueva política religiosa*, 79, I.V. (1979), pp. 17-23.
- BLACH, A., *Le Concordat entre le Saint-Siège et l’Espagne*, LXXXVI, N.R.Th. (1954), pp. 506-523.
- BLANCO, M<sup>a</sup>., *La cooperación del Estado español con las confesiones religiosas. Especial referencia a la cooperación económica*, 76, I.C. (1998), pp. 523-570.
- BLANCO NÁJERA, F., *Actual estado jurídico del derecho de Patronato de España*, LXXXV, 168, R.G.L.J. (1936), pp. 693-717.
  - *Comentario a la Ley de Congregaciones Religiosas*, V, 25, R.E. (1933), pp. 174-180.
  - *Comentario a la Ley de Congregaciones Religiosas*, V, 26, R.E. (1933), pp. 301-312.
- BLANCO PIÑÁN, S., *Vivir del altar*, XV, 60, Colligite (1969), pp. 39-41.
- BLANCO ZULOAGA, J., *Granada. Hacia la autofinanciación*, 1689, V.N. (1989-I), p. 17.
- BLANO PIÑÁN, S., *En pro y en contra de la paga del Estado*, XV, 60, Colligite (1969), pp. 61-66.
- BODEN, A., *Las cuentas (¡por fin!) claras. Economía de la iglesia, tema-príncipe de la próxima Plenaria Episcopal*, 103-104, V.N. (1977-II), pp. 8-9.
- BOMPRESZI, A., *Considerazioni su pluriconfessionismo e laicità nel sistema delle fonti del diritto ecclesiastico*, 3, D.E. (1993), pp. 587-602.
  - *Sana collaborazione tra Chiesa e Stato e perseguimento del bene comune*, 3-4, D.E. (1994), pp. 945-961.
- BONET, A., *Dinero para la Acción Católica*, 244, Ecclesia (1946-I), p. 11.
  - *Dinero para la Acción Católica*. II, 245, Ecclesia (1946-I), p. 8.
  - *Dinero para la Acción Católica*. III, 246, Ecclesia (1946-I), pp. 10 y 26.
  - *Dinero para la Acción Católica*. IV, 249, Ecclesia (1946-I), p. 6.
  - *Dinero para la Acción Católica*. V, 251, Ecclesia (1946-I), p. 12.
  - *Dinero para la Acción Católica*. VI, 252, Ecclesia (1946-I), p. 12.

- *El apostolado y el factor económico*, 698, Ecclesia (1954-II), pp. 11-12.
- BONET MUIXI, M., *Gestión del patrimonio eclesiástico: administración*, I, R.E.D.C. (1950), pp. 111-141.
- BORDEJÉ, M., *Aplazados los acuerdos hasta la Constitución*, 1896, Ecclesia (1978-II), p. 29.
  - *¿Habrá “impuesto religioso”?*, 1871, Ecclesia (1978-I), p. 30.
  - *Iglesia-Estado: ¿conclusión de los acuerdos?*, 1884, Ecclesia (1978-I), p. 29.
  - *Independencia y colaboración, tónica de los “acuerdos específicos”*, 1917, Ecclesia (1979-I), p. 29.
  - *La dotación económica de la Iglesia*, 1903, Ecclesia (1978-II), p. 27.
  - *La dotación económica de la Iglesia. ¿Un cambio importante llamado “impuesto religioso”?*, 1903, Ecclesia (1978-II), p. 27.
  - *La economía de la Iglesia y la futura Constitución española temas de la XXVII Asamblea del Episcopado*, 1863, Ecclesia (1977-II), p. 30.
  - *La Iglesia católica mencionada en la Constitución*, 1894, Ecclesia (1978-II); p. 24.
  - *La Iglesia en España*, 1820, Ecclesia (1977-I), pp. 59-63.
  - *La Iglesia en la Constitución*, 1895, Ecclesia (1978-II), p. 29.
  - *Negociaciones Iglesia-Estado: un nuevo y sorprendente estancamiento*, 1832, Ecclesia (1977-I), p. 57.
  - *¿Parón en las conversaciones concordatarias?*, 1848, Ecclesia (1977-II), p. 30.
- BORDONALI, S., *I rapporti concordatari tra Santa Sede, Italia e Spagna. (A proposito di un recente Convegno)*, II, D.E. (1980), pp. 395-408.
- BOYLE, P.M., *Las congregaciones religiosas*, 137, Concilium (1978-II), pp. 524-540 -tr. de J. Valiente Malla-.
- BRAVO CARO, J.J., *El arrendamiento de los diezmos del Obispado malagueño en el siglo XVI*, 12, Baética (1989), pp. 177-185.
- BRETAL VÁZQUEZ, J.M., *Acuerdos con las confesiones no católicas, (Ley paccionada, Ley Orgánica, sistema normativo religioso)*, 130, R.A.P. (1993), pp. 355-386.
- BRINES BLASCO, J., *Deuda y desamortización durante el Trienio Constitucional (1820-1823)*, 124, M. y C. (1973), pp. 51-67.
  - *El proceso de amortización eclesiástica en el país valenciano*, 3, Estudios (1974), pp. 5-30.
- BUENO MONREAL, J.M<sup>a</sup>., *Las relaciones entre Iglesia y Estado en los modernos concordatos*, III, 16, R.E. (1931), pp. 497-519.
  - *Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en los modernos Concordatos*, III, 17, R.E. (1931), pp. 625-662.

- BUENO SALINAS, S., *Confesiones y entes confesionales en el Derecho español*, IV, A.D.E.E. (1988), pp. 107-133.
  - *El ámbito de amparo del derecho de libertad religiosa y las asociaciones*, XXV, 49, I.C. (1985), pp. 333-356.
- BUEY, L., De, *La Iglesia juzga "confusa" la asignación tributaria. "Hacer el bien no cuesta nada" lema de la campaña*, 1992, V.N. (1995), p. 15.
  - *Los impuestos pueden ahogar las obras benéficas eclesiales*, 1895, V.N. (1993-I), p. 11.
- BULDAIN JACA, B.E., *La implantación del nuevo régimen en 1820*, 12, C.I.H. (1989), pp. 73-80.
- BUQUERAS SEGURA, M<sup>a</sup>. E., *Estado social de Derecho y actividad de las confesiones en materia de beneficencia*, III, A.D.E.E. (1987), pp. 309-320.
  - *Las religiones alternativas y el derecho de libertad religiosa*, 0, D. y O. (1992), pp. 93-102.
  - *Posición del Episcopado español ante la revisión del Concordato de 1953*, XXIII, 45, I.C. (1983), pp. 367-417.
- BUSTOS RODRÍGUEZ, M., *Del motín de Esquilache a la inculpación de los jesuitas: visión e información portuguesas de las revueltas*, XXXIX, 79, H.S. (1987), pp. 211-234.

## C

- CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F., *Sobre la Ley de Presupuestos y límites constitucionales. Un comentario a la S.T.C. 76/1992, de 14 de mayo*, XLIII, 224, R.D.F.H.P. (1993), pp. 335-350.
- CABREROS DE ANTA, M., *La enajenación de bienes eclesiásticos*, I, R.E.D.C. (1950), pp. 193-228.
  - *Los religiosos en el Concordato de 1953*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 117-136.
  - *Reconocimiento de la personalidad civil a las personas jurídicas eclesiásticas*, VII, I, A.D.C. (1954), pp. 19-34.
- CALLAHAN, W.J., *Conflicto I República-Iglesia*, 47, Historia 16, pp. 39-46.
  - *The spanish Church and the Restoration State, 1874-1900*, 26, 2, J. Ch. S. (1984), pp. 313-332.
- CALVO, J., *Relaciones a nivel científico-constitucional entre el ordenamiento de la Iglesia y los ordenamientos estatales*, X, I.C. (1970), pp. 259-280.
- CAMACHO MARTÍNEZ, R., *Desamortización y ciudad: Málaga. La obra de Gerónimo Cuervo*, 7, Baética (1984), pp. 7-31.

- CAMARASA CARRILLO, J., *La personalidad jurídica civil de las entidades religiosas*, X, A.D.E.E. (1994), pp. 69-126.
- CAMARERO, C., *La producción agraria del siglo XVIII. El catastro de Ensenada y las Certificaciones de diezmos como fuentes para el estudio de la producción y de los rendimientos agrícolas. Análisis de un caso real: Gumiel de Hizán, 1748-1753*, XLX, 174, E.G. (1984), pp. 81-107.
- CAMARERO SUÁREZ, M., *Análisis de los acuerdos del Estado español con las confesiones religiosas no católicas desde la perspectiva de los sujetos*, XIV, 84, Tapia (1995), pp. 72-81.
  - *Las competencias en materia eclesiástica en España. Convenios entre las Iglesias y las Comunidades Autónomas*, 1, La Ley (1989), pp. 894-904.
- CAMPOS ROJAS, M<sup>a</sup>. V., *Introducción al estudio de los diezmos bajo el reinado de los Reyes Católicos*, 19, Jábega (1977), pp. 23-26.
- CANDANEDO, P.G., *Especulaciones sobre las finanzas del Vaticano*, 1064, V.N. (1977-I), pp. 19-20.
- CANO MATA, A., *Contenido de las Leyes Generales del Estado (Sentencias del Tribunal Constitucional números 65, 66 y 67/1990, de 5 de abril)*, XL, 207, R.D.F.H.P. (1990), pp. 695-704.
- CANTÓ RUBIO, J., *La nueva Europa y la Iglesia*, 51, 136, R.E.D.C. (1994), pp. 261-280.
- CAPANNA, A., *I concordati negli ordinamenti democratici ed in quelli totalitari*, 1-2, CXCI, A.G. (1976), pp. 161-165.
- CAPUTO, G., *La funzione del sistema pattizio nella Storia*, IV, A.D.E.E. (1988), pp. 39-45.
- CÁRCEL ORTÍ, V., *El clero durante la Revolución de 1868 y la Primera República española*, XLVIII, A.S.T. (1975), pp. 149-191.
  - *El clero valenciano en el ocaso del siglo XIX*, VI, 12, A.V. (1980), pp. 357-384.
  - *El nuncio Brunelli y el Concordato de 1851*, 1, A.V. (1975), pp. 79-108.
  - *Gli accordi del 1979 tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo. Commento con note storiche*, LIII, 1-2, Apollinaris (1980), pp. 83-130.
  - *Instrucciones al Nuncio Barili en 1857*, 35, 100, R.E.D.C. (1979), pp. 159-185.
  - *Instrucciones a Simeoni, primer nuncio de la Restauración*, 33, 94, R.E.D.C. (1977), pp. 143-172.
  - *La Santa Sede y la revolución de 1868*, III, 5, A.V. (1977), pp. 55-113.
  - *Los nombramientos de obispos durante el régimen de Franco*, 51, 137, R.E.D.C. (1994), pp. 503-566.

- *Los Obispos españoles ante la Revolución de 1868 y la Primera República*, XXVIII, H.S. (1975), pp. 339-442.
  - *Lo Stato italiano e le confessioni religiose: Studi giuridici sui recenti accordi*, CXI, M.E. (1986, I-II), pp. 123-129.
  - *Nombramientos de Obispos en la España del siglo XX. Algunas cuestiones canónicas concordatarias y políticas*, 50, 135, R.E.D.C. (1993), pp. 553-589.
  - *Rapporti Chiesa-Stato in Spagna dopo il 1980. Nota sul volume "Los acuerdos entre la Iglesia y España"*, 3-4, LIII, Apollinaris (1980), pp. 563-572.
  - *1874. Comienzo de un siglo de relaciones Iglesia-Estado en España*, XXX, 86, R.E.D.C. (1974), pp. 265-311.
- CARDIA, C., *Libertad e igualdad jurídica en las relaciones entre religión y ateísmo*, I, 90, R.D.Púb. (1983), pp. 45-63.
- Problemi attuali di diritto ecclesiastico, XCV, 1, S.S. (1983), pp. 10-37.
- CARDIA, F., *Riconoscimento degli enti ecclesiastici e Consiglio di Stato*, 3, D.E. (1995), pp. 631-671.
- CARDONA GREGORI, J., *Relación Estado-Iglesias en España*, 1, P.E. (1984), pp. 78-79.
- CARMONA CUENCA, E., *El principio de igualdad material en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, 84, R.E.P.N.E. (1994), pp. 265-285.
- CARNELUTTI, F., *Chiesa, Stato e persona*, 1, R.T.D.P. (1954), pp. 5-14.
- CARO LÓPEZ, C., *La reducción de las Órdenes Regulares: Documentos para un caso de política religiosa en tiempos de Carlos III*, 44, H.S. (1992), pp. 335-392.
- CARRERA RAYA, F.J., *A propósito de la "objeción fiscal"*, 5, T.F. (1991), pp. 69-71.
- CARRILLO AGUILAR, A., *Criterios para la actualización del Concordato*, 1534, Ecclesia (1971-I), pp. 17-19.
- CARRO CELADA, J.A., *Debate para las relaciones Estado-confesiones religiosas*, 2137, Ecclesia (1983-II), p. 20.
- *La nueva organización de la economía de la Iglesia española (I)*, 1860, Ecclesia (1977-II), pp. 25-27.
  - *La nueva organización de la economía de la Iglesia española (II)*, 1861, Ecclesia (1977-II), pp. 27-29.
  - *La nueva organización de la economía de la Iglesia española (III)*, 1862, Ecclesia (1977-II), pp. 25-27.
  - *Los acuerdos exigen de la Iglesia española una pastoral más creativa*, 1942, Ecclesia (1979-II), pp. 16-20.
  - *Seis mil millones de pesetas para la Iglesia*, 1909, Ecclesia (1978-II), pp. 16-17.

- CARRO MARTÍNEZ, A., *Dos notas a la Constitución de 1869*, XXXVIII, 58, R.E.P. (1951-I), pp. 87-95.
- CASANOVA AGUILAR, I., *Las Constituyentes de 1854. Origen y fisonomía general*, 37, R.E.P.N.E. (1984), pp. 135-172.
- CASAROLI, A., *La Santa Sede e la Comunità Internazionale*, XXIX, 4, L.C.I. (1974), pp. 595-611.
- CASERTA, M., *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, 2, CCXII, A.G. (1992), pp. 345-354.
- CASSATA, G., *El mito de las riquezas del Vaticano*, 258, Palabra (1987), p. 12.
  - *Los bienes eclesiásticos en Roma*, 137, Palabra (1977), p. 6.
- CASTILLA, R., *En otoño, negociación sobre el Concordato*, 895, V.N. (1973-II), p. 7.
- CASTILLO, J.M., *El modelo de Iglesia que necesita dinero*, 4-5, P.M. (1979), pp. 337-345.
- CASTILLO, S., *Las misas binadas y el título de justicia*, I, R.E.D.C. (1946), pp. 337-345.
  - *Las misas binadas y el título de Justicia*, II, R.E.D.C. (1946), pp. 493-505.
- CASTRILLEJO IBÁÑEZ, F.M<sup>a</sup>., *Consecuencias e influjo del proceso desamortizador (1822-1906) en una zona de Valladolid: Valoria la Buena*, 4, C.I.H. (1980), pp. 215-227.
- CASTRO, M., De, *Las nuevas Cortes y el presupuesto eclesiástico*, I, R.E. (1907), pp. 433-438.
- CASUSCELLI, G., *Libertà religiosa e fonti bilaterali*, III, A.D.E.E. (1987), pp. 85-100.
  - *Linee programmatiche di un "progetto" di regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia*, LXXXVIII, I, D.E. (1977), pp. 98-104.
- CATALANO, G., *Brevi considerazioni sul metodo storiografico nelle indagine dei rapporti tra Stato e Chiesa*, 2, D.E. (1994), pp. 419-426.
- CECILIO, L., *El patrimonio eclesiástico en España*, XVI, 43, R.F.D.U.C. (1972), pp. 257-296.
- CEDILLO LÓPEZ, L., (por orden cronológico), *Reseña de Jurisprudencia*, XXXIX, 203, R.D.F.H.P. (1989), pp. 1251-1252.
  - *Reseña de Jurisprudencia*, XLII, 220, R.D.F.H.P. (1992), p. 921.
  - *Reseña de Jurisprudencia*, XLII, 220, R.D.F.H.P. (1992), p. 932.

- *Reseña de Jurisprudencia*, XLII, 220, R.D.F.H.P. (1992), pp. 943-944.
- CELADA, C., *La ley de Libertad Religiosa*, aprobada sin la mención a la Iglesia Católica, 1977, *Ecclesia* (1980-I), p. 21.
- CEPEDA GÓMEZ, J., *La Iglesia de Andalucía ante el pronunciamiento de 1820*, 4-5, A.H.M.C. (1977-78), pp. 195-217.
- CERETI, G., *Recursos y actividades financieras del Vaticano*, 137, II, *Concilium* (1978), pp. 461-466.
- *Sentido ecuménico de la colaboración de los fieles en la elección de los obispos*, 157, III, *Concilium* (1980), pp. 78-89 -tr. de A. de la Fuente-.
- CIÁURRIZ LABIANO, M<sup>a</sup>.J., *El régimen de la libertad religiosa en el ordenamiento español*, 2, D.E. (1995), pp. 354-382.
  - *Libertad religiosa y concepción de los derechos fundamentales en el ordenamiento español*, XXII, 45, I.C. (1983), pp. 419-441.
  - *Los derechos individuales y colectivos reconocidos en la ley orgánica de libertad religiosa*, IV, D.E. (1984), pp. 815-852.
- CICOGNANI, C., *Derecho de la Iglesia a la posesión de bienes materiales (discurso pronunciado por el excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio de Su Santidad en la solemne sesión de clausura de la Tercera Semana de Derecho Canónico)*, I, R.E.D.C. (1950), pp. 7-12.
- CIERCO, E., *Concordato, sí. Concordato, no*, 679, V.N. (1969-I) pp. 19-26.
  - *Concordato, legislación española y Concilio*, XLIII, 367, H.D. (1966), pp. 730-741.
  - *Concordato, legislación española y Concilio*, XLIII, 368, H.D. (1966), pp. 823-835.
- CIPROTTI, P., *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, LX, 1-2, *Apollinaris* (1987), pp. 111-126.
- CIVILI, R., *L'ente ecclesiastico nell'ordinamento canonico*, XXXII, 1-4, E.I.C. (1976), pp. 206-217.
- CLAVERO, B., *Por una historia constituyente: 1869, de los derechos a los poderes*, 7, R.C.E.C. (1990), pp. 79-97.
- CLIMENT, C., *El Estado y los Nombramientos eclesiásticos*, 77, R. y F. (1926), pp. 193-204.
- COLCHERO, J., *Porqué la Iglesia alemana no tiene problemas económicos*, 1044, V.N. (1976-II), p. 33.
- COLE DURHAM, W., *Bases para un estudio comparativo sobre libertad religiosa*, X, A.D.E.E. (1994), pp. 465-488.

- COLELLA, P., *El nombramiento de los obispos en el Derecho Canónico vigente*, 230, II, Concilium (1990), pp. 123-128 -tr. de A. De La Fuente-.
- COLMENAR VALDÉS, S., (por orden cronológico), *Reseña de Jurisprudencia*, 28, R.E.H.L. (1980), pp. 130-133.
  - *Reseña de Jurisprudencia*, 44, R.H.A.L. (1985), pp. 420-423.
  - *Reseña de Jurisprudencia*, 50, R.H.A.L. (1987), pp. 355-356.
  - *Reseña de Jurisprudencia*, 52, R.H.A.L. (1988), pp. 160-161.
  - *Reseña de Jurisprudencia*, 57, R.H.A.L. (1989), p. 480.
  - *Reseña de Jurisprudencia*, 64, R.H.A.L. (1992), pp. 146-149.
  - *Reseña de Jurisprudencia*, 66, R.H.A.L. (1992), pp. 554-555.
- COLOMBO, M., *L'Istituto per il sostentamento del clero e problemi connessi*, CXI, M.E. (1986-I-II), pp. 87-108.
- COLOMER VIADEL, A., *La convocatoria de las Cortes Constituyentes de 1836: la ocasión histórica de los liberales*, 1, C.C.F.F.C. (1992), pp. 49-58.
- COMBALÍA, Z., *Financiación de las confesiones no católicas en el Derecho español*, X, A.DE.E.E (1994), pp. 431-446.
- COMELLAS, J.L., *Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812*, 126, R.E.P. (1962), pp. 69-112.
- COMÍN, A., *¿Hacia una Iglesia protegida?*, 4-5, P.M. (1979), pp. 320-324.
- CONDORELLI, M., *Concordati e libertà della Chiesa*, LXXIX, I, D.E. (1968), pp. 226-287.
  - *Il diritto canonico postconciliare e il problema del Concordato italiano*, LXXXVII, I, D.E. (1976), pp. 3-22.
- CONEJERO MARTÍNEZ, V., *El Trienio Constitucional en Valencia (1820-1823)*, II, 4, A.V. (1976), pp. 345-369.
- CONESA CERDÁN, T., *Pías voluntades. (Comentario al canon 1.513)*, III, 12, R.E. (1931), pp. 12-22.
- CONIGLIO, G., *La Hacienda de Castilla bajo Carlos V*, 30, M. y C. (1949), pp. 3-13.
- CONSOLI, A., *Possibilità e limiti di una riforma della proprietà ecclesiastica*, III-IV, Jus (1962), pp. 389-409.
- CONTRERAS, M., y MONTERO, J.R., *Una Constitución frágil: revisionismo y reforma constitucional en la II República española*, 12, R.D.Pol. (1981-1982), pp. 23-63.
- CONTRERAS MAZARIO, J.M<sup>a</sup>., *La Comisión Asesora de Libertad Religiosa*, 19, R.E.D.Const. (1987), pp. 131-163.

- *La igualdad y la libertad religiosas en las relaciones de trabajo*, 70, D.J. (1991), pp. 5-203.
- *La libertad religiosa y la no discriminación por motivos religiosos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas*, V, A.D.E.E. (1989), pp. 19-31.
- CORECCO, E., *Dimettersi dalla Chiesa per ragione fiscali*, LV, 3-4, Apollinaris (1982), pp. 461-502.
- CORRAL SALVADOR, C., *¿Apoya la separación de la Iglesia y del Estado?*, 56, 5, S.T. (1968), pp. 374-379.
- *De universalis vigentia Concordatorum in XXXI Stantibus cuiuslibet systematis*, LXXV, III, Periodica (1986), pp. 467-510.
- *El Concordato español ante los concordatos vigentes (II)*, 184, R. y F. (1971), pp. 99-120.
- *El Concordato español de 1953 en revisión*, 57, 2, S.T. (1969), pp. 83-98.
- *El Concordato español de 1953 en revisión*, XV, 60, Colligite (1969), pp. 56-57.
- *El ordenamiento jurídico español de libertad religiosa*, 158, R.E.P. (1968), pp. 77-100.
- *El privilegio del fuero hoy*, 56, 7, S.T. (1968), pp. 504-514.
- *El privilegio español de presentación en revisión*, 57, 3, S.T. (1969), pp. 179-189.
- *El régimen de la Iglesia en España sin Concordato ni convenios: análisis y valoración*, XXXV, 66, M.C. (1977), pp. 5-37.
- *España y la situación jurídica de libertad religiosa en el mundo*, XLIV, 374, H.D. (1967), pp. 298-308, reproducido en las pp. 500-508.
- *La confesionalidad católica de España y el régimen internacional de libertad religiosa*, 53, 12, S.T. (1965), pp. 673-690.
- *La Iglesia Católica y los centros hospitalarios: estado de aplicación de los acuerdos con la Santa Sede*, 63, 244, E.E. (1988), pp. 63-86.
- *La Ley Orgánica de Libertad Religiosa*, 37, R.E.D.C. (1981), pp. 59-117.
- *La revisión del Concordato español. Presentación del problema (o problema en torno al concordato de 1953)*, 59, 3, S.T. (1971), pp. 163-169.
- *Libertad religiosa hoy en España*, 66, 257, E.E. (1991), pp. 113-114.
- *Nombramientos episcopales. En torno a una polémica*, 56, 5, S.T. (1968), pp. 380-388.
- *Nombramientos episcopales y el sistema español de presentación*, 52, 10, S.T. (1964), pp. 534-560.
- *Sistemas y principios de relaciones Iglesia-Estado en el derecho constitucional de los doce*, 61, 238, E.E. (1986), pp. 357-375.
- *Transformatio systematis concordatarum in regimen concordatarum ut causa et effectus universalitatis hodiernae concordatorum seu*

- conventionum inter Ecclesiam et Statum*, LXXVII, II, Periodica (1988), pp. 181-193.
- *Valoración actual de la Ley orgánica de libertad religiosa 17/1980, de 5 de julio en sí misma y en su aplicación*, 66, 257, E.E. (1991), pp. 219-245.
  - *Valoración comparada de la legislación española de Libertad Religiosa*, XXIV, 68, R.E.D.C. (1968), pp. 315-338.
- CORRIENTE CÓRDOBA, J.A., *El proyecto de Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o creencia*, XII, 24, I.C. (1972), pp. 121-148.
- CORTACERO, M., *¿Sería conveniente la separación económica de la Iglesia y del Estado? Medios para conseguirlo*, XXVIII, R.E. (1911), pp. 13-23.
- CUADRADO, M.M., *La elección general para Cortes Constituyentes de 1869*, 132, R.E.P. (1963), pp. 65-101.
- *Perspectiva sumaria comparada de dos restauraciones españolas: las de 1875 y 1975*, 8, R.E.P. (1981), pp. 97-111.
- CUENCA ESTEBAN, J., *Ingresos netos del Estado español (1788-1820)*, 69, H.P.E. (1981), pp. 183-208.
- CUENCA TORIBIO, J.M., *Aproximación al estudio del catolicismo español de fines del XIX*, XXIV, H.S. (1971), pp. 347-365.
- *Catolicismo español y catolicismo belga contemporáneos: análisis de una indiferencia*, 46, 93, H.S. (1994), pp. 259-265.
  - *Iglesia-Estado en la España del siglo XX (1931-1979)*, 55, 212, E.E. (1980), pp. 89-110.
  - *Iglesia y Estado en la España actual*, 132, Historia 16 (1979), pp. 76-86.
  - *Iglesia y Estado en la España contemporánea (1789-1914)*, X, I.C. (1970), pp. 405-455.
  - *La desarticulación de la Iglesia española del Antiguo Régimen (1833-1840)*, XX, H.S. (1967), pp. 33-98.
  - *La Iglesia española en el trienio constitucional (1820-1823). Notas para su estudio*, XVIII, H.S. (1965), pp. 333-362.
  - *La Iglesia sevillana en la primera época constitucional (1812-1814)*, XV, H.S. (1962), pp. 149-162.
- CUESTA, J.M<sup>a</sup>., *De La, Aspectos jurídico-civiles del tratamiento de los bienes muebles de la Iglesia Católica española en la Ley del Patrimonio Histórico de 25 de junio de 1985*, 44, 122, R.E.D.C. (1987), pp. 149-162.

## D

- DALLA TORRE, G., *La disciplina concordataria del patrimonio eclesiástico*, CXI, M.E. (1986, I-II), pp. 31-56.

- *L'intervento dello Stato nella designazione dei Vescovi- La prassi concordataria postconciliare*, 1, CCXVI, A.G. (1996), pp. 3-30.
  - *Orientamenti e problemi sui rapporti tra Chiesa e Stato dopo il Vaticano II*, 1-2, CXCIV, A.G. (1978), pp. 29-70.
  - *Sulle ascendenze canonistiche delle norme costituzionali relative al fenomeno religioso. Appunti e riflessioni*, 4, CCIX, A.G. (1989), pp. 5-36.
- DALMAU LLISO, J.C., *La legislación de la objeción fiscal: un asunto pendiente*, XLIV, 234, R.D.F.H.P. (1994), pp. 1197-1213.
- *La objeción fiscal: una cuestión de preferencias*, 17, R.V.H.P. (1992), pp. 165-180.
- DÁRDER, J., *Campaña para la autofinanciación de la Iglesia de Mallorca*, 2574, Ecclesia (1992-I), p. 10.
- DARDER BROATAT, J., *Intervención del poder civil en la designación de los Obispos*, 59, 3, S.T. (1971), pp. 194-207.
- D'AVACK, P.A., *La libertad religiosa en el magisterio actual de la Iglesia Católica*, V, II, I.C. (1965), pp. 365-384.
- DELGADO, Gr., *Elección y nombramiento de obispos en la Iglesia latina*, XIV, 28, I.C. (1974), pp. 268-307.
- *El nombramiento de Obispos auxiliares*, XVI, 31, I.C. (1976), pp. 317-339.
- DE MEER, F., *La Iglesia en la Constitución de la II República española*, 153, Palabra (1978), pp. 19-23.
- DÍAZ-MONASTERIO, F., De, *El régimen tributario de la Iglesia*, 1919, Ecclesia (1979-I), pp. 20-22.
- DÍAZ-MORENO, J.M<sup>a</sup>., *Acuerdos Iglesia-Estado en España. Notas marginales*, 54, 210, E.E. (1979), pp. 283-334.
- *Bibliografía en torno a los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español (1976 y 1979)*, 55, 214, E.E. (1980), pp. 391-405.
  - *El acuerdo sobre cuestiones jurídicas*, 1918, Ecclesia (1979-I), pp. 66-67.
  - *La libertad religiosa. Consideraciones desde la declaración Conciliar y la Declaración de los Derechos Humanos*, 66, 257, E.E. (1991), pp. 123-151.
  - *Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Reflexión de un decenio*, 219, R. y F. (1989), pp. 173-183.
  - *Los acuerdos Santa-Sede Estado español*, I, 2000 años, pp. 273-276.

- *Los estipendios y limosnas por Misas y Sacramentos. Reflexión desde el Derecho de la Iglesia*, 4-5, P.M. (1979), pp. 369-370.
- *Notas sobre el acuerdo económico entre la Santa Sede y el Estado español*, 4-5, P.M. (1979), pp. 333-336.
  
- DÍAZ MOZAZ, J.M., *Infraestructura económica de la Iglesia. Sistemas dotacionales del clero*, 64, S.T. (1971), pp. 41-46.
  
- DÍAZ ORTEGA, J.L., *Notas sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado según el Nuevo Testamento*, XXIII, 45, I.C. (1983), pp. 319-338.
  
- DÍAZ-TORTAJADA, A., *Bernardo Herráez, gerente del episcopado: La Iglesia no es ni quiere ser rica, pero tiene necesidades*, 1633, V.N. (1988-I), pp. 6-7.
  
- *Campaña informativa sobre la asignación tributaria*, 1711, V.N. (1989-II), pp. 6-7.
- *Campaña sobre la asignación tributaria*, 1702, V.N. (1989-II), pp. 10-11.
  
- DI COSIMO, G., *Sostegni pubblici alle confessioni religiose, tra libertà di coscienza ed eguaglianza* (Corte cost. 27 aprile 1993 n. 195), XXXVIII, 3, G.C. (1993), pp. 2165-2181.
  
- DIEGO-LORA, C., De, *Ámbito de las jurisdicciones eclesiástica y civil en el Concordato Español de 1953*, III, I-II, I.C. (1963), pp. 507-677.
  
- *El carácter público de la Iglesia Católica en el ordenamiento jurídico español*, 62, 242-243, E.E. (1987), pp. 351-404.
- *Hacia la plena vigencia de los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede*, VII, A.D.E.E. (1991), pp. 189-221.
- *Naturaleza jurídica de las personas morales eclesiásticas en el Derecho español vigente*, XXIII, 45, I.C. (1983), pp. 237-317.
  
- DIEGO, N., De, *La desamortización de la sección del Clero del Archivo Histórico Nacional. Papeles de "Culto y Clero"*, XXXVI, 74, H.S. (1984), pp. 671-681.
  
- DÍEZ, Pl., y HERRERO-VELARDE, R., *La Iglesia española y el Estado laico*, XLIII, 367, H.D. (1966), pp. 759-769.
  
- DÍEZ ESPINOSA, J.R., *Estructura de la propiedad y desamortización: redención de censos enfitéuticos en Castilla y León. Cuestiones de método*, 87, H.P.E. (1984), pp. 231-240.
  
- DÍEZ MORENO, F., *Análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre preceptos tributarios de la Ley de Presupuestos del Estado para 1981*, 72, H.P.E. (1981), pp. 197-205.
  
- DI MARZIO, P., *Il principio de laicità nello Stato democratico. (Convegno tenuto a Napoli-Cerreto Sannita nei giorni 6-8 ottobre 1994)*, 2, D.E. (1995), pp. 585-594.
  
- DOLE, G., *Gratuité du Culte et subsistance de ses ministres*, 44, 122, R.E.D.C. (1987), pp. 37-70.

- *Nature juridique des émoluments cultuels*, XXXVIII, 3-4, R.D.C. (1988), pp. 189-223.
- DOMÍNGUEZ BARTOLOMÉ, R., *El grupo religioso: una manifestación del derecho de asociación*, X, A.D.E.E. (1994), pp. 127-201.
- DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., *Un alegato de los párrocos de la diócesis toledana contra el desigual reparto de los diezmos*, XXXIII, H.S. (1981), pp. 533-539.
- DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, J.M., *Las irregularidades en la desamortización del siglo XIX*, 1, H.P.E. (1994), pp. 167-175.
- DUATO, A., *El acuerdo sobre asuntos económicos*, 79, I.V. (1979), pp. 61-72.
- DUCAY, A., *La inmunidad fiscal eclesiástica*, I-II, I.C. (1961), pp. 479-500.
- DUFFAR, J., *La liberté religieuse dans les textes internationaux*, 4, R.D.P.S.P.F.È. (1994), pp. 939-967.
- *La protection internationale des droits des minorités religieuses*, 6, R.D.P.S.P.F.É. (1995), pp. 1495-1530.

## E

- ECHEVARRÍA Y MARTÍNEZ DE MARIGORTA, L., De, *Criterios para invertir fondos eclesiásticos*, 1995, Ecclesia (1980-II), pp. 14-15.
- *El Convenio español sobre nombramiento de Obispos y privilegio del fuero*, 33, 94, R.E.D.C. (1977), pp. 89-140.
- *El Convenio para la provisión de beneficios no consistoriales*, IV, Lumen (1955), pp. 224-238.
- *El nombramiento de obispos en España después del Vaticano II*, 157, III, Concilium (1980), pp. 112-117.
- *El régimen pacticio Iglesia-Estado. Valoración pastoral en sí y en su actual aplicación a España*, 35, 102, R.E.D.C. (1979), pp. 611-623.
- *Estructura ideal del patrimonio eclesiástico*, I, R.E.D.C. (1950), pp. 61-89.
- *La recíproca renuncia de la Iglesia y del Estado a los privilegios del Fuero y de Presentación de Obispos*, 52, 201, E.E. (1977), pp. 197-221.
- *Los acuerdos entre la Santa Sede y España*, 37, 108, R.E.D.C. (1981), pp. 403-450.
- *Régimen fiscal de la Iglesia Católica en España*, 2, La Ley (1984), pp. 1210-1212.
- *Restricciones de las facultades de enajenar de los Ordinarios y superiores religiosos*, II, R.E.D.C. (1952), pp. 567-599.
- *"Sistemas de dotación de la Iglesia"*, de L. Pérez Mier, I, R.E.D.C. (1950), pp. 381-387.

- E.F.R., *Las Órdenes Religiosas y el Concordato*, XX, 8, S.T. (1931), pp. 647-652.
- EGIDO, T., *Madrid, 1766: "Motines de Corte" y oposición al Gobierno* 3, C.I.H. (1979), pp. 125-153.
- EGUREN, J.A., *El fuero eclesiástico, ¿privilegio o derecho del estado clerical?*, XXX, 85, R.E.D.C. (1974), pp. 131-141.
- EHLER, S.Z., *The recent concordats*, 104, III, R.C.A.D.I. (1961), pp. 1-68.
- EMBID IRUJO, A., *Libertad religiosa y policía municipal (Comentario de la Sentencia de 20 de junio de 1979)*, 24, R.E.D.A. (1980), pp. 139-149.
- ENTRENA CUESTA, R., *El principio de igualdad ante la ley y su aplicación en el Derecho administrativo*, 37, R.A.P. (1962), pp. 63-74.
- EQUIZA, J., *Reorganización económica diocesana en Navarra*, 4-5, P.M. (1979), pp. 298-314.
- ESCANDELL BONET, B., *Las rentas episcopales en el siglo XVI*, 3, A.H.E.S. (1970), pp. 57-90.
- ESPÍN, E., *Crisis de Gobierno y confianza presidencial en la II República*, 17, R.E.P.N.E. (1980), pp. 87-115.
- ESPÍN CÁNOVAS, D., *La Constitución de 1869 y la legislación civil española hasta 1874*, 163, R.E.P. (1969), pp. 117-138.

## F

- FÁBREGA GRAU, Á., *Ayuda económica de la Iglesia a Jaime II de Aragón para la conquista de Cerdeña*, 11, A.A. (1963), pp. 11-46.
- FALCO, M., *Parere sul patrimonio di tre chiese parrocchiali palatine*, LXXVIII, I, D.E. (1967), pp. 3-24.
- FALCÓN Y TELLA, R., *La habilitación a las Leyes de Presupuestos para modificar tributos*, 33, R.E.D.F. (1982), pp. 25-52.
- FARINASSO, C., *Osservazioni sulla configurazione giuridica del diritto del beneficiario "in temporalibus". Rilievi critici e prospettive per una riforma*, LXXX, I, D.E. (1969), pp. 85-113.
- FARRELLY, A., *The Diocesan finance council: functions and duties according to the code of Canon Law*, 23/1, S.C. (1989), pp. 149-166.
- FATJÓ GÓMEZ, P., *La beneficencia eclesiástica en la Barcelona del XVII: la Pía Almoína. 1655-1669*, 12, Estudis (1985/86), pp. 71-96.

- FELICIANI, G., *I movimenti ecclésiali*, XXXLI, L'A.C. (1993), pp. 79-82.
- FERNÁNDEZ ALMAGRO, M., *Del Antiguo régimen a las Cortes de Cádiz*, 126, R.E.P. (1962), pp. 9-29.
- FERNÁNDEZ ALONSO, J., *El "Tratado de la Regalía de amortización de Campomames" y el primer proyecto de ley general de amortización a través de los despachos de la Nunciatura*, XI, H.S. (1958), pp. 65-81.
  - *Un período de las relaciones entre Felipe V y la Santa Sede (1709-1717)*, 3, A.A. (1955), pp. 9-88.
- FERNÁNDEZ ARDANAZ, S., *El Vaticano paga las deudas del IOR y se llega a la firma del nuevo Concordato*, 1414, V.N. (1984-I), p. 34.
- FERNÁNDEZ CORONADO GONZÁLEZ, A., *La colaboración económica del Estado con las confesiones religiosas*, 108, R.A.P. (1985), pp. 365-401.
  - *Los Acuerdos del Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (F.E.R.E.D.E.) y la Federación de Comunidades Israelitas (F.C.I.). Consideraciones sobre los textos definitivos*, VII, A.D.E.E. (1991), pp. 541-577.
- FERNÁNDEZ DE RETANA GALÍNDEZ, J.M<sup>a</sup>., *En el primer centenario del Concordato de 1851*, I, R.E.D.C. (1952), pp. 235-248.
- FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J., *Teología y concordatos*, 1680, Ecclesia (1974-I), pp. 25-26.
- FERNÁNDEZ MARÍN, J., *La diócesis de Murcia inicia una campaña de autofinanciación*, 2663, Ecclesia (1993-II), p. 11.
- FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, A., *Estado laico y libertad religiosa*, 54, R.F.D.U.C.N.E. (1978), pp. 5-27.
  - *Estado laico y libertad religiosa*, 6, R.E.P.N.E. (1978), pp. 57-80.
- FERNÁNDEZ REGATILLO, E., *Acerca del privilegio del fuero. (De privilegio fori)*, III, 9, R.E.D.C. (1948), pp. 1097-1116.
  - *Carácter de los aumentos en las asignaciones capitulares*, 52, 6, S.T. (1964), pp. 369-374.
  - *Concordatos*, XXII, 262, 10, S.T. (1933), pp. 881-904.
  - *Concordatos*, XXII, 263, 11, S.T. (1933), pp. 1016-1053.
  - *Concordatos*, XXIII, 265, 1, S.T. (1934), pp. 27-46.
  - *Concordatos*, XXIII, 266, 3, S.T. (1934), pp. 240-259.
  - *Concordatos*, XXIII 270, 6, S.T. (1934), pp. 530-549.
  - *¿El beneficio eclesiástico?*, 47-48, M.C. (1967), pp. 707-724.
  - *El concordato español visto desde fuera*, 151, R. y F. (1955), pp. 341-360.

- *El privilegio del Fuero de los Clérigos en el Concordato Español*, XLIV, 6, S.T. (1956), pp. 343-348; XLIV, 8-9, S.T. (1956), pp. 472-482; XLIV, 10, S.T. (1956), pp. 553-559.
  - *Exención tributaria del huerto rectoral*, 58, 8-9, S.T. (1970), pp. 625-631.
  - *Impuestos sobre campanas*, XXII, 5, S.T. (1933), pp. 440-442.
  - *Los veinte años del Concordato*, XXIX, 83, R.E.D.C. (1973), pp. 479-489.
  - *Problemas que plantea el canon 1.513*, I, R.E.D.C. (1950), pp. 265-290.
  - *Sobre el nuevo Concordato entre la Santa Sede y el Estado español*, 148, R. y F. (1953), pp. 117-127.
  - *Valor de las enajenaciones y deudas que necesitan licencia de la Santa Sede*, 57, 2, S.T. (1969), pp. 121-128.
- FERNÁNDEZ RUIZ, D., *Nombramiento de los Obispos de España. El Jefe del Estado Español tiene una intervención muy limitada*, 276, Resurrexit (1966), PP. 63-67.
- FERNÁNDEZ SEGADO, F., *El principio de igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, 25, R.V.A.P. (1989), pp. 135-180.
- *La Constitución de 1978 en la perspectiva del Constitucionalismo histórico español. (Texto de la conferencia pronunciada en las Jornadas conmemorativas del X aniversario de la Constitución, organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago)*, 2, R.G.L.J. (1988), pp. 311-363.
  - *Las bases vertebradoras de la Constitución de 1837*, XLVII, 166, Hispania (1987), pp. 679-744.
- FERRANDO BADÍA, J., *La República de 1873. Ocasión revolucionaria: Un enfoque parlamentario*, 156, R.E.P. (1967), pp. 119-143.
- *Ocaso de la República española de 1873: la quiebra federal*, 183-184, R.E.P. (1972), pp. 49-65.
  - *Vicisitudes e influencias de la Constitución de 1812*, 126, R.E.P. (1962), pp. 169-228.
- FERRARI, G.F., *Función actual de la tradición separatista*, III, A.D.E.E. (1987), pp. 69-83.
- FERRARI, S., *La libertà religiosa nell'Europa contemporanea*, 352, 2, Il Mulino (1994), pp. 216-224.
- *Legislazione israelina e libertà religiosa*, 2, D.E. (1979), pp. 173-175.
  - *Prospettiva di studio dell'amministrazione ecclesiastica*, 2, R.T.D.P. (1982), pp. 555-568.
  - *Religione e politica: alla ricerca di nuovi equilibri*, 1, D. y O. (1993), pp. 215-221.
  - *Tra uguaglianza e libertà: funzione attuale del principio separatistico*, 1, D.E. (1987), pp. 409-427.

- FERRER ORTIZ, J., *Laicidad del Estado y cooperación con las confesiones*, III, A.D.E.E. (1987), pp. 237-248.
- F.F.C., *Hacia una nueva economía*, 194, Palabra (1981), p. 10.
- FIESTS LOZA, A., *La protección registral de los compradores de bienes eclesiásticos desamortizados (1863-1869)*, LIII, A.H.D.E. (1983), PP. 333-363.
  - *¿Protección registral de los compradores de bienes eclesiásticos desamortizados? (Acotaciones a "Ideología y progresismo" en la legislación hipotecaria del XIX, de Germán Gallego del Campo)*, LIII, 578, R.C.D.I. (1987), p. 87-105.
- FIOL CHIMELIS, M.P., *Finalidades socio-temporales en asociaciones canónicas de fieles*, 49, 132, R.E.D.C. (1992), pp. 131-159.
- FLORIS, P., *'Uguale libertà' delle confessioni religiose e bilateralità tra Stato e Chiese (teorie giuridiche e progetti di riforma)*, 1, R.T.D.P. (1983), pp. 3-77.
- FLORISTÁN, C., *El acuerdo económico Iglesia-Estado*, 4-5, P.M. (1979), pp. 325-332.
- F.M., *Crece el déficit de la Santa Sede*, 308, Palabra (1990), p. 19.
- FOGLIASSO, E., *El nuevo Concordato español y el Derecho público eclesiástico*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 43-63.
- FONTANA I LÁZARO, J., *La financiación de la guerra de la Independencia*, 69, H.P.E. (1981), pp. 209-217.
  - *Mendizábal y la desamortización civil*, 27, H.P.E. (1974), p. 75-80.
- FORCADA, J.M<sup>a</sup>., *Cataluña. Financiación solidaria de la Iglesia*, 1382, V.N. (1983-I), p. 19.
  - *La autofinanciación de la Iglesia, cuestión urgente*, 1303, V.N. (1981-II), p. 19.
- FORNÉS, J., *El esfuerzo de la autonomía de las confesiones en los acuerdos españoles con confesiones religiosas minoritarias*, XXXIV, 68, I.C. (1984), pp. 525-551.
  - *La revisión concordataria en España mediante los Acuerdos de 1976 y 1979*, XIX, 37 (1979), pp. 15-55.
  - *Régimen jurídico-patrimonial y financiación de la Iglesia desde la perspectiva de la libertad religiosa*, XXXVI, 71, I.C. (1996), pp. 13-61.
- FRAILE HIJOSA, M., *Extensión de la capacidad económica e inmunidad real de la Iglesia*, XV, 45, R.E.D.C. (1960), pp. 591-614.

- *Tentativas contra el patrimonio eclesiástico en España hasta el siglo XVIII*, XVI, 47-48, R.E.D.C. (1961), pp. 605-615.
- FRANCH MENEU, J.J., *Las entidades y fundaciones sin ánimo de lucro como factor de progreso económico: una tercera vía entre economía de mercado y sector público*, XI, 208, R.D.F.H.P. (1990), pp. 905-915.
- FRÍAS, L., *Centenario del restablecimiento de la Compañía de Jesús en España*, 42, R. y F. (1915), pp. 188-199 y 478-489.
  - *Centenario del restablecimiento de la Compañía de Jesús en España*, 43, R. y F. (1915), pp. 45-62.
  - *El almacén de regalías de Campomames*, 64, R. y F. (1922), pp. 323-343; 447-463.
  - *La compañía de Jesús restablecida en la Iglesia y particularmente en España*, 39, R. y F. (1914), pp. 312-321.
- FUCCILLO, A., *Enti ecclesiastici e impresa commerciale: finalmente un binomio compatibile*, 4, D.E. (1995), pp. 470-478.
- FUENMAYOR, A., *De, Alcance del principio constitucional de igualdad*, XXXVI, IV, A.D.C. (1983), pp. 1327-1341.
  - *Declaraciones: El Concordato*, XV, 60, Colligite (1969), pp. 54-55.
  - *Estado y religión. (El artículo 6.º del Fuero de los Españoles)*, 152, R.E.P. (1967), pp. 99-120.
  - *Problemas actuales de la confesionalidad del Estado*, VI, II, I.C. (1966), pp. 375-402.
  - *Problemas que plantean los cánones 1499, § 1, y 1513 desde el punto de vista civil*, II, R.E.D.C. (1950), pp. 421-448.
  - *Sobre el destino de los estipendios de misas binadas o trinadas*, XXVIII, 55, I.C. (1988), pp. 201-211.
- FUMAGALLI CARULLI, O., *Il Concordato tra Stato e Chiesa: un patto di libertà o un armistizio di retroguardia?*, XXXVI, 1, Jus (1989), pp. 49-59.
  - *La libertà di scelta religiosa nello ius publicum ecclesiasticum externum e nella revisione concordataria italiana*, IV, D.E. (1980), pp. 435-445, y en XX, 40, I.C. (1980), pp. 115-124.
- F.V., *La Iglesia y el dinero*, I, R.E. (1907), pp. 41-42.

## G

- GAFI, J.D., *La situación religiosa en España*, XXXV, 104, L.C.T. (1927), PP. 183-196.
- GALÁN VIOQUE, R., *La igualdad de todos, Administraciones públicas, administrados y particulares ante la Ley. Comentario en torno a la Sentencia del Tribunal Constitucional 206/1993, de 22 de junio*, 20, R.A.A.P. (1994), pp. 185-212.

- GALLEGO, J.A., *Planteamiento de la cuestión religiosa en España, 1899-1902*, XII, 24, I.C. (1972), pp. 173-221.
- *Transformación política y actitud religiosa del Gobierno largo de Maura, 189-190*, R.E.P. (1973), pp. 131-164.
- GANGOITI ELORRIAGA, B., *Mayorías y minorías religiosas ante el Estado: Codex religioso común y Códex religioso adicional*, XXVII, 78, R.E.D.C. (1971), pp. 597-633.
- GARCÍA-ATANCE, M<sup>a</sup>.V., *Crónica parlamentaria sobre la Constitución española de 1931*, 12, R.D.Pol. (1981-1982), pp. 295-306.
- GARCÍA BALART, N., *Confesionalidad, tolerancia y libertad religiosa en la doctrina del Episcopado español (1953-1968)*, XXII, 43, I.C. (1982), pp. 87-113.
- GARCÍA BALLESTEROS, A., y REDONDO GONZÁLEZ, Á., *El papel de la desamortización en la evolución de las ciudades españolas. Los ejemplos de Guadalajara y Plasencia*, 172-173, XLIV, E.G. (1983), pp. 523-543.
- GARCÍA BARBERENA, T., *Breve comentario al Concordato*, II, Lumen (1953), PP. 273-282.
- *El motu proprio "Firma in traditione" sobre estipendios de Misas*, XXXI, 88, R.E.D.C. (1975), pp. 83-98.
- *Las fuentes de Derecho privado del patrimonio eclesiástico*, I, R.E.D.C. (1950), pp. 91-110.
- *Las iglesias de propiedad privada y el artículo IV del concordato*, XVIII, IV, A.D.C. (1965), pp. 823-852.
- *Nuevas normas sobre nombramientos de obispos (textos y comentario)*, XXVIII, 81, R.E.D.C. (1972), pp. 657-682.
- *Propiedad y destino de los ingresos procedentes de visitas de los turistas (Dictamen)*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 259-267.
- GARCÍA BARRIUSO, P., *El derecho patrimonial de los religiosos en España*, XIX, 76, V. y V. (1961), pp. 593-663.
- *La obra pía de Tierra Santa y la sombra de un Patronato*, 37, 106-107, R.E.D.C. (1981), pp. 189-213.
- GARCÍA CANALES, M., *Los intentos de reforma de la Constitución de 1876*, 8, R.D.Pol. (1981), pp. 113-115.
- GARCÍA CERRADA, A., *El problema económico del cura*, XLV, 385, H.D. (1968), pp. 371-378.
- GARCÍA DÍAZ, E., *Acuerdo Iglesia-Gobierno sobre la asignación tributaria*, 2495, Ecclesia (1990-II), pp. 8-9.

- *Asignación tributaria*, 2449, Ecclesia (1989-II), pp. 8-9.
  - *Asignación tributaria: la Iglesia no realizará un gran despliegue publicitario*, 2359, Ecclesia (1988-I), p. 9.
  - *Aumenta la asignación tributaria en favor de la Iglesia*, 2481, Ecclesia (1990-I), p. 8.
  - *Campaña contra la asignación tributaria*, 2377, Ecclesia (1988-I), p. 8.
  - *Cardenal Sodano: "Las relaciones Iglesia-Estado pueden mejorar*, 2587, Ecclesia (1992-II), p. 6.
  - *Cáritas pide la modificación del proyecto de ley del I.R.P.F.*, 2497, Ecclesia (1990-II), p. 8.
  - *Díaz Merchán propone un pacto para desarrollar los acuerdos Iglesia-Estado*, 2261, Ecclesia (1986-I), p. 8.
  - *El Estado "congela" la ayuda económica a la Iglesia*, 2609, Ecclesia (1992-II), pp. 6-7.
  - *Hacienda desconoce los resultados de la asignación tributaria*, 2393, Ecclesia (1988-II), p. 8.
  - *La asignación tributaria a la Iglesia católica entrará en vigor en 1988*, 2337, Ecclesia (1987-II), p. 8.
  - *La asignación tributaria de la Iglesia, ni anticonstitucional ni discriminatoria*, 2338, Ecclesia (1987-II), p. 8.
  - *La Comisión mixta Iglesia-Gobierno se reunirá en junio*, 2529, Ecclesia (1991-I), p. 8.
  - *La Iglesia pide el apoyo económico de los fieles*, 2244, Ecclesia (1985-II), p. 28.
  - *La Iglesia solicita una prórroga del sistema de financiación*, 2459, Ecclesia (1990-I), p. 8.
  - *Los acuerdos con protestantes y judíos a punto*, 2433, Ecclesia (1989-II), p. 8.
  - *Los donativos desgravan*, 2563, Ecclesia (1992-I), p. 9.
  - *Los españoles aceptan la asignación tributaria*, 2379, Ecclesia (1988-I), p. 8.
  - *Los españoles aceptan mayoritariamente la asignación tributaria*, 2340, Ecclesia (1987-II), p. 8.
  - *Los obispos promoverán una mayor autofinanciación*, 2339, Ecclesia (1987-II), p. 8.
  - *Sed responsables: poned la cruz*, 2580, Ecclesia (1992-I), p. 8.
  - *Setién: "El reparto de la asignación tributaria tiene un nombre: discriminación*, 2492, Ecclesia (1990-II), p. 8.
- GARCÍA ESCUDERO, J.Mª., *La Nunciatura de Madrid en la España del siglo XIX*, XXXIII, 2, Salmaticensis (1986), pp. 229-250.
- GARCÍA FAÍLDE, J.J., *Constitución española y Acuerdo Jurídico entre el Estado español y Santa Sede (art. VI apartados 1 y 2)*, 1, R.J.C. (1990), pp. 9-28.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, J.G., *Situación económica de la Iglesia española*, 80-3, 944, S.T. (1992), pp. 189-207.

- GARCÍA FERNÁNDEZ, M., *Notas sobre la seguridad social del clero*, 1, C.F.D.U.P.M. (1982), pp. 209-220.
- GARCÍA HERNANDO, J., *Pluralismo religioso en España*, 1, P.E. (1984), pp. 63-72.
  - *Pluralismo religioso en España*, IV, 11, P.E. (1987), pp. 157-183.
- GARCÍA HERVÁS, D., *Consideraciones sobre el derecho de libertad religiosa, ideológica y de conciencia*, XIII, 73, Tapia (1993), pp. 23-25.
  - *El actual sistema de financiación directa de la Iglesia católica en España*, 3-4, D.E. (1994), pp. 833-858.
- GARCÍA-LOBO, V., *A propósito del Patronato Real. Un documento de 1419*, XXXVI, 74, H.S. (1984), pp. 457-484.
- GARCÍA MARTÍN, C., *Ambiente político religioso en los siglos XVIII y XIX*, XVI, 47-48, R.E.D.C. (1961), pp. 617-628.
  - *Formas de llevar a efecto la desamortización en la tierra de Coria y sus consecuencias*, XLI, R.E.E. (1985), pp. 5-40.
- GARCÍA MARTÍNEZ, R., *La Constitución española de 1812 como antecedente constitucional argentino*, 138, R.E.P. (1964), pp. 191-202.
- GARCÍA MORILLO, J., *Constitución, Estado e Iglesia católica. Teoría y realidad de la aconfesionalidad*, 55, Claves (1995), pp. 22-32.
- GARCÍA OCAÑA, J.M<sup>a</sup>., *Del Concordato*, 10, R. y F. (1904), pp. 514-522.
- GARCÍA-SALVE, F., *Iglesia y dinero*, 355, XLII, H.D. (1965), pp. 634-642.
- GARCIMARTÍN MONTERO, C., *La laicidad de las Cortes Constituyentes de 1978*, 72, I.C. (1996), pp. 539-594.
- GARRIDO FALLA, F., *La personalidad jurídica de la Iglesia Católica en el Derecho Español*, 61, 238, E.E. (1986), pp. 269-278.
  - *La situación de la Iglesia en España como Institución y su correlativo reflejo en el Derecho Constitucional español*, 84, R.A.P. (1977), pp. 279-289.
- GARZÓN PAREJA, M., *Incidencias hacendísticas de Carlos III*, 69, H.P.E. (1981), pp. 77-90.
- GATOO DE ECHARRI, J., *La dimensión humana del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)*, 215, R. y F. (1987), pp. 85-88.

- GAUDEMET, J., *De la elección a la selección de obispos*, 157, III, Concilium (1980), pp. 19-80 -tr. de J. Valiente Malla-.
- GAVARA DE CARA, J.C., (coord.), *El principio de igualdad en la aplicación de la ley por órganos judiciales. Práctica jurisprudencial del Tribunal Constitucional (1981-1992)*, 2, R.J.C. (1993), pp. 423-449.
- GELPI BARRIOS, J., *Personalidad jurídica de la Iglesia en Puerto Rico. Vigencia del Concordato español de 1851 a través del Tratado de París*, 33, 95-96, R.E.D.C. (1977), pp. 395-415.
- GHERRO, S., *Santa Sede, Conferenze episcopali, Christifideles e concordati*, 1, D.E. (1986), pp. 55-72.
- *Stato e Chiesa di fronte alle controversia donatista nei primi anni dell'età costantiniana*, XXXVI, S.D.H.I (1970), pp. 359-409.
- GIACCHI, O., *Tradizione ed innovazione nella Chiesa dopo il Concilio*, LXXXII, I, D.E. (1971), pp. 5-20.
- *Un nuevo modo di impostare le relazioni tra Statu e Chiesa*, 2, D.E. (1979), pp. 155-160.
- GIMÉNEZ LÓPEZ, E., *El ejército y la marina en la expulsión de los jesuitas de España*, 45, H.S. (1993), pp. 577-630.
- GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., *El derecho constitucional a la libertad religiosa (Doctrina, Jurisprudencia y Práctica Administrativa)*, 62, 242-243, E.E. (1987), pp. 317-332.
- GIMENO COGOS, R., *Prohibición de discriminación, Número especial, P.J. (Jornadas sobre Derechos Humanos, Madrid, 23 a 25 de abril de 1986)* (1986), pp. 79-105.
- GIRÓN Y ARCAS, J., *Los últimos convenios celebrados entre la Santa Sede y el Gobierno de España*, II, 3, L.C.T. (1910), pp. 389-394.
- *Stato e Chiesa di fronte alle controversia donatista nei primi anni dell'età costantiniana*, XXXVI, S.D.H.I (1970), pp. 359-409.
- GISMONDI, P., *Chiese e Comunità ecclesiali acattoliche nei recenti decreti conciliari*, LXXVI, I, D.E. (1965), pp. 189-205.
- *Esigenze di armonizzazione costituzionale*, LXXXVIII, I, D.E. (1977), pp. 252-262.
- *Gli enti ecclesiastici nella teoria delle persone giuridiche pubbliche*, VIII, R.I.S.G. (1955-56), pp. 261-279-
- *Iglesias y comunidades eclesiales acatólicas en los recientes decretos conciliares*, V, II, I.C. (1965), pp. 385-400.

- GONZÁLEZ, N., *¿Ante un nuevo Madoz? Notas a un Diccionario Geográfico de España*, 164, 766, R. y F. (1961), pp. 385-400.
- GONZÁLEZ ARMENDÍA, J.R., *Colaboración económica del Estado español con las Confesiones religiosas: contenido “mínimo” de la vertiente “indirecta”, IV*, A.D.E.E. (1988), pp. 511-520.
  - *La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos económicos. Bases generales*, 45, 125, R.E.D.C. (1988), pp. 581-621.
- GONZÁLEZ CÁRDENAS, C., *Los acuerdos enjuiciados por personalidades de la Iglesia y de la política*, 1917, Ecclesia (1979-I), pp. 23-24.
- GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA, L., *Los dineros de la Iglesia ante el Evangelio*, 80-3, 944, S.T. (1992), pp. 179-187.
- GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O., *La Iglesia española desde 1940 a 1990*, 2509-10, Ecclesia (1991-I), pp. 30-39.
- GONZÁLEZ DE LANGARICA Y RUIZ DE GAUNA, A., *La legislación canónica y los diezmos en Álava*, 1, R.C.I.V.S.S. (1991), pp. 335-351.
- GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M., *El Estado y la financiación de las confesiones*, XXXIII, 65, I.C. (1993), pp. 123-140.
- GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO, M., *Consecuencias sociales y económicas de la desamortización del Trienio Liberal en Granada y Almería*, 7, A.H.M.C. (1980), pp. 155-186.
  - *La desamortización eclesiástica en el Trienio Liberal (1820-1823). Un primer acercamiento a los datos generales*, 36-37, I-II, E.H.S. (1986), pp. 141-148.
- GONZÁLEZ DÍAZ, F.J., *Régimen jurídico, económico y fiscal de las hermandades y cofradías*, 51, 136, R.E.D.C. (1994), pp. 227-260.
- GONZÁLEZ GARCÍA, E., *Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Presupuestos del Estado para 1981*, 72, H.P.E. (1981), pp. 188-196.
- GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., *Propiedades y rentas territoriales del cabildo de la catedral de Sevilla a fines de la Edad Media*, 7, C.H.R.H. (1977), pp. 167.-212.
- GONZÁLEZ RUIZ, M., *El catolicismo, religión de la Nación*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 65-77.
  - *Iglesia española y concilio*, 403, H.D. (1970), pp. 10-17.
  - *La Iglesia y la legislación fiscal del Estado*, I, R.E.D.C. (1950), pp. 143-166.
  - *Las capellanías españolas en su perspectiva histórica*, II, R.E.D.C. (1950), pp. 475-501.

- *Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España durante el siglo XIX*, II, R.E.D.C. (1946), pp. 383-424.
- GONZALO, M., Y GARCÍA-ATANCE, M<sup>a</sup>.V., *Crónica parlamentaria sobre la Constitución española de 1876*, 8, R.D.Pol. (1981), pp. 171-190.
- GONZALO MARTÍNEZ, P., *El patrimonio eclesiástico en la España visigoda. Estudio histórico-jurídico*, XXXII, M.C. (1959), pp. 5-200.
- GOÑI GAZTAMBIDE, J., *El fiscalismo pontificio en España en tiempo de Juan XXII*, 14, A.A. (1966), pp. 65-99.
- GOTI ORDEÑANA, J., *Del sistema de dotación a la colaboración económica con las Confesiones religiosas*, IV, A.D.E.E. (1988), pp. 151-172.
  - *El Estado democrático y el fenómeno religioso*, IX, A.D.E.E. (1993), pp. 235-249.
  - *La financiación de la libertad religiosa*, 48, 130, R.E.D.C. (1991), pp. 265-272.
- GOUYÓN, Mons., *La remuneración del sacerdote*, XV, 60, Colligite (1969), p. 42.
- GOY, R., *La garantie européenne de la liberté de religion. L'article 9 de la Convention de Rome*, 1, R.D.P.S.P.F.É. (1991), pp. 5-60.
- GRANDFIELD, P., "*Sensus fidelium*" y elección de obispos, 157, III, Concilium (1980), pp. 53-64 -tr. de J. Valiente Malla-.
- GREEN, Th. J., *Shepherding the patrimony of the poor: diocesan and parish structures of financial administration*, 56, The Jurist (1992/2), pp. 706-734.
- GUARINO, A., *I regime tributario degli edifici di culto. Spunti per una ricostruzione*, 1, D.E. (1994), pp. 267-305.
- GUERRERO, E., *El problema de la libertad religiosa. A propósito de las "conversaciones de San Sebastián"*, 138, R. y F. (1948), pp. 518-539.
  - *Las conversaciones católicas de San Sebastián en septiembre de 1949. Porqué no se aprobó la declaración de derechos de la persona humana*, 140, R. y F. (1949), pp. 398-418.
  - *La libertad religiosa de los protestantes en España*, 142, R. y F. (1950), pp. 219-229.
- GUERRERO, J.M<sup>a</sup>., *Obispos "pobres" en la Iglesia de los pobres*, XLV, 386, H.D. (1968), pp. 450-453.
- GUERZONI, L., *Note preliminari per uno studio della laicità dello Stato sotto il profilo giuridico*, 1-2, CLXXII, A.G. (1967), pp. 61-130.

- *Statu laico e Statu liberale: un'ipotesi interpretativa*, LXXXVIII, I, D.E. (1977), pp. 509-554.
- GÜNTHER, R., y BLOUGH, R.A., *Conflicto religioso y consenso en España. Historia de dos Constituciones*, 14, R.E.P.N.E. (1980), pp. 65-109 (tr. de J.J. Solozábal Echevarría).
- *Conflicto religioso y consenso en España: Historia de dos Constituciones*, 111, R.E.P. (1980), pp. 65-109.
- GUTIÉRREZ, J., *La diócesis de Bilbao alcanza una autofinanciación del 78 por ciento en 1993*, 2691, Ecclesia (1994-II), p. 11.
- GUTIÉRREZ TEJERINA, J., *Sobre el Concordato español*, III, 4, Colligite (1957), pp. 50-59.

## H

- HARQUEL, J.-L., *La designación de los obispos en el derecho concordatario*, 157, III, Concilium (1980), pp. 96-101 -tr. de J. Valiente Malla-.
- HARTWEG, F., *Les Eglises, forces politiques*, 22, Pouvoirs (1982), pp. 97-117.
- HAZA DÍAZ, P., De La, *Inmatriculación de bienes de la Iglesia mediante certificación expedida por el Diocesano*, LXXI, 630, R.C.D.I. (1995), pp. 1587-1600.
- HERA PÉREZ-CUESTA, A., De La, *Acuerdos con las confesiones religiosas minoritarias*, XXXV, 69, I.C. (1995), pp. 201-231.
- *Ateísmo y libertad religiosa en un Estado democrático*, I, 90, R.D.Púb. (1983), pp. 5-9.
- *Comentario al acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 28 de julio de 1976*, XVI, 32, I.C. (1976), pp. 153-163.
- *Confesionalidad del Estado y libertad religiosa*, XII, 24, I.C. (1972), pp. 86-104.
- *El pluralismo y el futuro del sistema concordatario*, LXXXI, I-II, D.E. (1970), pp. 3-21.
- *El regalismo indiano*, XXXII, 63, I.C. (1992), pp. 411-437.
- *La autonomía didáctica y científica del Derecho concordatario*, III, I-II, I.C. (1963), pp. 9-63.
- *La legislación del siglo XVIII sobre el Patronato indiano*, XL, A.H.D.E. (1970), pp. 287-311.
- *Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España (1953-1974)*, 211, R.E.P. (1977), pp. 5-37.
- *Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España (1953-1974)*, 2, La Ley (1981), pp. 897-900.
- *Las relaciones entre la Iglesia y el Estado Español bajo el General Franco*, 3, La Ley (1981), pp. 819-832.
- *Los entes eclesiásticos en la Constitución de 1978*, 1, La Ley (1981), pp. 895-899.

- HERAS, J., De Las, *Los acuerdos de España con la Santa Sede gozan de buena salud*, 1719, V.N. (1990-I), pp. 6-7.
- HERNÁNDEZ FRANCO, J., *Lorca, 1766: motín oligárquico e inmovilismo frente a las reformas carloterceristas*, 8, C.I.H. (1984), pp. 149-167.
- HERR, R., *El significado de la desamortización en España*, 131, M. y C. (1974), pp. 55-94.
  - *Hacia el derribo del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV*, 118, M. y C. (1971), pp. 37-100.
  - *La vente des propriétés de mainmorte en Espagne, 1798-1808*, 1, A.É.S.C. (1974), pp. 215-228.
- HERRÁEZ RUBIO, Mons. B., *Acuerdo sobre asuntos económicos*, 1919, Ecclesia (1979-I), pp. 19-20.
  - *Compromisos Iglesia-Estado en materia económica*, 2479, Ecclesia (1990-I), p. 7.
  - *Financiación de la Iglesia en España*, XXXII, 63, I.C. (1992), pp. 121-139.
  - *La aportación económica a la Iglesia*, 2339, Ecclesia (1987-II), p. 7.
  - *La asignación tributaria a favor de la Iglesia católica*, 2289, Ecclesia (1986-II), pp. 6-7.
  - *La autofinanciación de la Iglesia*, 2292, Ecclesia (1986-II), pp. 6-7.
- HERVADA, J., *La relación de propiedad en el patrimonio eclesiástico*, II, I.C. (1962), pp. 425-467.
- HIGUERA, G., *¿Impuesto religioso o asignación tributaria? Pequeñas aclaraciones*, 76, 7-8, S.T. (1988), pp. 563-566.
  - *La asignación tributaria a la Iglesia católica*, 2, 8, 1077-1078, R. y F. (1962), pp. 425-467.
- HIGUERAS UDÍAS, G., *La "Libertas Ecclesiae" como principio fundamental de relaciones Iglesia-Estado*, 66, 257, E.E. (1991), pp. 153-163.
- HIGUERUELA DEL PINO, L., *Incidencia de la Ley de Monacales de 1820 en la Diócesis de Toledo*, 188, 1, C..D (1975), pp. 46-70.
- HILARIO RAGUER, D., *La Iglesia española en la Segunda República*, 426-427, Arbor (1981), pp. 51-66.
- HORNEDO, R.M., De, *La persecución religiosa en España*, 766, 164, R. y F. (1961), pp. 335-342.

- HORNEDO MUGUIRO, A., *La actividad e instituciones asistenciales de las iglesias: su garantía y promoción ante el derecho estatal y los acuerdos con éstas*, 66, 257, E.E. (1991), pp. 191-204.
- HUESO MONTÓN, Á.L., *Los bienes de la Diócesis de Segorbe en el siglo XIX. (Proceso desamortizador)*, XXVIII, H.S. (1975), pp. 283-338.
- HUGHEY, J.D., *Church, State, and religious liberty in Spain*, XXIII, 3, J.Ch.S. (1981), pp. 485-495.

## I

- IACOMETTI, M., *La giurisprudenza del tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 1993-1994*, XL, 5, G.C. (1995), pp. 3942-3997.
- IANNITTO, G., *Limiti costituzionali alla legge di bilancio*, IX, A.Fin. (1960), pp. 142-173.
- IBÁN, I.C., *Concreciones y protección de la libertad religiosa*, 14, C.F.D.U.P.M. (1986), pp. 69-81.
- *Constitución y Derecho constitucional de la Iglesia*, 112-113, R.D.Púb. (1988), pp. 769-779.
- *Contenido del derecho de libertad religiosa en el derecho español*, 3, La Ley (1983), pp. 1038-1042.
- *Costituzione e diritto costituzionale della Chiesa*, 4, Q.D.P.E. (1987), pp. 229-239.
- *El contenido de la libertad religiosa*, I, A.D.E.E. (1985), pp. 353-367.
- *El Derecho eclesiástico de la "Zona Nacional" durante la Guerra Civil (18-VII-1936 a I-IV-1939)*, LVII, A.H.D.E. (1987), pp. 633-663.
- *España: transición política, integración europea y libertad religiosa*, 85, R.F.D.U.C. Curso 1994-1995 (1996), pp. 129-137.
- *Hacia un Derecho Eclesiástico convencional*, 14, R.J.C.M. (1992), pp. 7-15.
- *Iglesia en España hoy*, II, A.D.E.E. (1986), pp. 357-381.
- *Iglesia y Estado en España, hoy*, II, A.D.E.E. (1986), pp. 357-381.
- *La libertad religiosa como derecho fundamental*, 3, A.D.H. (1985), pp. 163-174.
- *Libertad religiosa: ¿Libertad de las religiones o libertad en las religiones?*, 15 (monográfico), R.F.D.U.C. (1989), pp. 593-600 y en 2, Q.D.P.E. (1989), pp. 195-204.
- *Spain: political transition, european integration and religious freedom*, 4, D.E. (1995), pp. 883-892.
- IBÁN, I.C., y LORENZO, P., *Il diritto ecclesiastico y España (1949-1992)*, III, D.E. (1992), pp. 532-620.
- IGLESIAS, A.M., *Intervención de los laicos en las elecciones de Obispos*, 52, 4, S.T. (1964), pp. 145-154 y 204-216.

- ISENSEE, J., *La financiación de la misión de las Iglesias en la República Federal de Alemania*, 19, R.E.D.F. (1978), pp. 449-459.
- ITURRIOZ, J., *Nuestro Concordato*, XXVIII, 220, H.D. (1953), pp. 645-652.
- IZAGA, L., *La capacidad económica de la Iglesia*, 99, R. y F. (1932), pp. 349-362; y 476-497.
- *La separación de la Iglesia y del Estado*, 99, R. y F. (1932), pp. 5-25.

## J

- JAVIERRE, J.M<sup>a</sup>., *La mañana del Concordato en Roma*, 634, Ecclesia (1953-II), p. 11.
- JEMOLO, A.C., *Posizione particolare della Chiesa Cattolica*, LXXX, D.E. (1969-II), pp. 199-210.
- JIMENA QUESADA, L., *El derecho a la igualdad en el Convenio Europeo de Derechos Humanos: su desarrollo jurisprudencial*, L, 597, R.G.D. (1994), pp. 6814-6842.
- JIMÉNEZ CAMPO, J., *La igualdad jurídica como límite frente al legislador*, 9, R.E.D.Const. (1983), pp. 71-114.
- JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, F.J., *Desamortización y Jurisdicción de Hacienda*, LIV, A.H.D.E.E. (1984), pp. 449-475.
- JIMÉNEZ URRESTI, T.I., *Confesionalidad y laicidad del Estado*, VII, 1, Lumen (1958), pp. 3-15.
- *Especial reconocimiento constitucional a una comunidad religiosa y límites de la libertad religiosa*, XLIII, 360, H.D. (1966), pp. 19-39.
- *La confesionalidad del Estado: causas de su actualidad como problema*, VII, 2, Lumen (1958), pp. 121-134.
- *La libertad religiosa en la España de hoy*, LXVI, 256, Arbor (1967), pp. 343-411.
- *La libertad religiosa vista desde un país católico: España*, III, 18, Concilium (1966), pp. 97-114.
- J.M.N., *En marcha la campaña de la asignación tributaria para la Iglesia*, 314, Palabra (1991), p. 29.
- J.M.P., *Acuerdos Santa-Sede-Estado español*, 162, Palabra (1979), pp. 11-14.
- JONCHERAY, J., *Pour mieux connaître les phénomènes religieux récents*, XXXVI, L'A.C. (1993), pp. 71-76.

- JONG, A., De, *Los Concordatos y el Derecho Internacional: valor e influjo*, III, 58, Concilium (1970), pp. 242-250.
- JORDÁN VILLACAMPA, M.L., *El derecho de libertad religiosa en la doctrina española*, 65, XXXIII, I.C. (1993), pp. 47-60.
- JOURNEAU, B., *La question de la liberté de culte et les débats aux Cortes dans 1855*, 43, H.S. (1991), pp. 475-502.
- JUBANY, Mons. N., *La función profética de la Iglesia y los concordatos*, 1573, Ecclesia (1972-I), pp. 19-36.

## K

- KAPTIJN, A., *Quelques éléments d'évaluation vis-à-vis des communautés nouvelles et des nouveaux mouvements religieux*, XXXVI, L'A.C. (1993), pp. 113-116.
- KILMARTIN, E., *Derecho de los laicos en la elección de los obispos*, 157, III, Concilium (1980), pp. 64-71 -tr. de A. Gelmírez-.
- *El estipendio de la misa*, 137, II, Concilium (1978), pp. 586-592 -tr. De J. Valiente Malla-.
- KLEYNTJENS, J., *Les Concordats avec les Pays allemands. (Efforts du Saint-Siège en faveur de la Paix)*, 27, R.D.I.S.D.P. (1949), pp. 416-422.
- KOUBI, G., *La laïcité sans la tolérance*, 3, R.R.J.D.P. (1994), pp. 715-733.
- KRISHNASWAMI, A., *The status of religions in relation to the State*, II, 1, J.Ch.S. (1960), pp. 44-60.

## L

- LABOA, J.M<sup>a</sup>., *La libertad religiosa en la historia constitucional española*, 30, R.E.P.N.E. (1982), pp. 157-183.
- LA BRIÈRE, Y., De, *La renaissance du droit canonique dans plusieurs législations séculières grâce aux divers concordats du pontificat de Pie XI*, 2, Rev.D.I. (1935), pp. 213-245.
- LADERO QUESADA, M.Á., *Algunos datos para la Historia económica de las Órdenes Militares de Santiago y Calatrava en el siglo XV*, 116, Hispania (1970), pp. 637-662.
- LAMADRID, R.S., De, *La España nueva ante el Concordato*, 112, R. y F. (1937), pp. 208-221.
- LAMET, P.M., *Acuerdos Iglesia-Estado. Terminó una recta final que parecía eterna*, 1162, V.N. (1979-I), pp. 12-14.

- *Habr  impuesto religioso, pero no seg n el “modelo alem n”*, 1147, V.N. (1978-II), pp. 12-13.
- *Prepararse para un “tributo religioso”*, 1141, V.N. (1978-II), pp. 12-13.
- *Rumores de un pacto t cito Iglesia-Estado*, 1054, V.N. (1976-II), pp. 8-9.
  
- LAMET, P.M., -y redacci n-, *Iglesia-Estado. Termin  una recta final que parec a eterna*, 1162, V.N. (1979-I), pp. 13-15.
  
- LANGROD, G., *Tendances r formatrices de l’administration eccl sastique*, 162, R.A. (1974), pp. 537-540.
  
- LAPORTA, F.J., *El principio de igualdad: Introducci n a su an lisis*, 67, Sistema (1985), pp. 3-31.
  
- LAVILLA ALSINA, L., *El hecho religioso en la elaboraci n de la Constituci n. Los acuerdos parciales*, II, 8, XX Siglos (1991), pp. 40-49.
  
- LAZO, A., *La desamortizaci n eclesi stica en la provincia de Sevilla: estudio de las fuentes*, 100, M. y C. (1967), pp. 91-103.
  
- LE FU, L., *Le Saint-Si ge et le Droit international*, 3, Rev.D.I. (1929), pp. 25-69.
  
- LEGUINA VILLA, J., *Dos cuestiones en torno a la libertad religiosa: control administrativo y concepto de notorio arraigo*, 44, R.E.D.A. (1984), pp. 683-692.
  
- LEJEUNE VARC RCEL, E., *Aspectos fiscales de los nuevos acuerdos de la Iglesia Cat lica con el Estado espa ol*, XIX, 27, I.C. (1979), pp. 329-338.
  
- LISTL, J., *La paridad jur dico-confesional entre las iglesias cat lica y evang lica y las comunidades religiosas menores en los campos de la ense anza y del derecho patrimonial ante el derecho eclesi stico estatal de la Rep blica Federal de Alemania*, 94, R.A.P. (1981), pp. 345-365.
  
- LODOS, F., *El privilegio del fuero en Espa a, hoy*, 61, 2, S.T. (1973), pp. 143-148.
- *El “uti-frui” de los beneficiarios eclesi sticos*, I, R.E.D.C. (1950), pp. 291-310.
  
- LOMBARDI, G., *Alcune riflessioni sul problema dei rapporti tra la Chiesa e gli Stati*, III-IV, Jus (1962), pp. 410-424.
  
- LOMBARD A, P., *Bases del derecho eclesi stico espa ol 1931-1977*, IV, 1, A.F.G. (1982), pp. 357-382.
- *Chiesa e Stato nella Spagna odierna*, LXXXIV, I, D.E. (1973), pp. 133-153.

- *Derecho eclesiástico y libertad religiosa*, I, 90, R.D.Púb. (1983), pp. 11-21.
  - *Dualismo cristiano y libertad religiosa en el Concilio Vaticano II*, XXVI, 51, I.C. (1986), pp. 13-32.
  - *El concepto actual de derecho Eclesiástico y su marco constitucional*, I, A.D.E.E. (1985), pp. 623-675.
  - *La confesionalidad del Estado hoy*, I-II, I.C. (1961), pp. 329-351.
  - *La personalidad jurídica civil de los entes eclesiásticos según los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 3 de enero de 1979*, XIX, 37, I.C. (1979), pp. 79-105.
  - *La propiedad en el ordenamiento canónico*, II, I.C. (1962), pp. 405-424.
- LONGARES ALONSO, J., *Los religiosos de Barcelona, cuando la guerra y la exclaustración (1835)*, 4-5, A.H.M.C. (1977-78), pp. 363-387.
- LÓPEZ ALARCÓN, M., *Actitud del Estado ante el factor social religioso*, V, A.D.E.E. (1989), pp. 63-68.
- *Algunas consideraciones sobre el régimen jurídico de las entidades eclesiásticas católicas*, R.D.Pr. (1983), pp. 99-121.
  - *Apuntes para una teoría general del patrimonio eclesiástico*, IV, I, I.C. (1966), PP. 111-151.
  - *Dimensión orgánica de las confesiones religiosas en el derecho español*, XX, 40, I.C. (1980), pp. 39-85.
  - *Eficacia civil de la licencia para la enajenación de bienes eclesiásticos*, XXIX, 57, I.C. (1989), PP. 305-326.
  - *El Derecho eclesiástico internacional (A propósito de un libro)*, 185, R.E.P. (1972), pp. 193-207.
  - *La administración de los bienes eclesiásticos*, XXIV, 47, I.C. (1984), pp. 87-121.
  - *La cláusula política en el Derecho concordato español*, 34, 97, R.E.D.C. (1978), pp. 25-56.
  - *La personalidad jurídica civil de las asociaciones canónicas privadas*, 44, 123, R.E.D.C. (1987), pp. 383-410.
- LÓPEZ DE PRADO, J., *El nuevo eje de la problemática político-religiosa*, XXXI, 89-90, R.E.D.C. (1975), pp. 313-338.
- *La libertad religiosa en el Fuero de los españoles*, 175, 1, 828, R. y F. (1967), PP. 79-85.
  - *¿Régimen estatal de libertad religiosa?*, 190, 923, R. y F. (1974), pp. 400-411.
  - *Unidad católica y libertad religiosa*, 56, 4, S.T. (1968), pp. 263-288.
- LÓPEZ DÍAZ, M<sup>a</sup>.I., *Las desmembraciones eclesiásticas de 1574 a 1579*, 129, M. y C. (1974), pp. 135-210.
- LÓPEZ GARCÍA, J.M., *El ocaso de los institutos de regulares castellanos en las postrimerías del Antiguo Régimen*, 108-109, H.P.E. (1987), pp. 311-325,

- LÓPEZ GARRIDO, D., *Los exaltados frente a la desamortización (1834-1839). La cuestión del intendente de Hacienda*, 39, R.E.D.A. (1983), pp. 543-555.
- LÓPEZ GONZÁLEZ, J.L., *La I República española: Desunión e inestabilidad políticas en el debate parlamentario*, 78, R.E.P.N.E. (1992), pp. 303-330.
- LÓPEZ MARTÍNEZ, N., *El patrimonio económico de los jesuitas en el reino de Sevilla y su liquidación en tiempos de Carlos III*, 217, A.H. (1988), pp. 35-60.
- *La desamortización de bienes eclesiásticos en 1574. Carta-memorial de Fr. Hernando del Castillo, O.P. a Felipe II*, XXII, 186, Hispania (1962), pp. 230-250.
- LÓPEZ PINTOR, R., *La Iglesia española en cifras*, 1, XX Siglos (1993), pp. 20-30.
- LÓPEZ PUERTA, L., *Las ventas de bienes eclesiásticos en la provincia de Guadalajara (1836-1851)*, 4, C.H.R.H. (1973), pp. 381-418.
- LÓPEZ RODÓ, L., *El principio de igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, I, 100-102, R.A.P. (1983), pp. 331-345.
- LÓPEZ RUYALES, D., *La Iglesia y la legislación de beneficencia*, I, R.E.D.C. (1950), pp. 229-248.
- *Problemas sobre bienes eclesiásticos que presenta el derecho de los religiosos*, I, R.E.D.C. (1950), pp. 229-248.
- LORDA, J.L., *La deuda externa de la Iglesia en España*, 2534, Ecclesia (1991-I), p. 6.
- LOSADA, J., *Los nuevos acuerdos Iglesia-Estado y la Conferencia Episcopal: un problema de negociación de identidad*, 79, I.V. (1979), pp. 25-32.
- LUCA, L., De, *Diritto ecclesiastico e diritto internazionale*, 5, 6, CCVII, A.G. (1987), pp. 5-23.
- LUCAS MURILLO, P., y TONIATTI, R., *Seminario sobre el proyecto de Constitución española (Bolonia, 26 y 27 de mayo de 1978)*, 4, R.E.P.N.E. (1978), pp. 181-191.
- LUCET, Ch., *Les relations de l'Eglise et de l'Etat*, 18, Pouvoirs (1981), pp. 123-140.
- LUCIEN-BRUN, R.P., *La fin des Concordats?*, XVIII, A.F.D.I. (1972), pp. 225-233.
- *Une nouvelle étape dans le droit concordataire*, XI, A.F.D.I. (1965), pp. 113-121.
- LUIS, F., De, *La contribución del Estado a la financiación de la Iglesia*, 2372, Ecclesia (1988-I), p. 19.

- *La naturaleza tributaria de la asignación tributaria a fines religiosos*, 2372, Ecclesia (1988-I), p. 7.

## LL

- LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas: fundamentos, alcances y límites*, 3, R.C.E.C. (1989), pp. 199-231, reproduce el artículo con idéntico título, en V, A.D.E.E. (1989), pp. 69-101.
- *Principios, técnicas y modelos de relación entre Estado y grupos ideológicos religiosos (confesiones religiosas) y no religiosos*, 88, R.E.P.N.E. (1995), pp. 29-61.
- LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., y SUÁREZ PERTIERRA, G., *El fenómeno religioso en la nueva Constitución española. Bases de su tratamiento jurídico*, 61, R.F.D.U.C.N.E. (1980), pp. 7-34.

## M

- MACÍAS DELGADO, J., *Ideario político-económico del motín contra Esquilache, según la "causa del motín de Madrid"*, 71, R.E.P.N.E. (1991), pp. 235-258.
- MADURELL MARIMÓN, J.M<sup>a</sup>., *Patronatos reales eclesiásticos en los Reinos de Aragón*, XIII, H.S. (1960), pp. 413-421.
- MAESTRE ROCA, J., *Los nombramientos episcopales y las circunscripciones eclesiásticas dentro de la problemática que plantea la revisión del Concordato español de 1953*, 191, R.E.P. (1973), pp. 171-195.
- MALDONADO Y FERNÁNDEZ DEL TORCO, J., *Las causas pías ante el Derecho civil*, II, R.E.D.C. (1950), pp. 449-474.
  - *Los primeros años del Concordato de 1953*, I, R.E.D.C. (1957), pp. 7-28.
  - *Los recursos de fuerza en España. Un intento de suprimirlos en el siglo XIX, XXIV*, A.H.D.E. (18954), pp. 281-283.
- MANTECÓN SANCHO, J., *Las confesiones como partes contratantes de los Acuerdos de cooperación con el Estado*, XI, A.D.E.E. (1995), pp. 287-295.
- MANZANARES, J., *Calificación religiosa de "Confesiones y entes subsidiarios" y su protección jurídica*, 1, R.G.L.J. (1995), pp. 9-26.

- *La Iglesia ante los organismos internacionales. El hecho y su sentido*, 52, 138, R.E.D.C. (1995), pp. 191-215.
- MAÑARICUA, A., *El nombramiento de los obispos, el concilio Vaticano II, y el Concordato español*, XV, 2, Lumen (1966), pp. 109-136.
- MARCHI, T., *La remunerazione dei chierici nel nuovo Codice*, CIX, M.E. (1984-I-II), pp. 187-195.
- MARGENAT, J.M., *La Iglesia en la guerra civil de España. Boletín bibliográfico*, 44, 85, M.C. (1986), pp. 523-555.
- MARQUÉS PLANAGUMÁ, J.M<sup>a</sup>., *La Santa Sede y la España de Carlos II. La negociación del nuncio Millini 1675-1685*, 28-29, A.A. (1981-1982), pp. 139-398.
- *Los empréstitos pontificios de 1864 en España*, 38, A.A. (1991), pp. 203-227.
- MARSÁ VANCELLS, Pl., *Las relaciones de la Iglesia y el Estado en el moderno Derecho constitucional*, I, R.E.D.C. (1953), pp. 285-297.
- MARTÍ, C., *Estados de cuentas parroquiales en 1978*, 4-5, P.M. (1979), pp. 290-293.
- MARTÍN, I., *Contribución al estudio del regalismo en España. Un índice de las prácticas regalistas desde los visigodos hasta Felipe V*, 18, III, R.E.D.C. (1948), pp. 1191-1208.
- *El sistema tributario español y la Orden Dominicana a fines del siglo XVIII. (Aproximación a un modelo de fuente histórica)*, CII, 330, L.C.T. (1975-I), pp. 139-147.
- *En el segundo centenario del Concordato español de 1753*, III, R.E.D.C. (1953), pp. 745-759.
- *La libertad religiosa en la Ley Orgánica del Estado*, 182, R.E.P. (1972), pp. 181-215.
- *Las relaciones de la Iglesia y el Estado en el pensamiento del Cardenal Belluga*, II, 3, R.F.D.U.M. (1958), pp. 83-113.
- *Libertad de la Iglesia y Concordatos. Reflexiones sobre la reforma del Concordato de 1953*, XIV, 37, R.F.D.U.M. (1970), PP. 7-36.
- *Libertad religiosa y Estado católico después del Concilio Vaticano II*, XIII, 34, 35 y 36, R.F.D.U.M. (1969), pp. 35-67.
- *Panorama del regalismo español hasta el vigente Concordato de 1953*, V, 11, R.F.D.U.M. (1961), pp. 279-303.
- *Proyección de Pío XII sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado*, II, 4, R.F.D.U.M. (1958), pp. 339-354.
- MARTÍN DE AGAR, J.-T., *La actuación patrimonial de los entes eclesiásticos ante el ordenamiento civil*, XX, 39, I.C. (1980), PP. 193-247.
- *Libertà religiosa, uguaglianza e laicità*, VII, 1, I.E. (1995), pp. 199-215.

- *Notas sobre la cooperación económica del Estado con la Iglesia Católica*, XXI, 42, I.C. (1981), pp. 783-808.
  
- MARTÍN DÉGANO, I., *El régimen tributario de los bienes inmuebles de las confesiones religiosas*, 76, R.H.L. (1996), pp. 73-103.
  
- MARTÍN MARTÍN, T., *La desamortización de bienes del Convento de San Esteban de Salamanca (I)*, C, 324-325, L.C.T. (1973), pp. 565-588.
  
- *La desamortización de bienes del convento de San Esteban de Salamanca (II)*, CI, 326, L.C.T. (1974), pp. 71-90.
  
- MARTÍN PATINO, J.M<sup>a</sup>., *Acuerdos sin privilegios*, 1917, Ecclesia (1979-I), pp. 18-19.
  
- MARTÍN SÁNCHEZ, C.I., *El derecho de libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español*, XXIII, 65, I.C. (1993), pp. 61-96.
  
- *El "privilegio del fuero" en el actual concordato español*, 59, 5, S.T. (1971), pp. 340-357.
- *Notas sobre la personalidad de los entes eclesiásticos en el Derecho español*, 185, R.E.P. (1972), pp. 209-237.
  
- MARTÍN SÁNCHEZ, I., *La financiación de las confesiones religiosas en el Derecho español*, VI, A.D.E.E. (1990), pp. 129-156.
  
- MARTÍN SECO, J.F., *La economía en la Iglesia: ¿problema o pseudoproblema?*, 4-5, P.M. (1979), pp. 364-368.
  
- MARTÍN SEMINARIO, J., *El fuero de los clérigos en el Concordato español*, II, R.E.D.C. (1954), pp. 379-393.
  
- MARTÍNEZ, E., *Las iglesias asturianas de Patronato Real en el siglo XVII*, XXXII, 95, B.I.E.A. (1978), PP. 699-713.
  
- MARTÍNEZ ALEGRÍA, A., *La parroquia de Valcarlos y el nuevo Concordato español*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 203-208.
  
- MARTÍNEZ BLANCO, A., *Derecho interpotestativo eclesiástico (Naturaleza de las normas de fuente externa sobre materia eclesiástica)*, 187, R.E.P. (1973), pp. 227-273.
  
- *La cesión gratuita de bienes inmuebles por las Corporaciones Locales a favor de una parroquia*, II, A.D.E.E. (1986), pp. 383-389.
  
- MARTÍNEZ CALCERRADA, L., *La ley de libertad religiosa y su incidencia sobre el Código Civil. (Especial referencia a las clases matrimoniales del artículo 42)*, R.D.Pr. (1971), pp. 954-978.

- MARTÍNEZ DíEZ, G., *El patrimonio eclesiástico en la España visigoda. Estudio histórico-jurídico*, XXXII, M.C. (1959), pp.5-200.
- MARTÍNEZ LAFUENTE, A., *Ley de Presupuestos e inconstitucionalidad*, 25, R.E.D.F. (1980), pp. 51-85.
- MARTÍNEZ MARTÍN, J.A., *La desamortización eclesiástica en Madrid*, 3, XX Siglos (1992), pp. 143-149.
- MARTÍNEZ MILLÁN, J., *La desamortización de los bienes de la Inquisición*, II, 2, Carthaginensia (1986), pp. 173-223.
- MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M., *Un aspecto particular en la génesis del Código Civil: las relaciones de los Gobiernos de la Restauración y la Iglesia Católica*, 3, A.C. (1989), pp. 3189-3206.
- MARTÍNEZ SOSPEDRA, M., *Constitución española y objeción de conciencia (Acerca de las sentencias del Tribunal Constitucional 160 y 161/87, de 27 de octubre)*, XLIV, 523, R.G.D. (1988), pp. 1751-1774.
  - *Las fuentes de la Constitución de 1876 (Continuidad y cambio en el constitucionalismo español del siglo XIX)*, 8, R.D.Pol. (1981), pp. 71-96.
- MARTÍNEZ-TORRÓN, J., *Jerarquía y antinomias de las Fuentes del nuevo Derecho eclesiástico español*, III, A.D.E.E. (1987), pp. 119-148.
  - *La libertad religiosa en los últimos años de la jurisprudencia europea*, IX, A.D.E.E. (1993), pp. 53-87.
- MARZOA, Á., *No confesionalidad e indiferentismo en materia religiosa (Dos términos no implicados)*, V, A..D.E.E. (1989), pp. 103-107.
- MATEO AVILÉS, E., *La Iglesia en Málaga durante la Guerra Civil Española (1936-1939)*, 44, H.S. (1992), pp. 513-542.
- MAURO, T., *Enti e beni ecclesiastici. Articolato della Commissione Paritetica*, LX, 1-2, Apollinaris (1987), pp. 43-79.
- M.C.G., *La Iglesia en España sin Concordato (Una hipótesis de trabajo)*, 1776, Ecclesia (1976-I), pp. 18-20.
- McManus, F.R., *Las ayudas económicas y su transparencia*, 137, Concilium (1978-II), pp. 513-523.
- MEDINA MUÑOZ, M.A., *La reforma constitucional de 1845*, 203, R.E.P. (1975), pp. 75-105.

- *Las Cortes en la Constitución de 1845*, 208-209, R.E.P. (1976), pp. 131-148.
- MENÉNDEZ GONZÁLEZ, A., *La desamortización eclesiástica en Asturias en la época de Felipe II (1ª parte)*, XXXVII, 109-110, B.I.E.A. (1983), pp. 489-515.
- *La desamortización eclesiástica en Asturias en la época de Felipe II. II parte*, XXXVIII, 11, B.I.E.A. (1984), pp. 55-79.
- MERINO NAVARRO, J.P., *Hacienda, deuda pública y desamortización con Carlos IV, avance de investigación*, XXXVIII, A.E.A. (1981), pp. 251-269.
- *La Hacienda de Carlos IV*, 69, H.P.E. (1981), pp. 139-182.
- MESTRE, A., *Decadencia y reforma de la Iglesia española en el pensamiento de Mayans y Siscar*, 15, A.A. (1967), pp. 217-307.
- MIGUÉLEZ DOMÍNGUEZ, L., *El concordato entre la Santa Sede y el Estado español*, III, R.D.N. (1954), pp. 7-48.
- *Situación actual del problema de las capellanías en España*, I, R.E.D.C. (1950), pp. 311-336.
- MOLANO, E., *La laicidad del Estado en la Constitución española*, II, A.D.E.E. (1986), pp. 239-256.
- MOLINA MELIÀ, A., *La Iglesia y la Constitución española de 1978*, 12, A.V. (1980), pp. 385-438.
- MOLINÉ, E.A., *La diócesis de Barcelona puede autofinanciarse en siete u ocho años*, 1166, V.N. (1979-I), pp. 16-17.
- MOLINER PRADA, A., *La Iglesia española y el primer franquismo*, 45, H.S. (1993), pp. 341-362.
- MONTAÑÉS, J., *El deber de conservación y el deber de mejora, en la administración de bienes eclesiásticos*, IV, I, I.C. (1964), pp. 183-204.
- *La inversión en valores del patrimonio eclesiástico rentable*, I, I.C. (1965), pp. 154-177.
- MONTERO, E., *El régimen concordatario en las relaciones de la Iglesia y el Estado*, 13, Ecclesia (1941), pp. 18-19.
- *Los concordatos de la posguerra*, 14, Ecclesia (1941), p. 17.
- MONTERO GIBERT, J.R., *La CEDA y la Iglesia en la II República española*, 31-32, R.E.P.N.E. (1983), pp. 101-119.

- MONTES CASAS, A., *La recepción de la personalidad moral en el CIC. (Estudio del canon 113, 1º)*, XXXVI, 71, I.C. (1996), pp. 143-178.
- MONTESINOS I SÁNCHEZ, N., *Aproximación al nacimiento de la cuestión religiosa*, 6, A.U.A. (1991), pp. 159-168.
  - *La confesionalidad, pieza clave en la historia constitucional española y en el régimen franquista*, 6, A.U.A. (1991), pp. 265-266.
  - *La cuestión de la confesionalidad en la historia constitucional española. Un análisis de legislación (1808-1931)*, 51, 136, R.E.D.C. (1994), pp. 115-152.
- MONTSERRAT, V., *El artículo 16 del nuevo Concordato español*, XXVIII, 196, 3, R.G.L.J. (1954), pp. 273-290.
- MORAL, T., *Los premonstratenses en España. Guión para un estudio histórico-crítico de la orden*, XXI, H.S. (1968), pp. 57-85.
- MORAL RUIZ, J., Del, *La presión fiscal en el Trienio Constitucional (1820-1823)*, 27, H.P.E. (1974), pp. 47-73.
  - *Repercusiones de la desamortización civil en las Haciendas locales: hipótesis y planteamientos*, 87, H.P.E. (1984), pp. 311-321.
- MORÁN ORTÍ, M., *Revolución liberal y reforma religiosa en las Cortes de Cádiz*, 26, R.C.G. (1992), pp. 117-131.
- MORELLI, G., *Questione circa la provvista degli uffici vescovili e parrocchiali*, III-IV, Jus (1962), pp. 479-514.
- MORENO ANTÓN, M.G., *Algunas consideraciones en torno al concepto de bienes eclesiásticos en el CIC de 1983*, 44, 122, R.E.D.C. (1987), pp. 71-92.
- MORENO FERNÁNDEZ, L.M., *Aproximación a la Iglesia en Murcia durante la II República (1931-1936)*, 2, An.H.C. (1983), pp. 219-249.
- MORO BARREÑADA, J.Mª., *La desamortización de los bienes municipales en Asturias en la segunda mitad del siglo XIX*, XXX, 88-89, B.I.E.A. (1976), pp. 627-629.
- MORONI, A., *Appunti sul fenomeno religioso nelle moderne costituzioni europee*, XXI, A.U.M. (1957), pp. 97-138.
- MORRÁS ETAYO, J.L., *El Consejo Diocesano de Asuntos Económicos en las diócesis españolas*, 53, 140, R.E.D.C. (1996), pp. 231-258.
- MORTA FIGULS, Á., *El "privilegio del fuero" en el Derecho concordatario*, III, R.E.D.C. (1954), pp. 779-840.

- MOSTAZA RODRÍGUEZ, A., *El nuevo régimen económico de la Iglesia en España*, 205, 1005, R. y F. (1982), pp. 141-256.
  - *Régimen de confesionalidad y de laicidad o separación: valoración y perspectivas*, XXXV, 66, M.C. (1977-I), pp. 39-75.
  - *Sistemas estatales vigentes de dotación a la Iglesia Católica*, 52, 201, E.E. (1977), pp. 223-255.
- MOTA, A., *El recurso de fuerza de España*, XVII, 34, I.C. (1977), pp. 312-361.
- MOTILLA DE LA CALLE, A., *Algunas consideraciones en torno a la naturaleza jurídica y eficacia normativa de los Acuerdos aprobados según el artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa*, X, A.D.E.E. (1994), pp. 345-368.
  - *Algunas reflexiones en torno a los Proyectos de acuerdo entre el Estado y las confesiones religiosas evangélicas y judía*, 1, La Ley (1991), pp. 935-947.
  - *Aproximación a la categoría de confesión religiosa en el derecho español*, 8-9, R.J.C.M. (1989/1990), pp. 7-51.
  - *Aproximación a la categoría de confesión religiosa en el derecho español*, 2, D.E. (1989), pp. 145-191.
  - *Breves reflexiones en torno a la importancia social y política del Derecho de Libertad religiosa*, I, 114, R.D.Púb. (1989), pp. 109-120.
  - *Fuentes pacticias del Derecho Eclesiástico español*. III, A.D.E.E. (1987), pp. 175-199.
  - *Grupos marginales y libertad religiosa: los nuevos movimientos religiosos ante los Tribunales de Justicia*, IX, A.D.E.E. (1993), pp. 89-151.
  - *Ideología, creencias y libertad religiosa*, Q.D.P.E. (1990-2), pp. 13-29.
  - *La reforma de la legislación eclesiástica a través de los textos pacticios: el "Acuerdo de revisión del Concordato de Letrán" y la "Intesa" con la "Tavola Valdese"*, II, A.D.E.E. (1986), pp. 705-746.
  - *Los acuerdos con las confesiones religiosas en el Derecho español*, 1, La Ley (1985), pp. 1162-1165.
  - *Los acuerdos o convenios de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas en el Derecho español*, II, 99, R.D.Púb. (1985), pp. 387-442.
  - *Medios de protección a las personas integradas en sectas religiosas en el derecho español*, 49, 132, R.E.D.C. (1992), pp. 161-174.
  - *Minorías religiosas en el Derecho español*, 76, R.F.D.U.C. (1989-90), pp. 171-189.
  - *Proyectos de Acuerdo entre el Estado y las Federaciones evangélica y judía: primeras valoraciones*, III-IV, 120-121, R.D.Púb. (1990), pp. 559-608.
  - *Reconocimiento administrativo de la capacidad de pactar acuerdos de cooperación con el Estado (El supuesto de la confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová) (I)*, 1, A.Adm. (1995), pp. 201-209.

- *Reconocimiento administrativo de la capacidad de pactar acuerdos de cooperación con el Estado (El supuesto de la confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová) (y II)*, 1, A.Adm. (1995), pp. 211-225.
- *Sectas religiosas y sociedad democrática*, 2, D. y O. (1994), pp. 309-316.
  
- MOXÓ, S., De, *La incorporación de señoríos eclesiásticos*, XXIII, XC, Hispania (1963), pp. 219-254.
- *Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI*, XXXI, A.H.D.E. (1961), pp. 327-361.
  
- MOYA, R., *El Concordato en las actuales relaciones entre la Iglesia y el Estado*, 49, Angelicum (1972), pp. 348-366.
  
- MÜLLER, Ch., *Reflexiones críticas en torno a las relaciones entre la religión y el Estado*, 30, R.E.P.N.E. (1982), pp. 41-80.
  
- MUNIER, Ch., *El concepto de "dominium" y "propietas" en los canonistas y moralistas desde el s. XVI al XIX*, II, I.C. (1962), pp. 469-479.
  
- MUÑOZ BAÑOS, C., *El nuevo régimen tributario de la Iglesia Católica*, 4, La Ley (1981), pp. 945-949.
  
- MUÑOZ BAYO, S., *La desamortización en la provincia de Málaga*, 8, Jábega (1974), pp. 41-47.
  
- MUÑOZ DUEÑAS, M<sup>a</sup>., *Las resistencias al diezmo*, 1 (monografías), H.P.E. (1994), pp. 155-165.
  
- MUÑOZ PALACIOS, R., *Concordatos y sociedad democrática*, XLVI, 399, H.D. 1966), pp. 716-721.
- *Notas al proyecto de ley sobre libertad religiosa*, XLIV, 376, H.D. (1967), pp. 562-566.
  
- MURGA, J.L., *Nulidad o ilicitud en la enajenación de las "res sacrae"*, XLI, A.D.E.E. (1971), pp. 555-638.
  
- MUTILOA POZA, J.M<sup>a</sup>., *Constitución, consolidación y disolución del patrimonio de la Iglesia en Navarra (El Monasterio de Leyre)*, 162, P.V. (1981), pp. 53-165.

## N

- NASARRE, E., *Del Estado confesional a la libertad religiosa*, 2509-10, Ecclesia (1991-I), pp. 42-47.

- NAVAL POTRO, J.M<sup>a</sup>., *Intentos para reanudar el diálogo entre el Gobierno y los Obispos. La asignación tributaria podría incrementarse al uno por ciento del Impuesto de la Renta*, 316-317, Palabra (1991), p. 18.
- NAVARRO, L.F., *La libertad religiosa en la Convención europea de salvaguarda de los derechos del hombre*, XXIII, 46, I.C. (1983), pp. 779-823.
  - *La Santa Sede e la libertà religiosa. Interventi presso la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU (1983-1993)*, VII, 2, I.E. (1995), pp. 721-739.
  - *Proyectos de Declaración y de Convenio Internacional sobre eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o creencia*, XXI, 42, I.C. (1981), pp. 809-888.
- NAVARRO GODOY, M.J., *La Desamortización de Mendizábal: algunos trasvases de la propiedad en la cuenca del río Almanzora*, 10, A.H.C. (1983), pp. 57-89.
- NAVARRO PAREJA, J.R., *La diócesis de Valencia emite un empréstito de mil millones*, 2574, Ecclesia (1992-I), p. 11.
- NAVARRO-VALLS, R., *Convergencia concordataria e internacionalista en el "accord-normatif" (En torno a la inclusión del concordato en la Teoría General del Derecho Internacional Público)*, I, I.C. (1965), pp. 141-152.
  - *La licencia en la enajenación canónica y el derecho español*, X, I.C. (1970), pp. 303-391
  - *Los Estados frente a la Iglesia*, IX, A.D.E.E. (1993), pp. 17-51.
- NIETO SORIA, J.M., *La conflictividad en torno al diezmo en los comienzos de la crisis bajomedieval castellano, 1250-1315*, 14, A.E.M. (1984), pp. 211-235.
- NIEVES CARRASCOSA, J.E., *La desamortización eclesiástica en la "Comarca de Jaén" (1836-1845)*, 11, A.H.C. (1984), pp. 189-222.
- NOGUER, N., *El artículo 11 de la Constitución de 1876 y el proyecto de Código Penal*, 82, R. y F. (1928), pp. 289-298.
- NORSI, E., *Sul concetto giuridico della confessione*, LIX, A.G. (1897), pp. 184-197.
- NÚÑEZ MUÑOZ, M<sup>a</sup>.F., *El Episcopado español en los primeros años de la Restauración (1875-1880). Nombramiento de obispos*, XXVII, H.S. (1974), pp. 285-363.
- NUSSI, V., *Storia del Concordato di Spagna, conchiuso il 16 Marzo 1851, e della Convenzione addizionale al medesimo Concordato, stipolata il 25 Agosto 1859*, 20, A.A. (1973), pp. 823-1117 -edición, introducción y notas por José de Salazar Abrisqueta-.

- OLAECHEA, R., *Anotaciones sobre la inmunidad local en el XVIII español*, 46, M.C. (1966), pp. 293-381.
- OLGUÍN REGERA, C.L., *El impuesto eclesiástico y el abandono de la Iglesia 'actu formali'*, 54, 143, R.E.D.C. (1997), pp. 499-532.
- OLIVARES, E., *Competencia del Estado en la limitación jurídica del derecho a la libertad religiosa*, 180, 858-859, 1-2, R. y F. (1969), pp. 110-116.
  - *La autoridad eclesiástica competente en los Concordatos*, 91, Proyección (1974), pp. 170-176.
  - *La libertad religiosa en la Constitución española*, XXV, 110, Proyección (1978), pp. 209-217.
- OLIVER ARAUJO, J., *La cuestión religiosa en la Constitución de 1931. Una nueva reflexión sobre un tema clásico*, 81, R.E.P.N.E. (1993), pp. 175-183.
- OLLERO, A., *Principios de igualdad y teoría del derecho. Apuntes sobre la jurisprudencia relativa al artículo 14 de la Constitución*, 4, A.D.H. (1986/87), pp. 173-198.
- OLMO, J., Del, *El 0'5239 por 100. El "impuesto religioso" que viene*, 1599, V.N. (1987-II), pp. 12-13.
  - *Interés del Vaticano en que se incluyan las prelaturas personales en los Acuerdos Iglesia-Estado*, 1605, V.N. (1987-II), pp. 8-9.
  - *La Iglesia quiere cambiar hacia la fórmula de mayor autofinanciación*, 1601, V.N. (1987-II), pp. 12-14.
- OLMOS ORTEGA, M<sup>a</sup>.E., y VENTO TORRES, M., *La libertad religiosa tras un decenio de constitución*, 46, 126, R.E.D.C. (1989), pp. 235-253. Este artículo puede consultarse en la obra colectiva bajo la edición de ÁLVAREZ CONDE, E., (ed.), *Diez años de régimen constitucional* (Madrid 1989), pp. 175-190.
- ORTEGA, A.A., *Iglesia y Estado*, 117-118, R.E.P. (1961), pp. 101-140.
- ORTEGA, J.L., *Ante las (al parecer) próximas negociaciones concordatarias. ¿Han cambiado la actitud de los obispos?*, 897, V.N. (1973-II), pp. 6-7.
  - *La reactivación de las negociaciones en torno al Concordato ¿Noticia o rumor?*, 852, V.N. (1972-II), pp. 6-7.
  - *La señal de los cristianos*, 2449, Ecclesia (1989-II), p. 7.
  - *Preparada la fase operativa de la revisión del Concordato tras las conversaciones Casaroli-López Rodó en Madrid*, 906, V.N. (1973-II), pp. 6-7.
- OTADUY, J., De, *La personalidad civil de las entidades organizativas de la Iglesia (Referencia particular a la parroquia)*, XXIX, 58, I.C. (1989), pp. 503-526.

- *Los Proyectos de Acuerdo de cooperación con las Iglesias evangélicas y las Comunidades israelitas*, 2, Q.D.P.E. (1991-92), pp. 137-152.
- *Los proyectos de acuerdo de cooperación con las iglesias evangélicas y las comunidades israelitas*, 66, 257, E.E. (1991), pp. 205-218.

## P

- PACIOS GALLEGO, H., *Problemas económicos*, XVII, 66-67, Colligite (1971), pp. 36-49.
- *Trayectoria de un Concordato*, XVII, 65, Colligite (1971), pp. 50-88.
- PALAO GIL, F.J., *La legislación foral valenciana en materia de amortización eclesiástica: estudio normativo*, LXIII-LXIV, A.H.D.E. (1993-1994), pp. 787-845.
- PALOMINO, R.P., *El tratamiento jurídico de la objeción fiscal en los Estados Unidos*, XLII, 222, R.D.F.H.P. (1992), pp. 1271-1304.
- PANIZO Y ROMO DE ARCE, A., *Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979*, 2, R.G.L.J. (1984), pp. 171-203.
- *Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la Iglesia católica en España*, 79, R.F.D.U.C. Curso 1991-92 (1992), pp. 219-229.
- PAOLIS, V., De, *I beni temporalis nel Codice di Diritto Canonico*, CXI, M.E. (1986-I-II), pp. 9-30.
- PARTNER, P.D., *Camera Papae: problems of Papal finance in the later middle ages*, 4, J.E.H. (1953), pp. 55-68.
- PASSICOS, J., *Catégories canoniques, nouvelles communautés et nouveaux mouvements religieux*, XXXVI, L'A.C. (1993), pp. 49-55.
- PAZ, *Plan económico eclesiástico*, XLIII, 504, 5, S.T. (1955), pp. 261-283.
- PELAYO, A., *El acuerdo ratificado entra en vigor*, 1043, V.N. (1976-II), pp. 10-11.
- *Finanzas del Vaticano*, 742-743, V.N. (1970), pp. 19-26.
- *La Iglesia recupera su libertad*, 1040, V.N. (1976-II), pp. 10-12.
- *Opiniones sobre el Acuerdo España-Santa Sede y las relaciones Iglesia-Estado*, 1043, V.N. (1976-II), pp. 13-15.
- *Primer Acuerdo entre España y la Santa Sede*, 1042, V.N. (1976-II), pp. 10-11.
- *Primeros nombramientos episcopales libres*, 1046, V.N. (1976-II), pp. 10-11.
- PELAYO, A., y TOLEDO, J., *Las riquezas de la Iglesia*, 734-735, V.N. (1970), pp. 26-29.

- PEÑA JORDÁN, D., *Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pleno. Sentencia 340/1993, de 16 de noviembre. Cuestiones de inconstitucionalidad (acumuladas, en relación con el artículo 76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos). Votos particulares*, X, A.D.E.E. (1994), pp. 499-501.
- PÉREZ DE AYALA, J.L., *La asignación tributaria a la Iglesia católica y sus implicaciones constitucionales. Una reflexión*, 15 (monográfico), R.F.D.U.C. (1989), pp. 639-652.
  - *La ética fiscal como problema (Un ensayo de actualización)*, VI, A.D.E.E. (1990), pp. 265-295.
- PÉREZ LUÑO, A.-E., *Dimensiones de igualdad material*, 3, A.D.H. (1985), pp. 25-3-285.
  - *El concepto de igualdad como fundamento de los derechos económicos, sociales y culturales*, 1, A.D.H. (1981), pp. 255-275.
- PÉREZ LUQUE, M., *Impuesto sobre la Renta y la asignación tributaria a la Iglesia*, 6, R.T.T. (1989), pp. 119-125.
- PÉREZ-LLANTADA Y GUTIÉRREZ, J., *¿Ambivalencia política de los regímenes jurídicos españoles de relaciones Iglesia-Estado, anteriores al vigente de 1967?*, XVII, 33, I.C. (1977), pp. 303-358.
- PÉREZ MIER, L., *Concordato y Ley Concordada*, II, R.E.D.C. (1946), pp. 319-354.
  - *Dos obras de Derecho concordatario*, II, R.E.D.C. (1954), pp. 515-528.
  - *El Concordato español de 1953: significación y caracteres*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 7-41.
  - *El convenio español para la provisión de beneficios no consistoriales*, III, R.E.D.C. (1946), pp. 729-775.
  - *El régimen económico de la Iglesia en los Concordatos*, 19, Ecclesia (1941), pp. 17-18.
  - *Fuentes de derecho público del patrimonio eclesiástico: diezmos y primicias*, I, R.E.D.C. (1950), pp. 41-60.
  - *La Acción Católica en los Concordatos*, 3, Ecclesia (1941), p. 22.
- PÉREZ-PRENDES Y MUÑOZ DE ARRACÓ, J.M., *Continuidad y discontinuidad en la Constitución de 1876*, 8, R.D.Pol. (1981), pp. 21-32.
  - *Cortes de Castilla y Cortes de Cádiz*, 126, R.E.P. (1962), pp. 321-431.
  - *De "Metafísica Constitucional". Ensayo de comentario al Dictamen de "reforma" en 1845*, 39, R.D.Pol. (1994), pp. 9-43.
- PÉREZ SERRANO, N., *Carácter de la nueva Constitución española*, I, 1, R.D.Púb. (1932), pp. 9-16.
- PERLADO, P.A., *Sugerencias para una visión moderna del Derecho Patrimonial Canónico*, IX, II, I.C. (1969), pp. 351-400.

- PETRONCELLI, M., *Polemiche sulla nozione di ufficio ecclesiastico e gli insegnamenti del Concilio Vaticano II*, III, Jus (1976-1977), pp. 215-231.
- PETSCHEN, S., *El anticlericalismo en las Cortes Constituyentes de 1869-1871*, XXXIV, 64, M.C. (1976-I), pp. 67-96.
  - *La cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes de 1869*, XXXII, 60, M.C. (1974-I), pp. 127-153.
  - *Posición transaccionista del partido demócrata en las Constituyentes de 1869 respecto a las relaciones de la Iglesia y el Estado*, 193, R.E.P. (1974), pp. 117-146.
- PIETROLATA, L., *Caratteristiche formali e procedurali dei concordati e analogie con i trattati internazionali*, 2, CCXII, A.G. (1992), pp. 245-315.
- PIÑERO CARRIÓN, J.M<sup>a</sup>., (por orden cronológico), *Economía de la Iglesia y retribución del clero* (I), 1795, Ecclesia (1976-I), pp. 27-29.
  - *Economía de la Iglesia y retribución del clero* (II), 1796, Ecclesia (1976-II), pp. 25-27.
  - *Economía de la Iglesia y retribución del clero* (y IV), 1798, Ecclesia (1976-II), pp. 21-22.
  - *El tránsito del régimen centralizado al régimen benefical, desde el punto de vista económico*, II, I.C. (1962), pp. 481-497.
  - *La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español*, XIX, 37, I.C. (1979), pp. 303-328.
  - *Pobreza del clero y dotación estatal*, 15, 37, Seminarios (1969), pp. 103-108.
  - *Un nuevo espíritu. (Acuerdo sobre asuntos económicos) en Iglesia-Estado: nueva situación (Comentario técnico a los Acuerdos parciales)*, 1163, V.N. (1979-I), pp. 23-30.
- PLA ALBEROLA, P.J., *Los beneficios eclesiásticos y sus rentas a través de las visitas pastorales: la Parroquia de Santa María de Cocentaina a principios del siglo XVIII*, VII, 14, A.V. (1984), pp. 255-270.
- PLÖCHL, W.M., *Reflections on the nature and status of Concordats*, VII, The Jurist (1947), pp. 10-44.
- P.M.L., *Espagne: Première étape vers l'autofinancement de l'Eglise*, 5, L'A.R. (1988), p. 12.
- POLI, O., *Gli istituti religiosi con fini di istruzione e l'imposta di ricchezza mobile*, XXVI, D.P.T. (1955), pp. 159-162.
- PONSOT, P., *Révolution dans les campagnes espagnoles au XIXe siècle: les désamortissements. Revue des études récentes*, 45, E.R. (1972), pp. 104-123.
- PORTERO SÁNCHEZ, L., *Hacia el fin de la desamortización*, XVII, 49, R.E.D.C. (1962), pp. 153-161.

- (por orden cronológico) *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*, XVIII, 52, R.E.D.C. (1963), pp. 131-135.
  - *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*, XX, 58, R.E.D.C. (1965), pp. 83-105.
  - *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*, XX, 59, R.E.D.C. (1965), pp. 337-349.
  - *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*, XXI, 62, R.E.D.C. (1966), pp. 313-316.
  - *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*, XXIV, 68, R.E.D.C. (1968), pp. 389-392.
  - *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*, XXIV, 69, R.E.D.C. (1968), pp. 563-567.
  - *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*, XXV, 72, R.E.D.C. (1968), pp. 659-667.
  - *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*, XXVI, 74, R.E.D.C. (1970), pp. 405-409.
  - *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*, XXVI, 75, R.E.D.C. (1970), pp. 605-612.
  - *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*, XXVII, 76, R.E.D.C. (1971), pp. 113-134.
  - *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*, XXVIII, 81, R.E.D.C. (1972), pp. 559-669.
  - *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*, 33, 106-107, R.E.D.C. (1981), pp. 43-85.
  - *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*. 1981, 38, 110, R.E.D.C. (1982), pp. 377-392.
  - *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas*. Año 1982, 40, 115, R.E.D.C. (1984), pp. 125-141.
  - *Reseña de Derecho del Estado sobre materias eclesiásticas* (Año 1983), 40, 117, R.E.D.C. (1984), pp. 535-536.
- PORTILLO, E., *Algunas observaciones a la última colección de Concordatos*, 58, R. y F. (1920), pp. 214-219.
- (por orden cronológico) *Diferencias entre la Iglesia y el Estado con motivo del Real Patronato en el siglo XVIII*, XX, R. y F. (1908), pp. 329-338.
  - *Diferencias entre la Iglesia y el Estado con motivo del Real Patronato en el siglo XVIII (II)*, XXI, R. y F. (1908), pp. 59-74.
  - *Diferencias entre la Iglesia y el Estado con motivo del Real Patronato en el siglo XVIII*, XXI, R. y F. (1908), pp. 329-347.
  - *Diferencias entre la Iglesia y el Estado con motivo del Real Patronato en el siglo XVIII (IV)*, XXII, R. y F. (1908), pp. 60-72.
  - *Diferencias entre la Iglesia y el Estado con motivo del Real Patronato en el siglo XVIII (V)*, XXIII R. y F. (1909), pp. 165-176.
  - *Diferencias entre la Iglesia y el Estado con motivo del Real Patronato en el siglo XVIII (VI)*, XXIX, R. y F. (1909), pp. 73-84.

- *Diferencias entre la Iglesia y el Estado con motivo del Real Patronato en el siglo XVIII* (VI), XXIV, R. y F. (1909), pp. 331-339.
  - *Diferencias entre la Iglesia y el Estado con motivo del Real Patronato en el siglo XVIII*, XXXVII, R. y F. (1913), pp. 297-309.
  - (por orden cronológico) *Estudios críticos de Historia eclesiástica española durante la primera mitad del siglo XVIII. Nuestros Concordatos*, 17, R. y F. (1907), pp. 17-31.
  - *Estudios críticos de Historia eclesiástica española durante la primera mitad del siglo XVIII. Nuestros Concordatos*, 17, R. y F. (1907), pp. 324-340.
  - *Estudios críticos de Historia eclesiástica española durante la primera mitad del siglo XVIII. Nuestros Concordatos*, 18, R. y F. (1907), pp. 311-324.
  - *Estudios críticos de Historia eclesiástica española durante la primera mitad del siglo XVIII. Nuestros Concordatos*, 19, R. y F. (1907), pp. 60-70.
- POSADA, A., *Algunas reflexiones sobre la nueva Constitución española*, I, 5, R.D.Púb. (1932), pp. 129-135.
- PRADA GONZÁLEZ, J.M<sup>a</sup>., De, *La personalidad de las entidades religiosas y sus requisitos*, XXXIV, III, A.D.C. (1981), pp. 710-731.
- *¿Se hallan vigentes aún las leyes desamortizadoras?*, XIII, 37, R.E.D.C. (1958), pp. 233-236.
- PREDIERI, A., *Bilan de trente-trois années de Constitution républicaine*, 18, Pouvoirs (1981), pp. 21-48.
- PRESAS BARROSA, C., *Ayer y hoy de la enajenación del patrimonio eclesiástico y la legislación hispana*, 1, A..A. (1988), pp. 869-884.
- PRIETO, V., *Iniciativa privada. Personas jurídicas privadas*, XXV, 50, I.C. (1985), pp. 527-573.
- PRIETO ESCUDERO, G., *La burguesía beneficiaria de las desamortizaciones*, 179, R.E.P. (1971), pp. 65-84.
- PRIETO SANCHÍS, L., *El derecho eclesiástico de la década constitucional*, 66, R.E.P.N.E. (1989), pp. 93-126.
- *La objeción de conciencia como forma de desobediencia al derecho*, 59, Sistema (1984), pp. 41-62.
  - *Las minorías religiosas*, IX, A.D.E.E. (1993), pp. 153-165.
  - *Posición jurídica de las asociaciones religiosas en el Derecho español*, IV, A.D.E.E (1988), pp. 433-462.

- PUENTE EGIDO, J., *Los acuerdos entre España y la Santa Sede dentro del sistema constitucional español: su valor como tratados internacionales*, 62, 242-243, E.E. (1987), pp. 263-282.
- PUIGDOLLERS, M., *La Iglesia española en el presupuesto del Estado*, 17, Ecclesia (1941), p. 15.
- PUJAL, C., *La política religiosa del Imperio Romano en el siglo IV*, 10, R.J.C.M. (1990), pp. 99-116.

## Q

- QUINTANA GÓMEZ, M., *La seguridad social del clero en España*, XVII, 48, R.F.D.U.C. (1973), pp. 607-642.
- QUIRÓS LINARES, F., *La desamortización, factor condicionante de la estructura de la propiedad agraria en el Valle de Alcudia y Campo de Calatrava. Estudio de geografía social*, XXV, 96, E.G. (1964), pp. 367-407.

## R

- RECASENSE GASSIÓ, M., *Los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Su repercusión en el instrumento público*, CVIII, 108, R.D.N. (1980), pp. 243-265.
- RECIO, E., *Iglesia y economía en España*, 404, H.D. (1970), pp. 153-159.
- REINA, V., De, *En torno a los orígenes y fijación del beneficio eclesiástico*, XXII, 1-4, E.I.C. (1966), pp. 275-355.
- *Propiedad eclesiástica, bienes dotales y réditos eclesiales*, II, I.C. (1962), pp. 499-520.
- REMY, J., *La colaboración del pueblo de Dios en la elección y designación de obispos*, 157, III, Concilium (1980), pp. 102-111 -tr. de J. Valiente Malla-.
- REÑE BACH, R., *La economía de la Iglesia*, I, 2000 años, pp. 279-281.
- REVILLO, J.A., *El Concordato no se mueve*, 846, V.N. (1972-II), pp. 6-7.
- REVUELTA GONZÁLEZ, M., *El estallido anticlerical de 1834*, 3, XX Siglos (1992), pp. 136-141.
- *La revolución y la Iglesia en España*, 43, 82, M.C. (1985), pp. 3-17.
- *Los pagos de pensiones a los exclaustros y a las monjas (1833-1850)*, 53, 204, E.E. (1978), pp. 47-76.

- *Los planes de reforma eclesiástica durante el Trienio Constitucional*, XXX, 56, M.C. (1972-I), pp. 93-123.
  - *Los planes de reforma eclesiástica durante el Trienio Constitucional (II)*, XXX, 57, M.C. (1972-II), pp. 329-348.
  - *Vicisitudes y colocaciones de un grupo social marginado: los exclaustros del siglo XIX*, XXXII, H.S. (1980), pp. 323-351.
- REY CASTELAO, O., *La crisis de las rentas eclesiásticas en España. El ejemplo del Voto de Santiago*, 11, C.I.H. (1987), pp. 53-87.
- *La protección jurídica de las rentas eclesiásticas en España: el ejemplo del Voto de Santiago*, XXXIX, 80, H.S. (1987), pp. 457-503.
- RINCÓN-PÉREZ, T., *El Decreto de la Congregación para el Clero sobre acumulación de estipendios (22-II-1991)*, XXXI, 62, I, I.C. (1991), pp. 627-656.
- RITTY, Ch. J., *Changing economy and the new code of canon law*, XXVI, The Jurist (1966), pp. 469-484.
- RÍUS SERRA, J., *El Decreto sobre el alcance del artículo 6.º del Concordato*, II, R.E.D.C. (1954), pp. 353-378.
- RIVAS BRACONS, J.Mª., *La permuta de beneficios*, XVIII, 52, R.E.D.C. (1963), pp. 45-110.
- RIVERO RECIO, J., *La cuestión religiosa en las Constituyentes de 1931*, LX, 230, Arbor (1965), pp. 5-37.
- ROBLEDA SOLÍS, O., *Estipendios, derechos de estola*, XXXVII, 5, S.T. (1949), pp. 286-301.
- (por orden cronológico) *Provisión de beneficios no consistoriales en España*, XXXVII, 7, S.T. (1949), pp. 417-426.
  - *Provisión de beneficios no consistoriales en España*, XXXVII, 8-9, S.T. (1949), pp. 519-530.
  - *Provisión de beneficios no consistoriales en España*, XXXVII, 11, S.T. (1949), pp. 651-663.
  - *Provisión de beneficios no consistoriales en España*, XXXVIII, 2, S.T. (1950), pp. 97-100.
  - *Provisión de beneficios no consistoriales en España*, XXXVIII, 4, S.T. (1950), pp. 241-253.
  - *Provisión de beneficios no consistoriales en España*, XXXVIII, 7, S.T. (1950), pp. 540-551.
- ROBLES MUÑOZ, C., *Algunos aspectos de la legalidad de la restauración y la Santa Sede (1875-1888)*, XXV, 50, I.C. (1985), pp. 781-817.
- *Catolicismo antiliberal y restauración (1875-1876)*, 45, H.S. (1993), pp. 707-737.

- *Católicos y liberales. La Iglesia ante la Restauración (1875-1888)*, 35, A.A. (1988), pp. 307-486.
  - (por orden cronológico) *Frente a la supremacía del Estado. La Santa Sede y los católicos en la crisis de la Restauración (1898-1912) (I)*, 34, A.A. (1987), pp. 189-305.
  - *Frente a la supremacía del Estado. La Santa Sede y los católicos en la crisis de la Restauración (1898-1912) (II)*, 36, A.A. (1989), pp. 317-490.
  - *Frente a la supremacía del Estado. La Santa Sede y los católicos en la crisis de la Restauración (1898-1912) (III)*, 37, A.A. (1990), pp. 131-252.
  - *Frente a la supremacía del Estado. La Santa Sede y los católicos en la crisis de la Restauración (1898-1912) (IV)*, 38, A.A. (1991), pp. 229-333.
  - *La Santa Sede ante la Restauración. La conciliación, una opción para el catolicismo*, 33, A.A. (1986), pp. 303-361.
  - *Política y clero en la restauración, la crisis de 1881-1883*, XXXVIII, 78, H.S (1986), pp. 355-398.
- ROCA FERNÁNDEZ, M<sup>a</sup>.J., *Aproximación al concepto de fines religiosos*, 132, R.A.P. (1993), pp. 445-467.
- *Valoración de la institución de la salida de la Iglesia desde la perspectiva de los sujetos afectados: Estado, Iglesia y persona*, XXXI, 61, I.C. (1991), pp. 307-332.
- RODERO TARANCO, F., *Los problemas tributarios y la concesión y organización del diezmo en Indias*, II, R.E.D.C. (1946), pp. 355-381.
- RODRIGO, J.P., *La reforma del artículo 11 de la Constitución*, 27, 7-8, R.E. (1923), pp. 193-201.
- RODRIGO FERNÁNDEZ, J., *Comentario de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre disposición de carácter mutualista de la Ley de Presupuestos del Estado para 1981*, 72, H.P.E. (1981), pp. 206-214.
- RODRÍGUEZ, I., *Los orígenes históricos de la exención de los regulares*, II, R.E.D.C. (1956), pp. 243-271.
- RODRÍGUEZ AISA, M<sup>a</sup>.L., *Gobierno de la Iglesia española. Vacantes y nombramientos de obispos durante la última guerra (1936-1939)*, XXXVII, 75, H.S. (1985), pp. 9-31.
- RODRÍGUEZ ALONSO, M., *El Estatuto Real de 1834. El embajador británico en la preparación y redacción definitiva del texto*, 44, R.E.P.N.E. (1985), pp. 189-203.
- RODRÍGUEZ CHACÓN, R., *Panorama bibliográfico del Derecho Eclesiástico español*, IX, A.D.E.E. (1993), pp. 673-712.

- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.J., *La sociedad española ante la libertad religiosa 1869. Valoración cuantitativa*, XXXIX, 79, H.S. (1987), pp. 239-296.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, R., *La Novela 7,2,1: la Iglesia en su cualidad de sujeto expropiado*, 84, R.F.D.U.C. Curso 1993-1994 (1995), pp. 491-502.
- RODRÍGUEZ MOLINA, J., *El diezmo eclesiástico en el obispado de Baeza-Jaén (siglos XIII-XVI)*, 7, C.H.R.H. (1977); pp. 213-282.
- ROGGENDORF, J., *El sistema del impuesto eclesiástico en la República Federal Alemana*, XXI, 42, I.C. (1981), pp. 739-781.
- ROOD, W., *Colaboración y Koinonía entre las Iglesias*, 137, Concilium (1978-II), pp. 551-559 -tr. de R. Velasco Beteta-.
- ROSARIO PRIETO, M<sup>a</sup>., *Las Cortes del Despotismo Ilustrado: medidas económicas*, XLII, 150, Hispania (1982), pp. 91-171.
- ROUCO VARELA, A.M., *La libertad de la Iglesia ante el Estado español*, XIX, 37, I.C. (1979), pp. 65-77.
- *Relaciones Iglesia-Estado en la España del siglo XVI*, 72, I.C. (1996), pp. 445-464.
- ROVERA, V., *De structuris oeconomicis in Ecclesia renovandis*, 60, 2, Periodica (1971), pp. 197-250.
- ROVIRA BELLOSO, J.M<sup>a</sup>., *La situación de la Iglesia en la sociedad española a partir de los Acuerdos de enero de 1979*, 79, I.V. (1979), pp. 7-16.
- RUANO ESPINA, L., *Los Acuerdos o Convenios de cooperación entre los distintos poderes públicos y las confesiones religiosas*, 53, 140, R.E.D.C. (1996), pp. 157-187.
- RUBIO, J.J., *Concepto de causa pía en los juristas clásicos españoles. Estudio histórico-jurídico*, XXV, 49, I.C. (1985), pp. 145-154.
- RUBIO LLORENTE, F., *La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Introducción*, 31, R.E.D.Const. (1991), pp. 9-36.
- RUEDA HERNANZ, G., *Bibliografía sobre el proceso desamortizador en España. (Tercera versión)*, 9, C.I.H. (1986), pp. 191-220.
- *Estudio comparativo de las consecuencias de la desamortización de tierras en tres zonas de Europa: departamento del Norte (Francia), Nápoles (Italia) y Valladolid (España)*, 69, H.P.E. (1981), pp. 107-123.
- *La desamortización del siglo XIX en una zona de Castilla la Vieja*, 38, H.P.E. (1976), pp. 201-229.
- *Los beneficiarios del proceso desamortizador en una zona de Castilla La Vieja (1821-1891)*, 137, M. y C. (1976), pp. 45-101.

- RUEDA HERNANZ, G., y CASTRILLEJO IBÁÑEZ, F., *Estudio comparativo de los bienes desamortizados a los antiguos propietarios en dos zonas de Castilla la Vieja*, 3, C.I.H. (1979), pp. 307-323.
- RÜFNER, W., *La garantía de existencias de clínicas de la Iglesia y de instituciones caritativas y el aseguramiento de su carácter confesional*, 63, 244, E.E. (1988), pp. 87-101.
- RUIZ ALEMÁN, J., *Las relaciones Iglesia-Estado en los orígenes de la España contemporánea*, 2, An.H.C. (1983), pp. 7-28.
- RUIZ GIMÉNEZ, J., *Concordato entre la Santa Sede y España*, VIII, 24, R.E.D.C. (1953), pp. 805-851.
- RUIZ POVEDA, L., *Administradores de Dios*, 4-5, P.M. (1979), pp. 315-319.
- RUIZ-RICO RUIZ, G., *Los derechos de las minorías religiosas, lingüísticas y étnicas en el ordenamiento constitucional español*, 91, R.E.P.N.E. (1996), pp. 99-138.

## S

- SACERDOTI, G., *Libertà religiosa e rapporti con le confessioni: contro un ritorno al separatismo*, XXVII, 1, P.D. (1996), pp. 125-131.
- SÁENZ DE SANTA MARÍA, M., *Las actuales relaciones económicas de la Iglesia católica con el Estado español: aportación económica del Estado y tributación de la Iglesia*, 93, H.P.E. (1985), pp. 119-131.
- SÁENZ DE SANTA MARÍA VIerna, A., *El registro de Entidades Religiosas: conflicto de disposiciones transitorias*, 12, R.D.N. (1981), pp. 241-280.
- SAIZ GARCÍA, M<sup>a</sup>. D., *Las Reales sociedades económicas del País, la reforma agraria y la desamortización de Mendizábal*, 87, H.P.E. (1984), pp. 209-230.
- SÁNCHEZ AGESTA, L., *Algunos caracteres generales de la Constitución de 1978*, 74, R.D.P. (1979), pp. 5-21.
- *Los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede*, I, 78, R.D.Púb. (1980), pp. 5-38.
- *Sobre la Constitución de Cádiz*, 30, R.E.D.Const. (1990), pp. 9-26.
- SÁNCHEZ ALISEDA, C., *La financiación de la parroquia*, 610, Ecclesia (1953-I), pp. 13-14.
- SÁNCHEZ BLANCO, Á., *Incidencia de la legislación desamortizadora sobre los Municipios pertenecientes al Partido judicial de Salamanca (1855-1911)*, 197, R.E.V.L. (1978), pp. 65-118.

- SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *La España nueva ante el Concordato*, 112, R. y F. (1937), pp. 208-221.
- SÁNCHEZ FERRIZ, R., *El artículo 11 de la Constitución de 1876*, 15, R.E.P.N. (1980), pp. 119-146.
  - *Génesis del proyecto constitucional: la Comisión de los Notables*, 8, R.D.Pol. (1981), pp. 33-54.
  - *Relaciones Iglesia-Estado: 1874-1875*, 26, R.E.P.N.E. (1982), pp. 77-98.
- SÁNCHEZ MARTÍN, J., *¿Necesitamos los curas la paga del Estado?*, XV, 60, Colligite (1969), pp. 58-60.
- SÁNCHEZ PATRÓN, J.M., *La calificación del Acuerdo Jurídico como Tratado Internacional y sus repercusiones respecto al Código Civil*, 1, D. y O. (1993), pp. 115-122.
- SANJUÁN, A., *Privilegios y concordatos*, 59, 3, S.T. (1971), pp. 184-193.
- SANTAMARÍA, J.A., *La personalidad de la Iglesia en el ordenamiento europeo*, 61, 238, E.E. (1986), pp. 279-290.
- SANTIAGO, M., De, *El reparto de los fondos sociales decepciona a Cáritas*, 2488-89, Ecclesia (1990-II), p. 8.
  - *El 35,11% de los contribuyentes a favor de la Iglesia*, 2416-17, Ecclesia (1989-I), pp. 8-9.
  - *Sobre "desamortizaciones" del patrimonio eclesiástico*, 2663, Ecclesia (1993-II), p. 15.
- SANTOS DÍEZ, J.L., *Distintos modelos de financiación estatal de las Iglesias. Hacia una interpretación crítica*, 80-3, 944, S.T. (1992-I), pp. 223-238.
  - *La legislación eclesiástica del Estado y su interpretación*, 48, 131, R.E.D.C. (1991), pp. 649-662.
  - *La situación jurídica de la Iglesia en los ordenamientos civiles*, LXVIII, 68, M.C. (1978), pp. 5-39.
- SANZ DE DIEGO, R.Mª., *La actitud de Roma ante el artículo 11 de la Constitución de 1876*, XXVIII, H.S. (1975), pp. 167-196.
  - *La legislación eclesiástica del sexenio revolucionario (1868-1874)*, 200-201, R.E.P. (1975), pp. 195-223.
- SARRAZIN, F., *La nomination des évêques dans l'Église latine*, 20, 2, S.C. (1986), pp. 367-407.

- SASSI, P., *Gli enti religiosi e le proposte di riforma del codice civile in tema di persone giuridiche*, 1, CCXVI, A.G. (1996), pp. 67-108.
- SASTRE SANTOS, E., *Las Comunidades de Beneficiados de Cataluña impugnadoras de los principios desamortizadores y sucesoras de las extinguidas órdenes religiosas en el siglo XIX*, 44, H.S. (1992), pp. 161-200.
- SCOLASTICUS, *El Reglamento de la ley de secularización de cementerios*, V, 27, R.E. (1933), pp. 412-423.
- SCOVAZZI, T., *Libertà religiosa e diritto internazionale*, 2, Q.D.P.E. (1989), pp. 439-442.
- SEBASTIÁN AGUILAR, F., *¿Quién tiene que sostener a la Iglesia?*, 2350, Ecclesia (1987), pp. 10-11.
- SEGRELLES CHILLIDA, V., *Necesidad de la reforma de la legislación sobre Beneficencia y Asistencia Social*, LIII, R.G.L.J. (1966), pp. 293-321.
- SENIN ARTINA, G., *Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi. Bibliografia*, 4, Q.D.P.E. (1987), pp. 71-82.
- SERRANO, C., *Los Acuerdos del Estado español con las confesiones no católica*, IV, A.D.E.E. (1988), pp. 89-105.
- SETIÉN ALBERRO, J.M<sup>a</sup>., *Contenido doctrinal de la Declaración "Dignitatis Humanae" del Vaticano II sobre la libertad religiosa*, 2, I.V. (1966), pp. 43-73.
  - *Las relaciones Iglesia-Estado*, 71-72, I.V. (1977), pp. 493-508.
  - *Libertad religiosa*, 1, I.V. (1966), pp. 81-87.
  - *Libertad religiosa concordada*, 181, 869, 6, R. y F. (1970), pp. 583-594.
  - *Relación dialéctica entre la Iglesia y el Estado*, XIX, 57, R.E.D.C. (1964), pp. 801-813.
- SEVILLA ANDRÉS, D., *La Constitución de 1812, obra de transición*, 126, R.E.P. (1962), pp. 113-141.
  - *La Constituyente de 1854*, 106, R.E.P. (1959), pp. 129-165.
- SIC, *Presentada la campaña de ayuda a la Iglesia en la declaración de la Renta*, 2736, Ecclesia (1995-I), p. 9.
- SIMÓN SEGURA, F., *La desamortización de Mendizábal en la provincia de Barcelona*, 98, M. y C. (1966), pp. 121-141.
  - *La desamortización de 1855*, 19-20, E.F.E. (1967), pp. 95-126.
  - *La desamortización de 1855 en la provincia de Ciudad Real*, 27, H.P.E. (1974), pp. 87-114.

- SOLER, C., *La libertad religiosa en la declaración conciliar "Dignitatis Humanae"*, XXXIII, 65, I.C. (1993), pp. 13-30.
- SOLÍS, R., *Cara y cruz, "La primera Constitución española" (Cádiz 1812-1823)*, 126, R.E.P. (1962), pp. 143-156.
- SOPEÑA IBÁÑEZ, F., *Galdós y la desamortización*, 2, C.R. (1981), pp. 69-75.
- SORIANO, R., *Del pluralismo confesional al pluralismo religioso íntegro: los límites al principio de igualdad religiosa*, 7, R.C.G. (1986), pp. 95-157-
- SOTO DE GANGOITI, J., *El Estado y la Iglesia en su relación económica presupuestaria*, 127, R. y F. (1943), pp. 164-168.
  - *La desamortización y permutación de bienes eclesiásticos*, 108, Ecclesia (1943-II), pp. 18-19.
  - *La ordenación económica de la Iglesia*, 115, Ecclesia (1943-II), pp. 19-20.
  - *La personalidad jurídico-económica de la Iglesia y el patrimonio eclesiástico*, 104, Ecclesia (1943-II), pp. 17-18.
- SOUTO PAZ, J.A., *Cooperación del Estado con las confesiones religiosas*, 84, R.F.D.U.C. Curso 1993-1994 (1995), pp. 365-413.
  - *Gli accordi dello Stato spagnolo con le minoranze confessionali tradizionali*, 3, D.E. (1993), pp. 523-547.
  - *Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas*, I, A.D.E.E. (1985), pp. 467-468 -comenta la sentencia 24/1982, de 3 de mayo, B.O.E., núm. 137, de 9 de junio, de 1982-.
  - *La Comisión Asesora de Libertad Religiosa*, 14, R.D.Pol. (1982), pp. 31-55.
- SPATINI, G. Cl., *Le relazioni concordatarie in Spagna dal 1931 al 1976 ed i concordatari negli ordinamenti democratici e totalitari in una tavola rotonda dell'Università di Parma*, LXXXVII, I, D.E. (1976), pp. 317-328.
- STARCK, Ch., *Raíces históricas de la libertad religiosa moderna*, 47, R.E.D.Const. (1996), pp. 9-27.
- STOCKMEIER, P., *La elección de obispos en la Iglesia antigua*, 157, III, Concilium (1980), pp. 8-18 -tr. de J. Larriba-.
- SUÁREZ, F., *Sobre las raíces de las reformas de las Cortes de Cádiz*, 126, R.E.P. (1962), pp. 31-67.
- SUÁREZ PERTIERRA, G., *La personalidad jurídica de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos jurídicos*, 36, 104-105, R.E.D.C. (1980), pp. 469-491.

- SUÁREZ VERDAGUER, F., *Génesis del Concordato de 1851*, III, I-II, I.C. (1963), pp. 65-209.
- SUAY RINCÓN, J., *La igualdad en la aplicación de la ley. La doctrina del Tribunal Constitucional*, 4, P.J. (1986), pp. 95-106.
- SUBERBIOLA, J., *La Iglesia de Málaga, primera iglesia de Estado de España*, 10, Jábega (1975), pp. 21-26.
- SURRELL, H., *La liberté religieuse devant la Cour européenne des droits de l'homme (Note sous CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/Grèce)*, 3, R.F.D.A. (1995), pp. 573-584.
- SZMOLKA CLARES, J., *El Regio Patronato y la nueva Iglesia de Granada*, 2, XX Siglos (1992), pp. 85-91.

## T

- TAPIA, F.X., *Las relaciones Iglesia-Estado durante el primer experimento liberal en España (1820-1823)*, 173, R.E.P. (1970), pp. 69-89.
- TAPIADOR PERAL, A., *El derecho -canónico y civil- de sepultura, a los cinco años del Concordato*, 895, Ecclesia (1958-II), pp. 11-12.
- TARDÍO BERCOZANA, A., *Relaciones del Estado español con la Iglesia a la luz del Concilio Vaticano II*, 178, R.E.P. (1971), pp. 147-175.
- TEDDE DE LORCA, P., *Crisis del Estado y Deuda pública a comienzos del siglo XIX*, 108-109, H.P.E. (1987), pp. 169-195.
- TEDESCHI, M., *Gli Accordi spagnoli di cooperazione e l'esperienza italiana*, 50, 135, R.E.D.C. (1993), pp. 591-604.
- *L'affermazione della libertà religiosa nella società spagnola. In margine a una recente pubblicazione*, 2, Q.D.P.E. (1985), pp. 241-245.
- TEJERINA, J.G., *Los bienes temporales de la Iglesia*, XV, 60, Colligite (1969), pp. 23-31.
- TELLECHEA IDÍGORAS, J.I., *El dominio y uso de los bienes eclesiásticos, según B. de Carranza*, III, R.E.D.C. (1954), pp. 725-778.
- TELLO LÁZARO, J.A., *La Iglesia en el proceso constitucional español del siglo XIX. Las Constituciones progresistas*, 37, R.E.P.N.E. (1984), pp. 173-208.
- TIBAU, N., *El Convenio y el nombramiento de párrocos*, 282, Ecclesia (1946-II), pp. 13 y 23.
- *La Casa de los Diezmos*, 666, Ecclesia (1954-I), pp. 13-14.

- *Precisiones históricas sobre el nombramiento de Obispos auxiliares en España y fuera de España*, XXX, 87, R.E.D.C. (1974), pp. 553-565.
- TIRAPU MARTÍNEZ, D., *Breve nota sobre la posibilidad de acuerdos “menores” con las confesiones minoritarias*, XXXIV, 68, I.C. (1994), pp. 685-688.
- *Interpretación de la Constitución y libertad religiosa*, V, A.D.E.E. (1989), pp. 109-119.
- TOBALINA ORTIZ, A., *Bienes muebles e inmuebles ante el Derecho canónico*, II, R.E.D.C. (1952), pp. 673-678.
- TOMÀS FONT DE MORA, M<sup>a</sup>.A., *La preparación de la Constitución de 1845*, 73, R.E.P.N. (1991), pp. 229-241.
- *Las Cortes revisoras de 1844/1845. Su fisonomía*, 22, R.C.G. (1991), pp. 55-77.
- TOMÀS VILLARROYA, J., *La Constitución de 1812 en la época del Estatuto Real*, 126, R.E.P. (1962), pp. 251-277.
- *La formación del Gobierno durante la Segunda República*, 204, R.E.P. (1975), pp. 49-94.
- *Las Cortes de 1810. Primeras medidas*, 1, C.C.F.F.C. (1992), pp. 41-48.
- TOMÁS Y VALIENTE, F., *Desamortización y Hacienda Pública. Reflexiones: entre el balance, la crítica y las sugerencias*, 77, H.P.E. (1982), pp. 15-31.
- *La Constitución de 1978 y la historia del Constitucionalismo español*, L, A.H.D.E. (1980), pp. 721-751.
- *Recientes investigaciones sobre la desamortización: intento de síntesis*, 131, M. y C. (1974), pp. 95-160.
- TORRAS ELÍA, J., *En torno a la política tributaria de los gobiernos del Trienio Constitucional (1820-1823)*, 122, M. y C. (1972), pp. 153-170.
- TORRE, Á., De La, *La Archidiócesis de Madrid. Campaña a favor de la autofinanciación*, 2609, Ecclesia (1992-II), p. 6.
- TORRES LÓPEZ, M., *El origen del sistema de “iglesias propias”*, V, A.H.D.E. (1928), pp. 83-217.
- *La doctrina de las “Iglesias propias” en los autores españoles*, II, A.H.D.E. (1925), pp. 402-461.
- TOZZI, V., *Pactos y diversidad de fines de Estado y de las Confesiones religiosas*, IV, A.D.E.E. (1988), pp. 59-74.

- *Patti e diversità di fini tra Stato e Confessioni religiose*, 4, Q.D.P.E. (1987), pp. 169-187.
- TRAVERSO RUIZ, F.M., *La percepción del diezmo en el Obispado de Cádiz (1591-1648)*, XXXIX, 80, H.S. (1987), pp. 567-588.
- *Una disidencia significativa: el impago del diezmo en el obispado de Cádiz (S. XVII-XIX)*, XXXIX, 79, H.S. (1987), pp. 201-210.
- TROUILLER, L., *La Iglesia, intendente de los pobres*, 137, Concilium (1978-II), pp. 560-566 -tr. de A. Neira-.
- TUÑÓN DE LARA, M., *La cuestión agraria durante la Segunda República*, 426-427, Arbor (1981), pp. 125-137.
- TUR, V., *La ordenación "in sacris" a título de patrimonio eclesiástico*, III, 27, R.C.D.I. (1927), pp. 161-165.

## U

- UCCELLA, F., *Le Conferenze episcopali nel nuovo codice di diritto canonico: prime riflessioni*, 1, D.E. (1986), pp. 95-154.
- UMBERTAZZI, G.M<sup>a</sup>., *I Concordati nella tipologia degli atti internazionali*, 1, Jus (1989), pp. 107-114.
- UNCITI, M., De, *La Iglesia hace sus cuentas*, 1106, V.N. (1977-II), pp. 23-30.
- *Las cuentas entre la Iglesia y el Estado ¿Quién debe a quién?*, 802, V.N. (1971-II), pp. 6-7.
- USEROS CARRETEROS, M., *A propósito de la neutralidad confesional del Estado y el Concordato español*, I, R.E.D.C. (1954), pp. 225-239.

## V

- VACHEROT, J., *Enjeux fiscaux et pratiques administratives pour les congrégations*, 34, L'A.C. (1991), pp. 105-127.
- V.A.G., *¿Quién tiene que sostener a la Iglesia? Fernando Sebastián: "La gracia de Dios es la fuerza inagotable para superar todas las dificultades"*, 1611, V.N. (1987-II), pp. 17-18.
- VALBUENA, D., De, *José Bonaparte y los ex jesuitas españoles*, XXII, R. y F. (1908), pp. 193-209.

- VALLE Y ALONSO, G., Del, *La legislación fiscal del Estado en relación con la Iglesia*, I, R.E.D.C. (1950), pp. 167-191.
- VALLEJO POUSADA, R., *Redención y pervivencia del foro durante la desamortización de Mendizábal (1836-1854)*, LXII, A.D.E.E. (1992), pp. 477-499.
- VANDER ELST, R., *La laïcisation les trois générations et les trois niveaux de protection internationale des droits de l'homme*, 10, R.T.D.H. (1992), pp. 131-146.
- VARELA SUANZES, J., *La doctrina de la Constitución histórica: De Jovellanos a las Cortes de 1845*, 39, R.D.Pol. (1994), pp. 45-79.
- VARGAS ZÚÑIGA, E., *El problema religioso de España*, 108, R. y F. (1935), pp. 289-307.
  - *El problema religioso de España. Estado interno del catolicismo*, 109, R. y F. (1935), pp. 145-164.
  - *El problema religioso de España. Estado interno del catolicismo*, 110, R. y F. (1935), pp. 99-116.
- VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, J.M<sup>a</sup>., *El objeto del Derecho Eclesiástico y las confesiones religiosas*, XXXIV, 67, I.C. (1994), pp. 279-290.
  - *La negociación del convenio-ley español de capellanías de 1867*, XXXV, 70, I.C. (1995), pp. 605-671.
- VEGA RUIZ, J.A., De, *El principio de la igualdad*, XL, II, R.G.D. (1984), pp. 1587-1599.
- VELLOSO, M<sup>a</sup>.L., *Los orígenes constitucionales del Derecho de Asociación en España (1868-1923)*, III, 88-89, R.D.Púb. (1982), pp. 593-643.
- VENTO TORRES, M., *La libertad e igualdad efectivas de los movimientos religiosos en el Estado Español y las Comunidades Autónomas*, 47, 128, R.E.D.C. (1990), pp. 215-224.
- VERA URBANO, F., De Paula, *El punto de partida político de la libertad religiosa europea: Ausburgo y Westfalia*, 39, 114, R.E.D.C. (1983), pp. 509-514.
  - *La libertad religiosa y la reforma protestante: las corrientes espirituales derivadas del protestantismo*, 51, 137, R.E.D.C. (1994), pp. 663-669.
- VERDOY, A., *El debate parlamentario sobre culto y clero. De las Constituyentes de 1837 a la firma del Convenio con la Santa Sede*, 93, R.E.P.N.E. (1996), pp. 487-498.
- VIANA TOMÉ, A., *La igualdad constitucional en el régimen jurídico español sobre confesiones religiosas*, III, A.D.E.E. (1987), pp. 375-403.
- VILADRICH, P.J., *Ateísmo y libertad religiosa en la Constitución española*, I, 90, R.D.Púb. (1983), pp. 65-121, y en XXII, 43, I.C. (1982), pp. 31-85.

- *Ateísmo y libertad religiosa en la Constitución española de 1978*, XXII, 43, I.C. (1982), pp. 31-85.
- *El principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas en la Constitución española de 1978*, 3-4, D.E. (1987), pp. 1153-1170.
  
- VILLADA, P., *Los haberes del Clero rural*, 47, R. y F. (1917), pp. 375-379.
  
- VILLAPADIERNA, I., De, *El Episcopado español y las Cortes de Cádiz*, VIII, 2, H.S. (1955), pp. 275-335.
  
- VILLA ROBLEDO, M<sup>a</sup>. J., *El Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979 en la Doctrina española*, VI, A.D.E.E. (1979), pp. 625-678.
  
- *La legislación española relativa a las confesiones religiosas no católicas*, IV, A.D.E.E. (1988), pp. 823-867.
- *Reflexiones en torno al concepto de “notorio arraigo” en el art. 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa*, I, A.D.E.E. (1985), pp. 143-183.
  
- VILLAR PÉREZ, A., *La financiación del Derecho de Libertad Religiosa*, VIII, A.D.E.E. (1992), pp. 229-252.
  
- *Naturaleza de la licencia canónica de enajenación y su eficacia civil*, 53, 141, R.E.D.C. (1996), pp. 515-551.
  
- VIOLA GONZÁLEZ, R., *Incidencias religiosas durante el período constitucional (1820-1923) en la diócesis de Lérida*, 20, A.A. (1973), pp. 753-820.
  
- VIRGULIN, S., *Vivir del altar. Doctrina práctica de la Biblia*, XV, 60, Colligite (1969), pp. 32-38.
  
- VITALE, A., *Dai benefici ecclesiastici agli istituti per il sostentamento del clero*, XXXIV, 3, 2, G.C. (1989), pp. 565-567.
  
- VITALE, E., *Accordi con le confessioni e principio di uguaglianza*, IV, A.D.E.E. (1988), pp. 75-88.
  
- VIZUETE GALLEGÓ, J., *Sobre las relaciones de la Iglesia con el Municipio*, 120, R.E.V.L. (1961), pp. 801-840.
  
- VIZUETE MENDOZA, J.C., *La disolución del patrimonio del monasterio de Guadalupe dentro del marco de la crisis del Antiguo Régimen (1786-1836)*, XXXIV, 69, H.S. (1982), pp. 133-149.
  
- VIZZARRI, A., *Il Consiglio diocesano per gli affari economici: Costituzione, Struttura, Nomine*, CXIX, M.E. (1994-III), pp. 385-432.
  
- *Il Consiglio diocesano per gli affari economici: Diritto amministrativo della Chiesa sui beni temporali*, CXVIX, M.E. (1994, I-II), pp. 269-290.

## W

- WALF, K., *Los impuestos eclesiásticos como medio de subsistencia*, 137, Concilium (1978-II), pp. 488-498 -tr. de J. Larriba-
- WEBER, J.J., *La fin du Concile du Vatican II et l'après-Concile*, XV, 4, R.D.C. (1985), pp. 289-304.
- *Perspectives ouvertes par la 3e session du Concile du Vatican II*, XV, 1, R.D.C. (1965), pp. 3-16.
- WEIDES, P., *Exenciones de impuestos y tasas a favor de las iglesias en la República Federal de Alemania*, 63, E.E. (1988), pp. 475-506 -tr. por F. De A. Caballero-
- WOOD, J.E., *The proposed United Nations Declaration on religious liberty*, 23, 3, J.Ch.S. (1981), pp. 413-422.

## Y

- YABEN, H., *El Estado y la situación económica del clero*, V, 28, R.E. (1933), pp. 569-575.
- *Los derecho pasivos del Clero*, V, 29, R.E. (1934), pp. 150-155.
- YANES, E., *Un sistema democrático, justo y moderado*, 2449, Ecclesia (1959-II), pp. 8-9.

## Z

- ZABALZA BAS, I., *Confesiones y entes confesionales en el ordenamiento jurídico español*, III, A.D.E.E. (1987), pp. 249-268.
- *La libertad religiosa en la República Federal de Alemania*, IV, A.D.E.E. (1988), pp. 609-638.
- ZAMARRIEGO, T., *El documento "La Iglesia y la comunidad política"*, 187, 903, R. y F. (1973), pp. 355-374.
- ZAPP, H., *El nombramiento de obispos según el derecho vigente y el proyecto del "Liber II de populo Dei" de 1977*, 157, Concilium (1980-III), pp. 88-95.
- ZIZOLA, G., *Finances du Vatican: le scandale n'a pas été vain*, 582, I.C.I. (1983), pp. 5-9.
- ZUDAIRE HUARTE, E., *Campomames, el desamortizador del monasterio premonstratense de Urdax (Navarra)*, XXV, H.S. (1972), pp. 37-74.